

Poder Compartido

Repúblicas urbanas, Monarquía y
conversación en Castilla del Oro,
1508-1573

Jorge Díaz Ceballos

La preparación y publicación de este libro han formado parte de un proyecto financiado por el European Research Council (ERC) bajo el programa de investigación e innovación del European Union's Horizon 2020 ERC CoG 648535, y apoyo adicional del proyecto HAR2014-52260-P financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.



*Para Paula y Félix,
por todas las historias futuras*

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS.....	VIII
ABREVIATURAS.....	XIII
MAPAS E ILUSTRACIONES	XIV
INTRODUCCIÓN	1
CASTILLA DEL ORO, CIUDAD Y MONARQUÍA	5
UNA MONARQUÍA EN TRANSFORMACIÓN	9
HACIA UNA CULTURA POLÍTICA DE LAS PRÁCTICAS	12
PODER, JURISDICCIÓN Y CONQUISTA	16
FUENTES, PERSPECTIVAS Y PUNTO DE VISTA.....	22
CAPÍTULO 1 DE <i>GENTE A PUEBLO</i>. LA FUNDACIÓN DE CIUDADES Y LA LEGITIMIDAD	32
1. LUGARES DE FUNDACIÓN.....	38
2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEGITIMIDAD.....	49
3. “DESTA COLONIA Y PRIMERA REPÚBLICA SALIERON LOS QUE FUNDARON LAS OTRAS DE AQUELLA MONARQUÍA”	60
4. CONSENSUS POPULI. LA FUNDACIÓN COMO LABOR COLECTIVA.	69
CONCLUSIONES.....	77
CAPÍTULO 2 CIUDADES, PROVINCIAS Y CACICAZGOS. JURISDICCIONES EN CONFLICTO Y CREACIÓN DE FRONTERAS	81
1. FRONTERAS INTERIORES Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL.....	86
2. LA CREACIÓN DEL VALLE DE ULANCHO, 1523-1528.....	91
3. EL GOLFO DE URABÁ EN DISPUTA.....	99
4. LITIGIO POR COSTA RICA.....	106
5. EXPORTACIÓN DE UNA CULTURA POLÍTICA: LOS «DEPÓSITOS DE LA REPÚBLICA»	112
CONCLUSIONES.....	117
CAPÍTULO 3 REPÚBLICAS URBANAS, ¿CIUDADANOS LEALES? LA <i>RESISTENCIA</i> A LAS LEYES NUEVAS EN CASTILLA DEL ORO	122
1. PROCURADORES Y PRIVILEGIOS URBANOS.....	126
1.1. <i>Privilegios impositivos</i>	129
1.2. <i>Encomiendas</i>	131
1.3. <i>Privilegios de justicia y autogobierno</i>	133
2. LAS CIUDADES CONTRA LA AUDIENCIA DE PANAMÁ.....	137
3. «DESDE TIEMPO INMEMORIAL...»: LA DISPUTA POR LAS VARAS.....	142
4. CIUDADANOS TAN LEALES: NOMBRE DE DIOS, EL OBISPO Y LA LEALTAD.....	149
5. LA ENCOMIENDA COMO PRIVILEGIO CORPORATIVO.....	156
CONCLUSIONES.....	164
CAPÍTULO 4 <i>CIVITAS</i> INTERCULTURAL. POLICÍA Y CONVERSACIÓN POLÍTICA.....	172
1. POLICÍA TRANSLÁNTICA.....	177
2. TOMAR AMOR CON LA TIERRA.....	184
3. COMERCIO Y CONVERSACIÓN URBANA.....	196
4. CIUDADES, LENGUAS Y EMBAJADORES INFORMALES.....	203
4.1 <i>Conocimiento local e injerencias externas</i>	204
4.2 <i>Isabel Corral: llave de esta tierra</i>	207
CONCLUSIONES.....	218
CAPÍTULO 5 INDIVIDUO, CIUDAD Y MONARQUÍA. ANTIGÜEDAD RECIENTE Y NUEVAS IDENTIDADES LOCALES.....	221
1. CASTILLA DEL ORO, TERRITORIO SIN VILLAS.....	226
2. NUEVA ANTIGÜEDAD Y NUEVOS VALORES: LAS RELACIONES DE MÉRITOS EN CASTILLA DEL ORO.....	237
3. SERVIR EN LA CIUDAD, SERVIR AL REY.....	248
4. DEFENDER LA CIUDAD, DEFENDER LA CORONA.....	251

5. NOBLEZA Y LEALTAD CONSTRUIDAS DESDE ABAJO.	254
CONCLUSIONES.....	268
CONCLUSIONES GENERALES.....	273
FUENTES MANUSCRITAS.....	283
FUENTES IMPRESAS	285
BIBLIOGRAFÍA	289

AGRADECIMIENTOS

Este libro nació como tesis doctoral, que fue defendida en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla el 15 de diciembre de 2017. Ese trabajo, a su vez, nació en los pasillos de la Universidad de Cantabria tan pronto como terminé allí la licenciatura en historia en el año 2007. En esa ocasión el profesor Tomás Mantecón me propuso iniciar una investigación con el simple, si bien ambicioso, objetivo de escribir un libro de historia. Hoy puedo decir, por fin, que lo que en ese momento me pareció una quimera se ha convertido en una realidad.

En los diez años que median entre una fecha y otra, la investigación me ha llevado por otros pasillos, otras bibliotecas y otras universidades: los de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Cambridge, la Università degli Studi Roma tre y la Universidad Autónoma de Madrid. Por supuesto, muchas horas han transcurrido en el Archivo de Indias de Sevilla y la Biblioteca Nacional de Madrid. Este libro, por lo tanto, es fruto de un largo camino y sus orígenes híbridos implican agradecimientos igualmente híbridos.

En primer lugar, debo agradecer a Bethany Aram y Tomás Mantecón, los directores de mi tesis doctoral. Ambos han sido claves, tanto en lo académico como en lo personal, para hacer realidad la investigación y esta publicación. A ellos debo, por tanto, agradecer su generosidad y su valentía, su esfuerzo, su dedicación y su cariño. Contraigo una deuda que espero estar a la altura de saldar en todo el tiempo que nos queda por delante, que será mucho. Huelga decir que, si alguna virtud tienen las páginas que siguen, se debe a su paciente labor para ordenar mi desorden, contextualizar mis ideas y articular mi discurso. Trabajar con ellos ha sido un lujo. Todos los errores, por supuesto, sólo son a mí imputables. A Bethany debo, además, la oportunidad de completar este trabajo, no sólo en la parte estrictamente académica, sino también personal. Ella me abrió las puertas de su proyecto, de su casa y su ciudad con una generosidad abrumadora y de la cual, por supuesto, no me considero merecedor. Espero que estas páginas compensen, siquiera en parte, todo su apoyo en estos años. Los miembros del tribunal que calificó la tesis doctoral que da origen a este libro, Bartolomé Yun Casalilla, Xavier Gil Pujol y Jean-Paul Zúñiga, fueron extremadamente generosos con su trabajo y sus comentarios, que he intentado recoger y sistematizar de la mejor manera posible en la nueva versión.

Diversas instituciones me han apoyado a lo largo del tiempo y han permitido que este trabajo se culminase. La Fundación Fulbright me concedió una beca para estudiar un Master en el *Center for Latin American and Caribbean Studies*, entre 2008 y 2010, en la Universidad de

Nueva York, dirigido en esos años por Thomas Abercrombie. La estancia en esa institución me permitió asistir –con gran aprovechamiento, si bien en ocasiones llegado con retraso- a lecciones impagables que, de una u otra forma, están presentes en estas páginas.

La Universidad de Cantabria me concedió una beca predoctoral durante la cual se fraguó gran parte de la investigación que aquí culmina. Debo agradecer a los compañeros que me han acompañado desde siempre, en primer lugar, a Rafael Díez, Carmen Eguiluz, Geles Alonso y Francisco Javier Fuertes, cuya amistad trasciende lo académico y se desborda en todas las facetas de la vida. Susana Truchuelo y Marina Torres me acogieron desde el comienzo como a uno más y me acompañaron incluso en mis primeras incursiones en congresos y seminarios. Nuestros viajes por Europa han sido la mejor academia para ir aprendiendo el oficio y para disfrutar por el camino. Con otros compañeros del departamento también tuve el privilegio de compartir talleres, seminarios y encuentros que, con el paso del tiempo, he ido valorando en su justa medida. Benita Herreros, Héctor Sánchez, Nadia Oberto y otros tantos ofrecieron un escenario ideal para el desarrollo temprano de las ideas que aquí se expresan.

La historia me situó en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y, en concreto, como miembro del proyecto An ARTery of EMPIRE. Conquest, Commerce, Culture, Crisis, and the Panamanian Junction, financiado por la Unión Europea. Este nuevo entorno me ha permitido formar parte de un grupo de investigadores interdisciplinar que me ha facilitado entrar en contacto con un universo científico que jamás habría imaginado, además de permitirme conocer *in situ* los paisajes sobre los que investigo. Agradezco a todos los miembros del proyecto en Sevilla: Eva Manzano, Alejandro García Montón, Aurelio López, Daniel Muñiz y Amelia Almorza, su ayuda y apoyo pero, sobre todo, haber generado un clima de amistad y camaradería que me han hecho sentir en Sevilla como en casa y han convertido el día a día en nuestro particular laboratorio en un disfrute académico y personal. El proyecto se extiende también tanto por otros países como por otras áreas de conocimiento lo cual ha enriquecido mi investigación de forma muy significativa. Las aportaciones puntuales de otros miembros del equipo, como Juan Martín, Alessandro Achilli o Javier Rivera han ensanchado las fronteras metodológicas para mirar a los problemas desde otra perspectiva.

El área de Historia Moderna de la Universidad Pablo de Olavide es un centro muy dinámico de intercambio de ideas y conocimientos, con una perspectiva global y una voluntad multidisciplinar. Como miembro de esa área he podido disfrutar de enriquecedoras conversaciones tanto con los profesores Bartolomé Yun Casalilla, Manuel Herrero Sánchez

e Igor Pérez Tostado como con los compañeros de doctorado, especialmente Omar Svriz y Rocío Moreno, cuya acogida en Sevilla ha sido también muy calurosa.

A lo largo de los años he podido compartir ideas y comentarios con muchos profesores o estudiantes, en conversaciones formales e informales, que han contribuido en gran medida a consolidar las ideas de esta investigación; entre ellos debo agradecer particularmente a Gaetano Sabatini, Pedro Cardim, David Abulafia, Rafael Valladares, Jorge Gamboa, José María Iñurritegui y Guillermina de Gracia. Manfredi Merluzzi y Gregorio Saldarriaga leyeron una versión preliminar de estas páginas, aportando visiones heterodoxas y miradas distintas sobre problemas viejos que han sido realmente útiles. Igualmente, el personal de todos los archivos y bibliotecas, especialmente en el Archivo General de Indias, ha sido siempre una fuente de generosidad y paciencia. Por supuesto a Marina Zalazar que, aunque ya no esté en la Biblioteca Nacional, a menudo se la echa de menos a los pies del Santo. El equipo de la editorial Marcial Pons ha sido de gran apoyo, en especial debo agradecer a Carlos Pascual y Marina Salvador por su paciencia atendiendo mis inquietudes.

El trabajo diario de investigación es a menudo duro y solitario. En ocasiones, sin embargo, uno puede topar por el camino con compañeros que se convierten en amigos insustituibles y con los que charlar de historia sólo es la excusa para acabar charlando de cualquier otra cosa. A Felipe Vidales le debo tantas cosas que enumerarlas requeriría varias páginas, por lo que sólo me queda agradecerlas y esperar tener tiempo para devolverle alguna. Álex me ha demostrado que se debe vivir con pasión el oficio de historiador, además de ser una fuente constante de referencias e ideas siempre atinadas. Compartir generación y tener la oportunidad de hablar de historia con José Miguel Escribano es un lujo que espero poder seguir aprovechando. Estos últimos, además de su constante apoyo, han tenido la generosidad de revisar partes de este texto, de manera que su aportación ha conseguido extraer algo de interés de unas páginas a menudo tediosas. El agradecimiento no hace más que crecer.

La vida a menudo nos aleja, por eso tengo que mencionar a compañeros y amigos a los que siempre vuelvo y que, aunque no lo imaginen, están también en estas páginas: Manuel Gómez, quien ha desarrollado en los últimos años una inesperada pasión por la historia, que celebro; Álvaro Ruiz, a quien debo, además de su amistad, la realización de los mapas que acompañan el texto; Borja Fernández me ha hospedado en su casa sevillana con paciencia y generosidad infinitas. Otros muchos nombres harían esta lista interminable. Mis padres, Joaquín y Pilar, y mis hermanos, Isabel y Guillermo, han seguido con una atención inmerecida y un apoyo incondicional los pasos que he ido dando para concluir este trabajo.

Miles de conversaciones, lecturas compartidas y experiencias vitales a su lado me han convertido en la persona que soy; yo soy contingente, pero ellos son necesarios. Gracias, por siempre y para siempre.

Paula apareció, como siempre, en el momento adecuado y de la manera adecuada. Félix apareció cuando estaba dando los últimos retoques a estas líneas. Jamás hubiera imaginado que esto iba a suceder. A ellos están dedicadas, porque ellos las han hecho posibles, cada letra de cada palabra de este libro.

ABREVIATURAS

- AGI: Archivo General de Indias (Sevilla)
AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid)
ADA: Archivo Ducal de Alba (Madrid)
AGS: Archivo General de Simancas
RAH: Real Academia de la Historia (Madrid)
BNE: Biblioteca Nacional de España (Madrid)
CODOIN: *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía y la Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles*
AGN: Archivo General de la Nación (Bogotá)
BAV: Biblioteca Apostólica Vaticana (Roma)
BNF: Bibliothèque Nationale de France (París)
BL: British Library (Londres)

MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapa 1. Localización de los principales lugares mencionados en el texto.....	30
Mapa 2. Localización de las cinco principales poblaciones de Castilla del Oro	46
Mapa 3. Límites jurisdiccionales de las ciudades de Panamá, Nombre de Dios y Natá, con las referencias a los cacicazgos implicados.....	90
Mapa 4. Área de conflicto entre las gobernaciones de Castilla del Oro y Nueva España	92
Mapa 5. Conflicto por la Culata del Golfo de Urabá.....	100
Mapa 6. Litigio por Costa Rica	107
 Ilustración 1. Escudo de Armas de Hernando de Luque.....	23
Ilustración 2. Detalle de la portada de la Década de Antonio Herrera que muestra la toma de posesión de la Mar del Sur	58

INTRODUCCIÓN

Las repúblicas urbanas definieron los espacios políticos sobre los que se asentó en Castilla del Oro el poder de la Monarquía Hispánica. Esta se configuró como un sistema agregado de jurisdicciones en el que se negociaba y defendía el poder a través de interacciones asimétricas -aquí llamadas «conversación»- entre diversos agentes con culturas políticas y antecedentes diversos. La coherencia de la Monarquía Hispánica dependía, finalmente, del vasallaje o lealtad debido por parte de sus miembros a los monarcas castellanos, cuya soberanía se alimentaba de una multitud de sujetos y asentamientos jurisdiccionales¹. Castilla del Oro, en el territorio del actual Panamá, fue un enclave geográfico fundamental para el asentamiento del poder castellano en América y el estudio de sus circunstancias precisas permite comprender muchos de los mecanismos y procesos puestos en marcha para la extensión del imperio.

¹ A pesar de que, como ha demostrado I. A. A. Thompson, el término Monarquía Hispánica no se hizo frecuente en el discurso político hasta finales del siglo XVI, en este trabajo se justifica el uso de esta expresión porque el énfasis está puesto en el proceso de creación del agregado político que más adelante se resumió bajo esa denominación, ver Irving A. A. THOMPSON (2016), pp. 91-110.

Pedro Mártir de Anglería resumía la situación en «el que se juzga continente» en el capítulo IX de su quinta *Década del Nuevo Mundo*, escrita de manera casi contemporánea a los acontecimientos narrados y publicada por primera vez de manera póstuma en 1530. «Allí», comentaba,

«se han erigido cinco colonias: en las costas septentrionales del territorio, *Santa María la Antigua*, pueblo que llamamos Darién, porque, como lo he dicho extensamente en las primeras Décadas, está situado a la orilla del río Darién. Por qué escogieron aquel sitio, por qué le pusieron ese nombre, que se llamaba Cemaco de su cacique Cemaco, bastante se explicó entonces. A treinta leguas del Darién, hacia el occidente, está asentada la segunda colonia, llamada *Acla*. A cuarenta leguas de Acla está, en la playa, hacia occidente, el pueblo llamado *Nombre de Dios*, apelativo que a su pueblo dio Colón, primer descubridor de aquellas regiones. En la playa austral están, con sus mismos nombres patrios, *Panamá* y *Natám*, últimas que se han levantado»².

En apenas un párrafo, el diplomático milanés había pasado revista a las cinco fundaciones que pervivían en Castilla del Oro desde la llegada de la armada de Ojeda y Nicuesa en 1509, en la que viajaba Vasco Núñez de Balboa, posterior líder de la expedición que avistó la Mar del Sur en 1513 y cuya labor sería continuada tras la llegada de la armada comandada por Pedrarias Dávila, el 30 de junio 1514. En su descripción, Pedro Mártir incluía algunas de las referencias a los cacicazgos o nombres de provincias indígenas que los castellanos habían adaptado para asentar las nuevas poblaciones. De igual manera, reflejaba la acumulación de conocimiento que, desde la llegada de Colón a la zona, se había producido para dar lugar a la concreción de esas fundaciones. Este libro analiza y explica la génesis y desarrollo político de las cinco poblaciones mencionadas por Mártir –Santa María del Antigua del Darién, Acla, Nombre de Dios, Panamá y Natá- y su participación en la constitución y el mantenimiento del poder de la Monarquía Hispánica durante los primeros setenta años del siglo XVI.

El objetivo de las siguientes páginas persigue dar respuesta a dos preguntas concretas: ¿por qué, recién llegados al Nuevo Mundo, el primer interés de los castellanos era el de fundar ciudades? Y, unida a ésta, ¿por qué la fundación de ciudades fue tan decisiva para la creación del espacio político del Nuevo Mundo y, en general, de la Monarquía Hispánica? El propio Almirante Cristóbal Colón ofreció una respuesta sencilla, si bien enigmática, a estas preguntas en la anotación del 26 de diciembre del *Diario* de su primer viaje. Tras construir el fuerte de Navidad y dejar allí a unos 37 miembros de su expedición, advirtió que les dejaba proveídos de todo lo necesario «para que se esté como se ha de estar»³. El cronista Francisco de Gómara

² Pedro MÁRTIR (1989), dec. V, cap. IX. Sobre los detalles precisos de la publicación de la obra ver la Introducción de dicho volumen, pp. VII-XLVIII.

³ Cristóbal COLÓN (1982). 40 personas según la lista que se encuentra en AHN, Diversos-Colecciones, 41, n. 19.

resumió, 60 años más tarde, el mismo espíritu de manera sucinta, aunque algo más compleja: «quien no poblar no hará buena conquista, y no conquistando la tierra no se convertirá la gente, así que la máxima del conquistador ha de ser poblar»⁴.

La prioridad de Colón en su momento fue la defensa de aquellos que se quedaron en La Española tras el primer viaje, mientras que la expresión de Gómara tiene un matiz que atiende a la expansión territorial y la conversión de los indígenas a la fe católica, obligatoria para los castellanos. Sin embargo, ambos testimonios, que abarcan aproximadamente los hitos cronológicos en los que se enmarca este trabajo, encierran un pensamiento más sofisticado que el que aparece a simple vista. Estar «como se ha de estar» no atendía sólo a la seguridad y aprovechamiento de los 37 miembros de la expedición que debieron quedarse en la Española, sino que también implicaba la pretensión de una permanencia y de la extensión del orden. «Era razón», continuaba el Almirante, que se hiciera el fuerte, «estando tan lejos de Vuestras Altezas, y porque conozcan [los indígenas] el ingenio de la gente de Vuestras Altezas y lo que pudieren hacer, porque con amor y temor le obedezcan»⁵.

Las palabras de Colón encerraban una idea concreta acerca de la vida comunitaria, de raíz aristotélica, como un entorno de convivencia capaz de generar relaciones de amistad y solidaridad cuyo fin era la felicidad de los habitantes. Francisco de Gómara, con más experiencia en los asuntos de Indias, ya había podido observar que la única manera para llevar a cabo la condición del papa Alejandro VI en las Bulas de Donación —que justificaba la reducción de los indígenas a una vida «civilizada» como una vía para su conversión— era establecerse de manera permanente en poblaciones. Lo que las siguientes páginas tratarán de resolver, por tanto, es cómo evolucionó la fórmula «*como se ha de estar*» en su concreción práctica y porqué había de ser poblar «*la máxima del conquistador*». Estudiar, en fin, cuál fue la influencia de la cultura política urbana forjada en el tránsito del Viejo al Nuevo Mundo en la creación y mantenimiento del poder de la Monarquía Hispánica.

Castilla del Oro fue explorada por Cristóbal Colón en su cuarto viaje (1502-1504), durante el cual viajó por las costas de Veragua e incluso realizó actos de toma de posesión e intentó crear un asentamiento en la orilla del río Belén⁶. Tras esta primera exploración, el propio Almirante emitió una opinión muy favorable del territorio, que pronto reclamó gran

⁴ Francisco López de GÓMARA (1959), t. XXII, p. 181.

⁵ Sobre el fuerte de la Navidad ver Felipe FERNÁNDEZ-ARMESTO (1991), pp. 105-106 y Wiliam D. PHILLIPS Y Carla R. PHILLIPS (1992), pp. 198-199.

⁶ Rodrigo Escobar narró que «vió como el dicho Almirante tomó la posesión de aquella tierra en nombre del rey e la reina nuestros señores e con pendones y trompetas é pasó delante de la dicha provincia de Veragua», Provança fecha por parte del almirante de las Yndias contra el fiscal, 12-06-1512, AGI, Patronato, 12, N. 2, R. 8, f. 5r.; sobre la exploración del río Belén, Hernando COLÓN (1984), cap. 95.

atención en Castilla. En consecuencia, durante la mayor parte del siglo XVI se ensayaron y asentaron las prácticas, rituales y procesos políticos implicados en la fundación de poblaciones en el Nuevo Mundo, hasta codificarse legalmente. Durante ese periodo, Castilla del Oro se convirtió en un lugar de importancia estratégica crucial para la Monarquía y, al mismo tiempo, un laboratorio de prácticas políticas que fueron más tarde exportadas y refinadas en otras áreas que han recibido mayor atención historiográfica como Nueva España o Perú.

El primer hito cronológico de este trabajo, 1508, fue la puesta en marcha de las expediciones hacia Veragua y Urabá comandadas por Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa⁷. Durante esos viajes, se produjeron los primeros intentos de asentamiento en la región que pronto pasaría a llamarse Castilla del Oro. Los efímeros establecimientos de San Sebastián de Urabá y Portobelo comenzaron a definir fórmulas políticas y, sobre todo, dejaron a la vista los defectos de los intentos de fundación en los nuevos territorios. En 1573, con la publicación de la *Nuevas ordenanzas de descubrimiento, población y pacificación de la Indias* se dio por concluida oficialmente la fase de exploración y conquista para pasarse formalmente a la de «pacificación»⁸. La normativa de 1573 no salió *ex nihilo*, si no que fue el resultado de la acumulación y sistematización de las diversas experiencias puestas en marcha a lo largo y ancho del continente.

En la primera mitad del siglo XVI aún no se habían puesto en marcha la separación de castellanos e indígenas en *repúblicas* diferentes, que se generalizarían en el continente hacia los años 70⁹. Por este motivo, las ciudades se convirtieron en espacios de conversación intercultural, lo que permite analizar directamente la cultura política que surgió de esa convivencia. El fin teórico de esta relación era la conversión religiosa de los indígenas, objetivo en el que la ciudad estaba llamada a ocupar un lugar central, pero en realidad las influencias mutuas fueron en varias direcciones y a través de medios diversos. Entre las dos fechas que enmarcan esta investigación, pues, se produjeron una serie de complejos procesos con las comunidades urbanas como protagonistas que permiten, desde Castilla del Oro, ofrecer un análisis de la configuración temprana de la Monarquía Hispánica.

El estudio del fenómeno urbano en el Nuevo Mundo no es nuevo ni tampoco lo es para el contexto de Castilla del Oro en los inicios de su conquista. Sin embargo, nunca se había llevado a cabo para este territorio un acercamiento desde el análisis de la cultura política

⁷ Carmen MENA GARCÍA (2012), pp. 617-650; Demetrio RAMOS (1961), pp. 33-87.

⁸ Francisco SOLANO (1996), pp. 194-218.

⁹ Iris GAREIS (1993), pp. 259-277.

asociada al hecho urbano que se trasladó desde Castilla y que, posteriormente, se adaptó a las circunstancias del otro lado del Atlántico. Tampoco se había realizado un trabajo exhaustivo para esta región que vincule la fundación de ciudades y su influencia en el funcionamiento político de la Monarquía Hispánica. La ciudad constituyó el núcleo básico de la legitimidad jurídica y política de los castellanos en Indias que a menudo se autodefinieron como repúblicas y fue a partir de su fundación cuando los procesos de integración, tanto del territorio como de sus habitantes, dentro del agregado político del imperio pudieron tener lugar. Este libro desgana cuáles fueron los protagonistas de esos procesos y con qué prácticas pusieron en marcha sobre el terreno los instrumentos conceptuales de referencia, transformándolos y consolidando una cultura política propia. Cómo se creó, en definitiva, en los primeros 70 años del siglo XVI un espacio político clave en el desarrollo político y constitucional del Nuevo Mundo durante los siglos siguientes.

Castilla del Oro, ciudad y Monarquía

Este libro participa en debates abiertos en tres ámbitos historiográficos. Por un lado, la historia de la gobernación de Castilla del Oro; por otro, la historia urbana o historia de las ciudades en el Nuevo Mundo en conjunto; y en la historia de la Monarquía Hispánica en Indias, con especial atención al papel de las repúblicas urbanas en su construcción y desarrollo.

Castilla del Oro ha sido una región poco estudiada por la historiografía dedicada al Nuevo Mundo¹⁰. Pocas razones, más allá del peso atribuido a las instituciones virreinales a la hora de definir los campos de interés historiográfico, justifican este desinterés que se mantiene en la actualidad. Por ejemplo, en un reciente volumen dedicado genéricamente a las Indias Occidentales, Marcello Carmagnani afirmaba que en su apretada síntesis de los espacios geohistóricos de la Monarquía española en América «no me detuve en el espacio que, históricamente, precedió tanto al novohispano como al peruano, es decir, el de las Antillas. En efecto, es a partir de las Antillas que comienza la penetración española en el espacio americano y es en el que, en cierto modo, se experimentan las primeras formas de control del espacio»¹¹. Es decir: de acuerdo con esta descripción, de las Antillas se pasó a

¹⁰ Algunos ejemplos que ilustran el desinterés historiográfico por este espacio están representados por el hecho de que, en el masivo Congreso de Historia del Descubrimiento, celebrado con motivo del Quinto Centenario en 1992, no hubo ni una sola intervención dedicada a Castilla del Oro. Por otro lado, en todos los números del *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, fundado por Richard Konezke en el año 1961, sólo hay un artículo dedicado a Castilla del Oro: el dedicado al urbanismo —y con planteamiento fundamentalmente arquitectónico— por Eduardo TEJEIRA-DAVIS (1996), pp. 27-61.

¹¹ Marcello CARMAGNANI (2012), pp. 331-355, la cita en p. 349

México y Perú sin considerar el espacio llamado Tierra Firme. Esta tendencia se repite de manera más o menos generalizada en la mayoría de los manuales y obras de referencia dedicadas a la exploración y conquista del Nuevo Mundo.

Existen, sin embargo, excepciones notables a ese desinterés. Alfredo Castillero Calvo ha dedicado su carrera al análisis de la configuración social de Castilla del Oro con especial atención a sus conexiones con la historia global en temas relativos a consumo alimenticio o la plata. Carmen Mena García, desde su tesis doctoral, dedicada de manera general a *La sociedad de Panamá en el siglo XVI*, ha continuado estudiando la historia social y económica del territorio en esa centuria, desde distintas ópticas y haciendo puntuales incursiones también en otras cronologías y temáticas. Con anterioridad, Mario Góngora había realizado estudios sobre los orígenes sociales de los conquistadores y Carl Ortwin Sauer elaboró, desde la óptica de la geografía histórica, un análisis de los primeros años de lo que él bautizó como el «Spanish Main», labor continuada por los trabajos de Omar Suárez Jaén¹². Junto a estas aportaciones, el libro de Christopher Ward *Imperial Panama* exploró los conflictos bélicos internacionales en torno a la protección del comercio en los principales puertos del istmo¹³. Por su parte, el estudio de Ignacio Gallup-Díaz abordó, para la segunda mitad del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII, las relaciones interculturales en el Darién¹⁴.

Castilla del Oro, sin embargo, no ha sido objeto de un análisis ponderado respecto al papel de la región en el entramado político de la Monarquía Hispánica. Los principales aportes han condicionado la relevancia del territorio a su carácter como precursor del moderno estado nación panameño, por ello, al igual que en otros casos de narrativas teleológicas en América Latina, Castilla del Oro ha sido considerado básicamente como el «periodo colonial» del estado panameño¹⁵. El trabajo de Bethany Aram *Leyendas negras y leyendas doradas en la Conquista de América* lleva por escueto subtítulo «Pedrarias y Balboa», sin embargo, ya elabora un relato de las dinámicas políticas que se encierran en los conflictos entre los dos protagonistas, que trascendían lo local y se podrían leer en clave más amplia¹⁶.

¹² Mario GÓNGORA (1962); Carl SAUER (1961); Óscar SUÁREZ JAÉN (1998). Valiosos estudios antropológicos, dedicados a las comunidades prehispánicas o a grupos sociales concretos como los cimarrones o a la construcción de la memoria colectiva de los restos arqueológicos, han aportado un análisis adicional al historiográfico, Mary W. HELMS (1979); Kathleen ROMOLI (1987); Jean Pierre TARDIEU (2009); Paolo VIGNOLO (2008b), pp. 321-331.

¹³ Christopher WARD (1993).

¹⁴ Ignacio GALLUP-DÍAZ (2002).

¹⁵ Alfredo CASTILLERO CALVO (2006), a pesar de su subtítulo, el monumental trabajo de Castillero se dedica en general a todo el territorio actual de Panamá y parte de la premisa de que la empresa fundadora surgió del interés del «estado monárquico» por la centralización, que arrancaría el proceso «modernizador» del territorio, que sólo terminaría con la emancipación, ver «Introducción».

¹⁶ Bethany ARAM (2008).

Al hilo especialmente de los proyectos de investigación actualmente dirigidos por Aram, se ha producido una reconsideración de Castilla del Oro como un espacio estratégico clave en la primera globalización¹⁷.

En segundo lugar, la historia urbana ha jugado un papel muy importante en el análisis de la conquista del Nuevo Mundo por parte de los castellanos. En general, la mayoría de las obras dedicadas a la historia urbana en Indias consideran la ciudad como el instrumento más racional para organizar la sociedad, controlar a la población y extender la presencia y el poder castellano desde un centro poderoso y a través de la imposición directa de órdenes y teorías, sin atender apenas al contexto local¹⁸. La historiografía se ha centrado con mucho énfasis en panorámicas continentales sobre la fundación de ciudades con incidencia o bien en aspectos institucionales, económicos o urbanísticos¹⁹. La historia política no ha contado apenas con las ciudades en su condición de espacios de creación y desarrollo del poder, si bien existen aportaciones notables desde la historia intelectual²⁰. Desde la geografía histórica, la obra de Alain Musset ha abordado los traslados de ciudades, pero no incide sobre los condicionamientos jurídicos que influían en sus movimientos. Su obra, valiosa por los datos que aporta, ofrece sin embargo una interpretación algo rígida del concepto de ciudad y sus condicionantes en los territorios menos explorados historiográficamente. En consecuencia, con notables excepciones, como los trabajos de Richard Kagan y Manuel Lucena Giraldo, el acercamiento general de las aportaciones a la historia política urbana conlleva un enfoque predominantemente institucionalista²¹. Poco se ha discutido sobre el debate político y constitucional de las ciudades en el Nuevo Mundo, sobre todo en el momento de su fundación, y sobre la capacidad de las comunidades políticas para conformar y asentar el poder, así como de las fórmulas para mantenerlo y ejercerlo.

¹⁷ El proyecto del que forma parte esta investigación, financiado por el European Research Council (ERC CoG 648535) en el marco del programa Horizonte 2020 trabaja por poner de relieve, con un enfoque multidisciplinar, aplicable en otros lugares a su vez, precisamente el papel del istmo en la primera globalización más allá de la perspectiva proyectada y transmitida a Castilla por sus élites.

¹⁸ Porfirio SANZ CAMAÑES (2004).

¹⁹ Francisco SOLANO (1975); Salvador BERNABÉU y Consuelo VARELA (2010); José Miguel DELGADO BARRADO, Ludolf PELIZAEUS y María Cristina TORALES PACHECO (2014); Jay KINSBRUNNER (2005); Jorge HARDOY (1983), pp. 127-134; Julio SÁNCHEZ GÓMEZ y Jose Manuel SANTOS PÉREZ (2010); María Isabel NAVARRO SEGURA (2006). Otras obras se han dedicado de manera concreta a ciudades singularizadas ya sea desde el punto de vista transatlántico y comparativo, dedicado a cuestiones sociales en entornos concretos, Ida ALTMAN (2000) o sobre las dinámicas de integración y exclusión de grupos sociales, o sobre la propia ciudad como escenario cultural y de exhibición del poder, Sabine MACCORMACK (2009); Stephanie MERRIM (2010).

²⁰ El clásico José Luis ROMERO (1976) aportó una visión de conjunto sobre «las ciudades y las ideas»; tendencia continuada recientemente, con una perspectiva filosófica, en José Luis VILLACAÑAS y Pedro LOMBA (2016).

²¹ Richard L. KAGAN (2000); Manuel LUCENA GIRALDO (2006)

Este libro arroja luz a algunos de estos objetos de estudio desde otras perspectivas. No busca elaborar una historia de las ciudades del Nuevo Mundo sino, más bien, una historia *desde* las ciudades del Nuevo Mundo en la que las comunidades políticas urbanas están en el centro del análisis y son consideradas el motor de la acción política en Indias. Se trataría, por tanto, de analizar las circunstancias políticas de las ciudades «hacia dentro», como comunidades políticas auto-referenciales, pero también «hacia fuera», como miembros y participantes del sistema de la Monarquía²².

La historia de la Monarquía Hispánica ha experimentado en las últimas décadas una fuerte renovación. La recuperación de la historia política en la historiografía española, ocurrida desde finales de los años 80 y comienzos de los años 90 del siglo XX, inició una reflexión sobre las dinámicas de poder en la Corona de Castilla, que superaban el centralismo y se acercaban a una reivindicación de los poderes territoriales y locales, ofreciendo un panorama más dinámico de la realidad política del Antiguo Régimen²³. Esas tendencias se fueron equiparando al análisis que, en similares términos, se venían realizando sobre los principios y prácticas sobre los que se sustentaban las monarquías europeas²⁴. La historia política del Nuevo Mundo requiere de una puesta a punto en los mismos términos²⁵.

Los análisis históricos tradicionales ofrecían un panorama de la conquista y colonización como una empresa centralizada, en la que el peso de la organización territorial del imperio recaía en unas instituciones residentes en Castilla o a sus equivalentes en Indias, cuya labor «estatal» fue determinante para la ocupación del Nuevo Mundo²⁶. Ante esta imagen, la historiografía reciente opone una revisión tanto de las bases teóricas de la Monarquía Hispánica²⁷ como de las prácticas políticas sobre las que estas se sustentaban, incorporando también a la diversidad de individuos y corporaciones que las llevaban a cabo²⁸. Estos planteamientos también han conducido a la reconsideración de categorías tradicionales

²² La metáfora del doble análisis dentro/fuera de las ciudades también en Jose Javier RUIZ IBÁÑEZ (1995), pp. 11-31.

²³ Jose Ignacio FORTEA PÉREZ (1990); Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO (1992); Irving A. A. THOMPSON (1993); Mauro HERNÁNDEZ BENÍTEZ (1995); Susana TRUCHUELO GARCÍA (1997); Francisco ARANDA (1999); Francisco ARANDA y Jose DAMIAO (2008); Jack B. OWENS (2005).

²⁴ Puesta al día y popularizada por John H. ELLIOTT (1992), pp. 48-71.

²⁵ Domingo Centenero reclamaba recientemente una renovación de la historia del imperio español siguiendo, precisamente, los planteamientos de la nueva historia política de la península, Domingo CENTENERO ARCE (2012), pp. 137-162.

²⁶ Ernest SCHÄFER (1935); José María OTS CAPDEQUÍ (1941); Alfonso GARCÍA-GALLO (1987); Silvio ZAVALA (1988); José María PÉREZ-PRENDES (1989); Horst PIETSCHMANN (1989); Feliciano BARRIOS (2004); Guillermo CÉSPEDES DEL CASTILLO (2009).

²⁷ Xavier GIL PUJOL (2016); una síntesis de las últimas tendencias en Manuel HERRERO (en prensa).

²⁸ Manfredi MERLUZZI (2008); Bartolomé YUN CASALILLA (2009); Regina GRAFE (2012); José Javier RUIZ IBÁÑEZ y Óscar MAZÍN (2012); Pedro CARDIM, José Javier RUIZ IBÁÑEZ, Gaetano SABATINI y Tamar HERZOG (2012); Jose Miguel ESCRIBANO PÁEZ (2016 y 2020); Elisa CASELLI (2016).

y aparentemente inamovibles como la de las identidades locales, nacionales o religiosas²⁹ o los límites fronterizos³⁰, que también están siendo sujetos a una renovada reflexión historiográfica. De esta manera se busca aportar una nueva visión de la tradicional imagen «excepcional» del imperio español, como centralizado, atrasado y premoderno en oposición a otras experiencias coloniales³¹. La realidad política del imperio español o la Monarquía Hispánica se descubre mucho más compleja, tanto en su análisis jurídico como territorial y cultural, para desentrañar la multiplicidad de procesos que participaron en su construcción y que contribuyen a explicar su capacidad de adaptación que llevó a su mantenimiento durante más de 300 años.

Este cuestionamiento de principios y prácticas políticas ha dado paso a una atención renovada al papel jugado por las comunidades urbanas en la forja y mantenimiento de la Monarquía. La participación de las repúblicas urbanas y su autonomía como agentes políticos en la definición política de Castilla³² y Europa³³ está siendo revisado, labor que se puede extender a su vez al estudio de la realidad del Nuevo Mundo³⁴. Las lecturas menos tradicionales ofrecen mayor atención a las posibilidades interpretativas insertas en un análisis que supera planteamientos dicotómicos en la interpretación del poder, que opondría el centro de la Monarquía y las comunidades locales como elementos contrapuestos³⁵. Siguiendo estos planteamientos, este trabajo busca reivindicar el papel de las repúblicas urbanas de Castilla del Oro no como un elemento pasivo al servicio de la Corona sino como miembros constitutivos de la Monarquía Hispánica, con capacidad para compartir con ella el poder político en Indias.

Una Monarquía en transformación

La existencia práctica de la Monarquía Hispánica habría comenzado en la última fase del reinado de los Reyes Católicos, cuando comenzó la agregación de territorios tanto dentro

²⁹ Nicholas CANNY y Anthony PAGDEN (1989); Tamar HERZOG (2003); Jesse SPONHOLZ y Gary WAITE (2014); Harald BRAUN y Jesús PÉREZ-MAGALLÓN (2014); René VERMEIR (2011); Simona CERUTTI (2012); David MARTÍN, José María IÑURRITIGUI y Pedro CARDIM (2015); Antonio FEROS (2017).

³⁰ Tamar HERZOG (2015); Valentina FAVARÓ, Manfredi MERLUZZI y Gaetano SABATINI, G. (2017); Tomás MANTECÓN (2014), pp. 19-32.

³¹ Un ejemplo notable de la perpetuación de esa tendencia en Patricia SEED (1995).

³² Helen NADER (1990); Alejandro ESPINOSA (2009); Xavier GIL PUJOL (2008), pp. 111-148; Francisco ARANDA (2006), pp. 7-47; Susana TRUCHUELO y Marina TORRES (2015); Tomás MANTECÓN y Ofelia REY (2015); Domingo CENTENERO ARCE (2012); Manuel HERRERO (2017a).

³³ Manuel HERRERO (2017b); Joao FRAGOSO y Nuno G. MONTEIRO (2017).

³⁴ Un acercamiento reciente, desde la historia intelectual a los conceptos de constitucionalismo y republicanismo desde el siglo XVI novohispano Francisco QUIJANO VELASCO (2017).

³⁵ Un análisis interpretativo de esta tendencia historiográfica en Bartolomé YUN CASALILLA (2003), pp. 62-76.

como, sobre todo, fuera de la Península Ibérica. Anteriormente, la experiencia de la Reconquista había definido la importancia de las ciudades como elemento clave de la organización del territorio y de la multiplicidad jurisdiccional en un contexto de frontera móvil como el que se produjo al otro lado del Atlántico³⁶. De igual forma, la Reconquista ofreció precedentes de intercambios pacíficos que se anteponían a la violencia, si bien esta, o la posibilidad de ejercerla, estaba siempre presente de forma latente. La experiencia de muchos de los personajes que participarían en las últimas fases de la guerra de Granada permite trazar de antemano ciertos paralelismos con el caso del Nuevo Mundo. Sin embargo, el contexto de Castilla del Oro presenta dos particularidades que ayudan a comprender su singularidad: la inexistencia de una red urbana previa y la presencia de las poblaciones indígenas. En el contexto peninsular, una sociedad relativamente urbanizada facilitó en cierto modo el control del territorio por parte de los católicos, algo que en el Nuevo Mundo estos debieron materializar a su llegada. Unido a esto, la identidad e idiosincrasia de las culturas indígenas debía ser conocida y, hasta cierto punto, comprendida por parte de los castellanos antes de poder entablar relaciones, ya fueran de tipo pacífico o violento³⁷. Estas singularidades ofrecen una clave de lectura a través de la que se pueden comprender las disputas jurisdiccionales que se dirimieron entre castellanos en el proceso de ocupación de Castilla del Oro. La capacidad de construir escenarios de interacción en contextos urbanos, en sus múltiples variantes, con los indígenas marcará muchos de los conflictos entre castellanos en el Nuevo Mundo y definirán los límites jurisdiccionales de cada población³⁸. Dichas interacciones no estaban exentas de un cierto grado de violencia y coerción, pero no siempre estas fueron las fuerzas motrices de las relaciones políticas y sociales. Analizar y destacar la concreción de estas, su lenguaje y la práctica que las acompaña es uno de los objetivos de este libro.

La llegada de Carlos a Castilla en 1516 y su posterior nombramiento como emperador permiten comprender el contexto en el que se produjo la ocupación de Castilla del Oro. Por un lado, la llegada del joven Habsburgo reactivó de manera singular las bases pactistas del

³⁶ Jean GAUTIER-DALCHÉ (1979).

³⁷ Ruiz Ibáñez ha alertado sobre los peligros de «trazar una separación esencial y atemporal entre los ‘europeos’ invasores y los ‘pueblos originarios’», puesto que así «se consolida el protagonismo de los primeros, entendidos como un todo en tanto que predadores y la naturaleza paciente ‘como un todo’ de los segundos como víctimas», José Javier RUIZ IBÁÑEZ (2014a), p. 12; diversos casos de procesos de conocimiento previo e influencia «indígena» en la construcción de los agregados políticos «coloniales» en Antje FLÜCHTER y Susan RICHTER (2012); Salima BELMESSOUS (2011); Bradley BENTON (2017); Justin WILLIS (2005), pp. 29-50; un actualizado estado de la cuestión en Tanja BÜHRER, Flavio EICHMANN, Stig FÖRSTER y Benedikt STUCHTEY (2017), pp. 1-29.

³⁸ Christine DANIELS y Michael V. KENNEDY (2002); Susan KELLOGG y Ethelia RUIZ MEDRANO (2010); Jean-Paul ZÚÑIGA (2013); Caroline CUNILL (2012).

reino de Castilla haciendo evidente lo que, como se verá, sucedía ya en los territorios. A su llegada, Carlos recibió por parte de las Cortes reunidas en Valladolid el mismo discurso que las de Ocaña habían ofrecido a Enrique IV en 1469. Este discurso le recordaba al rey que estaba unido al reino por un «contrato callado» que le convertía en «su merescenario, pues soldada de esto vos dan vuestros súbditos»³⁹. Las comunidades políticas locales de Castilla del Oro, cuyo asentamiento databa de 1508, beben de la misma cultura política que este recordatorio de las Cortes y la referencia al pacto constitutivo original. Por otro lado, el estallido de la revuelta de las Comunidades en 1520 llamó la atención sobre las bases constitucionales del reino y ofrece otro elemento explicativo del ambiente político que se respiraba por las mismas fechas en cada lado del Atlántico. La movilización de las ciudades reaccionó ante la novedad que constituía para Castilla la posibilidad de ser gobernadas por un rey ausente. Paradójicamente, la resolución del conflicto, con la derrota de las ciudades alzadas y en parte gracias a esta ausencia, tuvo sin embargo el efecto de acelerar y, a la larga, solidificar los lazos de unión entre las élites urbanas que copaban los regimientos y la Corona⁴⁰.

En Castilla del Oro la distancia respecto al monarca era una característica esencial y ofreció la posibilidad de actuar en su nombre desde el comienzo de la ocupación de ese espacio. Este hecho permitió asentar desde su propia fundación la noción entre las repúblicas urbanas de Castilla del Oro la necesidad de actuar de manera relativamente independiente, dotándolas así de un carácter particular. La cultura política que está detrás de la guerra de los comuneros se encontraba presente de manera muy elocuente en Castilla del Oro donde las prácticas políticas estuvieron imbuidas de lenguaje y actitud «comunera» antes de las Comunidades. La resolución del conflicto también tuvo un efecto casi inmediato en la relación inmediatamente posterior entre el rey y las ciudades de la región. En septiembre de 1521, el cabildo de la ciudad de Panamá recibía una muy esperada carta real en la que se concedían múltiples privilegios previamente solicitados tras el envío de diversos procuradores. La razón de la demora la explicaba el propio monarca en la introducción de su misiva, que funcionaba a modo de advertencia para el futuro. En ella mencionaba que «el día de San Jorge se dio la batalla de nuestro ejército al de los traidores y tiranos» los cuales

³⁹ Alfonso GARCÍA GALLO (1982), p. 815; sobre la tradición pactista en la Castilla medieval, ver José Manuel NIETO SORIA y Oscar VILLARROEL GONZÁLEZ (2013); sobre la transferencia de poderes del reino al rey José Ignacio FORTEA PÉREZ (2000), pp. 261-308.

⁴⁰ Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO (1992), pp. 50-55; Pablo Sánchez León argumenta sobre la participación de la resistencia al absolutismo en la propia solidificación de este, Pablo SÁNCHEZ LEÓN (1998); Peter Blickle, por las mismas fechas, consideraba la resistencia a los estados modernos, clave en la construcción de los mismos, Peter BLICKLE (1997), p. 1-4.

«se habían alzado contra el servicio de la católica reina mi señora engañando y persuadiendo para ello algunas ciudades y villas»⁴¹. La victoria en Villalar sirvió como excusa al rey para recordar, al tiempo que concedía los privilegios que se le requerían, la lealtad necesaria de las ciudades recién fundadas, verdadero andamiaje de su poder en el Nuevo Mundo.

Hacia una cultura política de las prácticas

Para tratar de desentrañar los cambios y las permanencias en la cultura política urbana en el Nuevo Mundo, el análisis que se despliega en las siguientes páginas realiza una interpretación de las prácticas políticas, más allá de las militares o evangélicas -si bien en relación con estas. Para ello se parte de la consideración de la cultura política como «todo lo que era políticamente pensable en una época y la manera de expresarlo», en definición de Xavier Gil Pujol. Las dos partes de esa definición –lo que era *políticamente pensable* y las diversas *maneras de expresarlo*- se pueden relacionar con los discursos, los rituales y prácticas políticas. La definición del Gil Pujol continúa advirtiendo que el análisis de la cultura política consiste en llevar a cabo el «tránsito de las ideas a la acción» tomando en consideración todas las circunstancias que envuelven a los hechos que se estudian. Según Gil Pujol esas circunstancias incluirían «los objetivos de los protagonistas, tanto individuales como colectivos, y a cómo eran concebidos, formulados y perseguidos; al juego entre acción y percepción; a las identidades de grupo, clase y género, y a cómo éstas influían en las conductas; a las prácticas y símbolos de autoridad y de protesta o las manifestaciones de vida política entre inercia e innovación»⁴².

Tomando como punto de partida esta definición de cultura política, a continuación se realizará una aplicación de los mismos principios, pero enfatizando el peso de las prácticas políticas como definidoras de esa cultura. Se trata, en cierta forma, de invertir los términos y anteponer las acciones a las ideas o, al menos, a la exposición formal de las ideas políticas. Se podría, por tanto, redefinir la cultura política para enfocar, desde el análisis de las prácticas, cómo se reconstruyó un lenguaje que tendría, posteriormente, su representación en tratados políticos de referencia y en cuerpos legislativos que se construían a través de la acumulación de prácticas y procesos largos y complejos. Esta complejidad se explicaría por la participación en los procesos de múltiples agentes de procedencia diversa y con estrategias y esquemas

⁴¹ El despacho que se dio a la ciudad de Panamá que está fundada en la costa de la Mar del Sur en Castilla del Oro, 21-09-1521, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 288v-290r

⁴² Xavier GIL PUJOL (2006), p. 167; otras definiciones de cultura política inciden también en el balance entre discursos y prácticas que caracterizarían la actividad en una comunidad concreta, Keith BAKER (1987), p. xii; Joan Pau RUBIES (1996), pp. 57-81.

interpretativos variados que abrirían la puerta a la puesta en marcha de una cultura política mixta. Para ello se lleva a cabo un análisis de las prácticas políticas siguiendo la teoría de Barbara Stolberg-Rilinger sobre que estas serían «procesos de significado atribuido»; es decir, las prácticas políticas deben ser interpretadas en un nivel no estático sino coyuntural y contextualizado, para de esta manera desentrañar su significado expreso más allá de las categorizaciones o teorías abstractas⁴³. Este método requiere, por lo tanto, desplazar el foco desde las instituciones políticas formales hacia los procesos de comunicación individuales y colectivos.

Las formas de expresión de las prácticas políticas eran muy variadas y no se ceñían a los textos, sino que también implicaban rituales políticos, que podían involucrar a su vez coerción o violencia, cargados de contenido específico. Tanto discursos como prácticas se pueden *leer* e interpretar como parte de un sistema con el que completar un cuadro de la cultura que movía a las decisiones de distintos grupos de castellanos en el Nuevo Mundo⁴⁴. La cultura política del Antiguo Régimen, que era sustancialmente «performativa», construía y alteraba el significado de los rituales en función del contexto⁴⁵. Por lo tanto, al tomar como eje argumentativo las prácticas políticas sobre el terreno el objetivo es describir y analizar tanto los rituales como el contexto local, así como su proyección en una escala de análisis más amplia.

Al anteponer las prácticas a las normas y las ideas, en estas páginas se busca abiertamente sortear de alguna manera el determinismo que podría llevarnos a considerar que tanto la conquista como la colonización del Nuevo Mundo formaban parte de un plan trazado de antemano, una especie de guion prefigurado que se cumplía escrupulosamente. Para estos primeros años tras 1492 no se debería hablar de una estrategia en la política de la Corona, sino más bien del planteamiento de unas líneas generales de acción que se fueron concretando sobre el terreno, en virtud de una serie de circunstancias que escapaban, generalmente, al control de la Corona. Según resumía hace unos años Jean Frédéric Schaub: «no se trata de excluir del todo la expresión de proyectos, ensueños o deseos imperiales. Si

⁴³ La expresión en inglés original sería «processes of ascribing meaning», por Barbara STOLBERG-RILINGER, (2012), pp. 43-58; las teorías sobre la contextualización de los lenguajes políticos, brillantemente definidas por la «escuela de Cambridge», no han sido sin embargo apenas puestas en práctica por los miembros de esa misma escuela; ver Anthony PAGDEN (1990). El análisis sobre las prácticas como enlace entre la historia

⁴⁴ Wolfgang REINHARD (2008).

⁴⁵ Barbara STOLBERG-RILINGER (2008).

no, más bien, de hacernos precavidos frente a la tentación de mezclar sin precaución varios planos distintos»⁴⁶.

En este sentido, siguen vigentes las advertencias que lanzaba John H. Elliott respecto a un planteamiento historiográfico que basase el análisis en función del resultado final, para valorar que «instead of a linear advance» en el momento del inicio de la conquista, «we find ourselves at the beginning of a winding road which twists back on itself, and involves retreats, advances, and more than one false start»⁴⁷. Frente a la tentación teleológica de entender la conquista castellana del Nuevo Mundo como un avance continuo e ininterrumpido hacia el establecimiento de los virreinos que dieron lugar después a los modernos estados-nación, se debe considerar la empresa como un fenómeno mucho más complejo, con múltiples protagonistas, buscando una nueva consideración contextualizada del ejercicio del poder y la composición de las estructuras políticas⁴⁸.

Esta perspectiva invita a problematizar las cuestiones de cronología e, incluso de definición del sujeto de análisis. Céspedes del Castillo, al periodizar la América Hispana en su manual clásico, establecía un corte cronológico en 1550. Según él, siguiendo criterios institucionalistas, el asentamiento de las Audiencias hacia esa fecha marcaría la fase plenamente histórica mientras toda la época anterior se trataría de unos años que «tienen más de final que de principio, de medievales que de modernos», limitando su importancia a constituir un periodo de «transición protocolonial» que constituía el lado «épico de la conquista»; a partir de esa fecha de 1550, insistía, «se forjó América históricamente»⁴⁹. Céspedes se centraba en las instituciones de gobierno y justicia como el sujeto definitorio de una realidad, sin prestar atención a otros fenómenos que pueden explicar en un grado más complejo la realidad política. Se podría admitir, con Manfredi Merluzzi, que efectivamente no fue hasta el último tercio del siglo XVI cuando «el proceso de conformación de las estructuras» de la administración colonial había terminado⁵⁰. Parece excesivo, por otra parte, tachar al periodo inmediatamente anterior como *ahistórico* pues éste también responde a su propia lógica interna. No cabe interpretar, en este sentido, el pasado «como un presente imperfecto», para invocar el concepto de Gil Pujol, sino que se impone valorar en su propio

⁴⁶ Jean Frederic SCHAUB (2004), pp. 1053-1078.

⁴⁷ John H. ELLIOTT (1976), pp. 11-23.

⁴⁸ Sobre los peligros de un planteamiento teleológico, que interpretaría el pasado como un «presente imperfecto», Xavier GIL PUJOL (2012b), pp. 297-320; sobre la historicidad de la interpretación teleológica, surgida a finales del siglo XVIII, Henning TRÜPER, Dipesh CHAKRABARTY, D y Sanjay SUBRAHMANYAM (2015), pp. 3-23.

⁴⁹ Guillermo CÉSPEDES DEL CASTILLO (2009), p. 16.

⁵⁰ Manfredi MERLUZZI (2012), pp. 255-279.

contexto cada uno de los aspectos históricos que se quieren analizar. En ese mismo sentido, el sujeto histórico de referencia tampoco se podría interpretar en clave teleológica. «América» no existía como sujeto de análisis político en el periodo estudiado, por lo que su «forja», siguiendo el planteamiento de Céspedes del Castillo, en todo caso, respondería a otro tipo de análisis.

Esta perspectiva pretendidamente no institucionalista no implica dejar fuera del análisis a las instituciones, sino abordar su construcción y su funcionamiento desde una óptica alternativa y en atención al contexto histórico local⁵¹. Dos instituciones clave en los primeros lustros de la presencia castellana en Castilla del Oro fueron los regimientos y los cabildos⁵². Su principal valor, más allá de su condición de instituciones, de cara a su relación con el conjunto de la Monarquía, residía en su dominio del contexto local y su capacidad para manejar la información con la que mantener el poder sobre el terreno. Los flujos de información y la plasticidad implícita en los principios políticos con los que se regía la Monarquía permitieron que los cabildos acumulasen una gran capacidad para la toma de decisiones⁵³. De esta forma, las instituciones presentes en Castilla del Oro -y, en general, en el entramado de la Monarquía Hispánica- que describe este libro no se ceñían al esquema de institución impersonal de corte weberiano. Más bien eran organismos cuyo valor en la definición del espacio político se basó en las relaciones personales entre sus miembros, más o menos codificadas, y de su capacidad para relacionarse con la Corona a través del envío de procuradores que comenzó tan pronto como estas instituciones se asentaron en los territorios⁵⁴.

Vistos desde el prisma que propone este libro, los sucesivos intentos de imposición de otras instituciones, singularmente la primera Audiencia de Panamá, no tuvieron continuidad por su falta de atención y dificultad de adaptación a las circunstancias locales. La historiografía ha destacado que dicha Audiencia, cuya vida fue de apenas dos años entre 1538 y 1540, no se mantuvo por la excesiva corrupción de sus miembros, principalmente el presidente y oidor Francisco Pérez de Robles⁵⁵. Sin embargo, se puede argumentar que la

⁵¹ Wim BLOCKMANS (2018), pp. 17-31.

⁵² Una interpretación de la importancia de los cabildos en María Luisa DOMÍNGUEZ-GUERRERO y José Miguel LÓPEZ VILLALBA (2018)

⁵³ John Leddy PHELAN (1960), pp. 47-65; sobre los flujos de información como verdadera clave del sistema imperial castellano, Arndt BRENDECKE (2016).

⁵⁴ Hace años que Antonio Manuel Hespanha reclamaba un nuevo acercamiento a la historia política y de las instituciones, ver Antonio M. HESPANHA (1996), pp. 9-45; la necesidad de un cambio de orientación en los estudios sobre historia de América Latina, superando el foco puesto en las instituciones, viene siendo reclamada desde mediados de los años 90, Antonio ANNINO (1995), pp. 26-47; Darío BARRIERA (2003), pp. 133-159; Alejandro CAÑEQUE (2013), pp. 280-291; Alexander POLSEN (2017), pp. 17-38.

⁵⁵ Alfredo CASTILLERO CALVO (2006), p. 732.

Audiencia fracasó porque los cabildos tenían más facilidad para gestionar el poder por su mayor conocimiento del terreno y porque, además, sus miembros formaban parte de la élite social desde el inicio de la ocupación del territorio. Las instituciones locales y sus medios tenían la suficiente capacidad de control de la situación como para rebelarse frente al intento de imposición de una nueva entidad de gobierno. De igual manera, los cabildos se auparon como un contrapeso muy potente al poder del gobernador, cuyo poder antecedió al de los virreyes en la región. En este sentido, de nuevo el manejo de la información y la capacidad de los cabildos para interactuar con la Corte previno el aumento del poder de organismos más «centralizados» o controlados directamente por la Corona, ya fueran audiencias, corregimientos o gobernaciones. El equilibrio entre diversas instituciones y la propia naturaleza poco definida de estas, basada en el acceso a la información y su capacidad para transmitirla, unido a su conocimiento del contexto local, se encuentran entre las explicaciones del mantenimiento del poder castellano en Castilla del Oro.

Una corriente analítica reciente ha comenzado a problematizar las categorías de análisis tradicional para la historia de las Indias, ya la propia noción de «americanismo» o la de «historia colonial», puesto que no responderían estrictamente a ninguna categoría histórica en la Edad Moderna. La alternativa planteada debe ser la de una integración de los diferentes espacios en unas dinámicas comunes, que no proyecten sobre el pasado categorías del presente⁵⁶. También en este sentido, habría que precaverse para tratar de comprender las diferentes fórmulas con las que se fue implantando el poder castellano en Indias, sin olvidar los posibles «retreats» y «false starts» y sin valorar todos los hechos antecedentes en función de su resultado final, obviando con ello las nociones de «éxito» o «fracaso».

Poder, jurisdicción y conquista

Este planteamiento general requiere clarificar de partida diversos conceptos y puntos de vista clave, que permitan poner en su justo valor la importancia de las comunidades políticas urbanas en la construcción y mantenimiento de la Monarquía. En primer lugar, se requiere una reflexión sobre el propio concepto de poder que se manejará durante las siguientes páginas, sobre la forma de constituirse y expresarse ese poder y sobre las diversas escalas de aplicación y comprensión de dicho poder. Todo ello permitirá perfilar el concepto

⁵⁶ Alejandra OSORIO (2018), pp. 100-130; Jose Javier RUIZ IBÁÑEZ y Óscar MAZÍN (2012), pp. 7-40; un empeño por superar las barreras interpretativas entre la historia de Europa y la de las «colonias» en Jean Frederic SCHAUB (2012), pp. 261-275; también en Bethany ARAM (2008), p. 252.

de espacio político, clave en las páginas que siguen, y redimensionar alguna de las categorías con las que se ha pensado tradicionalmente la historia del Nuevo Mundo.

El filósofo surcoreano Byung Chul Han proponía recientemente la creación de una «definición dinámica de poder» en la que se ofrecieran las múltiples posibilidades del concepto más allá de la visión reduccionista que lo limitaba al ejercicio de la fuerza o al monopolio de la violencia. En su análisis componía una idea del poder, construyendo sobre las definiciones de Hegel o Hannah Arendt, centrado en la construcción de «una voluntad común que generase una continuidad de la acción (...) en generar un nosotros, una comunidad». Para concluir que «lo político se basa en un actuar conjunto generador de poder»⁵⁷. Pietro Costa, por su parte, definió hace décadas la jurisdicción como la capacidad para ejercer el poder en un contexto amplio, despojando al concepto de su carácter meramente jurisprudencial⁵⁸. La definición del poder, por tanto, cuya aplicación más recurrente en el Antiguo Régimen era jurisdicción, se podría articular como la capacidad para ejercer la autoridad, pero en su naturaleza estaba implícito que esa jurisdicción debía ser construida y definida a través de prácticas e interacciones.

En el contexto de la ocupación de Castilla del Oro, la territorialización del poder se realizaba con anterioridad, simultáneamente o después de la reclamación de la jurisdicción. En esas circunstancias concretas, la manera de reclamar un territorio por parte de una comunidad política no consistía en la «invasión» de un espacio previamente definido, sino en la creación de la jurisdicción que se aspiraba a ostentar. La reclamación de un espacio podía ser posterior, por tanto, a la construcción de su jurisdicción, lo cual dota al proceso de negociación del poder de una gran flexibilidad e invita a su análisis a través de la participación de múltiples agentes, así como a una reconsideración del propio concepto de territorio⁵⁹. El espacio político para la «conquista» no se encontraba previamente definido y esperando ser conquistado; en cambio, este debía ser dotado de contenido jurídico y, así, activado. La reclamación de una determinada jurisdicción podrá ser contestada, paralizada o destruida a través de la participación de otras comunidades o agentes. De esta manera, no era sólo

⁵⁷ Byung Chul HAN (2016), pp. 125-127. Se opondría en esto a las teorías tradicionales sobre la imposición violenta y territorial como conformador del poder de los estados, Carl SCHMITT (2002). Una crítica a la obra de Schmitt a través de la lectura de Arendt en Anna JURKEVICS (2015), pp. 1-22; sobre las interpretaciones históricas entorno a la equivalencia entre control de la violencia y poder político, Stuart CARROLL (2007), p. 7.

⁵⁸ Pietro COSTA (1969). Un análisis renovado sobre la evolución a gran escala de la aplicación de la jurisdicción en Pedro CARDIM (2008), pp. 349-388; sobre la importancia de la jurisdicción para comprender la historia del poder en la edad moderna, Jean-Frederic SCHAUB (2018).

⁵⁹ Diversas visiones sobre el renovado interés por el «spatial turn», Benjamin DE CARVALHO (2016), pp. 57-88; Daniel NEEP (2016); Angelo TORRE (2011); Charles MAIER (2016); David WENGROW (2015). Un estado de la cuestión en Angelo TORRE (2018).

necesario reclamar el poder o intentar imponerlo a través de la fuerza, sino que este debía estar en cierto grado consensuado y, además, debía ser ejercido para ser reconocido⁶⁰.

El espacio político que surge de estas situaciones sería, por lo tanto, un terreno de relaciones de poder «plurales y polivalentes» sujetas a una renovación constante⁶¹. Esta definición amplia de espacio político permite la interpretación de la construcción del poder, la jurisdicción y la soberanía como el fruto de una diversidad de interacciones entre una multiplicidad de agentes⁶². Por lo tanto, el poder político se explica aquí como un fenómeno basado en distintos tipos de contacto y conversación, cuya capacidad de alterar la realidad se cimentaría sobre la negociación, el acuerdo o la interacción más que exclusivamente en la coerción unilateral de unos grupos sociales sobre otros.

Este acercamiento requiere una definición de ciudad que incide en su carácter como comunidad política –*civitas*– frente a su consideración como ciudad física –*urbs*– y que invita a una adaptación conceptual tanto de la propia idea de ciudad en el Antiguo Régimen, como la de fundación. El espacio político creado por el asentamiento de comunidades políticas locales resulta muy dúctil, puesto que se basa en multitud de interacciones cuya importancia no reside tanto en el *dónde* sino en el *cómo* y en *quiénes*. Trazar la historicidad de todos estos procesos resulta fundamental para comprender el conjunto.

La construcción del poder político es un proceso que se inicia, por lo tanto, «desde abajo» y que iría alcanzando otros niveles de proyección política. Así, se puede interpretar que las comunidades urbanas, auto constituidas en virtud de pactos políticos entre diversos agentes -individuales y colectivos-, sostenían la Monarquía y, en muchas ocasiones, esta se limitaba a sancionar el poder que emanaba de cada una de sus piezas. Ese poder, eventualmente, se centralizaría, pero la iniciativa de esa centralización no dependía siempre y en exclusiva de la voluntad o la iniciativa del poder central, sino que debía contar con el acuerdo de las «periferias»⁶³. La construcción de la Monarquía Hispánica, según este planteamiento, adquiere para Castilla del Oro un gran dinamismo en el que conviven sistemas de poder

⁶⁰ Antonio M. HESPANHA (1989), p. 37; David BEETHAM (1990).

⁶¹ Antonio M. HESPANHA (1993), pp. 85-121; una explicación a esta realidad jurídica a través de la aplicación del «legal pluralism» a la construcción de los imperios en Lauren BENTON y Richard ROSS (2013), pp. 1-17 y una aplicación de esos principios para un estudio de caso en Daragh GRANT (2015) y Karen GRAUBART (2018a)

⁶² Lauren BENTON (2000), pp. 27-56; Lauren BENTON (2010); Angelo TORRE (2009), pp. 319-326; Pedro CARDIM (2017), pp. 11-42; Pauline BERNARD (2018) pp. 389-414 ;sobre la definición de agente sin distinción precisa entre oficiales y no oficiales, colectivos o individuales, ver René VERMEIR (2011), Introducción.

⁶³ André HOLESTEIN (2009), pp. 1-31; Angela DE BENEDICTIS (2001), pp. 388-391; un acercamiento temprano hacía una nueva historia política centrada en «popular politics» en Wayne te BRAKE (1998).

concurrentes con gran capacidad para la práctica política a través de la toma de decisiones y el arbitrio de diversos conflictos⁶⁴.

En muchas ocasiones se ha interpretado la Monarquía Hispánica como un espacio de «agregación» de diversos territorios con distinta adscripción jurídica a través de una diversidad de estrategias desde la conquista a la incorporación de reinos⁶⁵. Las comunidades cívicas de Castilla del Oro, en tanto que centros de poder, debían ser primero creadas y, más tarde, agregadas para constituir la propia gobernación de Castilla del Oro que, a su vez, sería agregada al conjunto de la Monarquía. Castilla del Oro –y cabría extender este principio a otras regiones del Nuevo Mundo– no fue incorporado como pudieron serlo Milán, Nápoles o las Provincias Unidas, que ya tenían un estatus jurídico definido antes de su agregación al conjunto. De acuerdo con los principios jurídicos, Castilla del Oro no existía como tal entidad política, sino que fue creada a través de la fundación encadenada de poblaciones que establecieron su jurisdicción en el territorio, solicitaron y recibieron privilegios corporativos y, simultáneamente, pasaron a ser miembros del cuerpo de la Monarquía. El equilibrio entre la concesión y el respeto de los privilegios negociados será una de las claves del mantenimiento del sistema y de la creación de la cultura política de Castilla del Oro⁶⁶.

Este planteamiento permite, a su vez, elaborar a lo largo de estas páginas una relectura en clave crítica del concepto de conquista. El Nuevo Mundo no era un escenario vacío sobre el que, simplemente, se volcaron personas, categorías y culturas, sino que existió un proceso dinámico de comprensión, adaptación o «invención» que hizo posible la «conquista». Hace varias décadas Edmundo O’Gorman definió la conquista como un proceso de «Invención de América», concepto recogido a su vez por John H. Elliott para valorar los distintos grados del impacto del Nuevo Mundo sobre el Viejo⁶⁷; la creación de los espacios políticos, para analizar la conquista como un proceso de invención de la Monarquía Hispánica, requiere de un proceso de ajuste de las categorías jurídicas, culturales y sociales para valorar, en su contexto, los procesos que condujeron al establecimiento del poder en los territorios del Nuevo Mundo⁶⁸.

⁶⁴ Angelo TORRE (2007), pp. 101-135; Carlos GARRIGA (2006), pp. 67-160;

⁶⁵ Xavier GIL PUJOL (2012a), pp. 69-108; Bartolomé YUN CASALILLA (2009), pp. 11-35.

⁶⁶ Los principios que regían el sistema desde la casa hasta la política global, a través de la concesión y respeto de mercedes y privilegios, ha sido definido por Hespánha como «economía de la gracia», en Antonio M-HESPANHA (1993), pp. 151-176.

⁶⁷ Edmundo O’GORMAN (1958); John H. ELLIOTT (1969).

⁶⁸ Sobre las fórmulas puesta en marcha para comprender y asimilar el imperio portugués Giuseppe MARCOCCI (2011); el debate sobre el concepto de conquista se ha reactivado recientemente analizando los diferentes grados de «verdad histórica» al que el historiador puede aspirar, Matthew RESTALL (2018); Romain BERTRAND (2015).

El proceso que condujo a la creación de los espacios políticos de Castilla del oro fue largo y en él convivieron multitud de influencias diversas que incluso permitirían calificarlo como una experiencia híbrida⁶⁹. La creación del entramado jurisdiccional que narran las páginas de este libro ofrece la posibilidad de analizar el proceso de reconocimiento y ocupación territorial como un fenómeno plural, en el cual las poblaciones indígenas tuvieron una participación directa o indirecta, pasiva o activa. Tradicionalmente, sin embargo, se ha interpretado todo el proceso como una imposición unilateral y violenta de los «españoles» frente a los «indígenas» –cuya principal motivación sería la búsqueda de riquezas y que ha sido calificada como holocausto o «el mayor genocidio de la historia de la humanidad»⁷⁰. En contraste con esta narrativa, otros autores han opuesto argumentos que defienden la acción castellana y denuncian la construcción de la leyenda negra que habría marcado su interpretación⁷¹. Este libro, en cambio, ha dejado de lado las grandes narrativas o estrategias en las que se ha apoyado tanto la supuesta construcción de una leyenda negra como su crítica, para centrarse en una reconstrucción de los espacios políticos de la Monarquía Hispánica desde abajo a través de una rigurosa selección e interpretación de fuentes⁷². Si se considera que no existía un plan predeterminado de la Corona para la conquista el Nuevo Mundo, se impone estudiar la acción particular y colectiva en un determinado contexto. De esta forma, más allá de causas generales a favor o en contra de «los españoles» en conjunto, se pueden valorar las actuaciones individuales en contexto. Estas, por supuesto, a menudo eran violentas, pero no era esta una violencia sistemática y programada con voluntad de aniquilación. El énfasis en la violencia de la conquista por sí sola no permite dilucidar de manera precisa cómo se articuló y mantuvo el poder. Para esta labor, la mirada desde el plano local permite apreciar elementos diversos que escapan de esquemas interpretativos dicotómicos y que, en cambio, ofrecen espacios de conflicto y colaboración centrados en los ámbitos urbanos.

⁶⁹ Sobre la conquista como un proceso, Matthew RESTALL (2004), pp. 64-76; sigo en este punto el concepto de hibridización de Peter Burke, según el cual «toda innovación es una suerte de adaptación», Peter BURKE (2010), p. 67; una adaptación del concepto para la historia atlántica despojada de la predominancia de los estados europeos en Jorge CAÑIZARES-ESGUERRA y Benjamin BREEN (2013), pp. 597-609 y una adaptación de este paradigma al contexto de los territorios del Atlántico hispánicos en Ernesto BASSI (2014), pp. 704-716; sobre los múltiples procesos de hibridación cultural que se produjeron en el contexto Atlántico que redefinieron identidades y pertenencias, ver Joshua L. REID (2019), pp. 20-27.

⁷⁰ Fernando MIREs (1989); David STANNARD (1992); Antonio ESPINO (2013); Zvetan TODOROV (1982), p. 14; Patricia SEED (2001).

⁷¹ Ver como ejemplos Alberto G. IBÁÑEZ (2016); Elvira ROCA BAREA (2016). Un estado de la cuestión en Richard KAGAN (2018) y una crítica reciente a los planteamientos revisionistas sobre la leyenda negra en José Luis VILLACANAS (2019).

⁷² Un planteamiento similar, que describe la conquista como una empresa «semi-privatized, incomplete, multidirectional, and multiethnic alliances» huyendo así de la interpretación de la Monarquía Hispánica como todopoderosa en Martin NESVIG (2018), p. 14.

El desarrollo de la perspectiva de la construcción del poder desde abajo a través de la agregación concatenada de jurisdicciones abre un abanico amplio de posibilidades interpretativas. Al poner el foco en el análisis *micro* de los procesos políticos no se busca destacar lo anecdótico o recuperar una historia local. En cambio, se trata de poner en valor la importancia de los espacios locales para elaborar una interpretación comprensiva e interconectada de los procesos globales⁷³. La Monarquía Hispánica como espacio de poder se nutría de múltiples espacios locales no necesariamente integrados *a priori* pero constituidos en virtud de un equilibrio de intereses y lealtades. Este juego de escalas pretende, a su vez, eliminar la distinción, inválida para el Antiguo Régimen, entre *alta* y *baja* política⁷⁴. Cada pieza jurisdiccional de la Monarquía Hispánica, por endeble que pudiera parecer, tenía su relevancia en el entramado general y era un sujeto político por sí mismo, con su propia lógica interna y sus intereses particulares. De esa manera, a través de interacciones horizontales y verticales, se construyó y mantuvo el sistema político de la Monarquía Hispánica, una estructura compleja cuyos componentes evidenciaban formas de interdependencia muy variadas.

En este sentido, en este libro la Monarquía Hispánica no se define como una estructura autorreferencial de instituciones impersonales reguladas –a la manera en la que se ha analizado la génesis del estado moderno⁷⁵– desde un centro poderoso, si no como un sistema complejo de poder, con sus propios mecanismos de funcionamiento interno, sus estrategias de negociación y sus lenguajes y prácticas políticas integradoras. En este sistema, el poder se creaba y se ejecutaba tanto en los tradicionalmente considerados «centros» como en las así llamadas «periferias», de manera que aquí se busca destacar no tanto la jerarquización de los territorios que esa nomenclatura encierra como las interconexiones y

⁷³ Bartolomé YUN CASALILLA (2007), pp. 659-678; Giuseppe MARCOCCI (2016), pp. 511-525; Sebastian CONRAD (2016), pp. 6-11; Rafael VALLADARES (2012a), pp. 57-115. Recientemente se ha planteado una interpretación que pretende solventar el hueco entre el análisis local y el global a través de lo que se ha llamado historia «trans-local», que conectaría realidades políticas y sociales similares en diversas partes del mundo para construir un relato coherente sobre los procesos históricos, Christian DE VITO (2015), pp. 815-833. Una crítica a la abstracción del concepto de mundialización, invitando a una visión más concreta, en Jean-Paul ZÚÑIGA (2007), pp. 54-68; un reciente aporte sobre la necesidad de los estudios locales para la comprensión de la historia global dedicado al ámbito americano Dana VELASCO MURILLO (2017).

⁷⁴ Sobre la multiplicidad de escalas históricas entre las que un historiador puede «elegir» en la actualidad, ver Sebouh ASLANIAN, Joyce CHAPLIN, Ann MCGRATH y Kristin MANN (2013), pp. 1431-1472; una reivindicación del análisis de las prácticas para romper con la dicotomía artificial entre micro y macro en Angelika EPPLE (2018).

⁷⁵ Jean Frédéric SCHAUB (2005), pp. 51-64; ver como marco de referencia de este debate el clásico, Francisco TOMÁS y VALIENTE (1974), pp. 3-19; Bartolomé CLAVERO (1981), pp. 43-57; recientemente Francesco Benigno finiquitaba la cuestión historiográfica con un lacónico «para la sensibilidad historiográfica actual, ya la sola expresión «Estado moderno» en el Antiguo Régimen suena mal, desentona», ver Francesco BENIGNO (2013), p. 199 y, en general, todo el capítulo 6.

las formas de comunicación, conflicto, negociación o acuerdo entre ambos espacios⁷⁶. La Monarquía Hispánica –como el estado moderno- no se construyó de manera lineal e, incluso, se podría aventurar que dicha construcción nunca concluyó, sino que el sistema fue reajustando e incorporando a su funcionamiento influencias, prácticas y discursos de distinta naturaleza. Esa plasticidad y flexibilidad para la adaptación de sus mecanismos de funcionamiento podría ser la clave explicativa de que se mantuviese, con distintos matices, como un poder global durante 300 años.

Hace algunos años, Manuel Lucena Giraldo comparaba la Monarquía al Sistema Solar, con la Corona como centro y las ciudades girando en órbita a su alrededor⁷⁷. Ampliando esa metáfora, las siguientes páginas aspiran a responder a cómo se produjo uno de los sucesivos «big bangs» que dieron lugar a la creación de esa galaxia, a través de una multitud de procesos encadenados que definieron tanto la morfología como la razón de ser de ese sistema.

Fuentes, perspectivas y punto de vista

Para llevar a cabo este análisis, se ha manejado gran cantidad de documentación de diversa procedencia y naturaleza. Con el objetivo de repensar las categorías analíticas a través de la práctica política, las distintas fuentes se han leído con una pretendida voluntad de flexibilidad y transversalidad, para intentar comprender y valorar cada proceso dentro de sus contextos precisos. El objetivo principal es vincular el contexto local, a través de las fuentes de archivo, con la formulación de un sistema global a través de cómo las experiencias políticas fueron recogidas y sistematizadas en códigos legislativos y tratados políticos. La elección de esta perspectiva busca ofrecer, por un lado, un análisis de los contextos políticos atendiendo a la práctica, recogida en documentación de diversa procedencia y categoría y, a su vez, elaborar una definición de la cultura política surgida de ese contexto y que podría extrapolarse a otros contextos y cronologías. La documentación ha sido analizada para responder a las preguntas clave de la investigación y trazar una narrativa que permita poner en valor el papel de las repúblicas urbanas y su cultura política en la articulación de la

⁷⁶ Un diagnóstico anticipado de la crisis de la interpretación evolutiva de las dinámicas centro-periferia en Giovanni LEVI (2003), pp. 251-266 (traducción del original publicado en el número 41 de *Quaderni Storici* en 1979); sobre sus límites interpretativos de la relación centro-periferia, Anne RADEFF (2007), pp. 21-32; sobre la necesidad de «descentralizar» el análisis histórico para dar incluir una pluralidad de voces en el relato Natalie ZEMON DAVIS (2013).

⁷⁷ Manuel LUCENA GIRALDO (2014), pp. 171-186.

Monarquía Hispánica. Todas las fuentes utilizadas en esta investigación podrían haber sido interrogadas desde otros puntos de vista para construir análisis diferentes al aquí expuesto; sin embargo, en la propia subjetividad de las fuentes manejadas se encuentra su riqueza, puesto que permite ofrecer una narración polifónica y que abre tantas preguntas como las que cierra⁷⁸.

La imagen que ilustra estas páginas es un buen ejemplo de este punto de vista. Se trata de la figura que decoró el escudo de armas de Hernando de Luque, participante como capitán elegido por el pueblo en la defensa de Panamá frente a la rebelión de Rodrigo Méndez en 1566, como pormenorizadamente se analiza en el capítulo 5. Para el diseño de su escudo quiso reivindicar su participación en el alzamiento del estandarte real, y lo hizo a través de un brazo que nace de un árbol. El árbol simbolizaba el pueblo que lo sostenía, firmemente anclado en el terreno y del que también surgía el brazo que garantizaba la lealtad a la Monarquía, no desde arriba, sino desde el mismo suelo. En el fondo de la imagen, una iglesia recuerda el lugar en el que, supuestamente, todo el pueblo se reunió junto al obispo para acordar la estrategia de defensa de su ciudad frente a un ataque interno que la ponía en peligro y, con ello, salvaguardar al conjunto de la Monarquía.

(ILUSTRACIÓN 1)

Ilustración 1. Escudo de Armas de Hernando de Luque⁷⁹

Apenas se conservan fuentes manuscritas en el actual Panamá y, particularmente, no existen archivos locales de las poblaciones objeto de estudio⁸⁰. La falta de documentación local ha obligado a hacer una búsqueda exhaustiva de fuentes en archivos españoles y, sobre todo, una lectura crítica y profunda para desentrañar las motivaciones, argumentaciones y estrategias de los actores sobre el terreno. La inmensa mayoría de las fuentes utilizadas en esta investigación provienen de los fondos del Archivo General de Indias en Sevilla. Entre las secciones de este archivo, han resultado particularmente fructíferas las de Audiencia de Panamá, Patronato Real y Justicia. En la sección de Panamá se custodia documentación oficial relativa a nombramientos de oficiales, conjuntos de normas y leyes, concesión de privilegios o legislación emanada del Consejo de Indias. Esta sección se compone sobre todo de documentación emitida desde Castilla para su aplicación en el Nuevo Mundo.

⁷⁸ Carlos GARRIGA (2012), pp. 89-100; Xavier GIL PUJOL (2009a), pp. 64-86.

⁷⁹ ADA, caja 238, N. 1 (67)

⁸⁰ Christopher WARD y Richard JUNKINS (2012), pp. 107-123.

En el otro extremo de la cadena y para ofrecer el necesario balance en el equilibrio de poderes, se encuentra la documentación producida en las ciudades de Castilla del Oro o que sufría varios caminos de ida y vuelta entre Castilla y las Indias. En la sección Patronato Real se conservan multitud de cartas emitidas desde Castilla del Oro, tanto de oficiales individuales como de cabildos y concejos; a su vez, en ese mismo fondo, se localiza un tipo de fuentes muy ricas como son las Probanzas de méritos y servicios. Esta fuente, habitualmente interpretada como historias de vida para enfatizar el atractivo individual por el ascenso social en el Nuevo Mundo, han sido leídas en esta ocasión como fórmulas que servían para generar identidades locales colectivas, a través de su lectura conjunta. Se trataría, en este caso, de construir la comunidad a través de los individuos utilizando para ello una fuente cuya intencionalidad primera no era tal⁸¹.

La sección Justicia del Archivo General de Indias representa un repertorio casi inagotable de pleitos, dentro de los cuales se puede encontrar a su vez una multiplicidad de documentos de distinta naturaleza e intencionalidad. Una lectura profunda de los pleitos – principalmente de aquellos que implicaban como protagonistas a las corporaciones urbanas- permite desentrañar no sólo las motivaciones concretas de los pleiteantes, sino también las estrategias políticas puestas en marcha, sobre todo a partir del análisis de los lenguajes utilizados, para construir el discurso político a través de la práctica. En la sección Justicia también se han analizado los juicios de residencia de distintos gobernadores de Castilla del Oro, así como una visita realizada al obispo de la diócesis a instancias de las ciudades de Panamá y Nombre de Dios. En este tipo de documentación, como también en las probanzas de méritos, se ha prestado atención tanto a los cargos o declaraciones de los implicados directamente –ya fuera como acusados o acusadores- como a los testimonios de los testigos, con el fin de profundizar tanto en las causas en sí mismas como las reacciones que estos pudieran suscitar en la sociedad en la que tenían lugar.

La narración que se construye a través de la combinación de todas estas fuentes permite moverse entre los motivos particulares de los actores implicados y su relación tanto con la comunidad local como con el conjunto de la Monarquía. La documentación, si bien puede parecer cronológicamente discontinua, al no permitir trazar voluminosos análisis cuantitativos, abre múltiples posibilidades de análisis cualitativo, tanto de los hechos como

⁸¹ Una reflexión sobre el uso de la documentación son similar planteamiento en Jan DUMOLYN (2011), pp. 69-96.

de los motivos de los actores y, especialmente, de los lenguajes y conceptos puestos en juego y redefinidos a través de las comunicaciones políticas.

Además de la tipología de fuentes ya expuesta, se han consultado multitud de cartas e informes de oficiales, custodiados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en la Colección Muñoz de la Real Academia de la Historia y en diversos repositorios documentales publicados entre finales del siglo XIX y comienzos del XX⁸². Esta documentación ha permitido desentrañar el funcionamiento cotidiano de la Monarquía en distintas zonas del Nuevo Mundo durante las primeras décadas del siglo XVI. Algunos de los casos de ascenso social y ennoblecimiento, tanto individual como corporativos, analizados en diversos capítulos de este libro, han sido completados manejando documentación del Archivo Ducal de Alba, donde se almacenan decenas de casos en los que poder indagar sobre las conexiones transatlánticas de individuos y familias a lo largo del XVI. Esta documentación, a su vez, se ha puesto en relación con los tratados de referencia sobre nobleza como *Libro o memorial práctico* de Pedro Mexía de Ovando (1639) o *Varones ilustres del Nuevo Mundo* de Fernando Pizarro y Orellana (1639), algunos de ellos consultados en manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid. De esta manera, se ha podido trazar la línea entre la práctica y la teoría, analizando especialmente la codificación de un lenguaje y sus cambios a lo largo del tiempo. Este mismo ejercicio de contextualización se ha llevado a cabo a la hora de analizar el concepto de «conversación» y, en general, las raíces de la cultura política a través del juego de espejos entre las fuentes archivísticas y obras publicadas como el *Tratado de República* de Alonso del Castrillo (1521), *La civil conversazione* de Stefano Guazzo (1576). Con este planteamiento se comprenden las dinámicas políticas del momento desde una óptica que implique su papel en la definición de una cultura política propia de Castilla del Oro, si bien con características que permitían su aplicación en otros ámbitos de la monarquía. La complejidad de los conflictos jurisdiccionales se ha podido completar con fuentes tomadas del Archivo de la Nación de Bogotá, en Colombia, cuya vecindad con Panamá ha suplido en parte la ausencia de fuentes en este país.

Además de las fuentes archivísticas, se ha contado con el cuerpo de las Crónicas de Indias, especialmente las escritas por Pedro Mártir de Anglería, Bartolomé de las Casas,

⁸² Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía y la Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles (CODOIN); Documentos inéditos de la historia de Colombia, debidos a Juan Friede en 1955 o la compilación de Manuel Peralta de 1883 titulada *Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI su historia y sus límites según los documentos del AGI, Simancas, etc.* Estos repositorios resultan muy útiles y son, a su vez, testimonio de la construcción historiográfica del pasado latinoamericano, ya que la selección de los documentos transcritos respondía a los intereses e ideologías propias del tiempo en que fueron compilados.

Francisco de Gómara o Gonzalo Fernández de Oviedo. El caso de este último es excepcional porque «entra y sale» de la documentación de archivo, por lo que su *Historia general y natural de las Indias* resulta particularmente rica, si bien requiere ser utilizada con cautela por su subjetividad⁸³. El método para tratar estas obras y, en general el resto de las crónicas utilizadas, consiste en tomar sus relatos como una adición a las fuentes y leer los procesos descritos con una óptica distinta a aquella con la que fueron ideados. El objetivo es, por tanto, recontextualizar tanto los motivos de las acciones descritos por los autores como las causas y consecuencias de estas, siempre contraponiéndolas a las fuentes de archivo.

El libro está dividido en cinco capítulos, cada uno de los cuales analiza un aspecto diferente, si bien todos están entrelazados con el hilo conductor de las ciudades del istmo, y unas conclusiones generales. El primer capítulo se dedica a analizar la fundación de cada una de las poblaciones de Castilla del Oro como un proceso complejo de práctica política - durante el que cual se producía la constitución de un cuerpo político- en lugar de un acto heroico puntual y más allá de las instrucciones de la Corona, enfatizando su carácter comunitario y tanto su autonomía como su relación con otras poblaciones. Dicho proceso se llevó a cabo a través de interacciones entre castellanos, pero, al mismo tiempo, a través de diversas estrategias que implicaban tanto a castellanos como a indígenas para conseguir la legitimación de las fundaciones y facilitar su supervivencia. Esta naturaleza procesual y comunitaria de la fundación repercutirá en el desarrollo político de las ciudades, puesto que su nacimiento como comunidades políticas autónomas determinará sus relaciones con las comunidades vecinas y respecto a la Corona. Como se analiza en el capítulo segundo, una vez establecidas las fundaciones, las comunidades políticas comenzaban la negociación de los límites jurisdiccionales, que construyeron los espacios políticos de Castilla del Oro, tanto dentro de la gobernación como respecto a las gobernaciones vecinas. De nuevo, se pondrá el énfasis en las interacciones comunitarias a escala local como motor de la toma de decisiones, dando así pie a la definición de un tipo de jurisdicción no territorial, pero con capacidad para definir espacios de poder que, a su vez, se nutrían del conocimiento y negociación con las estructuras sociales y políticas de los cacicazgos regionales.

Una vez consolidada la jurisdicción de cada población, se ponía en marcha la negociación y defensa de los privilegios entre estas y la Corona, a lo que está dedicado el tercer capítulo. En él se analiza de qué manera las relaciones entre las ciudades y la corte a través de la consecución y defensa de los privilegios corporativos determinaron la

⁸³ Kathleen MYERS (2007).

consolidación y mantenimiento de los lazos de la Monarquía Hispánica. El argumento se fundamenta en el análisis de diversos pleitos corporativos en los que se puede observar la puesta en marcha de la autonomía urbana y su capacidad para la negociación. Dicha autonomía era expresada a través de un precoz y sólido lenguaje republicano que refleja la condición de la Monarquía como unión de comunidades políticas locales. Al mismo tiempo, el capítulo incide en la construcción desde abajo de la lealtad al monarca y sus posibilidades interpretativas en términos de mantenimiento del poder.

Como miembros del cuerpo de la monarquía, las ciudades no sólo acumulaban privilegios, sino que también tenían la responsabilidad de llevar a cabo las labores de «pacificación» y conversión de los indígenas. Más allá del recurso omnipresente a la violencia entre castellanos e indígenas, el cuarto capítulo explora una nueva interpretación de las relaciones entre castellanos e indígenas en el ámbito urbano. La autonomía de cada una de las poblaciones se hace evidente en el desarrollo de relaciones interculturales con los indígenas vecinos a escala local, que son puestas de relieve a través del análisis de diversos casos de estudio. La ciudad se convertiría, así, en un espacio de conversación política multicultural y cumpliría con su cometido como elemento justificador de la presencia de los castellanos en el Nuevo Mundo. Las relaciones con los indígenas se pusieron en marcha a través de la aplicación práctica de conceptos políticos urbanos aristotélicos, que fueron adaptados en el tránsito para facilitar su aplicabilidad.

Los diversos aspectos del fenómeno urbano en Castilla del Oro analizados permiten, en el último capítulo, elaborar una reconsideración del concepto de ciudad y también de los principios de ascenso social, tanto individual como corporativo, en el Antiguo Régimen. Los participantes en las fundaciones de ciudades comenzaron a reclamar privilegios a la Corona a través de sus relaciones de méritos, construyendo con ello una memoria de la ciudad que, a su vez, repercutió en la construcción de identidades colectivas. Estas fueron puestas en funcionamiento para alcanzar con premura el título de ciudad, lo que llevó a una adaptación de la categoría de ciudad al Nuevo Mundo. El análisis de las estrategias de los individuos para justificar sus méritos se lleva a cabo a través del estudio de diversos procesos de defensa de la ciudad de Panamá frente a distintas amenazas. La descripción minuciosa de estos episodios permite establecer las conexiones entre los individuos y las ciudades de Castilla del Oro con el conjunto de la Monarquía, y así participar de la definición de esta como un entramado de intereses corporativos comunes.

Los aportes historiográficos más significativos de cada uno de los capítulos se valoran conjuntamente en las conclusiones generales. En estas se resumen y suman los aspectos más

transcendentes para la construcción de un discurso renovado y, en cierto modo, alternativo de la historia de la Monarquía Hispánica en el Nuevo Mundo. Especialmente se subraya cómo afectaron los procesos locales de negociación, escenificación y articulación del poder a la construcción de una cultura política urbana en el Nuevo Mundo y su repercusión en el escenario global de la Monarquía Hispánica.

(MAPA 1)

Mapa 1. Localización de los principales lugares mencionados en el texto⁸⁴.

⁸⁴ Adaptado de ALONSO DE SANTA CRUZ, *Islario general de todas las islas del mundo*, siglo XVI, BNE MSS.MICRO/12638

Capítulo 1

De gente a pueblo.

La fundación de ciudades y la legitimidad

A través de los ventanales del café Pasaje, en la plazuela del Rosario de Bogotá, se observa erigirse la gran estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada a quien, espada en mano, se homenajea como el fundador de la villa de Santafé de Bogotá en 1538. En Cartagena de Indias, la céntrica Plaza del Reloj alberga la estatua de Pedro de Heredia a la que acompaña una inscripción que le recuerda como «su fundador». A lo largo del continente americano – y también en Europa- se podrán encontrar otras tantas estatuas y homenajes de este tipo en los que se recuerda a individuos destacados como fundadores de las principales villas y ciudades del Nuevo Mundo durante el siglo XVI. Así, siempre se recuerda con monumentos -erigidos habitualmente en conmemoración de los centenarios de su fecha fundacional- a Francisco Pizarro como el fundador de Lima, a Sebastián Belalcázar como el de Quito, Pedro de Valdivia como el de Santiago de Chile o a Pedro de Mendoza como el de Buenos Aires. Algunos de estos héroes fundacionales han traspasado el ámbito local y su influencia simbólica se ha trasladado al de la construcción de los mitos nacionales. Una estatua recuerda a Vasco Núñez de Balboa como el «descubridor de la Mar del Sur» en la Cinta Costera frente al océano, además de llevar su nombre la moneda nacional panameña. En la entrada al recinto arqueológico de Panamá Viejo, en la actual Ciudad de Panamá, se encuentra un pequeño busto de Pedrarias Dávila bajo el cual una placa reza «Pedro Arias de Ávila –Pedrarias- 1440-1531. Fundador de la Ciudad de Panamá, 15 de agosto de 1519». Los referentes panameños disputan, así, por el espacio simbólico de la ciudad, si bien siempre repitiendo el tópico del descubridor, conquistador o fundador solitario y heroico.

Existe una tendencia tradicional, política e historiográfica, a considerar las fundaciones de poblaciones en el Nuevo Mundo la acción casi individual de un líder que decidiría el lugar y levantaría acta personal del hecho en nombre del rey¹. Es lógico que así sea teniendo en cuenta que, ya en la época, los capitanes se empeñaban en aparecer como casi únicos artífices de las fundaciones, desdeñando a menudo conscientemente la aportación del grueso de las expediciones. También las normas de la Corona reforzaban esta suposición, pues tanto capitulaciones como instrucciones encargaban de manera personal a los capitanes o gobernadores la fundación de nuevas poblaciones. Esta tendencia se repitió en la obra de Bernardo Vargas Machuca, *Milicia y descripción de las Indias*, en la que todo el peso de la fundación se colocaba sobre «el caudillo»². En la práctica, sin embargo, se puede comprobar que el establecimiento del poder a través de la fundación requería la participación de toda la comunidad, única vía real de legitimación de las acciones de los capitanes³.

Ya en la misma época existieron voces que cuestionaron esta lectura heroica individual de la fundación, aunque fuera para desacreditar la figura del gobernador de turno en favor de otro. Por ejemplo, Pedro de Valencia dejaba claro en su *Descripción de las Indias* de 1607, que no había sido Pedrarias –como él mismo quiso mostrar– quien había fundado Nombre de Dios, sino Diego de Nicuesa⁴. Un informe redactado durante los años de gobierno de Pedrarias recordaba que el segoviano no había sido quien había fundado ni Santa María del Antigua ni Acla, con el fin en este caso de reivindicar la figura de Vasco Núñez de Balboa. El autor del informe denunciaba, además, que Pedrarias Dávila quería acreditar como mérito propio y exclusivo haber sido el fundador de la mayor cantidad posible de ciudades «porque acá suene que ha hecho muchas ciudades o poblaciones» y que incluso llamaba ciudades a los que no lo eran –«a los pueblos que hace a todos los llama ciudades»–⁵. Las acusaciones son elocuentes del interés de los individuos por destacarse como fundadores, como el paso fundamental para la conquista del territorio⁶. El interés de los gobernadores por mostrarse como fundadores únicos de ciudades también podría tener un interés económico. En 1535, el gobernador Francisco de Barrionuevo en carta al rey alegaba que

¹ Ejemplos de esta en Gabriel GUARDA (1972), pp. 89-106; Carmen MENA (1992).

² Bernardo de VARGAS MACHUCA (1599), lib. IV, cap. II.

³ Un acercamiento en este sentido, aunque enfatizando la condición del grupo como «hueste», en Demetrio RAMOS (1972), pp. 107-138.

⁴ «Aunque algunas relaciones atribuyen a Pedro Arias Dávila la fundación de Nombre de Dios, lo cierto es haberla fundado Diego de Nicuesa», PEDRO DE VALENCIA (1607), f. 135v. BNE, Ms 3064

⁵ De un religioso dominico sobre la desorden de Pedrarias, RAH, col. Muñoz, t. 57, pp. 423-432.

⁶ Este informe y otros fueron leídos y anotados por Antonio de Herrera para escribir su Historia General, apuntalando con ella la leyenda negra que desde entonces envolvió la labor de Pedrarias y que le costó un juicio con el sucesor del gobernador, el Conde de Puñonrostro, sobre el asunto ver Bethany ARAM (2012a), pp. 343-364.

«Pedrarias de Ávila y así creo que los otros gobernadores tenían seyscientos mil maravedies de VM de cada pueblo que poblase»⁷. La prominencia de la fundación de ciudades entre los méritos señalados, a su vez, por la esposa de Pedrarias en la relación de méritos que inició años después era, como se verá en este capítulo, lógica considerando la importancia que la fundación de una nueva población tenía en el proceso de expansión política de la Monarquía⁸.

Otras voces críticas, sin embargo, no reivindicaban a otros fundadores individuales sino, precisamente, el peso de la comunidad y de cada uno de los individuos que tomaban parte en las expediciones fundadoras. Bernal Díaz del Castillo, con su tendencia recurrente a utilizar la primera persona del plural en su *Verdadera Historia de la conquista de la Nueva España* frente a la primera persona del singular utilizada por López de Gómara y por el propio Cortés, reivindicaba la importancia de todos los miembros de las expediciones, tanto en la conquista bélica de los territorios como en su ordenamiento político a través de la fundación de poblaciones⁹. Los propios capitanes de las expediciones, como se verá, eran plenamente conscientes de que era fundamental el acuerdo de la comunidad para que las fundaciones tuvieran continuidad, cumplieran con la legalidad y sus objetivos pudiesen ser llevados a cabo. En este capítulo se argumentará que la labor de fundación de poblaciones requirió el concurso necesario del acuerdo comunitario en forma de pacto, o consenso tácito, así como la participación, en uno u otro grado, de las poblaciones indígenas. Los miembros de las expediciones se encargaron de reivindicar, como individuos, la importancia de su participación en la elaboración de sus propias relaciones de méritos, conscientes de que, sin su concurso, nada se podría haber llevado a cabo.

La fundación de ciudades no se producía como efecto de una ocupación del territorio sino, más bien al contrario, como el punto de inicio de esa ocupación. La propia fundación formaba parte del proceso general de toma de posesión, pero tenía una lectura mucho más profunda, trascendente o constitucional que la mera organización del espacio a la que la historiografía ha vinculado este proceso¹⁰. Esta implicaba, en realidad, la creación de un nuevo espacio social y político, un escenario de sociabilidad y poder, y significaba una vía para la legitimación de las acciones de las nuevas comunidades políticas y de los individuos

⁷ Carta de Francisco Barrionuevo al rey, 30 de enero de 1535, AGI, Patronato 194, R. 30.

⁸ Información de los méritos y servicios de Pedrarias Dávila, 06 de febrero de 1528, AGI, Patronato 150, N. 3, R. 1.

⁹ Hernán CORTÉS (1985); Sobre el cuestionamiento del mito de la conquista como la obra de «hombres excepcionales», cuyo origen retrotrae a las recreaciones decimonónicas de la misma, ver Matthew RESTALL (2004), pp. 1-26.

¹⁰ Richard MORSE (1984), pp. 67-104; para el caso de Castilla del Oro, Alfredo CASTILLERO (2011), pp. 251-276; Carmen MENA (1992b).

que las formaban. Por ello, la fundación de una nueva población no terminaba con el levantamiento del acta de fundación –en el caso en que lo hubiera- sino que esa era una fase más de un proceso en el que primaban las prácticas generadoras de nuevos significados sobre las normas o los planteamientos teóricos que las amparaban.

En todo este proceso, los pueblos indígenas no fueron un elemento pasivo, sino que tuvieron el papel decisivo de facilitar o impedir las distintas fundaciones. De hecho, sin alcanzar, a través de diversas estrategias, un relativo consenso con los indígenas, las fundaciones de los castellanos no podrían haberse llevado a cabo y, muchos menos, haber permanecido. La negociación de su incorporación al entramado político castellano supuso una adaptación de éste, que se reflejó de manera simbólica en la elección de los nombres de las poblaciones y en la definición de sus límites. Los hechos, como se verá, demuestran que los miembros de los diferentes cacicazgos, lejos de comportarse como un sujeto uniforme sometido desde el comienzo de manera dócil al dominio castellano, se granjearon una cierta cuota de participación política a través de su capacidad de resistencia y negociación. Los diferentes grupos de indígenas se incorporaron, en mayor o menor grado, al proceso de toma de decisiones y de asentamiento de nuevas poblaciones.

A la hora de analizar la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo, la historiografía tradicionalmente ha considerado como un referente doctrinal, la aparición, en 1573 de las *Ordenanzas de Nueva población*, firmadas por Felipe II en Segovia, que fueron acompañadas en 1599, por la aparición en Madrid de la famosa obra de Bernardo de Vargas Machuca, *Milicia y descripción de las Indias*, en la que se describía de manera formal cuál era la forma de fundar una nueva población¹¹. En ambas obras se ponía el peso de la fundación en el acto formal de asentamiento de la jurisdicción, normalmente dirigido por un sólo individuo, y en sus peculiaridades ritualizadas, sin considerar todos los procesos accesorios de negociación de la autoridad y elección práctica, basada en la experiencia de los lugares de asentamiento. La realidad es que cuando tanto las Ordenanzas como el libro de Vargas Machuca vieron la luz, la mayoría de las poblaciones del Nuevo Mundo ya habían sido fundadas; por lo tanto, en ambos casos se podría hablar más bien de una síntesis o recopilación estandarizada de la forma de fundar que de la generación de un nuevo código.

¹¹ En trabajos de diversa índole se ha realizado un uso retrospectivo, especialmente de las ordenanzas de 1573, para analizar las fundaciones de poblaciones durante las primeras décadas de la presencia castellana en el Nuevo Mundo, entre otros, Francisco SOLANO (1983); Manuel LUCENA GIRALDO (2004); Tamar HERZOG (2001), pp. 293-303.

La Corona emitió, en efecto, para el caso de Castilla del Oro, desde 1508 una serie de recomendaciones o normativas en las que se instaba a los capitanes a fundar nuevas poblaciones siguiendo la pauta de las que se habían entregado años atrás a Nicolás de Ovando para la isla Española¹². En las capitulaciones con Ojeda y Nicuesa se les instaba simplemente a «hacer cuatro fortalezas para cuatro asientos», dos cada uno de ellos, pero sin especificar cómo deberían ser efectivamente fundadas¹³. Las instrucciones entregadas a Pedrarias Dávila en 1513 y con las que llegó a Castilla del Oro a finales de junio de 1514, le encomendaban, en primer lugar, «que se *hagan* tres o cuatro asientos», pero tampoco incidían de manera muy detallada sobre cuál habría de ser la forma de llevar a cabo su fundación más allá de referencias elegir los mejores lugares y de la organización interna o urbanística de los asentamientos¹⁴. En las Leyes Nuevas de 1542 nada se menciona sobre la práctica de fundar poblaciones, si bien se pone de relevancia su importancia para la conversión de los indígenas. Considerando lo poco que, *a priori*, aportaban las normas sobre la manera en la que la fundación de poblaciones debería ser llevada a efecto, se hace necesario buscar las fórmulas interpretativas en las prácticas. Éstas eran, a su vez, adaptaciones de una cultura política de raíces romanas, retomadas durante la Reconquista y que, eventualmente, acabaron generando un *corpus* teórico.

Estas prácticas se nutrían de rituales simbólicos, negociaciones entre diferentes instancias, pactos constitutivos o enfrentamiento abiertos. No existió, durante la fase fundacional, un «manual» sobre el que basarse para actuar, sino que los problemas que se iban presentando se resolvían mediante la práctica, ampliando con ello la panoplia de soluciones al alcance de los actores y produciéndose una construcción empírica de la cultura política que aunaba principios y normas pero que se concretaba a través de la respuesta a intereses y necesidades concretas. En este sentido resultará capital analizar las diferentes vías de transmisión de la información entre diversas expediciones y también la acumulada de las relaciones con los pueblos indígenas que permitieran poner en práctica las diversas estrategias de negociación más adecuadas a las circunstancias.

La concurrencia de diversos individuos en expediciones sucesivas y la acumulación de conocimientos sobre el territorio y las poblaciones indígenas permitirá comprender el refinamiento de la práctica de la fundación. En el único caso a nuestro alcance para el caso

¹² Esteban MIRA CABALLOS (2000).

¹³ Capitulación con Diego de Nicuesa y Alonso de Hojeda para yr a la tierra de Uraba y Veragua, AGI, Indiferente, 415, L. 1, f. 4vº.

¹⁴ Instrucción dada por el Rey a Pedrarias Dávila... CODOIN, t. 39, pp. 280-298.

de Castilla del Oro en el que se produjo el levantamiento del acta de fundación, Natá, se puede percibir la concreción de esa práctica política en un documento legal. Documentos de este tipo, a lo largo de todo el continente y que recogen a su vez particularidades regionales fruto de la adaptación de las prácticas, fueron los que generaron el volumen de información que cristalizaría en las obras finales de síntesis. Los individuos que participaron en los procesos fundacionales cargaban, por lo tanto, con unas normas que les indicaban someramente que debían fundar poblaciones, aunque sin instrucciones precisas sobre cómo llevarlo a cabo, por lo que tuvieron que aprovechar su bagaje de cultura política y adaptarse a las circunstancias para llevarlo a cabo, ensanchando la tipología de recursos a su disposición y refinando con ello la imaginación política colectiva¹⁵.

En este capítulo se analiza, a la luz de estos planteamientos, el largo y complejo proceso de la fundación de las cinco principales poblaciones de Castilla del Oro –Santa María del Antigua del Darién, Acla, Nombre de Dios, Panamá y Natá- en la primera mitad del siglo XVI como un fenómeno de práctica política comunitaria para cuya concreción fue necesario transcender y adaptar las normas expresas de la Corona en función de las necesidades puntuales. Como se verá, cada caso concreto tuvo sus propias particularidades fruto de las circunstancias concretas de cada escenario, y contribuyó a forjar una adecuación específica entre praxis y norma. En el primer apartado, se entrará a valorar el proceso de toma de decisiones en torno al lugar en el que se deberían fundar las poblaciones, enfatizando las diferentes vías de transmisión de la información –incluyendo sus aportes simbólicos- tanto entre las sucesivas expediciones de castellanos como entre estas y los pueblos indígenas. La sección segunda se dedicará al análisis de la construcción de la legitimidad por parte de las comunidades políticas –tomando como caso de estudio la fundación de Santa María del Darién- para ensanchar los límites legales a través de la acción política para, trascendiendo los nombramientos oficiales, generar una nueva legalidad. El apartado tercero continúa con las fórmulas puestas en marcha en casa una de las fundaciones sucesivas –desgajamientos jurisdiccionales de Santa María- para asegurar la permanencia sobre el terreno, más allá de la legalidad jurídica basada en actas de fundación o tomas de posesión.

Entre las fundaciones que fueron exitosas, el consenso, siquiera tácito, de la comunidad fue fundamental y, por ello, en el cuarto apartado se analiza el papel jugado por cada uno de los individuos que componían las comunidades políticas locales en la definición y constitución de las poblaciones, así como la reivindicación de los mismos como miembros

¹⁵ Anthony PAGDEN (1990).

prominentes y necesarios de la Monarquía Hispánica. Finalmente, se plantea una interpretación abierta de las poblaciones fundadas en Castilla del Oro como un fenómeno híbrido y complejo. La variedad de los referentes que participaron en la fundación hace de esas poblaciones un fenómeno novedoso y mixto, que transcendía los presupuestos teóricos, para concebirse como una creación de práctica política. Las instrucciones dirigidas a los capitanes generales de las expediciones chocaron con la realidad de que su autoridad debía ser negociada tanto con los indígenas como con los miembros de sus propias expediciones. En primer lugar, las teóricas clásicas relativas a los emplazamientos ideales de las nuevas fundaciones fueron matizados por la realidad del territorio, de manera que los propios lugares elegidos también fueron fruto de una cierta negociación.

1. *Lugares de fundación.*

La elección de los lugares en el que se asentaron los cinco núcleos que se crearon y sobrevivieron en Castilla del Oro entre 1509 y 1522 fue fruto de adaptaciones al contexto geográfico y cultural de la región, de los principios teóricos sobre fundación de nuevas poblaciones. A continuación, se analizará cómo se produjo esa adaptación y cómo la información recibida por diversas vías fue incorporada al proceso de toma de decisiones por los actores implicados. La tradición teórica sobre la elección de los lugares en los que se debía fundar una población se remontaba a las obras clásicas de arquitectura de Vitrubio y Alberti¹⁶. Estos principios implicaban referencias sobre la calidad de los aires, la altitud o la cercanía de los ríos. En la Península Ibérica, las teorías clásicas tuvieron su particular adaptación especialmente en las obras de Rodrigo Sánchez de Arévalo y Francesc de Eiximenis¹⁷. Para estos autores, una buena elección de los lugares de construcción de las nuevas ciudades garantizaría su continuidad pues el lugar de habitación estaría, siguiendo los principios de la teoría aristotélica de climas, directamente relacionado con las condiciones de salubridad y las

¹⁶ «En el fundar de los pueblos y levantar de muros se tendrán estos principios: primeramente, se ha de elegir el lugar más saludable. Y seralo tal el que estuviere el alto», además sería mejor la ciudad que tenga «vecindad con lagunas de aguas encharcadas», para que los vientos no traigan «los espíritus corrompidos de las bestias de los charcos y esparciéndolos en los cuerpos de los moradores engendran pestilencia», *Los diez libros de arquitectura de Marco Vitruvio Polión. Según la traducción castellana de Lázaro de Velasco (ca. 1571)*. Cáceres, Cicon, 1999. Alberti, en los *Diez libros de arquitectura*, continuaba con la relación entre el clima y el comportamiento de los habitantes: no basta en el elegir la región mirar solamente las cosas que están claras y debajo de la vista, pero también notados más oscuros indicios es necesario advertir en el ánimo todo el negocio, porque serán indicios de buen aire, y de aguas enteras, si aquella región llevare copia de buenos frutos, si cría muchos viejos y de gran edad, si abundare de valiente y hermosa juventud, y de parte entero y muy ordinario», *Los diez libros de arquitectura* (Madrid, Alonso Gómez, 1582). Valencia, Albatros Ediciones, 1977, lib. I, cap. V.

¹⁷ Rodrigo SÁNCHEZ DE ARÉVALO (1944), pp. 49-50; Francesc DE EIXIMENIS (1484), cap. 106. Sobre la obra de ambos desde el urbanismo, Antonio ANTELO IGLESIAS (1985), pp. 19-50; José Antonio MARAVALL (1983), pp. 363-383; Soledad VILA (1984), pp. 87-96.

formas de relación social que se llevarían a cabo en las ciudades. Todas estas teorías se filtraron, de manera más o menos explícita, en las sucesivas normativas o instrucciones destinadas a decidir en qué lugares deberían llevarse a cabo las fundaciones castellanas en el Nuevo Mundo, seleccionando cuidadosamente la «calidad de la tierra».

Antes de la definitiva codificación de 1573 ya se había producido un goteo constante de indicaciones en los distintos cuerpos normativos. En las primeras instrucciones a Nicolás de Ovando de 1501 para poblar en la Española se le recordaba de forma genérica que escogiese los lugares más apropiados¹⁸; igualmente, en las capitulaciones de 1508 firmadas entre la Corona y Ojeda y Nicuesa, se incluían referencias a cómo se debían construir los edificios que implicaban una correcta elección del entorno natural en el que se debía fundar. Ambos capitanes debían fundar, a su costa y misión, dos fortalezas cada uno, «labradas y con los cimientos de piedra y lo otro de tapia, de tal manera que se puedan bien defender de la gente de la tierra», dentro de los límites geográficos –Urabá para Ojeda y Veragua para Nicuesa– marcados por las capitulaciones, pero sin contar con las complejidades de alcanzar su destino y negociar su presencia con los indígenas¹⁹. Las instrucciones a Pedrarias de 1513 fueron las más explícitas en el sentido de encontrar lugares adecuados, pues encargaban a los fundadores que una de los primeros asuntos a los que debían prestar atención era a «los asientos e logares que allá se hobieren de asentar», para garantizar que «la navegacion y para mas seguridad de la tierra»; para ello deberían estar edificadas en «sitios sanos é non anegadizos», cercanos a vías de comunicación marítima y, además, «que sean de buenas aguas e de buenos ayres e cerca de montes e de buena tierra de labranza»²⁰. Sólo tras haber elegido bien los lugares para comenzar la edificación, deberían comenzar a preocuparse por el orden dentro de las propias poblaciones.

Todas estas normas, que se creaban sobre el papel y sin considerar de manera concreta las circunstancias que los actores se iban a encontrar en el territorio –a pesar de que, en algunos casos, como en el de Ovando, se dejaba en parte a su discreción tomar la decisión concreta²¹–, chocaron en la mayoría de los casos con una realidad que forzaba una adaptación constante en el proceso de toma de decisiones. Los actores intentaron seguirlas hasta cierto punto, pero se encontraron con que, en primer lugar, las condiciones geográficas no se

¹⁸ Instrucción a frey Nicolás de Ovando, 16 de septiembre de 1501, AGI, Indiferente 418, L. 1, F. 39r-42r.

¹⁹ Real cédula del asiento y capitulación tomado con Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda para ir a la tierra de Urabá y Veragua, 9 de junio de 1508, AGI, Indiferente, 415, L. 1, f. 4v.

²⁰ Instrucción... CODOIN, t. 39, p. 283.

²¹ *Ibid.*: «de aca no se puede dar en ello çierta forma vereys los lugares e sytios de la dicha ysla e conforme a la calidad de la tierra».

ajustaban a los requerimientos teóricos y, en segundo, que los indígenas no se mostraban indiferentes o dóciles frente a la ocupación de sus territorios. En consecuencia, los castellanos debieron improvisar y adaptar las normas. A partir de esa constatación, «la calidad de la tierra» pasó a ser un término que forzaba a considerar no sólo las circunstancias físicas del terreno, sino también las relaciones necesarias con los habitantes o las luchas de poder en el seno de la sociedad de los castellanos.

En la realidad, los castellanos no poblaron *donde era menester*, sino más bien donde podían. Enfrentados con la realidad geográfica y cultural, los castellanos debían asegurar que las fundaciones fuesen viables. Para ello, en primer lugar, debían elegir un lugar que fuese relativamente benéfico en términos geográficos, pero, especialmente, debían concretar la fundación en un espacio en el que este pudiera ser viable, para lo cual debían ser capaces de asegurar tanto la legitimidad del establecimiento como las diversas vías de abastecimiento de este a través de fórmulas diversas. La acumulación de información y experiencia, tanto geográfica como acerca de la situación política y social de los diferentes agentes políticos sobre el terreno, contribuyó a que el proceso pudiera ser relativamente exitoso en el largo plazo.

El proceso de toma de decisiones requería de la información más precisa posible. Esta se conseguía a través del contacto con miembros de expediciones anteriores y se iba refinando con el contacto con los indígenas de cada zona. De esta manera, la capacidad para decidir sobre el emplazamiento de una nueva fundación no dependía estrictamente de la llegada de un mandato desde la corte en Castilla –ni aún desde la Audiencia de La Española– sino que se tomaba necesariamente sobre el terreno²². Fue el manejo de la información interpersonal y la retroalimentación sistemática de las expediciones la que determinó la toma de decisiones en Castilla del Oro. Sobre esto resultó, por supuesto, fundamental la capacidad para conocer y comprender la organización social y cultural de los indígenas para conseguir su colaboración. La información, ya fuera directa o indirecta, que se obtenía de las diferentes poblaciones indígenas determinaba muchas de las decisiones, una de las primeras la del lugar en el que desembarcar y fundar una población, comenzando con ello el proceso de ocupación y adaptación al espacio de Castilla del Oro.

La elección del lugar en el que se estableció la primera población castellana en el continente, Santa María del Antigua del Darién, fue fruto de la información que Vasco Núñez de Balboa había acumulado en sus viajes anteriores por la región. El extremeño recordaba,

²² Arndt BRENDECKE (2009), pp. 235-252; Bethany ARAM (2012b), pp. 223-236.

por haber participado en la expedición de Bastidas, la existencia de «un pueblo en la otra banda de un gran río y muy fresca y abundante tierra de comida, y la gente della no ponía hierba en sus flechas»²³. La información fluía, se intercambiaba y su origen era diverso, pero se iba acumulando y cada viaje se enriquecía con las noticias que acumulaba del anterior. La expedición de Rodrigo de Bastidas había salido de Cádiz para recorrer, entre los años 1500 y 1502, las costas de Tierra Firme y la región que se conoció como Santa Marta. Sus barcos siguieron, aproximadamente, la ruta seguida por Cristóbal Colón en su tercer viaje. Algunos de los miembros de ese viaje como Juan de la Cosa —uno de los más afamados pilotos del momento y miembro destacado de la expedición de Ojeda hacia Urabá- y el propio Balboa, posteriormente, serían protagonistas de la exploración y ocupación del territorio del istmo. La expedición de Bastidas fue la primera que penetró en el golfo de Urabá antes de continuar por la costa del istmo de Panamá hasta el puerto de Retrete y retornar hacia las Antillas. Balboa recordaba bien, pues los indígenas del golfo de Urabá se habían mostrado amistosos y dispuestos a los intercambios con la expedición de Rodrigo Bastidas²⁴.

Vasco Núñez de Balboa había retornado a las costas del golfo de Urabá como polizón en la expedición de rescate de Alonso de Ojeda comandada por el bachiller Enciso. El objetivo de dicha expedición era encontrar y socorrer a los miembros que quedasen en San Sebastián de Urabá tras el desembarco de Ojeda. Éste había acudido, en virtud de las capitulaciones de 1508, a poblar en esa banda del río y había llegado a fundar la villa de San Sebastián. La falta de víveres y la violencia de los indígenas provocaron la salida del jefe de la expedición y el desamparo de los miembros restantes. Balboa salió del tonel en el que se ocultaba dentro del barco en el otoño de 1509 y, a pesar de la frontal oposición del bachiller Enciso —quien quiso abandonarlo en la isla más próxima- consiguió granjearse el favor de los miembros de la expedición gracias sobre todo a su conocimiento del territorio. La información que manejaba sobre el supuesto lugar más conveniente para desembarcar salvó su vida y probablemente la de gran parte de la expedición.

Con la decisión de desembarcar en las costas del Darién se alteraba de hecho la legalidad previa basada en las capitulaciones y se comenzaba a construir una nueva basada en las acciones en el contexto local. Balboa asumía que, al haber muerto Ojeda, la autoridad de Enciso había dejado de tener validez y que, además, el área geográfica en la que

²³ LAS CASAS, lib. 2, cap. 46.

²⁴ Carl SAUER, (1961) pp. 116-119.

desembarcaban no se correspondería con la zona afectada por la capitulación²⁵. La legitimidad del desembarco ya no recaía en la figura de Enciso pues su autoridad había cesado y se requería de una nueva legalidad que debería emanar de los hechos y no de las normas. Un grupo de 20 miembros de la expedición hizo «monipodio» en contra de Enciso para apresararlo con el plan de acomodarlo en el primer barco que pasase hacia La Española²⁶.

La ausencia temporal de autoridad provocada por el desacato a Enciso se suplió rápidamente con la creación de un cabildo y la fundación de la villa de Santa María del Antigua del Darién. Los indígenas no se mostraron, con todo, tan amistosos como Balboa había supuesto con los miembros de la nueva expedición y presentaron una batalla que no duró mucho y tras la cual se admitió finalmente la nueva población en el lugar del asentamiento indígena como un *ex voto* dedicado a la virgen de la Antigua²⁷. La batalla indica que la región estaba habitada previamente y que, por ende, la información que Balboa manejaba sobre su habitabilidad era acertada. Lo cierto es que poco tiempo después Balboa se había «amancebado» con la hija del cacique Cemaco, en una unión que tendría mucho de traspaso de autoridad para granjearse la legitimación local²⁸. La autoridad de Balboa, en todo caso, provenía en primer lugar de su conocimiento del terreno y de sus posibilidades para la fundación de una población en un lugar en que pudiera sobrevivir.

La elección del lugar del resto de las poblaciones del istmo siguió un patrón diverso, con adaptaciones constantes a las circunstancias. Las zonas de los cacicazgos de Comogre y Pocorosa eran conocidas tras el intento en 1514 de fundar allí la villa de Santa Cruz. De hecho, la expedición que dio lugar a la fundación de Acla en esa región fue un viaje de castigo a los indígenas de esa zona y, además, tenía el objetivo de rescatar a dos miembros de la anterior entrada. En noviembre de 1515 Pedrarias Dávila organizó un viaje cuyo objetivo primordial era «pacificar y poblar las provincias de Comogre y Pocorosa e la otra mar del Sur e a castigar los que fueron en la muerte de los cristianos e destruimiento del pueblo de Santa Cruz y que va con el dicho gobernador»²⁹. El puerto de Santa Cruz, que se había fundado como una extensión portuaria de Santa María, tuvo una vida muy efímera. Se pobló y

²⁵ LAS CASAS, lib. 2, cap. 66: Según Balboa, Enciso «había usurpado y usado jurisdicción que no tenía, haciéndose alcalde mayor, como no tuviese poder del rey, sino de Ojeda, que ya era muerto».

²⁶ Real Provisión a Pedrarias Dávila para que al llegar a la villa de Santa María de la Antigua del Darién se informe de los excesos cometidos por Vasco Núñez de Balboa y otros, 28 de julio de 1513, AGI, Panamá, 233, L.1, f. 52 y ss.

²⁷ Sobre el importante culto a la virgen de la Antigua ver Paolo VIGNOLO (2008a).

²⁸ Pedro MÁRTIR, dec. 2, cap. 6.

²⁹ A su alteza el licenciado Espinosa, 20 de noviembre de 1515, publicado en ALTOLAGUIRRE, A.: *op. cit.*, pp. 86-87.

despobló en apenas seis meses entre mayo y noviembre de 1515 tras el alzamiento del cacique Pocorosa, «do mataron los indios noventa cristianos»³⁰.

La destrucción del pueblo de Santa Cruz provocó la puesta en marcha de una nueva empresa capitaneada por Pedrarias Dávila, que partió en noviembre de 1515 desde Santa María del Antigua del Darién, compuesta de 250 castellanos y destinada a que se hicieran «dos poblaciones», una en la Costa del Norte y otra en la Mar del Sur, con el fin último de intentar unir finalmente las dos costas del istmo. En este caso, el lugar de fundación estuvo, pues, determinado por el encadenamiento de dos expediciones consecutivas. El fracaso de la primera provocó la puesta en marcha de la segunda, que finalmente comenzó la fundación de Acla. Además de este encadenamiento de ensayo-error, Pedrarias Dávila enfermó a los pocos días de haber partido y se vio obligado a quedarse en la «provincia de Acra donde estava poblado el caçique» de Careta. La zona le pareció ideal al gobernador, que consideraba que «se puede hacer una gran ciudad» por la cercanía de dos ríos y porque había oído que había minas cercanas, lo cual concordaba con las teorías clásicas sobre la correcta elección del lugar de asentamiento. La vecindad del Darién y de la mar del Sur, a apenas 22 leguas de distancia, terminaron de convencerle y «comenzó a hacer una fortaleza y un pueblo de que ha habido mucho placer los marineros y gente que allá están, la cual fortaleza se hace y sosterná sin gasto de V.A, excepto algunas herramientas»³¹. La experiencia previa del puerto de Santa Cruz también pesará, como veremos, en la elección de una estrategia de legitimación de la presencia en el terreno.

Un patrón similar operó en la segunda fundación de Nombre de Dios, que surgió de una expedición fallida previa y de la información aportada por miembros de anteriores viajes. La villa de Nombre de Dios, cuyo origen data de 1518, se podría considerar, en puridad, una refundación. Lo que se produjo fue un encadenamiento de informaciones anteriores que ofrecen un buen ejemplo de la falta de linealidad en el proceso fundador. Las primeras noticias sobre el lugar provenían del tercer viaje de Colón. En los alrededores del río Belén había fundado el Almirante la efímera Santa María de Belén, que en apenas dos meses fue destruida por los indígenas. Las noticias que dio Colón sobre la geografía y las posibilidades de ese territorio en los alrededores de lo que él llamó Porto Belo eran muy positivas y, en base a las mismas, se planteó la expedición de Nicuesa en 1509.

³⁰ Bartolomé de LAS CASAS, lib. 3, cap. 62; Pablo ÁLVAREZ RUBIANO (1944), pp. 652-661; Provanza hecha por mandado del governador Pedrarias por el alcalde mayor Lic. Gaspar de Espinosa, 14 de junio de 1515, RAH, Col. Muñoz, t. 57, f. 347.

³¹ A Su Alteza Pedrarias Dávila, 20 de enero de 1516, Ángel ALTOLAGUIRRE, pp. 108-111.

Durante el periplo por la costa de Veragua, un joven marinero llamado Gregorio Genovés había recordado que por esa zona había una fuente de agua potable y un puerto de gran belleza. La manera de encontrarlo era buscando un ancla que el Almirante había enterrado en los alrededores de Porto Belo. Otro miembro de una expedición anterior, Lope de Olano, también manejaba información sobre la zona y decidió fundar por sí mismo una población en el lugar en el que había estado previamente Belén, fruto de lo cual había sido apresado por Nicuesa y condenado a moler trigo en plena calle³². La información que Nicuesa sí aceptó fue la de Gregorio Genovés, basada en la cual había finalmente encontrado un lugar que consideraba aceptable y decidido desembarcar al grito de «paremos aquí, en el Nombre de Dios»³³. Esa primera fundación de Nombre de Dios desaparecería y sus habitantes se trasladarían más tarde a Santa María del Antigua, villa desde la que surgió la expedición comandada por Diego de Albítez, quien finalmente se encargaría de fundar la nueva población de Nombre de Dios a finales de 1518 en el mismo lugar en el que Nicuesa había intentado asentar la suya.

Los lugares elegidos para las fundaciones de Panamá y de Natá, en la costa sur del istmo, están muy relacionados el uno con el otro. La región de Panamá formaba parte –junto a Coiba– de la gobernación concedida a Vasco Núñez de Balboa en marzo de 1515 como recompensa por el descubrimiento de la Mar del Sur. Esas regiones no se correspondían con ningún lugar concreto, sino que, según el propio Pedrarias Dávila, «Panamá es unas pesquerías en la Mar del Sur y por pescadores dicen los indios Panamá» mientras que Coiba «no es provincia, sino que significa lejos tierra o lejos camino». La confusión sobre la categoría de estas regiones no era nueva, sino que provenía, también, de uno de los viajes de Colón quien, cuando preguntó a los indígenas que de dónde llevaban el oro le respondieron que de Coiba, que querría decir lejos, de manera que «tomó Coiba por provincia y como trujeron mucho oro se creyo riquísima y cundió la fama de Coiba la rica»³⁴. Balboa nunca llegó a acudir a tomar control de *estas* regiones, pero el nombre de Panamá continuó siendo operativo y, tras el ajusticiamiento de Balboa, Pedrarias emprendió el camino a través del istmo para tomar posesión *de nuevo* de la Mar del Sur y fundar Panamá. En este caso las

³² Fernández de Oviedo argumentaría que la fundación de Nombre de Dios no fue más que un traslado de esa primera fundación de Lope de Olano, FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 28, cap. 3.

³³ LAS CASAS, lib. II, cap. 66. «desde Puerto Belo se pasó adelante al levante seis o siete leguas, a otro puerto cuyos moradores se llamaban chuchureyes; y porque le pareció que había en aquel lugar disposición para hacer una fortaleza, determinó de poblar, y dijo: ‘paremos aquí en el nombre de Dios’. Y desde allí le quedó el nombre hasta hoy: el puerto y ciudad de Nombre de Dios».

³⁴ RAH, col. Muñoz, t. 75, ff. 333r-333v. El original se encuentra en AGI, Patronato 26, R. 4.

Además de esto, argumentaba que lo que Vasco Núñez reclamaba para su gobernación era un territorio tan grande «que no conviene dársele».

noticias –producidas y reproducidas en varios episodios sucesivos- sobre las bondades naturales de la pesca en un lugar aún apenas explorado y reconocido, que garantizaría el sustento, determinaron la acción política y la decisión de establecer una fundación en un lugar concreto.

Natá fue fundada en 1522, principalmente como complemento cercano de Panamá para abastecerla de grano y carne³⁵. Sin embargo, la información sobre la región había sido ya compilada entre los años 1516 y 1517 por Gaspar de Espinosa en su larga expedición. El capitán estuvo meses en la zona y no se ahorró elogios sobre ella: «desde Natá hasta Comogre, es tierra tan llana como la palma, tierra muy sana y todo savana, sin montes mas de las arboledas que hay en las riberas de los ríos, e las de Natá hasta Guararí». La costa era igualmente fértil, siempre según su narración, y abundante en pescado «y caza infinita de cerdos y pavas, que de verdad se hallaron en los bohíos de Natá, en sus despensas, hasta 300 venados en cercena, antes mas que menos, e la mas hermosa carne de comer que nunca se vio». Los primeros intentos de fundar una población en ese terreno tan propicio se limitaron a intentar levantar un palenque, acumular oro y grano y al comienzo de la predicación religiosa en la iglesia que ya se había levantado y en la que «el padre vicario les predicaba por una lengua intérprete». Espinosa incluso aseguró que la predicación estaba resultando un éxito, especialmente entre jóvenes y mujeres, «pues muchos de ellos pedían que les tornasen cristianos, que lo querían ser» mientras que «los gandules e indios mayores es cosa excusada, si dios no inspira en ellos». La razón por la que no triunfó este primer intento de fundación en los territorios del cacique de Natá fue la resistencia de este a la lectura del requerimiento que Espinosa intentó. El cacique, según narró Espinosa, se mostró «bellaco» ante las proposiciones de los cristianos contenidas en el documento y, en consecuencia, no permitieron el asentamiento en la zona del cacique de Natá. Por ese motivo los castellanos tuvieron que retirarse y buscar otras fórmulas para poblar en ese territorio que se describía como «descubierta, llana y graciosa»³⁶.

³⁵ Con esas funciones sería recordada años más tarde, en 1552, en un pleito sostenido por el cabildo en el que se afirmaba que sus habitantes «no tyenen ny an tenido otro trato sino es criar ganados y maizes», Con el concejo, justicia y regimiento de la ciudad de Natá en Tierra Firme sobre la libertad de los indios de su jurisdicción, 1552, AGI, Justicia 1049, N. 4, R. 3. Sobre los orígenes de esta fundación, ver Alfredo CASTILLERO CALVO (1972); Carmen MENA (1992a), p. 41; Carlos GASTEAZORO (1958), pp. 56-61.

³⁶ Relación hecha por Gaspar de Espinosa, alcalde mayor de Castilla del Oro, dada a Pedrarias Davila, CODICIN, t. 2, p. 467-522, las citas en p. 512.

(MAPA 2)

Mapa 2. Localización de las cinco principales fundaciones de Castilla del Oro³⁷.

Las informaciones sobre el lugar en el que se podían intentar las fundaciones respondían a una panoplia de aportes en los que se mezclaban las referencias míticas con las acumuladas a través de exploraciones más o menos exitosas en viajes anteriores. A su vez, los referentes que contribuían a generar esas informaciones eran de origen indígena, ya fuera a través de traducciones más o menos fiables de los lugares de interés o de referencias geográficas más o menos ajustadas a la realidad y que se correspondían con las zonas de control de ciertos caciques. La presencia indígena también ofrecía una cierta garantía a los castellanos de que precisamente en esos lugares se podría garantizar la subsistencia alimentaria³⁸.

La elección de los nombres de las *nuevas* poblaciones de Castilla del Oro refleja claramente en el plano simbólico y práctico la adaptación de las estructuras previas, que conllevaba, a su vez, un manejo de variadas fuentes de información. En las instrucciones que se entregaron a Pedrarias Dávila en agosto de 1513 se encontraba la que hacía referencia a «dar nombre general a toda la tierra» y a cada una de sus partes en particular. Ya desde el primer viaje de Colón, éste se aplicó en lo que se ha considerado un «frenesí nominativo», con el supuesto resultado de despojar a los indígenas de su identidad para sustituirla por la castellana³⁹. Según esta interpretación, que entiende la conquista del Nuevo Mundo como un proceso de desposesión de las categorías culturales indígenas para forzar su sustitución por otras, el «bautismo» de la tierra constituía una vía de apropiación simbólica del territorio y de una imposición cultural unilateral por parte de los castellanos sobre los indígenas⁴⁰. Sin embargo, aunque las normas incluían esa pretensión de manera explícita, en la práctica las circunstancias ofrecieron resoluciones diferentes.

De las cinco poblaciones tratadas en este capítulo, tres mantuvieron nombres indígenas. Sólo Nombre de Dios, cuyo primer «bautismo» tuvo unas circunstancias muy particulares, conservó un nombre totalmente castellano. Del resto de poblaciones, Acla se asimiló con el nombre del cacique que tenía el control más eficiente sobre el territorio, si bien originalmente su nombre hacía referencia a «tierra de huesos»⁴¹. Natá, de igual forma,

³⁷ Elaboración propia a partir de https://d-maps.com/carte.php?num_car=1836&lang=es

³⁸ Gregorio SALDARRIAGA (2011), pp. 257-283.

³⁹ Zvetan TODOROV (1982), pp. 27-28.

⁴⁰ Stephen GREENBLATT (1991); Peter MASON (1990); Patricia SEED (2001).

⁴¹ Alfredo CASTILLERO CALVO (2006), p. 29.

se asimiló con el cacique que tenía mayor control sobre ese territorio. Panamá recibió su nombre por un malentendido con el significado de la región –tierra abundante de pescado– a la que aspiraba Vasco Núñez de Balboa pero que, en todo caso, respetaba la lengua y presencia previa indígena. Santa María del Antigua del Darién fusionó el nombre castellano relativo a un culto mariano con una referencia geográfica indígena. Con esta elección se incorporaban, en una forma de sincretismo, referentes culturales mixtos con los que dotar a la población castellana de una continuidad y de una cierta legitimidad a través de su antigüedad sobre el territorio.

El nombre de otra de las poblaciones que no sobrevivieron a los primeros años tras su creación explica también en el plano simbólico esa falta de interés por la adaptación a través de la cual se aseguraba la permanencia. Fonseca Dávila, cuyo nombre aspiraba a ser un homenaje combinado al obispo de Burgos y al primer gobernador, tuvo dos vidas. La primera de ellas corrió la misma suerte que el mencionado puerto de Santa Cruz, pues desapareció pocos meses después de fundarse en la ribera del río de los Ánades, a pesar de los intentos por conseguir que se «promoviera y ennobleciera»⁴². Su desaparición, narraba Las Casas, provocó una gran aflicción en Pedrarias Dávila, quien consideraba que «era imposible allí perseverar por no haber comida y por otras incomodidades»⁴³. La razón de su desaparición fue el rechazo de los indígenas, provocado por el maltrato que los castellanos les hicieron y, además, la falta de voluntad de generación de una estructura política de los propios castellanos.

La segunda vida de Fonseca Dávila fue en la otra costa del istmo. Se fundó en el otoño de 1523 y en diciembre de ese mismo año unos procuradores de la villa ya habían solicitado y conseguido privilegios y mercedes en forma de ventajas fiscales; el 20 de febrero del año siguiente se eligió y nombró el primer regimiento de la villa, compuesto por ocho miembros, siguiendo el ejemplo de Panamá y las villas de la Española y, ese mismo día, se reforzaron los privilegios y se dotó a la población de límites, como era habitual⁴⁴. A pesar de todo este desarrollo institucional temprano, la villa no sobrevivió más que unos pocos meses, pues pronto fue atacada por los indios bajo el mando del cacique de Cheriquí debido al

⁴² El Rey a Pedrarias Dávila, Fray Juan de Quevedo y otros oficiales de Castilla del Oro, 2 de agosto de 1515, AGI, Panamá, 233, L.1, f. 186v-189.

⁴³ LAS CASAS, lib. III, cap. 63.

⁴⁴ Franquezas a los pobladores de Fonseca, 27 de diciembre de 1523, AGI, Panamá, 233, L. 1, ff. 342-346 y 352.

maltrato que los castellanos ejercían sobre ellos⁴⁵. Esos indígenas habrían matado a muchos cristianos provocando el despoblamiento definitivo de Fonseca Dávila. La falta de continuidad de esas fundaciones se debió a que, a pesar de que se asentaron estructuras e instituciones de poder de tipo castellano, éste no se consolidó a través de estrategias de legitimación de la autoridad –simbolizadas en este caso en el nombre adoptado– que eran las que, en definitiva, permitirían el desarrollo de ese poder y la posible permanencia de las poblaciones a largo plazo.

Los lugares en los que los castellanos aspiraban a instalarse no estaban, por lo tanto, vacíos de antemano. Con anterioridad a la presencia de estos europeos existían tanto estructuras poblacionales como jurídicas. Se podría reconsiderar ampliar, por tanto, el propio concepto de fundación, pues lo que se produjo fue una adaptación de los espacios y las categorías para redefinirlos. En un pleito iniciado en 1552 por la ciudad de Natá contra el gobernador Sancho de Clavijo por la defensa de sus privilegios, se incluyó un interrogatorio en el que se inquiría a los testigos sobre los propios orígenes de la población. En la primera pregunta se incluía la referencia al inicio de la ocupación y la pregunta se formuló en unos términos muy elocuentes. No se hablaba en concreto de fundación sino de «conquista» y «descubrimiento» de la población, antes de su «poblamiento».

A pesar de que en 1522 se levantó el acta que dotaba a Natá de una personalidad jurídica y creaba el cabildo y la identidad institucional de raíz castellana, los miembros de la comunidad política eran conscientes de la existencia anterior de una población y, de hecho, ni siquiera cambiaron o adaptaron su nombre, sino que simplemente mantuvieron el original indígena. El interrogatorio continuaba con la referencia a que en esa población vivía gran número de indígenas, que fueron repartidos, pero se advierte que lo que se produjo fue básicamente un cambio de élite gobernativa, pues el trabajo que debían hacer era «el que ellos solían tener quando estaban sujetos a los caciques a quien solían servir»⁴⁶. La fundación no se interpretaba, pues, como un arrasamiento de las estructuras sociales y políticas anteriores, sino como una adaptación de lo que ya existía. La población indígena debería seguir formando parte del tejido social en la misma manera en lo que lo habían hecho antes y las estructuras de población y relaciones deberían seguir funcionando independientemente de que ahora hubiesen pasado a ser vasallos del rey de Castilla.

⁴⁵ Testimonio de Hernando de Luque, maestrescuela, 13 de febrero de 1527, AGI, Justicia, 359, N. 2, R. 2, f. 30; «se alçaron los yndios e caciques de Cheniqui e se acogieron a la syerra e se despoblo el pueblo de Cheriqui que se llamava Fonseca e a venido mucho daño».

⁴⁶ Con el concejo..., AGI, Justicia 1049, N. 4, R. 3.

Se podría decir que, a través de los procesos de ocupación del espacio – tradicionalmente llamados fundaciones- lo que se produjo fue un proceso de mestizaje de las poblaciones, que mantuvieron parcialmente su nombre y sus estructuras sociales, aunque ahora formasen parte de otra estructura política. El asentamiento en ciudades, comienzo de la ocupación del espacio, seguirá en el largo plazo este proceso y no existiría una división estricta entre ciudades de españoles y pueblos de indios, que no se intentaría implementar hasta después de las Leyes Nuevas, sino que en el propio origen de las poblaciones se puede encontrar una mezcla de tradiciones y estructuras políticas y sociales⁴⁷. Para llegar a la «ciudad criolla» en la que convivían individuos de diversas culturas y orígenes, se tuvo que pasar primero por la *ciudad híbrida* con la que todo había comenzado⁴⁸. Las fundaciones urbanas de Castilla del Oro fueron fruto de una adaptación de los referentes políticos y jurídicos europeos –tanto en las normas como en las prácticas- y de las estructuras sociales y aún simbólicas de los indígenas, que dieron lugar a un nuevo modelo de ciudad cuyo *éxito* dependería de un equilibrio muy inestable entre todos estos referentes⁴⁹.

La elección del lugar y la adaptación de su nombre era el primer paso del proceso para la creación del espacio político. A continuación, la supervivencia de esa ocupación debía ser asegurada a través de mecanismos de legitimación que requirieron otro esfuerzo por ampliar en la práctica los límites de las instrucciones y los presupuestos normativos. La ausencia de esos mecanismos de legitimación, ya fuera la mencionada adaptación del nombre o esfuerzos de acercamiento pacífico a los pueblos indígenas, están en la base de algunos de los fracasos en el establecimiento. Sin embargo, la adaptación a las circunstancias y la flexibilidad de las prácticas permitió que algunas de los primeros intentos de los castellanos de asentar poblaciones en Castilla del Oro sí que tuvieron una segunda oportunidad.

2. *La construcción de la legitimidad.*

Una vez definidos los lugares en los que se podía asentar una población y elegido su nombre, el siguiente paso consistía en tratar de garantizar su supervivencia a través de la legitimación desde el punto de vista logístico y político. Las vías de legitimación no se ciñeron en exclusiva a los recursos tradicionalmente valorados por la historiografía como la «toma de

⁴⁷ Francisco SOLANO, F (1990).

⁴⁸ Sobre el concepto de «ciudad criolla», asociado tradicionalmente al siglo XVII, ver José Luis ROMERO (1976), cap. 4; recientemente retomado y puesto al día en Manuel LUCENA GIRALDO (2014).

⁴⁹ Sobre la capacidad de los castellanos para adaptarse a las circunstancias preexistentes para transformarlas, John H. ELLIOTT (2006), pp. 63-64.

posesión simbólica» o la lectura del «requerimiento»⁵⁰. La cuestión de la legitimidad no quedó resuelta de manera automática con la concesión de las bulas alejandrinas de 1493-1494 ni con la redacción del Tratado de Tordesillas. Los debates sobre la justicia de la conquista de la primera década del siglo XVI (1505 y 1508) o la Junta de Burgos de 1512 tampoco ofrecieron una fórmula infalible para garantizar la permanencia de la ocupación⁵¹. Sobre el terreno, la legitimación del establecimiento de las poblaciones se fraguó a través de prácticas políticas que implicaban la negociación con agentes diversos y la puesta en marcha de diversas estrategias adaptadas a las circunstancias de cada intento de fundación⁵². Este planteamiento aspira a ofrecer una visión menos estática de la ocupación y construcción del primer espacio político en el Nuevo Mundo, más práctica y que contaba con la participación de diversos agentes, ya fueran castellanos o indígenas⁵³.

Las normas e instrucciones eran interpretadas y adaptadas, de manera que la legalidad –e incluso la propia legitimidad– de las acciones se flexibilizaba y contribuía a definir nuevas realidades políticas. El ensanchamiento de la capacidad para ejercer el poder que las fundaciones urbanas buscaba garantizar se produjo a través de variadas fórmulas. Por un lado, la creación de los cabildos sostuvo el peso político castellano sobre el terreno, pues estos fueron los referentes a la hora de negociar con los diversos cacicazgos la legitimidad de los asentamientos. A su vez, el ejercicio de la justicia –entre españoles y entre indios– por parte de los castellanos fue otra de las primeras vías de acercamiento e incorporación intercultural⁵⁴. No conviene desdeñar tampoco el peso de la apropiación simbólica –a través de la mencionada adaptación de los nombres de las poblaciones– para lo cual se hacía estrictamente necesario un manejo adecuado de las diversas vías de información. Las cinco fundaciones de Castilla del Oro ofrecen distintos ángulos para comprender este análisis en el que se tendrán en cuenta los procesos para garantizar su viabilidad a largo plazo y las negociaciones entre todos los ámbitos implicados⁵⁵.

Las actuaciones encaminadas a la legitimación operaban a distintos niveles pues, en ocasiones, los castellanos debían solucionar sus propios conflictos de autoridad y de jurisdicción a través del establecimiento de poblaciones, para lo cual debían asegurar su

⁵⁰ Patricia SEED (1992), pp. 183-209; Henry WAGNER (1938), 297-326; Francisco MORALES PADRÓN (1955), pp. 321-380.

⁵¹ Magdalena RODRÍGUEZ GIL (2002).

⁵² Lauren BENTON y Benjamin STRAUTMANN (2010), pp. 1-30.

⁵³ Brian OWENSBY (2010), pp. xi-xv; Antje FLÜCHTER (2012), pp. 1-27; Jovita BABER (2005).

⁵⁴ Karen GRAUBART (2015), pp. 195-228; Yanna YANNAKAKIS y Martina SCHRADER-KNIFFKI (2016), pp. 517-548.

⁵⁵ Jorge DÍAZ CEBALLOS (2018a)

presencia en el territorio en relación con los indígenas. En todos los casos, se pusieron en marcha procesos más o menos largos y complejos, en los que las prácticas políticas vinieron a sustituir a las normas previas y, en su caso, generaron una nueva legalidad emanada de aquellas. Resulta, por lo tanto, fundamental para comprender la forma en la que se construyó el espacio político explicar y descodificar las prácticas que antecedieron –o convivieron– a la legalidad y permitieron redefinir dichos espacios y configurar una nueva lógica de actuación política en Castilla del Oro.

La supervivencia sobre el territorio de Santa María del Antigua del Darién se basó, en primer lugar, en el consenso establecido entre los castellanos a través de la creación de una comunidad política urbana y de la incorporación a la misma, en un grado u otro, de los indígenas que habitaban la región. La creación de la nueva población y la gestión de su legitimidad está unida, a su vez, a la propia gestión de la legitimidad de las acciones de Vasco Núñez de Balboa. Tras el desembarco auspiciado por el extremeño en las costas del Darién, Balboa se había convertido en el líder *de facto* de la expedición, a pesar de que era el bachiller Enciso quien tenía oficialmente el mando.

Fue el propio Balboa quien asentó el cabildo y nombró a los regidores: Juan de Valdivia, Martín de Zamudio y Diego de Albítez. Este regimiento recién constituido, ya con autoridad para elegir los cargos ejecutivos, nombró a los alcaldes mayores: Benito Palazuelos y el propio Balboa. De esta manera, Vasco Núñez de Balboa se sometía formalmente a la autoridad del cabildo, que pasaba a ser el único órgano capaz de tomar decisiones en ese terreno, sustituyendo la autoridad emanada de las capitulaciones y dando arranque a una nueva legalidad cuya autoridad principal era el cabildo. La precariedad de ese poder establecido con el cabildo obligaba necesariamente a ampliar los márgenes de legitimidad, lo cual debía llevarse a cabo a través de la acción política. Era necesario un consenso de radio mayor entre los miembros de la comunidad urbana recién creada y, correlativamente, un argumento de peso que ofrecer a la Corona para justificar la supuesta *desobediencia* a las capitulaciones de la Corona con Ojeda y Nicuesa. Ambos escenarios se iban a presentar en un corto plazo de tiempo.

El consenso interno de la comunidad se iba a fraguar a través del recurso a un pacto, una de las fórmulas tradicionales de apuntalamiento del poder en los siglos de la temprana Edad Moderna, que sería la puesta de largo de la capacidad del cabildo para actuar y dirimir

los conflictos⁵⁶. Un grupo de los recién creados vecinos de la recién fundada villa dudaba aún sobre la legitimidad del gobierno de Balboa y, en consecuencia, «divididos en facciones, no regresando su capitán Ojeda [...] disputaban entre sí sobre llamar o no en su lugar a Nicuesa»⁵⁷. A la llegada de Rodrigo de Colmenares, finalmente, le convencieron para que fuese en busca del supuesto legítimo gobernador del territorio, Nicuesa, quien aún se encontraba construyendo la fortaleza de Nombre de Dios. El panorama que Colmenares encontró a su llegada a Nombre de Dios, con la expedición muy mermada y abatida, permite adivinar que no le costaría mucho trabajo convencer a Nicuesa para que se uniese a su expedición junto a cincuenta hombres para volver a Santa María del Antigua del Darién⁵⁸.

Antes de la llegada de Nicuesa a Santa María, Balboa había reunido al pueblo en la iglesia de San Sebastián, donde pusieron una manta al pie del altar y un tapete en la tierra con una almohada sobre la que situaron la cruz, igual que durante la Semana Santa y, allí mismo, en la iglesia, «juraron solemnemente, sobre aquella cruz, que no recibirían a Diego de Nicuesa por gobernador»⁵⁹. Los motivos oficiales que movieron a Balboa a promover tan drástica medida eran las acusaciones que desde Nombre de Dios iban llegando sobre las supuestas prácticas tiránicas de Diego de Nicuesa. El veedor Quicedo se lamentaba por «cómo habían osado incurrir en tan grave error como era, siendo libres, quererse someter a la gobernación de Nicuesa, que era un tirano; el cual era el peor hombre del mundo y más cruel y que peor trata a los que consigo trae»⁶⁰.

Quicedo había llegado a Santa María antes desde Nombre de Dios, donde supuestamente había sido agraviado por Nicuesa, con quien tenía conflictos personales e informó a Balboa de que Nicuesa tenía planes de imponer a sus propios oficiales para el concejo, quitando a los que estaban. A su vez, informó al segundo alcalde mayor, Zamudio, de que Nicuesa había hecho preso a Lope de Olano, de quien aquel era pariente. De esta manera, Quicedo convenció a los miembros más influyentes de la comunidad del Darién de que Nicuesa era, efectivamente, un tirano, añadiendo, además, que aspiraba a quedarse con todo el oro disponible⁶¹. Como el propio Quicedo advertía, la formación del cabildo había

⁵⁶ Sobre el origen de las comunidades políticas como alianzas juramentadas contra un poder superior para defender una cierta independencia ver Otto BRUNNER (1991), p. 70; Gutiérrez Nieto otorga una gran importancia al juramento a la hora de trazar los orígenes de la autonomía de la comunidad política Juan Ignacio GUTIÉRREZ NIETO (1977), pp. 319-367. Sobre todo lo anterior, Susan REYNOLDS (1997), p. 174 y ss. y Paolo PRODI (1992), p. 161; Antonio CARRASCO MANCHADO (2011), pp. 613-652.

⁵⁷ Pedro MÁRTIR, dec. 2, cap. 2.

⁵⁸ Memorial de Rodrigo de Colmenares al rey, AGI, Patronato, 26, R. 9, f. 2r.

⁵⁹ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 28, cap. 3.

⁶⁰ Bartolomé de LAS CASAS, lib. 2, cap. 67.

⁶¹ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 28 cap. 3.

hecho a los vecinos *libres*, pero las dudas sobre la legitimidad de su propia decisión les habrían hecho buscar un sustituto para el gobernador ausente.

El pacto tuvo éxito y a su llegada a Santa María del Antigua del Darién, Nicuesa fue «recibido como hombre extranjero»⁶². Antes de esta recepción, Balboa había llamado al escribano «secretamente la misma noche, hizo una protestación y pidióle testimonio como él no era en lo que contra Nicuesa se hacía, antes estaba presto y aparejado para obedecelle y hacer lo que le mandase como gobernador del rey»⁶³. Esta maniobra, con la que Balboa buscaba demostrar que era la colectividad la que tomaba las decisiones de manera corporativa y no él de forma individual, insistía de nuevo en la responsabilidad de la comunidad por la decisión tomada. Nicuesa llegó a Santa María, pues y, según relató Colmenares años más tarde, «así como llegó el dicho Diego de Nicuesa al puerto, subió [Balboa] a él con toda la gente armada, y al final lo obieron de prender y lo echaron en un bergantín que no tenía aparejos»⁶⁴. Los hombres que habían quedado en Nombre de Dios pronto acudieron también al Darién para «meterse so la jurisdicción de los otros»⁶⁵.

Según Fernández de Oviedo, la expulsión de Nicuesa no fue tan sencilla: efectivamente incluye la escena de toda la comunidad recibiendo en armas a Nicuesa, pero su expulsión de la villa no habría sido tan rápida e incorporó un debate sobre la disputa jurisdiccional que se estaba operando. Vasco Núñez habría ofrecido a Nicuesa la posibilidad de «tomar tiento a las voluntades del pueblo» y convencer a la comunidad de que le aceptaran permitiendo la presencia en la votación exclusivamente de los que estuvieran a favor. Con esta corruptela se aseguraría el éxito en la votación y Nicuesa, en consecuencia, le quedaría agradecido. Sin embargo, narra el cronista, Balboa «lo hizo al contrario, porque a los que no querían que entrase, los dejó libres andar por el pueblo, e a los otros todos que decían que le querían por gobernador, los detuvo [...] y mandó pregonar que ninguno saliese de su casa, so pena de muerte e perdimiento de bienes»⁶⁶.

Nicuesa, por su parte, reclamaba su autoridad en virtud de que «aquella tierra donde estaban entraba en los límites de su gobernación, y que ninguno podía en ella poblar ni estar sin su licencia, y el que allí estuviese era su súbdito y sujeto a su jurisdicción, porque él era

⁶² Pascual de ANDAGOYA (1986), p. 84; sobre la complejidad de la categoría de extranjero, como una «condición de incertidumbre» en la sociedad del Antiguo Régimen, Simona CERUTTI (2012), pp. 9-30.

⁶³ Bartolomé LAS CASAS, lib. 2, cap. 67.

⁶⁴ Memorial... doc. cit., 1516, AGI, Patronato, 26, R. 9, f. 2v.

⁶⁵ Pascual de ANDAGOYA (1986), p. 84.

⁶⁶ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 28, cap. 3.

en todo aquello gobernador por el rey»⁶⁷. Sin embargo, Balboa había conseguido articular una autoridad, a través de la creación del cabildo, que podía ser considerada tan potente como la de las propias capitulaciones con el monarca y él «no quería obedecer a ninguno que no tuviera su poder del mismo rey con diploma propio»⁶⁸. No se trataba, por lo tanto, de un «golpe de estado», como destacó Alfredo Castillero hace años, sino de una construcción dual de la lealtad política⁶⁹. La autoridad de Balboa provenía del acuerdo con la comunidad que le sustentaba si bien, al mismo tiempo, se reclamaba la lealtad al monarca como señor natural para garantizar la legitimidad de su actuación⁷⁰. La auto constitución de la comunidad política de Santa María del Antigua del Darién garantizaba al propio Balboa una base de legitimación que debía verse reforzada por el acatamiento y confirmación real.

El peso de la comunidad, ya fuera más o menos manipulada por Balboa, quien, según Pedro Mártir de Anglería «excitaba al pueblo para promover un tumulto» si no se cumplía con su deseo, fue decisivo a la hora de definir las jurisdicciones personales⁷¹. Nicuesa acató formalmente la voluntad popular, pues «que estáis aquí *todos*, como me enviasteis a llamar e vine a vuestra petición, y me tornáis a decir que me torne, y luego me volveré»⁷². Y, así, a comienzos de marzo de 1511, Nicuesa salió de Santa María y nunca más se volvió a saber de él. La estrategia de Balboa habría sido un éxito, pues se había constituido un cabildo lo suficientemente potente como para decidir sobre su propio gobierno y asumir nuevos vecinos que llegaban desde Nombre de Dios, a meterse «so su jurisdicción».

La comunidad de Santa María del Antigua del Darién quedaría finalmente definida como tal con otro episodio político cargado de simbolismo, pues el pacto interno que apuntalase definitivamente la cohesión de Santa María del Darién iba a tener un episodio añadido que tomó la forma de otra recepción. En junio de 1514 se anunciaba la llegada de la flota comandada por Pedrarias Dávila, que arribaba como gobernador en nombre de la Corona para tomar el control de la gobernación ya llamada Castilla del Oro⁷³. Los vecinos de Santa María del Antigua, como ante la llegada de Diego de Nicuesa, se reunieron para dirimir si debían también resistirse ante la aparición de Pedrarias y no recibirle. Las noticias sobre la

⁶⁷ Bartolomé de LAS CASAS, lib. 2, cap. 47.

⁶⁸ Pedro MÁRTIR, dec. 2, cap. 3.

⁶⁹ Alfredo CASTILLERO (2006), p. 711. Los conceptos de lealtad y obediencia, cuya complejidad en diversos contextos urbanos del Nuevo Mundo se analizará más adelante en este mismo trabajo, han sido recientemente definidos y analizados por Rafael VALLADARES (2015), pp. 21-38; Ruth MACKAY (2007), p. 11 y ss.

⁷⁰ Sobre la tensión entre la creación de espacios políticos entre el rey y las comunidades políticas urbanas, ver Vincent CHALLET (2009), pp. 205-218.

⁷¹ Pedro MÁRTIR, dec. 2, cap. 3.

⁷² Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 28, cap. 3.

⁷³ Demetrio RAMOS (1980), pp. 45-67.

armada habían generado mucho bullicio en la villa «y pláticas en corrillos entre todos ellos». En esos debates informales trataron sobre «cómo sería mejor recibille: o saliendo con armas como cuando andaban armados por los indios o *como pueblo* sin ellas», sobre lo que hubo divergencia de opiniones hasta que finalmente «Vasco Núñez siguió el más seguro y que menos podía causar sospecha; y así lo salieron a recibir todos sin armas y como estaban en sus casas, media legua»⁷⁴.

En la otra parte, Pedrarias no confiaba tampoco del todo en las intenciones conciliadoras de Balboa así que mantuvo a sus hombres en guardia; así «llegados adonde Pedrarias venía con su mujer doña Isabel de Bobadilla de la mano, Vasco Núñez y su compañía les hicieron gran reverencia, y Vasco Núñez, con buenas palabras, se ofreció en *nombre suyo y de todos*, como gobernador del rey, a obedecerle siempre y servirle»⁷⁵. Pedro Mártir de Anglería añade a esta recepción aún mayor solemnidad: «el *pueblo* darienense, con su prefecto Núñez de Balboa al frente [...] salió a recibirlos a distancia de tres millas, cantando el *Te Deum laudamus*»⁷⁶. Oviedo incidió en destacar la solemnidad del hecho al comentar que todos los de la armada iban «muy bien aderezados e armados, e el obispo e oficiales y capitanes, y en muy buena orden todos, que era cosa que en todas partes parecía bien»⁷⁷. Así, la comunidad de Santa María del Antigua del Darién –al tiempo que afianzaba su auto constitución- se ponía de esta manera simbólicamente al servicio del nuevo gobernador y, por tanto, de la Corona, al elegir primero recibirle sin armas y, después, con las reverencias y las palabras del propio alcalde mayor en representación de todos. El abandono de las armas simbolizó, definitivamente, el fin del tránsito de «soldados» a «vecinos» e hizo efectivo y tangible el acto de «brujería jurídica» que se iniciara con la formación del cabildo, al tiempo

⁷⁴ Bartolomé de LAS CASAS, lib. 3, cap. 60. Mi cursiva.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Pedro MÁRTIR, dec. 3, cap. 6. Mi cursiva. No es de extrañar que tanto Las Casas como Pedro Mártir nombrasen «pueblo» a la comunidad reunida en tan solemne episodio ya que, según Julio Pardos, comunidad, república y pueblo son términos intercambiables para la tratadística de la época, si bien este último «tendió a generalizarse para la identificación del sujeto político corporativo bajo la directa dependencia señorial, incluida la monarquía», en Pablo Fernández ALBALADEJO y Julio PARDOS (1988), pp. 113-208, p. 143. Sobre la variedad terminológica para referirse a las agrupaciones políticas, sociales o religiosas con tendencia comunitaria ver Jose Ignacio GUTIÉRREZ NIETO (1977), y en concreto sobre la relación entre los términos «comunidad» y «pueblo», en pp. 329-331. Sobre el origen y significado del término comunidad frente al poder del regimiento a comienzos del siglo XV Adeline RUCQUOI (1985), pp. 745-772, esp. pp. 767-768, quien rechaza el plantamiento sobre la comunidad juramentada propuesta por Gutiérrez Nieto. Susan REYNOLDS (1997), p. 182 propone que el término comunidad podía significar, según el contexto, «the whole community of government and people together, or just the government, or just the community of people whom the government governed». Sobre el mismo tema, haciendo hincapié en el balance entre los poderes de la Corona, el patriciado y la comunidad Julio PARDOS (1985), pp. 545-580.

⁷⁷ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 29, cap. 8.

que lograba el efecto de reforzar la unidad de la propia comunidad como un cuerpo cohesionado⁷⁸.

Entre una y otra *recepción* había tenido lugar otra acción colectiva llevada a cabo por la comunidad de Santa María del Antigua y que serviría para justificar ante la Corona el desacato de las capitulaciones ejemplificado en el rechazo de Nicuesa: el descubrimiento de la Mar del Sur. La acción, tradicionalmente imputada a Balboa en exclusiva, contó necesariamente con el respaldo de los miembros de la comunidad –cuyos nombres aparecían en el acta de la toma de posesión del Mar al que tuvo acceso Fernández de Oviedo- y que, además, dependió de la información y el acuerdo de los indígenas. El extremeño había sido nombrado «capitán y gobernador» del Darién en diciembre de 1511, aunque de manera interina «*entretanto* que mandamos proveer de gobernador e justicia»⁷⁹. Este nombramiento había sido el fruto de la expedición informativa que Zamudio y Valdivia habían emprendido hacia La Española y en la que se proponían, como procuradores del cabildo de Santa María, contar los progresos en la pacificación de los indígenas y en la aplicación de la justicia que se estaba llevando a cabo en la recién fundada villa⁸⁰.

Cuando Balboa conoció la noticia de su nombramiento –que llegaría al istmo hacia finales de la primavera de 1512- «fue inestimable su gozo y placer», pues contaba ya con autoridad del rey porque hasta entonces, según Las Casas, «por fuerza y por mañas tenía la superioridad de los españoles usurpada»⁸¹. En virtud de ese cargo, que le confería un margen *oficial* de maniobra, comenzó a recopilar información de su entorno y a planear una expedición a la otra costa del istmo. El 20 de enero de 1513, Balboa escribía su famosa carta al rey en la que describía cuáles habían sido sus descubrimientos hasta el momento y cuál había de ser la estrategia a seguir a tenor de la información que manejaba conseguida gracias a sus contactos con los indígenas «dando a unos tormento y á otros por amor y dando a otros cosas de Castilla».

La carta de peticiones de Balboa enfatizaba en la apelación a la comunidad como solicitadora de la ayuda, reforzando la relación directa de la comunidad política local con la

⁷⁸ Sobre la expresión «brujería jurídica» para referirse al tránsito que se produciría con la fundación y en el que los individuos pasarían de soldados a vecinos, ver Manuel LUCENA GIRALDO (2005), p. 35.

⁷⁹ Nombramiento de Vasco Núñez de Balboa, 23 de diciembre de 1511, AGI, Indiferente 418, L. 3, f. 203vº. Impreso en Bethany ARAM (2008), p. 331.

⁸⁰ Según la información enviada por el juez de residencia de La Española años más tarde, Balboa «había trabajado con muy buena manera de hacer las paces a muchos caciques é señores principales de los indios», y lo había hecho comerciando con ellos y ofreciendo su ayuda en las guerras internas, lo que justificaría este nombramiento, Al muy ilustre señor Xevres el licenciado Zuazo, 22 de enero de 1518, en CODOIN, t. I, p. 304 y ss.

⁸¹ Bartolomé de LAS CASAS, lib. 3, cap. 46.

Corona: «agora los vecinos de esta Villa envían a suplicar a vuestra muy R.A. les faga ciertas mercedes, lo cual conviene que la mayor parte les conceda V.A., porque comple a su servicio»⁸². Consciente de la precariedad de su situación, así como de los rumores de que una gran armada se estaba ya comenzando a preparar para ir a sustituirle, Balboa emprendió una expedición muy arriesgada –prácticamente una «huida hacia delante»- con cuyo éxito pudiese justificar su actuación anterior ya que, si bien en un principio la creación del cabildo le había granjeado conseguir la gobernación de la región, las acusaciones de Enciso en la corte estaban siendo desfavorables a sus intereses. Un hecho como tomar posesión de un nuevo mar, cumplir con un objetivo de la Corona y, además, conseguir riquezas sin cuento actuaría como acta de reconciliación⁸³.

La toma de posesión de la Mar del Sur fue un ritual simbólico cargado de contenido corporativo y cuya intención última era, como hemos visto, justificar *a posteriori* los actos dudosos de la comunidad y en concreto de Balboa. La ceremonia, que se hizo en nombre y a favor de los reyes, fue llevada a cabo por la comunidad política de Santa María del Darién. El levantamiento del acta correspondiente corrió a cargo de Andrés de Valderrábano, quien se lo mostró días más tarde a Fernández de Oviedo, que lo transcribió casi literalmente en su obra⁸⁴. El acta dejó memoria de lo ocurrido y la propia puesta en escena tenía un valor jurídico para contribuir a la generación de derechos de posesión por parte de los castellanos. El peso de la comunidad política de Santa María en este caso quedó claro, tanto en la solicitud de refuerzos firmada por Balboa en la carta al rey de enero, como en la presencia sobre el terreno de unos cuantos de los miembros del cabildo.

En una de las viñetas que decoran la portada de la Decada II de la *Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra Firme del Mar Océano* de Antonio de Herrera se observa dentro de un círculo la imagen estilizada de Balboa rodeada por la leyenda «Basco Núñez de Xerez de Badajoz, que descubrió la Mar del Sur». Esa recreación de principios del siglo XVII, realizada por el cronista real y que jugó un papel decisivo en la mitificación de Balboa frente a Pedrarias, se pone el foco sobre la figura individual del extremeño. Junto a este retrato, en un dibujo un grupo abigarrado de soldados casi anónimos, armados con espadas y ballestas, acompaña a un hombre que, espada en mano, anda con el agua cubriendo sus piernas. Dos indígenas acompañan al grupo de los castellanos con actitud pacífica y como

⁸² Carta dirigida al Rey por Vasco Núñez de Balboa desde Santa María del Darién, 20 de enero de 1513, CODIN, t. 39, p. 254

⁸³ Una interpretación sobre las motivaciones de Balboa para emprender el viaje a través del istmo en Bethany ARAM (2008), pp. 54-55.

⁸⁴ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 29, cap. 3.

miembros asistentes de la expedición. Junto a la escena, una leyenda informa de que «Basco Núñez toma posesión de la mar del Sur». Lo que esa imagen no cuenta es que segundos después el resto de la expedición —o, al menos, sus 26 miembros más dispuestos— también se sumergieron en el agua y la golpearon con sus espadas. Después, también grabaron sus nombres en los árboles y rocas cercanas, en símbolo de toma de posesión. Unas horas antes, narraba Oviedo, siguiendo el acta al que había tenido acceso, Balboa había avistado la mar y «volviose incontinente la cara hacia *la gente*» que iba con él⁸⁵.

(ILUSTRACIÓN 2)

Ilustración 1. Detalle de la portada de la *Década* de Antonio Herrera que muestra la toma de posesión de la Mar del Sur⁸⁶.

Aquellos que acompañaron a Balboa en ese viaje a través del istmo no lo hicieron sólo como testigos necesarios para que el acto jurídico tuviera efecto, sino que ellos mismos fueron participantes y protagonistas necesarios de ese acto. La toma de posesión de la Mar del Sur no fue, por lo tanto, un acto individual como cabría pensar por la viñeta del libro de Herrera y por la narración de Oviedo, sino un hecho colectivo y articulado acorde con la tendencia corporativa que amparaba a la conquista. El descubrimiento y la toma de posesión de la Mar del Sur servirían a Balboa para recuperar el crédito en la corte, pues pronto fue nombrado adelantado de la Mar del Sur. La justificación de su «rebelión», que ansiaba con su «huida hacia delante» fue, por lo tanto, exitosa y consiguió el reconocimiento de su propia fundación como un puntal de la ocupación de la Tierra Firme.

El 19 de agosto de 1514, cuando la expedición de Pedrarias Dávila acababa de alcanzar su destino en Castilla del Oro, las noticias del descubrimiento de la Mar del Sur ya habían alterado considerablemente el panorama en la zona y, además, alcanzado la corte. En marzo de ese mismo año se despachó una cédula real para Pedrarias, flamante gobernador de Castilla del Oro, que vería alteradas las instrucciones iniciales respecto al tratamiento con que debía dispensar a Balboa. A partir de la recepción de ese documento se paralizaban las sucesivas órdenes emitidas desde agosto de 1513 para que Pedrarias hiciera justicia «a los agraviados por Balboa»⁸⁷ e iniciara el juicio de residencia al propio Vasco Núñez⁸⁸. Entre la

⁸⁵ La mejor descripción de todo el ritual en Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 29, cap. 3.

⁸⁶ Antonio de HERRERA Y TORDESILLAS (1601), detalle de la portada.

⁸⁷ Real cédula a Pedrarias Dávila para que haga justicia a Rodrigo Colmenares, 9 de agosto de 1513, Angel ALTOLAGUIRRE (1944), pp. 46-47.

⁸⁸ Real Provisión a Pedrarias Dávila, capitán general y gobernador de Tierra Firme, o su lugarteniente para que tomen residencia a Vasco Núñez de Balboa, 28 de julio de 1513, AGI, Panamá, 233, L.1, f. 52 y ss.

emisión y la recepción de las cédulas en Castilla del Oro, el gobernador Pedrarias no puso en marcha las acciones contra Balboa, sino que calibró las nuevas circunstancias antes de actuar.

A partir de la redacción de esas cédulas, después de que «vinieron unas letras de Vasco Nuñez de Balboa», Pedrarias debería continuar con los descubrimientos hechos por el alcalde mayor de Santa María y «que le trateis muy bien y favorezcais» consultándole como experto «por la mucha experiencia que dello alla tiene»⁸⁹. Junto a esta carta, el mismo día se acusaba recibo de las misivas enviadas por Balboa en marzo de ese mismo 1514 y se le aseguraba que pronto se le harían mercedes. La Corona reconocía, a su vez, en la misma fecha, la labor de la comunidad y despachaba una cédula dirigida a los «alcaldes, regidores y omes buenos de la villa de Santa María del Antigua del Darién» y, por tanto, promovía que a «los que aveys travajado con la obligacion y en lo del descubrir con Vasco Nuñez de Balboa seays remunerados e gratificados e reçibais por ello mercedes»⁹⁰.

Pocas semanas más tarde, el 23 de septiembre de 1514, se enviaba el nombramiento de Balboa como adelantado de la Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba. La estrategia puesta en marcha por Balboa y por la villa de Santa María del Darién hacia el descubrimiento de la Mar del Sur había, por lo tanto, dado el resultado esperado y había «legalizado» a un tiempo la existencia de la villa y la acción del cabildo. Esta serie de cédulas de agosto de 1514 suponían una aceptación y adaptación oficial de los planes preliminares; la práctica de los actores sobre el terreno y los hechos consumados había alterado la legalidad y definido un nuevo panorama. La villa de Santa María quedaba oficialmente validada a pesar de haber nacido fruto de un desacato a la oficialidad, pero quedaba sometida a su vez a una autoridad intermedia como la de Pedrarias, a expensas de que se fuesen creando otras comunidades.

A las acusaciones de usurpación de la legalidad emitidas por el bachiller Enciso, en las que apelaba exclusivamente a la fuerza legal de las capitulaciones y de los nombramientos oficiales emanados de la corte, Balboa había contrapuesto las acciones de la comunidad política de Santa María con el fin de ensanchar la legalidad vigente y, además, había ofrecido los resultados, tanto en forma de riquezas materiales como, especialmente, en los avances en el proceso de conversión de los indígenas, de esas acciones. Precisamente, la carta en la que la Corona anunciaba a Pedrarias los cambios en la consideración de Balboa estaba plagada de referencias a la labor de éste en la pacificación de los indígenas: «me parecido muy bien la manera que Vasco Núñez tubo en el tratar los caziques e yndios que hallo de fazerlos de

⁸⁹ El rey a Pedrarias Dávila, 19 de agosto de 1514, AGI, Panamá, 233, L. 1, f. 166bis

⁹⁰ *Ibid.*

pazes por ser como fue con tanta tenplanza y dulzura y dexar los caziques pacíficos que fue muy mejor esso que no fazerlo por riguridad ni fuerza»⁹¹. El propio Balboa en su carta de enero de 1513 apelaba a *su obra* para justificar sus acciones: «a las obras me remito y al fruto que cada uno de los que han pasado acá han dado»⁹². Finalmente, las actuaciones sobre el terreno habían tenido el refrendo de la legalidad, pero había sido el ejercicio directo del poder sobre el territorio el que había ampliado esa legitimidad. La legalidad había sido posible gracias al ejercicio de la autoridad que la creación de un cabildo había hecho posible, ampliando con ello la legitimidad de las acciones sobre el terreno de los actores a través de la colectividad que fueron sancionadas, a hechos consumados, por la autoridad de la Corona.

3. *“Desta colonia y primera república salieron los que fundaron las otras de aquella Monarquía”*

La legitimación de Santa María del Antigua del Darién, a través de la autoridad que los hechos consumados, en especial el descubrimiento del Pacífico, otorgaron a la comunidad, dio el pistoletazo de salida al asentamiento del resto de poblaciones de Castilla del Oro, cuya supervivencia dependió de la puesta en marcha de estrategias diversas. La elección del lugar y del nombre de los asentamientos resultó importante, pero no tanto como crear y apuntalar relaciones entre castellanos e indígenas que permitieran la permanencia en el territorio. Las fundaciones de Acla, Nombre de Dios, Panamá y Natá emanaron directamente de Santa María del Darién en un proceso de desgajamiento jurisdiccional que incluyó tanto a los propios habitantes como la legitimidad derivada de la formación del primer cabildo y la gestión y consecución de su relativa autonomía. Pedro Mexía de Ovando resumió este proceso de desgajamiento al advertir que, tras la fundación de Santo Domingo, “desta colonia y primera república salieron los cavalleros y ciudadanos que fundaron las otras de aquella Monarquía”⁹³. En palabras del hijo del bachiller Enciso, Rodrigo de Rebolledo, de la fundación de Santa María del Antigua del Darién «ha rredundado la poblaçion deste reyno»⁹⁴. Sin embargo, a pesar de que con la fundación del primer cabildo la legalidad podría

⁹¹ *Ibid.*, f. 167bis.

⁹² Carta dirigida al Rey por Vasco Nuñez de Balboa..., 20 de enero de 1513, CODOIN, t. 39, p. 253.

⁹³ La frase que da título a este apartado está tomada de la descripción del proceso de desgajamiento PEDRO MEXÍA DE OVANDO, *Libro o memorial práctico de las cosas memorables que los Reyes de España y el supremo consejo y real de Indias han proveído para el gobierno político del Nuevo Mundo*, 1639, BNE, MSS 3183, tit. I, f. 1v

⁹⁴ Rodrigo de Rebolledo, alguacil mayor de la provincia de Tierra Firme con el licenciado Pedro Vazquez, juez de residencia de la misma provincia sobre que contra su voluntad les quito a el e a sus tenientes las varas que por SM tenia, haciéndoles muchos agravios, AGI, Justicia, 341, N. 1, año 1540. Sobre el proceso de reparto jurisdiccional en la Castilla moderna como un proceso de fisión celular o de «división celular» ver Helen NADER (1990), p. 1 y 25 que, paradójicamente, agrandaría el poder al dividirlo, ver también Helen NADER (1996), pp. 215-223; Pedro Mexía de Ovando resumió el proceso de desgajamiento al advertir que, tras la fundación de

extenderse, cada una de las nuevas poblaciones debía llevar a cabo su propio proceso de apuntalamiento jurisdiccional que las permitiese mantenerse en el largo plazo. Ni siquiera la existencia de instrucciones con las que Pedrarias Dávila acudía como gobernador a Castilla del Oro y en las que se le encargaba *ex profeso* fundar poblaciones, eran suficiente argumento para que esas fundaciones no fueran cuestionadas tanto por los indígenas como, en cierto modo, por los castellanos habitantes de otras poblaciones.

La experiencia fallida del intento de fundación de Santa Cruz no sólo afectó, como se mencionaba más arriba, a la elección del lugar para la fundación de Acla, sino que también sirvió de ejemplo para cambiar la estrategia que permitiera la permanencia de esta. El caso de Santa Cruz había demostrado que no era posible establecer una población en ese territorio sin granjearse previamente un cierto grado de consentimiento por parte del cacique. En primer lugar, atentos a esa necesidad primordial de comunicación y entendimiento, así como la posibilidad de extender el ejercicio de la justicia que le correspondía en representación del rey de Castilla, en Acla el gobernador procuró resolver un conflicto entre el cacique Careta y uno de sus indios principales. Con este acto, Pedrarias se mostraría como una autoridad frente a los indígenas y, con el relato de estos hechos y el asentamiento, reforzaría su lealtad al monarca. Hizo, pues, llamar a un indio principal del cacique de Careta «que andava alçado y no quería obedecer al cacique» para intermediar en su reconciliación y mostrarse así como un ejecutor solvente de justicia.

Inmediatamente después, «en señal de quedar por verdaderos servidores y vasallos de V.A.» colocó en las manos del cacique de Careta el estandarte de los reyes de Castilla, «y el la tomó y alzó en nonbre de todos por verdaderos vasallos», tras lo cual organizó un banquete con abundante comida y vino para sellar ese inicio de amistad. Pedrarias recayó de su enfermedad, lo cual le impidió continuar con la expedición y tuvo que volver a Santa María, no sin antes afirmar que en Acla se podría fundar una población. El traspaso del poder dejaba libre el terreno de dudas legales y se podía comenzar a levantar la fortaleza que daría lugar a esa «gran ciudad» que aspiraba a fundar. El cacicazgo de Acla se había convertido, en virtud de ese traspaso de poder, en un territorio libre para la fundación de un núcleo urbano castellano a través del cual terminar de tomar posesión del territorio. Pedrarias Dávila y su expedición habían levantado una fortaleza, pero la población –la villa– debía ser *asentada* y

Santo Domingo, «desta colonia y primera república salieron los cavalleros y ciudadanos que fundaron las otras de aquella Monarquía», Pedro MEXÍA DE OVANDO (1639), BNE, MSS 3183, tit. I, f. 1v.

para eso envió a Balboa a «acabar e fenecer el pueblo de esta villa de Acla e la fortaleza que yo en él dejé comenzada»⁹⁵.

Durante la ausencia de Pedrarias, Balboa había comenzado a hacer una recluta para tomar posesión de su puesto como adelantado y gobernador de Panamá y Coiba, pero la vuelta de Pedrarias se lo impidió e incluso éste le apresó en su propia casa⁹⁶. La mediación del obispo Quevedo fue fundamental para lograr una concordia sellada por un compromiso matrimonial entre la hija de Pedrarias –que vivía en Castilla- y Balboa⁹⁷. Con la amistad temporalmente restaurada, Pedrarias encargó a Balboa que acudiese a Acla para consolidar la nueva población que la muerte de Lope de Olano –que había quedado allí en ausencia de Pedrarias- hacía peligrar⁹⁸. Núñez de Balboa navegó hacia el sur durante el otoño de 1516, junto a 80 hombres de Santa María del Antigua y, al llegar a Acla, encontró la fortaleza vacía porque los castellanos temían a los indios. Entonces, tomó la decisión de constituir «alcaldes y regidores, y púsolo nombre de la villa de Acla», tras esto «mandó Vasco Núñez a todos sus compañeros, *nuevos vecinos*, que, puesto que ya los indios de aquella provincia eran acabados, y no había ya que ir a saltear, que cada uno, con los esclavos que tenía, que no andaban sin muchos de ellos, y con sus mismas manos hiciesen sus sementeras para tener comida»⁹⁹. Entonces, ya sí, Acla había comenzado a existir jurídicamente y se podía dar por cumplido el proceso fundador, que habría de apuntalar el poder castellano en la zona¹⁰⁰.

La legitimación de la presencia de Nombre de Dios sobre el territorio dependió del peso que la comunidad pudiera ejercer en la zona como marcadora del territorio. Tras el primer intento fallido de Diego de Nicuesa en la fundación de Nombre de Dios, se envió una expedición desde Santa María del Antigua del Darién en marzo de 1518 bajo el mando de Diego de Albítez con el objetivo expreso de fundar dos poblaciones, una en la «parte del norte al golfo de San Blas y Nombre de Dios» y otra al sur del cacique Chepo. Estas fundaciones estaban destinadas a, por un lado, unir las dos costas del istmo y, por otra, tomar control de un territorio particularmente difícil¹⁰¹.

⁹⁵ Pablo ÁLVAREZ RUBIANO (1944), p. 111.

⁹⁶ Relación de la carta de Basco Nuñez, 15 de octubre de 1515, AGI, Patronato, 26, R. 5, f. 165v; Bartolomé de LAS CASAS, lib. 3, cap. 74.

⁹⁷ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 29, cap. 12.

⁹⁸ El cacique de Careta, «no pudiendo ya sufrir los adulterios e robos e sinrazones que se le hacían, acordó de matar a este Lope de Olano; e así lo hizo con hasta otros doce o quince cristianos que con él estaban», Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 29, cap. 12.

⁹⁹ Bartolomé de LAS CASAS, lib. 3, cap. 74.

¹⁰⁰ En la primavera de 1517, el licenciado Espinosa, a su retorno hacia Santa María de la expedición por los territorios del cacique París, paró en Acla donde encontró el pueblo «poblado tan en forma como lo está este del Darién, e allí muy bien de comer, como lo hallamos en Sevilla». Relación... doc. cit., CODAIN, t. 2, p. 521.

¹⁰¹ Orden a los jerónimos, AGI, Indiferente 419, L. 7, ff. 699r-699v.

La estrategia que se siguió en este caso para legitimar de manera más estable esta nueva fundación fue la de conceder a Diego de Albítez el cargo de justicia mayor de las poblaciones que fundase, con amplias atribuciones en el ejercicio de la justicia civil o criminal. Sin embargo, este nombramiento estaba supeditado a que prestase juramento a los oficiales de las poblaciones que se fundasen: «reciban de vos, el dicho capitán Diego Albítez el juramento e solemnidad que en tales casos requiere e debéis hacer el que así fecho vos ayan, reciban e tengan por nuestra justicia de los dichos pueblos»¹⁰². Es decir, la autoridad de Albítez estaría directamente controlada por las de las poblaciones que se estableciesen y no al revés. Además, en todo momento, el nuevo justicia mayor estaría «debajo de jurisdicción e sujeción del que ahora es o fuese nuestro gobernador o lugarteniente general de la Castilla del Oro»¹⁰³, es decir, de Pedrarias Dávila.

Con este juego de balances de la autoridad se ponía la legitimidad final del ejercicio de la justicia en las comunidades urbanas y no en los cargos individuales y se dotaba de un poder de rango mayor a aquellas. Por lo tanto, las poblaciones fundadas tendrían una capacidad más amplia para la toma de decisiones y el establecimiento de relaciones con el entorno y la gestión de su legitimidad. Diego de Albítez, según Las Casas, «suspiraría» por la independencia que le supondría «ser cabeza por sí, e no tener a quien acatar sobre sí»¹⁰⁴, pero en realidad tenía dos frenos a su actividad como juez: por un lado, el gobernador Pedrarias —quien querría evitar un posible desacato a su autoridad¹⁰⁵— y, especialmente, los cabildos de las poblaciones que se creasen.

La expedición en la que Albítez se embarcó constaba de 60 personas y, tras realizar varias entradas por la zona de Veragua, «acordó el Diego Albítez de asentar en aquel lugar un pueblo, y púsole por nombre el que Diego de Nicuesa de antes había puesto al puerto que allí hay, conviene a saber, Nombre de Dios», en una zona montuosa y muy húmeda, algo que unos cuantos años antes ya habían comprobado en sus propias carnes los miembros de la expedición de Nicuesa en el mismo lugar¹⁰⁶. A comienzos del año 1520 Nombre de Dios estaría ya en plena construcción y pronto comenzó a recibir población proveniente de Santa

¹⁰² Nombramiento de Diego de Albítez como justicia mayor, 23 de marzo de 1518, AGI, Panamá 233, L. 1, ff. 200v-201r

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Bartolomé de LAS CASAS, lib. 3, cap. 74.

¹⁰⁵ No hay que olvidar que Diego de Albítez había sido uno de los primeros regidores de Santa María del Antigua y formaba parte de los que fueron investigados junto a Balboa por el «monipodio» hecho contra el bachiller Enciso.

¹⁰⁶ Bartolomé de LAS CASAS, lib. 3, cap. 108. Según el dominico «no tienen número la gente de españoles que de enfermedades han perecido y mueren cada día».

María del Antigua, que seguía siendo la principal fuente, tanto de habitantes¹⁰⁷ como de organización concejil¹⁰⁸, de las nuevas fundaciones del istmo. En el caso de Nombre de Dios se podría hablar de tres fundadores –Diego de Nicuesa, Pedrarias Dávila y Diego de Albítez– pero una vez que éste último constituyó el gobierno municipal, el cabildo habría de aceptarle como justicia mayor. El cabildo marcaría, incluso antes de su composición formal, la autoridad de erigir a Albítez como su alcalde mayor. Por mucho que se fundase por mandato de Pedrarias a través de Diego de Albítez, la nueva población debía auto constituirse y recibir el juramento del justicia mayor. Como ya sucediera en el caso de Santa María, el propio *fundador* se debía situar a las órdenes de la comunidad, potenciando el papel de esta como depositaria y legitimadora del poder.

La fundación de Panamá se podría enmarcar en la resolución del conflicto entre Vasco Núñez de Balboa y Pedrarias Dávila. La creación de la nueva población en la costa de la Mar del Sur actuó como la marca de legitimación de las acciones de Pedrarias y supuso el final de una lucha de poder que venía fraguándose desde casi la llegada de la Gran Armada en julio de 1514. Tras el nombramiento de Balboa como adelantado de Panamá y Coiba y comenzar una recluta, Vasco fue acusado de «traición y motín» y, por ende, de un delito de *lesa majestad* castigado con la pena capital¹⁰⁹. El resultado de su acción, juzgada por el alcalde mayor Espinosa, fue la condena a muerte. Tras la solicitud fallida de apelación a Pedrarias Dávila, Balboa fue ejecutado en Acla en los primeros días de enero de 1519.

Tras la ejecución de Balboa, junto a cuatro de sus más fieles seguidores sus cabezas fueron expuestas sobre palos durante varios días en la propia plaza de Acla para servir como ejemplo a posibles transgresores¹¹⁰. Según algunos de los testimonios que se han conservado sobre la puesta en escena de ese ajusticiamiento, el gobernador lo habría presenciado, oculto

¹⁰⁷ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 29, cap. 14. Oviedo se quejaba amargamente de que la fundación de Nombre de Dios era un paso más en la despoblación de Santa María del Antigua.

¹⁰⁸ Regimiento de Nombre de Dios para Diego de Estella, 20 de enero de 1522, AGI, Panamá 233, L.1, ff. 318v-319v: en enero de 1522 se nombraba a Diego de Estella regidor de la misma villa, «e useis del dicho oficio juntamente con los otros nuestros regidores que en la dicha villa habemos mandado proveer» y que lo haga siguiendo el ejemplo de los privilegios y obligaciones «de los otros nuestros regidores que en la ciudad de Santa María del Antigua del Darién y en la isla Española y en las otras islas están por nos proveídos».

¹⁰⁹ Bethany ARAM (2008), pp. 123-148 y 338-346.

¹¹⁰ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 29, cap. 12: «así fue ejecutada por pregón público la sentencia, e descabezados el adelantado e Fernando de Argüello, e Luís Botello, e Hernán Muñoz, e Andrés de Valderrábano en la plaza de Acla, e fue absuelto el capitán Andrés Garabito, por descubridor de la traición». Tomás MANTECÓN MOVELLÁN (2005), pp. 69-100; según el jurista francés de comienzos del siglo XV Tiraquellus, la pena actuaba como retribución y, con éste «va unida en la praxis y, también, aisladamente en la doctrina, la intimidación general preventiva» a la cual las exhibiciones y pregones públicos iban dirigidas hacia el efecto intimidador sobre la colectividad definido así: '*poena non modo ipsum delinquentem rescipit, sed et ceteros, ut illi videlicet a criminibus formidine poena deterreantur*' en Friedrich SCHAFFSTEIN (1957), p. 51 y 54.

tras unas cortinas¹¹¹. Sin embargo, habría partido muy pronto porque apenas dos semanas más tarde, el día 27 de enero, Pedrarias Dávila se encontraba tomando posesión de la Mar del Sur en nombre de los reyes y, ocho meses más tarde, oficialmente el 15 de agosto de 1519, se «fundaba» la villa de Panamá. Ya hacia 1515, el propio Pedrarias había cuestionado que no había sido Balboa sino Nicuesa quien había descubierto la Mar del Sur¹¹². A su vez, pocos meses después de que Pedrarias tomara su posesión, el juez de residencia Alarconcillo aseguraba a la Corona que Pedrarias «descubrió la Mar del Sur y mucha costa, en ella ha poblado a Panamá» y no así Balboa¹¹³.

Con estos antecedentes, Pedrarias podía acreditar haber sido él mismo el descubridor de la Mar del Sur y, al tiempo, vincular esa posesión con la fundación de Panamá. Su propio acto de toma de posesión, de hecho, no estuvo exento de una gran exhibición de recursos simbólicos. Según recogió el acta levantada por el escribano, en la toma de posesión de la Mar del Sur hubo música, disparos y varios barcos navegando la costa, además de los habituales actos simbólicos: «corto árboles e rozo la yerba que esta en esta dicha tierra, y entró en el agua de la dicha Mar del Sur, corporalmente e poniéndome de pie en ella, e holló la dicha tierra nueva e aguas de la dicha Mar del Sur». Mientras tanto las trompetas no dejaban de sonar y los testigos gritaban al unísono que todo lo que desde el cerro se veía, mar, tierras e islas, «ha de ser de la Corona Real de Castilla»¹¹⁴.

Para que Pedrarias Dávila pudiese continuar con la fundación de poblaciones como deseaba y era su obligación, debía conseguir juntar un grupo suficiente de posibles vecinos, consciente como era de que sin la existencia de un pacto comunitario –si bien, en su caso, la necesidad no era tan acuciante como en el caso de Balboa, puesto que contaba con el soporte explícito de las instrucciones de la Corona– sus acciones no tendrían el peso político necesario que les permitiese la continuidad y estabilidad necesarias¹¹⁵. Por esto, se aprestó a convencer a los habitantes de Santa María, que se mostraban reacios en principio a la nueva población, de que se asentasen en la nueva población para poder controlar los posibles pillajes y comenzar el proceso de ocupación. Para ello, tomó el oro que había rescatado Gonzalo de Badajoz tiempo atrás y que había sido recuperado por Espinosa y lo enterró en

¹¹¹ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 29, cap. 12.

¹¹² Representación de Pedrarias contra Vasco Núñez, RAH, col. Muñoz, t. 57, ff. 333r-333v.

¹¹³ Rodríguez de Alarconcillo, residencia a Pedrarias Dávila, etc. 7 de junio de 1521, AGI, Patronato 197, R. 1, reproducida también en RAH, col. Muñoz, t. 58, f. 204r.

¹¹⁴ Acto de posesión de Pedrarias Davila: provincia de Payne, AGI, Patronato 26, R. 13, impreso en CODOIN, t. 39, p. 551 y ss.

¹¹⁵ Antonio DE HERRERA Y TORDESILLAS (1601), Tomo I, cap. XV; Según Las Casas, la falta de apoyo por parte de los vecinos de Santa María había provocado que Pedrarias cancelase el gobierno municipal para comenzar la expedición, Bartolomé de LAS CASAS, lib. 3, cap. 106.

la zona donde quería establecer la nueva población. Entonces, el gobernador puso un *ultimátum*: «tornó a persuadirlos que convenía poblar por allí, y todos, como de antes, se resistían. Él, movido a ira, dijo, «pues no queréis, desentiérrese todo ese oro, y restitúyase a su dueño que es el Cacique y gente de Pariba o de París, porque así me lo mandan los padres Hierónimos¹¹⁶, y vámonos todos a Castilla, que a mí no me faltará de comer allá»¹¹⁷. Unido a esto, comenzó el proceso de ofrecer alicientes a los que quisieran participar en la fundación, ya que un nuevo asentamiento era la única posibilidad de los individuos para beneficiarse del repartimiento de indios, condición que, además, facilitaría a largo plazo la concreción de su vecindad¹¹⁸.

La presión a los expedicionarios surtió efecto y éstos, «como si les lastimara en la lumbre, blandearon» y aceptaron fundar una población. El 15 de agosto de 1519, pues, «llamó Pedrarias a un escribano que asentase por escrito cómo allí *depositaba* una villa que se llamase Panamá, en nombre de Dios y de la reina doña Juana y de D. Carlos, su hijo» y, de la manera que correspondía a este tipo de fundaciones, «protestaba de la defender en el dicho nombre a cualesquiera contrarios»¹¹⁹. La fundación jurídica de la ciudad implicaba, como se verá en el siguiente capítulo, la capacidad del cabildo para negociar sus propios límites jurisdiccionales, lo que llevaba asociada la capacidad para redefinir el territorio a través del asentamiento de un poder que debía ser ejercido. Tomando como referencia la provincia conocida como Panamá, la superposición de una villa castellana generaba un nuevo entorno político con el encaje de diversas jurisdicciones. No dejaba de ser válida, como veremos, la referencia al cacicazgo como marcador territorial y político, pero este, además, pasaba a ser también parte de una entidad diferente cuyo centro era la villa. Con la fundación de Panamá, la polaridad de Castilla del Oro había cambiado y pasaba de tener su centro en Santa María del Antigua a tenerlo en la nueva villa fundada en la Mar del Sur. A partir de ese cambio de polaridad se comprende la fundación del último núcleo del istmo, Natá, cuya legalidad procedía, precisamente, de su desgajamiento de Panamá.

El fracaso del primer intento, por parte de Espinosa, de fundar una población en los territorios del cacique de Natá se debió al rechazo del Requerimiento por parte de los indígenas. Ese fracaso provocó que en el siguiente intento se probase una nueva estrategia

¹¹⁶ Tras la muerte del rey Fernando, el cardenal Cisneros asignó a los Jerónimos el gobierno de La Española para valorar y asegurar la «justicia» de las entradas en las islas y Tierra Firme.

¹¹⁷ Bartolomé de LAS CASAS, lib. 3, cap. 106. La descripción del proceso de fundación en Alfredo CASTILLERO (2006), cap. IV; Carmen MENA (1992a), pp. 33-49.

¹¹⁸ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 29, cap. 14; Carmen MENA (1983), pp. 3-17.

¹¹⁹ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 29, cap. 14.

de acercamiento para intentar hacer el asentamiento permanente y estable. El fracaso del Requerimiento, documento ideado por el jurista Juan López de Palacios Rubios tras la Junta de Burgos de 1513, como una manera de mantener limpia la conciencia real, se basaba en la lógica jurídica que implicaba la defensa de los derechos naturales de los castellanos, pero no se detenía en las complejidades de la práctica sobre el territorio. El Requerimiento fue un artificio legal que dejaba claras –y de manera pública- las intenciones de los castellanos antes de actuar contra los indígenas que les resistían. Si no aceptaban a los cristianos, los indígenas podían ser *desposeídos* de sus derechos de posesión de sus tierras y pasar a quedar bajo la autoridad de los castellanos¹²⁰. Es decir: en la argumentación de Palacios Rubios se asumía que los indígenas tenían derechos naturales de dominio, pero al mismo tiempo se afirmaba que se les podía despojar de los mismos en base al incumplimiento del «contrato» que el Requerimiento les ofrecía¹²¹.

Tras la fundación de Panamá, sin embargo, las circunstancias cambiaron para la zona de Natá. Otra expedición, de nuevo comandada por Gaspar de Espinosa, fue directamente sufragada por el cabildo de Panamá el mismo año de su fundación y sustentada sobre la creación del espacio político que la fundación de la primera había supuesto¹²². A las pocas semanas de zarpar de Panamá, a finales de 1521, Espinosa comenzó a enviar maíz de vuelta «porque había necesidad grande y porque hacía poco que [Panamá] era poblado», lo cual enfatiza la idea de que se hacía necesaria una población de apoyo a la población y pronto escribió a Pedrarias para que le diese licencia para poblar, pues la tierra, a apenas 30 leguas de Panamá, era fértil, «descubierta, llana y graciosa» y además, era una provincia bien poblada con buenos labradores¹²³. Pedrarias aceptó, pero insistió en estar presente en la fundación. Hacia 1552, en la relación de méritos iniciada por los herederos de Espinosa se recogía que, tras retornar a Panamá para recoger a Pedrarias, «Espinosa y toda la gente vino por tierra conquistando y trayendo de paz pacíficamente muchos caciques hasta Natá e allí fundo e pablo una çibdad que hoy esta poblada y recibe provecho la hacienda real»¹²⁴. El acta de fundación de Natá, el más antiguo que se conserva para Tierra Firme, subrayaba que la

¹²⁰ Brian TIERNEY (1997), pp. 258-259; Robert WILLIAMS (1990); Mauricio BEUCHOT (1976), pp. 213-230, esp. 226-229; Arthur WILLIAMSON (1996), pp. 46-83, esp. p. 58; Jorge DÍAZ CEBALLOS (2013), pp. 1507-1517.

¹²¹ Juan López de PALACIOS RUBIOS (1954); Anthony PAGDEN (1990), p. 81; Andrew FITZMAURICE (2007), pp. 383-409.

¹²² De hecho, años más tarde aún seguían reclamando el cobro del quinto del que la Corona les había hecho merced por el esfuerzo, Reales disposiciones sobre mercedes concedidas a Panamá, AGI, Patronato 193, R. 8, f. 100v.

¹²³ Manuel FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (1885), p. 407; Bartolomé de LAS CASAS, lib. 3, cap. 163.

¹²⁴ Información de los méritos y servicios del licenciado Gaspar de Espinosa, 1552, AGI, Patronato 98A, N. 2, R. 1.

fundación acompañaba a las paces que se habían iniciado, porque «conviene al servicio de Dios y de sus altezas y a la conservación de la dicha paz» se había acordado asentar «un pueblo de cristianos»¹²⁵.

El levantamiento del acta de Natá, en el que se reproducía la conversión en vecinos de los individuos que participaban en una corporación política unitaria, constituía un paso más de un proceso largo y complejo en el que se debían de calibrar las diferentes vías de legitimidad de la ocupación, trascendiendo las normativas y las actuaciones individuales para enfatizar el carácter práctico del establecimiento del espacio político en Castilla del Oro. A su vez, el complejo proceso que conducía a una población significaba el inicio de otro tipo de ocupación que tenía que ver con el establecimiento de relaciones sólidas con los indígenas y con el desarrollo de una serie de instituciones castellanas que se encargasen del gobierno, la primera de las cuales era, por supuesto, el regimiento, del cual emanaba la primera instancia de actuación política. Las luchas por el poder entre los castellanos se resolvían a través de una fundación urbana, cuyo éxito dependía, entre otras cosas, de su grado de aceptación por los indígenas. Si los indígenas no toleraban de forma activa o pasiva la existencia de una nueva –o no totalmente nueva– población en sus territorios, no era posible la resolución de los conflictos y la generación de un nuevo espacio político.

Como se verá a continuación, incluso en los casos de conflictos interjurisdiccionales planteados en términos individuales –Pedrarias *vs* Balboa o Enciso *vs* Balboa– el concurso de la comunidad política –constituida en *pueblo*– se hacía fundamental, como soporte y legitimación de las acciones de esos individuos gobernantes a través de un cierto grado de consenso. Aunque desde casi el comienzo se desarrollaron teorías que legitimaron los principios de la expansión atlántica –con diversas variaciones regionales¹²⁶– y que tuvieron un largo y complejo desarrollo doctrinal, sobre el terreno fue más decisiva la búsqueda de consensos comunitarios a escala local que las construcciones intelectuales a gran escala. Los individuos que participaron en las fundaciones eran muy conscientes de que su labor era decisiva como soporte de legitimación, tanto de esos gobernadores como de la monarquía en general, y así lo hicieron explícito en sus relaciones de méritos y servicios con las que

¹²⁵ El acta de fundación de Natá se encuentra actualmente en AGI, Panamá 32, N. 54, inserto en un pleito relativo a la fundación de la Villa de los Santos de 1588. Esta copia fue publicada por primera vez en Alfredo CASTILLERO (1972), pp. 55-75. Posteriormente ha sido publicado en varias ocasiones, entre ellas parcialmente en Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY (1984), pp. 89-92. Cito en mi caso por la edición de Francisco SOLANO (1996), pp. 54-69. En ambas publicaciones la signatura de archivo que aparece es la ahora inexistente AGI, Panamá 376.

¹²⁶ Anthony PAGDEN (1998).

buscaban recibir una compensación por su contribución a la creación y mantenimiento de la monarquía.

4. *Consensus populi. La fundación como labor colectiva.*

El modelo de fundación de poblaciones de Castilla del Oro se basó en el acuerdo de cada una de las comunidades que, de una u otra manera, decidieron auto constituirse en una corporación política. Para ello fue necesario el concurso de cada uno de los miembros de la comunidad y el acuerdo representado en una serie de procesos que desembocaron en la constitución de las comunidades urbanas. Lo que se produjo en estas fundaciones fue una adaptación de la tradición republicana medieval en la que el *pueblo* tomaba las riendas de la capacidad de decisión política en circunstancias de distancia o ausencia del rey con el fin de asentar una fuente estable de poder en un territorio y negociar y asentar una serie de privilegios¹²⁷. La costumbre y el recurso al procomún a largo plazo actuaban como fuerza motriz de la toma de decisiones y como la raíz de la legitimidad de las propias acciones a largo plazo. Así lo recogía la *Glosa* de Gregorio López a las *Partidas* que, en el comentario a la segunda ley del segundo título de la primera partida, afirmaba que «el uso, para que de él pueda deducirse la costumbre, debe ser público. Se requiere, pues, que venga en su apoyo el consentimiento tácito del pueblo (*tacitus consensus populi*)»¹²⁸. Para apoyar la toma de poder del pueblo, se articularon, como se ha visto más arriba, una serie de estrategias de legitimación de la autoridad, que tenían la relación con los indígenas en el centro de la acción pero que se orientaban principalmente hacia la consolidación del poder urbano en conflictos por la definición y el control de la jurisdicción.

El consenso articulado en torno a la figura de Vasco Núñez de Balboa para la fundación de Santa María del Antigua con la referencia explícita a la actuación de la comunidad como pueblo al recibir a Pedrarias; o la de la comunidad de Panamá a la que Pedrarias necesitó convencer para que apoyase su pretensión fundadora son algunos ejemplos sólidos de esta construcción del espacio político urbano desde abajo en Castilla del Oro. No se trata de plantear una negación frontal de la legalidad de las normas que amparaban la conquista, sino de ofrecer una imagen de la construcción sobre el terreno que, bebiendo de esas fuentes, se adaptó para lograr un rango mayor de legitimidad. La constante apelación de las fuentes al consenso de *todo el pueblo* para decidir de manera autónoma si

¹²⁷ Xavier GIL PUJOL (2008), pp. 111-148; Walter ULLMANN (1985), p. 224; Angela DE BENEDICTIS (2001), pp. 388-391.

¹²⁸ *Glosa que escribió en Latín Gregorio López vertida al castellano*, Madrid, 1978.

acatar o no la autoridad de la Corona permite reflexionar sobre el origen de la legitimidad de la ocupación del territorio del Nuevo Mundo¹²⁹. A pesar de las primeras capitulaciones de la Corona con Ojeda y Nicuesa en 1508 y de las instrucciones que le fueron entregadas en el verano de 1513 a Pedrarias Dávila; a pesar, en fin, de los planes de la Corona, se puede inferir que eran las comunidades políticas urbanas, originadas en las diversas expediciones y auto constituidas a través de una serie de episodios, las que realmente sustentaban los derechos reales en el territorio.

La puesta en práctica del consenso del pueblo para fundar las poblaciones y que estas fueran viables jurídicamente y también operativas en el plano práctico remite a una aplicación en el largo plazo del principio «acátese, pero no se cumpla». Como ya se ha mencionado, el propio Vasco Núñez de Balboa aludía a sus obras como justificación de su desobediencia al oponerse al Bachiller Enciso. Éste, que acudió a la corte para expresamente pleitear por sus derechos —y a quien su hijo unos años más tarde aún reclamaría como único fundador de Santa María¹³⁰ y, por ende, de Castilla del Oro— apelaba explícitamente a la legalidad de las capitulaciones que él había heredado de Ojeda y Nicuesa¹³¹. Su única alegación respondía a la letra de la ley, discutida en primer lugar por el propio Balboa al insistir en que —algo que sabía fruto de su experiencia sobre el terreno— la zona de Darién no caía en la jurisdicción de Ojeda, y contrarrestada por las actuaciones expresas que incluían la fundación de Santa María como acto central legitimador de sus acciones individuales. En 1514 Gaspar de Espinosa había salido al paso de las acusaciones hechas a Balboa frente a Enciso y Nicuesa aludiendo precisamente a que no había sido él, sino la colectividad, la que había decidido actuar. En carta al rey en noviembre de 1514, asegura que en lo de Nicuesa «todo el *pueblo* es culpante, pues le llamaron» y, por tanto, «de haber culpa no era únicamente de Vasco Núñez, sino de todo los que en ellos tomaron parte, constituyendo notoria injusticia que a él solo se le procesase por ellos, en tanto que a los demás se les honraba y favorecía»¹³². La consumación de la lógica del «acátese, pero no se cumpla» radicaba en la consecución exitosa de su lógica

¹²⁹ Ruiz Ibáñez considera que, a pesar de que a lo largo del siglo XV, la extensión de la monarquía había ido «soterrando las prácticas del *consensus populi*» no había sido eliminado completamente, en José Javier RUIZ IBÁÑEZ (1999), p. 85 y ss. Ver, sobre lo mismo Mario di GIACOMO (2013), pp. 99-131, quien coloca, si bien con graves anacronismos conceptuales, el *consensus populi* en el centro del debate de fines de la edad media entre política y teología.

¹³⁰ Rodrigo de Rebolledo... doc. cit., AGI, Justicia 341, N. 1.

¹³¹ En su escrito de apelación, Enciso mencionaba explícitamente cuál era el origen de su autoridad: «por virtud de la capitulación que con el dicho Ojeda mandamos tomar usase y exerçiese el dicho oficio de governaçion en la dicha provincia de Urabá en el asiento que allí avia hecho la gente que el dicho Ojeda llevaba», Real Provisión a Pedrarias Dávila..., AGI, Panamá, 233, L. 1, f. 52.

¹³² Pablo ÁLVAREZ RUBIANO (1944) pp. 101-102. Un análisis de la responsabilidad del «sujeto colectivo» como actor decisivo en la práctica política en Angela DE BENEDICTIS (2013).

interna: una norma podía no acatarse anticipando un bien mayor para el común y, en concreto, para la Corona¹³³; en el contexto del Nuevo Mundo ningún bien podría ser mayor para la Corona que el de crear y mantener una nueva fundación que pusiese en marcha la conversión de los indígenas y, en ese contexto, la posibilidad de la adquisición de oro. La vía que encontró Balboa para justificar haber «acatado» pero no «cumplido» con la legalidad que regía en el momento de sus actos fue haber contado con el consenso de la comunidad local.

El avistamiento y toma de posesión de la Mar del Sur fue el resultado de esa fundación y un episodio que también contribuyó a asegurar la legalidad de Santa María a hechos consumados. De manera similar a la actuación que llevaría a cabo tiempo después Hernán Cortés al fundar Veracruz –lo cual le permitió iniciar de manera cuasi autónoma la conquista de México¹³⁴–, Vasco Núñez de Balboa promovió la creación de un cabildo que le eligiese a él como máxima autoridad y sostuviese su gobierno. En ambos casos, el consenso de una comunidad urbana auto constituida actuó como vía para legitimar una dudosa legitimidad de partida¹³⁵. Sin el concurso de la parte más importante de los miembros de la comunidad –convertidos en *pueblo*– no habría sido posible ni el avistamiento del Pacífico ni la conquista de México. Estos dos acontecimientos justificarían, por sí solos, el desacato a las normas oficiales y, en ambos casos, cumplieron con su objetivo puesto que ambos líderes recibieron oficialmente el amparo de la Corona. Además, ninguno de estos hechos, a pesar de haber sido así interpretados tradicionalmente, fue la obra de un solo hombre que lideró a un grupo obediente. En cambio, como se encargaba de advertir de manera recurrente Bernal Díaz del Castillo en su *Verdadera historia de la Conquista de la Nueva España*, apelando al plural en la descripción de las acciones que se llevaron a cabo, fueron obras colectivas y fundadas en la autoridad de un cabildo.

La importancia que los individuos otorgaban al hecho de haber formado parte del proceso fundador de una nueva población se refleja en que, a la hora de reclamar mercedes al rey en sus relaciones de méritos y servicios, los participantes en las expediciones fundadoras se encargaban de recalcar precisamente esa participación como uno de sus principales méritos. Participar en una fundación urbana era un hecho primordial porque contribuía a aumentar y solidificar el poder real en el Nuevo Mundo y por eso debería ser motivo para recibir mercedes. La aparición de las fundaciones en las relaciones de méritos

¹³³ Benjamín GONZÁLEZ ALONSO (1980), pp. 469-487; Alfonso GARCÍA-GALLO (1972), pp. 169-285, en esp. pp. 206-214; Magnus MÖRNER (1999), pp. 61-63.

¹³⁴ Manuel GIMÉNEZ FERNÁNDEZ (1948), pp. 1-149; Francisco TOMÁS Y VALIENTE (1988), pp. 165-181; Jorge DÍAZ CEBALLOS (2012), pp. 984-995.

¹³⁵ José Javier RUIZ IBÁÑEZ y Marco PENZI (2004), pp. 111-145.

que se conservan relativas a Castilla del Oro contribuye a desdibujar la imagen mítica del fundador solitario y heroico e incide tanto en el carácter comunitario de las mismas como en la importancia que los individuos concedían a su participación en una empresa de ese calibre. De hecho, había una tendencia a mostrarse involucrado en el mayor número de fundaciones posible dentro del istmo de Panamá y, a ser posible, también fuera de él.

La intervención en una fundación significaba haber participado directamente en la construcción del poder real, equivalente a lo que más adelante sería la defensa de este frente a ataques internos o externos o a la participación en sus órganos de gobierno. El hecho de incluir en la probanza el mayor número posible de fundaciones, independientemente de la veracidad del testimonio, es un indicativo de la consciencia de su importancia que tenían los individuos en tanto que participantes activos en la configuración de la Monarquía en un momento decisivo de su formación y de la relevancia que otorgaban al propio hecho fundacional como un proceso en el que se podía participar de diferentes maneras.

La rapidez con la que se llevaron a cabo las cinco fundaciones principales de Castilla del Oro, entre 1510 y 1522, permitió que varios individuos pudieran alegar en sus relaciones de méritos haber participado en más de una e incluso en algunos casos en las cinco. Francisco Pizarro y Diego de Almagro, tras su llegada en 1513 junto a Pedrarias Dávila, «le ayudaron a descubrir y conquistar la tierra desde el pueblo de Santa María del Antigua del Darién hasta los pueblos de Acla y el Nombre de Dios y de allí fueron en el descubrimiento de la Mar del Sur y allí ayudaron a poblar la ciudad de Panamá y la villa de Natá»¹³⁶. Lo más importante de la hoja de servicios de los dos descubridores, antes de pasar a la conquista del Perú, había sido mencionar –si bien en algunas de ellas no pudieron haber participado efectivamente- su colaboración en la fundación y población de los cinco núcleos que conformaban la gobernación de Castilla del Oro. De hecho, el bagaje de experiencias acumuladas en esas fundaciones iba a marcar su manera de llevar a cabo dicha nueva conquista. En la probanza del propio Pedrarias, iniciada por su mujer en 1528, también se enfatizaba la participación – en su caso se incidía en su supuesto protagonismo principal- en la fundación de esos núcleos a los que, además, «las hizo adornar de templos» y, ya en Nicaragua, de los de Bruselas y León. Con esas fundaciones, Pedrarias habría hecho «avanzar la fe cristiana e creciendo el patrimonio e rentas de Su Majestad»¹³⁷.

¹³⁶ Relación sobre el descubrimiento y población de las provincias del Perú, s.f., AGI, Patronato, 28, R. 10.

¹³⁷ Información de los méritos y servicios de Pedrarias Dávila, 6 de febrero de 1528, AGI, Patronato 150, N. 3, R. 1.

La fundación de una nueva población era el mayor servicio posible que se podía hacer al rey pues ensanchaba de manera muy significativa su poder, además de sus rentas, pues «en la multitud de los pueblos consiste la grandeza de los Príncipes»¹³⁸. Pedro Cieza de León recordaba a Elisa Dido, Rómulo o Alejandro, como fundadores de Cartago, Roma y Alejandría, quienes «por razón destas fundaciones hay dellos perpetua memoria y fama», asegurando que también la habría del rey en cuyo nombre se habían fundado esas poblaciones «donde su majestad a las repúblicas ha dado leyes con que quieta y pacíficamente vivan»¹³⁹. Pero no sólo el rey se veía recompensado por la fundación sino también los hombres que actuaban en su nombre¹⁴⁰.

Sánchez de Arévalo consideró ya en el siglo XV que «los fundadores de ciudades deben en honores a todos los mortales ser preferidos», más incluso que aquellos que las conquistaba, pues «más es cercano a justicia e virtud edificar ciudades e villas [...] que ganarlas por armas». Incluso Hércules, según él, fue mucho más loado «por las ciudades que edificó que por las que trujo violentamente a su poder». Mientras la fama de los vencedores resultaba muy breve, la de «los edificantes e virtuosos regidores, nunca obscurece»¹⁴¹. De nuevo Pizarro y Orellana ofrecía las claves de lo que merecían los fundadores de poblaciones en el Nuevo Mundo como servidores del rey.

«Fundar ciudades», comenzaba Pizarro y Orellana, «es una de las mayores honras que consiguen los hombres, para engrandecer sus nombres» pues con ellas «se propaga y ensalza la fe, y aumenta la justicia a honra y gloria de Dios y de los católicos reyes». Por eso, según escribía su descendiente, la mayor honra que Dios había hecho a Francisco Pizarro fue concederle que «fuese fundador de las más importantes ciudades y principales cabezas que hoy se conservan en él». A través de la fundación de varias ciudades, Pizarro habría «edificado material y espiritualmente este Nuevo Mundo» y por ello «en las sagradas letras, para engrandecer los nombres de los que conquistaron y ganaron los imperios se refieren las ciudades que edificaron»¹⁴².

¹³⁸ Fernando PIZARRO Y ORELLANA (1639) cita los *Proverbios*, 14:28 «*in multitudine populi dignitas Regis, in paucitate plebis ignominia principis*»; Fernando Pizarro y Orellana, miembro del Consejo de Órdenes, escribió en 1639 – como suplemento a su obra magna *Vidas de varones ilustres de Indias*– un *Discurso legal de la obligación que tienen los reyes a premiar los servicios de sus vasallos, o en ellos o en sus descendientes* en el que desgranaba la lógica retributiva que había movido a los individuos a participar en la empresa de la conquista.

¹³⁹ Pedro de CIEZA DE LEÓN (1553), cap. II.

¹⁴⁰ Juan SOLÓRZANO PEREIRA (1647), lib. Cap. IX, 15: «aunque es verdad que en estas ocupaciones y expediciones bélicas no fueron personalmente los reyes, nuestros señores, basta que hayan ido sus capitanes y soldados enviados en su nombre y a sus expensas para que se les haya podido adquirir y adquiriera lo que hallaron, ocuparon o conquistaron».

¹⁴¹ Rodrigo SÁNCHEZ DE ARÉVALO (1944), p. 34.

¹⁴² Fernando PIZARRO Y ORELLANA (1639), p. 180.

Como parte de ese reparto entre todos los participantes de la gloria asociada a la fundación de una población en nombre del rey, prácticamente en todas las probanzas de méritos presentadas durante la primera mitad del siglo XVI en Castilla del Oro, lo primero que aparece mencionado es la participación en la fundación de todos o de alguno de esos cinco núcleos. La participación no se limitaría a la presencia en el proceso fundador, sino que también implicaba el mantenimiento con vida de la nueva población durante sus primeros meses de existencia y, además, en los episodios directamente relacionados con la fundación de una población, tales como pacificación de los indígenas o, por ejemplo, el ya mencionado avistamiento de la Mar del Sur. Estar implicado, de una u otra forma, en el mayor número de fundaciones posible —y que los nombres de éstas aparecieran en el texto de la probanza— convertía a los solicitantes en mejores servidores del rey y les granjeaba mayores posibilidades de conseguir mercedes.

Hernán Sánchez de Badajoz recibió un escudo de armas en 1540 por acreditar, como Pizarro y Almagro, haberse encontrado presente desde la llegada de Pedrarias Dávila a Castilla del Oro y haberle ayudado a «conquistar y pacificar y poblar la ciudad de Panamá y Natá y en Nombre de Dios y la villa de Acla»¹⁴³, es decir, en las cuatro fundaciones llevadas a cabo durante su gobierno, antes de acompañarle también a Nicaragua. También en cuatro había participado uno de los primeros conquistadores negros, Nuflo de Villalobos. Él había sido parte de la expedición de Enciso y, por tanto, parte de los que suscribieron el pacto del Darién fundador de Santa María del Antigua y posteriormente de Acla, Nombre de Dios y Panamá, además de haber tomado parte en la expedición de descubrimiento de la Mar del Sur¹⁴⁴. Otros, como Alonso Martín de don Benito, se encontraron en la fundación de Santa María, en el descubrimiento de la Mar del Sur y en otras dos fundaciones antes de pasar hacia Perú¹⁴⁵. Juan de Castañeda estuvo involucrado en Santa María, Acla y Panamá¹⁴⁶ y Andrea de la Roca, tras llegar en la Gran Armada de Pedrarias, se había encontrado según su propio testimonio en Nombre de Dios y Panamá, si bien alguno de los testigos, para reforzar su argumento, aseguraba haberle visto en la fundación de Natá¹⁴⁷.

¹⁴³ Real Provisión a Hernán Sánchez de Badajoz... AGI, Patronato 169, N. 2, A. 1540, R. 2.

¹⁴⁴ Información de los méritos y servicios de Nuflo de Villalobos, uno de los que pasaron a Tierra Firme en 1509 con el bachiller Enciso en socorro de Alonso de Ojeda..., 1529, AGI, Patronato 92, N. 2, R. 1.

¹⁴⁵ Información de los méritos y servicios de Alonso Martín de don Benito, uno de los primeros descubridores del Mar del Sur..., 1536, AGI, Patronato, 93, N.5, R.1.

¹⁴⁶ Información de los méritos y servicios de Juan de Castañeda, 1530-1533, AGI, Patronato 150, N. 6, R. 3.

¹⁴⁷ Información de los méritos y servicios de Andrea de la Roca, iniciada por su hijo Pedro de la Roca en 1568, AGI, Patronato 151, N. 4, R. 1.

Rodrigo Lozano, antes de pasar a Perú y ser uno de los primeros pobladores de Trujillo y uno de los que primero asentó allí casa de piedra, había «sido poblador de la ciudad de Panamá y Natá»¹⁴⁸. Pedro de Ojeda, según la probanza que presentó su nieto Julio Gómez de Tordoya, había sido «poblador de Castilla del Oro, adonde llegó con Alonso Nicuesa y pobló Panamá y Natá»¹⁴⁹. El nieto de García Hernández de Figueroa se limitaba a informar de que su abuelo se había encontrado, en general, en la «conquista y pacificación» de Castilla del Oro, sin especificar el número de fundaciones en las que se había implicado. Hernando de Montenegro, según la probanza iniciada por su nieta, estuvo involucrado en todas las fundaciones del istmo. En primer lugar «ayudó a poblar y sustentar la ciudad de Darién» que se pobló de cristianos y en la se «padeció muchísimo trabajo». No participó en la fundación de Acla, pero sí que ayudó a abrir el camino entre una población y otra, y ese camino «fue principio y ocasión para que los españoles que en aquella sazón estaban en aquel reino se sustentasen y tuviesen algún asiento y manera de vivir». Sí que estuvo presente, y de forma activa, en la fundación de Panamá, de donde «fue uno de los pobladores», y además residió durante 14 años. Sus servicios como poblador no terminaron ahí, sino que, estando en Panamá envió a su propia costa «al Darién por yeguas, vacas, puercos y gallinas, lo cual fue causa y aparejo como se pobló Natá y el Nombre de Dios»¹⁵⁰. Los sucesores de Gaspar de Espinosa también destacaron en su probanza que éste había participado en la fundación de Panamá, Natá y Acla, aunque también reivindicaban su contribución en la fundación de Nombre de Dios, abriendo el camino entre esta y Panamá para hacerlo posible¹⁵¹.

La fundación de una población no sería propiamente un hecho de armas pues ésta era, en principio, más un acto jurídico o político que militar. Sin embargo, para darle más lustre a la probanza y disfrazarla como un acto heroico se utilizaba en las probanzas el recurso a un lenguaje de tipo bélico para asimilarlo a la tradición de servicios de armas y tener más posibilidades de éxito¹⁵². En la segunda probanza que los descendientes de Pedro de Ojeda presentaron, se declaraba que éste había participado en la «conquista, descubrimiento, población y pacificación de ella y de la provincia de Panamá y Natá, siempre con mucho

¹⁴⁸ Informaciones de los méritos y servicios de Rodrigo Lozano, 1537 y 1539, AGI, Patronato 93, N.8, R. 1.

¹⁴⁹ Información de los méritos y servicios de Pedro de Ojeda, 1588, AGI, Patronato, 152, N. 8, R. 1.

¹⁵⁰ Información de los méritos y servicios del capitán Hernando de Montenegro, 1586, AGI, Patronato 129, R. 1.

¹⁵¹ Información de los méritos y servicios del licenciado Gaspar de Espinosa, 1552, AGI, Patronato 98ª, N. 2, R. 1.

¹⁵² Esta estrategia retórica también se seguía en los pleitos de hidalguía en Castilla, ver Irving A. A. THOMPSON (1985), pp. 379-406.

lustre de su persona, armas y caballos»¹⁵³. Juan de Castañeda describía su participación en la fundación de Panamá y Acla casi como un desembarco militar: «ayudé a poblar la ciudad de Acla y la ciudad de Panamá, todo lo cual hice a mi costa e misión con mi persona a criados e aquella sazón eché la dicha mi nao al través en el dicho puerto del Darién e traje cuarenta hombres conmigo», todo para lograr la «conquista y pacificación de los reinos de Castilla del Oro»¹⁵⁴.

La participación en la fundación no finalizaba, en todo caso, en el propio acto fundacional o en la logística necesaria para llevarlo a cabo, sino que también se podía considerar un mérito haber contribuido a su mantenimiento una vez establecida. Como ya se mencionó, la supervivencia física de las poblaciones de Castilla del Oro solía ser muy difícil y normalmente se encontraban en un equilibrio precario. Casarse en la población –y, como se verá más adelante, llevar una vida *maridable*- y mantener una *casa poblada*, lo cual solía llevar aparejada la gestión de una encomienda, contribuyendo con ello a la cimentación de la comunidad, se consideraba un mérito reseñable Gonzalo de Palma acreditaba en los años 70 del siglo XVI tener, desde finales de los años 40, «casas pobladas en la ciudad del Nombre de Dios y en esta de Panamá», con los que contribuía a la supervivencia de ambas poblaciones¹⁵⁵. Más arriba se ha mencionado también el caso de Rodrigo Lozano, quien fue el primero en construir una casa de piedra en Trujillo y por lo que sus nietos pedían una remuneración¹⁵⁶. Las referencias al hecho de haber residido en las poblaciones por un número largo de años son muy frecuentes en las probanzas, acreditando con ello la lealtad tanto al monarca como a la propia comunidad.

Francisco de Pradanos había llegado a Castilla del Oro cuando las cinco ciudades ya estaban fundadas. A su llegada estuvo unos meses en Panamá y luego fue enviado por el gobernador a Natá, que estaba «muy sola de españoles» porque muchos de sus habitantes se habían marchado, o bien a Nicaragua, o bien a Perú. Tan poca gente había en Natá, que los pobladores «se velaban y rondaban por miedo de los indios alzados que buscaban formas para quemar la ciudad e matar los cristianos». En esas circunstancias tan poco atractivas Francisco de Pradanos no huyó ni buscó otro lugar en el que habitar, sino que «se halló en ella ayudándola a sostener por tiempo y espacio de cuatro años poco más o menos teniendo

¹⁵³ Información de los méritos y servicios de Pedro de Ojeda, abuelo de don Gómez de Tordoya, 1600, AGI, Patronato 138, R. 4.

¹⁵⁴ Información... doc. cit., 1530-1533, AGI, Patronato 150, N. 6, R. 3.

¹⁵⁵ Información de los méritos y servicios del capitán Gonzalo de Palma, 26 de agosto de 1575, AGI, Patronato 151, N. 10, R. 1.

¹⁵⁶ Informaciones de los méritos y servicios de Rodrigo Lozano, 1537 y 1539, AGI, Patronato 93, N.8, R. 1.

su casa poblada»¹⁵⁷. Su mérito no había estado estrictamente en agrandar el poder real fundando una nueva población sino en evitar, resistiendo, que ese poder se viera mermado por la desaparición de una que ya existía. Gonzalo Fernández de Oviedo, como testigo de la probanza de Lorenzo Martín, canónigo de la catedral de Santa María del Antigua, valoraba especialmente entre sus méritos que este hubiera resistido en la población, pues según el cronista madrileño «no ha quedado ningún canónigo ni dignidad de esta iglesia que no haya ido a Panamá» y mientras que Martín había persistido y había seguido llevando a cabo su labor en su ciudad¹⁵⁸.

La fundación y mantenimiento de ciudades, por lo tanto, era el mayor servicio que los individuos podían hacer a la Corona pues con ella se agrandaba o sostenía su poder jurisdiccional. Para que una ciudad pudiese ser fundada requería el concurso y el acuerdo de toda la comunidad política y no la acción exclusiva de un capitán o gobernador. Con la fundación, la comunidad se auto-constituía en corporación política y todos los participantes eran igualmente necesarios para que ésta tuviera capacidad de gobierno. Por lo tanto, es lógico que fuese el primer mérito que se incluyese en las relaciones.

La fundación, además, no se interpretaba como solamente un servicio al monarca, sino que también interesaba a los propios individuos la existencia de ciudades porque les permitía acumular otro tipo de servicios, especialmente a través de la defensa de esas poblaciones ante amenazas externas y la ocupación de cargos en su gobierno. Este carácter colectivo y consensuado de la fundación está en la base de la peculiar personalidad de las poblaciones de Castilla del Oro que, como veremos, constantemente apelarán en sus disputas jurisdiccionales a la relativa independencia que les granjeaba la manera en la que fueron fundadas, con un epicentro comunitario, y negociando y acumulando privilegios desde el propio comienzo de su andadura.

Conclusiones

El establecimiento de poblaciones en Castilla del Oro durante las primeras décadas del siglo XVI dio lugar a una nueva modalidad de establecimiento sobre el territorio basada en experiencias de construcción política protagonizadas por castellanos que debían negociar su presencia con los actores indígenas. La *translatio imperii* que acompañó algunos de los procesos de fundación o la elección del nombre de los asentamientos atestiguan la

¹⁵⁷ Información de los méritos y servicios de Francisco de Pradanos, 26 de enero de 1543, AGI, Patronato 150, N. 7, R. 1.

¹⁵⁸ Información de los méritos y servicios de Lorenzo Martín, 1523, AGI, Patronato 92, N. 1, R. 2.

complejidad de todo el proceso de construcción del espacio político. Las normas que regularon la manera de fundar poblaciones, especialmente las de 1573, fueron la recopilación de una serie de prácticas que venían realizándose desde el propio inicio de la conquista. Por otro lado, la aplicación de las órdenes e instrucciones que los distintos capitanes llevaban consigo no fue en absoluto directa y lineal, sino que fueron constantemente interpretadas y alteradas para adaptarse a las circunstancias. Por estas razones se podría decir que la fundación de ciudades en Castilla del Oro se desarrolló en un complejo y largo proceso de prácticas políticas desde abajo, pues fueron los actores sobre el terreno y no los órganos institucionales de toma de decisiones los que definieron la forma de llevarlo a cabo en un modo que acabó por ser aceptable y aceptado.

En ese proceso, los actores –individuales y colectivos– sobre el terreno gestionaron la legitimidad de sus actuaciones mirando tanto su entorno inmediato como hacia Castilla. Sus actuaciones debían ser operativas en Castilla del Oro para, posteriormente, garantizar su legalidad frente a la Corona, un paso que podía llegar varios meses después de los hechos. Como los hechos de Castilla del Oro demuestran, el principio «acátese, pero no se cumpla» se llevó hasta sus últimas consecuencias pues las prácticas antecedian a su refrendo normativo y ensanchaban con ello los límites de la norma.

En el juego de prácticas políticas que se puso en marcha para llevar a cabo la fundación fue esencial la negociación de los espacios de poder. Esta se produjo de forma triangular, pues estuvieron implicadas las diferentes facciones de entre los castellanos y, a su vez, los diferentes cacicazgos indígenas. Sin un relativo consenso entre la comunidad política castellana para auto-organizarse como cuerpo político autónomo y con capacidad para la toma de decisiones no habría sido posible la fundación de núcleos urbanos. En segundo lugar, sin el acuerdo tácito o explícito entre los castellanos y los indígenas y un cierto grado de interés o tolerancia por parte de estos tampoco habría sido posible dicho establecimiento. Ambos procesos negociadores o de búsqueda de consenso se hicieron explícitos a través de la aplicación a las circunstancias de Castilla del Oro de la cultura política de tradición castellana que, en el proceso, acabaría transformada en una renovada cultura política urbana.

El acervo de cultura política que los individuos transportaban desde la Península Ibérica se adaptó a las circunstancias creando una nueva forma de fundar poblaciones que, eventualmente, si bien con cierto retraso, se vio incorporado al *corpus* normativo de la Monarquía. La fundación de poblaciones no se puede, así, reducir a un solo acto jurídico como podría ser el levantamiento del acto o la constitución del cabildo. La realidad es que, para resultar efectiva, la fundación se convirtió en un proceso para constituir el poder en la

práctica, asentando con ello la autoridad de los castellanos. Cada episodio de los descritos en cada una de las fundaciones tendría su sentido dentro del proceso generador de poder, para terminar por asentar una comunidad política relativamente estructurada.

Dentro del entramado de prácticas puestas en marcha por los castellanos para fundar, resulta fundamental comprender el papel jugado por los indígenas. Cuando los castellanos llegaron al territorio ístmico, no se encontraron con una *terra nullius* sino con un sistema complejo de estructuras políticas y sociales con las que debieron negociar de una forma variada y compleja su propia implantación y presencia, así como la construcción de una comunidad política. No se produjo, en consecuencia, un arrasamiento de esas estructuras nativas previas. En cambio, lo que se implementó fue una adaptación y, en cierto modo, una hibridación de estas que condujeron a la existencia de villas y ciudades mixtas en su origen. La estrategia de los actores castellanos sobre el terreno, superando el recurso a la violencia unidireccional y a la aplicación sin matices de las órdenes emanadas de la corte, se mostró como útil para conseguir establecer las fundaciones con éxito y que pudieran sostenerse en el largo plazo. Con todo esto, se podría repensar el propio concepto de fundación, pues las poblaciones «castellanas» no se construían en Indias sobre la nada y no eran totalmente nuevas. Se producía más bien una adaptación o apropiación de estructuras políticas y simbólicas por las partes involucradas, aunque de manera asimétrica, para asegurarse la implantación, superposición y supervivencia. Con esto, los espacios de poder generados por los nuevos núcleos contaban con el refuerzo de una triple legitimidad: la de la comunidad política, la de la Corona y la emanada de la adaptación de los cacicazgos.

Esos actores, además, eran muy conscientes de su propia relevancia dentro del entramado de la Monarquía Hispánica pues, con sus acciones participando en las fundaciones colectivas, estaban ensanchando la base del poder del monarca. Los mismos individuos que circularon después por el continente y especialmente hacia Perú y Nicaragua, contribuyeron a extender esa cultura política urbana particular que se había fraguado en Castilla del Oro. La generación y la transmisión de la información, en muchas ocasiones también de origen indígena, es fundamental para comprender cómo se fueron fraguando los procesos políticos. Eran los propios individuos, que se movían, los que pusieron en circulación las prácticas y fueron refinando las fórmulas para asentar las poblaciones.

El análisis del momento fundador de las poblaciones de Castilla del Oro, por las razones expuestas, resulta fundamental para comprender sus desarrollos posteriores. El origen de estas poblaciones, basado principalmente en el acuerdo comunitario y en la incorporación de elementos estructurales indígenas, dará lugar a un determinado modelo

urbano con una identidad muy marcada y una férrea defensa de sus privilegios corporativos, herencia de la autoconsciencia de su importancia capital en el entramado político de la Monarquía Hispánica, como se analizará en los capítulos siguientes.

Capítulo 2

Ciudades, provincias y cacicazgos.

Jurisdicciones en conflicto y creación de fronteras

Como se pudo observar en el capítulo anterior, el proceso de fundación de poblaciones fue el punto de arranque de la creación de nuevos espacios políticos. Este proceso encontró continuidad con la definición de las jurisdicciones de cada una de esas poblaciones, creando con ello las fronteras interiores de la gobernación de Castilla del Oro y, derivadas de aquellas, también las fronteras exteriores respecto a las gobernaciones aledañas. La ocupación del territorio fue precedida por la creación de un espacio político a través de la implantación y negociación de la jurisdicción. Más allá de una planificación ordenada de los límites entre las diversas gobernaciones o capitanías, el panorama que se observa durante las primeras décadas de la ocupación castellana del Nuevo Mundo apunta a que éste se encontraba en proceso de definición tanto geográfico como respecto al ejercicio del poder. Las fronteras derivadas de los litigios generados en torno a la implantación de la jurisdicción fueron definidas sobre el terreno, fruto de la participación de diversos agentes, tanto castellanos como indígenas, sólo para ser simplemente arbitradas por la Corona finalmente, dentro del proceso de construcción de un sistema imperial.

La creación de ese nuevo espacio político no se basó exclusivamente en la implantación jurídica de nuevas poblaciones, a la manera de un «radical title» –siguiendo la nomenclatura del derecho de gentes interpretado por Carl Schmitt–, según el cual la apropiación de la tierra de manera forzosa generaría una serie de derechos en los ocupantes para ejercer el dominio sobre la misma y sus habitantes al tiempo que reordenaría el espacio¹. En cambio, el asentamiento y ejercicio de la jurisdicción fue un proceso muy dinámico, basado en interacciones entre distintas comunidades y agentes que contribuyeron a la creación de un nuevo espacio, con fronteras nuevas, a través de la práctica política².

El término jurisdicción, entendido en este contexto como la capacidad para el uso de un poder arbitral superior, podía tener connotaciones tanto personales como territoriales y se presenta, por ello, como una herramienta muy versátil para explicar las complejidades de la formación política en el Nuevo Mundo. El establecimiento jurídico de una población podía ser considerado como una reclamación *a priori* del espacio, con la creación de una jurisdicción precisa. Sin embargo, para que ese poder pudiera ser realmente efectivo debía ser ejercido y reclamado, generando con ello una legitimidad para el uso de la autoridad jurisdiccional³. Esa legitimidad era la que podía ser contestada, negociada o impuesta, en función de los casos y la que generó una serie de problemas que encontraron soluciones diversas sobre el terreno a través de la práctica⁴.

En Castilla del Oro, el uso de la jurisdicción estaba definido de manera prioritaria, como se verá, por la capacidad para establecer relaciones pacíficas con los indígenas, teóricamente encaminadas a su conversión religiosa y reducción a una vida «civilizada» regulada por el Derecho. Esa capacidad precisaba de la existencia de un anclaje territorial –si bien basado más en la existencia de una comunidad política que en su presencia física sobre el terreno– para ser viable en el largo plazo. Además, la existencia de una comunidad política local facilitaría la relación directa con los cacicazgos al establecerse como un interlocutor paralelo a nivel demográfico y geográfico. El ejercicio de la jurisdicción transitó, pues, desde un estado «ambulante», ejercida por un individuo con capacidad para ejercer el poder, al

¹ Carl SCHMITT (2002), p. 45.

² Lauren BENTON (2001), pp. 373-401; sobre la participación de agentes diversos, tanto individuales como colectivos, en estos procesos, ver Tamar HERZOG (2015), Introducción; Elisa CASELLI (2016); Jose Miguel ESCRIBANO PÁEZ (2016a), pp. 11-13; una adaptación al caso anglo holandés en Norte América en Sabine KLEIN (2011), pp. 324-347.

³ David BEETHAM (1990) pp. 60-61; Michael BRADDICK (2000), pp. 68-71.

⁴ Angelo Torre advertía sobre las posibilidades para el análisis de la práctica política que se abrían en contextos de «competition between jurisdictions», Angelo TORRE (2009), p. 319

asentamiento sobre un territorio más o menos definido y estable⁵. Ese tránsito –esa «territorialización» de la jurisdicción- sin embargo, no fue inmediato, sino que fue, en cambio, un proceso largo que, en ocasiones, no encontró un final definitivo a lo largo de todo el periodo colonial.

La toma de posesión del territorio fue un proceso complejo que implicaba los preceptivos rituales simbólicos pero que no se ejecutaba si no se actuaba sobre el terreno, haciendo efectivo el dominio de la tierra y alterando su propia condición jurídica, superponiendo una nueva estructura sobre la ya existente. La configuración del espacio político en el Nuevo Mundo fue un largo proceso que se basó en la proyección y difusión de la autoridad real –a través de las fundaciones- en varios depósitos, que se iban agregando a su vez para dar lugar a las gobernaciones, que acabarían dando paso a los virreinos. El proceso se iniciaba con la delegación de la autoridad regia en las huestes que, transformadas en comunidades políticas a través de las fundaciones, contribuían a ampliar a través de la agregación de los espacios jurisdiccionales.

García de Castrojeriz había resumido, en clave aristotélica, que «reino no es otra cosa si non ayuntamiento de muchas ciudades so un rey a quien pertenece defender todas las partes del su reino e ordenar las unas ciudades e el poderío civil a defendimiento de las otras e de cada una de ellas»⁶. Décadas después, Diego Pérez de Mesa seguía ahondando en el mismo tópico, «cualquier todo que en sí contiene e incluye otros todos, es más principal que ellos, pues los contiene como partes que al todo principal se ordenan»⁷. Cada una de las ciudades que se fueron fundando en Indias, y sobre las que se trató en el capítulo anterior- sería un *todo* que, juntas, formarían un *todo* superior –en este caso la gobernación de Castilla del Oro- que actuaba como parte del *todo* mayor que era la Monarquía Hispánica. Es decir, según un planteamiento asentado en el derecho común, cada parte del sistema político mantenía su propia identidad para componer por agregación una entidad política superior⁸.

De esta manera –si bien utilizando diferentes estrategias- se habían organizado las provincias y los diferentes reinos que configuraron la «monarquía compuesta» de los

⁵ Sobre el concepto de espacio político y la territorialización de la jurisdicción ambulante, Antonio M. HESPANHA (1993), pp. 85-121; ver también, aplicaciones a casos concretos en Tamar HERZOG (2002), pp. 162-182; Darío BARRIERA (2013); Marta HERRERA ÁNGEL (2014); Benedetta ALBANI, Samuel BARBOSA y Thomas DUVE, (2015), pp. 9-14; Jorge DÍAZ CEBALLOS (2018b).

⁶ Juan GARCÍA DE CASTROGERIZ (1494), f. 153r.

⁷ Diego PÉREZ DE MESA (1980), I, 1.

⁸ Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO (1987), pp. 520-527; Antonio M. HESPANHA (1993), p. 100, n. 33; Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO (2008), pp. 111-119; recientemente se ha destacado como «viejo estereotipo» la imagen de la Monarquía Hispánica como un sistema de lealtad y obediencia unidireccional y automático, en Bartolomé YUN CASALILLA (2019).

Austrias⁹. El mismo principio, que formaba parte de la propia naturaleza del sistema, operaba para la construcción interior de los distintos reinos y gobernaciones, que se formaban a través de la agregación de diferentes poblaciones que, a su vez –por concluir con la metáfora de raíz aristotélica- se componían de familias que se agrupaban en barrios. Según Solórzano y Pereira los «municipios era unos lugares pequeños a donde por razón de la labranza, o por otras conveniencias hacían *agregar* algunas gentes y que allí asentasen sus casas y domicilios...»¹⁰.

Castillo de Bovadilla contribuía al mismo argumento al considerar que casas, ciudades y reinos se habría de gobernar de la misma forma y siguiendo los mismos principios, Tommaso Campanella concluía en sentido inverso, pero con la misma lógica: «no puede regir el mundo quien no puede regir un imperio, ni un imperio quien no puede un reino, ni un reino quien no puede una provincia, ni una provincia quien no puede una ciudad, ni una ciudad quien no puede una aldea, ni una aldea quien no puede una familia, ni una familia quien no puede una casa, ni una casa quien no puede regirse a sí mismo, ni regirse a sí mismo quien no puede someter a razón sus pasiones»¹¹.

Pocos años después de la obra de Castillo de Bovadilla, en 1602, Juan Fernández Medrano definiría el reino «o provincia es copia de ciudades, villas y lugares constituidos de muchas familias» para añadir que «no hay otra diferencia entre la administración de una ciudad o de un reino, sino que en la una parte se gobiernan más gentes y en la otra menos, aunque del gobierno de la ciudad nació el reino»¹². Cada pieza, por lo tanto, formaba parte del mismo entramado sin perder por ello su condición individual, con su propia capacidad de negociación de su legitimidad, si bien conectada con el resto, pero independiente a la hora de reclamar su parcela de poder y de interactuar con otros poderes, ya fueran indígenas o castellanos, vecinos.

La variante que presenta el caso del Nuevo Mundo era que, para agregarse, previamente debían crearse las poblaciones que habrían de unirse, y se produce la paradoja de que el propio poder real debía atomizarse para, posteriormente, alimentarse de gentes, territorios, recursos y espacios de poder. En su traducción de *De Officiis* de Cicerón, Alonso

⁹ John H. ELLIOTT (1992).

¹⁰ Juan SOLÓRZANO PEREIRA (1647), lib. II, cap. 24, 29.

¹¹ Jerónimo CASTILLO DE BOVADILLA (1597), proemio, 9: «como quiera que juntándose casas con casas, y familias de hombres particulares a otras, vienen por sucesión de tiempo a poblarse y edificarse, y componerse aldeas, villas, ciudades, provincias, reynos e imperios». Tommaso DE CAMPANELLA (1982), cap. IX

¹² Juan FERNÁNDEZ MEDRANO (1602), Prólogo. Para un análisis de esta obra José María INURRITEGUI (1995), pp. 121-150.

de Cartagena anotaba en un margen una metáfora que, aplicada a la lógica política, explica este principio. Según Cartagena, «el sol y la virtud obran un efecto que cuando más se reparte más se lava, ensalza y glorifica»¹³. Así, cuanto más se repartiese el poder real, o cuantos más focos jurisdiccionales contase, sería más potente. La fundación de ciudades, de depósitos de la república, agrandaría por agregación el poder real, de manera que cuantas más hubiera, más posibilidades tendría de ejercer ese poder¹⁴. Al desmembrarse una nueva villa de una ciudad preexistente o al crearse directamente *ex novo* se estaba creando un nuevo ámbito jurisdiccional «por sí y sobre sí», es decir, un nuevo territorio en el que se podía ejercer el poder.

Los límites en los que un individuo podía ejercer jurisdicción estaban marcados por los que podía ejercer otro individuo sobre el mismo terreno y ambos debían tener legitimidad para ello sancionada tácita o explícita y oficialmente por la Corona. La generación de esa superposición jurisdiccional generada por la fundación de poblaciones en el espacio concreto de Castilla del Oro, y los conflictos derivados de ella para intentar ordenarla, son el eje central de este capítulo.

Para ello se comenzará por explicar de qué manera el espacio político se fue alterando, a través de la redefinición de los territorios asignados a cada gobernador dentro de Castilla del Oro y cómo ese espacio interno de la gobernación se compuso a través de la definición jurisdiccional de cada una de las poblaciones. La comprensión e interpretación de los diversos cacicazgos indígenas fue decisiva a la hora de construir la gobernación de Castilla del Oro. Fueron esos cacicazgos los que marcaron los límites de las diversas ciudades y sobre los que se apoyaron los procuradores de cada población para componer el mosaico de jurisdicciones de la gobernación. Dos casos de estudio, cada uno en un extremo del istmo de Panamá, servirán en la segunda parte del capítulo para poner sobre la mesa cómo la jurisdicción podía ser *creada y destruida* en función de la existencia de una población de castellanos y, sobre todo, en función de su utilidad de para *ejercer* esa jurisdicción. La capacidad de las poblaciones para entablar relaciones fluidas con los indígenas y granjearse su apoyo era el punto esencial que permitía asentar la jurisdicción y permitir que esta tuviera continuidad.

En ese sentido, los conflictos generados entre autoridades castellanas en el Valle de Ulancho en 1526, en el Golfo de Urabá entre 1534 y 1536 y en la zona de Veragua entre los

¹³ *Cicerón en Romance*, s. XV, BNE, MSS 7815, f. 43v.

¹⁴ Helen NADER (1996), pp. 215-223.

años 1540 y 1542 servirán de campo de pruebas para ofrecer una interpretación de la formación de las fronteras entre gobernaciones en el Nuevo Mundo. Las disputas por la creación y ejercicio de la jurisdicción permitirán dibujar una interpretación de un término que encapsulaba la capacidad teórica para ejercer el poder en el Antiguo Régimen y que encontró vías de aplicación dinámica a través de la práctica política en el Nuevo Mundo¹⁵.

1. Fronteras interiores y jurisdicción territorial.

El proceso de definición de las jurisdicciones de las nuevas poblaciones de Castilla del Oro implicó una adaptación del espacio de la región. Esta adaptación se produjo fruto de la puesta en marcha de diversas estrategias que alteraban la condición del territorio al tiempo que definían uno nuevo. La territorialización del espacio político, resumido en los límites jurisdiccionales, implicó la conversión de las «jurisdicciones ambulantes», ejercidas por las autoridades políticas de manera personal, en unas jurisdicciones territoriales, cuya titularidad se encontraba en los cabildos¹⁶. Este proceso implicaba, por un lado, la definición precisa de la autoridad entre los castellanos y, por otro, el conocimiento de los espacios y sus límites para poder adaptarlos a los modelos jurídicos castellanos.

El conflicto jurisdiccional surgido entre Balboa y Pedrarias descrito anteriormente tuvo que ver con la cancelación de la jurisdicción ambulante de Balboa para sustituirla por el intento de definición de un espacio político concreto. La concesión del adelantamiento y gobernación de Panamá y Coiba a Vasco Núñez de Balboa en septiembre 1514, dos territorios apenas explorados y cuyas referencias estaban más cerca de la mitificación y la indeterminación geográfica que de los datos reales, había supuesto la creación de un espacio jurisdiccional intermedio bajo la gobernación de Castilla del Oro, en ese momento gobernada por Pedrarias¹⁷. Como adelantado, Balboa tendría las mismas atribuciones que «usan nuestros adelantados en los reinos de Castilla» que, aunque desdibujadas respecto a los tiempos de la Reconquista, seguían implicando mando militar en la frontera y ciertas competencias en la administración de justicia¹⁸. Balboa nunca pudo acudir a reclamar físicamente ese territorio,

¹⁵ La *iurisdictio*, entendida desde la teoría jurídica medieval como la capacidad para restaurar un orden social alterado, en Pietro COSTA (1969); sobre su evolución ulterior hacia una paulatina «politización» en los ámbitos de la Monarquía Hispánica en Pedro CARDIM (2008), pp. 349-388.

¹⁶ Antonio M. HESPAÑA (1993), p. 102 y ss.

¹⁷ Panamá y Coiba eran descritos como parte de «la Tierra Nueva de aguas vertientes a la Mar del Sur que es desde lo alto de las montañas e sierras que responden a la parte del norte sobre la costa de Veragua y de las vertientes de las dichas montañas y sierras hacia la mar del sur», Real Provisión nombrando a Vasco Núñez de Balboa gobernador de las provincias de Panamá y Coiba, 23 de septiembre de 1514 AGI, Panamá, 233, L.1, ff. 173v-174v.

¹⁸ Real Provisión nombrando a Vasco Núñez de Balboa Adelantado en la Costa de la Mar del Sur, 23 de septiembre de 1514, AGI, Panamá, 233, L.1, f. 174v. Fernando Mexía en su *Nobiliario* publicado en 1479 lo

a pesar de haber incluso iniciado recluta para llevarlo a cabo, si bien su nombramiento seguía en vigor, siempre sujeto a la autoridad de Pedrarias.

La resolución de este conflicto, con la ejecución de Balboa, facilitó una nueva reordenación del espacio jurisdiccional de Castilla del Oro con la eliminación de la gobernación intermedia que se había creado con su nombramiento como gobernador y adelantado. Con la negación de la apelación que ejerció, Pedrarias Dávila hizo un uso político de la justicia que desencadenó consecuencias de cara a la redefinición jurisdiccional de la gobernación¹⁹. Desaparecido Balboa, desaparecían sus pretensiones hacia un territorio sobre el que podría reclamar autoridad, si bien se encontraba en todo caso dentro de la gobernación de Castilla del Oro. En este momento, con su ejecución, ya no había dudas sobre la posibilidad de que Pedrarias, como gobernador de Castilla del Oro, acudiese para explorar y eventualmente ocupar los territorios de la zona llamada Panamá.

El 19 de enero de 1519, como parte del nuevo proceso de territorialización de Panamá, tras la ejecución de Balboa y como una vía simbólica para redefinir el espacio de toda la región de la Mar del Sur, Pedrarias Dávila había llevado a cabo su propia toma de posesión de la Mar del Sur. Los rituales de toma de posesión, de amplia tradición a lo largo de la Reconquista y que Colón llevó a cabo al llegar a Guanahaní, habían sido codificados para el Nuevo Mundo pocos años antes en las instrucciones a Juan de Solís de 1514²⁰. Sin embargo, aunque estas tomas de posesión tenían un peso importante, y así han sido tradicionalmente interpretados, como reclamación jurídica frente a potencias extranjeras, indígenas o, como en este caso, ante conflictos jurisdiccionales en el propio seno del poder castellano, no conviene sobredimensionar su importancia²¹. La fundación de poblaciones

definía como «juez mayor de aquella tierra de donde es adelantado. Algunos tienen señorío, otros no salvo el juzgado. Aquí es de notar que el adelantamiento es dignidad y oficio honorable y muy antiguo», Fernando MEXÍA (1479), ff. 46v-47r BNE MSS 3311; Luis GARCÍA VALDEAVELLANO (1986), pp. 508-10; Alfonso GARCÍA-GALLO (1972), p. 709 y 625-629.

¹⁹ Tamar HERZOG (1995), pp. 903-911; Romina ZAMORA (2007), pp. 457-477; Carlos GARRIGA (2006), p. 89.

²⁰ Ver la toma de posesión de Granada en 1492: Andrés BERNÁLDEZ (1962), cap. CII. En 1480 Juan Ruiz de Medina tomó posesión de la villa de Simancas para incorporarla a la Corona Real con una serie de actos simbólicos que recuerdan también a los llevados a cabo en Indias, AGS, PTR, leg. 32, doc. 47; Cristóbal COLÓN (1982), p. 30; Asiento que hizo el rey con su piloto mayor Juan Solís, 24 de noviembre de 1514, CODOIN, t. 39, p. 323 y ss. Las instrucciones a Solís destacaban que la posesión se ha de hacer «estando vos en la tierra, ó parte que descubrieredes, hagais ante escribano público y el más número de testigos que pudiéredes, e los mas conocidos que hubiere, un abto de posesion en nuestro nombre, cortando árboles é ramas, é cabando ó haciendo, si hobiere disposición, algun pequeño edificio». Se le indica también que debe describir la zona en la que se encuentra «é decir cuántas leguas está de la mar, poco más o menos, é a qué parte, é qué señas tiene». Para asentar la jurisdicción, ya reclamada por la construcción de algún edificio debe además «hacer allí una horca, é que algunos pongan demanda ante vos, é como nuestro capitán é juez lo sentencieis e determineis, de manera que en todo tomeis la dicha posesión».

²¹ Carl SCHMITT (2002), p. 112; Ken MACMILLAN (2009), p. 8; Juan GELABERT (2009), pp. 187-208, esp., p. 195; Patricia SEED (1992); resulta particularmente interesante la interpretación que realiza Lauren Benton del trabajo de Seed, en concreto sobre la «lectura» que las diferentes potencias podían realizar sobre los actos de

estaba vinculada al cambio que se operaba en el territorio al actuar sobre él, de manera que el efecto de una fundación era más duradero y, en cierto modo, completaba el de la toma de posesión, que se limitaba a ser una reclamación jurídica en base a unos derechos sostenidos básicamente en la fuerza de la ley.

Estos actos de toma de posesión debían ser necesariamente acompañados de hechos constitutivos con carácter efectivo, en este caso la creación de un nuevo anclaje jurisdiccional en forma de población y esta, a su vez, debía mostrar su capacidad para actuar sobre el territorio. La originalmente llamada gobernación de Panamá y Coiba concedida a Balboa se transformó, apenas 8 meses más tarde, en los territorios de la villa de Panamá, adaptado así su categoría política desde una gobernación de rango mayor a una unidad política urbana. Con la creación de la villa de Panamá, formalmente el 15 de agosto de 1519, la hasta entonces jurisdicción ambulante que ejerciera Balboa sobre un territorio apenas conocido e inexplorado, encontraba una territorialización expresa y, a partir de ese momento, podía ocupar y negociar sus propios límites en tanto que entidad jurisdiccional.

En el momento en el que cuestionaba la licitud de la pretensión de Balboa a las regiones de Panamá y Coiba, Pedrarias Dávila argumentaba que esas regiones no se le podrían conceder porque no estaba claramente definida su identidad. «Aquí por provincia», decía, «entendemos los límites de un cacique» y no algo diferente²². Pedrarias acusaba, en ese mismo momento, a Balboa de reclamar la autoridad sobre un territorio que no conocía y sobre el cual, por tanto, no podría legítimamente ejercer jurisdicción. En base a esa comprensión de la realidad del espacio de los cacicazgos como un referente válido para la organización política de las fundaciones castellanas se explica el tipo de referentes que se tomaron para marcar los límites de cada población.

En el mismo año en que la villa de Panamá fuera asentada se envió un procurador a la Corte para que buscara la aprobación final de lo ya negociado sobre el terreno, es decir, de los límites jurisdiccionales de ésta y, por extensión, del resto de las nuevas poblaciones. En la negociación y concesión de esos términos, los referentes que se tomaron fueron

toma de posesión de cada una. Según Benton, Seed minusvalora la capacidad de los distintos sistemas legales para entender a los otros mientras que ella argumenta en el sentido de unos «familiar terms of structured legal pluralism that the colonizers knew», en Lauren BENTON (2002), pp. 12-15, esp. n. 13. En otro lugar Benton y Strautmann han considerado que el argumento de Seed respecto a que cada potencia europea llevaba a cabo actos de toma de posesión «nacionales», simplemente «does not hold up», Lauren BENTON y Benjamin STRAUTMANN (2010), p. 31. Seed ha recibido críticas similares por parte de John H. ELLIOTT (2006), p. 610, n. 7. Un ejemplo evidente de ese sistema legal «complejo y polivalente» en el que los actos jurídicos eran creadores de derechos en Tamar HERZOG (2001), p. 303. Apelando, aunque sin invocarla específicamente, a la doctrina de la *Res Nullius*; John H. ELLIOTT (2006), p. 66.; Anthony PAGDEN (1988), p. 122.

²² Representación de Pedrarias Dávila... RAH, col. Muñoz, t. 75, ff. 333r-333v.

precisamente los que Pedrarias indicaba, es decir, en general «los límites de un cacique». Por ello, se indicaban los límites de Panamá haciéndolo coincidir de manera mixta con los cacicazgos y las nuevas poblaciones de castellanos.

Se planteó que por el Este llegasen los términos de la ciudad hasta «las provincias de Chepavera e Pacora e Chepo hasta donde se parte tierra e terminos de la provincia de Chepo con Tubanama». Por la parte norte «desde la dicha provincia de Chepo toda la tierra e provincyas que son en las aguas vertientes a la mar del sur hasta la provincia del cacique que se dice Atarachirubi». Como la población de Nombre de Dios estaba hacia el norte, ante su posible crecimiento se debían anticipar los límites que incluirían la partición de las provincias de Juanaga y Pequeamichagre, una mitad pertenecería a los términos de Nombre de Dios y la otra a Panamá, incluyendo así la provincia de Chagre «que los cristianos llaman el caçique Viejo»²³. El uso de la tercera persona —«los cristianos llaman»— en esta última referencia refuerza el intento de incorporación que se hacía de los nuevos referentes con el fin de lograr una cierta titularidad mixta de la tierra y permitir una cierta tolerancia que permitiese el asentamiento.

Dos años más tarde, en septiembre de 1521, cuando Francisco de Lizaur y Benito Hurtado acudieron a la corte como procuradores de Panamá para negociar ciertos privilegios, se redefinieron los límites jurisdiccionales de todas las poblaciones del istmo y, de nuevo, se tomaron como referentes de demarcación los cacicazgos indígenas, además de los accidentes naturales asociados a estos²⁴. En esa ocasión incluso se dejó previsto un hueco entre las cuatro poblaciones que existían en ese momento para que fuese rellenado de jurisdicción más adelante: «en el comedio del camino de la dicha ciudad del Darién y las villas de Acla y el Nombre de Dios», que era necesario, pues había un término redondo de tres leguas de ancho que había que llenar. Así, esa supuesta nueva población debía establecerse en el lugar en que «los otros términos que con ellos se juntan»²⁵.

El acta de fundación de la ciudad de Natá también recogía referencias de los cacicazgos indígenas para sus límites. Por el oeste hasta la provincia «que se dize de Güera y Tuclagala, Tanguria» porque esos términos se reservaban para la posible nueva fundación en la provincia de Chiriquí. Dentro de los límites de Natá por el oeste quedaban, sin embargo, «la provincia de Pera, Churuta, Cutay, Pacate, Tebasara y Terenza». La parte sur quedaría

²³ Las condiciones con que los vezinos de la çibdad de Panama poblaron y hedificaron en ella y el governador Pedrarias Davila les otorgo que suplica a v. al. les mande otorgar e confirmar de nuevo son las syguientes., AGI, Panamá 30, N. 1.

²⁴ Términos de la ciudad de Panamá, 6 de septiembre de 1521, AGI, Panamá 233, L. 1, ff. 298-299v.

²⁵ Real cédula a la ciudad de Panamá, 6 de septiembre de 1521, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 288v-290r.

marcada por la inclusión de la provincia de Chirú pero la exclusión de la de Güera aunque sí se incluían 50 leguas de mar del norte «con todas las islas y puertos que se incluyeren». El límite por el este lo marcaría la provincia del cacique Chacome o, lo que era lo mismo, «los términos de la ciudad de Panamá».

(MAPA 3)

Mapa 3. Límites jurisdiccionales de las ciudades de Panamá, Nombre de Dios y Natá, con las referencias a los cacicazgos implicados²⁶.

De esta manera, los términos de los cacicazgos y los de las ciudades fundadas por los castellanos se hacían coincidir y actuaban como marcadores de las nuevas jurisdicciones y, a su vez, podrían contribuir a facilitar la distribución de los diversos repartimientos con los que los castellanos aspiraban también a aprovecharse del trabajo indígena (ver mapa 3). En caso de duda, el acta de fundación de Natá se encargaba de determinar que los límites de esta ciudad fenecen «donde fenecen los de la provincia de Chirú». Ese espacio actuaría como partición de los términos de Natá y Panamá, colocando en ellos mojones y rayas de reparto. El texto del acta insistía en considerar que, si alguno de los cacicazgos atravesase los términos que se estaba definiendo para las nuevas poblaciones, «en tal caso la provincia y cacique quede por términos de la ciudad [...] partiéndose de la manera y por el paraje que dicho estuviere»²⁷. Por último, se incluían otra serie de cacicazgos –Carache, Rubre y Xilusurí– como marcadores de los límites entre Natá y Panamá. Como se puede observar, el conocimiento previo de las provincias indígenas era necesario para acomodar las nuevas jurisdicciones creadas en el proceso fundador.

En el tránsito de ese conocimiento también se simplificaba en cierto grado la complejidad de la estructura territorial de los cacicazgos, a fin de acomodar de manera comprensible los límites de las fundaciones²⁸. En ese sentido, también los castellanos, al definir los límites de sus poblaciones, contribuyeron a reedificar las estructuras de los cacicazgos y sus propias fronteras, interpretándolas como jurisdicciones estables y soslayando los movimientos regionales y el dinamismo de muchos de los grupos indígenas.

²⁶ Elaboración propia a partir de Términos de la ciudad de Panamá, 6 de septiembre de 1521, AGI, Panamá 233, L. 1, ff. 298-299v; Real cédula a la ciudad de Panamá, 6 de septiembre de 1521, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 288v-290r; Acta de fundación de Natá, AGI, Panamá 32, N. 54; JACQUES NICOLAS BELLIN, *Carte de l'Isthme de Panama et des provinces de Veragua Terre Firme et Darien*, Paris 1764, BNF, Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (9185); JUAN LÓPEZ, *Carta marítima del Reyno de Tierra Firme u Castilla del Oro, comprehende el istmo y provincia de Panamá, las provincias de Veragua, Darién y Biruquete*, 1785, BNE MR/2/166; Mary HELMS (1978), pp. 41 y 52; Kathleen ROMOLI (1987), p. 33. Utilizando https://d-maps.com/carte.php?num_car=1836&lang=es

²⁷ Francisco SOLANO (1996), pp. 54-69.

²⁸ Mary HELMS (1978); sobre la consideración de la lengua cueva como *lingua franca* de todos los cacicazgos del istmo, Kathleen ROMOLI (1987); Richard COOKE (2005), pp. 129-187.

En todo caso, sin un cierto interés y adhesión tácita de ciertos sectores de la sociedad indígena en el istmo, no habría sido posible la definición de unos límites jurisdiccionales que, si bien contestados sistemáticamente, comenzaban a definir un espacio político mixto –castellano e indígena- en Castilla del Oro.

Tras el proceso de desgajamiento jurisdiccional que significó el encadenamiento de fundaciones urbanas derivadas de Santa María del Antigua, el siguiente paso fue la agregación de estas para componer el espacio político de Castilla del Oro. Siguiendo esta lógica agregativa, cada población era tan importante como la anterior y cada una de ellas resultaba fundamental a la hora de componer la gobernación²⁹. Eran, por lo tanto, las poblaciones las que definían, por agregación, el espacio político y jurisdiccional de las gobernaciones. Estas adquirirían, no la forma de un «archipiélago», pues en la conformación de Castilla del Oro no habría «una distancia mínima de la jurisdicción de cualquier otra población», sino más bien la de un *puzle* cuyas piezas encajaban para formar una imagen completa, que era la gobernación³⁰. Las propias poblaciones, una vez adquirida y negociada una jurisdicción, tenían incluso la capacidad para decidir, en ocasiones, entre formar parte de una u otra gobernación en función de sus intereses, alterando con esto los límites y fronteras de estas. Como se verá a continuación, la existencia o no de una población en un determinado lugar, y su capacidad para crear y negociar su jurisdicción, alteraba los límites de las gobernaciones, dotando de gran flexibilidad tanto al proceso de integración territorial y de las gentes dentro de una estructura imperial como a la propia construcción de ésta.

2. *La creación del Valle de Ulancho, 1523-1528.*

A finales de 1523, por orden de Pedrarias Dávila, Francisco Hernández de Córdoba había iniciado desde Castilla del Oro una expedición por la región de Nicaragua (ver mapa 4). A la altura del 10 de abril de 1525, Hernández de Córdoba ya había fundado Bruselas, Granada y León, en las orillas del lago, y habría construido iglesias en una región con una gran cantidad de población³¹. De manera casi paralela, en el otro extremo de la región, el 18 de mayo de 1525 el escribano Juan de Saldaña levantaba acta «en el cabo de Honduras» de la fundación, en nombre de Hernán Cortés, de la villa de Trujillo³². Gil González Dávila, bajo

²⁹ Sobre el carácter agregativo de la composición de la Monarquía Hispánica en Indias, ver Xavier GIL PUJOL, (2012b), pp. 69-108; sobre la teoría que sustentaba la importancia relativa de cada una de las piezas que componían una gobernación Helen NADER (1996) y sobre la unión personalizada de cada una de las ciudades, estén donde estén, con el monarca, Fernando BOUZA (2010), pp. 70-78.

³⁰ Tamar HERZOG (2001), pp. 293-303.

³¹ Bethany ARAM (2008), p. 184.

³² Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY (1984), pp. 93-94.

la misma autoridad y un año antes había fundado la villa de la Natividad frente a las costas de Yucatán. Esas series de fundaciones urbanas enmarcaban los límites dentro de los cuales se extendía un espacio ambicionado por ambas gobernaciones. Al sur de Trujillo y Natividad y al noreste de León y Granada se extendía un amplio espacio cuyos límites no eran conocidos de manera precisa y que comprendían las zonas llamadas Puerto Honduras (explorado por Colón durante su tercer viaje), valle Hermoso, golfo de las Higueras y valle de Ulancho.

(MAPA 4)

Mapa 4. Área de conflicto entre las gobernaciones de Castilla del Oro y Nueva España³³.

Este último espacio, muy poco explorado, encerraba sin embargo la promesa de grandes riquezas que se buscaba aprovechar. Las noticias sobre «las diferencias que en la provincia y golfo de las Higueras ha habido» entre estos capitanes, «con las poblaciones que cada uno dellos queria haçer y la resistencia de ambas partes» habían alcanzado la Corte, donde se decidió en noviembre de 1525 unificar las regiones de cabo de Honduras e Higueras en una sola gobernación y nombrar a Diego López de Salcedo como su gobernador³⁴. No obstante, entre la creación de urgencia de una gobernación que acabase con las disputas que se iban fraguando y la llegada de Salcedo al territorio durante el otoño de 1526, la situación se volvió aún más compleja.

Pedrarias Dávila había recibido las primeras noticias sobre la rebelión de Hernández de Córdoba en agosto de 1525 y la confirmación de estas en febrero de 1526; cuando el veterano gobernador se disponía a acudir a combatirle recibió la noticia de que Martín de Estete le había capturado en Granada (Nicaragua). Pronto fue juzgado y condenado en León, donde fue ejecutado en julio de 1526. Una de las acusaciones que se hicieron a Hernández de Córdoba fue la de haber intentado entregar a Hernán Cortés los territorios que tenía controlados en nombre de Castilla del Oro. De hecho, Pedro de Alvarado llegó, a comienzos de 1526, a cuarenta leguas de la ciudad de Granada «y su venida fue a entrarse en la tierra que Francisco Hernandez tenia poblada y tenella por don Hernando Cortés». Sin embargo, Alvarado «se volvio por donde avia venido» al encontrar que Pedrarias Dávila «ya había

³³ Elaboración propia a partir de Mapa principal de la Provincia de Nicaragua, 3 de octubre de 1716, AGI, MP Guatemala 17; Carte de l'Amérique Centrale, BL, HMNTS 10480, f.21. Utilizando https://d-maps.com/carte.php?num_car=1756&lang=es

³⁴ Traslado del título de gobernador de la provincia y golfo de las Higueras, a favor de Diego López de Salcedo, 20-11-1525, AGI, Patronato, 193, R. 11.

apresado a Hernández de Córdoba»³⁵. La ejecución de Hernández de Córdoba no puso fin al conflicto, pues Hernán Cortés mantuvo el interés por controlar, al menos, una parte de esa región desconocida. El conflicto tomaría ahora otros derroteros, siguiendo los cuales se puede percibir la importancia de la creación de la jurisdicción para reclamar el poder.

El 12 mayo de 1526, Bartolomé de Celada recibió un poder de Hernando Saavedra —a su vez teniente y justicia mayor de las villas de Trujillo y la Natividad en nombre de Hernán Cortés— para poder fundar una nueva población de españoles en la provincia del valle de Ulancho, partiendo desde la villa de Trujillo hacia el sur. El proceso fundador comenzó a rodar y pronto la expedición tomó posesión de diversos pueblos, haciendo y levantando acta de cuantos actos simbólicos se llevaban a cabo para que no pudiera quedar ninguna duda sobre la legitimidad de la ocupación del espacio. Finalmente, el día 2 de junio de ese mismo año, el escribano levantó acta de la fundación de la villa de Cáceres de la Frontera, con concejo, justicia y regidores, «e se puso horca y picota para que gozase como goza de mero y mixto imperio como villa de su majestad»³⁶. La referencia a los símbolos del ejercicio de la justicia contribuía a remarcar el carácter local de la aplicación de la justicia, reforzado simbólicamente por la presencia de la picota y horca en el centro de la plaza mayor como marcadores de la jurisdicción.

Además, repartieron los solares y dotaron de términos jurisdiccionales a la nueva población que quedaba así fundada «debajo de poderío y amparo de su majestad». La villa de Cáceres de la Frontera sería así un hecho jurídicamente irreprochable, que llevaba aparejada la creación de una nueva jurisdicción que emanaría de ella y que actuaría a favor de la pacificación de los indígenas. Con esta fundación, el territorio del valle de Ulancho sobre el que se asentaba habría pasado oficialmente a formar parte de la gobernación de Nueva España, en cuyo nombre se había descubierto y tomado posesión muchos valles y provincias hasta el puerto y cabo de Honduras, lo cual protestaban «declarar por autos de posesión e cruces y otras señales» hasta la provincia de Veragua³⁷. De toda esta toma de posesión de

³⁵ Carta de Diego Albítez, informando del estado de la provincia y relaciones entre Pedrarias Dávila, gobernador y Francisco Hernández, su teniente, 25 de diciembre de 1526, AGI, Guatemala, 49, n. 1; Bethany ARAM (2008), p. 187.

³⁶ Testimonio de la fundación de la villa de la Frontera de Cáceres, en Honduras, y de su posesión por Bartolomé de Celada en nombre de Su Majestad, 12 de mayo de 1526, AGI, Patronato 20, n. 4, r. 2.

³⁷ «los valles, provincias y pueblos de Zulacomamani, Talanca y Galta, Quefalpa, Agalteca o Ylanche e por la costa de la banda del nombre desde el río de los Cristianos a Río de Tayasal e la Costa de Ariba, golfo Dulce, Tecosiste, Puerto de Sant Andrés e Valhama Pochi, Puerto de la Sal, Xagua, Triunfo de Cenza, el ancón de Zoli, puerto e cabo de Honduras e otros muchos pueblos e provincias que protestamos declarar por autos de posesión e cruces y otras señales parecerá hasta la provincia de Veragua», Expediente sobre la población y despoblación de la villa de la Frontera de Cáceres, en Nueva España, 20 de agosto de 1526, AGI, Patronato, 20, n. 5, r. 2, f. 2v.

esas provincias, el hecho más importante y que efectivamente crearía una nueva jurisdicción que podía extenderse a lo largo de un territorio, era la fundación de la villa.

La placidez con la que esa villa se había fundado y la supuesta pulcritud del hecho jurídico se iba a ver, sin embargo, enfrentadas a problemas pocas semanas más tarde. El 24 de julio, Benito Hurtado entraba, en nombre de Pedrarias Dávila, en el valle de Ulancho «con intención de despoblar» la villa de Cáceres de la Frontera. La expedición de Hurtado formaba parte de la reorganización de las fundaciones que Pedrarias quería llevar a cabo tras la ejecución unos días antes de Hernández de Córdoba. Entre las órdenes que Hurtado tenía se encontraba la de, precisamente, apuntalar la fundación de Villa Hermosa en el Valle de Ulancho, a sesenta leguas del puerto de Honduras, a fin de precisamente, reclamar para sí esa jurisdicción³⁸. Al encontrar poblado Cáceres de la Frontera, la reacción no se hizo esperar. Benito Hurtado entró en Cáceres de la Frontera y las autoridades se aprestaron a requerirle que saliese, pues ellos tenían justo título para estar allí y él había entrado «tiránicamente» y había metido vara de justicia «en jurisdicción ajena» lo cual atentaría contra el ejercicio del poder real.

Benito Hurtado no se plegó al requerimiento que le hizo la villa de Cáceres de la Frontera, sino que contraatacó con otro por su parte, en el que se declaraba «fundador e poblador de la Villa Hermosa en este val Hermoso por el muy magnífico Pedrarias Dávila», gobernador en los reinos de Castilla del Oro. Acusaba a los vecinos de Cáceres de ser apenas 10 personas —«y la mitad dolientes»— que se habían instalado en «dos o tres bohíos» de indios y que estaban además en los términos de Villa Hermosa, con lo cual serían ellos los que estarían «usurpando la jurisdicción real de sus majestades e del dicho gobernador en su nombre». Hurtado alegaba que había sido Gabriel de Rojas, en nombre de Pedrarias, quien primero había explorado esos valles y que, además, «mandó que todos los caciques labrasen e pusiesen muchos maizales»; pacificación que, según su testimonio, se había acabado con la fundación de Cáceres pues «se me vinieron a quejar los caciques» de que les estaban haciendo malos tratamientos. Hurtado, por lo tanto, acusaba a los enviados de Cortés de haber hecho una fundación ilegal pues «el mismo don Hernando Cortés no tiene poder para hacer alcaldes y regidores en su jurisdicción, cuando más en la jurisdicción ajena», tras lo cual les instaba a que, al día siguiente, jueves, saliesen «de los términos e jurisdicción de Villa Hermosa»³⁹.

³⁸ Bethany ARAM (2008), p. 188.

³⁹ Expediente..., 20 de agosto de 1526, AGI, Patronato 20, N. 5, R. 2.

Pedrarias y sus enviados, por lo tanto, estaban simplemente negando el derecho que amparaba tal fundación, e ironizando incluso sobre la propia importancia del hecho. Pedrarias Dávila y, en su nombre, Benito Hurtado, basaba su pretensión sobre todo en el valle en la fundación de Villa Hermosa y la creación de jurisdicción que esa fundación implicaría y, especialmente, el ejercicio de esta en la pacificación de los indígenas. Hernando de Saavedra se defendería del ataque de Hurtado apelando a similares argumentos. Fundaba su intención de controlar la región en la fundación de Cáceres de la Frontera y advertía que Pedrarias no tenía derecho alguno sobre ese territorio. Aunque lo tuviese, Hernando de Saavedra alegaba que los habitantes de Cáceres no podrían simplemente ser «desposeídos de la dicha villa ny tierra hasta en tanto que fuesemos vencidos por fuerza o por derecho conforme a las leyes de los reynos e señorios de la Real Majestad del Emperador». La fundación, jurídicamente asentada sobre el terreno, era el principal argumento que se esgrimía en ese momento para alegar posesión del territorio y reclamar su pacificación.

Benito Hurtado no se plegó a estos argumentos y, en lugar de esperar a una decisión «conforme a las leyes de los reinos», optó por la vía expeditiva. El 27 de julio Juan de Salcedo, teniente de Hurtado, con unos 80 hombres a pie y a caballo, llegó para asaltar la villa de Cáceres de la Fronteras, tomando presos a vecinos y a miembros del cabildo. Esta acción violenta provocaba, según los atacados, un «amenguamiento de los reinos e reales de Su Majestad», que se había llevado a cabo «sin lo consultar con su majestad, pues mandó quitar lo fecho no siendo primeramente la dicha villa oída». Salcedo llevó a los prisioneros frente a Benito Hurtado, quien se encontraba en un pueblo de indios cercano para expulsarlos de la villa y aún del valle de Ulancho. Las disputas entre los enviados de Pedrarias y los de Cortés no terminaron ahí, pues unos pocos días más tarde del desbaratamiento de Cáceres de la Frontera, se produjo un enfrentamiento entre un capitán de Benito Hurtado y otro de Hernando de Saavedra, a raíz del cual «murió un español»⁴⁰. El despoblamiento de la villa tendría, además, según algunos de los interesados, el efecto añadido de que los indígenas se pudieran alzar, al ver esta serie de enfrentamientos entre los castellanos⁴¹.

Pedrarias Dávila dio la clave de la situación en septiembre de 1526, cuando Hernando de Saavedra, ya devuelto a Trujillo, le instó a dar explicaciones sobre el asalto

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Así se desprende de las preguntas y respuestas contenidas en el interrogatorio que inició el gobernador Diego López de Salcedo cuando fue acusado de haber colaborado en el despoblamiento de la villa de Cáceres, Expediente seguido a petición del gobernador, Diego López de Salcedo contra Hernando de Saavedra, teniente de gobernador por Hernán Cortés, y el capitán Diego de Alvítez, puesto por Pedrarias Dávila, sobre la población y despoblación de la villa de Cáceres por Benito Hurtado, capitán de Pedrarias Dávila, 1528, AGI, Patronato, 20, N. 4, R. 3.

hecho en su nombre a Cáceres de la Frontera. Su preeminencia para poblar en esa tierra se originaba en la expedición que él había ordenado en 1523 para que Francisco Hernández de Córdoba explorase la zona para «descubrir e pacificar e convertir a nuestra santa fe católica los indios della» que fue «muchos años antes de que Hernán Cortés saliese de México». Su defensa continuaba aduciendo, como ya había hecho Benito Hurtado, que en realidad los habitantes de Cáceres de la Frontera no habían hecho «cosas que suelen hacer los pobladores», es decir, «hacer un pueblo, rozar y descubrir minas», sino que simplemente habían ocupado los bohíos de los indios, sin haber realmente asentado jurisdicción alguna. Para él, la jurisdicción no sólo debía asentarse a través de un acta de fundación, sino que debía ejercerse, especialmente al entrar en contacto con los indígenas de la tierra⁴².

Alegaba Pedrarias que, si Cortés tuviera autoridad del rey para poblar ese valle, «esta sería e fue ganada con falsa relación o al menos callada la verdad»: que Hernández de Córdoba ya tenía poblado el Puerto de Honduras y descubierto y tomado posesión del valle de Ulancho. Siguiendo su argumento, la población del Puerto de Honduras crearía una jurisdicción que afectaría hasta los territorios del valle de Ulancho, pues no se podía llegar hasta él sin pasar por el puerto, de manera que no se podría hacer otra población suplantando una jurisdicción por otra. A pesar de que Hernández de Córdoba ya había sido ajusticiado, los hechos que llevó a cabo en nombre de Castilla del Oro, en especial las diversas fundaciones, seguían teniendo validez a la hora de reclamar la jurisdicción del Valle de Ulancho. Pedrarias Dávila concluía su alegación dejando la decisión sobre ese conflicto de jurisdicciones entre Hernán Cortés y él en manos de la Audiencia de La Española, a pesar de que consideraba que había sido el único agraviado por los hechos, pues tenía su autoridad fundada en la antigüedad relativa de su actuación sobre el territorio. Pedrarias acataría lo que esa persona resolviese, pues en todo caso «esta tierra es de Su Majestad y Su Majestad la ha de dar a quien fuere servido»⁴³.

Tras remitir este largo discurso de descargo de responsabilidad, Pedrarias pasó a la acción. Escribió una carta a Hernando de Saavedra y, seguidamente, envió desde León a su procurador Diego de Albítez el 23 de octubre de 1526 para que le entregase la carta en persona en Trujillo. El objetivo del encargo a Albítez era doble. Por un lado, estaba el explícito cometido de acudir hasta Trujillo, entregar la carta y negociar que el regimiento de

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid, f. 15r.

Cáceres de la Frontera «se sometiese debajo de su gobernación»⁴⁴. Para hacer efectiva esa pretensión que Pedrarias depositaba en manos de Albítez, éste antes tenía que llevar a cabo un encargo si cabe más importante a la hora de reclamar la autoridad de un territorio. En su camino hacia el norte desde León debía entrar en Villa Hermosa –de cuya noticia sólo se tenía la pretensión de fundación por parte de Benito Hurtado- y efectivamente asentar la población. Debía de hacer un palenque y una caba, «donde no le puedan quitar el agua» y además debería dejar el lugar bien protegido y seguro.

Una vez asegurada la población y puestas las atalayas, se debería reunir el cabildo con el teniente, justicia y regimiento de Villa Hermosa para acordar qué asiento debería tener «que *se de* con la dicha villa de Trujillo y Puerto de Honduras». No mencionaba, por supuesto, la efímera villa de Cáceres de la Frontera, y se esforzaba por asentar los términos en relación con otras de las poblaciones fronterizas, que marcarían el territorio jurisdiccional que le correspondería, ahora sí, a Villa Hermosa. Tras estas gestiones de Albítez, nadie podría dudar sobre que los enviados de Pedrarias Dávila estaban haciendo «lo que los pobladores suelen hacer», es decir, estarían interviniendo sobre el terreno y ejerciendo la jurisdicción, más allá de simplemente reclamando su posesión en virtud de un asentamiento jurídico. En la carta que Albítez remitió meses más tarde para relatar el resultado de su misión contó cómo, cuando se encontraba en las cercanías de Trujillo, tuvo noticia de que Diego López de Salcedo «venía proveído por Vuestra Majestad por governador destas partes». Cuando Salcedo le enseñó los poderes que llevaba como gobernador, Albítez sólo pudo obedecerlos «con el acatamiento y reverencia que de vos soy obligado», confiando en que la llegada del gobernador pondría fin a las disputas que se sucedían desde al menos un año antes⁴⁵.

La llegada de Salcedo, sin embargo, a pesar del texto de su nombramiento en el que se le encomendaba en concreto que unificase las regiones de Higueras y Puerto Honduras, no solucionó un conflicto que se había hecho mucho más complejo entre su nombramiento y su llegada. Además de la confusión generada por el poblamiento y despoblamiento de Cáceres, en ese lapso de aproximadamente un año, un nuevo gobernador había sido nombrado para Castilla del Oro. Pedro de los Ríos, como sucesor de Pedrarias Dávila, tenía la intención de tomar control también de los territorios de Nicaragua «diciendo que le pertenecía también en su gobernación, pues Pedrarias la había tenido y poblado»⁴⁶. De los

⁴⁴ Informaciones de oficio y parte: Diego López de Salcedo, gobernador del Nuevo Reino de León, justicia mayor y capitán general de Honduras, vecino de Trujillo, 1528, AGI, Guatemala 110, N. 2.

⁴⁵ Carta de Diego Albitez.... AGI, Guatemala 59, n. 1.

⁴⁶ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. 31, cap. 1.

Ríos aspiraba al reconocimiento por parte de las ciudades de León y Granada como su gobernador, algo que también pretendía Diego López de Salcedo. Ambos habían sido advertidos en sus respectivos nombramientos sobre no entrar en las jurisdicciones del otro, si bien lo que cada uno considerase como tal estaba sujeto a interpretaciones subjetivas. Los nombramientos de varios gobernadores para diversos ámbitos geográficos no claramente delimitados habían generado un conflicto de intereses que permitía acciones unilaterales, cuya resolución requería decisiones en el ámbito geográfico inmediato.

Para añadir aún más confusión, a comienzos del mes de mayo de 1527, tanto Pedro de los Ríos como López de Salcedo llegaban a Granada, «cada uno dellos diciendo que estas çiudades y provinçias estaban incluidas en los títulos que de VM traían en sus governaciones pidiendo ser reçibidos por gobernadores»⁴⁷. En Granada fueron recibidos y se recogieron sus credenciales, igual que se hizo en León pocos días después. La decisión debía corresponder al cabildo, como representante del rey, sobre una cuestión –a qué gobernación deberían pertenecer esas poblaciones- que las resoluciones regias no habían dejado aún claras, «hasta que VM proveyese dellas lo que fuese su Real Servicio». El cabildo de León se reunió junto a las personas más prominentes de ambos pueblos y se leyeron públicamente las provisiones de ambos candidatos.

Tras valorar las circunstancias, el cabildo decidió el día 15 de agosto de 1527 «resçivir por governador al dicho Diego López de Salçedo», principalmente porque «la gobernación de Castilla del Oro es muy devisa y apartada destas partes». La decisión venía motivada para intentar frenar «los alborotos y muertes» que provocaba el «ser poco para dos gobernadores». León y Granada solicitaban, además, a la Corona, que ordenase al flamante gobernador que residiese allí la mayor parte del año, pues eran los pueblos más «en comarca» para hacer buena gobernación⁴⁸. Sus regidores argumentaban que los cabildos tenían la potestad de decidir a qué gobernación podían pertenecer las poblaciones. La villa de Bruselas había decidido por las mismas fechas, sin embargo, que no habrían de recibir a Diego López de Salcedo como gobernador «a causa de no extenderse su gobernación a esas provincias»⁴⁹.

Bruselas, que había sido fundada también por Hernández de Córdoba en 1524, tampoco pertenecía estrictamente a Castilla del Oro, por lo que se encontraría como una «isla jurisdiccional» sin pertenecer a ninguna gobernación en concreto hasta que, en abril de 1529,

⁴⁷ Memorial del ayuntamiento de la ciudad de León sobre las provisiones de Diego López de Salcedo y Pedro de los Ríos. Col. Somoza, t. 1, doc. 60.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Manuel PERALTA (1883).

finalmente pasó a formar parte de la nueva gobernación de Nicaragua⁵⁰. Las poblaciones, en decisiones tomadas por sus cabildos, definían así cuáles habrían de ser los límites de gobernaciones aledañas, en función de criterios que interesaban a cada una de ellas. Este conflicto alcanzó una resolución parcial con la llegada al Nuevo Mundo del nombramiento de Pedrarias Dávila, que se había emitido en junio de 1527, como gobernador de Nicaragua y que terminaba por separar los territorios de Honduras –controlados por Salcedo– de los de Nicaragua y los de Castilla del Oro⁵¹.

El territorio del Valle de Ulancho había quedado nominalmente bajo la jurisdicción de la gobernación de Honduras, aunque la región continuó siendo objeto de disputas a lo largo de las siguientes décadas. La puesta en escena, sin embargo, de todo el territorio conocido como Valle de Ulancho y, sobre todo, la disputa sobre su jurisdicción sólo comenzó cuando esa jurisdicción fue efectivamente *creada* por la fundación de Cáceres de la Frontera y *disputada* por la presencia de Villa Hermosa en los espacios aledaños. La jurisdicción y su ejercicio debían contar con la presencia de una población con la que se podía reclamar, y «territorializar», todo un espacio que hasta entonces había permanecido vacante o «invisible» a los ojos de los castellanos.

3. *El golfo de Urabá en disputa.*

El golfo de Urabá no era, estrictamente, invisible a ojos de los castellanos, pues se trataba del lugar al que habían arribado en 1509 las naves de Alonso de Ojeda. Sin embargo, sí que iba a producirse un fenómeno de resignificación de ese espacio a través de un conflicto jurisdiccional con múltiples aristas y actores que terminó por definir una frontera tradicional en la región. La jurisdicción sobre el golfo de Urabá (ver mapa 5) se encontraba bajo el control de la gobernación de Castilla del Oro desde su creación y por influencia de la primera fundación de Santa María del Antigua del Darién, que se situaba en la orilla del golfo. Cuando, en noviembre de 1524, Rodrigo de Bastidas recibió un asiento para crear una gobernación aledaña a Castilla del Oro y llamada Santa Marta, nada indicaban las capitulaciones respecto a los límites que esta podría tener⁵². Sin embargo, apenas medio año más tarde, el 19 de mayo

⁵⁰ Real Cédula a Diego Álvarez Osorio, protector de los indios de la provincia de Nicaragua, para que se informe en que término está fundada la villa de Bruselas, 6 de noviembre de 1528, AGI, Panamá 234, L. 3, f. 263v-264r y Copia de Real Provisión declarando que la villa de Bruselas en América pertenece a la gobernación de Nicaragua, de la que era gobernador Pedrarias Dávila, 21 de abril de 1529, AGI, Patronato 180, R. 32.

⁵¹ Real Provisión a Pedrarias Dávila nombrándole gobernador y capitán general de la provincia de Nicaragua, 1 de junio de 1527, AGI, Panamá, 233, L. 2, f. 283r-285r.

⁵² En las capitulaciones simplemente se indicaba que Bastidas debería fundar una población con cincuenta vecinos en los primeros dos años tras el asiento y, en general, los términos habituales de los asientos de

de 1525 y, tras las quejas de los vecinos de Santa María, una cédula encargaba a los oidores de la Audiencia de la Española que interviniesen en la definición de los límites de la jurisdicción de Bastidas y los del Darién⁵³. Tras esa pesquisa y a la vista del pobre desarrollo del primer establecimiento en la provincia de Santa Marta –otra capitulación con Fernández de Oviedo en marzo de 1525 tampoco resultó muy exitosa⁵⁴- los límites habían quedado fijados y, así, la culata del Golfo de Urabá pertenecía a Castilla del Oro.

(MAPA 5)

Mapa 5. Conflicto por la Culata del Golfo de Urabá⁵⁵.

Con el nombramiento de un nuevo gobernador, Pedro de Heredia, en agosto de 1532, para la gobernación de «Santa Marta e Cartagena»⁵⁶, quedaron claros en inicio los límites que se extendían desde «el río Grande que está en la provincia de Santa Marta e Cartagena hasta el río que está en el golfo de Urabá»⁵⁷. En principio, por lo tanto, quedaría fuera de los límites jurisdiccionales dependientes de la gobernación recién entregada a Pedro de Heredia, aunque los términos concretos quedaban sujetos a diversas interpretaciones. El total del territorio bajo control de Heredia rondaría las 70 leguas de costa y el límite con la gobernación de Castilla del Oro lo marcaba precisamente el golfo –también llamado la Culata- de Urabá. En la costa del golfo que correspondía a Castilla del Oro se había fundado Santa María del Antigua del Darién, que había dado origen a toda la gobernación, mientras que en la costa opuesta había estado la efímera San Sebastián de Urabá, fundada por Ojeda en el primer intento de establecimiento en Tierra Firme pero muy pronto abandonada.

La capitulación con Pedro de Heredia no le concedía ningún salario específico, sino las rentas que pudiera rescatar como gobernador. Las 70 leguas que le correspondían, por lo

población, Real Cédula de asiento y capitulación con Rodrigo de Bastidas para la conquista de Santa Marta, 6 de noviembre de 1524, AGI, Indiferente, 415, L. 1, f. 52v-55.

⁵³ Real Cédula a los oidores de la Audiencia de la Española para que se informen de los términos que corresponden a la provincia de Santa Marta, 19 de mayo de 1525, AGI, Panamá, 233, L. 2, f. 53v-54.

⁵⁴ Carmen GÓMEZ PÉREZ (1984), pp. 7-9.

⁵⁵ Elaboración propia a partir de JOHANNES JANSSONIUS, *Terra firma et Novum Regnum Granatense et Popayan*, c. 1635; REINIER OTTENS, *Nova Isthmi Americani qui et Panamiensis item Dariensis tabula*, c. 1750, BNE, GMG/273 Mapa 47. Utilizando https://d-maps.com/carte.php?num_car=1384&clang=es

⁵⁶ Gonzalo Fernández de Oviedo ya había sido nombrado gobernador de Cartagena en abril de 1525, si bien nunca había llegado a ocupar ese cargo, Título de gobernador de Cartagena a Fernández de Oviedo, 1 de abril de 1525, AGI, Panamá 233, L. 2, f. 31r-32r.

⁵⁷ Real Cédula de capitulación con Pedro de Heredia para la conquista y población de Tierra Firme desde el río grande entre la provincia de Santa Marta y Cartagena hasta el río grande que está en el golfo de Urabá, 5 de agosto de 1532, AGI, Indiferente 415, L. 1, f. 69r-71v.

tanto, se le antojaban escasas para poder lograr suficiente renta. En consecuencia, desde el comienzo de su gobernación, Heredia intentó buscar nuevas fuentes de ingresos rescatando o contratando con los indígenas de la culata de Urabá. Para esto tenía necesariamente que entrar en la zona de influencia correspondiente a Castilla del Oro y, más concretamente, en los términos de la ciudad de Acla, cuyos vecinos hacía tiempo –al menos desde 1532, por iniciativa del gobernador Antonio de la Gama- mantenían un flujo constante de relaciones con los indígenas, sobre todo gracias a la labor de un mercader de Acla, Julián Gutiérrez, y su esposa, Isabel Corral, la hermana de uno de los caciques principales de Urabá⁵⁸.

Pedro de Heredia, interpretando en todo momento el texto de su capitulación en su favor, buscó la manera de sacar partido de la posición de su gobernación y comenzó a intentar realizar rescates por la zona de Urabá. Los vecinos de Acla elevaron una queja y enviaron al alguacil Isidro Morán para presionar a Pedro de Heredia y que desistiese de sus pretensiones⁵⁹. Finalmente, la Corona intervino para confirmar, el 16 de enero de 1533, que «la culata del dicho golfo donde está el dicho cacique Cemaco sea de la gobernación de la dicha tierra firme llamada Castilla del Oro» y prohibir expresamente que «el dicho Pedro de Heredia ni otra persona alguna no sean osados de entrar ni entren en la dicha culata del dicho golfo de Urabá». La razón de esta decisión era, precisamente, que los vecinos de Castilla del Oro «han contratado y contratan en la culata del dicho golfo de Urabá con los indios dél»⁶⁰. Los derechos de Castilla del Oro sobre el golfo de Urabá se fundaban en la capacidad de Acla para comerciar con los indígenas, lo cual llevaría aparejado el mantenimiento de la paz y el inicio de su proceso de conversión. Los tratos con los indios eran uno de los principales motivos –si no el principal- que justificaban la fundación de poblaciones en el Nuevo Mundo.

La concesión del golfo de Urabá a la gobernación de Castilla del Oro no se debió, como se ha asegurado tradicionalmente, a un «error en los cálculos de su situación», sino a la labor que los vecinos de Acla llevaban tiempo realizando, con lo que habían generado una serie de derechos que ahora amparaban la decisión de su incorporación a Castilla del Oro⁶¹. Era, pues, el ejercicio de la jurisdicción, a través del contacto con los indígenas, lo que había definido formalmente la culata del Golfo de Urabá como un territorio perteneciente a la gobernación de Castilla del Oro. Como se verá más adelante, sólo la fundación de un núcleo

⁵⁸ Sobre la manera de llevar a cabo el asiento comercial de Acla con los indígenas del golfo de Urabá y, en especial sobre la figura de Isabel Corral, se tratará más en profundidad en el capítulo 4 de este trabajo.

⁵⁹ Carmen GÓMEZ PEREZ (1984), p. 113.

⁶⁰ Real Provisión por la que se declara que la culata del golfo de Urabá donde está el cacique Cemaco sea de la gobernación de Tierra Firme y como tal los vecinos y pobladores de ella puedan rescatar y contratar con los indios de ella, 16 de febrero de 1533, AGI, Panamá 234, L. 5, f. 97v.

⁶¹ Antonio MATILLA TASCÓN (1945), p. 62.

de población en el otro lado del golfo volvería a cambiar las tornas y provocaría que la culata de Urabá se volviese a definir para cambiar de jurisdicción y se incorporarse finalmente a la de Cartagena.

La cédula emitida en enero de 1533 que prohibía expresamente a Pedro de Heredia entrar en Urabá, así como rescatar y contratar con los indígenas, no fue definitiva. En cambio, hombres enviados por el gobernador de Cartagena asaltaron al menos tres veces la ciudad de Acla entre ese momento y octubre de 1534. El tercero de estos asaltos fue sin duda el más cruento. En la madrugada del 21 de octubre de ese 1534 un grupo de unos 80 hombres armados, comandados por Alonso de Cáceres, entraron en la ciudad de Acla y sembraron el terror en sus calles. El objetivo de esta expedición no era estrictamente atacar la población, sino apresar a Isabel Corral y su marido Julián Gutiérrez, junto a todo lo que hubiesen rescatado, a toda costa, incluso «por fuerza de armas aunque estuviese metido en la iglesia», matando incluso a quienes intentasen defenderles⁶². En ese momento en la ciudad de Acla, no había sino «seis o siete vecinos», acompañados, cabe suponer, por sus familiares, dependientes, naborías o esclavos, que vieron a los atacantes bajar de un bergantín y una barca armados con «ballestas armas e escopetas e rodela, espadas e lanzas e tiros de artillería»⁶³. Entraron en la casa de Julián Gutiérrez, que estaba en la Calle Real, y «desquiciándole las puertas e haciendo a la gente de su casa que callase», llegaron hasta la habitación donde dormían él y su mujer⁶⁴. Allí tomaron varias piezas de plata que pertenecían a la casa y un cofre con 1.500 pesos de oro de la última expedición al golfo de Urabá, a pesar de que el propio atacante expresó su sorpresa ante la poca cuantía del tesoro, que esperaba alcanzase los 20.000 pesos. Ese oro –aparte del quinto del rey– pertenecía a la población, que había gastado 800 pesos en dotar con medios a la expedición que había hecho el rescate, y aún estaba sin quilatar y marcar, por lo que la población al completo se puso en alerta e intentaron defenderse.

El alcalde ordinario, Antonio Argüello, se opuso a los asaltantes en la puerta de la casa de Gutiérrez y les pidió el mandamiento del rey que les permitiese entrar con vara de justicia en jurisdicción ajena. Alonso de Cáceres le aseguró que traía provisión de su majestad y Argüello respondió que, si así fuera, él la acataría y la pondría sobre su cabeza, a lo cual los

⁶² Informaciones de oficio y parte: Julián Gutierrez vecino de Santa María del Antigua de Acla, 22 de octubre de 1534, AGI Guadalajara 46, N. 2.

⁶³ Informaciones de oficio y parte: Pedro de Heredia y Antonio de Cáceres, capitán, 1534 AGI, Panamá 61, N. 13, f. 14v.

⁶⁴ Real provisión para hacer información sobre un asalto a la ciudad de Acla, 31 de mayo de 1535 AGI, Panamá 234, L. 5, f. 211v.

soldados que acompañaban a Cáceres «le pusieron las ballestas e escopetas a los pechos» y le expulsaron de la casa amenazando con llevarle preso a él también⁶⁵. Según sus propias palabras, el alcalde Argüello habría estado encantado de ir también preso a Cartagena, para poder decirle a Pedro de Heredia «que mal se ha hecho esto de venir a la tierra de su majestad a hacerles desaguisados». Julián Gutiérrez e Isabel Corral finalmente fueron apresados, y llevados a una isla cercana junto con el botín, «a pesar de toda la justicia e regimiento e vecinos de esta ciudad» que «no pudo hacer otra cosa sino callar y dejarle robar todo lo que quería, lo cual hizo por evitar daños e muertes de hombres e menosprecio de la justicia real»⁶⁶.

El cabildo de la ciudad de Acla se reunió de urgencia para intentar defender su población y, por ende, la jurisdicción real. Redactó un requerimiento para entregar a Alonso de Cáceres para que dejase libre a Gutiérrez y Corral y no se llevase el oro que pertenecería a la Corona. El regimiento actuaba defendiendo la legalidad, a la que estaban obligados como correspondía a una población del rey, apelando a la defensa de las rentas y la justicia real. La jurisdicción que se asentaba en Acla estaba en gran parte basada en sus tratos con los indígenas y era, precisamente, ese comercio continuo el que daba sentido a la población. El ataque a la jurisdicción y el arresto de los dos miembros más prominentes de la población hacía peligrar seriamente el mantenimiento de la ciudad, cuyos habitantes amenazaban con abandonar. El escribano del cabildo salió corriendo tras los soldados que llevaban preso a Julián Gutiérrez para entregarles el requerimiento, pero no pudo alcanzarlos antes de que se embarcasen hasta la isleta cercana. Esto obligó al escribano de Acla a alzarse a hombros de un esclavo, a fin de que no se le mojase el papel, y perseguir por mar a los huidos y entregarles el documento. Cuando se aproximó hasta donde se encontraban los hombres de Heredia, estos comenzaron a tirar agua al escribano «e le mojaron las escrituras» que llevaba, tras lo cual tuvo que retornar a la ciudad de Acla mientras Corral y Gutiérrez eran llevados a Cartagena junto con el botín⁶⁷.

En diciembre de 1534, de nuevo una cédula advertía a Heredia de que no podía entrar en la región de Urabá. El gobernador se defendió emitiendo una información desde la ciudad de Cartagena «porque su magestad sepa la verdad», alegando que la información hecha en Acla tras el ataque era falsa. En su defensa argüía la legalidad de su actuación amparándose de nuevo en la capitulación. Según su argumento, había actuado en defensa de su territorio, pues consideraba que era Julián Gutiérrez quien había usurpado su jurisdicción y no él al

⁶⁵ Informaciones de oficio y parte..., AGI Guadalajara 46, N. 2.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

promover el ataque de Acla. Heredia advertía que sólo había atacado Acla en seguimiento de Gutiérrez e Isabel, y que los había atrapado sin hacer «mal ninguno a ellos ni a nyngun vezino de la çibdad de Acla»⁶⁸. Julián Gutiérrez e Isabel estuvieron presos en Cartagena hasta marzo de 1535, cuando desertaron de una expedición al mando de Alonso de Heredia, hermano del gobernador.

Durante su cautiverio, se insinuó que Pedro de Heredia había abusado sexualmente de Isabel Corral, si bien él argumentaba que «si se quería echar con la dicha mujer del dicho Julián Gutiérrez no era sino porque le tomase amor y le descubriese los secretos de la tierra»⁶⁹. El motivo del rapto de Julián Gutiérrez no era, pues, otro que conseguir que tanto él como su mujer —especialmente ésta— colaborasen con Pedro de Heredia en lo que él consideraba que era la parte más importante de su gobernación. No buscaba, por lo tanto, anular la jurisdicción de Acla sino desgajar de esta una parte que él consideraba parte de su propia gobernación.

La expedición de Alonso de Heredia partió hacia Urabá en marzo de 1535 y, tras la temprana deserción de Julián Gutiérrez junto a otros 70 hombres, continuó su camino hacia el sur por la margen del río. Ese viaje fue tan exitoso que, pocos meses más tarde, «hizo en la dicha provincia un pueblo en parte muy provechosa al descubrimiento»⁷⁰. Esa nueva población se dotó pronto de regidores y alcaldes y se le puso el nombre de San Sebastián de Buenavista, con referencia remota a la primera fundación de San Sebastián de Urabá por Alonso de Ojeda. Con esta fundación en el área del que había querido tomar el control en varias ocasiones, Pedro de Heredia podía por fin reclamar que estaba llevando a cabo la pacificación de los indios en nombre del rey, y que estaba acrecentando el poder real «con mayores reinos e señoríos como su real corazón desea». De hecho, en noviembre de 1535, ya se presumía de tener, gracias a la existencia de San Sebastián, «pacíficos e de mucha amistad 22 caciques con un cacique que se dice Urabá tratando e contratando con ellos por vía de rescate y dándoles a entender el vasallaje que debían a vuestra majestad»⁷¹.

Pocos meses más tarde, el 1 de septiembre de 1535, el conflicto viró y el golfo de Urabá sufrió una nueva identificación. En esa fecha, una expedición enviada desde Acla y

⁶⁸ Información del gobernador Pedro de Heredia sobre puntos del real servicio, 12 de diciembre de 1534, AGI Patronato 193, N. 21

⁶⁹ Juicio de residencia a Pedro de Heredia, 11 de marzo de 1536, AGI Justicia 521, f. 51.

⁷⁰ Carta del cabildo secular de Cartagena dando cuenta del estado de aquella gobernación desde que partió de ella el procurador Alvaro de Torres, alguacil mayor de la misma, 26 de noviembre de 1535, AGI Santa fe 62, N. 1.

⁷¹ Ibid.

liderada por el propio Julián Gutiérrez, se presentó en los alrededores de San Sebastián de Buenavista con unos 150 hombres, «so color de una provisión que las ciudades de Panamá y Acla ganaron de vuestra majestad»⁷². El procurador de la expedición mostró a Alonso de Heredia una serie de documentos entre los que se encontraba un requerimiento por el cual Gutiérrez se intitulaba, en nombre de Acla y Panamá, alcalde mayor y capitán de las regiones de Urabá y Cenú. El cabildo de San Sebastián respondió a los atacantes con argumentos similares a los emitidos por Acla apenas 11 meses antes: la labor de pacificación que estaban llevando a cabo y que ningún enviado de Acla tenía derecho a entrar en jurisdicción ajena con vara de justicia. La fundación y posterior intercambio de bienes con los indígenas había asentado la jurisdicción de San Sebastián que ahora ya no era una pretensión de Pedro de Heredia amparada exclusivamente en el texto de su capitulación, sino un territorio cierto y concreto sobre el que estaban actuando.

Las tropas mandadas por Julián Gutiérrez fueron derrotadas y tres personas murieron en la refriega, con Gutiérrez apresado e Isabel Corral huida⁷³. Los hombres enviados por Pedro de Heredia, según el gobernador Barrionuevo, les tendieron una trampa al convencerles de que esperarían a que el asunto de la culata de Urabá se resolviese en la audiencia de Santo Domingo. En lugar de eso, «estando con aquella seguridad dio sobre Julian Gutiérrez con toda su gente deziendo en apellido ‘mueran, mueran’»⁷⁴. Sin embargo, poco después, Pedro de Heredia les permitió regresar a Acla, donde volvieron a preparar otra ofensiva para intentar «recuperar» la culata de Urabá para Castilla del Oro⁷⁵. A esa expedición acudió el propio gobernador Barrionuevo, quien abandonó para ello la guerra con el cacique de Urraca en el entorno de la ciudad de Natá⁷⁶. De nuevo comandada la expedición por Julián Gutiérrez, en esta ocasión fueron más cautos y fundaron una población con la que intentar atraer a los indígenas. Según el juicio de residencia del propio Barrionuevo, estaban consiguiendo su objetivo pues muchos indígenas estaban acudiendo e incluso intercambiaban con ellos objetos de oro⁷⁷. Sin embargo, el nombramiento del oidor de La Española Vadillo como gobernador de Cartagena, quien desembarcó en la región en

⁷² Carta de Alonso de Montalbán procurador y regidor de la ciudad de San Sebastián de Buenavista, 26 de noviembre de 1535, AGI Santa fe, 62, N. 108.

⁷³ Carta que los oficiales reales de Cartagena dirigieron a SM, 5 de abril de 1536 AGI Santa fe, 187, L. 1, f. 23.

⁷⁴ Carta de Francisco Barrionuevo a Su majestad, 30 de enero de 1536, AGI Patronato 194, R. 34.

⁷⁵ La versión de Barrionuevo de la liberación de Julián Gutiérrez y compañía también resultaba muy dramática, pues recordaba que «robaron todo quanto en el real avia que no les dexaron ny una camissa que bestirse e echaronlos en Acla asi despojados», *Ibid.*

⁷⁶ *Carta... doc. cit.*, AGI Patronato 194, R. 30.

⁷⁷ Antonio MATILLA TASCÓN (1945), p. 61.

febrero de 1536, puso fin a esa efímera fundación y tanto Julián Gutiérrez como Barrionuevo tuvieron que salir de la región de vuelta a Acla y Panamá.

El 17 de marzo de 1536, una real cédula convertía en oficial lo que ya era una realidad *de facto* tras la fundación de San Sebastián de Buenavista: «que la culata de dicho golfo entra y se yncluye en los limites de la dicha provincia de Cartajena», prohibiendo con ello la consecución de los intereses de los vecinos de Castilla del Oro en esa parte del istmo⁷⁸. Esta fundación, su actuación sobre el territorio y la llegada del oidor de la Audiencia de Santo Domingo, Juan de Vadillo, como nuevo gobernador de Cartagena fueron los tres ejes que contribuyeron a reformular la consideración del golfo de Urabá y convertirlo, oficialmente, en parte de la gobernación de Cartagena. La jurisdicción de las ciudades afectaba a un radio amplio sobre el cual tenían capacidad de acción, especialmente en lo que atiende a la pacificación de los indígenas. La creación de una ciudad definía el espacio y generaba una jurisdicción, pero esta podía ser contestada en virtud de los intereses de las regiones vecinas. Con este caso se puede percibir cómo un área geográfica muy amplia y de interés para diversas gobernaciones se «generaba» y se arriesgaba a desaparecer en conflicto con otras gobernaciones.

4. *Litigio por Costa Rica.*

En el otro extremo geográfico de Castilla del Oro, pocos años más tarde, un conflicto similar dejó a las claras la importancia del establecimiento de poder local para la definición de las nuevas gobernaciones y, a su vez, la necesidad de desentrañar la pluralidad de jurisdicciones generada en las primeras décadas de la ocupación del espacio de Tierra Firme para comprender el funcionamiento de la Monarquía Hispánica en sus territorios. La región de Veragua había sido concedida como un mayorazgo a Colón y sus descendientes tras el cuarto viaje de este y convertida oficialmente en ducado en enero de 1537. Por lo tanto, había quedado fuera de los límites jurisdiccionales oficialmente marcados a Pedrarias Dávila en 1513 y también en la asignación de términos tras la fundación de Natá en 1522⁷⁹. En febrero de 1538 se creó la primera Audiencia de Panamá como parte de un intento de reorganizar el

⁷⁸ Real provisión al gobernador de Castilla del Oro determinando que la Culata de Urabá pertenece a la gobernación de Cartagena, 17 de marzo de 1536, AGI, Santa Fe, 987, L. 1, f. 124v-125v.

⁷⁹ El territorio oficialmente asignado a Pedrarias comprendía Castilla del Oro «con tanto que no entienda ni comprenda en ella la provincia de Veragua, cuya gobernación pertenesce al Almirante Don Diego de Colón por lo haber descubierto el Almirante su padre por su persona», CODOIN, t. 39, p. 273; Alfredo CASTILLERO CALVO (1972), pp. 124-133.

sistema de gobierno en Indias por parte de la Corona⁸⁰. En las ordenanzas que recibió esa primera audiencia, el territorio de Veragua se encontraba entre aquellos que podían acogerse a la apelación en la Audiencia de Panamá y, además, unos meses antes también se había incluido dentro de los límites de Castilla del Oro el territorio que no estuviese dentro del ducado de Veragua⁸¹. En consecuencia, una de las primeras actuaciones del primer oidor de dicha audiencia, el doctor Francisco Robles –cuyas atribuciones trascendían la mera ejecución de justicia y, de hecho, incluían las de los anteriores gobernadores- fue enviar a su propio yerno, Hernán Sánchez de Badajoz, a la conquista y pacificación de una parte de Veragua conocida como Costa Rica, desencadenando con ello un conflicto jurisdiccional con el gobernador Nicaragua, Rodrigo de Contreras. Este conflicto iba a terminar con Hernán Sánchez de Badajoz preso en Castilla e iniciando un pleito el 18 de abril de 1542, que es la fuente principal para analizar el caso.

El 20 de noviembre de 1539 Hernán Sánchez de Badajoz recibió de su suegro el oidor el permiso para reclutar gente en la provincia de Nicaragua y aprestarse «para la conquista e poblacion de la dicha provincia de Costa Rica». Al conferirle la capacidad para hacer recluta, el mismo oidor le nombraba «governador del ducado de Veragua e capitan general de la provincia de Costa Rica ques desde los confines del ducado hasta Guatemala», con jurisdicción civil y criminal⁸². Badajoz compró un galeón y un gran bergantín, «hizo la mas gente que pudo y con buen adereço fue a la dicha conquista», zarpando hacia Nombre de Dios el día quince de febrero de 1540. En los dos meses y medio que duró la navegación perdió tres anclas, pero finalmente tocó tierra en la región de su destino y pronto consiguió fundar una ciudad que bautizaron como Badajoz (ver mapa 6).

(MAPA 6)

Mapa 6. Litigio por Costa Rica⁸³.

⁸⁰ Carlos GARRIGA (2004), pp. 711-794; sobre la de Panamá en particular Alfredo CASTILLERO CALVO (2006), pp. 730 y ss. Sobre la labor de la audiencia y su repercusión en la reconfiguración del poder en Castilla del Oro se volverá en el capítulo siguiente.

⁸¹ Ordenanzas para la Audiencia de Tierra Firme, con residencia en la ciudad de Panamá, 26-02-1538, Col. Somoza, t. 5, doc. 390; Real Provisión por la cual se declara y manda que las tierras que quedan en la provincia de Veragua, sacadas las veinte y cinco leguas en cuadra de que se ha hecho merced al Almirante Don Luis Colón y a sus herederos, sean y se entiendan ser de la gobenación de la provincia de Tierra Firme llamada Castilla del Oro, 2 de marzo de 1537, AGI, Panamá 235, L. 6, ff. 96v-99v.

⁸² El señor fiscal con Hernan Sanchez de Badajoz sobre las causas pecuniarias existentes en la provincia de Nicaragua, 1542, AGI, Justicia 351, N. 2.

⁸³ Elaboración propia a partir de JUAN LÓPEZ, Carta marítima del Reyno de Tierra Firme u Castilla del Oro, comprehende el istmo y provincia de Panamá, las provincias de Veragua, Darién y Biruquete, 1785, BNE MR/2/166. Utilizando https://d-maps.com/carte.php?num_car=1836&lang=es

En el momento en que asentó Badajoz, la expedición comenzó la labor de pacificación de los caciques de los alrededores. Según alguno de los testimonios «entro con la gente que llevaba la tierra adentro a la conquystar e paçificar y conquistó e paçificó cierta parte della», con lo que en un breve espacio de tiempo ya tendría supuestamente controlados unos «ochenta caciques». Sánchez de Badajoz habría aplicado, según sus testimonios, una estrategia de pacificación integradora, ejerciendo la justicia entre los caciques y acercándose a ellos «con amor y buena yndustria».

Sánchez de Badajoz, un conquistador experimentado en Castilla del Oro, había participado en la fundación de Panamá y Natá, además de haber estado presente en Nombre de Dios y la villa de Acla, antes de acudir a la conquista de Nicaragua. Durante toda esa experiencia se había empapado de la panoplia de estrategias y mecanismos posibles para asentar y mantener una nueva fundación sobre el territorio indígena⁸⁴. Badajoz era consciente de que, sin la información proveniente de los indígenas y un grado de tolerancia o acuerdo por su parte, resultaría imposible que los establecimientos castellanos pudiesen tener éxito y permanecer.

Según su propio testimonio, tomado en 1542, los fracasos anteriores en el intento de controlar esa región del capitán Nicuesa y de Felipe Gutiérrez, quienes habían acudido allí con más soldados que él, se debían a que no lo habían hecho «con amor y buen tratamiento». En cambio, Sánchez de Badajoz diseñó una estrategia que se basaba en combinar el buen tratamiento a sus soldados con el ejercicio de buen gobierno frente a los indígenas. En primer lugar, él debía tratar bien a sus propios soldados para que estos transmitiesen ese «amor» a los naturales de la tierra, «a los quales no consintio que quemasen sus buhios ni talasen arboles de fruta e mantenimientos ni dixesen palabra a ellos ni a sus mugeres de que tomasen alteraçion»⁸⁵. En segundo lugar, se implicó en la aplicación de la justicia entre los indígenas, combinando las estructuras sociales y de gobierno indígenas y castellanas.

Así, acusado por el gobernador de Nicaragua de maltrato a indígenas y negros, Badajoz adujo, tras la ejecución de una indígena acusada de ocultar a su marido indio rebelde, que, en primer lugar, no había sido maltrato sino más bien ejercicio ordinario de la justicia y que, sobre todo, no había sido él quien lo había ejercido sino el cacique de Coaça, «como es su uso y costumbre», aunque dejaba claro que él podría haberlo hecho también de acuerdo a

⁸⁴ Escudo de armas a Hernan Sanchez de Badajoz, mayo 1540 AGI, Patronato 196, N. 2, A.1540, R. 2.

⁸⁵ El señor fiscal... doc. cit. AGI, Justicia 351, N. 2: «con aver el dicho Hernand Sanchez de Badajoz paçificado el dicho señor y caçique se espera muy presto paçificarse otro mayor señor que ay de mas caçiques que confina con el que se llama Macariaca con quien tiene guerra por que una de las cabsas porque el dicho Coaça dixo que venia de paz es porque los cristianos le faboresçiesen contra Cariaca, su contrario».

la ley de *Partidas*⁸⁶. Su experiencia previa en la ocupación de Castilla del Oro había hecho a Hernán Sánchez de Badajoz consciente de la importancia de reconocer el mantenimiento del ejercicio de la justicia indígena y la necesidad, para tener éxito en una conquista, de lograr un acuerdo suficiente con los caciques locales y, además, entre las propias expediciones castellanas convertidas en comunidades políticas.

Los caciques, en base a este principio de entendimiento, «avian prometido de traer para v. al. muchas çestas de oro e plata e otras muchas joyas porque la dicha tierra es muy rica de oro e plata e mantenimientos»⁸⁷. Sin embargo, esta idílica situación que describían los testimonios aportados por Hernán Sánchez de Badajoz se iba a ver pronto truncada. Cierta día de diciembre de 1540, el gobernador de Nicaragua, Rodrigo Contreras, con 800 hombres armados «con muchas armas y pertrechos y ingenios de guerra» entró en Costa Rica para saquear la ciudad de Badajoz, robando y matando a la gente que allí había.

Entre las tropas que acompañaban a Contreras, según Badajoz, se encontraban indios caníbales de Nicaragua que habían contribuido a que los indígenas de la zona de Costa Rica se alzasen y rebelasen, lo que había causado que tampoco Contreras pudiera establecerse en ese territorio. A causa de ese ataque, denunciaba Hernán Sánchez, los indios que ya estaban de paz se había alzado, renunciando a aportar las cestas de oro prometidas y haciendo perder 400 mil ducados a la Corona. Rodrigo de Contreras, tras atacar la ciudad, apresó a Hernán Sánchez y le encadenó para mandarle preso a Castilla⁸⁸. Badajoz alegaba, desde su prisión, que «Rodrigo de Contreras no tenían ny tubo juridiçion para hazer los dichos proçesos ni proçeder contra el dicho mi parte de ofiçio ni a pedimiento de parte ni tubo poder ni facultad para poder entrar en Costa Rica ni su juridiçion ni governaçion»⁸⁹. Solicitaba, además, que el gobernador de Nicaragua le pagase a él y a sus compañeros todo lo que les habían supuestamente sustraído durante el ataque.

Toda la defensa de Badajoz se basaba en que su presencia en Costa Rica era legítima, de acuerdo con la autoridad que le había dado la Audiencia de Panamá, y que Rodrigo de Contreras no tenía jurisdicción para actuar en ese territorio. Sumado a esto, como parte fundamental de su alegación, insistía en la labor de pacificación que ya estaba haciendo con los indígenas gracias a la fundación de la ciudad de Badajoz y el ejercicio de la jurisdicción

⁸⁶ El señor fiscal... doc. cit., 1542, AGI, Justicia 351, N. 2.

⁸⁷ Hernán Sánchez de Badajoz, gobernador y capitan general de Costa Rica con Rodrigo de Contreras, gobernador de Nicaragua sobre la acusacion contra el dada por el dicho Vadajoz sobre varios excesos y delitos que cometio en dicha provincia de Costa Rica, AGI, Justicia 1164, N. 5, R. 3.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ El señor fiscal... doc. cit. AGI, Justicia 351, N. 2.

que había asentado y a las futuras riquezas con las que la Corona podía contar a partir de ese momento en virtud de ese esfuerzo.

La defensa de Rodrigo de Contreras se basó, por su parte, en rebatir ambos argumentos de Sánchez de Badajoz. Por un lado, no se había fundado población estable alguna, pues «lo que hizo fue que en una çienega començo a hazer un palenque y en lugar muy enfermo y el dicho mi parte nunca vio ni supo quel dicho parte contraria oviese hecho la çibdad y fortaleza que dize aver hecho» y, por ende, no había pacificado a los indios sino, más bien al contrario, habría contribuido a alterarlos. En segundo lugar, la Audiencia no estaría autorizada para nombrar gobernador ni adelantado de ese ni de ningún territorio. A estos argumentos, además, añadía que, en caso de que a alguien correspondiese la explotación de ese territorio, debería ser a él y a su gobernación, pues él había sido quien primero había enviado gente a explorar la zona, adquiriendo con ello una cierta preeminencia para establecer jurisdicción. En resumen, desde el punto de vista de Contreras, Hernán Sánchez de Badajoz había actuado como persona privada que, sin tener autoridad para ello, ni legal ni consuetudinaria, aspiraba a ejercer jurisdicción sobre un territorio concreto.

La prisión de Badajoz se alargó durante varios años, durante los cuales su versión de los hechos se vio ligeramente alterada. En primera instancia había afirmado que tenía su autoridad fundada en la orden de hacer gente que le había dado el oidor Robles en la que, además, le nombraba gobernador y adelantado en ese territorio, como se mencionó más arriba. Más adelante, el 9 de junio de 1541, el propio Robles emitió una información en la que negaba que nunca le hubiera nombrado gobernador a su yerno sino «solo de capitan».

En efecto, al tener noticia en abril de 1540 de que el doctor Robles había enviado a su yerno a la exploración de Veragua, el Consejo de Indias envió una cédula en la que advertía a Hernán Sánchez de Badajoz de que «no vayais a la dicha provincia de Beragua ni entendays en cosa alguna de lo que por el dicho dotor Robles os fue encomendado»⁹⁰. El motivo era, precisamente, que el oidor y, por ende, la Audiencia no tenía potestad para hacer capitulaciones con particulares para enviar expediciones. En ese momento, el Consejo instaba de urgencia a Sánchez de Badajoz a no comenzar su expedición y, en caso de que ya hubiera comenzado, retornar de inmediato a Panamá. Esa orden fue recibida y copiada en Panamá más de dos años más tarde de haber sido emitida y cuando ya Badajoz había sido apresado por Rodrigo de Contreras con las mismas alegaciones que más tarde se iban a hacer oficiales.

⁹⁰ Ibid.

Durante el pleito, Badajoz fue acusado de haberse intitulado capitán a sí mismo y haber procedido sin tener autoridad efectiva para ello. Su línea de defensa sostenía que sí tenía esa autoridad y acusaba, a su vez, a Rodrigo de Contreras de haber procedido en un territorio donde él no tenía jurisdicción. Tras su traslado a Madrid hacia abril de 1543, Hernán Sánchez escribió otra alegación en la que insistía en que, una vez sobre el territorio lo «abia conquistado y hecho de paz e puesto debaxo de vuestra real jurisdicion e subjeçion». Unido a su defensa, Badajoz había también denunciado a Rodrigo de Contreras por su actuación en este episodio y éste fue formalmente acusado el 26 de septiembre de 1543 de haber provocado muchas muertes y robos, además de haberse quedado con el botín que le habría robado a Badajoz. El conflicto entre Badajoz y Contreras encontró, sin embargo, una rápida resolución. Badajoz fue condenado el 8 de febrero de 1544 a inhabilitación para ejercer oficio en Indias y a 600 ducados de oro de pena por haber usado jurisdicción sin tenerla.

Su recurso de esta condena apelaba a la capacidad de sus actos para haber regulado la situación. Consciente de que estaba ya demostrado que no tenía autoridad para acudir a poblar en Costa Rica, confiaba en que la fundación de Badajoz y los tratos con los indígenas le eximiesen de culpa. Su muerte pocas semanas después de presentar el recurso terminó con el juicio que, sin embargo, continuaron durante años sus hijos amparados por su tío para intentar recuperar el dinero que había rescatado⁹¹. El oidor Robles que, en primer lugar, había concedido la jurisdicción sobre el territorio para posteriormente rectificar, tuvo que enfrentarse a un cargo de parcialidad hacia su yerno en el juicio de residencia que se inició contra él en Panamá el 17 de marzo de 1541⁹².

Con el cese del oidor Robles y del resto de los miembros de la Audiencia de Panamá, ésta quedó subsumida en la recién fundada Audiencia de los Confines y se volvió al régimen de gobernadores para la región de Castilla del Oro. Formalmente, la Audiencia de Panamá tenía potestad sobre una parte del territorio de Veragua –la que quedaba fuera de los límites del ducado–, pero no así la propia institución para enviar expediciones a poblarla y pacificarla. En este sentido, la ambigüedad con la que se intentó aplicar el sistema de audiencias en ese momento generó un grado mayor de confusión jurisdiccional, que se hizo evidente en este tipo de conflictos en los que se mezclaban diversas fuentes de autoridad y de arbitraje.

⁹¹ El pleito continuó hasta, al menos, 1548. Los hijos de Sánchez de Badajoz, a quienes el hermano de este había ido a buscar a Panamá, continuarían pleiteando alegando y presentando como prueba los méritos de su padre, todo en AGI, Justicia, 1164, N. 5, R. 3, f. 108 y ss.

⁹² Juicio de Residencia a Francisco de Robles, oidor de la audiencia de Panamá, AGI, Justicia 369, f. 112v: el cargo concreto que se le imputaba era que «hizo ynjusticia a algunas partes por favorecer a otras en especial favoresçio a Hernan Sanchez de Badajoz, su yerno contra Rodrigo de Contreras, gobernador de Nicaragua sobre la causa y negoçios del Desaguadero».

El 29 de noviembre de 1540, el territorio en disputa pronto fue objeto de una nueva remodelación. La Corona firmó una capitulación para conceder a Diego Gutiérrez la gestión del poblamiento de la zona «que queda en la dicha provincia de Veragua que comience de donde se acabaren las veynte e cinco leguas en quadra de que hemos hecho merced al almirante don Luys Colon»⁹³. Pocas semanas después de esta capitulación, en enero de 1541, el Consejo emitía otra cédula en la que recordaba la entrada de Sánchez de Badajoz en el territorio de «la provincia de Cartago, cuya conquista y governaçion tenemos encomendada a Diego Gutierrez no lo pudiendo ny debiendo hazer», e iniciaba la recuperación del oro rescatado en ese contexto. Como se ha visto más arriba, ya Sánchez de Badajoz había sido apresado y llevado a Castilla unos meses antes de que se enviasen esas órdenes⁹⁴.

El conflicto entre Rodrigo de Contreras y Hernán Sánchez de Badajoz, encapsulado en unos pocos meses, deja a las claras la dificultad para determinar qué instancia tenía autoridad para demarcar los límites entre territorios y, a su vez, la capacidad de las instituciones para regular este tipo de conflictos. En este caso no fue suficiente argumento a favor Hernán Sánchez de Badajoz haber ejercido la jurisdicción por haber fundado una población e iniciado la labor de pacificación de los indígenas, pues finalmente fue sentenciado a no poder volver a ejercer cargo alguno en Indias. En todo caso, como se ha visto, Contreras se tomó la molestia de negar que, efectivamente, Badajoz hubiera fundado una población sino, simplemente, «un palenque» y denunciar además que no estaba realmente convirtiendo a los indígenas. La participación de la Audiencia de Panamá y, en concreto, del oidor Francisco Torres, tomando para sí una atribución que no le correspondía fue el hecho determinante del caso. La superposición de una autoridad intermedia entre Corona y ciudades en un contexto como el de Castilla del Oro había provocado la falta de claridad en las atribuciones jurisdicciones que desembocó en un conflicto cuya resolución implicaba determinar exactamente quién mandaba en el territorio.

5. *Exportación de una cultura política: los «depósitos de la República»*

La ocupación del Perú fue llevada a cabo con gente y bastimentos llevados desde Castilla del Oro, pero también desde allí se exportaron técnicas y fórmulas políticas para ocupar el espacio y generar nuevas jurisdicciones con las que asentar el poder. El cabildo de

⁹³ Real Cédula de capitulación con Diego Gutiérrez para la conquista y población de la tierra que queda de dominio real en la provincia de Veragua, 29 de noviembre de 1540, AGI, Panamá 245, L. 1, f. 38-42v.

⁹⁴ Real Cédula al gobernador de la provincia de Cartago, Diego Gutiérrez, para que se informe sobre la entrada que hizo en su gobernación Hernán Sánchez de Badajoz, y que haga cobrar el quinto del oro que hubo en su incursión, 11 de enero de 1541, AGI, Panamá 245, L. 1, f. 54.

Natá recordaría hacia 1554 en un pleito colectivo la ayuda que habían prestado para la ocasión: «la provincia de Piru se descubrio (...) por algunos vezinos y conquistadores desta çibdad», que habrían aportado maíz, carne, caballos «y otras cosas necesarias»⁹⁵. Entre esas cosas necesarias estaría la cultura política desarrollada desde su fundación, a través de la cual se habían generado, desde la base del poder urbano y todo lo que ello implicaba, las gobernaciones de ámbito mayor. Los conflictos entre diversas autoridades individuales que las crónicas recogen para el caso de Perú habían tenido sus antecedentes en Castilla del Oro y habían encontrado similar resolución: eran las ciudades las que, a la postre, habrían de determinar las fronteras y los límites de la autoridad, generando por tanto jurisdicciones, a través de su aceptación o no de la presencia de los gobernadores dentro de sus límites y asumiendo su autoridad.

Los conflictos descritos en este capítulo permiten establecer una serie de comparaciones sobre la dinámica creación del espacio político y la definición de jurisdicciones en Castilla del Oro y, en general, en el Nuevo Mundo. La fundación de una población instalaba sobre el territorio una fuente de poder –jurisdicción– que debía ser ejercido para consolidarse. Las relaciones de algunos acontecimientos de la conquista del Perú relataron hechos que aclaran conceptualmente lo que significaba la fundación de poblaciones de cara a la ocupación del espacio, la extensión de la jurisdicción y la definición de fronteras entre reclamación de jurisdicciones enfrentadas.

En 1537, Diego de Almagro retornó de su fallida expedición por Chile y quiso tomar posesión de toda la tierra «pasada la gobernación de don Francisco de Pizarro», de acuerdo con la provisión que le habían hecho llegar hasta allí⁹⁶. Almagro llegó a la altura de Cuzco y quiso entrar en la ciudad para tomar posesión de ella, pues consideraba que caía dentro de los límites que se le habían asignado. El problema se había originado porque, como era habitual, las capitulaciones de Toledo de 1529 para la conquista de la Nueva Castilla no habían delimitado claramente las jurisdicciones de Pizarro y Almagro⁹⁷. En este texto se concedían a Almagro 100 leguas al sur de las 200 concedidas a Pizarro. Cuzco, que había sido fundada en marzo de 1534 por «don Francisco Pizarro con más de 300 soldados de los suyos y de los de su compañero Don Diego de Almagro», se convirtió, así, en ese momento en el escenario y la causa del conflicto⁹⁸.

⁹⁵ Con el concejo..., AGI, Justicia 1049, N. 4, R. 3.

⁹⁶ Agustín DE ZÁRATE (1555), lib. III, cap. IV.

⁹⁷ Alfonso GARCÍA-GALLO (1973), pp. 745-750.

⁹⁸ Vasco de CONTRERAS Y VALVERDE (1649), cap. VII.

Hernando Pizarro, que en ese momento actuaba como teniente del gobernador, su hermano, propuso que Almagro entregase sus credenciales al cabildo para que éste decidiese, «en caso tan apretado», si le concedía el gobierno de la ciudad «en nombre de Su Majestad». La solución pasaba por llevar a cabo una medición precisa de los límites de las gobernaciones y calibrar en cuál de las dos *caía* el Cuzco. La única manera legal que Almagro tenía de entrar en la ciudad como el gobernador era si el cabildo aceptaba tomarle juramento, pues «aun en los virreyes tiene esto por asentado derecho»⁹⁹.

Si Almagro quisiese entrar de otra manera en la ciudad «sería una invasión violenta» y, a pesar de que Hernando Pizarro le ofreció entrar en ella como su invitado, este respondió: «decid a Hernando Pizarro que yo no he de entrar en ella si no por mía, y que no tengo de posar sino en las casas que él posa». A la espera de que los expertos midiesen los límites de las gobernaciones para dirimir el conflicto por la ciudad, el cabildo optó por no recibir a Almagro y acordar una tregua entre ambos contendientes. El adelantado, sin embargo, se saltó la tregua, entrando en la ciudad para apresar a Hernando Pizarro y a su hermano Gonzalo y dando inicio a las cruentas guerras civiles que terminaron con el propio Diego de Almagro ejecutado en la plaza mayor de Cuzco pocos años más tarde.

Más de un siglo más tarde, Fernando Pizarro y Orellana analizaba este hecho en su *Vida de Hernando Pizarro*, asegurando que este podía estar en control del Cuzco como teniente del gobernador, su hermano, quien «tenía *fundada su intención* así en las ciudades conquistadas como en las que después se fabricaron»¹⁰⁰. La existencia y control de una ciudad servía para definir las jurisdicciones y la propia ciudad, además, a través de su cabildo, tenía capacidad de influir sobre las acciones de los gobernadores. La indefinición de las capitulaciones se vio regulada a través de la negociación entre diversos agentes, entre los que las ciudades tenían una relevancia capital, en cuanto que eran miembros constituyentes del cuerpo de la Monarquía y las depositarias últimas de la soberanía real. La fundación de una población era una reclamación de derechos evidente que debía servir para definir fronteras y asentar jurisdicción.

En su *Historia de la Fundación de Lima*, escrita en 1639, Bernabé Cobo narraba que, tras fundar San Miguel de Piura, Francisco Pizarro decidió hacer una «segunda población de españoles», con la que asegurar lo ya ganado hasta entonces. Optó entonces por hacer una

⁹⁹ Fernando Pizarro y Orellana, en el margen de su comentario sobre este punto, incluía la expresión «*magistratus enim ante praesentationem suae commisionis, non potest exercere iurisdictionem*», que remite a la necesidad de un cierto consenso por parte del cabildo para ejercer el poder, lo cual concedía unas capacidades extraordinarias a las ciudades Fernando PIZARRO Y ORELLANA (1639), p. 317.

¹⁰⁰ Ibid.

fundación «por vía de depósito, con intención que si después de explorada y vista la tierra se hallase otro sitio más conveniente se trasladaría a él». Tomó 40 de los soldados que le acompañaban, a los que «nombró por vecinos», asentó un cabildo nombrando alcaldes y regidores y continuó hacia la ciudad de Cuzco. «Este principio tuvo esta gran ciudad de Lima», continuaba el historiador, «el cual refiérese tan sucintamente por no haber permanecido en aquel primer asiento, ni haber sido aquella fundación más que un *depósito de la República* en aquel valle». Para Cobo, sin embargo, esta fue la primera –la única– fundación de Lima, pues «esta mudanza de asiento que ahora tiene es tenuta por su propia fundación, no embargante que fue hecha por vía de traslación de consejo y cabildo»¹⁰¹.

La fundación de Lima había sido un fraccionamiento del poder real, un desmembramiento de su jurisdicción, cuya función era transformar el espacio político y tomar posesión de la tierra de una manera definitiva, lo que permitiría a los castellanos continuar con la *conquista* del Perú. La toma de posesión era un proceso largo que implicaba los preceptivos rituales simbólicos –adaptación de nombre o cartografía incluidas– pero que no se ejecutaba si no se actuaba *sobre* el terreno, haciendo efectivo el dominio de la tierra y alterando su propia condición jurídica, superponiendo una nueva estructura sobre la ya existente. La configuración del espacio político en el Nuevo Mundo fue un largo proceso que se basó en el desgajamiento de la autoridad real –a través de las fundaciones– en varios de estos *depósitos*, que se iban *agregando* a su vez para dar lugar a las gobernaciones, que acabaría dando paso a los virreinos.

Como se ha demostrado en este capítulo, sin embargo, tanto la «fundación de intenciones» sobre el control del territorio en base a la creación de ciudades como el «depósito de la república» sólo eran el primer paso para la ocupación y esa jurisdicción que se asentaba a través de un acto jurídico puntual debía ser ejercida y negociada para componer, por agregación, espacios políticos de rango mayor como las gobernaciones. La lógica geográfica, que puede parecer evidente sobre los hechos analizados *a posteriori*, no resultaba un factor tan decisivo de acuerdo con la información y los parámetros jurídicos que se manejaban sobre el terreno. En ese sentido, la jurisdicción definía e incluso «creaba» territorios con los que se redefinían unas fronteras que no siempre seguían un patrón geográfico claro, sino que eran generadas en función de tensiones y negociaciones a menudo, como hemos visto, a varias bandas.

¹⁰¹ Bernabé COBO (1895), cap. 1.

En el momento en que un territorio era cuestionado por otra autoridad que reclamaba su jurisdicción, este se convertía en *fronterizo*. Lo que puede parecer una frontera si se contempla en una proyección desde arriba, sobre el terreno no tendría por qué serlo a menos que hubiera quién disputase la autoridad. La visión que, por ejemplo, aportan los mapas es siempre una visión desde arriba, que simplifica, desde nuestro punto de vista actual y que puede conducir al anacronismo o a una lectura teleológica de los hechos según la cual las decisiones de la Corona simplemente hubieran puesto el orden lógico a una situación que no lo era si lo juzgamos en función de lo que sucedió y de cómo sucedió.

Las reclamaciones sobre un territorio se podían hacer en base a una interpretación concreta de las instrucciones de la Corona, o en base a una intervención previa sobre ese espacio. La manera en la que se fue construyendo el espacio político remite a una pluralidad de referentes, unos de derecho, otros de práctica, otros de coacción y otros de negociación, que terminan por concretar unas fronteras jurisdiccionales que no se definen sólo desde la Corte o «desde arriba». Los conflictos analizados aquí muestran que el espacio en el Nuevo Mundo no respondía a una lógica territorial única y continua, sino que el territorio, entendido como el espacio sobre el que se puede ejercer jurisdicción, podía ser creado, destruido o desplazado. Por ejemplo, Hernán Cortés no basaba su reclamación sobre el Valle de Ulancho en una lógica geográfica sino en la interpretación de la jurisdicción como un recurso que se podía extender, pero también generar y defender utilizando para ello argumentos diversos y fuentes de poder variadas.

Si bien el refrendo de la autoridad debía ser avalado en última instancia por la Corona, las fuentes para la creación de esta se encontraban sobre el terreno y tomaban la forma política y jurídica de ciudades. En la mayoría de las ocasiones, la Corona únicamente acataba y sancionaba los hechos que ya habían sido solucionados en el Nuevo Mundo. La legalidad de las acciones en el Nuevo Mundo provenía muy a menudo de las prácticas, que dotaban de contenido a las teorías e instrucciones emanadas del centro de la Monarquía.

El proceso que condujo al establecimiento de los límites geográficos precisos entre diferentes autoridades en el Nuevo Mundo fue largo, complejo y dinámico. En ese contexto, la jurisdicción tampoco era una fuente estática de autoridad. Como se ha visto, en un conflicto todos los contendientes reclamaban para sí la jurisdicción y se podían basar en argumentos concurrentes o contradictorios. Sin embargo, hay dos elementos comunes a todas las reclamaciones de jurisdicción sobre un territorio y ambos están entrelazados. En todos los casos, para reclamar el control sobre un espacio se requería la fundación de una población que actuaba como depósito del poder. Unido a este, y como argumento principal,

la fundación de la población permitía el desarrollo de relaciones pacíficas con los indígenas de cada territorio. En última instancia, era la capacidad para entrar en contacto con los indígenas, «pacificarlos», comerciar con ellos y, finalmente, convertirlos al cristianismo, el argumento principal que una ciudad podía ofrecer para reclamar la jurisdicción sobre un territorio.

Conclusiones

Los principios rectores de los que se nutrieron los teóricos a la hora de definir la Monarquía Hispánica, que luego ha sido catalogada como compuesta o agregada, debían contar necesariamente con los modelos de creación del espacio político desde el ámbito local. La lógica que ha permitido explicar a nivel teórico cómo se mantuvo durante 300 años el imperio español estaba participando de su misma construcción. El fortalecimiento del sistema desde la escala local o provincial se producía porque la Corona favorecía el establecimiento de parcelas de poder en forma de depósito y, más adelante, negociaba su incorporación a las escalas superiores del conjunto del agregado imperial. En este capítulo se ha explicado de qué manera esa construcción de la Monarquía se llevó a cabo en el ámbito local a través de una serie de prácticas políticas, incluyendo las tensiones inherentes a conflictos derivados de la parcelación de la autoridad.

No es posible dirimir de forma absoluta, en la serie de conflictos analizados, quién tenía más o menos razón o quién estaba actuando conforme a la legalidad, pues el encuadre del derecho mostraba espacios más y menos definidos y, por lo tanto, suficientemente flexibles para que, en un ámbito de creación de poder, todos los agentes apelaban a argumentos plausibles dadas las circunstancias, lo que dotaba de enorme riqueza a los debates y complejidad a los resultados. En un escenario de interpolación de escalas de poder, en el que se podían encontrar varios focos de autoridad, se trataba de dilucidar qué poder se iba finalmente a asentar y en base a qué principios. La conflictividad latente, con tensiones puntuales, determinaba la confluencia de intereses personales y comunitarios y generaba a su vez un equilibrio entre territorios que permite crear un modelo de establecimiento del poder más flexible y con múltiples influencias.

El resultado del análisis de los diversos casos expuestos en este capítulo ofrece la imagen de un proceso complejo y no lineal, en el que los conceptos políticos clave se veían constantemente redefinidos. La jurisdicción no era una sino muchas y, además, éstas no eran estáticas sino dinámicas y podían asentarse territorialmente o mantenerse «portátiles», dependiendo de las circunstancias de cada caso y la aplicación que de ella hicieran los actores

sobre el terreno. La ciudad, al mismo tiempo, podía ser también reinterpretada e incluso contestada sobre el terreno como principal herramienta jurídica para la ocupación del espacio. A su vez, el mismo concepto de frontera se diluye y pierde su carácter geográfico para convertirse en el espacio de la negociación de los límites para ejercer el poder, por lo tanto independiente de cualquier mera determinación derivada de una dimensión estrictamente territorial.

Las fórmulas que se emplearon para poner las bases del sistema político de la Monarquía Hispánica en los territorios del Nuevo Mundo se adaptaron a las circunstancias tanto sociales como culturales de cada región. En el caso de Castilla del Oro y los territorios aledaños, las bases se asentaron a través de la creación y mantenimiento de las jurisdicciones locales y sus límites. Para el asentamiento de la jurisdicción local, como se ha podido ver en las páginas precedentes, los diversos actores debieron negociar con distintas circunstancias y conflictos de rango diverso en cada una de las situaciones. En primer lugar, la guerra abierta principalmente entre castellanos para poder tomar el control sobre regiones aún no exploradas. Esas guerras tenían como lugar de ejecución las ciudades y era el poblamiento y despoblamiento de estas –o su redefinición– lo que marcaba el carácter abierto o no del conflicto. Resulta paradójico que, en la mayoría de los casos, los conflictos abiertos entre distintas comunidades o huestes de castellanos tenían por objeto disputarse el asentamiento en un espacio que les permitiera desarrollar una relación de amistad o intercambio con los indígenas.

En un segundo escalafón se encontraba no la guerra abierta sino la amenaza o posibilidad de esta. Las tensiones generadas por los movimientos fronterizos, o el aviso de la posibilidad de un ataque a una ciudad, provocaba la negociación que asentaban la jurisdicción de manera definitiva. En este sentido, la negociación y el intercambio serán fundamentales para comprender de qué manera se fue asentando la jurisdicción. Superada la tensión o el conflicto, los límites jurisdiccionales tendían a asentarse y comenzaban los intercambios y dinámicas de colaboración. Por último, tuvo un peso decisivo en la construcción del entramado jurisdiccional en Castilla del Oro la participación, ya fuera directa o indirecta de las estructuras políticas y culturales indígenas. Se produjo entre los castellanos una necesidad de comprensión y mestizaje de las estructuras políticas para que pudieran ser operativas en los nuevos territorios, al tiempo que servían como un punto de contacto o conversación fundamentales para la supervivencia de las ciudades en la región de Castilla del Oro.

Todas estas tensiones, negociaciones y conversaciones permiten destacar la formación de la Monarquía Hispánica en la región de Castilla del Oro y, en general en la zona central del continente, como un fenómeno híbrido y plural, que se nutría de referentes y prácticas que no provenían sólo de una tradición cultural, sino que debían incorporar elementos autóctonos para poder legitimarse desde el inicio. El asentamiento del poder en los territorios más alejados del centro de la Monarquía en el Nuevo Mundo fue poliédrica y dinámica y llevada a cabo desde el ámbito local para ir construyendo, hacia arriba, otros espacios y otras estructuras de poder.

La jurisdicción, el concepto clave para comprender en qué clave se entendía el poder en la Monarquía no se ceñía exclusivamente a la capacidad para ejercer justicia en un territorio determinado. Definía ese territorio como ámbito para el ejercicio de la justicia y también implicaba toda una gama de posibilidades y oportunidades para el ejercicio de la autoridad. Además, la propia jurisdicción debía ser construida y legitimada a partir de la práctica política, sin que los títulos oficiales, las pretensiones teóricas o las afirmaciones exclusivamente jurídicas sobre un espacio tuvieran la última palabra para definir el poder y su práctica. El mantenimiento y renovación de las legitimidades locales a lo largo del tiempo supuso un reto político, social y cultural a largo plazo que precisó de la creación de una maquinaria política de mayor rango, pero la base y los principios sobre los que se sostenían y su aplicación siguieron residiendo en el ámbito local.

La creación y asentamiento de la jurisdicción de cada ciudad iba acompañada de la negociación y consecución de los privilegios comunitarios, para conseguir los cuáles cada población enviaba procuradores a la corte. En el próximo capítulo se analizará cómo se negociarían y defenderían esos privilegios, que eran la argamasa con la que se solidificarían los cimientos de las comunidades urbanas y, con ellas, también de las formas de funcionamiento político de la Monarquía Hispánica en los ámbitos analizados en estas páginas.

Capítulo 3

Repúblicas urbanas, ¿ciudadanos leales?

La *resistencia* a las Leyes Nuevas en Castilla del Oro

El mayor riesgo al que se enfrentaban las primeras poblaciones del istmo en sus primeras décadas de vida era el despoblamiento. Todas ellas experimentaron una fase de «tendencias centrífugas» de la población que hacían peligrar su existencia¹. El despoblamiento de una sola de las ciudades significaría el riesgo de provocar un drama para la Corona, pues podía suponer la pérdida de la jurisdicción que la presencia de ciudades garantizaba y, además, cancelarías las relaciones con los indígenas que se fraguaban en el ámbito local. Los primeros cabildos urbanos, conscientes de su importancia en el sistema de la Monarquía Hispánica, se afanaron por granjearse privilegios –reducción de impuestos, altas cotas de autogobierno, concesión de encomiendas- que les facilitasen mantener con vida sus ciudades. De esta manera, tanto la Corona como los vecinos se verían beneficiados de la permanencia de las poblaciones en un equilibrio de mercedes y privilegios que favorecería a ambas partes.

La Corona tenía la oportunidad de distribuir mercedes y conseguir que las ciudades –y, con ellas, el reino- se ennoblecieran y poblasen y, al mismo tiempo las corporaciones urbanas –y los individuos que las componían- de conseguir privilegios de manera relativamente sencilla. La concesión de mercedes y libertades a las poblaciones dependientes de la Corona era, de hecho, la medida de su propio poder: cuantos más privilegios podía repartir, más poderoso era el rey. En 1505, la reina Isabel concedió a la villa de Adra, en el Reino de Granada, una exención impositiva para potenciar su ennoblecimiento a través de

¹ Stuart SCHWARTZ (1969), pp. 616-637.

las mercedes, con el argumento de que «cuando los reyes y príncipes son más poderosos, más mercedes deben haber especialmente de franquezas y libertades en aquellos lugares por donde se pueble sus ciudades y villas que tienen»². La Corona, en definitiva, debía por definición «ser graciosa para ser justa»; un principio que se encuentra en la base de la lógica política del Antiguo Régimen a todos los niveles, desde la casa hasta la Monarquía³.

La consecución y defensa de esos privilegios ofrece la posibilidad de analizar la construcción de una cultura política –presente en prácticas y conceptos– urbana en Castilla del Oro que afectará a una nueva definición del ennoblecimiento tanto individual como colectivo y, asociado a este, a una particular consideración del bien común en las ciudades de Castilla del Oro. En este capítulo se analizará de manera encadenada la labor de los procuradores de las ciudades recién creadas de Castilla del Oro en la negociación de sus privilegios corporativos, incluidos los títulos de ciudad y, a continuación, la defensa de estos ante las políticas que, desde la corte, buscaban homogeneizar la administración especialmente a partir de la aprobación de las Leyes Nuevas. Las prácticas analizadas permitirán la definición de una cultura política republicana, cuyos lenguajes, prácticas y estrategias ponen el foco en la importancia de la comunidad local como centro de creación y ejercicio del poder, auto-consciente y, hasta cierto grado, «orgullosa» de dicho poder.

Las Leyes Nuevas, discutidas y aprobadas en 1542, significaron el primer intento sistemático por parte de la Corona de ejercer un control estricto y dotado de una cierta homogeneidad de la gobernación en el Nuevo Mundo. Una de las motivaciones principales de ese cuerpo legislativo era limitar la concesión y, especialmente, la perpetuación de las encomiendas. El objetivo que planteaba la Corona era doble. Por un lado, se abogaba por la defensa de los indígenas promovida por Bartolomé de las Casas en esos años y, por otro, se buscaba especialmente controlar la creación de señoríos jurisdiccionales basados en la tenencia de las encomiendas. El alcance de las Leyes Nuevas, sin embargo, no se limitó a estas medidas, sino que también se trató de reorganizar la administración de justicia y gobierno en el Nuevo Mundo, con la extensión de las audiencias y virreynatos para alcanzar un modelo de justicia menos personalista y amparada por las instituciones de la Monarquía.

La ejecución de las Leyes Nuevas ha sido considerada tradicionalmente por la historiografía como un punto de inflexión en el gobierno de las Indias. Según Alfonso García-Gallo, estas leyes significaron la verdadera «constitución política del Nuevo Mundo»,

² Real cédula a la villa de Adra, 22 de febrero de 1505, AGS, MP, leg. 251, doc. 26.

³ Antonio M HESPANHA (1993), pp. 151-176.

que pondría un fin a la época de conquista y abriría la puerta a la época plenamente «colonial» con el asentamiento definitivo de las instituciones de gobierno y la definición de unas normas claras y generales para los virreinos⁴.

Siguiendo este planteamiento, hacia 1542 se cerraría un periodo de la presencia castellana en Indias que cierta historiografía ha calificado como «un periodo de transición estrictamente protocolonial», durante el cual se habían sucedido una serie de eventos desarticulados y se pasaría entonces al periodo, desde 1550, en el que «América se forjaría históricamente»⁵. De igual modo, se ha analizado que con la nueva organización prevista en las Leyes Nuevas concluiría la fase del «pacto colonial» y se iniciaría un periodo descrito como el del «estado colonial»; concepto éste que, aunque no plenamente definido, ha servido para englobar una determinada interpretación de la política en el Nuevo Mundo como una sucesión de fases conectadas cuya razón de ser sería la consecución del estado moderno⁶.

Recientemente, varias aportaciones han puesto en cuestión este planteamiento historiográfico, empujando hacia adelante varias décadas la consecución de las estructuras institucionales, al menos hasta los años 70 del siglo XVI, y cuestionando la idoneidad de plantear la historia del Nuevo Mundo principalmente desde el paradigma institucional para entrar a valorar las dinámicas internas y complejas de su construcción política⁷. Las Leyes Nuevas, a pesar de su relevancia, no supondrían, así, un eje sobre el que hacer pivotar la historia del siglo XVI y, además, tampoco supusieron un cambio radical o una homogeneización definitiva y unidireccional en las formas de gobierno en Indias. Los cambios propuestos por las Leyes Nuevas se fueron incorporando, en cada caso, de manera escalonada y no sin resistencia, por lo que también cabe considerar de qué manera esas tensiones y conflictos derivados de la aplicación de aquellas fueron también incorporados a la construcción y, por ende, claves para la constitución del sistema político en el Nuevo Mundo. El análisis pormenorizado de los conflictos permitirá una interpretación desde el ámbito local de los modos diversos en los que se ejercía y construía el poder en Indias y cómo los poderes locales se hacían notar, presionaban y forzaban el acomodo a las circunstancias de las normas emitidas desde la Corte.

⁴ Alfonso GARCÍA-GALLO (1972), pp. 123-145, esp. p. 136.

⁵ Guillermo CÉSPEDES DEL CASTILLO (2009), Introducción.

⁶ La discusión en torno a los conceptos de «pacto colonial» y «estado colonial» en Horst PIETSCHMANN (1994), pp. 75-103, esp. p. 98; Horst PIETSCHMANN (1989), p. 122 y ss.; una crítica al planteamiento en Carlos GARRIGA (2006), p. 89.

⁷ Ver, en general, Jose Javier RUIZ IBÁÑEZ y Óscar MAZÍN (2012).

La resistencia por parte de los encomenderos a las Leyes Nuevas se ha tendido a interpretar como los últimos estertores de un mundo en extinción, el de los conquistadores, que iba a terminar arrasado por la marea del avance del proceso de construcción del estado moderno. Especialmente en el caso del Perú, la rebelión de Gonzalo Pizarro ha sido analizada como la acción casi exclusiva de un grupo de poder económico para garantizar la defensa de sus propios intereses materiales, apoyándose en la violencia⁸. Este grupo, considerado de manera genérica como rebeldes al rey, ofrecían el contrapunto más evidente para la definición de lealtad a la Corona. Esa visión dicotómica, y también la de la rebelión de Martín Cortés unos años más tarde, está siendo revisada recientemente para poner en contexto tanto las prácticas políticas como los lenguajes asociados a éstas y problematizar los propios conceptos de rebelión, obediencia o defensa de los privilegios corporativos, para incorporarlos a la explicación de la construcción y mantenimiento de agregados imperiales⁹.

Para el caso de Castilla del Oro, la resistencia a las Leyes Nuevas es mucho menos conocida, singularmente porque no tuvo resultados tan violentos como en el caso de Perú. Tradicionalmente se ha interpretado esta resistencia dentro de la dicotomía entre categorías descontextualizadas de *modernización* y *atraso*. Según este análisis, aquellos que resistieron en Castilla del Oro el avance de las Leyes Nuevas serían unos grupos de poder «con pretensiones feudalizantes» que, en coalición con los pizarristas, ponían trabas al avance de las estructuras de gobierno modernizadoras desde la óptica de un «atraso medievalizante»¹⁰. La ausencia de violencia se puede explicar, como se ha venido haciendo, por la relativa debilidad de la encomienda para el contexto de Castilla del Oro¹¹. Esta explicación, que es cierta y, efectivamente, muy plausible, no alcanza para comprender completamente la ausencia de violencia, pues otros «grupos de poder» como los mercaderes, sí que percibían que sus privilegios estaban siendo perjudicados, pero no articularon su defensa por vía violenta.

El objetivo principal de este capítulo es explicar la canalización de la resistencia a las Leyes Nuevas por vía judicial en lugar de a través de la revuelta violenta. Para ello, se va a centrar en las estrategias seguidas por los cabildos de las ciudades del istmo para oponerse a

⁸ Si bien se ha puesto en relieve las ideas «jurídico-políticas» de la rebelión de los pizarristas, ha sido en exclusiva en forma de «tramoya», sin considerar que las acciones estuviesen determinadas por los argumentos sino sólo por los intereses materiales, Guillermo LOHMANN VILLENA (1977).

⁹ Manfredi MERLUZZI (2003), pp. 233-254; Gregorio SALINERO (2017); sobre la problematización de los conceptos de obediencia, lealtad y fidelidad en la Monarquía Hispánica, Rafael VALLADARES (2012b), pp. 121-145; Rafael VALLADARES (2015), pp. 21-38; Ruth MACKAY (1997), p. 11 y ss; Irving A. A. THOMPSON (2006), pp. 281-288.

¹⁰ Esos grupos de poder estarían, a su vez, definidos por conexiones de clase y de origen geográfico peninsular, según, Alfredo CASTILLERO CALVO (2006), p. 569.

¹¹ Sobre la encomienda panameña como «escuálida», ver Carmen MENA (1984), p. 190; en general, sobre el funcionamiento de la encomienda Silvio ZAVALA (1935).

las Leyes Nuevas mediante una serie de pleitos de justicia. Así, el análisis de los procesos de defensa de sus privilegios ante diversos capítulos de las Leyes permite identificar una cultura política urbana que matiza el eje dicotómico entre *modernización* y *atraso* para incorporar discursos más variados al proceso de establecimiento de la Monarquía. Para contextualizar la defensa de los privilegios corporativos de las ciudades es necesario reflexionar, sin embargo, sobre cómo esos privilegios fueron adquiridos y cómo se convirtieron en una pieza fundamental para la definición de la identidad corporativa de las ciudades.

Este capítulo comienza, por lo tanto, con las negociaciones por parte de los procuradores de las ciudades para conseguir una serie de privilegios que atendían al autogobierno en materia de justicia, a la exención impositiva y a la consecución de encomiendas de indígenas. La cultura política urbana desarrollada en Castilla del Oro amparó la negociación y obtención de los privilegios, cuya ostentación se vio muy pronto respaldada de manera simbólica por los títulos de ciudad –como se verá en próximos capítulos– asumidas por cada una de las poblaciones del istmo y confirmadas por el rey. Todo ese bagaje de privilegios se iba a ver puestos en cuestión a partir aproximadamente de 1538 y, con mayor intensidad, a partir de 1544. Las reacciones a las Leyes Nuevas y las disputas desde el punto de vista de los cabildos ocuparán la parte central de este capítulo para, finalmente, ofrecer una interpretación contextualizada de los conceptos políticos puestos en marcha en los conflictos analizados y que se incorporaron a la configuración del poder político de la Monarquía Hispánica.

1. *Procuradores y privilegios urbanos.*

Desde muy pronto después de su fundación, a las poblaciones del Nuevo Mundo les fue confirmado el privilegio de enviar procuradores a la corte. Una ley firmada en Barcelona en 1519 y de nuevo en Toledo en 1528, declaraba que «las ciudades, villas y poblaciones de las Indias puedan nombrar procuradores, que asistan a sus negocios, y los defiendan en nuestro consejo, audiencias y tribunales, para conseguir su derecho y justicia, y las demás pretensiones, que por bien tuvieren»¹². En 1525, se concedía en concreto a la villas y ciudades de Castilla del Oro el privilegio de enviar procuradores «para cuando viéredes que conviene para el bien e provecho de la tierra e despacho de los negocios della»¹³. Los privilegios sobre enviar procuradores a la corte, formalizados a través de dichas cédulas, ya se venían ejerciendo *de facto* desde casi el momento de la fundación de cada una de las poblaciones. No

¹² Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias, lib. IIII, tit. XI, ley I.

¹³ Reales disposiciones sobre mercedes concedidas a Panamá, 1521, AGI, Patronato 193, R. 8.

en vano, las instrucciones concedidas a Pedrarias Dávila en el verano de 1513 y ampliadas durante la primavera de 1514 habían sido promovidas por los procuradores de Santa María del Antigua del Darién, Rodrigo de Colmenares y Juan de Quicedo, cuyo objetivo en la corte era que «se guarden las mercedes y franquezas que se conceden a los vecinos y moradores de la villa de Santa María del Antigua», que se extendían a «los que ahora van a poblar en la dicha villa y provincia del Darién llamada Nueva Andalucía»¹⁴.

Más allá del interés de la Corona por mantener el contacto con los territorios del Nuevo Mundo, la iniciativa de conceder privilegios a los individuos que se estableciesen en Castilla del Oro junto a Pedrarias había partido del propio interés local de los vecinos de las ciudades. Los representantes de los cabildos eran elegidos entre los miembros más prominentes o antiguos de cada población¹⁵. Generalmente eran miembros de los regimientos o personas cercanas a estos, que tendrían intereses personales –ya fueran económicos o patrimoniales– en el territorio que les impelerían a defenderlos al tiempo que defendían los intereses corporativos de las poblaciones. La tipología de los procuradores y de quiénes los enviaban también tendría efectos, como veremos, en la conceptualización del bien común urbano, así como en las consideraciones respecto al acceso a la vecindad a través de la antigüedad y los méritos.

Las ciudades desarrollaron muy pronto tras su fundación –incluso para obtener la aprobación oficial de las mismas fundaciones– un canal de comunicación directo con la Corona, a la que podían apelar saltándose el intermedio del gobernador, para defender de manera más concreta sus propios intereses¹⁶. De hecho, los cabildos solicitaron en varias ocasiones que el gobernador «no pueda estorbar juntarse los cabildos sin él para escribir a V.M. y nombrar procuradores pues a veces deben decir los *excesos* del gobernador que los

¹⁴ Franquezas a los vecinos de Santa María del Antigua, 9 de agosto de 1513, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 88v-93r.

¹⁵ Por ejemplo, los primeros procuradores enviados por Santa María del Antigua, Rodrigo de Colmenares y Juan Quicedo fueron elegidos para representar al pueblo tras deshecharse que el propio Balboa acudiese. Tanto Colmenares como Quicedo tenían intereses en la tierra, el primero porque ya tenía plantadas sementeras que esperaba recoger a su vuelta y el segundo había llevado con él a su esposa y por ello se vería obligado a retornar, sobre el proceso de selección, ver Pedro MÁRTIR, dec. II, cap. VI. En otros casos se cumplían similares rasgos: Francisco de Lizaur había participado en la fundación de Panamá y, como tal, fue enviado a la corte tan pronto se hubo formalizado el cabildo, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 296v; Martín de Estete era miembro del regimiento de Panamá desde 1521 y fue enviado a la corte en 1524 para negociar diversos asuntos, AGI Panamá 233, L. 2, f. 1v; Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los miembros más conspicuos de la sociedad de Castilla del Oro representó a la gobernación hacia 1534 y él mismo narró que sus vecinos la consideraban «padre de la república», AGI Panamá 234, L. 5, f. 178-179.

¹⁶ Un análisis de la relación entre procuradores urbanos y la Corona, si bien para fechas más tardías en Pedro CARDIM (2012), pp. 43-53, esp. p. 48; otras instituciones, como los cabildos catedralicios, también tuvieron canales de relación con la corte, ver Óscar MAZÍN (2008), pp. 119-156; Irving A. A. THOMPSON (1989), pp. 193-248.

oprime»¹⁷. Los procuradores de las ciudades debían mirar tanto a las necesidades de éstas como a «todo lo que conviene a su real servicio y a la sustentación y población e pacificación e descubrimiento destos sus reinos e costa e Mar del Sur»¹⁸. Por esto, al mencionar en general a las ciudades y villas de la gobernación, se creaba una homogeneidad para las villas que, conjuntamente, podrían negociar también aspectos relativos al gobierno del territorio.

En ausencia de cortes representativas, las ciudades adquirirían así un peso decisivo en la elaboración y puesta en marcha de políticas dedicadas al bien común, tanto particular como de todo el reino, definiendo también con ello el de la Monarquía. De esta manera, se creaba un flujo de intereses políticos compartidos entre los cabildos, que adquirirían un rol decisivo como miembros de la Monarquía y la Corona que, a través de la concesión de mercedes, estimulaba una cierta lealtad y mantenía con vida las ciudades. Las poblaciones del istmo, además, comenzaron pronto a enviar procuradores también a otras poblaciones de Castilla del Oro para defender determinados privilegios y comparar las fórmulas de gobierno urbano entre unos y otros lugares. El trasiego de representantes entre una y otra ciudad tenía el efecto de crear una red urbana de intereses colectivos con los que se reforzaba la consideración autónoma, aunque interdependiente, de las poblaciones de la región. El gobierno municipal resultaría así el más efectivo durante los primeros años del siglo XVI, pues de él emanaban tanto los planteamientos de los problemas como la negociación de las soluciones¹⁹. Las ciudades representaban en Castilla del Oro, a estos efectos y con mayor amplificación si cabe que en Castilla, la auténtica *constitución* de la Monarquía. Este proceso tuvo también el efecto de crear y reforzar la conciencia de las ciudades de ser efectivamente la fuente de poder y jurisdicción de la Monarquía y estar llevando a cabo una labor fundamental para mantener el sistema imperial²⁰.

La principal motivación para el envío de procuradores a la corte era la obtención de privilegios, para la cual invocaron la amenaza de que las poblaciones de Castilla del Oro se despoblasen, perdiendo con ello la capacidad de realizar su labor en la zona, repercutiendo en una mengua de jurisdicción y ruptura de las relaciones con los indígenas. Rodrigo de Colmenares, que recibió poderes de Santa María del Antigua ya en 1513, solicitó al rey que

¹⁷ RAH, col. Muñoz, t. 60, f. 27r.

¹⁸ Este era el caso de Gaspar de Espinosa, enviado por la ciudad de Natá para negociar mercedes a las pocas semanas de haber sido fundada, Solicitud del cabildo de la ciudad de Natá a SM, pidiendo ciertas gracias: el título de ciudad y el escudo de armas, entre otras, 15 de octubre de 1522, AGI, Patronato 185, R. 1.

¹⁹ Según Domínguez Compañy, de hecho, «el único gobierno real en América durante gran parte del siglo XVI es el municipal», en Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY (1981), p. 69; Oscar MAZÍN (2013), pp. 99-110.

²⁰ La negociación de los privilegios entre soberano y territorios resultaría en el «renforcement de l'identité politique et juridictionnelle» de éstos, Jose Javier RUIZ IBÁÑEZ (2014b), pp. 927-954.

tomase determinadas medidas para «que en esta tierra no se despueble lo que ya estuviera poblado porque si se despuebla sería muy grand daño y mucho desgobierno de vuestra alteza»²¹. El envío de multitud de procuradores a lo largo de las siguientes décadas tendría el mismo objetivo y seguiría la misma estrategia. La Corona, en consecuencia, ante la posibilidad de que se despoblase el territorio, concedía todo tipo de mercedes y privilegios para garantizar la población. En Castilla del Oro estos privilegios se plantearon como corporativos desde el comienzo y tuvieron el efecto añadido de contribuir a crear y mantener una identidad local en las poblaciones que se vería reforzada a lo largo de las décadas siguientes.

Las mercedes solicitadas y concedidas atendían especialmente a tres focos: las ventajas impositivas, la concesión de encomiendas y la garantía del autogobierno en materia de justicia. Los procuradores argumentaron que la consecución de estos privilegios permitiría el mantenimiento de las ciudades, lo que generaría, como veremos, una particular interpretación del ennoblecimiento colectivo. Las copias de los textos de las preeminencias y libertades a las que accedía cada una de las ciudades del istmo se guardaban en la caja de tres llaves de los respectivos cabildos junto con la *Ley de Partidas* y las ordenanzas y pragmáticas reales actuando, así, como un depósito de la conciencia comunitaria desde sus inicios para ser desempolvados cuando fuera necesario reivindicarlos²².

1.1. *Privilegios impositivos.*

Entre las medidas negociadas por los procuradores urbanos tenían un lugar preeminente la consecución de ventajas impositivas para todos aquellos que se asentasen en las ciudades con sus mujeres, además de las destinadas a favorecer las plantaciones y construcción de viviendas, así como para fomentar la minería a través de la rebaja del quinto y el comercio a través de la reducción del almojarifazgo. Las rebajas de impuestos, si bien generalmente individuales, ya habían sido utilizadas como acicate para el poblamiento durante la *Reconquista* peninsular y también en las villas de repoblación de las primeras décadas del siglo XVI²³. En Castilla del Oro, las ventajas fiscales se fueron asentando como privilegios corporativos que los cabildos intentaban negociar y prorrogar cuanto fuera posible. Los incentivos iniciales al poblamiento se irían rebajando paulatinamente al tiempo que la Corona

²¹ Memorial de Rodrigo de Colmenares al Rey, c. 1516, AGI, Patronato 26, R. 9, f. 1.

²² Juicio de residencia a Pedro Vázquez de Acuña, 3 de agosto de 1538, AGI, Justicia 368.

²³ Jean GAUTIER-DALCHÉ (1979), p. 177; Manuel LADERO-QUESADA (1992), pp. 213-261, esp. p. 220; ver también José Ignacio FORTEA (1990), p. 201 y ss.; Juan Clemente RODRÍGUEZ ESTÉVEZ (1993), pp. 27-42 y, para el caso de las villas de repoblación de Jaén Jose Miguel DELGADO BARRADO, José FERNÁNDEZ, J. y María Amparo LÓPEZ ARANDIA (2011) y María Amparo LÓPEZ ARANDIA (2011), pp. 33-50.

aumentaba sus rentas. Entre las mercedes originales concedidas a los primeros pobladores de Castilla del Oro en 1513 se encontraba la siguiente: «porque Su Alteza tiene mucho deseo y voluntad de *ennoblecere* y poblar la dicha Tierra Firme lo antes que se pueda concede a toda la dicha Tierra Firme y vecinos y moradores que fueren a poblarla que sean francos, libres y exentos de todo pecho y alcabala», por el plazo de veinte años²⁴. Este privilegio genérico fue luego interpretado y defendido por cada una de las ciudades de forma particular.

Hacia 1517, los procuradores de Castilla del Oro solicitaron al rey que mandase «prorrogar las libertades que a la dicha tierra fueron dadas al tiempo que el gobernador Pedrarias Dávila allá pasó por otros diez años después de pasados los cuatro años primeros», la razón para solicitarla era que «sin estas libertades los vecinos del Darién no pueden vivir ni la tierra será proveída porque los mercaderes e tratantes no irán allá con sus mercaderías», lo cual redundarían, por supuesto, en que la tierra no sería «más *nobleada*»²⁵. La sociedad que se fue creando en las ciudades del istmo, gracias a este tipo de rebajas impositivas para promover el comercio, se caracterizó por la presencia constante y creciente de mercaderes que fueron ocupando los puestos más importantes en los gobiernos municipales. En 1521, Panamá recibió una serie de privilegios y libertades muy extensas tras el informe entregado por los procuradores Francisco de Lizaur y Benito Hurtado, cuyo objetivo era apoyar el poblamiento de la ciudad y entre las que se encontraban la exención de los diezmos y la exención del almojarifazgo en perpetuidad, acompañados, a su vez, del título de ciudad²⁶.

De manera sucesiva, el resto de las poblaciones de la región fueron recibiendo rebajas y ventajas impositivas para asegurar el poblamiento, facilitar los intercambios comerciales y promover el estilo de vida urbano que se estaba imponiendo. Tras la fundación de Natá en 1522, el procurador continuó negociando ciertos privilegios como la exención, equivalente a la que ostentaba Panamá, por cuatro años de los «diezmos y preeminencias»²⁷. En 1524, gracias a la intervención del procurador Martín de Estete, la ciudad de Nombre de Dios recibiría la merced de 3000 pesos de oro, que se sumaban a las mercedes ya existentes, para continuar el trabajo del camino que la conectase con Panamá, pues ello facilitaría el comercio y redundaría en el «acrecentamiento de nuestras rentas e nobleamiento y población de la dicha tierra»²⁸. En el año 1534, Acla, que ya había heredado los privilegios asociados a Santa

²⁴ Memorial de las franquezas y libertades que S.A. otorga a los vecinos y pobladores de Tierra Firme, 1513, AGI, Panamá, 233, L. 1, f. 5r.

²⁵ Petición de los procuradores de Tierra Firme, s.f., AGI, Patronato 193, R. 2, f. 11r.

²⁶ Real Provisión concediendo a los vecinos de Panamá no paguen los diezmos de sus labranzas y crianzas a que son obligados, 6 de septiembre de 1521, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 299v-300r.

²⁷ Solicitud..., 15 de octubre de 1522, AGI, Patronato 185, R. 1.

²⁸ Real cédula a Pedrarias Dávila, 20 de febrero de 1524, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 346v.

María del Antigua al producirse su «fusión» -proceso que será analizado más adelante- y ante el grave riesgo de despoblación envió un procurador a la corte. Este, llamado Alonso Rubielo, gestionó, además de otros de índole política o religiosa, una serie de privilegios fiscales con los que salvar la población²⁹. Los privilegios fiscales constituyeron uno de los principales acicates para favorecer el mantenimiento de las poblaciones. Unidos a estos, otras mercedes colectivas fueron también decisivas para generar un sustrato comunitario que marcaría la cultura política de Castilla del Oro.

1.2. *Encomiendas.*

Los privilegios fiscales destinados a mantener la población de cada una de las ciudades de Castilla del Oro –especialmente a través de la facilidad para los intercambios comerciales- estaban directamente relacionados, a su vez, con la necesidad de los habitantes de subsistir y sacar rendimiento a la tierra. Para ello, también se concedieron las encomiendas y repartimientos de indígenas en forma de privilegio, primero individual, pero pronto convertido en corporativo y con capacidad para definir criterios de pertenencia y vecindad. En 1519, tras la fundación de Panamá, se produjo el repartimiento de los indios de su jurisdicción, conocido como «el repartimiento viejo» en cuyo texto se relacionaba de manera directa el mantenimiento de la población a través de la «conservación de caciques e yndios» que se entregaron en encomienda³⁰. La encomienda se convertía así en una seña de identidad corporativa, y no sólo en una recompensa destinada a pagar los servicios de las «huestes» de individuos cuyos intereses serían exclusivamente económicos³¹. Los repartimientos entre los vecinos actuarían, por tanto, como uno de los mecanismos que fomentaron la pertenencia comunitaria y, en teoría, también favorecerían la integración de los propios encomendados. De igual manera, entre los privilegios incluidos en el acta de fundación de Natá, datada en mayo de 1522, destacaban en primer lugar, que los vecinos de otros pueblos que ya tenían repartimientos en esa zona los perdieran y, derivada de esta norma, que los repartimientos se redujeran al número exacto de vecinos para evitar que los castellanos de fuera de la ciudad tuvieran acceso a ellos. Además, siempre según el acta de fundación, los repartimientos de los vecinos de Natá deberían ser «más crecidos que los de los vecinos de Panamá» y quienes

²⁹ Merced de las penas de cámara para la ciudad de Acla, 4 de mayo de 1534, AGI, Panamá 234, L. 5, f. 166v-167; Exención del almojarifazgo a los vecinos de Acla, 12 de septiembre de 1534, AGI, Panamá 234, L. 5, f. 176.

³⁰ Copia e relación de los vecinos e personas desta cibdad de Panamá que tienen yndios encomendados por su señoría, 1522, AGI, Justicia 1042, f. 9-14; Bethany ARAM y Rafael OVANDO (2017), pp. 129-148.

³¹ Mario GÓNGORA (1962), pp. 68-90.

recibieran un repartimiento podían utilizar a los indígenas como servicio doméstico³². Por otro lado, los primeros vecinos de Natá eran los únicos que tenían derecho al rescate de cualquier producto o persona disponible, pero debían prevenir que otros pretendiesen aprovecharse de ese privilegio y, por tanto, «porque con codicia de los rescates algunas personas se sientan por vecinos solamente por gozar de ellos, y no con voluntad de permanecer, que su señoría mande que los que se asentaren residan en el pueblo» y, quien no lo haga pierda el rescate «y los otros provechos que hubiera habido»³³.

El procurador enviado en octubre de 1522 a la Corte insistía en el carácter corporativo y generador de vecindad de la encomienda, pues «ninguno que no resida ni tenga vecindad e su casa poblada en esta dicha cibdad no pueda tener ni tenga yndios en ella salvo todo resydan donde tuvieren sus yndios de repartimiento e encomienda»³⁴. El hecho de que alguien que no fuese vecino tuviese una encomienda en Natá, continuaba el procurador, sería deservicio del rey y de la ciudad, pero también de los caciques e indios que no serían bien doctrinados. También sería «provecho» de los vecinos la parte correspondiente de los beneficios de las minas que eventualmente se encontrasen y, por supuesto, mediante la definición de los términos concretos de la ciudad, que «todos los caciques e indios que habitan dentro de los dichos términos sean para los dichos vecinos y pobladores de esta ciudad», quedando, obviamente vedados los habitantes de otras ciudades³⁵. La distribución de la encomienda participó, por lo tanto, también del proceso de definición jurisdiccional de cada una de las poblaciones, con todas las consecuencias en términos de generación de vecindades, naturalezas e identidades corporativas.

Los vecinos de Natá, además de lo ya reseñado, podrían aprovecharse del uso de ejidos, baldíos y pastos comunes para los ganados y servicio de la ciudad. Finalmente, los habitantes de Natá a través de su cabildo solicitaban «que su señoría [el gobernador] haga merced a los vecinos y pobladores de esta ciudad de todos los diezmos y primicias de los frutos y crianzas y ganados que se criaran en esta dicha ciudad y sus términos, dentro de seis años, por todos los vecinos de esta dicha ciudad en todos los términos de allí»³⁶. Pocos meses después de su fundación, el cabildo de Natá informaba al rey de la necesidad de que se le

³² Francisco SOLANO (1996), p. 65. La encomienda de Natá ha sido estudiada de manera profusa por Alfredo CASTILLERO (1972), pp. 136-156.

³³ Ibid.

³⁴ Solicitud del cabildo de la ciudad de Natá a SM, pidiendo ciertas gracias: el título de ciudad y el escudo de armas, entre otras, 15 de octubre de 1522, AGI, Patronato 185, R. 1.

³⁵ Francisco SOLANO (1996), p. 65. Para un análisis de los criterios de pertenencia comunitaria en Castilla definidos en función del acceso al uso de los pastos comunales ver Jesús IZQUIERDO MARTÍN (2001), pp. 247-264.

³⁶ Ibid.

garantizasen las encomiendas, no sólo porque era su principal fuente de sustento, sino porque habían hecho un gran servicio a la Corona para pacificar a los indígenas y era, pues, justo, que fuesen recompensados³⁷. No en todas las poblaciones de Castilla del Oro existió repartimiento y no se puede considerar la principal actividad económica de la región³⁸. No obstante, la encomienda sí representó una forma de profundizar en las identidades urbanas, especialmente de la ciudad de Natá y de determinar su relación con Panamá y el resto de poblaciones del istmo. Natá, en virtud de la importancia de la encomienda para el trabajo de la tierra, se convirtió en el principal productor de grano para abastecer al resto de las poblaciones de Castilla del Oro y, además, a las flotas que partían hacia el Perú. La gestión de las encomiendas fue constante fuente de conflicto entre las poblaciones de Castilla del Oro y los gobernadores o oidores de la Audiencia. Éstos intentaban controlar a las élites encomenderas a través de intervenir en su gestión —concediendo indios a familiares o clientes y creando grupos de poder afines— mientras que los cabildos reivindicaban continuamente el control de los repartimientos y, con ello, el refuerzo de su autonomía municipal y de su identidad corporativa. En todo caso, la actividad económica de las ciudades de Castilla del Oro no dependió en exclusiva de la mano de obra indígena, lo cual derivó en una dinamización de las actividades y, al tiempo, en un complejo acceso a la vecindad, especialmente por la dificultad de mantener pobladas cada una de las poblaciones.

1.3. *Privilegios de justicia y autogobierno.*

Entre todos los privilegios corporativos alcanzados por las poblaciones del istmo, uno de los más decisivos en términos de construcción política de la Monarquía, y por el que más pleitos se generaron a lo largo del siglo XVI, fue el del autogobierno y el ejercicio local de la justicia. Este privilegio estaba en la base de la autonomía de los cabildos y fue determinante en la construcción identitaria, así como en la definición y mantenimiento del bien común, de las poblaciones y del reino. No era casual que uno de los primeros elementos que aparecían en la fundación de cada ciudad fueran los símbolos de la ejecución de justicia, representados por la picota en el centro de la plaza y la horca en los límites de la población³⁹.

³⁷ «pues con tantos trabajos e fatigas e hambres e neçesydades los hemos conquistado reduziendo muchos ellos al servicio de dios e a que sean por parte de nos dotrynados en las cosas de nuestra santa fee católica e a la obediencia e servicio de vuestra alteza e que no nos puedan ser admovidos ni quitados», *Solicitud...* 15 de octubre de 1522, AGI, Patronato 185, R. 1; como se verá más adelante, este mismo argumento volverá a surgir más de 30 años más tarde cuando el cabildo se afane por mantener el privilegio de la encomienda.

³⁸ Carmen MENA (1983), pp. 3-17. Se podría considerar, de hecho, que la falta de profundidad de la encomienda se convirtió en un incentivo para desarrollar otras prácticas económicas en Castilla del Oro, entre las que se encontraba la esclavitud de la población africana y el comercio transatlántico.

³⁹ Bernal DÍAZ DEL CASTILLO (1985), p. 175: «diré cómo se puso una picota en la plaza, y fuera de la villa una horca», en plena fundación de Veracruz.

Juan García de Castrojeriz incluía el ejercicio de la justicia como uno de los «bienes que se siguen a la fechora de la ciudad, sin los cuales fechora no podría estar ni mucho durar»⁴⁰. La capacidad de una justicia local eficaz y sensible a las necesidades y características locales ofrecería un ámbito que favorecería la sensación de pertenencia comunitaria. Una justicia independiente –si bien ejercida en nombre del rey- y eficaz era la base de todo gobierno según el esquema aristotélico, y eso invitaría a que nadie quisiera abandonar la población así fundada⁴¹. El mismo esquema aristotélico se podría a su vez aplicar a la Monarquía en conjunto, reforzando el carácter agregativo de esta en la cual rigen los mismos principios en las comunidades políticas locales y globales.

Los alcaldes ordinarios eran elegidos por los regidores del cabildo el primer día de cada año, siguiendo la fórmula habitual para Santo Domingo en la Isla Española. Al toque de campana y tras la misa de Espíritu Santo, los alcaldes salientes dejarían sus varas en el cabildo y saldrían, para dejar paso a una discusión que finalizaría con la elección de dos alcaldes nuevos de entre los más antiguos y calificados, que el gobernador o el oidor de la audiencia debería limitarse a confirmar⁴². El gobernador, eso sí, tenía que asegurarse de que en la casa del cabildo se guardasen, en un arca de tres llaves, los libros de privilegios y mercedes de cada municipio, así como las leyes de las Siete Partidas y «el libro de las ordenanzas reales y pragmáticas por donde primeramente se han de juzgar los pleitos»⁴³. Es decir, la primera labor del gobernador, según los propios cabildos, debía ser la de garantizar una administración de justicia lo más imparcial posible, sin interferencias de las oligarquías locales ni del propio gobernador, en cada población. El arca de tres llaves del cabildo era el repositorio del poder, tanto simbólico como efectivo. El control de este y, en especial, la posibilidad de acceder a su contenido fueron un terreno abonado para las disputas entre los cabildos y los gobernadores, oidores y corregidores. Más allá del simbolismo asociado a su presencia dentro del cabildo, en el arca se encontraba físicamente el acceso al poder y las disputas por su control permiten comprender la simultaneidad y tensión entre los diversos focos –municipal y real- de la autoridad en los territorios de la Monarquía.

Los alcaldes ordinarios de cada ciudad, según décadas después resumiría Solórzano y Pereira, «tienen jurisdicción ordinaria en primera instancia en todos los negocios civiles i

⁴⁰ Juan GARCÍA DE CASTROJERIZ (1495), f. 154r. El florentino Matteo Palmieri, aproximadamente por las mismas fechas afirmaría que «senza giustizia nessuna città e nessun governo pubblico può durare», ver Maurizio VIROLI (1994), p. 58.

⁴¹ Richard KRAUT (2002), p. 197.

⁴² Expediente del cabildo secular de Panamá en que solicita se libre real cédula para que los oidores de aquella Audiencia no asistan a las elecciones de alcaldes ordinarios de dicho cabildo, 1559, AGI, Panamá 30, N. 8.

⁴³ Residencia Antonio de la Gama, 1534 AGI, Justicia 363.

criminales de su territorio». La justicia municipal, cuyos representantes formalmente debían estar sancionados por los gobernadores, tenía una amplia jurisdicción en Indias y no sólo, como mencionaba el jurista «por la gran distancia de los caminos i difícil recurso à los superiores»⁴⁴. A los problemas logísticos –mala calidad o peligro de los caminos–, que dificultaban mucho el acceso al recurso a una instancia superior, se unió la defensa que cada municipio hacía de sus propios privilegios frente a las posibles injerencias de las instancias superiores en sus asuntos. En su largo informe enviado a la Corona hacia finales de 1524, el bachiller Diego de Corral alertaba sobre los inconvenientes que se podían generar por el nombramiento de tenientes que sustituyeran al gobernador en las poblaciones. Este tenía la obligación de visitar durante su gobernación periódicamente todas las ciudades. Si no cumplía con esa obligación y enviaba tenientes, según Corral, la gestión de la justicia se vería muy menoscabada, pues en los «pleitos se apela para los tenientes e de los tenientes a los alcaldes mayores y de los alcaldes mayores para el gobernador y desta e ansi los pleitos son ynmortales la justia se alcaça con mucha difycultad o nunca»⁴⁵.

Una de las quejas más recurrentes, que aparece de manera regular en las preguntas de los juicios de residencia a los gobernadores, por parte de los cabildos de Castilla del Oro era el incumplimiento sistemático de los gobernadores en sus visitas a las ciudades, de manera que veían impedida su posibilidad de apelación en segunda instancia. Este hecho provocó que, efectivamente, los cabildos tomaran muy en serio el ejercicio local en materia de justicia y no admitiesen ni la injerencia externa en la elección de sus alcaldes ordinarios ni el ejercicio de la justicia a través de tenientes de gobernador.

La autonomía en materia judicial de cada cabildo estaba en la propia esencia del sistema político de la Monarquía Hispánica en Indias. En los primeros años tras la fundación de cada una de las poblaciones se fueron definiendo, en base a la negociación de los privilegios, las características propias de la administración de justicia y, en general, de los asuntos políticos de cada ciudad y se incorporaron al catálogo de derechos «inmemoriales» de las poblaciones⁴⁶. La elección de los regimientos y los alcaldes ordinarios de Castilla del Oro estaba basada en «la manera y costumbre del Darién», según se recogía en el acta de fundación de Natá, y esta a su vez se había basado en la de Santo Domingo⁴⁷. La transmisión

⁴⁴ Juan SOLÓRZANO PEREIRA (1647), lib. V, cap. I.

⁴⁵ Parecer del bachiller Corral, proponiendo a Su Majestad puntos de gobierno secular y eclesiástico en la provincia del Darién, c. 1524, AGI, Patronato 193, R. 13, ff. 159-167v.

⁴⁶ El mejor ejemplo disponible es el acta de fundación de Natá, que explica el proceso de elección, asumiendo el modelo de Castilla del Oro y proyectándolo a su vez hacia el futuro.

⁴⁷ Francisco SOLANO (1996), pp. 54-69; tras la desaparición de Santa María del Antigua, el modelo de referencia dentro de Castilla del Oro pasó a ser Panamá, Elección de alcaldes ordinarios de Acla, 4 de mayo de 1534, AGI,

de las prácticas políticas entre diversas regiones del Nuevo Mundo fue recurrente y alimentó la conciencia de la importancia de los cabildos para la gobernación.

Enfrentado a la injerencia del oidor Francisco de Robles en la elección de los alcaldes ordinarios en 1540, el cabildo de Panamá convocó, a través de su procurador Tomé García, una pesquisa con la cual apelar a la independencia de la elección de los alcaldes. Los testigos que se presentaron fueron animados a contestar a si «saben que en la ysla Española donde resyde la Audiencia Real y en la çibdad de Mexico no se acostumbra ni haze que los oydores se entremetan en la eleçion de los alcaldes syno que los regidores tienen libertad de los elegir»⁴⁸. Las respuestas reflejaban, por un lado, la movilidad de los individuos que participaban en los organismos de gobierno municipal y, por otro, la recurrencia de las prácticas políticas entre distintos territorios. Juan Sánchez, vecino de Panamá, había «estado en un lugar que se dize la Buena Ventura ques syete leguas de la çibdad de Santo Domingo donde a resydido seys o syete años» y nunca vio que la Audiencia interviniese en la elección de alcaldes. Alonso de Zamudio, «a resydido en la Nueva España quinze años e que en este tiempo a bisto hazer eleçion de los alcaldes asy en la çibdad de Mexico como en las otras çibdades cabeça de obispado e otras villas de la Nueva España»⁴⁹.

La queja se extendió a las poblaciones de Natá y Nombre de Dios, en las que pesquisas similares se iniciaron, con el fin de reclamar el autogobierno municipal que las ciudades alegaban disfrutar desde su propia fundación, por encima de la injerencia de los gobernadores o tenientes. El mantenimiento del gobierno autónomo municipal era otro de los argumentos, basado en principios de buena gobernación, manejados por los cabildos para garantizar su poblamiento y poder actuar de manera efectiva en servicio de la Corona. Como veremos más adelante, la lucha por el mantenimiento del autogobierno tendría una fase más aguda durante los años cuarenta del siglo XVI, tras el intento de aplicación de las Leyes Nuevas.

Panamá 234, L. 5, f. 165v; la elección de los cabildos en Indias fue «extremadamente disímil según la época y las regiones» según Richard KONETZKE (1971), p. 129; Manuel Lucena Giraldo advierte que cierta tendencia a la elección popular se mantuvo de un modo u otro vigente hasta la independencia, Manuel LUCENA GIRALDO (2006), p. 73. Por su parte, Guillermo Lohmann Villena niega tajantemente la condición de representación popular de los cabildos para sustituirlo por su condición de oligarquía con intereses propios, en Guillermo LOHMANN VILLENA (1972), pp. 163-164. Hildegard Krüger, por su parte, advierte que, en la ciudad de Asunción el «tipo de elección democrática indirecta y de sorteo fue aplicado por última vez en el año 1596», en Hildegard KRÜGER (1981), p. 35.

⁴⁸ Testimonio de autos sobre elecciones de alcaldes ordinarios en las ciudades de Panamá, Natá y Nombre de Dios, 23 de enero de 1540, AGI, Panamá 30, N. 4, f. 7.

⁴⁹ Ibid. ff. 8 y 9v. Un Melchor de Morales indicaba lo mismo tras su experiencia en México durante 4 años, así como fray Juan Pérez de Balençilla, quien había pasado al menos seis años en Santo Domingo.

2. *Las ciudades contra la Audiencia de Panamá.*

Las reformas puestas en marcha desde la corte con la creación de la Audiencia de Panamá y, más tarde, con el intento de implementación de las Leyes Nuevas a partir de 1542 pondrían a prueba la capacidad de las ciudades del istmo para hacer valer los privilegios que se habían labrado en las dos primeras décadas de creación del espacio político en Castilla del Oro. Los procuradores que comenzaron a acudir a la Corte a partir, aproximadamente, del año 1540 ya no iban a negociar la consecución o prórroga de los privilegios corporativos sino a defenderlos y garantizar su cumplimiento. Prácticamente de manera correlativa, la negociación de los privilegios se transformó en un intento de defensa de estos frente a las dinámicas homogeneizadoras que se planteaban desde la Corte.

La creación de la Audiencia de Panamá en 1538 tenía el objetivo de sustituir el sistema de gobernadores para poner en marcha un gobierno de la justicia más imparcial, con jueces foráneos y supuestamente neutrales. En la práctica, los oidores de esa Audiencia sustituyeron las funciones de los gobernadores y su actuación siguió siendo eminentemente política, con intervenciones incluso en el envío de expediciones de rescate y pacificación, como se vio en el capítulo anterior. La labor de la primera Audiencia de Panamá estuvo muy interferida por la acción individual de su oidor, el doctor Francisco de Robles. Entre los objetivos que se esperaban de la Audiencia estaba la de regular tantos aspectos políticos como fueran necesario. En ese empeño, las ciudades del istmo vieron lesionados algunos de sus privilegios y se dispusieron a defenderlos.

El juicio de residencia al que fue sometido el doctor Robles en su salida del puesto durante el año 1541 recogió las quejas emitidas por los cabildos sobre el maltrato que consideraban que habían sufrido por parte del oidor. En primer lugar, prácticamente todos los testigos coincidían –y así se le imputó en los cargos generales- en afirmar que Robles «despues que vino a esta çibdad por juez e governador el nunca a ydo ni salido a vesitar ninguno de los lugares»⁵⁰, como era su obligación, de Castilla del Oro más que Panamá y Nombre de Dios, aunque exclusivamente en el momento de su llegada. Esta acusación buscaba incidir en el carácter parcial de la administración del doctor Robles, acusado constantemente de buscar favorecer en exclusiva a los miembros de su clientela, ya fuera asignándoles misiones de rescate o favoreciéndoles en el reparto de la encomienda. Esta última fue, precisamente, una de las quejas de la ciudad de Natá, donde Robles habría tomado

⁵⁰ Juicio de Residencia a Francisco de Robles, oidor de la Audiencia de Panamá, 1541, AGI, Justicia 369, N. 1, f. 30v.

los indios de «Juan de Morales e Alonso de Valverde, difunto, [y] se los dio al dicho Hernan Sanchez de Badajoz, su yerno»⁵¹, aduciendo que aquellos no respetaban la norma de no transportar los indígenas encomendados como si fueran esclavos, para entregárselos a sus allegados. A pesar de no haber acudido personalmente a las ciudades de la gobernación, eso no le había impedido administrar la encomienda interponiéndose a los privilegios que cada ciudad tenía asignados.

La actividad del oidor también se tradujo en protestas por parte de los gobiernos urbanos, que se quejaban de que «trato mal de palabras ynjuriosas a los regidores del cabildo desta çibdad generalmente»⁵². Sin embargo, una de las principales quejas de los cabildos de Panamá, Nombre de Dios y Natá que motivó incluso el envío de un procurador, Tomé García, a la Corte fue el intento por parte del oidor de intervenir de manera directa en la elección de los alcaldes ordinarios, encargados de administrar justicia en las ciudades, y de excluir a los regimientos del proceso.

Los cabildos de las tres ciudades, liderados en este caso por el de Panamá, iniciaron un proceso para intentar «guardar a la çibdad sus preemynençias e libertades e juridiçion», que se veían erosionadas por la actuación del oidor. La pesquisa se inició preguntando a tres de los cinco regidores de la ciudad de Panamá –Árias de Acevedo, Gonzalo Martel de la Puente, el doctor Bartolomé de Figueroa, Pascual de Andagoya y Álvaro del Guijo⁵³– sobre las condiciones en las que tradicionalmente se venía eligiendo a los encargados de administrar la justicia. La intervención del oidor en la elección de los alcaldes ordinarios de 1540 consintió en no admitir la habitual propuesta de cuatro realizada por el regimiento en pleno y directamente seleccionar él los dos alcaldes. Esto atentaba, según los cabildos, contra la «costumbre antigua syenpre husada e guardada en esta provynçia de Tierra Firme». Todos los testigos coincidieron en que la elección de los alcaldes se realizaba de la misma manera desde que las ciudades se fundaron y la desatención de privilegios tan antiguos les hacía darse «por agraviados porque la governaçion de esta çibdad queda en el regimiento» y que eso era «en conformidad de la çibdad e conforme a derecho». El recurso de las ciudades se acompañó con el ejemplo, más arriba destacado, de otras poblaciones en el Nuevo Mundo con similares

⁵¹ Ibid., f. 113v: «por parte del conçejo de Nata le fueron notificadas en çiertas çedulas de su magestad en que en efecto dava la orden de como avian de encomendar los yndios no la cunplio».

⁵² Ibid. Álvaro del Guijo informó personalmente al rey en agosto de 1539 sobre el riesgo de que la labor del doctor Robles despoblase la tierra, Carta de Álvaro del Guijo a su magestad, 4 de agosto de 1539, AGI, Patronato 194, R. 51.

⁵³ Todos fueron preguntados desde cuándo eran regidores: Árias de Acevedo desde hacía 3 años; Martel de la Puente desde hacía 8 ó 9 años; Bartolomé Figueroa desde hacía 8 ó 9 meses; Pascual de Andagoya y Álvaro del Guijo habían sido regidores desde la propia fundación de la ciudad de Panamá.

estructuras administrativas que mantenían los privilegios sobre la elección de los alcaldes. Los testimonios destacaban la antigüedad de los privilegios en la elección de los alcaldes para que pudieran «regir y administrar justicia» y el carácter constitutivo de esta dinámica política⁵⁴. Sendas cédulas emitidas desde Castilla en abril de 1540 y octubre de 1541 advirtieron al doctor Robles de no entrometerse en la elección de los alcaldes de Nombre de Dios y Panamá, aunque cuando esa resolución llegó a Castilla del Oro ya el doctor Robles había sido destituido y la Audiencia disuelta⁵⁵.

La primera Audiencia de Panamá fue muy efímera —anulada en 1540 tras haber sido fundada en 1538— y pronto pasó a subsumirse en la Audiencia de los Reyes, salpicada la labor del oidor Robles de acusaciones de mal uso de la justicia y, en especial, de favorecer a sus familiares y amigos en asuntos tanto de justicia como de reparto de los beneficios de los rescates⁵⁶. La residencia al oidor Robles fue tomada por el licenciado Vaca de Castro quien había sido enviado desde Castilla para ocupar un puesto de oidor en la Audiencia de Lima. El nuevo oidor arribó al istmo en febrero de 1541. Su llegada a Nombre de Dios fue celebrada por los vecinos, pues consideraban que iba a comenzar a ocuparse de las necesidades de la región⁵⁷. Sin embargo, la labor de Vaca de Castro fue superficial, pues el objeto de su llegada a Indias era incorporarse a la Audiencia de Lima, hacia la que partió a comienzos de 1543. Tras el desmantelamiento de la Audiencia de Panamá y la interinidad de Castro, se planteó el retorno al sistema de gobernaciones, si bien durante dos años no fue nombrado ningún gobernador específicamente para Castilla del Oro y quienes ocuparon el cargo, Pedro Ramírez de Quiñones y Pedro Casaus, lo hicieron sólo como jueces de residencia.

La falta de gobernador durante más de dos años, a la espera de que se volviese a nombrar quien aplicase las Leyes Nuevas, provocó que las ciudades del istmo adquirieran mayor protagonismo y consciencia de su capacidad para el autogobierno. Incluso los propios cabildos podrían considerar como un éxito de sus protestas y resistencia que se hubiera

⁵⁴ Testimonio de autos... doc. cit., AGI, Panamá 30, N. 4.

⁵⁵ Real Cédula a los oidores de la Audiencia de Tierra Firme, a petición de la ciudad de Panamá, para que no se entrometan en la elección de los alcaldes ordinarios, 15 de abril de 1540, AGI, Panamá 235, L. 7, f. 114 y Real Cédula a los oidores de la Audiencia de Tierra Firme, a petición de la ciudad del Nombre de Dios, para que no se entrometan en la elección de los alcaldes ordinarios, 28 de octubre de 1541, AGI, Panamá 235, L. 7, f. 221r-221v.

⁵⁶ Juan Vázquez de Ávila escribió en 1539 una dolorida queja al rey en la que explicaba que Robles «ha hecho mas agravys en seys meses que otros en diez años», acusándole de haberse enriquecido, de manera muy sustancial, en poco tiempo, Carta de Juan Vazquez de Avila a su magestad, 22 de febrero de 1539, AGI, Patronato 194, R. 48, f. 247.

⁵⁷ Carta del cabildo de Nombre de Dios, 18 de febrero de 1541, AGI, Panamá 32, N. 1.

desmantelado la Audiencia de Panamá⁵⁸. Tal era la confianza en su capacidad de autogobierno que, en una carta fechada en Panamá en marzo de 1544, el contador de Tierra Firme Diego Ruiz alertaba al Emperador de que el regimiento de Panamá decía «que no enbien governador a este reyno», pues no consideraban que fuese necesario para el buen gobierno de la ciudad y la región tras la experiencia de la Audiencia⁵⁹.

Estos testimonios se sumaron a otros muchos que, durante el año 1544, advertían sobre la ocupación masiva de los regimientos por los mercaderes y la necesidad que tenía la Corona de regular el acceso a las alcaldías o, directamente, abolirlas para reorganizar el gobierno. En realidad, las críticas sobre la presencia masiva de mercaderes en Nombre de Dios y Panamá no eran nuevas. En 1534, Pascual de Andagoya decía que «había una enfermedad entre los vecinos» que se derivaba de que «alcaldes y regidores y vecinos todos son mercaderes codiciosos y que no tienen respeto a permanecer en la tierra». En ese momento, el adelantado ya proponía la abolición de las alcaldías para sustituirlas por un teniente del gobernador que administrase justicia junto a dos regidores⁶⁰. Al año siguiente, en 1535, esta situación había hecho clamar al obispo fray Tomás de Berlanga que el reino era «cueva de ladrones y sepultura de pelegrinos»⁶¹. Aún el año siguiente, se advertía a la Corte de que «todos los pobladores de la ciudad de Nombre de Dios son mercaderes, tratantes y factores de mercaderes que residen en Sevilla» y que eran estos mercaderes los que, lógicamente, «reparten entre sí los oficios de alcaldes y regidores»⁶². La creación de la Audiencia de Panamá había buscado poner freno a esta situación, si bien, como se ha comprobado, no alcanzó el éxito que se requería. El fin de ésta había fortalecido, en cambio, el interés de los cabildos por presentarse como la verdadera gobernación en Castilla del Oro.

Durante el año 1544, también se emitieron críticas a los gobernadores que hasta entonces se habían enviado, pues «no favorecen sino a mercaderes» y estos «están tan favorecidos que hazen lo que quieren» mientras el resto de la población estaría desvalida⁶³. «Los juezes que acá vienen», añadía el contador Francisco de Pradanos desde Nombre de

⁵⁸ Ya durante el gobierno de Robles, el tesorero Diego Ruiz, acusaba a los mercaderes de la región de estar acostumbrados a controlar y tener a los gobernadores a su servicio y advertía que «esta ruin casta tiene ojadiza» a Robles porque no le podrían corromper «ni le ahogaran con dinero», *Carta de Diego Ruiz, tesorero de Tierra Firme*, 3 de diciembre de 1540, AGI, Patronato 194, R 55, f. 271.

⁵⁹ Carta de Diego Ruiz, alcalde de Panamá y contador de Tierra Firme, al Emperador, 10 de marzo de 1544. AGI, Panamá 39, N. 11, f. 70.

⁶⁰ Carta de Pascual de Andagoya a su majestad, 22 de octubre de 1534, AGI, Patronato 194, R. 25, f. 101.

⁶¹ Carta de fray Tomás de Berlanga, obispo de Panamá, 22 de febrero de 1535, AGI, Patronato 194, R. 27.

⁶² Real Cédula al gobernador de Tierra Firme, 3 de septiembre de 1536, AGI, Panamá 235, L. 6, f. 43v.

⁶³ Carta de Francisco de Pradanos, contador interino de Tierra Firme, al emperador, 20 de abril de 1544. AGI, Panamá 39, N. 15, f. 84v.

Dios, «no hazen lo que VSM manda con los conquistadores y casados ni miran el bien y poblacion deste reyno de VM sino su particular ynterese»⁶⁴. Según la mayoría de los testimonios críticos con la situación, el rey debería enviar a un «governador caballero de conciencia porque ay gran daño para la republica y vezinos destar governada como al presente esta»⁶⁵. Según todos estos testimonios, los cabildos estaban ocupados por los mercaderes en lugar de por los vecinos más antiguos —«conquistadores y casados»— y nobles de la sociedad. En realidad, como veremos, lo que se estaba gestando era una nueva consideración de la nobleza y de la interpretación del bien común como fruto de los intereses corporativos.

Las noticias emitidas durante el año 1544 por parte de los oficiales reales de Tierra Firme ofrecían la imagen de un reino mal gobernado y donde no se respetaba a los oficiales, sino que los miembros de los cabildos copaban los puestos de justicia y administración sin que los gobernadores pudieran hacer nada o, más bien, tuviesen connivencia con ellos. En mayo de 1545, finalmente, se nombró por primera vez un corregidor para Castilla del Oro. Sus atribuciones eran, básicamente, las mismas que las de un gobernador, pero el cambio en la nomenclatura, que enlazaba con las tendencias al control inscrito en las Leyes Nuevas, invitaba a pensar en una mayor voluntad de intervención por parte de la Corona en el gobierno de los asuntos políticos del reino⁶⁶.

La situación desatada en Perú con la recepción del virrey Blasco Núñez, que había degenerado en el enfrentamiento abierto con los encomenderos también pudo haber influido en la decisión de nombrar un corregidor como medida especial. De hecho, durante todo el año 1546, especialmente en los meses de abril y mayo fue constante la presencia de «gente de guerra» en la ciudad de Panamá, en concreto «çiertos capitanes y çiertos soldados por Gonzalo Piçarro» que interfería en el desarrollo normal de la política y mantenía en tensión a todo el reino⁶⁷. Pedro de Ribera, cuyo nombramiento data de mayo de 1545, llegó a Castilla del Oro, en concreto a Nombre Dios, en diciembre de ese mismo año y comenzó su labor

⁶⁴ Carta de Francisco de Pradanos, contador interino de Tierra Firme, al emperador, 20 de marzo de 1544, AGI, Panamá 39, N. 14, f. 80.

⁶⁵ Carta de Juan de Valdés, factor, y Francisco de Pradanos, contador interino, al emperador, Nombre de Dios 18 de abril de 1544. AGI, Panamá 39, N. 15, f. 83; Diego Ruiz añadía que debería ser «letrado e no persona que aya de proveer un bachillerejo por thenyente que rrobe la tierra, y sea persona de çiencia y conçiencia».

⁶⁶ El nombramiento generalizado de corregidores en Castilla a partir del reinado de los Reyes Católicos ha sido tradicionalmente interpretado como la voluntad explícita de intervención de la Corona en los asuntos municipales.

⁶⁷ Proceso con las ciudades de Panamá y Nombre de Dios sobre la elección de alcaldes ordinarios, 1546, AGI, Justicia 1048, N. 8, R. 1, f. 28.

de aplicación de los principios de gobierno que promovían la aprobación de las Leyes Nuevas⁶⁸.

3. *«Desde tiempo inmemorial...»: la disputa por las varas.*

Pedro de Ribera fue nombrado corregidor por cuatro años y su labor principal era poner orden en materia de justicia, además de conocer en todos los mismos asuntos que ya conocían los gobernadores⁶⁹. La llegada de Ribera en diciembre tuvo efectos inmediatos en la dinámica política de las ciudades de Castilla del Oro. El 15 de ese mismo mes, pocos días después de su llegada y, como era habitual, el corregidor fue recibido por el cabildo de Nombre de Dios cuyos miembros le entregaron las varas de la justicia. En contra de lo acostumbrado, Ribera no se las devolvió inmediatamente, sino que se las quedó «diziendo no se allo obligado conforme al thenor de la provisyon que de su majestad traex»⁷⁰. A partir de ese momento un procurador del cabildo, Juan de Castro, inició un proceso en defensa del autogobierno de Nombre de Dios, que tuvo ramificaciones en Panamá, en el que se dirimió un conflicto que implicaba los distintos planos y tensiones dentro del gobierno y el poder en Castilla del Oro.

Entre las alegaciones de los cabildos se advertía que consideraban en riesgo los privilegios corporativos de la comunidad, la esencia de su funcionamiento. En su defensa, los cabildos movilizaron un argumentario que bebía de principios políticos republicanos tradicionales —como la independencia de las ciudades, el bien común corporativo, la defensa de sus privilegios y libertades (singularmente a la aplicación de justicia), la pretensión de extender un estilo de vida cívico que se expresaba en el lenguaje aristotélico que vinculaba la ciudadanía a la más alta consideración del individuo y que se aplicaba, a su vez, en las normas morales que conectaban la ciudad con la vida en policía- adaptados a sus circunstancias concretas. El nombramiento de un teniente del corregidor —o del corregidor mismo—, advertía la ciudad, para administrar justicia lesionaba la jurisdicción de la ciudad e iba «en perjuizio de la premynençia e livertad de la çibdad y aun en daño de la republica». El procurador del cabildo comenzó por aportar documentación en la que se hacía referencia a los privilegios obtenidos por Nombre de Dios para el autogobierno a lo largo del tiempo y los distintos

⁶⁸ Real provision por la que se concede el titulo de corregidor al doctor Pedro de Ribera, 9 de mayo de 1545, AGI, Panamá 235, L. 8, f. 83v-85r.; Carta del doctor Pedro de Rivera, 8 de marzo de 1546, AGI, Patronato 194, R. 76.

⁶⁹ En su título como corregidor se indicaba que los cabildos «dexen libremente a vos e a los dichos vuestros lugares thenientes usar y exerçer el dicho oficio e oyr e librar y determinar los pleitos e causas ansi çiviles como criminales ansi entre la gente que en la dicha provinçia hoviere y a ella fuere».

⁷⁰ Proceso..., 1546, AGI, Justicia 1048, N. 8, R. 1, s.f.

refrendos de esa norma que se había sucedido. De esa manera, argumentaban, había sido «conforme a la voluntad de Su Magestad que no aya tenientes de gobernadores en este reyno».

Ribera, por su parte, alegaba que sus provisiones como corregidor le impelían a asumir como propia la administración de la justicia. Sus argumentos apelaron, en primer lugar, a la orden que traía desde Castilla, pero también implicó elementos muy variados, que iban desde fundamentaciones demográficas hasta otras arraigadas en la filosofía política, pues consideraba que «para pueblo de tan poca vezindad» como era Nombre de Dios, «basta su lugarteniente e su persona del dicho señor governador» y el quería reducir la jurisdicción del reino y asumirla en el cargo de corregidor. Ante la persistencia de las protestas del cabildo insistía en que «por la poca vezindad de gente y negoçios que ay en esa tierra le parece cosa de gran confusion aver diversidades de baras de justiçia» y que podría mover a «grandes desacatos de la justicia e premynençia real de su magestad»⁷¹. Esta línea argumental chocaba con los motivos que habían provocado, apenas ocho años antes, que Nombre de Dios fuese elevada a ciudad, pues en ese caso se apelaba al crecimiento de su población provocado a su vez por el flujo comercial que había llevado a considerar a esa ciudad, unos años antes, como la llave de las Indias⁷².

La tensión por la elección de los alcaldes mayores no cesó de crecer desde la llegada del corregidor en diciembre a Nombre de Dios y, además, también se trasladó a Panamá. El cabildo de Nombre de Dios, tras ser retenidas las varas de los alcaldes, solicitó acudir a Panamá, donde estaban las escrituras que contenían los privilegios que les permitían tener las varas. El corregidor aceptó acudir a buscarlas y a su llegada a Panamá siguió sus órdenes y también tomó las varas de los alcaldes Pedro de Casaus y Andrea de la Roca. El regimiento de Panamá no se quedó inmóvil, sino que en «el segundo día de la Pascua de Resurrección», el 26 de abril de 1546, se reunieron y acudieron a las casas del cabildo y descerrajaron el arca de tres llaves para tomar las escrituras y cédulas que les pareció y, siguiendo una de esas escrituras «hiçieron çierta relaçon de alcaldes» que fueron Andrés de Arielça y Diego López de Toledo. Con las varas en la mano se pasearon por la ciudad junto a algunos de los regidores. El escribano, según su propio testimonio, corrió a la casa del gobernador para avisarle. Este acudió al cabildo donde encontró el arca descerrajada y al cabildo reunido, ante lo cual ordenó que allí mismo se les encerrase y no se dejase salir a sus regidores por haber incurrido en «graves delitos dignos de mucha puniçion e castigo». También el propio

⁷¹ Estos testimonios del doctor Ribera fueron emitidos en sendas respuestas, incluidas en el pleito, del 10 al 15 de mayo de 1546.

⁷² Real provisión al gobernador y oficiales reales de Tierra Firme, 30 de junio de 1537, AGI, Panamá 235, L. 6, f. 117v-118r.

escribano fue retenido hasta que se aclarase su propia participación en los hechos, pues él custodiaba una de las llaves del arca.

Dos días más tarde comenzó la testificación de los implicados en el asalto al arca del cabildo. Los implicados fueron los regidores Arias de Azevedo, Juan Fernández de Rebolledo y el tesorero Juan Gómez de Amaya, acompañados de Francisco de Santander, escribano del concejo. Su primera actuación intentó evitar la declaración que se les solicitaba y pedir una apelación que en inicio se les había denegado; para ello alegaban que «ellos representan y hazen pueblo» pues era un pleito «en que todo el pueblo pretende ynterese e utilidad» y que el freno de la elección de los alcaldes «pare perjuizio al común e unyversidad». En su defensa entregaron al gobernador el testimonio de la elección de los alcaldes mayores de Panamá para el año 1543 en el que se incluían referencias a la manera de actuar de Santo Domingo. Incluso en ese traslado se hacía referencia al envío de un procurador enviado *ex profeso* a Santo Domingo para tomar referencia de la manera de elegir alcaldes.

El procurador de Panamá, Diego Gutiérrez de los Ríos, había retornado de Santo Domingo con una copia de la cédula original de julio 1519 en el que se les concedía el privilegio de nombrar alcaldes y la forma de hacerlo. Similar estrategia de defensa había seguido el cabildo de Nombre de Dios antes de que su conflicto se trasladase a Panamá. Por un lado, el cabildo de Nombre de Dios había apelado a que la elección se venía realizando de esa manera en la ciudad «desde que se pobló e fundó de tiempo ynmemorial a esta parte syempre a estado y esta en posesion, uso e costumbre usado», para defender lo cual presentaban procesos y recursos anteriores que respaldaban la antigüedad del privilegio. Esta antigüedad sería motivo suficiente para que al corregidor no le sirviese sólo con el texto de su nombramiento, sino que, para el cabildo, necesitaría un «poder más especial» que el que llevaba. Al mismo tiempo, también el cabildo de Nombre de Dios consideraba que mantener la elección de los alcaldes era beneficio de todo el pueblo y defensa del bien común frente a los intereses menos «generales» defendidos por el corregidor y sus tenientes. La estrategia de defensa de los cabildos era doble. Por un lado, presentaban la elección de los alcaldes ordinarios como un privilegio corporativo básico y sustentado en su antigüedad, que garantizaría el autogobierno y, unido a este, se presentaban como los defensores del pueblo y del bien común frente a una supuesta injerencia exterior⁷³.

⁷³ En un carta contenida dentro del pleito, el cabildo de Panamá enlazaba ambos argumentos al considerar que la acción del gobernador era «contra derecho e contra las provisiones e privilegios e çedulas reales questa çibdad e reyno tenya de aver alcaldes hordinarios e contra la costumbre tan antigua que dello avia desde que esta çibdad e reyno se poblo e ansymysmo hera en muy gran daño hunyversal e notable desta çibdad e reyno e no era cosa tolerable que la juresdición estoviese debaxo de un tribunal solo; por ende que ellos e como tales vezinos y en

En oposición a estas razones, el corregidor, además del argumento arriba descrito en torno a los principios de regulación de la justicia y la jurisdicción, presentaba las credenciales que le permitirían tomar para sí las varas de justicia y resumir en sus manos y las de los tenientes la administración de justicia. Por otro lado, cuestionaba incluso que los cabildos fuesen los defensores del bien común general, sino que el hecho de estar controlados por un pequeño grupo de mercaderes y comerciantes, «entre los çinco o seys de los mas principales de cada pueblo» les hacía sospechosos de buscar exclusivamente su propio beneficio y no el del conjunto de la población, de manera que a él le fue «dado a entender quanto convenya en esta tierra que los vezinos e tratantes y avitantes en ella tuviesen toda livertad en sus tratos e contrataçiones sin que por nadie so color de justiçia fuese vejado». Añadía, además, en mayo de 1546, que ya habían pasado varios meses desde su llegada y que había tomado las varas en sus manos y las de sus tenientes y que «no por eso se a dexado de admynnystrar justiçia con toda la quietud e sosiego en toda esta provincia»⁷⁴.

Tras el encarcelamiento del regimiento de Panamá, el conflicto se dividió⁷⁵. Por un lado, las dos ciudades implicadas enviaron sendos procuradores ante el Consejo de Indias. Nombre de Dios envió a Alonso de San Juan como su representante a la Corte para pleitear por la defensa de sus privilegios. Ese pleito contra la acción de Pedro de Ribera continuó durante años con diversas sentencias y apelaciones en ambos casos siguiendo con los mismos argumentos. El Consejo derivó el caso en mayo de 1552 a la Audiencia de Lima, de la que dependía Panamá, para que se aumentase la información y tomar una decisión tras el informe de aquella. Alonso de San Juan, que ese año ya llevaba siete pleiteando por este caso en la Corte, seguía alegando que Ribera había tenido «pasion y cobdiçia de adquirir jurisdiccion», y volvía a pedir que desde el Consejo se revocase lo hecho por ese corregidor⁷⁶. Sin embargo, la realidad sobre el terreno había cambiado radicalmente en el tiempo que el procurador estuvo en la corte castellana.

En Castilla del Oro, Pedro de Ribera había muerto en octubre de 1546 y, por lo tanto, la cuestión relativa a su labor se mantenía en suspenso. Una resolución de la Audiencia de los Confines, negociada por el regidor Juan Fernández Rebolledo, había permitido que se

nombre delos otros vezinos desta çibdad por su propio ynterese e por lo que toca e conbiene al comun pro e por sus livertades e preemynençias e sustenar sus previlegios e costumbres», Proceso..., AGI, Justicia 1048, N. 8, R. 1, f. 62r.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Todos los apresados tuvieron oportunidad de declarar y mantuvieron la misma línea de argumentos, relativos a la prioridad de sus privilegios y a la injusticia de la orden de Ribera.

⁷⁶ Proceso..., 1546, AGI, Justicia 1048, N. 8, R. 1, f. 37v.

volviesen a elegir alcaldes ordinarios en las dos ciudades principales del istmo⁷⁷. Esta intervención de la Audiencia había paralizado el conflicto incipiente y permitido que las ciudades mantuviesen sus privilegios, si bien no había resuelto la problemática de fondo. El efímero gobierno de Ribera, interpretado como un momento de excepción reflejado en su nombramiento como corregidor y no como gobernador, fue un primer intento de homogeneizar la administración del poder en Castilla del Oro. La presencia de tropas gobernadas por Gonzalo Pizarro en la región ejerció de elemento también excepcional y mediatizó las acciones de una y otra parte implicada. Por un lado, forzó al corregidor a encarcelar de manera preventiva a todo el regimiento para evitar posibles insurrecciones mayores. Por otro lado, el propio cabildo canalizó sus protestas en el plano jurídico y administrativo, elevando la causa y manifestando sus prioridades a través de una representación de sus intereses ante la Corte y la Audiencia.

Sin embargo, como se ha mencionado, el conflicto de fondo seguía latente, pues las Leyes Nuevas seguían esperando quién las aplicase. La llegada de Sancho de Clavijo como gobernador en 1549, tras dos años de interinidad ocupados por la presencia de Pedro de La Gasca en tránsito a pacificar el Perú, iba a reabrir las tensiones sobre la elección de los alcaldes ordinarios y la independencia de las ciudades. Sancho de Clavijo fue nombrado gobernador el 7 de agosto de 1548 y en marzo del año siguiente ya había tenido tiempo de arribar a las dos ciudades principales y tomar en su mano las varas de justicia⁷⁸. El día 3 de marzo de ese año, Sancho de Clavijo fue recibido como gobernador por la ciudad de Nombre de Dios y ese mismo día envió a Panamá a su teniente para que tomase en su nombre las varas de justicia en esa ciudad.

La reacción de los alcaldes de Panamá fue negarse a entregar las varas al teniente porque este no les podía perturbar «la posesyon que dellas tienen, pues tiene jurado de guardar las preheminencias e libertad desta çibdad e provysiones que en ella ay», acompañando el argumento de una cédula de 1542 en la que se les confirmaba tal privilegio⁷⁹. Con la llegada del siguiente gobernador, Álvaro de Sosa, la situación se agravó, pues siguiendo la misma política, también tomó en su cargo las varas de alcaldes ordinarios⁸⁰. Sendos procesos, comenzados uno en 1553 en Panamá y otro discutido en la Corte de

⁷⁷ Ibid. f. 83.

⁷⁸ Real provision dando título de gobernador de la provincia de Tierra Firme a Sancho de Clavijo, 7 de agosto de 1548, AGI, Panamá 235, L. 8, f. 194-196v; Carta del cabildo secular de Panamá, desde Nombre de Dios, 16 de marzo de 1549, AGI, Panamá 32, N. 6.

⁷⁹ Proceso... AGI, Justicia 1048, N. 8, R. 1, f. 123v.

⁸⁰ Real provisión por la que se concede título de gobernador de Tierra Firme a Álvaro de Sosa, 31 de mayo de 1552, AGI, Panamá 236, L. 9, f. 70v-72v.

Valladolid en 1558, ofrecen más detalles sobre los argumentos de resistencia de las ciudades del istmo y permiten perfilar los matices de su consideración del bien común.

El 20 de marzo de 1553, un oidor de la Audiencia de Perú arribó a Panamá para iniciar una pesquisa, como parte de la información solicitada desde la Corte, sobre la cuestión de los alcaldes⁸¹. En el interrogatorio, diseñado por los miembros del cabildo, se puso en marcha un argumento en el que se destacaba la antigüedad del privilegio desde la «fundación desta ciudad de Panama que puede aver treinta y quatro años». Añadía la resolución favorable de la Audiencia de los Confines para mantener la elección de los alcaldes que había durado hasta la llegada de Clavijo. Finalmente, el argumento se deslizaba hacia las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas. La elección de los alcaldes sería «gran provecho e utilidad a la republica» porque los alcaldes se encontrarían entre los más honrados y ricos de la población, garantizando la conservación de la república «en todo amor y paz y concordia».

Las virtudes de estos miembros prominentes de la ciudad tendrían que ver con la confluencia de sus intereses particulares con los de la ciudad, pues si hicieran «sinjusticias y agravios» saben que los pagarían con pérdidas en sus negocios. Los gobernadores, en cambio, no atenderían a las cosas del «bien de la rrepublica» porque no tendrían intención de permanecer en la tierra al finalizar su cargo. En el interrogatorio también se preguntaba a los testigos que si sabían que en todas las ciudades de Indias había alcaldes ordinarios para «bien y utilidad que dello resulta ansi en el servicio de Su Magestad como en el pro e utilidad de los dichos pueblos». Las respuestas de los testigos, la mayoría de ellos veteranos e incluso nacidos en la ciudad, simplemente ratificaron lo que las preguntas sugerían, aportando datos adicionales como que los alcaldes «onrran la ciudad sin enbargo que aya gobernador o theniente en ella», como hacían en otros lugares con Audiencia real como Santo Domingo, la Ciudad de los Reyes o en la Nueva España.

La información que recibió el oidor cuando la solicitó al Nombre de Dios fue muy diferente. Recibió una carta firmada por Isidro Muñoz, procurador «en nombre del comun della e por lo que toca a los pobres, huerfanos, menores, viudas e myserables personas de la dicha ciudad»⁸². En esa carta se solicitaba al rey que no permitiese que el regimiento nombrase alcaldes ordinarios por el «daño universal» que todos los vecinos recibían, pues no se alcanzaría auténtica justicia, se abrirían bandos y parcialidades y el precio general de los mantenimientos subiría por los intereses particulares. Sería, además, «confusion [de] diversos

⁸¹ Proceso... AGI, Justicia 1048, N. 8, R. 1, ff. 93v-98v.

⁸² Ibid. ff. 108v-109v.

juzgados en tan poca jurisdicción o un solo pueblo» que era pequeño y de poca población. Antes de que toda esta información fuese enviada formalmente para su entrega al Consejo de Indias, la ciudad de Panamá emitió una carta en la que aclaraba que la firmada por Isidro Muñoz sólo representaba a Nombre de Dios y no a las dos poblaciones⁸³. A su llegada a Valladolid en otoño de 1553, el procurador de ambas ciudades deshizo esta petición de Nombre de Dios alegando que era una estrategia planteada por el gobernador Álvaro de Sosa para hacer hablar al común contra los alcaldes ordinarios⁸⁴.

Sin tiempo para que se resolviera este pleito, en abril de 1557 ya se estaba iniciando otro por el mismo motivo. En este caso, con cierto retraso, Martín Ruiz de Marchena sería enviado a la Corte para pleitear contra la acción de Sancho de Clavijo. Su intervención en este caso añade más peso a la fabricación de una conciencia política colectiva en las ciudades de Castilla del Oro, que afecta al cumplimiento de las órdenes emitidas desde la corte y a la ejecución efectiva del poder político. En su apelación ante el Consejo de Indias, Marchena comenzaba por advertir que iba en defensa del «pro y ennobleçimyento y acreçentamiento y perpetuidad de las dichas çibdades», Nombre de Dios y Panamá, y de las demás ciudades del istmo. Enfatizaba con esto la relación ya descrita entre la defensa de los privilegios, el mantenimiento de la población de las ciudades y el ennoblecimiento de estas. Ese ennoblecimiento estaba condicionado en primer lugar por la necesidad de que los propios cabildos eligieran los alcaldes ordinarios, algo que, según él, había siempre sucedido hasta la llegada de Sancho de Clavijo.

La defensa de los cabildos del mantenimiento de una administración local de la justicia se basaba en que los gobernadores y sus tenientes intentarían aprovecharse al máximo de sus cargos durante el tiempo que los tuvieran, pues «por ganar dineros haçen muchas synjustiças». En oposición a esto los alcaldes, que eran los «más ricos y onrrados y de mejor bida y fama y que procuran el pro y hutilidad de las dichas çibdades», administrarían justicia «sin codiçia alguna», controlando las tasas que los vecinos tuvieran que pagar. Según el planteamiento del cabildo, a través de su procurador Marchena, mientras convivieron los gobernadores con los alcaldes ordinarios elegidos por los cabildos aquellos se habían mostrado como «padres y amigos de las republicas», algo que habría cesado con la llegada de Clavijo al pasar a ocuparse en exclusiva de los cargos de justicia⁸⁵. El proceso fue visto en el Consejo de Indias en Valladolid en febrero de 1558 pero la decisión se siguió aplazando

⁸³ Ibid. f. 110.

⁸⁴ Ibid. f. 89r.

⁸⁵ Ibid., f. 123v y ss.

mientras que en Castilla del Oro los conflictos por la defensa de otros privilegios de las ciudades seguían acumulándose y los cabildos movilizándose en su defensa, expresando escenarios de negociación entre partes para adaptar los modelos a la práctica del gobierno y justicia en entornos indianos y sin encontrar una resolución definitiva a cada caso particular.

El control de los cargos y símbolos de justicia representó un campo de batalla fundamental entre cabildos y gobernadores. Los argumentos de unos y otros apelaban casi a los mismos principios, si bien su interpretación de estos variaba en función de sus propios intereses. De esta manera, al apelar a la nobleza, honradez o antigüedad de los privilegios, los cabildos apelaban a una legalidad reconocida que estaba basada en los méritos acumulados desde la fundación de las poblaciones. Por su parte, los gobernadores debían ser, por principio, respetuosos con los privilegios de los cabildos, aunque al mismo tiempo debían intentar imponer las medidas que les eran encomendadas desde el Consejo de Indias, entre ellas las Leyes Nuevas. Las tensiones generadas en torno a los diversos intereses obligan a valorar las múltiples vías para la construcción y administración del poder —en este caso de la justicia— en Castilla del Oro y las complejas fórmulas que hubieron de implementarse para la construcción y mantenimiento de la Monarquía.

4. Ciudadanos tan leales: Nombre de Dios, el obispo y la lealtad.

La construcción de la lealtad entre los diversos territorios y agentes de la Monarquía Hispánica fue un fenómeno complejo, que se nutrió de diversos procesos concatenados. El propio concepto de lealtad estuvo sujeto a interpretaciones diversas, en función de circunstancias locales y de intereses superpuestos, pero constituyó el elemento que vertebraba el sistema y lo mantenía con vida. Los casos locales en los que se negoció la lealtad entre ámbitos jurisdiccionales diversos resultan muy ricos para alcanzar una interpretación ajustada de lo variados significados contextuales de los conceptos políticos. El juego de lealtades se puede rastrear en el uso de una semántica, por parte de cada parte implicada, en la que se apelaba a la condición de vasallos de la Corona, pero también de «miembros y amigos», en los que el monarca podría confiar. Como sustento del uso retórico de los términos, los cabildos desempolvaban en su defensa los recuerdos de actuaciones pasadas en las que las comunidades se habría comportado, efectivamente, de una forma leal con el rey.

El domingo 24 de julio de 1547 el obispo fray Pablo de Torres se sentó en una silla en el centro de la Catedral de Panamá en plena misa mayor. Consultó durante un rato un libro que llaman «Ugo de Celso», leyó algunos capítulos y luego, «a altas bozes» dijo a todo el pueblo de Panamá que estaba reunido en la iglesia «que tubyesen por rebeldes al

Emperador a todos los del Nombre de Dios». También advirtió a todo el pueblo que, bajo riesgo de excomunión mayor, le hiciesen saber cualquier bien que tuviesen porque se los confiscaba en nombre del Emperador. Tras esto el obispo se levantó de la silla, salió de la iglesia y, en uno de los extremos de la plaza mayor de la ciudad, fijó un cartel firmado por él en el que oficialmente pronunciaba «por rebeldes a la dicha justicia e regimiento» de la ciudad de Nombre de Dios⁸⁶.

Quien narró este suceso, sucedido apenas quince días antes de su testimonio, fue Juan Hernández de Rebolledo, alcalde de Panamá y testigo en una información promovida por el cabildo de Nombre de Dios contra el obispo y «en aprovechamiento de la real hazienda y bien comun» del reino de Tierra Firme⁸⁷. La reprobación del obispo no se quedó sólo en la condena por rebeldía, sino que a esta añadió una excomunión general y censura eclesiástica de todo el pueblo de Nombre de Dios. La conducta del obispo Torres, llegado a Castilla del Oro en 1546, según diversos testimonios hacía tiempo que escandalizaba a toda la gobernación, pero fueron las acusaciones de sus entrometimientos en materia civil, así como su uso de la excomunión como herramienta política lo que más incomodaba a los cabildos⁸⁸.

El día anterior a la declaración de rebeldía y excomunión, el obispo había recibido una carta desde Nombre de Dios que había provocado su ira y la declaración de excomunión con la que ya había amenazado varias veces. Para encontrar el motivo oficial de la censura, la excomunión general y la declaración de rebeldía, hay que remontarse a unos meses atrás. La guerra desatada en Perú por la reacción a las Leyes Nuevas aún no se había resuelto y la Corona envió a Pedro de La Gasca, con unas instrucciones «para que pongais en sosiego y quietud» aquella tierra. Para tal misión, La Gasca podía poner a su «albedrio e voluntad hasta de nuestra hazienda lo que bieredes ser neçessario», en acuerdo con la Audiencia y oficiales. De hecho, La Gasca portaba cartas en las que se instaba a cualquier autoridad de Indias, desde los virreyes a los concejos y personas particulares, a que prestase toda la ayuda necesaria, ya fueran armas, munición o cualquier otra⁸⁹.

⁸⁶ Ynformación hecha en la çidad del Nombre de Dios a pedimiento del procurador general de dicha ciudad contra el obispo de aquel reyno don fray Pablo de Torres. 11 de agosto de 1547, AGI, Justicia 1051, N. 4, R. 1, s. f.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Hasta tal punto llegó el hartazgo de los cabildos de Castilla del Oro que, en 1550, de manera conjunta, Panamá y Nombre de Dios promovieron ante el arzobispado de Lima que se iniciase una visita al obispo Torres, comenzada en 1551, AGI, Justicia 393.

⁸⁹ Real cedula al licenciado La Gasca, del consejo de Inquisición, dándole instrucciones para la jornada que ha de hacer al Perú, 16 de febrero de 1546, AGI, Indiferente 415, L. 2, ff. 379-381.

A su llegada a Castilla del Oro, La Gasca nombró una comisión de apoyo y acompañamiento formada por el propio obispo Torres, el ya mencionado alcalde de Panamá Juan Hernández de Rebolledo, el contador Alonso de Almaraz y el regidor de Panamá Arias de Azevedo. Esa comisión recibió unas instrucciones el día 2 de abril de 1547 que indicaba cómo debía proceder para cumplir con las necesidades de La Gasca. Las órdenes de La Gasca eran claras y se dirigían a implicar a toda la gobernación de Castilla del Oro en la defensa contra los sublevados. «Puerta que tanto importa como esta ciudad» advertía La Gasca, debía ser defendida por «vasallos tan leales y de valor y animo como los desta çibdad», pero también por los vecinos de Nombre de Dios y de Natá y aún por «toda la gente que fuere necesaria, asi de españoles y estancieros y estrangeros y negros»⁹⁰.

Cualquier esfuerzo, pues, tanto de medios como de hombres debía ser movilizado para la causa, y el Pacificador se encargaba, además, de recordar a los habitantes de Castilla del Oro su lealtad tradicional a la Corona. Sin embargo, al revisar las posibilidades económicas de la gobernación, el tesorero advirtió que la caja de Panamá no contenía dinero suficiente para las necesidades de acompañamiento y defensa de la armada de La Gasca. Por ese motivo, el 14 de julio encargó al tesorero de Nombre de Dios, Baltasar de Sotomayor, que recolectase «toda la quantia de pesos de oro que a Su Magestad se debe de las rentas y almonaxarifazgos», utilizando para cobrarlo todo lo que estuviese a su alcance, ya fuera «prendiendoles sus personas o vendiendoles sus bienes». Advertía, a su vez, al cabildo de la ciudad que no se entrometiese en esa cobranza, sino que ayudasen en todo lo posible. El tesorero, apremiado por las circunstancias de necesidad, no tenía tiempo para «husar terminos de derecho» con los que justificar el cobro urgente de los impuestos ni del nombramiento del alguacil que para ello se necesitaba⁹¹.

El cabildo de Nombre de Dios, sin embargo, sí encontró tiempo para usar términos de derecho para defenderse de lo que consideraron un ataque frontal a sus privilegios. El cabildo se mostró dispuesto a ayudar «conforme a justiçia» en lo necesario para proveer a la armada, pero tenían por innecesario que se crease un nuevo puesto de alguacil, considerando que «[h]ay las varas de justiçia neçesarias» para el servicio al Rey⁹². Además, las autoridades del cabildo aseguraban que en la caja sí había dinero, al menos 12 mil pesos dispuestos para

⁹⁰ El concejo, justicia y regimiento de la ciudad de Nombre de Dios con el obispo de Tierra Firme y otros sobre ciertos autos y sentencias que contra ellos ha hecho, 1547, AGI, Justicia 345, N. 2, R. 1, f. 2.

⁹¹ Ibid. ff. 4v-5.

⁹² Ibid.

llevar a Panamá, más otros dos mil que habría transportado el contador en los días previos⁹³. Desde Nombre de Dios se sospechaba que el cobro, y el nombramiento del alguacil, era más fruto de la «pasyon que de la necesidad» y que tendría su origen en un acuerdo entre el contador Alonso de Almaraz y el obispo Torres para recuperar un dinero de una operación personal⁹⁴.

El mismo 11 de agosto, día en que comenzó la información contra el obispo Torres en Nombre de Dios se inició otra contra el contador Almaraz en la que el cabildo describía toda una trama de intereses personales a través de los cuáles él se había enriquecido a base de perjudicar los negocios de la ciudad de Nombre de Dios. En esa información, si bien no se hace referencia a los negocios del contador con el obispo, sí se retrata al contador como un oficial real ambicioso y presto a no respetar los privilegios urbanos. Incluso se insinuaba el interés del contador por negociar en la Audiencia de los Confines su nombramiento como alcalde mayor de la gobernación, que significaría «mucho daño a estas republicas y perjuicio a la jurisdiccion real» porque uniendo los dos oficios, Almaraz «podría hazer absolutamente lo que quisiese»⁹⁵.

Fueran cuales fuesen los motivos de fondo del interés por nombrar un alguacil, la reacción de Nombre de Dios no se hizo esperar. El día después de recibir la visita de Sotomayor, 19 de julio de 1547, desde el cabildo de Nombre de Dios se elevó una carta al obispo y los comisarios haciendo explícito su descontento. Por delante advertían que no era la recaudación del dinero lo que molestaba a la ciudad, pues ya habían contribuido anteriormente y consideraban que era un servicio necesario al rey. Las protestas del cabildo iban más dirigidas a la forma de comunicación y reparto de las cargas que había de soportar cada ciudad de Castilla del Oro.

⁹³ Diversos testimonios de los recogidos en el interrogatorio confirmaban este extremo, en AGI, Justicia 1051, N. 4, R. 1.

⁹⁴ La pregunta 28 del interrogatorio iniciado en agosto de 1547 describe la situación: «si los dichos comysarios enbiaron al dicho Baltasar de Sotomayor la dicha comysyon y poder para cobrar las dichas copias fue por acuerdo e trato del contador Alonso de Almaraz que ubo entre el y el dicho señor obispo por causa de quel dicho contador tomo dos esclavos a tytulo de descaminados aun Cristobal Aragonés que vyno de la ysla Española a este puerto y el dicho alcalde avida ynformación de como los dichos esclavos no se pudieran tomar por descamnados se vio que se bolvyese al dicho Cristobal Aragonés lo proçedido dellos que fueron doziendo e honze pesos e sentenciado dio mandamientos executorio e se executo en ciertos derechos que devia Gonzalo Vazquez a su magestad y el dicho contador Alonso de Almaraz por estorvar lo susodicho por manera de vengança tanto con el dicho señor obispo que se enbiasen a cobrar en la forma susodicho qualesquier maravedies devidos a su magestad para que por esta via se cobrase tanbyen lo que segund dicho es se avia cobrado del dicho Gonzalo Vazquez», Ynformación... AGI, Justicia 1051, N. 4, R. 1, s.f.

⁹⁵ Ynformación hecha en la ciudad del Nombre de Dios a pedimiento de Juan de Castro, procurador de dicha çidad contra el contador Almaraz y demas oficiales de SM que en ella residen, 11 de agosto de 1547, AGI, Justicia 1051, N. 4, R. 2, s.f.

En primer lugar, se quejaban de que con el nombramiento del alguacil se les había tratado *a priori* como a rebeldes y consideraban que, en lugar de por vía expeditiva «fuera justo que se nos comunicara como a myembros y amygos» de Su Majestad, pues consideraban que en los lugares donde se ponen alguaciles es en ciudades y pueblos «donde no todos vive debaxo de una ley (...) para rogar a negros y no para prender ciudadanos tan leales» como ellos consideraban que se habían mostrado a lo largo del tiempo⁹⁶.

El alguacil, en teoría, sólo tendría potestad para gestionar los asuntos relativos a la armada y no podría actuar «en cosa que tocasse a la jurisdicción real», pero su nombramiento ya suponía un cuestionamiento de los privilegios urbanos⁹⁷. Sin embargo, aunque preferían que se les hubiera comunicado «graciosa y benivolamente» estaban dispuestos a contribuir a la causa alardeando de que en servir al Rey «en nuestros estados nadie nos haze ventaja». Se dispusieron a entregar inmediatamente 16 ó 17 mil pesos que tenían en la caja real «para que Dios y Su Magestad sean servidos y sus Republicas bien entretenidas». En último lugar hacían un recordatorio sobre la conveniencia de que «la carga» fuese llevada por «ese y este y los demas pueblos y que no cayga todo sobre esta çibdad»⁹⁸.

Cuatro días más tarde, el 23 de julio esa carta era entregada en Panamá por parte de los apoderados del cabildo de Nombre de Dios, Luis Marques y Anton de Reolas. Sin perder tiempo y a pesar de que los testimonios advertían de que habían enviado el dinero, el obispo declaró que los regidores «y otros çibdadanos con ellos con alboroto y çedicion del pueblo forçaron» al tesorero a que no cumplierse con su comisión y pudiese recaudar el dinero, de resultas de lo cual los sentenció «por inobedientes de Su Magestad (...) resistentes y rebeldes a los mandamyentos ynperiales»⁹⁹. En base a estas acusaciones ponía a toda la ciudad en entredicho y amenazaba excomunión a todo el regimiento si en el plazo de seis días no se presentaban con el dinero en Panamá. Inmediatamente después de recibir noticia de la excomunión, el cabildo pasó al siguiente nivel y amenazó con apelar directamente al arzobispo de Sevilla y a la Chancillería de los Confines de Guatemala.

En esta ocasión, el argumentario movilizado por los representantes de Nombre de Dios varió respecto a la primera apelación directa al obispo y hacía alusión a la confusión

⁹⁶ El concejo... AGI, Justicia 345, N. 2, R. 1, f. 6.

⁹⁷ Testimonio de Hernando de Luque, AGI, Justicia 1051, N. 4, R. 1; la pregunta a la que contesta, número 34, explicita los asuntos de los que podría ocuparse: «aprestar recuas y varcos e cargarlos y buscar y tomar donde quiera los negros que fuese nesçesario para lo susodicho y para acarrear las munyçiones e bastimentos y cosas nesçesarias a la dicha armada».

⁹⁸ El concejo... AGI, Justicia 345, N. 2, R. 1, f. 6v.

⁹⁹ Ibid., f. 11v.

jurisdiccional que la excomunión incorporaba al conflicto y a los diversos grados de lealtad a la Corona que se podían manejar. Sin embargo, antes de argumentar por qué no debían ser excomulgados ni puestos en entredicho, consideraban que no cabía tal posibilidad pues se trataba de «causas puramente seglares y no eclesiásticas» y, por ello, solicitaban que se revocase¹⁰⁰.

El resto de los argumentos estaban encaminados a enfatizar el fuerte carácter corporativo de la ciudad, la defensa de sus privilegios y a su servicio tradicional al rey. En este sentido, Nombre de Dios consideraba que, oponerse a la creación de una nueva vara de justicia era una acción que buscaba «endereçar» el servicio al rey, pues eso significaba quebrar el privilegio que la ciudad ya tenía en la administración de justicia. Para respaldar este principio, interpretaban los miembros del cabildo que La Gasca no había encargado nombrar alguacil, pues eso sería «suspender libranza», sino intentar conseguir el dinero por vía extraordinaria¹⁰¹.

Acusaban a la comisión de haber exagerado la importancia del gasto para poder nombrar un alguacil que favoreciese sus intereses. Con este planteamiento, el cabildo de Nombre de Dios depositaba la responsabilidad del nombramiento del alguacil en las manos de la comisión, eximiendo a La Gasca y, por ende, al rey y reforzando que era la ciudad la que se mostraba más leal y la que mejor defendía la jurisdicción real¹⁰². De hecho, el alcalde ordinario que redactó esta carta introdujo la variante de que, si se hubiera seguido adelante con el nombramiento del alguacil, todos los de la ciudad «se le resistirían y no darian lugar a que hiziese execusion alguna», pues con la justicia ordinaria, nombrada por el rey, ya era suficiente¹⁰³. La carta del cabildo se acompañaba de otra encabezada por «los mercaderes, vezinos e moradores» de Nombre de Dios. Estos vecinos de la ciudad, a quienes se había extendido el entredicho, apelaron también al obispo incidiendo en similares argumentos y solicitando que su inocencia frente a las acusaciones de desobediencia y falta de fidelidad a

¹⁰⁰ El entredicho, según el Tesoro de Covarrubias, se lo reservaba el obispo para castigar, efectivamente al «inobediente y rebelde» pero exclusivamente a los mandatos de la iglesia. Esta se podía aplicar tanto a los territorios como a los individuos, pero siempre atendiendo a causas religiosas.

¹⁰¹ El concejo... AGI, Justicia 345, N. 2, R. 1: La petición de dinero no justificaba que «se pusiese estanco, embargo ny suspensición en cosa alguna de las quel dicho señor presydenste probeyo ny en las libranças que por su mandado se dieron como vuestas merçedes lo an querido hazer».

¹⁰² Ibid., f. 18: La letra del argumento incide en la oposición entre jurisdicción real, comisión y ciudad: «si lo criase [el alguacil] fuese a su culpa y daño (...) ya hemos hecho lo que debiamos para conserbaçion e guarda de la juredición real y si vuestra señoría y esos señores proçedieren adelante y por la dicha cobrança, en algo a la dicha juredición perjudicaren e eçedieren en algo de la dicha comysion e mandado del dicho señor presidente e sea a culpa e cargo de vuestra señoría y de hesos señores y no nuestro».

¹⁰³ Ibid. El alcalde, además, aprovecha para presentarse como quien había paralizado una posible rebelión, no quien la había iniciado, que era de lo que le acusaba el obispo.

la Corona también se publicitase tanto como lo había hecho la excomunión decretada por el obispo¹⁰⁴.

Un día más tarde el obispo, apremiado por la «suplicación de algunas personas» levantó el entredicho de la ciudad de Nombre de Dios, aunque mantuvo la presión sobre los regidores para que se afanaran en la recaudación de impuestos. El pleito continuó durante unos meses más entre el obispo y el cabildo en torno a la jurisdicción de los regidores para cobrar impuestos. La tensión vivida en las semanas que mediaron entre el nombramiento de la comisión, la excomunión y la defensa pusieron sobre la mesa diversos elementos clave en la construcción y equilibrio del poder en Castilla del Oro, con la defensa de sus privilegios por parte de los cabildos como elemento fundamental de dicha construcción. Privilegios de otra índole, a medio camino entre los privilegios individuales y los colectivos y relativos a la forma de vida en las ciudades en Castilla del Oro, también fueron defendidos por los cabildos ante el intento de aplicación de las Leyes Nuevas.

La Gasca había sido enviado a Perú precisamente para pacificar las protestas comenzadas por la aplicación de las Leyes Nuevas en el plano de las encomiendas. De esa manera, se podría interpretar la actuación de Nombre de Dios como una resistencia –si bien de rango menor y con matices– de la aplicación de las Leyes Nuevas basada en la interpretación de la legalidad por parte del cabildo y enfatizando el carácter corporativo de las protestas frente al intento de interferencia jurisdiccional por parte del obispo. La construcción por parte de Nombre de Dios del discurso de la lealtad se basaba en la reivindicación de su propia labor a lo largo de los años y en su autoconsciencia como miembros de la Monarquía.

La comunidad de Nombre de Dios no se declaraba en rebeldía frente al pago de impuestos, sino que su argumentación se basaba en una interpretación de la justicia del reparto y en la reivindicación de sus méritos pasados. El motivo fundamental del conflicto en el Perú con el virrey Blasco de Vela fue el intento de terminar con las encomiendas o, al menos, paralizar la posibilidad de que estas fueran heredadas. En Castilla del Oro, donde la encomienda proporcionaba menos riqueza y donde, además, el poder de los cabildos era

¹⁰⁴ Ibid. La premura por levantar el entredicho era fundamental pues, mientras un territorio estaba en ese estado, quienes allí murieran lo harían en pecado y por eso pedía «no dar ocasion a que una çibdad adonde cada dia mueren tantos vayan algunos sin rescibir o partiçipar de los santissimos sacramentos e divinos ofiços y en atajar ansimesmo que por estar esta çibdad entredicha no permita dios algund mal suceso».

mucho mayor, la protesta contra el fin de la encomienda se centró en la ciudad de Natá y, además, a través de la negociación corporativa.

5. *La encomienda como privilegio corporativo.*

La encomienda, a pesar de que, como se ha mencionado, no tenía gran peso específico en la economía del conjunto de Castilla del Oro, significaba la constatación del modelo de expansión territorial implementado en las primeras décadas del siglo XVI en el Nuevo Mundo. Los choques entre élites locales y Corona que supuso el intento de su suspensión resultan de particular significación para comprender la naturaleza del poder y las tensiones inherentes a su ostentación. Es conveniente recordar, en este sentido, que la encomienda sí cumplió un papel importante en el asentamiento de las ciudades y en la definición de su jurisdicción, puesto que, para recibir una encomienda, era necesario la permanencia en el terreno que facilitaría el avecindamiento. Sobre el terreno, los intentos de aplicación de las Leyes Nuevas forzaron a una adaptación de las estrategias destinadas, por parte de los encomenderos, al mantenimiento de sus privilegios, para lo cual resultó capital su vinculación a los derechos corporativos tradicionales de las ciudades.

Con la llegada de Sancho de Clavijo en 1549, se activó el proceso para terminar con las encomiendas en Castilla del Oro en aplicación de las Leyes Nuevas¹⁰⁵. El 4 de septiembre de ese mismo año, en Valladolid, se había firmado una cédula en la que se hacía explícito a Sancho de Clavijo que debía liberar a los indios que estuvieran repartidos en encomiendas, esclavizados o como naborías. El mismo gobernador reunió a un grupo de expertos, encabezado por el obispo y compuesto de varios religiosos, el tesorero y factor, así como el teniente de gobernador para decidir sobre la mejor forma de llevar a cabo todo el proceso de liberación y decidir sobre los asentamientos en los que reducir a los indígenas¹⁰⁶. Estos deberían estar apartados de los pueblos de españoles, pero no demasiado para que «facilmente puedan gozar de la contratación e conversacion de los españoles»¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Clavijo fue nombrado oficialmente como gobernador el 7 de agosto de 1548, AGI, Panamá 235, L. 8, f 194-196v.

¹⁰⁶ Esa junta de expertos estaba compuesta por el obispo Pablo de Torres, el guardián de San Francisco Juan Gallegos, el comisario de la Merced fray Juan de Almazan, el prior de San Agustín Andrés de Salazar, el teniente del gobernador licenciado Melchor Gomez de Buytron, el tesorero Baltasar de Sotomayor, el factor y veedor Juan de Gorbalán de Robles y varios teólogos frailes de conventos de Panamá. Bartholome Carreño estante en Tierra Firme con el señor fiscal sobre la libertad o servidumbre de ciertos yndios que el governador pronunció por esclavos, 1549, AGI, Justicia 353, N. 1, R. 2, f. 48v.

¹⁰⁷ Ibid.

El 20 de marzo de 1551, en Cigales, se explicitaba la manera en la que Clavijo debía anular la encomienda en Castilla del Oro y evitar que los indios siguieran viviendo «derramados» y los españoles los agrupasen en pueblos con unos límites y capacidad para sembrar y criar¹⁰⁸. Tras una serie de deliberaciones, en las que se implicaron diversas opiniones, se acordó reducir a los indígenas que estuvieran encomendados en la región de Taboga y en la Sierra de Cabra. Sin embargo, todo este proceso no estuvo exento de conflictos, pues entre la llegada de Clavijo y la aplicación parcial de las Leyes Nuevas se interpusieron protestas y resistencias basadas en la búsqueda de reconocimiento de privilegios, tanto individuales como colectivos, que se canalizaron por vías diversas y que afectan a la manera en la que se construyeron las categorías políticas y sociales en Castilla del Oro.

En octubre de 1550, tras la puesta en marcha del proceso de liberación de los indios, un grupo de encomenderos o dueños de indios remitió una carta al gobernador en la que se quejaban de la brevedad con la que se iban a apartar a los indígenas de sus dueños, sin haberse recogido aún la cosecha, lo cual «nos resulta grandísimo daño y pérdida de nuestras haciendas y lesion al bien comun y publica utilidad de este reino». Por ello, solicitaban una prórroga al gobernador hasta el tiempo de recoger la cosecha, en virtud de que «lo contrario sería gran rigor y pérdida nuestra» y que esa prórroga no produciría «mengua al derecho de la libertad que pretenden»¹⁰⁹. Entre los firmantes de esa declaración se encontraba Gómez de Tapia, a la sazón regidor de Panamá, quien protagonizó una de las respuestas más sólidas contra el fin de las encomiendas en Panamá. Gómez de Tapia era uno de los vecinos más antiguos de Panamá y era «tenydo por caballero y el más rico y prencipal del y es muy antiguo en Yndias». Sin embargo, cuando se tuvo noticia en otoño de 1551 de que Sancho de Clavijo iba a aplicar

¹⁰⁸ Real Provisión a Sancho Clavijo, gobernador de Tierra Firme, para que ponga en libertad a todos los indios de aquella provincia, 21 de marzo de 1551, AGI, Panama 235, L. 8, f. 349-350v.

¹⁰⁹ Esta solicitud se encuentra inserta en el pleito que, de manera individual, inició Bartolomé Carreño para defender su propiedad sobre unos indios que había trasladado a Panamá en 1548 desde el Cabo de la Vela con licencia, primero del cabildo de esa ciudad y, más tarde, con la ratificación de un juez en 1549 en virtud de esa licencia. La llegada de Clavijo obligó a Carreño a poner en libertad a sus indios, anulando tanto el privilegio del cabildo como la sentencia emitida posteriormente. Clavijo no negaba que Carreño hubiese adquirido esos indios, cuyos nombres y procedencia se incluyen en el juicio, sino que no tenía potestad para haberlos introducido en la jurisdicción de Castilla del Oro para lo cual, efectivamente, no tenía permiso. Los herederos de Carreño siguieron pleiteando su derecho en la corte, pero su apelación fue negada sistemáticamente, Bartholome Carreño estante en Tierra Firme con el señor fiscal sobre la libertad o servidumbre de ciertos yndios que el governador pronunció por esclavos, 1549, AGI, Justicia 353, N. 1, R. 2, f. 25v.

el fin de las encomiendas, comenzó a juntar «gentes muy apasionados e los persuadio para que lo contradixesen»¹¹⁰.

A comienzos de noviembre de 1551 se marcó un plazo de veinte días para que aquellos que tuvieran indios en encomienda los pusieran en libertad. Llegado el final de plazo algunos de los dueños de indios seguían negándose a entregarlos por lo que se concedió una prórroga al final de la cual algunos continuaban negándose, entre ellos Gómez de Tapia. Pronto fue apresado y encarcelado y, con él, todo su círculo fue puesto también en sospecha. Pedro Márquez, un sastre que tenía una india y con quien Gómez de Tapia jugaba a las cartas frecuentemente, fue incriminado en el proceso por la declaración del testigo Juan de Peñalosa, que confesó que Pedro Márquez le había dicho que, si le expulsaban de la tierra, estaría dispuesto a arrastrar al gobernador y ponerlo en la picota. Peñalosa informó sobre un complot que se estaba fraguando entre ciertos vecinos que estaban huidos en los montes, disconformes con la aplicación de las Leyes Nuevas. Este grupo esperaba que pronto llegase un nuevo gobernador o juez de residencia desde Lima o desde Castilla que frenase la liberación de los indígenas pero que estaban dispuestos, si eso no sucedía, a tomar la justicia por su mano y derrocar e incluso asesinar al gobernador¹¹¹.

El testimonio de Peñalosa alertó al gobernador que, inmediatamente, apresó a Pedro Márquez, lo encarceló y sometió a torturas para conseguir más información. Tras varias sesiones de potro, de «tormento de agua y cordeles» y tras la intervención de varios testigos más que aportaban información sobre las acciones de Pedro Márquez, éste se decidió a hablar. Su testimonio confirmó que Gómez de Tapia estaba urdiendo una trama para que no se aplicase la liberación de los indígenas¹¹². El plan de Tapia consistía en utilizar a Pedro Márquez y nombrarle alcalde «al tiempo que el señor gobernador trataba de poblar los yndios» para, con el control del cabildo, conseguir paralizar la acción del gobernador e, incluso, hacer que le enviasen a Lima para ser juzgado.

Nada más llegar a Castilla del Oro, el siguiente gobernador, Lope de Sosa, recogía en una carta su miedo ante el excesivo poder de los cabildos, advirtiéndole de que los propios

¹¹⁰ El fiscal de S.M. contra Gómez de Tapia, vezino y regidor de la ciudad de Panamá, AGI, Justicia 354, N. 2, s. f. Sobre Gómez de Tapia ya pesaba la sospecha de su participación en las tropas de Gonzalo de Pizarro y en no haber participado en la defensa de la ciudad frente a los Contreras el año anterior.

¹¹¹ Ibid. Según el testimonio de Peñalosa, Pedro Márquez le había confesado que «si a él le echasen en esta çibdad que él arrastrara al gobernador e el pusiera en la picota».

¹¹² Además de la amenaza de derrocar al gobernador, Tapia fue acusado de, tras haber sido encarcelado, haber enviado a gente para que sacase a los indios de allí y evitar con ello que se aplicase la norma sobre la reubicación de los indígenas; en el interrogatorio se incluyen los testimonios de dos de los indígenas que hasta entonces habían servido a Tapia, Francisquillo y Domingo, que contaron cómo unos hombres, acompañados de esclavos negros, se habían llevado a los indios Martín, Hernando y a las hijas de éste Catalina, Isabelica y Marenica.

alcaldes le indicaban que en «su mano estava quitar gobernadores porque se yba luego a la Avdiencia y açia que viniesen luego a tomalle residençia»¹¹³. Según la lógica que seguía Gómez de Tapia, Sancho de Clavijo estaba ejerciendo una autoridad para la que no tenía competencia simplemente porque el cabildo no estaba en las manos adecuadas y que «si obieran sydo todos de mi boto ya estoviera ynbiando a Lima el gobernador»¹¹⁴. Gómez de Tapia se quedó sólo tanto en su voluntad de armar un motín violento contra el gobernador, como en sus votos en el cabildo. Pronto fue enviado a Castilla para ser juzgado allí, pero murió de calenturas en Trujillo camino de la Corte desde Sevilla y aún el albacea de su testamento, Alonso de Tapia, culpaba de su muerte a «los agravios e ynjusticias que el governador le hizo». El control del cabildo por parte de los encomenderos, en el caso de que hubiera sido así, podría haber actuado en este caso como una fuerza de resistencia más sólida en el caso de Panamá cumpliendo así con los deseos de Gómez de Tapia¹¹⁵.

En la ciudad de Natá, en cambio, menos volcada hacia el comercio y más dependiente de la encomienda, el cabildo sí se tomó la aplicación de las Leyes Nuevas como un motivo de resistencia corporativa que, además, contribuía a reforzar los lazos identitarios en la propia comunidad. La ciudad de Natá había comenzado a pleitear contra aquellos que ostentaban encomiendas allí pero no residían con casa poblada. Un procurador de Natá fue enviado *ex profeso* a Panamá para protestar porque dos de los más importantes encomenderos de la ciudad, Juan Fernández Rebolledo y Baltasar Díaz, no tenían en Natá «casas poblada e cavallo e armas, lança e adarga e ballesta», ni residían allí la mayor parte del año y, sobre todo, que no cumplían con el tributo que los indios generaban y, además, que no cumplían con los principios básicos por los que se concedía la encomienda pues «no los ha dexado estar sobre si, antes los a derramado y apartado unos de otros llevandolos al camino de Panama e trayendoles a hazer navios», de resultas de lo cual habían muerto varios de ellos¹¹⁶. La encomienda se puede interpretar, siguiendo este argumento, como un elemento de cohesión comunitaria, puesto que vinculaba a los encomendados con la ciudad.

Los hombres denunciados incumplían los requisitos mínimos para mantener la encomienda y que se basaba en parte en mantener la solidaridad comunitaria –así como participar en la construcción de la jurisdicción local como vecinos de su ciudad- no

¹¹³ Carta del gobernador Alvaro de Sosa, 15 de mayo de 1553, AGI, Panamá 39, N. 29, f. 164v.

¹¹⁴ El fiscal de SM contra Gómez de Tapia, AGI, Justicia 354, N. 2.

¹¹⁵ A pesar de que el repartimiento viejo había creado, en 1521, una élite de encomenderos, estos habían sido arrinconados en los puestos de poder municipal por los mercaderes ya a comienzos de los años 30, ver Alfredo CASTILLERO CALVO (2006), p. 549 y ss.

¹¹⁶ Juan Fernández de Rebolledo, vezino y rexidor de Panamá con el fiscal de SM sobre que se le restituyan ciertos yndios de que fue despojado por el governador Sancho de Clavijo, AGI, Justicia 353, N. 2, R. 1.

desmembrar la encomienda, circunscrita a esa jurisdicción, y cumplir con la parte de buena relación con los indígenas que se consideraba fundamental. Visto de esta manera, el sostenimiento de la encomienda era una forma de ser buen vecino y participar en la cuota de defensa del bien común que cada población mantenía. La concesión de una encomienda requería residir en el mismo lugar además de asegurar el buen tratamiento de los indígenas y el compromiso de encargarse de su manutención y cuidado, y debía estar acompañada por un compromiso con la comunidad. Juan Fernández Rebolledo que era, además, regidor de Panamá, ganó un primer pleito para defender su encomienda, pero no se libró de un segundo del que estuvo defendiéndose durante varios años y en el que, además de la propia norma de las Leyes Nuevas, también le acusaban de haber hecho «mal uso» de la encomienda al tenerla en Natá, pero ejercerla en otro lugar y también por haber maltratado a los indios¹¹⁷.

La ciudad de Natá, por lo tanto, percibía la encomienda como un privilegio corporativo que, además, condicionaba su identidad urbana pues era uno de los primeros privilegios que la ciudad había adquirido tras su fundación en 1522¹¹⁸. La encomienda se consideraba la única vía que tenía la ciudad para mantenerse poblada, participar del bien común de Castilla del Oro, y contribuir a su vez al bienestar y la conversión de los indios. De esa manera, apelando a sus principios, Natá se apresuró a defender la encomienda ante Sancho de Clavijo y Lope de Sosa.

El 19 de diciembre de 1552, en Madrid, el procurador de la ciudad de Natá Íñigo López de Mondragón recibió con desolación la respuesta del Consejo de Indias ante la súplica en la que se solicitaba que se paralizase el fin de la encomienda en esa ciudad. La argumentación y la estrategia que había seguido eran bastante contundentes. En su alegato inicial incluía una carta emitida por el cabildo y en ella lo primero en lo que se hacía hincapié era en que la ciudad de Natá no «tiene otro trato sino la labrança y criança de lo qual viven y se mantienen los vezinos»; si se anulase la encomienda lo más probable es que se vaciase el pueblo y, además, para los indios también sería catastrófico. El procurador destacaba en esa carta todas las bondades que tanto los indígenas como los castellanos habían recibido gracias a la encomienda de Natá. «Se han criado», informaba el procurador, «mas de trezientas criaturas» en la ciudad que, además, había sido bautizadas y habían sido doctrinados en la fe.

¹¹⁷ Así lo destacaba la testigo india Catalina en Proceso hecho de officio por la justiçia real del reyno e Tierra Firme sobre la visita que se hizo en la çidad de Nata de los yndios que en el termino della tiene Juan Fernandez de Rebolledo, 1556, AGI, Justicia 1051, N. 8, f. 7v.

¹¹⁸ Entre las mercedes solicitadas en la corte en octubre de 1522 se hacía explícito que «ninguno que no resida ni tenga veçindad e su casa poblada en esta dicha cibdad no pueda tener ni tenga yndios en ella», Solicitud del cabildo de la ciudad de Natá a SM, pidiendo ciertas gracias: el título de ciudad y el escudo de armas, entre otras, 15 de octubre de 1522, AGI, Patronato 185, R. 1.

Los indios, en consecuencia, viendo «el buen tratamiento que les hazen los españoles», ponían interés en que la tierra fructificase, lo cual permitía que la tierra se «multiplicase» y, por tanto, que no se despoblase. Si los indios dejasen de estar sujetos a encomienda, en cambio, advertía el cabildo, «todos huyrian y se matarian unos a otros y tendrian la vida bestial que solian y bolverian a su ydolatria»¹¹⁹.

Ya años atrás, en el año 1544, cuando se tuvo noticia del planteamiento de las Leyes Nuevas en Castilla del Oro, el contador Diego Ruiz había predicho una tragedia para la ciudad de Natá si se eliminaba la encomienda. En su opinión, Natá ya estaba en problemas pues sólo tenía doce vecinos, la mayoría de ellos labradores y «ya se van todos despoblando», pero si «vuestra majestad pone en su cabeça» a los indígenas encomendados, en siete años no habría vecino ni indios que no se alzarían, por la amenaza de los indios de guerra que asolarían la ciudad; en consecuencia, «peresçera el pueblo» y, unido a esto, «Panamá padescera [h]ambre de mays y carne de puerco». Ruiz consideraba esto una injusticia pues Natá era pueblo que «ha servido mucho a vuestra majestad», y desde allí se había lanzado la conquista de Perú y Nicaragua¹²⁰.

La desolación con la que el procurador de Natá recibió el dictamen del fin de la encomienda a finales de 1552 se veía aumentada, pues cargaba con él los intereses de todos los vecinos de la ciudad, que se veían implicados. Para representar a todos los vecinos, el cabildo había planteado una estrategia novedosa: una probanza de méritos colectiva de todo el pueblo con la que solicitar la anulación del decreto contra la encomienda. La probanza pretendía hacer prevalecer los méritos de la ciudad en nombre del Rey, mostrar la lealtad y los servicios prestados, al tiempo que se advertía sobre los perjuicios que la anulación de los repartimientos causaría a la ciudad y, en consecuencia, al reino y al Rey.

En las veinte preguntas contenidas en el documento, comenzado el 13 de noviembre de 1551, se desgranaban todas las ventajas de las encomiendas y, al mismo tiempo, todos los méritos que la ciudad había ido acumulando a lo largo del tiempo para que aquellas no se quitasen a sus vecinos. En primer lugar, desde la propia fundación de la ciudad se había hecho el repartimiento de indios y, gracias a él, se habían pacificado los distintos grupos, además de haberlos doctrinado entorno a «las cosas nesçesarias para su comer y bestir», además de curarlos de enfermedades. Sin duda, lo más destacable que la encomienda había logrado en la ciudad era haber conseguido controlar grupos de distintas «lenguas y

¹¹⁹ Con el concejo..., AGI, Justicia 1049, N. 4, R. 3, s. f.

¹²⁰ Carta de Diego Ruiz, alcalde de Panamá y contador de Tierra Firme, al emperador, 10 de marzo de 1544, AGI, Panamá 39, N. 11, f. 71.

parcialidades» que, si se volviesen a poner en pueblos, como son «gente incapaz y sin razon», se alzarían y esto tendría unas consecuencias trágicas, pues: «se matarían unos a otros [...] se juntarían con los yndios de guerra y con muchos negros que estan alçados [...] y vendrían a los pueblos contra los cristianos y los quemarían y matarían y çerrarían la puerta para que no se encontrasen unos pueblos a otros, de que se deserviría Dios y Su Magestad» y, por supuesto, «la tierra se despoblaría»¹²¹. No sólo por una cuestión de orden estaría la tierra en riesgo. Según el cabildo de Natá, si los indios dejasen de trabajar para los castellanos en los campos —pues, en teoría, su principal labor era la agricultura— la ciudad se despoblaría y el reino estaría en gran riesgo puesto que Natá era la principal fuente de alimentos y, además, se dejaría de abastecer la gente que estuviera de camino al Perú.

Otras preguntas de esta probanza colectiva hacían referencia, como demostración de los servicios prestados, a la actuación de Natá en defensa de Castilla del Oro y en la conquista del Perú y Nicaragua. Estas dos provincias habrían sido descubiertas por «vezinos y conquistadores» nacidos de Natá y, además, con el socorro y ayuda de los que allí se quedaron, proveyendo de caballos, maíz, carne y muchos indios e indias de ayuda. De igual manera, la ciudad había colaborado con la expedición tanto de Francisco Pizarro —dando de comer a 70 u 80 hombres llegados desde Panamá hasta que se embarcaron— y de La Gasca —dándole carne, maíz y dineros para pagar a los soldados—.

Cuando los hermanos Contreras asolaron la ciudad de Panamá en octubre de 1550, los vecinos de Natá se habían aprestado a defender y hacer justicia de los alzados. En resumen, según la probanza: «en todas las alteraçiones que en Tyerra Firme a avido sienpre los vezinos desta çibdad [h]an estado firmes en el servicio de Su Magestad e ny amenazas ny fuerças que les ayan fecho tyranos no se an apartado de la sujeçion de su rey y señor natural». Por lo tanto, el cabildo defensor de la encomienda de Natá consideraba que esta estaba bien merecida, tanto por los méritos que la ciudad había hecho al rey en momentos puntuales como, especialmente, gracias a la labor que la ciudad hacía en la pacificación y conversión de los indígenas. Si se acabase con la encomienda la ciudad se despoblaría, argumentaban, y se perdería toda la labor ya realizada; además, en la propia lógica de la relación de méritos estaba implícito que si no reconociese todos los servicios prestados por la población el rey estaría siendo injusto con sus servidores puesto que «conforme al derecho donde ay tan grandes e tan notables servicios a de aver abundancia de mercedes»¹²².

¹²¹ Con el concejo... AGI, Justicia 1049, N. 4, R. 3.

¹²² Ibid.

Todos los vecinos que fueron testigos en la probanza aportaron nuevos datos a la catástrofe que se preparaba si las encomiendas eran anuladas, incluyendo detalles como las prácticas de bestialidad a las que retornarían los indios puestos en libertad. El testigo Pero Gutiérrez presentaba un panorama inquietante: «poblandose lugar de yndios se haria mucho mal a los cristyanos por aver yndios Caribes çerca de Urraca que es en termino de la çiudad de Nata y se juntarian unos con otros y harian mucho daño a los cristianos lo qual si acaeçiese no podrian dexar de despoblar la dicha çiudad de Nata por la contynua guerra que les darian asi ello como los negros que se juntarian con ellos» y narraba incluso el asesinato de un estanciero de Natá a manos de los Caribes, que se habían llevado su cabeza, para concluir que «los dichos yndios estan mejor tratados e dotrinados que no estando por si en pueblos divididos y apartados de entre los españoles»¹²³. El destino de la ciudad de Natá estaba unido al del uso de los indígenas como mano de obra encomendada y, si estos eran liberados, el pueblo desaparecería.

Íñigo López de Mondragón no se plegó a la primera negativa del Consejo y el 9 de febrero de 1553 insistió con una apelación en la que instaba a que «Vuestra Majestad fuese bien ynformado de lo que conviene hazerse» y que no se fiase de lo que había decidido el consejo instándole a consultar con alguna de las Audiencias de Indias o aun con el Virrey del Perú. Principalmente, advertía que el Consejo había decretado que en Natá se hiciese lo mismo que en Panamá sin valorar que las circunstancias de una y otra ciudad no podían equipararse, pues «Natá no tiene otro trato sino labrança y criança de lo qual viven los vezinos de aquel pueblo», mientras que Panamá tenía muchas otras fuentes de riqueza y poblamiento. Concluía su alegato recordando que «lo que es justo hexecutarse en un pueblo no lo es ny conviene al servicio de vuestra alteza que se hexecute en otro», porque era necesario valorar las diferencias «que ay en la manera de la bivienda y tratos de los unos y de los otros». Los intereses y las necesidades de cada población debían ser considerados individualmente, pues cada una tenía sus modos de vida y cada una a su manera era precisa dentro del sistema de la Monarquía¹²⁴. Dos días más tarde el Consejo confirmaba la primera resolución y, tres meses más tarde, el procurador de Natá volvía a emitir una apelación aún más rotunda. Abandonaba entonces la argumentación basada en los hechos concretos relativos a la ciudad y se encaminaba hacia valorar la decisión del fin de la encomienda en términos de buena gobernación. Criticaba que intentar ejecutar una ley sin disponer de toda la información

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Mondragón insistía en destacar que todos los navios que partían hacia la Mar del Sur se surtían de maíz y carne en Natá, de manera que si se despoblaba también sufriría ese tráfico.

podría ser más perjudicial que beneficioso, porque «sy de la execuçon se syguen mas ynconvinyentes e daños comunes que probecho aquello no se puede decir buena gobernaçon»¹²⁵.

Según el argumento del procurador todas las partes serían perjudicadas por la ejecución del fin de las encomiendas, cuyas consecuencias se irían encadenando unas a otras: los indígenas dejarían de estar doctrinados y, eventualmente, se matarían unos a otros; los vecinos de Natá serían víctimas, o bien de los indios alzados en guerra, o bien de la carestía; de esta última también serían víctimas, no sólo los habitantes de Natá, sino también los vecinos de las ciudades y provincias aledañas, así como los pasajeros en tránsito hacia el Perú. Los servicios prestados históricamente por los vecinos de Natá invitaban a su procurador a solicitar de nuevo que, en justicia, dispensase «el rigor de las leyes e probisiones», pues hacerlo iría en conservación de los indios y aumento de los vecinos y población de Natá. Ninguna de estas razones alteró el parecer del Consejo de Indias que, casi un año más tarde, el 26 de febrero de 1554, volvía a confirmar la primera sentencia que había sido pronunciada en diciembre de 1552.

El bien común definido por el cabildo de Natá en función de su uso de la encomienda integraba, de manera diversa, en función de los intereses de cada componente, a todas las instancias de la Monarquía. Según la argumentación desarrollada por el cabildo y su procurador, la encomienda beneficiaba, en primer lugar, a los indígenas, pues se veían así incorporados a la fe católica y obtenían cierta protección insertos en la vida urbana; en segundo lugar, la encomienda beneficiaba a los propios vecinos de la ciudad, pues de ella obtenían su principal medio de vida a través del trabajo de los indígenas; derivado de este beneficio estaría el que recibían tanto el resto de las ciudades de Castilla del Oro como, por extensión, las regiones aledañas de Nicaragua y Perú. Todos estos intereses compartidos por cada uno de los elementos implicados en este conflicto, según el argumento defendido por el cabildo de Natá, beneficiarían de manera global al rey y a la Monarquía, que sería sostenida por la capacidad de Natá y otras tantas poblaciones de los territorios para mantener y gestionar la encomienda o, en general, sus respectivos *bienes comunes* que integrarían y dotarían de contenido, a su vez, el bien común de la Monarquía.

Conclusiones

¹²⁵ Ibid. En Madrid, en 19 de abril de 1553.

Según las teorías políticas tradicionales en Castilla los mercaderes nunca deberían ocupar los puestos principales en los regimientos de una ciudad. Estos, por supuesto, debían «llevar sólo la mira en la conveniencia del bien público» y defender el «bien y procomún de la ciudad y de sus vecinos y moradores»¹²⁶. La mala consideración de los mercaderes en general arrancaba de su supuesta tendencia al interés propio y a la falta de interés por el bien común de las poblaciones en las que vivieran. Si bien Alonso del Castrillo reconocía que la ciudad no podía existir sin los mercaderes, defendía también que estos no podrían ser considerados ciudadanos y, mucho menos, participar en su gobierno. La justificación era muy elocuente. Según el trinitario, los mercaderes, «trabajan con el cubdizoso espíritu» y como «todo ser cudicioso vive lejos de ser virtuoso, cuanto mas aquellos que tiene por oficio el cubdician», en consecuencia «mal procurar para el bien de la republica aquel que es vencido de su propia cubdicia»¹²⁷.

Similar argumentación había seguido Sánchez de Arévalo quien, a pesar de considerar que «las negociaciones e mercancías en tanto son buenas e cumplideras e en tanto se deben desear en las ciudades» siempre y cuando se circunscribieran al tan aristotélico «abundancia y bien vivir de la tal ciudad» y, desde luego, «los mercaderes e los que traen vida negociatoria e forense propiamente no son ciudadanos ni constituyen ni hacer parte de la ciudad»¹²⁸. En consecuencia, según estas teorías, los mercaderes no reunirían las calidades necesarias para optar a los cargos clave en los cabildos. Esta teoría, como se ha visto en este capítulo, fue defendida por diversas voces como las de los obispos, oficiales reales y representantes del común de las ciudades. Sin embargo, la consideración del bien común que se imponía en Castilla del Oro era precisamente la que defendían los mercaderes que ocupaban los cabildos frente a la que querían imponer los gobernadores o los obispos desde una óptica más idealista y, sobre todo, alejada de la realidad cotidiana.

Los cabildos, que se presentaban como los «ciudadanos más leales» a la Corona y «miembros» principales de la Monarquía, conocerían mejor que nadie los intereses de la tierra y los defenderían mejor que otros precisamente porque pretendían hacer coincidente su propio interés con el bien de todos. Según sus criterios, ellos aplicarían mejor la justicia,

¹²⁶ Juan SOLÓRZANO Y PEREIRA (1647), lib. 4, c. 1 y Acta de fundación de Lima, en Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY (1984), p. 53. La lista de los teóricos que definían estos principios es larga y arranca de la matriz aristotélica pasando por Santo Tomás y la traducción castellana de García de Castrojeriz que, hacia 1344 advertía que «se salva la ciudad cuando cada uno pugna por el bien común» por lo que «no conviene a ninguno de empecer a otro por razón de su provecho. E quien esta quebranta es digno de muerte, o desterramiento o de cárcel o de despechamiento según que dicen las leyes».

¹²⁷ Alonso DEL CASTRILLO (1521), p. 200. Para un análisis de la opinión de Castrillo sobre los mercaderes vinculada con la revuelta de las Comunidades, ver Jose Antonio FERNÁNDEZ SANTAMARÍA (1988), pp. 40-41.

¹²⁸ Rodrigo SÁNCHEZ DE ARÉVALO (1944), pp. 53-54.

porque de ello dependían sus negocios y ellos se asegurarían de mantener con vida las poblaciones por el mismo motivo. Incluso había sido la capacidad para comerciar lo que había provocado el aumento y sustento de población que había conseguido que Nombre de Dios se convirtiese en ciudad. También habrían de ser los comerciantes, como se verá en el capítulo siguiente, los que iniciaran y continuaran las buenas relaciones con los indígenas.

Por lo tanto, si los mercaderes eran los miembros más importantes de cada ciudad y ocupaban los puestos del cabildo que tradicionalmente estaban reservados a aquellos «más aptos» y de mejores calidades, el propio concepto de nobleza contenido en esos epítetos se había visto transformado. Ser mercader se había convertido en una «calidad» decisiva para poder ascender socialmente en las ciudades de Castilla del Oro –especialmente en Panamá y Nombre de Dios– y, por ende, para que toda la ciudad también se ennobleciese gracias a la labor de todos sus miembros. De igual manera, la antigüedad en la tierra, otro requisito tradicional para el ennoblecimiento, se relativizó y se comenzó a considerar sólo desde el momento en que los individuos habían comenzado su participación en las ciudades. Este proceso, además, se vio alentado por la propia Corona que, con la concesión de privilegios fiscales a los intercambios, estaba promoviendo que las ciudades fueran pobladas por mercaderes que, por extensión, también ocuparon los espacios de poder.

El bien común que definían los mercaderes desde los cabildos en la defensa de los privilegios estaba basado en hacer coincidir sus propios intereses con los de la ciudad y, éstos, con los del rey¹²⁹. De esta manera, cada una de las ciudades de Castilla del Oro definió su propia consideración del bien común en función de los intereses de sus vecinos para luego elevar esos intereses y reivindicarlos como parte esencial de la Monarquía. Lejos de ser un concepto abstracto de aplicación global, el bien común se definió y defendió en función del contexto por y para los núcleos locales de poder¹³⁰. Los mismos criterios que, basados en los privilegios, definían quién era vecino y quién no, también definían la relación de los individuos con las instituciones tanto locales como supralocales. Esta escala ascendente de intereses comunes permite intuir los diversos materiales con los que se fabricaba la Monarquía, cuyos cimientos más sólidos se encontraban entre las ciudades que componían el conjunto.

¹²⁹ John WATTS (2011), pp. 147-163.

¹³⁰ Elodie LECUPPRE-DESJARDIN, E. y Anne-Laure VAN BRUAENE (2010); Peter BLICKLE (1998), pp. 29-46; Eberhard ISENMANN (1997), pp. 185-215; Jan DUMOLYN (2011), pp. 69-96; Giacomo TODESCHINI (2010), pp. 225-235; Rachel RENAULT (2017), pp. 79-100.

Esta misma conceptualización de bien común que se construyó en el contexto de las ciudades de Castilla del Oro tuvo repercusiones en la manera de definirse la lealtad y obediencia a la Corona. Ante las acusaciones de desobediencia emitidas por el obispo Torres, los gobernadores o el corregidor, las ciudades se defendieron apelando a que ellas eran precisamente más leales al rey, pues eran ellas los miembros que componían el cuerpo de la Monarquía en esa región. Los miembros de los cabildos, que se reclamaban vecinos y ciudadanos de esas repúblicas urbanas, tendrían más interés porque se asentase y profundizase en la población de la región que los gobernadores o tenientes venidos de fuera. El envío, desde muy pronto, de docenas de procuradores de las ciudades a la corte o ante el gobernador para defender los intereses de las ciudades hace evidente ese vínculo de lealtad que unía aquellas con la Monarquía. A su vez, esa relación de correspondencia fluida con la Corona significaba también la creación y ejercicio de poder *desde* las ciudades hacia la Corona y no exclusivamente de manera unidireccional *hacia* las ciudades.

En el proceso de negociación y defensa de los privilegios urbanos se iba construyendo una dinámica política en la que los propios cabildos tenían la posibilidad de regular y ajustar las normas y leyes emanadas de la Corte. Esta dinámica se basaba en un juego de equilibrios entre las legislaciones emitidas desde los consejos y los intereses de los habitantes de Castilla del Oro, generando un modelo de obediencia dinámica que profundizaba y adaptaba la aplicación del principio «obedézcase, pero no se cumpla». Lejos de ser una figura retórica, en Castilla del Oro se convirtió en la forma de operar cotidiana para la configuración de la Monarquía a largo plazo. Incluso la fórmula era utilizada de manera explícita en los textos de las argumentaciones de los cabildos en sus litigios de resistencia a la aplicación de las normas. En un pleito iniciado en 1546 por las ciudades de Castilla del Oro contra el aquilatamiento del oro en la región, el procurador de Nombre de Dios Juan de Castro comenzaba su alegato diciendo que las ciudades consideraban que «la dicha cédula se debe por vuestra merced obedecer e no cumplir e que su alteza no fue bien informado en el proveymiento della por que a serlo no la proveyera, pues es en gran perjuicio de todo este dicho reyno e vecinos del»¹³¹.

Los canales de resistencia en Castilla del Oro fueron monopolizados por los cabildos que, considerando su trayectoria desde su fundación, la acumulación de privilegios corporativos y la conciencia de su importancia estratégica dentro del sistema imperial, articularon una cultura política de raigambre fuertemente urbana que se valió de unas

¹³¹ Instancia de las ciudades de Panamá y otras de Tierra Firme, sobre suplicación de la Real Cédula relativa a que el oro y plata no valiese mas quilates que los que tuviera por su ley, 1546, AGI, Justicia 1044, N. 5, R. 3.

prácticas y unos lenguajes que les vinculaban con los elementos republicanos tradicionales que, lejos de estar en decadencia, se presentaron como un contrapeso clave a los intentos de articulación de medidas desde Castilla¹³².

En términos generales, el intento de introducción de las Leyes Nuevas desde 1544 no encontró, a causa de una sólida cultura política republicana, una respuesta violenta en Castilla del Oro. En cambio, lo que se produjo fue una defensa de los privilegios urbanos articulada por vía jurídica. Las Leyes Nuevas fueron un intento por regular diversos aspectos del gobierno de Indias, no exclusivamente la gestión de las encomiendas, sino que tuvo influencia en muchas otras áreas, que permitieron la puesta en escena de una práctica política compleja. Las disputas por el ejercicio de la justicia, el pago de impuestos o el mantenimiento de las encomiendas forzaron a cabildos y gobernadores a argumentar a favor y en contra de los privilegios que las comunidades políticas habían recibido. Estas disputas permiten desarrollar una interpretación de las dinámicas de establecimiento y ejercicio del poder en el Nuevo Mundo, no como una tensión dicotómica entre gobiernos municipales y agentes de la Monarquía, sino como una práctica de interacciones diversas que generaba realidades políticas en ocasiones convergentes y a menudo divergentes pero que se basaba en unos principios compartidos por todos los actores implicados. A su vez, estas prácticas políticas permiten elaborar un análisis de la historicidad de ciertos conceptos como bien común o lealtad que, lejos de ser unívocos, se vieron alterados constantemente en función de quién, cómo y cuándo se utilizasen, de manera que el aparato conceptual con el que se articularon los discursos políticos en la Monarquía también se encontraba muy sujeto a la práctica y las circunstancias concretas.

Paradójicamente, esa respuesta anteriormente mencionada fue posible porque la propia construcción del espacio político en Castilla del Oro se había basado en la concesión graciosa, por parte de la Corona, de privilegios corporativos que en virtud de las Leyes Nuevas se intentaban regular. El resultado no fue paralizar todas las normas que desde la corte se emitían, sino darles un sentido específico aplicable a las circunstancias específicas e incorporar las dinámicas particulares de las ciudades a la política de la Monarquía.

La cultura política de Castilla del Oro, por lo tanto, se nutrió de elementos provenientes de diversas fuentes, que la convierten en un fenómeno mixto, muy dinámico y adaptable a diversos escenarios. Por un lado, estaba la tradición republicana de raíz clásica,

¹³² Xavier GIL PUJOL (2008), pp. 111-148; sobre la vitalidad de las repúblicas como forma de gobierno tanto en Castilla como en Europa a lo largo de toda la Edad Moderna, Manuel HERRERO (2017) esp. Introducción.

cuyos lenguajes se adaptaron a las circunstancias; por otro lado, se incorporaron las experiencias políticas cercanas como puntos de referencia a la hora de resolver conflictos o definir estrategias de defensa que enfatizaban la necesidad de afrontar las particularidades de cada caso concreto; en tercer lugar, se trata de una cultura política que se basaba principalmente en la práctica y en la adaptación y flexibilización de las normas y procedimientos al alcance de los actores para determinar las vías de actuación y la posición ante la Corona. En consecuencia, la actividad política en Castilla del Oro no se ceñía a la recepción e incorporación de las normas emitidas desde Castilla, sino que se basó en la adaptación y reconfiguración de las mismas.

La ausencia de violencia en respuesta a las Leyes Nuevas no se explica exclusivamente por una falta de potencial económico –ausencia, por ejemplo, de encomenderos poderosos– o por docilidad al aceptar los dictados de la Corona. La respuesta hay que encontrarla en la construcción, desde su fundación, de una cultura política que primaba los equilibrios entre las distintas instancias de poder y que tenía a los cabildos como eje fundamental. También se produjo un ejercicio de pragmatismo por parte tanto de la Corona como de los gobiernos municipales. Los intereses de aquella se intentaron adecuar a los privilegios de estos, de manera que una región considerada «llave» del Nuevo Mundo no entrase en un conflicto profundo que podría paralizar el funcionamiento del sistema. En ese sentido también interviene el hecho de que los cabildos estuviesen mayoritariamente controlados por mercaderes cuyos intereses dependían también del buen funcionamiento del engranaje comercial. Estas circunstancias generaron una cultura política que combinaba tradiciones diversas y juegos de intereses cruzados.

Castilla del Oro, que era formalmente una unidad como gobernación, se componía realmente de ciudades interconectadas entre sí pero que actuaban de forma autónoma a la hora de reivindicar sus derechos, privilegios, e intereses –a veces divergentes– ante la corte. De hecho, las continuas interinidades y ausencia de gobernadores habían contribuido entre los cabildos a reforzar la idea de que no era realmente necesaria la existencia de una autoridad superior, ni siquiera a través de tenientes, pues los canales de comunicación con la Corona funcionaban ya desde las propias ciudades sin necesidad de contar con una instancia intermedia. De esta manera, Castilla del Oro se constituía como una unión heterogénea de repúblicas cuyos intereses corporativos eran definidos por los individuos que las componían y, a su vez, competían por definir los intereses de la Monarquía.

Capítulo 4

***Civitas* intercultural.**

Policía y conversación política

Los conflictos en las ciudades de Castilla del Oro derivados de la aplicación de las Leyes Nuevas hicieron evidente el fuerte sentido identitario que las poblaciones habían desarrollado en muy poco tiempo. Las ciudades se habían constituido en unidades fundamentales para el mantenimiento de la Monarquía y uno de los medios principales de su expansión atlántica. Durante los conflictos generados por la delimitación de las fronteras entre Castilla del Oro y las provincias tanto de Honduras como de Santa Marta/Cartagena entre los años 1526 y 1536, estudiados en el Capítulo 2, los vecinos de las ciudades recién fundadas alegaban a su favor que, desde el propio momento de la fundación, los indígenas se habían pacificado de una manera ostensible. De igual manera, en el momento en que los indios observaban que las poblaciones se vaciaban, ellos mismos parecían renunciar a su propia conversión. La fragua de esas relaciones, verdadera justificación teórica de la conquista requiere de un análisis en el nivel local, que implica una aplicación y adaptación de principios generales relativos a las relaciones interculturales¹.

Los vecinos de la villa de Tolú, en el Nuevo Reino de Granada, iniciaron en agosto de 1561 una información tras el enésimo intento por lograr la pacificación de los indios Caribana en el golfo de Urabá. En esta se detallaba que los indígenas eran «yncorregibles e muy perjudiciales», que se negaban a aceptar la conversión y eran una amenaza para el resto de los grupos indígenas de la región y para el comercio que llegaba a la zona desde Nombre de Dios. Los llamados indios de Caribana asaltaban los barcos y también a los mercaderes que atravesaban la región camino del interior del reino. Los testimonios, incluido el de un

¹ Berta ARES y Serge GRUZINSKI (1997).

cacique vecino conocido como El Viento, informaban sobre todo tipo de ataques cometidos por los de Caribana, acompañados de detalles sobre la imposibilidad de llegar a acuerdos de paz con ellos. Incluso un mercader llamado Gonzalo Martín había intentado acercarse a ellos a través del intercambio y, aunque les llevó un cofre con «muchos machetes y sartas de colores para dar a los yndios porque le sirviesen», estos no habían reaccionado como él esperaba y mataron a Martín junto a su mujer, su hijo y los compañeros que iban con él. La situación era muy compleja porque no existía en la región en ese momento una autoridad que se pudiese equiparar al cacicazgo de Caribana para iniciar unas conversaciones de paz que pudiesen fructificar de manera permanente. Tras el fin de la pesquisa, la solución que se adoptó fue la de solicitar una provisión real para que fuera el cabildo de la villa de Tolú el que tomase las riendas de la negociación, enviando una persona con vara de justicia y gente, para intentar reedificar los pueblos que se habían destruido y volver a poblar la zona, pacificando con ello a los indígenas². Tras varias décadas de presencia castellana en el territorio, comenzando desde los primeros asentamientos en Castilla del Oro, se hacía evidente que las relaciones con los indígenas debían llevarse a cabo desde la escala local y, por tanto, el cabildo debía ser la institución que tomase la iniciativa, a través de uno de sus integrantes y aplicando los principios de gobierno urbano.

La evangelización de los indígenas era, desde la propia llegada de Colón a las costas de Guanahaní, el principal argumento para la justificación de la presencia de los castellanos en Indias. Tanto las bulas de Alejandro VI como toda la legislación emanada desde la época de la reina Isabel incluían la obligación de convertir a los indígenas como un motivo para legalizar tanto la conquista como la ocupación de las islas y la Tierra Firme. La presencia de los castellanos en Indias se justificaba, por tanto, por la necesidad de incorporar a los indígenas a la fe católica y, también, por buscar su adhesión a una determinada forma de vida, alejada de la imagen de barbarie y salvajismo con los que en ocasiones se les había asociado y que se había invocado para justificar su esclavización. El concepto que encapsulaba la forma de vida a la que deberían adherirse los indígenas era el de «policía»; un concepto polisémico de raíz aristotélica vinculado de manera indisoluble a la vida urbana como centro de lo que se podría considerar un estilo de vida virtuoso. Los indígenas, por lo tanto, no sólo deberían ser convertidos a la fe católica, sino que también deberían ser incorporados a la «buena policía» a través del contacto cercano y continuo dentro de un contexto de vida urbana.

² Diego Maldonado y la villa de Tula sobre los indios de guerra de Carivana, 1561, AGN, Caciques e Indios, leg. 16, doc. 8.

Los procesos de conquista, colonización o conversión han sido estudiados habitualmente como abstracciones, enfatizando el carácter *macro* de los planteamientos teóricos y las pretensiones ideales de la Corona para su aplicación al otro lado del océano. Además, las diferencias entre castellanos e indígenas se han interpretado a menudo desde la óptica de una incomprensión mutua que impediría las relaciones bilaterales y forzaba al ejercicio exclusivo y unidireccional de la violencia en cualquiera de sus formas con el fin de sacar rendimiento material e imponer un «imperialismo religioso»³. La llamada conversión o evangelización, sin embargo, tenía en la realidad unas concreciones prácticas y regionales muy significativas, como veremos en este capítulo, y se articuló a través de procesos y prácticas específicas, llevadas a cabo en el nivel *micro*, local, aplicando principios, conceptos y rituales relativos a la forma de vida urbana. Estas relaciones no requerían, en la mayoría de las ocasiones, del ejercicio de la violencia y la coerción explícita, sino que se basaban en otro tipo de prácticas políticas, más centradas en buscar los puntos de comprensión y confianza que en la destrucción unilateral. La «conquista» o «colonización» no fue, como se verá en este capítulo, un fenómeno abstracto y extensible a todas las regiones de forma homogénea, ni tampoco un proceso unidireccional⁴; en cambio, se trató de un proceso lento, complejo y multicausal, que se nutrió de conocimientos, agentes y prácticas locales que participaron de la configuración multicultural de la Monarquía.

El concepto que vehiculaba el entramado de relaciones entre indígenas y castellanos en el mundo urbano de Castilla del Oro, cuya consecución última era la extensión entre ambos grupos de la policía, era el de conversación. La idea de conversación tiene su origen en la recuperación de la *Política* de Aristóteles en la Castilla de comienzos del siglo XVI coincidente con el auge de la cultura política urbana y encontró un recorrido muy amplio en el Nuevo Mundo desarrollándose de forma adaptada a cada circunstancia⁵. La conversación, como concepto político, se aleja de las lógicas de la «conquista», «colonización» o «conversión» porque se trata, en esencia, de un acercamiento dialógico, pues para que la conversación se haga posible deben participar las dos partes implicadas y alcanzar, siquiera

³ El concepto de «imperialismo cristiano» en Stephen GREENBLATT (1993), p. 71; Peter MASON (1991); Zvetan TODOROV (1984); Patricia SEED (2001). En todas estas obras, con matices, se analiza la tendencia de los europeos a considerar a los indígenas como un único sujeto colectivo sin apenas matices. Greenblatt y Mason se centran en los orígenes europeos de la construcción del estereotipo del indígena mientras que Todorov y Seed analizan cómo esa creación sirvió como justificación de los que consideraban un «genocidio» a una «destrucción». En todo caso, en todos los textos se elabora una interpretación a través del análisis de tratadistas y textos literarios, sin prestar atención a las prácticas concretas y a las concreciones regionales.

⁴ Un acercamiento reciente a este modelo de conversión religiosa unilateral y dicotómico en Erin STONE (2017), pp. 139-170.

⁵ Miguel HERRERO DE JÁUREGUI (2008), pp. 211-226.

de manera simbólica o a través de la confluencia de intereses, un espacio de entendimiento, reconocimiento y mutua comprensión. A través de las interacciones culturales no se producía estrictamente la imposición de una cultura sobre la otra, sino la generación de un espacio común. Estas interacciones se producían en muchas ocasiones y, desde la propia llegada de los castellanos a Indias, a través de intercambios comerciales cuyo objetivo no era estrictamente pecuniario sino centrado en el estrechamiento de lazos culturales.

Para que la conversación fuera eficaz era necesario un conocimiento del entorno y de las circunstancias concretas de cada espacio, algo que sólo se podía conseguir a través de la presencia continuada en un espacio y la construcción de una identificación con el territorio circundante. Por esto, el poblamiento y el mantenimiento de los habitantes castellanos de las ciudades de Castilla del Oro resultaban fundamentales para garantizar el flujo conversatorio. Las ciudades actuaron como el entorno de acumulación de conocimiento que permitía construir flujos de confianza con los grupos indígenas vecinos que, a su vez, identificaban a la ciudad y sus habitantes como interlocutores. Los agentes, tanto de una parte como de otra, debían encontrar vías de entendimiento que, en ocasiones, se construían a través de una superación por vía simbólica de «malentendidos culturales»⁶. En este sentido, las *lenguas* indígenas y algunos comerciantes o regidores castellanos, actuaron como mediadores culturales cuyos labores iban más allá de la mera traducción de una comunicación verbal⁷. Estos mediadores —definidos por la historiografía reciente como «cultural brokers»⁸ o «go-betweens»⁹— también traducían símbolos y prácticas e incluso, en ocasiones, ellos mismos se convertían en la personalización de la confianza mutua llevando a cabo una labor de diplomacia intercultural fundamental para el mantenimiento de relaciones entre distintas entidades políticas¹⁰. En este sentido, y para el contexto de las ciudades de Castilla del Oro, se podría hablar de una «diplomacia informal» en la que agentes «no oficiales» de la Monarquía Hispánica establecían y mantenían contactos de confianza mutua con grupos sociales y políticos externos, si bien formalmente incorporados al entramado político dependiente de la Corona, como eran principalmente los cacicazgos indígenas.

⁶ Richard WHITE (2006), pp. 9-14 y, en general, el dossier dedicado a la revisión del concepto de Middle Ground enunciado por el propio White en su clásico Richard WHITE (1990); Karen KUPPERMAN (2000).

⁷ Por ejemplo, en 1560, en la ciudad de Cartagena, el cabildo comenzó a realizar un censo de todos los indios ladinos que vivían en la ciudad con el fin de que «los otros naturales desta provincia viéndolos vivir y permenesçer en la dicha pulçia y decoro se esfuerçen y animen a vivir en ella», Criminal y autos sobre el registro de los yndios e yndias de serviçio ladinos de la çidad de Cartagena, AGN, Caciques e Indios, leg. 1, doc. 32, f. 724v.

⁸ Natalie ROTHMAN (2010), pp. 67-79; Natalie ROTHMAN (2012), pp. 3-7.

⁹ Emrah Safa GÜRKAN (2015), pp. 107-28; Alida METCALF (2005).

¹⁰ Jose PUENTE LUNA (2014), pp. 143-70; Jose Miguel ESCRIBANO PÁEZ (2016a), pp. 189-214.

La conversación operaba por definición en el plano urbano, pero no precisaba necesariamente de la existencia física de una ciudad –*urbs*– en el sentido estricto. Es la ductilidad del concepto de *civitas*, como comunidad urbana coherente y autorreferencial, lo que mejor puede explicar en qué consistía la incorporación de los indígenas vía conversación a la policía urbana¹¹. No era estrictamente necesario que los indígenas fuesen incluidos físicamente a la vida en la ciudad, sino que la propia ciudad podía llegar hasta ellos a través de las prácticas llevadas a cabo por los agentes urbanos en diversos contextos. Las ciudades de Castilla del Oro carecían de murallas porque el objetivo de su existencia era expandirse por el territorio, no sólo físicamente sino también de forma simbólica para extender la policía asociada a la vida comunitaria¹². Por este motivo, los propios habitantes castellanos de las ciudades debían incorporarse y adaptarse a un modo de vida urbano que, de manera simultánea, debían transmitir y compartir con los indígenas.

En este capítulo se planteará un modelo de relación entre los castellanos y los indígenas en el Nuevo Mundo a través de las interacciones basadas en los principios de gobierno y organización política urbana. Con ello se buscará poner el foco en la importancia de la existencia de ciudades como argumento principal de justificación jurídica y ética de la ocupación por parte de los castellanos de Castilla del Oro. La forja de una *civitas* en la que tuvieran cabida tanto los castellanos como los indígenas resultará fundamental para comprender las formas en las que se trató de llevar a cabo la relación entre ambas culturas. Por ello, se realizará un ejercicio de definición –y redefinición– conceptual a través de la práctica que permita comprender la creación en Castilla del Oro de una cultura política propia en un contexto de relaciones multiculturales a través de la adaptación transatlántica de conceptos políticos de honda tradición europea. Para comenzar, se elaborará una definición de policía adaptada al Nuevo Mundo, comenzando por su significado original clásico para concluir con su redefinición, tomada de la práctica, por autores enraizados en Indias. A partir de esta definición, se expondrán las formas en las que se produjo la integración dentro de las ciudades de los castellanos y su «toma de amor con la tierra», proceso de identificación y de construcción de lazos de vecindad más allá de aquellos basados en los conceptos peninsulares de familia y propiedad, que era paso necesario para construir un entorno de policía urbana en el que el fomento de relaciones con los indígenas resultaría fundamental. A continuación,

¹¹ Sobre la definición de *urbs* y *civitas* como elementos clave en la configuración política castellana Richard KAGAN (1998), pp. 75-108.

¹² En un artículo clásico, Richard Kagan argumentaba que las ciudades del Nuevo Mundo sustituían las murallas físicas por otras «espirituales», que encapsulaban dentro de ellas la idea de «policía urbana» y cancelaría la posibilidad de una insurrección indígena, ver Richard KAGAN (1997), pp. 51-86, esp. p. 69.

la identificación de los castellanos con las nuevas ciudades se pondrá en relación con las fórmulas adoptadas para promover el contacto intercultural, comenzando con los intercambios comerciales y la retórica simbólica envuelta en ellos, basada en los principios de la conversación, a partir de los primeros contactos. Por último, se presentarán casos prácticos para analizar la labor de los intermediarios culturales. En especial se tendrá en cuenta la participación de los «indios ladinos» y su importancia más allá de sus labores de traductores de lenguas, y sus formas de actuación para establecer y alimentar un flujo de confianza, atendiendo en particular a los fenómenos de entendimiento y desentendimiento para lograr una interacción sólida y sostenida en el tiempo.

1. *Policía tranatlántica.*

En las definiciones de ciudad de la tradición aristotélica, esta se define como un espacio transformador en el que sus habitantes se convertirían en hombres virtuosos sin apenas esfuerzo, sólo por el hecho de habitar en la ciudad. En la teoría, la ciudad se proponía como un escenario dinámico de creación de identidades y entorno de virtudes que, llevado al escenario transatlántico, ningún habitante, ya fuera indígena o castellano, querría abandonar. La dimensión del fenómeno urbano en Indias no se limitaba, por tanto, a la necesidad de una organización social y laboral ordenada, sino que las ciudades se planteaban como los centros de relación fundamentales en los que se llevaría a cabo la conversión de los indígenas a través de la práctica de los conceptos de policía y conversación, que aparecían constantemente entrelazados en los textos. La lógica que imponía la fundación de ciudades era la de lograr una comunidad urbana que se «expandiese» y permitiese las relaciones interculturales definiendo un estilo de vida asociado a la vida urbana que se encapsulaba en el concepto de *civitas*. Está, más allá de su presencia física, en forma de *urbs*, debía servir para crear un entorno de vida virtuosa al que los indígenas pudieran tener acceso y «contagiarse» de la policía a través de una conversación continuada con los castellanos. Si los castellanos no eran fijados a la tierra «sería un gran deservicio de Dios que no habría cristianos en ellas y los indios no lo serán»¹³. El principal objetivo de los castellanos en el Nuevo Mundo, según las bulas de Alejandro VI, era lograr la conversión de los indígenas por lo que, considerando el estado de opinión que consideraba a la ciudad emanadora de toda virtud y única vía para alcanzar la felicidad, no es extraño que esa conversión se previese a través de la incorporación de los indígenas a las poblaciones y su incorporación a un estilo de vida definido a través de

¹³ Parecer de los frailes jerónimos sobre la población y buen gobierno de las Indias, AGI, Patronato 173, N. 2, R. 2.

la policía¹⁴. Por este motivo, los esfuerzos deberían ir dirigidos a mantener en las ciudades a los castellanos que, como fruto de una conversación constante, harían que los indígenas fueran adquiriendo los rudimentos de una «vida política».

Con base en estos principios de convivencia urbana, las Leyes de Burgos de 1512 definieron la modalidad de relaciones con los indígenas, que no debía basarse en la coacción sino en diversas variedades del «amor». La conversión o evangelización se llevó a cabo en el plano local, desarrollando relaciones de confianza entre los vecinos de una población y los cacicazgos vecinos, a través de diversas estrategias que, en todo caso, estaban muy vinculadas a los modelos de sociabilidad urbana tradicional. La policía era un concepto plenamente asociado a la vida urbana y que, en su propio origen semántico, incorporaba el término «polis». De esa manera, cuando en las normas, leyes y teorías respecto a la forma en la que los indígenas debían ser atraídos a una forma de vida «civilizada», a lo que se estaba aludiendo era a que debían ser incorporados a una vida urbana. Al mismo tiempo que los castellanos se asentaban y, en cierto sentido, se convertían a la buena policía debería comenzar la conversión de los indígenas. El concepto de policía, que tenía un carácter polisémico en la Europa moderna, adquirió nuevos matices que perfilaron una nueva definición al ser aplicado a las relaciones entre europeos e indígenas en el Nuevo Mundo¹⁵.

En los contextos urbanos, se trataba de extender la policía a través de la conversación. La conversión, en estos ámbitos, no se consideraba como una empresa exclusivamente religiosa y, por lo tanto, no sólo los religiosos deberían tomar parte en la misma; más bien se trataría de una conversión integral, que implicaba el concurso de toda la sociedad castellana en conjunto, religiosa y laica. No era, por tanto, una conversión solamente a la fe católica sino también a la vida civilizada encapsulada en los planteamientos de la policía y cuya principal vía de transmisión no sería una enseñanza reglada sino un ejemplo cotidiano por lo que el contacto debía ser constante y entendido a largo plazo¹⁶. Para llevar a cabo esta labor, los castellanos, que acababan de llegar a la tierra, a unas poblaciones recién fundadas,

¹⁴ En la bula *Inter cetera* se lee expresamente que la concesión espontánea de las «islas lejanas y desconocidas y no descubiertas hasta ahora por otros, para *reducir* a los residentes y habitantes de ellas al culto de nuestro redentor y a la profesión de la fe católica», Alfonso GARCÍA-GALLO (1973), p. 639.

¹⁵ La policía urbana tradicional ha sido asociada a tempranos procesos estatales de disciplinamiento social a través de códigos normativos locales, que transcendían a espacios supralocales, Robert W. SCRIBNER (1987); Pierangelo SCHIERA (1987), pp. 363-442; Gerhard OESTREICH (1982), pp. 155-165; Karl HÄRTER (1994), pp. 635-658; para el ámbito castellano ver Tomás MANTECÓN MOVELLÁN (2010), pp. 263-295; Tomás MANTECÓN MOVELLÁN (2015), pp. 237-267; Tomás MANTECÓN MOVELLÁN y Marina TORRES ARCE (2018), pp. 1-10; sobre las ordenanzas municipales en las villas guipuzcoanas destinadas a regular el buen gobierno, ver Susana TRUCHUELO (1997), pp. 26-31.

¹⁶ Thomas ABERCROMBIE (1998), p. 248 y ss.

deberían también ellos ser de alguna manera disciplinados o *convertidos* para poder *transmitir* esa civilidad a los indígenas¹⁷.

Durante las primeras décadas tras la llegada de Colón se escribieron y publicaron en parte descripciones de los indígenas que contribuyeron a definir una imagen que justificaría la necesidad (y la posibilidad o imposibilidad) de «convertirlos». Sin atender, en la mayoría de los casos, a las condiciones concretas de cada territorio y de cada grupo nativo, las descripciones se dividieron entre las que destacaban los rasgos positivos de los indígenas y aquellas que enfatizaban su falta de policía. Quizá la más cruda de las descripciones de los indígenas de Tierra Firme fue la que realizó el fraile dominico Tomás Ortiz ante el Consejo de Indias hacia 1520 y que fue recogida por Pedro Mártir de Anglería. No se ahorró el fraile ningún atributo negativo y mezclaba aspectos morales y políticos, elaborando un catálogo completo del aparente desorden que los castellanos deberían paliar al convertirlos: «comen carne humana» –comenzaba el informe– «son sodométicos [...] andan desnudos [...] no tienen amor ni vergüenza [...] no guardan verdad» y, por supuesto, «son amigos de novedades». Otros de los *atributos* que Ortiz asignó a los indígenas incluían la embriaguez, la bestialidad y el vicio, «son traidores, crueles y vengativos» y muy enemigos de religión, perezosos y ladrones, así como infieles, «hechiceros y augureros, cobardes y sucios». La conclusión que alcanzó Tomás Ortiz fue que «nunca crió Dios tan cocida gente en vicio y bestialidades, sin mixtura alguna de bondad o policía»¹⁸.

Este tipo de descripciones negativas de los indígenas –más adelante recogidas en obras de síntesis como la de José de Acosta¹⁹ o López de Gómara²⁰ o en escritos de autores

¹⁷ Para Tamar Herzog la política de repoblación «visait à assurer la ‘conversion des personnes’, n’était pas seulement dirigée contre la population native» y propone «repenser la relation entre *colonisation interne* –dirigée contre la population de la Métropole– et *colonisation externe* –mise en œuvre outre-mer», proponiendo un diálogo historiográfico que permita percibir con mayor profundidad la complejidad de la sociedad castellana a ambos lados del océano, ver Tamar HERZOG (2007), pp. 507-538, esp. 511 (mi cursiva); una interpretación que vincula «policía» con propiedad privada en Karen GRAUBART (2018b). En el plano espiritual, Francesca Cantú ha comentado que la experiencia de la evangelización a su vez convirtió y evangelizó a muchos de los evangelizadores, en Francesca CANTÚ (2007), p. 17. Para esta autora, las dudas de los franciscanos en particular sobre la capacidad de los castellanos para transmitir el mensaje religioso estarían en la base de su defensa de la separación de indígenas y castellanos en dos repúblicas separadas, *ibid.*, p. 147. Fernández-Armesto y James Muldoon han manejado también el concepto «internal colonization» en el periodo medieval con un matiz de tipo económico y demográfico, ver James MULDOON y Felipe FERNÁNDEZ-ARMESTO (2008).

¹⁸ Pedro MÁRTIR (1989), dec. VII, cap. IV.

¹⁹ En el proemio de su *De procuranda Indorum Salute*, José de Acosta crearía una tipología de diversos grupos entre los cuales destacaba que la ausencia de ciudades y de una «congregación de comunidad perfecta» a través de las cuales buscar «la utilidad, pro y bien común de la cosa pública» era la que provocaba que los indígenas vivieran «salvajes y derramados y miserables y bestiales».

²⁰ En su *Historia* advertía que «no tenían letras, ni moneda, ni bestias de carga, cosas principalísimas para la policía y vivienda del hombre».

desconocidos y menos citados²¹- tendrían el efecto de justificar la labor de los castellanos, condicionando la legislación y, en particular, respecto a la necesidad de fundar ciudades. Todas estas descripciones y muchas otras construyeron, por contraposición, una definición propia de policía en el Nuevo Mundo, convirtiendo el concepto cívico aristotélico en una herramienta clave para justificar la fundación y desarrollo de ciudades en esos territorios en las cuales convertir a los indígenas.

Las dudas sobre la «humanidad» de los indios estuvieron en la base de los intentos de actuación desde la Corte y ya existían cuando en 1513, tras la Junta de Burgos provocada por las quejas de los dominicos de la Española, se planeó la gran armada de Pedrarias Dávila. De hecho, la propia expedición comandada por Dávila hubo de esperar a que se resolviesen las dudas de conciencia del monarca para zarpar rumbo a Castilla del Oro. Tal y como narraría el bachiller Enciso años más tarde: «después en el año de 13, estando Pedrarias Dávila e yo para ir a la provincia del Darién con una armada, los frailes dominicos se pusieron otra vez en estorbarlo, diciendo que el Rey no podía enviar a los conquistar»²². La Junta de Burgos estuvo impregnada por el ambiente de dudas respecto a los derechos de los castellanos sobre las tierras que habitaban los indios y, fruto de una dicotomía entre una imagen global de los indios positiva o negativa, las «soluciones» que se arbitraron fueron también dicotómicas²³.

Por un lado, tras la crisis levantada por Antonio Montesinos, se articuló la solución del Requerimiento que partía de que una inferioridad intrínseca de los indígenas otorgaba licencia para esclavizarlos según la práctica de guerra peninsular, si bien buscaba esquivar, apelando a la legalidad, las críticas por la injusticia de las acciones castellanas²⁴. Por otro lado, las Leyes de Burgos que surgieron de esa junta incluían algunas cláusulas que abogaban por otro modelo de conversión de los indígenas alejado, en teoría, de la coerción y que enfatizaban el contacto continuo entre castellanos e indígenas como la única vía posible para

²¹ El anónimo autor de un *Tratado de la guerra de los Chichimecas* destacaba la desnudez de este pueblo indígena y la necesidad de que las mujeres aprendiesen a coser para poder elaborar ropas y también comidas pan y tortillas para «desusarlos de sus comidas silvestres porque sin duda estas cosas son las que los afieran y hacen tan brutos», además era necesario «enseñarles a mantener justicia y castigar delitos y que ellos entre sí mismos los hagan», BAV, *Barb. Lat.* 3605, f. 97r.

²² Memorial que dio el bachiller Enciso de lo ejecutado por él en defensa de los Reales derechos, CODOIN, t. I, pp. 441-450, la cita en p. 442; por tanto, hasta que la cuestión no estuviese resuelta y la conciencia real acallada, la armada no tenía el permiso para zarpar, lo que sucedió finalmente el 12 de abril de 1514.

²³ Lewis HANKE (1949), pp. 36-39; David ABULAFIA (2008), pp. 286-305.

²⁴ Su uso durante la expedición de Espinosa, descrita más arriba, no estuvo exento de críticas por parte de los frailes jerónimos, que enviaron una carta el 15 de junio de 1517 al obispo Quevedo y al propio Pedrarias para que investigasen la labor de Espinosa en la que le acusaban tanto de esclavizar a los indígenas como de tomar más oro del rescate del que le correspondía. ADA, caja 170, n. 14, f. 1. Impresa en Bethany ARAM (2008), pp. 337-338.

su conversión. Las Leyes de Burgos no ponían realmente en cuestión la licitud de la conquista ni la justicia de la presencia de los castellanos, sino que aspiraban a regular el sistema de trabajo de los indígenas. El problema radicaba en que, tras trabajar y ser doctrinados «se vuelven a sus estancias» y olvidan todo lo que habían aprendido «y tornan a su acostumbrada uiciosidad y vicios». Por lo tanto, entre las medidas de reforma de la relación entre castellanos e indígenas, se promovía que «lo más provechoso que de presente se podría proveer sería mandar mudar las estancias de las caciques e indios cerca de los lugares e pueblos de los españoles, por muchas consideraciones y así porque con la *conversación* continua que con ellos tendrán» se facilitarían tanto «la salvación de sus ánimas como el provecho e utilidad de sus personas». Cuando castellanos e indios compartiesen ya un mismo espacio, éstos serían «trabados e industriados y mirados como es razón»²⁵. Las instrucciones de 1513 enfatizaron, en la línea de lo previsto en las Leyes de Burgos, que los indios debían ser atraídos a la fe católica «con amor y voluntad y amistad y buen tratamiento [...] y se excuse de forzarlos y maltratarlos»²⁶. Al nombrar a Pedrarias Dávila como gobernador, la Corona le instaba a que, para apartar a los indígenas de sus «malas costumbres y vicios» elaborase unas ordenanzas «por do se rijan e gobiernen en toda parte que fuere menester, para que vivan como buenos cristianos, e en toda paz e sosiego e mucha policía»²⁷.

Derivado del mismo ambiente que movió a la elaboración de las Leyes de Burgos, se recogieron pocos años después en La Española una serie de opiniones respecto a si se debía continuar con el sistema de encomienda, debido a la gran mortandad de indígenas. La idea fundamental entre los consultados se resumía en que «ellos [los indios] no pueden por alguna vía venir a ser cristianos sino por la comunicación de los cristianos españoles que allí residen y esta comunicación no la tendrán estando en completa libertad ni apartados por sí en pueblos»²⁸. Por tanto, «por que los dichos indios tomen mejor la manera de vivir políticamente e proveerse mejor de las cosas necesarias lo harán mejor teniendo conversación de españoles viéndoles como ellos lo hacen»²⁹. Con el ejemplo de los

²⁵ Alfonso GARCÍA-GALLO (1973), p. 783; Carmen MENA (1989), pp. 283-355; ver también Horst PIETSCHMANN (1992), pp. 489-510.

²⁶ Instrucción a Pedrarias Dávila... CODOIN, t. 39, p. 289.

²⁷ Real Cédula nombrando a Pedrarias Dávila gobernador y capitán general de Castilla del Oro y Darién, AGI, Patronato 193, R. 2. En la misma cédula se hacía referencia a con qué métodos debería llevarse a cabo ese deseo y es que «ha seido menester proveer de algún número de gente que vaya a poblar en las dichas tierras para que con la doctrina de los eclesiásticos e con la *conversación* de los otros cristianos ellos más presto se conviertan a nuestra santa fe».

²⁸ Parecer de los frailes jerónimos sobre la población y buen gobierno de las Indias, AGI, Patronato 173, N. 2, R. 2.

²⁹ Real cédula dirigida a Antonio de la Gama y Rodrigo de Figueroa, 12 de julio de 1520, AGI, Patronato 275, R. 4.

castellanos y asentados no más lejos de media legua de los pueblos de los castellanos los indios podrían, entre otras cosas, «venir al pueblo a misa todos los domingos e fiestas de holgar»³⁰. Se puede observar, pues, como en la teoría la conversión de los indígenas estaba indefectiblemente unida a la buena policía de los castellanos, que tendrían que guiarlos no sólo con las enseñanzas directas sino también con el ejemplo cotidiano.

El nombramiento como gobernador y las instrucciones que se entregaron a Pedrarias resultan piezas claves para entender de qué manera aspiraba la Corona a convertir a los indígenas de Castilla del Oro. Las medidas propuestas en las Leyes de Burgos respecto a que había que «hazer sus estancias juntos con las de los españoles», eran aún más necesarias en Tierra Firme que en las islas por el riesgo de que, teniendo más territorio por delante, pudieran huir, por lo que convenía tenerlos si cabe más asentados. Según las mismas instrucciones, «los yndios son mal aplicados al trabajo, e han acostumbrado siempre a folgar». Si en la Isla Española se iban huyendo a los montes para no trabajar, se advertía, «es de creer que lo harán muy mejor los de allá [Tierra Firme], pues se pueden ir la tierra adelante». Es más, al considerar las críticas del repartimiento en La Española, las instrucciones de 1513 indicaban que sería preferible relacionarse con los nativos «por la vía de paz e de concierto para que los de la tierra puedan rescibir dellos [de los castellanos] muy buen ejemplo»³¹. Más allá de la legislación que se pretendía implementar desde la Corte, los procesos que llevaron a la construcción de comunidades políticas integradas tuvieron diversas fases y estuvieron sujetos a la adaptación de estrategias muy variadas que contaban, en primer lugar, con el asentamiento y creación de lazos sociales entre los castellanos para, casi de manera simultánea, incorporar a ese «cuerpo» también a los indígenas.

El acta de fundación de Natá hacía referencia a que la recién fundada ciudad debía servir principalmente para que los indios fuesen convertidos tanto a la religión católica como a «todas las buenas y virtuosas costumbres y policía y buen vivir». Tras la fundación de Acla, Pedrarias Dávila advertía que los indígenas muy pronto se apaciguarían y comenzarían a servir a los castellanos, viendo que, simplemente, «no les cumple otra cosa»³². La ciudad, por lo tanto, tendría la capacidad de transformar a los individuos, tanto a los castellanos como a los indígenas. La transformación en los indígenas que preveía la convivencia en ciudades, según la teoría, debería tener efecto de manera casi automática, sin que apenas mediase más

³⁰ Acuerdo celebrado en la ciudad de Panamá, sobre el tratamiento que se debe hacer a los indios, 1533, AGI, Patronato 231, N. 5, R. 2.

³¹ Instrucción a Pedrarias Dávila... CODOIN, t. 39, p. 289; Carmen MENA (1983), pp. 3-17.

³² Carta de Alonso de la Puente y Diego Márquez a Su Majestad, 28 de enero de 1516, AGI, Patronato, 26, R. 8, ff. 1r-2v.

transmisión que la relación cotidiana entre castellanos e indígenas, si bien la práctica se encargó de demostrar lo contrario en repetidas ocasiones.

Todos estos principios que habían surgido de la práctica cotidiana y del intento de aplicación de leyes genéricas adaptadas de conceptos clásicos, encontraron una sistematización en la obra del primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga. La labor de Quiroga fijó los términos precisos de la definición de policía que se venía fraguando en el Nuevo Mundo desde los primeros intentos de Colón por relacionarse con los indígenas en Guanahaní. En su planteamiento, Quiroga renegaba de las descripciones como las emitidas por Tomás Ortiz que, para él, surgían o bien del odio o bien de la ignorancia, pues el obispo no tenía una consideración homogénea de los indígenas y, además, negaba que fueran por naturaleza de la manera en que eran descritos. Su acercamiento se basaba en que la manera de convertir consistía en «darles leyes y reglas y ordenanzas en que vivan en buena y católica policía y conversación, con que se conviertan y conserven y se hagan bastantes y suficientes con buena industria para sí y para todos, y vivan como católicos cristianos y no perezcan y se conserven y sean preservados y dejen de ser gente bárbara, tirana, ruda y salvaje»³³.

Los problemas de los indígenas no provendrían, en fin, de su propia naturaleza, sino de la carencia de la policía que, una vez adquirida, los redimiría y cambiaría su forma de vida por completo. La ciudad, por lo tanto, según estos presupuestos convertiría a los indios por sí misma y de una manera casi natural, mediante la comunicación cotidiana y un tratamiento basado en el amor y en la transmisión de una forma de vida virtuosa. De acuerdo con estos planteamientos, los indígenas no sólo deberían ser objeto de una conversión religiosa sino también civil y las ciudades serían, obviamente, la piedra angular de todo este proceso. El mismo Vasco de Quiroga resumiría las bondades de este modelo de aculturación, que él llamaría «policía mixta, que en todo ha de poner orden y concierto, así en lo espiritual como en lo temporal». La conversión sólo era posible a través de la «buena y cristiana conversación» de los indios con los castellanos y no «viviendo derramados» en los montes. Era, en consecuencia, gracias al «recogimiento en ciudades grandes que estén ordenadas y complidas de todo lo necesario, en buena y católica policía», para asegurar tanto la «conservación, buen tratamiento y ejecución de las ordenanzas de justicia». Para Quiroga, pues, aquellos indios

³³ Vasco DE QUIROGA (2002), p. 115. De manera similar lo expresaba Francisco de Vitoria en su *relectio Sobre el poder civil*: «era necesario, en verdad, que los hombres no anduvieran errantes vagando por los desiertos, como las fieras sino que, viviendo en sociedad, se prestarán ayuda mutua», FRANCISCO DE VITORIA (2007); Bartolomé de las Casas consideraba que aquellos indios que vivían en ciudades daban señal de «gran razón» y de vivir en «ordenada policía», mientras que los que no lo hacían aún tenían, sin embargo, la capacidad para poder «fácilmente ser reducidos a toda orden y social conversación y vida doméstica y política», Bartolomé de LAS CASAS (1993), lib. 3, cap. 151.

que no vivían en policía, necesariamente recogidos en ciudades, «nunca tuvieron ni tienen ley ni ordenanza ni costumbre buena alguna ni ciencias donde lo puedan saber ni deprender, sino que todo está puesto en ignorancia y bestialidad y corrupción de costumbres»³⁴. No era sólo, por lo tanto, un proceso religioso, sino que los indígenas deberían someterse a un proceso de «civilización» o, incluso, de «domesticación», englobados en el más extenso concepto de policía³⁵. Para llevar a cabo esa conversión global, los predicadores debían primero reducir a los indígenas «a vivir en poblado con pulicía y enseñándolos el perfecto oro de la razón y después a ser cristianos», de manera que no sólo aprendieran «lo espiritual sino también lo político»³⁶.

Con el fin de poder llevar a cabo esa labor, los castellanos debían, sin embargo, asentarse de manera permanente y sólida en la tierra, profundizando en sus raíces y generando los entornos de vecindad que pudieran transmitir, como se suponía su deber, a los indígenas en los contextos urbanos.

2. *Tomar amor con la tierra.*

Fray Juan de Zumárraga, el obispo de Nueva España, escribía en 1543 una carta al Emperador para informarle de la importancia de la presencia y permanencia de los castellanos en México: «muchos años ha que se tiene por supuesto la mucha neçesidad que esta tierra tiene de los españoles y es tanta quanta en el cuerpo humano la carne tiene de los huesos para ser sustentada». Los españoles, continuaba el prelado, «nos paresçe ser los huesos desta tierra [...] y los indios la carne flaca. Entre estos se requiere gran atadura y vínculo de amor [...] y bienaventurado será el que amansare estas dos naciones en este vínculo de amor» para bien de ambos, tanto en lo temporal como en lo espiritual. Para que los huesos no «despedaçen su propia carne y la carne no se aparte de los huesos», sería necesario que los españoles tengan «reposo y arraigamiento perpetuo» en la tierra para que ésta «les sea madre y ellos hijos que la amen, honren y defiendan». El alma que daría vida a ese cuerpo que había de formar juntos los indios y los castellanos habría de ser la fe, que «formada y

³⁴ Vasco DE QUIROGA (2002) pp. 85-105.

³⁵ J. Lechner relaciona, de manera un tanto superficial, como más adelante se comprobará, el término policía con el moderno de «cultura», en Juan LECHNER (1981), pp. 395-409; Con el término «civilidad» lo relaciona ELLIOTT en *op. cit.* (2006), p. 116 y ss. Sobre el proceso de «domesticación» de las Indias Michael T. RYAN (1981), pp. 519-538.

³⁶ Relación acerca del presente feliz estado de las Indias occidentales en la apostólica administración de los sacramentos y conversión de los indios por los religiosos de nuestro Seráfico Padre San Francisco, hasta el año de 1635. BAV, Barb. Lat. 3560, f. 191v y 210r.

inflamada de caridad estuviera en los unos y en los otros y los hiziere una mesma cosa»³⁷. Según el prelado de México, el cuerpo debía crecer y hacerse fuerte a través del amor que resultaría de la colaboración y apoyo mutuo de sus miembros.

Si los castellanos conseguían echar raíces en el Nuevo Mundo, eso repercutiría en la conversión de los indígenas a través de la convivencia, por lo que la principal preocupación de la Corona en los primeros años de la presencia de los castellanos en Castilla del Oro fue evitar «la despoblación» castellana, así como la desaparición de la indígena. Los nuevos pobladores de Castilla del Oro tendrían que renunciar a sus tierras y sus *patrias* en el viejo mundo para asentarse y tomar amor a unas nuevas, construyendo una nueva identificación que incluía la relación con los naturales. De esta manera, si los castellanos conseguían asentarse en la tierra de manera permanente a través de la fundación y mantenimiento de ciudades, los indígenas podrían ser convertidos, no sólo al cristianismo, sino a todo un estilo de vida y, juntos, podrían formar ese cuerpo de carne y huesos que tanto deseaba el obispo de México.

El *amor* –del que derivaban conceptos como la amistad, la solidaridad o la fraternidad³⁸– era el sustento de las relaciones familiares que, de acuerdo con el planteamiento social aristotélico, se extrapolaba a las formaciones políticas, comenzando por supuesto por la *civitas*³⁹. El crecimiento de las familias que ya no pueden vivir en la misma casa y van creando barrios era definido por la filosofía política como «engendramiento de las cosas públicas y el ayuntamiento de la sangre e la bien querencia ata los hombres *con amorío*»⁴⁰. El amor formaba parte de la panoplia de elementos que mantenía unido el sistema político del Antiguo Régimen, pues apuntalaba la fidelidad al rey y, al mismo tiempo, unificaba a los miembros de la comunidad en la búsqueda y defensa del bien común⁴¹. Para Alonso del Castrillo, quien escribió el *Tractado de la República* en 1520, el «entrañable amor de la

³⁷ Carta de fray Juan de Zumárraga, obispo de México al emperador, 4 de octubre de 1543, AHN, Diversos-colecciones, leg. 22, doc. 45.

³⁸ El amor como motor de las relaciones políticas y de «la cohesión interna de las comunidades» en el antiguo régimen fue puesto de relevancia por Pedro Cardim en su tesis doctoral, Pedro CARDIM (2000). En su intento por aunar tradición republicana y comunal, Antony Black habla de la presencia en esta última tendencia política de «fraternity and friendship, as social ideas on which citizens ought to model their relationships with one another» and Antony BLACK (1996), pp. 99-112, esp. p. 102; la construcción del «patriotismo» a través de las relaciones cotidianas entre personas en Florida durante el periodo revolucionario en Cameron B. STRANG (2018).

³⁹ Maurizio Viroli comenta la interpretación de Leonardo Bruni sobre el contenido del concepto de *civitas*, de manera que «in una vera città i rapporti fra i cittadini sono ispirati all'amicizia e alla solidarietà; quando, invece, l'invidia e l'odio prendono il posto dell'amicizia, la città si dissolve in una moltitudine di stranieri o di nemici», en Maurizio VIROLI (1994), p. 54.

⁴⁰ Cicerón en romance, BNE Mss 7815, f. 52v.

⁴¹ Otto BRUNNER (1983) p. 31 y ss; Xavier GIL PUJOL (2009a), pp. 83-106; Eva BOTELLA (2012), pp. 580-604;

República» era engendrado por «la naturaleza de la tierra, las haciendas, las moradas, los hijos y las mujeres». Aquellos a los que les faltaba ese amor se convertirían en «amigos de novedades» y, por ello, estarían inclinados a no permanecer en ningún lado y con su actitud provocarían «la perdición de los hombres y de los pueblos»⁴². Los nuevos vecinos de las poblaciones de Castilla del Oro tenían que aprender a amar a su tierra, lograr identificarse con las nuevas ciudades, construyendo con ello la propia identidad colectiva para poder llevar a cabo la labor que les correspondía en nombre de la Corona y en el suyo propio. En resumen, los individuos recién llegados a Castilla del Oro deberían llevar a cabo un proceso de naturalización y construir una nueva identidad local a través de todas las vías posibles y con la familia extensa, la propiedad y la «virtud» como piedras angulares.

La organización social de corte aristotélico se basaba en los planteamientos de *oekonomía* –la organización de la casa– entendida esta en un sentido que a su vez definía los vínculos políticos y sociales⁴³. La *casa* no era, por lo tanto, un ámbito estrictamente privado, sino que configuraba el espacio público y determinaba la organización social⁴⁴. El esfuerzo en busca de la agregación de los habitantes en ciudades y el empeño por juntar a las familias respondía a la aplicación estricta del modelo teórico tradicional de matriz republicana. La identificación de los individuos con las poblaciones provenía de su identificación con sus familias y con la creación de unos vínculos basados principalmente en la cohabitación y la construcción de linajes familiares. «Mientras esta estabilidad no oviere» –escribía fray Juan de Zumárraga en 1543– «ni estovieren arraigados y fundados como naturales en ella, avrá menos provecho en lo espiritual y lo temporal y teniendo ella posesiones y propiedades que les duela dexar y perder, y viniendo con contentamiento por lo perder lo suyo defiendan lo demás que es el señorío de VM y bien común de la república»⁴⁵.

La conformación de la república se sustentaría, por lo tanto, sobre los mismos cimientos doctrinales que la formación de las familias. En cierto modo, las bases de la conformación de la república eran la formación de las familias, como espacio de creación de vínculos personales, que determinaban los vínculos sociales⁴⁶. Con estos presupuestos, la

⁴² Alonso DEL CASTRILLO (1521), p. 8; La interpretación obra de Castrillo ha estado marcada por su relación con la revuelta de los Comuneros y su posible labor como «ideólogo» de la misma, si bien su perspectiva invitaba a un planteamiento teórico, ver Alexandra MERLE (2013), pp. 11-25.

⁴³ Otto BRUNNER (2010), pp. 117-136; Danielle FRIGO (1985); Francisco ARANDA (1997), pp. 177-186.

⁴⁴ Bartolomé CLAVERO (1989), pp. 583-605.

⁴⁵ Carta de fray Juan de Zumárraga, obispo de México al emperador, 4 de octubre de 1543, AHN, Diversos-Colecciones, leg. 22, doc. 45.

⁴⁶ Bartolomé CLAVERO (1990), p. 160; Angela DE BENEDICTIS (2001), pp. 335-337; ambos autores ofrecen una visión de la construcción de la sociedad de Antiguo Régimen a través de la agregación de familias, si bien Clavero enfatiza las raíces religiosas de la composición antropológica de la sociedad del Antiguo Régimen y De Benedictis sitúa la formación de la sociedad en la familia como raíz de ejercicio de la justicia.

pertenencia a una comunidad local –la vecindad– adquiriría una interpretación que no se basaba tanto en la planificación y el impulso impuesto desde arriba, a través de concesiones de privilegios –como las propiedades o las exenciones de impuestos– o cartas de naturaleza, sino en el cultivo sistemático de las relaciones interpersonales en relación con un contexto urbano, de manera que la vecindad se convertía en una «situación» más que en un «estatus»⁴⁷. Los vínculos que unían estas relaciones vecinales no eran sólo, por lo tanto, jurídicos, sino que eran también de índole moral y aún religiosa, pegados a la defensa de los intereses familiares encapsulados en la *oeconómica*, lo cual limitaba de manera evidente la interpretación o implementación de un «plan estatal» para definir la sociedad que se estableció en el Nuevo Mundo y, en concreto, en Castilla del Oro⁴⁸. De esta manera, la propia comunidad regularía la entrada y salida de sus miembros. En palabras de Bartolo de Sassoferrato «*civitas sibi facia civem*», y no lo haría exclusivamente a través de la defensa de los derechos, sino por la promoción de las virtudes⁴⁹. La comunidad regulaba a sus miembros y estos tendrían que responder ante la misma, de manera que la virtud pasaría a ser un «hecho político», que se definía a través de la rectitud y bondad moral; la virtud individual sería parte de la virtud colectiva, con la posibilidad de que la propia comunidad regulase estos comportamientos con su capacidad «adiestradora»⁵⁰.

Desde el inicio de la población de Castilla del Oro, la Corona había promovido la unificación de familias, a través de ventajas fiscales y de pagos de los pasajes para transportar allí a las mujeres de los castellanos y también a través de los matrimonios entre castellanos e indígenas. El bachiller Corral, como procurador, había destacado en su informe, hacia 1524, la conveniencia de que los castellanos se casasen con mujeres indias «para pacificarse mucho más la tierra y conversarse con más confianza y amor»⁵¹. En la misma fecha, probablemente a sugerencia del propio procurador Corral, una cédula dirigida tanto al obispo como al gobernador había promovido «los casamientos entre indígenas y castellanos»⁵². Todo bajo la

⁴⁷ Tamar HERZOG (2003), p. 288; Simona CERUTTI, Robert DESCIMON y Maarten PARK (1995), pp. 281-286; Simona CERUTTI (2007), pp. 255-273. Cerutti concede mayor importancia que Herzog a los factores institucionales en la definición de vecindad, restando peso a la concepción comunitaria que propone esta última; sobre la creciente consideración de las categorías identitarias como construcciones personales, ver Dagmar FREIST (2017).

⁴⁸ Romina ZAMORA (2012), pp. 201-214; Michel BERTRAND (2009), pp. 217-236; para la crítica del concepto de estado moderno y su sustitución por las relaciones sociales *oeconómicas* ver Bartolomé CLAVERO (1989) y, en general, Bartolomé CLAVERO (1981), pp. 43-57.

⁴⁹ Julius KIRSHNER (1973), pp. 694-713, esp. pp. 698-699; Annabel BRETT (2003), pp. 97-114; Susana TRUCHUELO (2013).

⁵⁰ Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO (1997), pp. 103-127; John POCOCK (2008), pp. 125 y 163; Pierre MONNET, (2010), pp. 89-106, esp. p. 97 y 100.

⁵¹ Parecer..., AGI, Patronato 193, R. 13, f. 160v.

⁵² Real Cédula al obispo de Santa María del Antigua del Darién y al gobernador, 19 de mayo de 1525, AGI, Panamá 233, L. 2, f. 45v. Así lo recordaría también el propio Julián Gutiérrez, quien tenía muy presente que

premisa de que «los hombres casados son los más provechosos para la dicha tierra e que más miran e procuran el bien universal della como saben que han de residir e permanecer en ella»⁵³. El propio Corral se casó con una indígena, matrimonio que dio lugar, como se verá, a una serie de relaciones que reforzaron de manera decisiva los lazos interculturales. La estrategia seguida por Diego Corral también reforzaría la integración de este y sus descendientes en la estructura social pre-hispánica, a través de la toma de contacto y relación con las mujeres indígenas, que eran en muchos casos el sostén social tradicional. Según el planteamiento teórico aristotélico la ciudad –y, en consecuencia, el cuerpo político– no era sino un agregado natural de familias dispuestas a un mismo fin⁵⁴. En función de este principio, la formación y/o unificación de familias –y el reparto de solares por cuatro años– en el Nuevo Mundo tenía el objetivo de crear un tejido social tupido para el cual se pondrían en marcha diversas estrategias⁵⁵.

La generación de una identificación de los individuos con sus poblaciones fue, sin embargo, un proceso más largo y complejo, que no terminó con el reparto de solares o la agrupación de familias, sino que implicó una adaptación continua de los castellanos a sus nuevas situaciones, aplicando y adecuando a su vez los presupuestos teóricos acerca de la creación de vínculos afectivos con las nuevas tierras. Los habitantes que aspirasen a ser reconocidos como vecinos de una comunidad no debían sólo cumplir con los mínimos respecto a tener una familia y sostener propiedades, sino que, como veremos, deberían

«su magestad es servido e manda que a los que se casaren con mugeres naturales de la tierra les sean fechas mercedes como es notorio e se a fecho en todas las yndias», Pedimiento e proveymiento sobre lo del casamiento de la yndia que fue del licenciado Corral y encomienda de sus naborías a su marido Julián Gutiérrez, 30 de abril de 1533, AGI, Panamá 39, N. 3e, f. 21v.

⁵³ Real Cédula a los oficiales de Tierra Firme, 19 de mayo de 1525, AGI, Panamá 233, L. 2, f. 49v-50.

⁵⁴ «La comunidad del barrio e de la ciudad e del reino, ca todas estas se levantan de la comunidad de un hombre e de una hembra, así como de su cimiento por do ellas todas son naturales», Juan GARCÍA DE CASTROJERIZ (1495), f. 162v. La lógica de este principio recorre de forma transversal la tratadística política del Antiguo Régimen castellano y aún europeo que, con matices, avanzó hasta el siglo XVII, por ejemplo, en la obra de Campanella para quien al matrimonio seguirían «las clientelas y otras instituciones que producían y favorecían la unidad mutua» de la que se seguirían otras muchas ventajas a las que contribuían también «al amor mutuo y la unidad de religión», Tomás CAMPANELLA, cap. XVII; sobre la «conversión universal» en Campanella, John HEADLEY (1995), pp. 243-271.

⁵⁵ El empeño de la Corona por la reunión de las familias se demostraba, además de en las ventajas fiscales y en el pago de los «pasajes y matalotajes», también en la concesión de solares o en el repartimiento de indios, que se debería hacer sólo a los hombres casados en la tierra o con pretensión de hacerlo. En 1518 fray Bernardino de Manzanedo había advertido sobre la conveniencia de que se asignasen encomiendas a «casados juiciosos, y a solteros tales con obligación de casar dentro de cierto término» y también «a quien se establezca para siempre allá, y gran cautela en ello, no sea como en lo pasado, que en siendo ricos se vienen», RAH, Col. Muñoz, t. 57, ff. 229v-232v; por ejemplo, durante el juicio al que fue sometido Rodrigo de Alburquerque en 1515 por irregularidades en el repartimiento de Santo Domingo, entre otras cosas le acusaron de haber repartido indios a hombres solteros, Probanza hecha ante el Almirante de las Indias don Diego Colón a pedimento de Gaspar de Astudillo, AGI, Justicia 1003, N. 1, f. 5.

ensanchar el cuerpo social a través del mantenimiento de «casa poblada» e intentar promover una vida virtuosa.

Durante los primeros años de la conquista de Tierra Firme se emitieron al menos dos informes en los que se enfatizaban de manera explícita estos dos pilares –familia y propiedades- para intentar frenar el despoblamiento al que se estaban viendo sometidas las primeras poblaciones y que sus habitantes se comprometieran de una manera más intensa con la comunidad.

A finales de 1524 y ante el más que probable riesgo de despoblamiento de Santa María del Antigua, el bachiller Diego de Corral había propuesto una serie de medidas «con el deseo de que esta ciudad permanezca», pues si no lo hacía la Corona recibiría «deservicio y vosotros [los habitantes] mucho daño». El problema consistía en que los que llegaban nuevos a la tierra «no hacen edificios que duren ni procuran de criar, ni granjerías, ni otras cosas necesarias a la conservación de los pueblos». El reto estaba en conseguir que aquellos que acudiesen a las nuevas tierras tuviesen alicientes para estabilizarse en el territorio e ir «de asiento por vecinos». Para lograr esto se indicó que los habitantes sólo pudieran tener solares en propiedad en los lugares en los que fueran a residir y no en otros. Unida a esta, otra de las medidas propuestas por Corral para afianzar la población era que se pagase «el pasaje y matalotaje a cien vecinos casados que quisiesen ir de estos nuestros reinos a esas partes con sus mujeres e casas movidas», ya que era moneda corriente la idea de que los casados, ya fuera con mujeres castellanas o indígenas, eran mejores y más fiables pobladores y, para ello, «traen sus ganados y entienden en las otras granjerías y heredamientos que saben que faltando han de quedar a sus hijos y herederos y sucesores». Las personas así asentadas, por ser «háviles y antiguos son ya personas *fechos naturales* de la tierra, que han de permanecer y fenecer en ella» y por ese motivo «desean el bien della»⁵⁶. La labor del procurador Diego de Corral encontraría una reacción inmediata con una serie de cédulas, emitidas en mayo de 1525, cuyo objetivo era intentar tomar medidas para fijar a la tierra a los vecinos y que la ciudad de Santa María no se despoblase. Aunque sin éxito, este movimiento refleja, por un lado, la capacidad de los emisarios de las ciudades de Castilla del Oro para promover sus intereses en la Corte y, por otro, el carácter decisivo que las familias –también las familias mixtas, como se comprobará más adelante en este capítulo- tenían para la configuración del espacio político de los territorios del Nuevo Mundo.

⁵⁶ Real Cédula a los oficiales de Tierra Firme, 19 de mayo de 1525, AGI, Panamá 233, L. 2, ff. 49v-50.

Los oidores de la Audiencia de La Española, y pobladores con larga experiencia en Indias, Alonso Zuazo y Diego Espinosa, remitieron en 1528 un largo informe a la Corte sobre la despoblación de la isla en el que trazaban un panorama de los problemas que lo habían causado y las fórmulas –basadas en una naturalización efectiva de los individuos- para evitar que se volviese a producir en otros lugares. El problema, según ellos, era que los castellanos que acudían a las villas y ciudades no se asentaban como verdaderos pobladores sino más bien como «robadores de la tierra» que andaban, empleando una metáfora potente para los cristianos, «almogávares de población en población». En su informe prácticamente daban por perdida la población de La Española, a la luz del panorama que describían pues «todos los pueblos que hasta aquí estaban poblados se han consumido y otros deshechos y despoblado del todo», por lo que centraba sus esfuerzos en evitar que este problema se repitiese en los territorios de Nueva España y Tierra Firme⁵⁷. Para ello «se debía poner orden y manera como verdaderamente se pueblen y por manera que las poblaciones que se comenzasen permanezcan» y asegurar esa población implicaba una serie de medidas.

La primera de esas medidas se basaba en la tradición de aquellos antiguos pobladores, que «poblaron las tierras como fueron los troyanos o los romanos, vándalos, hunos, griegos y los de la tierra de promisión e aun los de nuestra España», que para fundar las poblaciones enviaban «gentes casados y con sus mujeres, hijos e deudos e parientes e con determinada voluntad de ellos e los que de ellos viniesen permaneciesen perpetuamente en tales tierras» y les hacían jurar que cumplirían como verdaderos pobladores de las tierras. La presencia de las familias forzaría a los pobladores a trabajar para sostenerse ellos y a sus parientes, de manera que «teniendo presente los dichos sus deudos y parientes e amigos e allegados muy en breve olvidaban su propio natural donde nacieron y *se hacían naturales* verdaderos de la nueva tierra que poblaban», afirmaban Zuazo y Espinosa. Aquellos que, en virtud del reparto de solares, la encomienda de indios o el repartimiento de tierras, adquiriesen esa naturaleza no podrían ir a residir a otro lugar «so pena que por holgazán y vagabundo fuese condenado en lo que tuviese y desterrado para España». De esta manera, según los autores, se sentaría un precedente y los que sólo fueran a rescatar botín se lo pensarían antes de embarcarse. La propiedad y la familia serían los pilares básicos que sustentarían la pertenencia a una

⁵⁷ Por ejemplo «la ciudad de la Concepción, que era la principal cosa de esta isla e por ello la pusieron cabeza de obispado y está en el comedio de la isla y hay en ella fortaleza e iglesia de piedra y un monasterio de San Francisco de piedra e casas de cabildo y otros 25 ó 30 edificios de piedra muy buenos. Solía haber en esta ciudad 200 vecinos de que los ciento eran de caballeros hijosdalgo y personas principales. No hay ahora 20 vecinos y todos los más están para desamparalla, viejos e sin ser casados e no tener hijos de do esperar perpetuidad», Relación formada por los oidores de Santo Domingo Espinosa y Zuazo a su Majestad, 30 de marzo de 1528, AGI, Patronato, 172, R. 35.

comunidad urbana, pues esos nuevos vecinos «sabiendo que han de fenecer en aquellas poblaciones tomarán mucho *amor a la tierra* y harán en ella edificios de perpetuidad»⁵⁸.

Vecindad y naturaleza eran conceptos que, a la luz de estos informes, resultaban hasta cierto punto volubles. En Castilla del Oro, la naturaleza como tal se podía construir y hacía referencia más a una actitud de predisposición personal hacia la permanencia en la tierra y una identificación con la misma que a los orígenes ancestrales o al lugar de nacimiento. La vecindad, por su parte, respondía a similares planteamientos de flexibilidad y movilidad, si bien para acreditar la vecindad se intentaban implementar ciertos criterios administrativos. Para garantizar el acceso a la vecindad, que comportaba la consecución de ciertos derechos y privilegios, se había tratado de regular la permanencia en la tierra a través del derecho a la propiedad de solares durante 4 años, como una vía para generar una identificación con la tierra que desembocase en el *amor* del que hablaban Zuazo y Espinosa⁵⁹. Sin embargo, a la luz de las fuentes, en las poblaciones de Castilla del Oro no se respetaron estas normas de permanencia pues comenzaron a proliferar, en breve plazo, las vecindades múltiples de individuos que podían presentarse como vecinos de varias poblaciones al mismo tiempo. El fenómeno de la acumulación de vecindades en un mismo individuo no era exclusivo de Castilla del Oro ni del Nuevo Mundo, donde sí alcanzó una gran complejidad, provocada especialmente por el enorme movimiento de personas de una población a otra, tanto dentro de los límites de Castilla del Oro como entre diversas regiones de las Indias. Además, en la Castilla de esta época el fenómeno se concentraba especialmente en el ámbito rural –asociado normalmente al uso de los pastos comunales– mientras que en el caso de Castilla del Oro las adscripciones vecinales lo eran a núcleos urbanos⁶⁰.

A pesar de que, jurídicamente, todos aquellos implicados en la fundación de una población pasaban automáticamente a ser *vecinos* –en una carta al rey hacia 1537 sobre el estado de la situación en la gobernación de Santa Marta se hacía referencia a que, en el golfo de Urabá el licenciado Vadillo «a hecho hazer un pueblo *dando* a vuestra majestad vecinos

⁵⁸ Relación..., AGI, Patronato, 172, R. 35.

⁵⁹ Así se estableció en la recopilación castellana de 1567, ver José Manuel PÉREZ-PRENDES (1998), pp. 127-215. Este plazo era algo menor que en Castilla donde, como en otros muchos lugares de Europa, el tiempo necesario para adquirir la naturaleza de una población se había establecido en 10 años. Sobre los distintos modelos europeos y castellanos Peter RIESENBERGER (1992), p. 131; Susan REYNOLDS (1997), pp. 184-187; Leonida TEDOLDI (2010), pp. 151-165. Tamar HERZOG (2010), pp. 167-177. En la edad media castellana el tiempo había sido, precisamente ese, diez años, como demuestra ampliamente María Inés CARZOLIO (2002), pp. 637-692, esp. 673, n. 134.

⁶⁰ Alfredo FLORISTÁN (1985), pp. 5-16; Estíbaliz GONZÁLEZ DIOS (2004), pp. 673-691.

españoles»⁶¹ - prevalecía la idea de que, tanto vecindad como naturaleza eran categorías que se podían hacer o conseguir⁶². En el permiso que la Corona otorgó a los habitantes de Santa María para ir a poblar a otros lugares se advierte a éstos que, aquellos que fundasen nuevos lugares, mantendrían la vecindad, a pesar de pasar a residir en otro lugar⁶³. Casos similares se observaron más adelante, cuando alguno de los regidores de la ciudad de Panamá lo fueron también de Natá, en el plazo de unos pocos años. Tal fue la situación de Gonzalo Martel de la Puente, quien fue regidor de Panamá desde 1529 y en 1537 lo fue también de Natá, este último además con el requisito concreto de residir en la ciudad⁶⁴. Para alcanzar el puesto de regidor era forzoso ser vecino de la ciudad o al menos ser tenido como tal, por lo que su *status* se debió ver alterado en varias ocasiones. Además, Martel de la Puente tuvo solares tanto en Panamá como en Nombre de Dios, por lo que es probable que en algún momento también *actuase* como vecino de esta última ciudad⁶⁵. Unido a la posibilidad de acumular vecindades en Indias, se observa también que de manera frecuente individuos mantuvieron su avecinamiento en ciudades de Castilla a pesar de sostener otra en el Nuevo Mundo, como en el caso de Toribio Montañés de Lara, también regidor de Panamá quien, al serle concedido un escudo de armas, se declaraba vecino de Sevilla⁶⁶.

Todos estos movimientos de vecindades y naturalezas indican que ambas categorías no eran en absoluto fijas y que se iban construyendo paulatinamente en función, en parte, de las propias decisiones de las personas implicadas, que a su vez construían la realidad social en la que se movían⁶⁷. La posesión de tierras y la permanencia en el mismo espacio durante un tiempo, que habían sido las condiciones tradicionales de acceso a la vecindad en Europa, no funcionaban de igual manera en el Nuevo Mundo o, al menos en esta fase inicial de

⁶¹ Relación del estado de las provincias de Cartagena de Indias, Nicaragua y Cabo de Honduras, hecha por el juez de comisión Juan Velázquez, de orden del Consejo de Indias, 1537, AHN, Diversos-colecciones, leg. 22, n. 20.

⁶² Guillermo PÉREZ (2011), pp. 67-95.

⁶³ Real Cédula a Pedrarias Dávila, capitán general y gobernador de Castilla del Oro, 14 de enero de 1514, AGI, Panamá 233, L.1, f. 149r.

⁶⁴ Real Provisión a Gonzalo Martel de la Puente, tesorero de Tierra Firme, concediéndole un regimiento de la ciudad de Panamá, 05-11-1529, AGI, Patronato, 276, N. 3, R. 3 y Nota de haberse despachado un regimiento de la ciudad de Nata para Gonzalo Martel de la Puente, 19 de octubre de 1537, AGI, Panamá, 235, L. 6, f. 132v.

⁶⁵ Real Cédula al gobernador y al obispo de la provincia de Tierra Firme, 7 de diciembre de 1537, AGI, Panamá 235, L. 6, f. 146v, además en el texto de esta concesión se le considera vecino de Panamá cuando ya había sido nombrado regidor de Natá, y Real Cédula al gobernador de Tierra Firme, 30 de marzo de 1536, AGI, Panamá 235, L. 6, f. 11v-12r.

⁶⁶ Escudo de armas para Toribio Montañés, 7 de diciembre de 1536, AGI, Panamá 235, L. 6, f. 71r-71v. A modo de ejemplo, en el texto de la probanza del Almirante de las Indias en la que algunos de los testigos se declaran vecinos o bien de ciudades peninsulares o bien americanas al tiempo que los no castellanos declaran su nacionalidad y su «estancia» en ciudades de Indias, Provança fecha por parte del almirante de las Yndias contra el fiscal, sobre la governacion de la provincia de Darien, 1512, AGI, Patronato 12, R. 2, n. 8.

⁶⁷ Pietro COSTA (1999), pp. 13-14.

Castilla del Oro⁶⁸. De hecho, era tan poco común el hecho de asentarse en un único lugar que la permanencia en una misma población pasó a formar parte de los méritos que los individuos alegaban para reclamar mercedes de la Corona.

En las relaciones de méritos y servicios que se comenzaron a emitir desde casi el inicio de las fundaciones de poblaciones, muchos de los que aspiraban a recibir mercedes incluían en sus probanzas el hecho de tener casa poblada y sostener en ella a varios parientes y sirvientes, asimilando su condición a la del *pater familias* tradicional⁶⁹. Juan de Castañeda trajo a su mujer desde Castilla y siempre mantuvo casa «dando de comer a diez o doce cristianos poco más o menos»⁷⁰. Otros, como Gonzalo de Palma, alegaban haber tenido casas pobladas tanto en Panamá como en Nombre de Dios, «con muchas armas, caballos y criados y allegados»⁷¹. La permanencia en la tierra y la instalación de una casa implicaba el ejercicio de una vida honrada –«como los principales de la tierra»⁷²– y la pretensión de ligarse a la población de manera permanente, lo cual hacía a los solicitantes merecedores de una recompensa en forma de mercedes. El mantenimiento de esas *casas pobladas* era casi la única manera de que las villas y ciudades de Castilla del Oro se mantuviesen habitadas, de manera que la Corona, tal y como solicitaban los peticionarios, debería participar en su sostenimiento.

Resulta, pues, evidente, que la unión de familias en el nuevo mundo no tenía sólo una motivación moralizante –como advertiría el obispo de Nueva España Zumárraga con la llegada de los hombres acompañados de sus esposas «se quitarán muchas offensas de Dios»⁷³– sino que implicaba la creación de una sociedad la que que la familia generaría unos vínculos basados en la defensa del patrimonio familiar que, a su vez, repercutirían en el apuntalamiento de la vida en sociedad.

Los principios que sustentaban la organización social en las ciudades de Castilla del Oro se debían ver acompañados de una pretensión a la virtud y a la creación, entre los propios castellanos, de un entorno de policía urbana que hiciese más tupido el tejido de

⁶⁸ Simona CERUTTI (2007).

⁶⁹ Para la figura del *pater familias* en la tratadística jurídica, con comentarios sobre el *deber* de caridad, ver Bartolomé CLAVERO (1990), pp. 159-163; también, en un enlace con el concepto de *civitas*, Pietro COSTA (1999), pp. 36-41; Ignacio ATIENZA (1990), pp. 411-458.

⁷⁰ Información de los méritos y servicios de Juan de Castañeda, 18 de diciembre de 1534, AGI, Patronato 150, N. 6, R. 3.

⁷¹ Información de los méritos y servicios del capitán Gonzalo de Palma, 26 de agosto de 1575, AGI, Patronato 151, N. 10, R. 1.

⁷² Información de los méritos y servicios de Andrea de la Roca, 14 de enero de 1568, AGI, Patronato 151, N. 4, R. 1.

⁷³ Carta de fray Juan de Zumárraga, obispo de Méjico, 4 de octubre de 1543, AHN, Diversos-colecciones, leg. 22, doc. 45

relaciones ciudadanas. Los matrimonios mixtos, promovidos oficialmente desde el comienzo de la ocupación, serían una de las vías fundamentales para el asentamiento de los castellanos en la tierra; por el contrario, el amancebamiento implicaba un desarraigo que sería punible en caso de que no se acompañase del compromiso de permanencia. En ese sentido, la permanencia en la tierra, pero también la atención al cumplimiento de las normas de convivencia y moralidad, encarnadas en el concepto de «pecados públicos», resultaría fundamental para lograr una integración de los castellanos que hiciera posible la conversación con los indígenas.

Fernández de Oviedo, al afanarse en el «castigo de los pecados públicos en que muchos estaban envejecidos» cuando recibió la vara de alcalde mayor de Santa María del Antigua hacia 1521, tomó la actitud de un padre de la república, tanto que él mismo llegó a considerarse como tal por su labor «en pro y utilidad de la república», que llevó a que en la comunidad, según sus palabras «me tenían por padre, e yo había sustentado aquella república, que no la quisiese desamparar en tal sazón»⁷⁴. Fernández de Oviedo consideraba que debería promover la defensa de la ley y el honor de la ciudad a sus propios intereses personales para hacer justicia⁷⁵. Oviedo tenía intereses económicos muy importantes en la ciudad y su desaparición habría supuesto prácticamente su ruina, por lo que intentó a toda costa su mantenimiento a través de la promoción de las virtudes públicas⁷⁶. Su interés se enmarcaría en la consideración aristotélica de la ciudad como un entorno de virtudes, una de las cuales sería la actuación de una justicia ejemplar que evitaría que nadie quisiese abandonar la ciudad⁷⁷. En el poco tiempo transcurrido desde la fundación de Santa María, Fernández de Oviedo presumía de haber conseguido desarrollar un auténtico *amor* por la tierra, un «proceso de identificación» que había conseguido solidificar un acelerado sentimiento de pertenencia

⁷⁴ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO (1955), lib 29, cap. 16; Francisco de Solano describe muy acertadamente la actitud de Oviedo al decir que «Fernández de Oviedo, que además de cronista es un crítico, zahiere la política de Pedrarias y su despego por Antigua, aconsejando cómo debería ser una colonización», en Francisco de SOLANO (1990), p. 85.

⁷⁵ Según la teoría política, los padres de la patria debían abandonar «i propri interessi particolari e prendersi cura dell'intero corpo della repubblica, senza favorire alcuni a spese di altri» haciendo justicia, pues esta «è la regina delle virtù», citado en Maurizio VIROLI (1994), p. 57. Para una contextualización del concepto de *pater patriae*, ver Quentin SKINNER (1990), pp. 123-157.

⁷⁶ De hecho, fue el propio Pedrarias quien propuso a Oviedo hacerse cargo de la justicia de Santa María como teniente y él, aunque a regañadientes, aceptó, en noviembre de 1521, «acordándome que aquella ciudad se despoblara, é yo perdería mi hacienda, si no había quien della se doliese», Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, lib. XXIX, cap. XIV; los argumentos de Oviedo en su obra estaban tan influidos por su interés en relatar su historia como por sus propios intereses personales, tal y como destacó Bethany ARAM (2012b), pp. 343-364.

⁷⁷ Richard KRAUT (2002), p. 197.

que le impulsaba a actuar en la defensa de su patria⁷⁸. Su labor, en el relativamente poco tiempo que estuvo en el cargo, se basó en intentar hacer cumplir las normas de 1513 que, como el equivalente a unas «ordenanzas de policía» al estilo europeo, regulaban el comportamiento moral de los habitantes de las ciudades⁷⁹. Los vicios públicos que persiguió fueron el abuso de los juegos de azar, cuestiones relativas al mercado como evitar pesar carne los sábados o el amancebamiento público⁸⁰. Este último punto, que podría considerarse la antesala de la creación de una ciudad mestiza, tanto biológica como culturalmente, sería de esta manera frenado como un intento de mantener con vida una población en base a criterios de pureza cultural. Oviedo buscaba imponer, con su actuación, una cierta idea de orden cívico cuyos referentes estaban en el Viejo Mundo pero que ya se comenzaban a resquebrajar en el Nuevo⁸¹.

El «amor a la tierra» se nutriría –y se demostraría– a través tanto del cumplimiento de las normas morales comunitarias como a través de la voluntad de asentamiento y el trabajo de la tierra. Según este planteamiento serían las relaciones entre los vecinos las que sostendrían el edificio de la ciudad más que el cemento de las construcciones. A pesar de todos los esfuerzos de Fernández de Oviedo, o se podría incluso aventurar que en parte a causa de ellos, la ciudad de Santa María se vació progresivamente a favor de Panamá, si bien la *civitas* de Santa María sobrevivió durante bastante tiempo tras la despoblación, de manera que los vínculos comunitarios creados allí se trasladaron a una nueva *urbs*. El propio Fernández de Oviedo fue regidor de la nueva ciudad de Panamá, cargo que heredó a su vez su hijo Francisco de Valdés en 1532, lo cual refuerza la idea de que las comunidades urbanas en el Nuevo Mundo podían moverse pero, sin embargo, perduraban tanto en su formulación jurídica como en su formulación afectiva y suponían, en fin, el sostenimiento del poder castellano en Indias⁸².

Las ordenanzas de 1573 actuarían finalmente como recopiladoras de las prácticas políticas acumuladas durante las siete primeras décadas de presencia castellana en Indias. En ese cuerpo legislativo se definía al vecino como al «hijo o hija, o hijos del nuevo poblador y

⁷⁸ Tamar HERZOG (2006), p. 33. Herzog ha profundizado en su argumento sobre pertenencia comunitaria a través de los actos en Tamar HERZOG (2012), pp. 147-161; Alessandro BUONO (2014), pp. 35-65; sobre la idea de patria que aquí presento Maruzio VIROLI (2001), pp. 673-680.

⁷⁹ Tomás MANTECÓN MOVELLÁN (2010), pp. 263-295; Tomás MANTECÓN MOVELLÁN (2015), pp. 237-267; Susana TRUCHUELO (1997), pp. 26-31.

⁸⁰ La prohibición de pesar carne los sábados –y las regulaciones en general respecto a las carnicerías– se encuentran en ordenanzas de villas y ciudades castellanas como las de Marchena o Murcia a comienzos del siglo XVI, ver Mercedes BORRERO y Manuel GARCÍA (2001), p. 92; José GONZÁLEZ (2000), pp. 68-71.

⁸¹ Sobre la labor de Oviedo como «inquisidor» y su promoción de una «ciudad hidalga» en oposición a la «ciudad mestiza» que buscaba el bachiller Corral, ver José Luís EGÍO (2016), pp. 29-44.

⁸² Regimiento de Panamá a Francisco de Valdés, 1 de julio de 1532, AGI, Panamá 234, L. 5, f. 37v-38v.

sus parientes, dentro o fuera del cuarto grado, teniendo sus casas y familias distintas y apartadas y siendo casado y teniendo cada uno casa de por sí»⁸³. Los pilares sobre los que se asentó esta definición eran, pues, la familia extensa y las propiedades, pero, al mismo tiempo, incorporaban en esas categorías elementos de la práctica política que se han podido ver en estas páginas derivados de la aplicación de principios tradicionales adaptados a las nuevas realidades. La naturaleza, concepto reservado en origen para los indígenas, se fue volviendo una categoría mixta, a la cual los castellanos se incorporaban —«se hacían naturales»— a través de diversas estrategias entre las que destacaban el matrimonio y la construcción de una identificación común con la tierra a través de la fundación y mantenimiento de las ciudades.

Todos los principios descritos componían el cuadro de relaciones entre castellanos que debían dirigirse al cumplimiento de un estilo de vida basado en la «buena policía» urbana, que a su vez había de extenderse a los indígenas o incorporarlas si ya habitaban en un entorno urbano. Esta serie de medidas y movimientos de población configuraban un tejido urbano que tomaba la forma de una *civitas* en la que, a través de interacciones culturales, se iban al mismo tiempo incorporando los indígenas. Estos no deberían, como se verá en las páginas siguientes, incorporarse físicamente a la ciudad, sino que la ciudad *acudiría* a ellos a través de los agentes de esta.

3. Comercio y conversación urbana.

El vehículo fundamental para lograr el cambio que los indígenas, a la luz de las descripciones de su estilo de vida, necesitaban, fue un concepto que se repetía de manera recurrente en todas las propuestas: la conversación. Este concepto vería adaptado su significado tradicional, tomado de la obra Aristóteles, a la práctica en las Indias para fomentar las relaciones con los indígenas. El primer capítulo del segundo libro de la primera traducción al castellano de la *Política*, en 1509, se abría con la idea de que «la ciudad es una comunión»; en la versión italiana de 1551 *comunião* se convertía en que «il governo è una certa compagnia» para pasar a verse en 1584 por el célebre Pedro Simón Abril como «el gobierno de la República es una comunicación»⁸⁴. Las tres traducciones consideraban la ciudad como un lugar fundamental de intercambio, tanto de bienes como de una forma de vida que la

⁸³ Artículo 93 en Francisco SOLANO (1995), p. 208; también en Manuel LUCENA GIRALDO (2005), p. 66. Sobre la consideración jurídica del vecino en Indias, en la que se enfatiza que no existía relación directa entre la condición de encomendero y la de vecino ver Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY (1981), pp. 109-129.

⁸⁴ La filosofía moral de Aristoteles: a saber ethicas, polithicas y economicas, en romançe, Zaragoza, 1509; Trattato dei governi di Aristotile, Venecia, 1551; Los ocho libros de República del filósofo Aristoteles, Zaragoza, 1584.

convertía en una comunidad cívica coherente. En la traducción de los principios políticos aristotélicos que fue el *Tractado de República* de Alonso del Castrillo, sin embargo, la palabra elegida para enfatizar el carácter comunitario de la ciudad fue «conversación», entendida, siguiendo una lectura ciceroniana de Aristóteles, como el sustento principal de la vida urbana hasta el punto de que «do falta conversación, deshácese la compañía, y deshecha la compañía deshácese el nombre de ciudad» porque «¿qué cosa puede ser más dulce que la amigable conversación, pues es poderosa para se sustentar las gentes que la natura cría!»⁸⁵. La ciudad habría sido fundada, según otro teórico aristotélico castellano, «porque omnes, viviendo juntamente en lugar conversen y vivan delectablemente»⁸⁶.

La conversación no era, conceptualmente, un mero intercambio de palabras, sino que englobaba toda una forma de vida, una manera de relacionarse los hombres asociada directamente a la ciudad. La definición del *Tesoro de la Lengua* de Covarrubias así lo atestiguaba al vincular «conversar» con el propio hecho de la vida urbana al definirlo como «tratar urbanamente y comunicar con otros», al tiempo que se relaciona al «conversable» con lo «apazible y tratable» y al «desconversable» con quien es «retirado y desapazible»⁸⁷. Stefano Guazzo, en *La civil conversazione*, publicado por primera vez en 1574 incluye la conversación como uno de los elementos definitorios de todo lo humano, origen de la alegría y la tranquilidad y remedio de la soledad. Para que esa «conversación civil» tuviera efecto había de ser «decente, política y urbana» para constituir al «hombre civil y prudente» y no sólo en las grandes ciudades «sino también a las villas, lugares y aldeas del territorio», lo cual implicaba a su vez una cierta universalidad en el propio concepto de conversación civil ya que «se entiende igualmente con los que viven en una misma ciudad que con cualquier sujeto en cualquier parte que se halle»⁸⁸. Entre los elogios que Pedro de Alcocer dedicó a la ciudad de Toledo se encontraba precisamente que «es de mucho alabar y engrandecer en esta ciudad, la forma de su asiento, su sanidad, fertilidad y gran fortaleza, y su virtuosa y noble constelación que inclina a sus moradores a ser de dulce y amigable conversación con todos,

⁸⁵ Alonso DE CASTRILLO (1521), pp. 21-22. En la traducción de los oficios de Cicerón de Alonso de Cartagena se incluye que «de todas las compañías non hay ninguna más hermosa ni más firme que quando los buenos varones semejantes en costumbres son ayuntados en conversación».

⁸⁶ Rodrigo SÁNCHEZ ARÉVALO (1944), p. 40.

⁸⁷ Cito por la edición de Martín de Riquer, Altafulla, Barcelona, 1998, p. 354.

⁸⁸ Stefano GUAZZO (1576) f. 35r. También se encuentran usos de ese término en textos políticos ingleses del siglo XV. Por ejemplo, Richard el duque de York elevó una petición al rey Ricardo VI en 1450 en la que le instaba a mantener «the *conversacion* [en castellano en el original] of good tranquillite and peasable rewle», *The Paston Letters* (1904), p. 178.

mayormente con los extranjeros»⁸⁹. La conversación era, según los teóricos, el día a día de la vida urbana y política, que aunaba tanto la reflexión filosófica como el trato cotidiano entre los ciudadanos, convirtiéndolo a la «vida política» en la más alta, quizá la única, forma de vida posible y que además tendría la capacidad de unir a gentes diversas con un mismo lenguaje común⁹⁰.

La necesidad de su aplicación para la conversación hizo que el concepto de conversación se adaptara a las circunstancias del Nuevo Mundo en relación con la fundación de ciudades y el intento de atraer a ellas a los indígenas. El efecto de la conversación era necesariamente lento, comparable al de una gota de lluvia sobre un muro, pero a la larga «tan pegajoso es, entre los hombres, el amor con la mucha conversación» que les haría «perder el temor con lo cual aprenderían la doctrina, la lengua castellana y las buenas costumbres de los castellanos»⁹¹. El proceso debía iniciarse cuanto antes, pues hacía mucho más efecto entre los indígenas «que conversan entre cristianos desde chiquitos»⁹². A pesar de que la conversación implicaba algo más que un mero intercambio verbal, era obviamente indispensable la presencia de *lenguas* que «nos ayuden a inducir y atraer todos los indios a los pueblos y para todo lo que acerca de ello se hubiere de hacer»⁹³. Como se verá más adelante, la labor práctica de los lenguas en los intercambios comerciales trascendía la del mero traductor para convertirse en un agente de transmisión cultural, lo cual convirtió a estos individuos en personas muy valoradas, tanto por los propios indios como, especialmente, los castellanos, hasta el punto de que eran trasladados de un territorio a otro en función de las necesidades.

Todas las prescripciones para atraer a los indígenas a la policía aludían al concepto cívico de conversación, en que destacó especialmente el papel del comercio para potenciar la comunicación entre indígenas y castellanos. En las transacciones comerciales, como se verá, se intercambiaban mucho más que objetos y se *conversaba* mediante más que simplemente palabras. En el año 1521 se publicaron dos cédulas que recogían los argumentos

⁸⁹ Historia y descripción de la Imperial ciudad de Toledo. Con todas las cosas acontecidas en ella, desde su principio y fundación adonde se tocan y refieren muchas antigüedades y cosas notables de la historia general de España. Toledo, 1554, f. 124r

⁹⁰ John POCOCK (2008), p. 152; incluso el mismo término podía hacer referencia a relaciones de tipo conyugal: «absteníanse de la conversación con sus mujeres».

⁹¹ «Últimamente hace tantos efectos la continuación y conversación ordinaria que con ser cosas tan blandas y deleznales las lluvias y los cordeles comen las murallas y hacen canales en los mármoles», Pedro MEXÍA DE OVANDO (1639), f. 64.

⁹² Carta de la Audiencia de Santo Domingo, sobre los procedimientos de Pedro de Heredia, 12 de octubre de 1535, AGI, Santo Domingo 49, R. 6, N. 41, f. 1vº (bis).

⁹³ Parecer de los frailes jerónimos sobre la población y buen gobierno de las Indias, AGI, Patronato 173, N. 2, R. 2. Ver, sobre el lenguaje de la conquista, Lore TERRACINI (1992), pp. 221-229.

relativos al buen tratamiento de los indígenas y su implicación en el comercio. La primera iba dirigida a Francisco de Garay para su población de la región de Amichel, en Nueva España. En este texto se le prohibía hacer repartimiento y se le instaba a que «lo que con ellos contratáredes, ha de ser por vía de comercio y contratación, e de su voluntad, y no de otra manera», ya que así se facilitaría su conversión mediante el «amor y del buen tratamiento»⁹⁴. La segunda fue una cédula de Carlos V hacia la ciudad de Panamá que, a petición del cabildo de esta, daba licencia a todos los habitantes para comerciar con los indígenas de manera clara, abierta y libre sin que los indios fueran «inducidos, atemorizados e apremiados». En la cédula se fundamentaba la recomendación porque era «principal deseo [...] que los yndios naturales dellas vengan a conocimiento de nuestra santa fee católica e vivan en la *poliçia* e de la manera que viven los cristianos españoles para que se salven y conserven y para esto por lo que por experiencia se ha visto el principal remedio que hay es la conversación entre los dichos indios y los dichos cristianos y porque esta se puede mucho mejor tener habiendo entre los unos y los otros trato y contratación por vía de rescates y comercio»⁹⁵.

El bachiller Corral lo expondría de manera clara en 1524. Según su informe, los indios que vivían en la costa cercana a la ciudad de Santa María del Darién «son todos o los más dellos Caribes que comen carne umana y de guerra». La única manera de que los cristianos pudieran convertir a los indios y «aprobar de su conversación» sería con «alguna manera de contratación de rescates como ahora hazen los vecinos de la dicha ciudad». Corral solicitaba a la Corona que hiciera merced de no permitir que «ningunos vecinos ni moradores de otros pueblos de la tierra» rescatasen o contratasen con los indios excepto los de Santa María, enfatizando así el carácter autónomo de la iniciativa liderada por la propia ciudad, para la conversión. Según el mismo informe, los vecinos de Santa María del Darién ya conocían a los indios y caciques de la zona y tenían con ellos «sus conciertos y señas de seguridad muy guardadas» y sus navíos llevaban «cierta seña porque sepan que aquellos son de paz y les han de guardar verdad». De igual manera, la relación entre los vecinos de Santa María y los indígenas aconsejaba que los indios que vivían en los términos de esa ciudad no se pudieran encomendar a otras personas «sino a los vecinos de la dicha ciudad porque desta manera serán muy mejor tratados y tendrán muy más verdadera amistad y conversación»⁹⁶. La

⁹⁴ Real cédula a Francisco de Garay, 1521, CODOIN, t. 39, p. 522.

⁹⁵ Real Provisión concediendo a los vecinos de la ciudad de Panamá que puedan tratar y comerciar con los indios, 6 de septiembre de 1521, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 300; sobre la cuestión del comercio como vía de conversión a lo largo de todo el periodo colonial ver Benita HERREROS y Jorge DÍAZ CEBALLOS (2013) y Xavier GIL PUJOL (2014), pp. 195-221.

⁹⁶ Parecer..., Patronato 193, R. 13, f. 166v.

presencia de vecinos de otros pueblos en la zona causaría que los indígenas que comenzaban a estar de paz con los castellanos de Darién volviesen a desconfiar de todos los castellanos en conjunto. Así, los contactos entre los castellanos e indígenas eran promovidos desde la escala local y a través del contacto cotidiano.

El comercio era considerado, desde la Antigüedad, como una de las vías más directas para establecer una relación de amor y concordia entre los pueblos⁹⁷. Según el planteamiento de Séneca, que sería recogido y reelaborado por teóricos cristianos como San Juan Crisóstomo o San Basilio el grande, la Divina Providencia habría actuado de tal manera que no todos los hombres tuviesen acceso a todo lo necesario con el fin de promover las relaciones humanas. Durante los siglos medievales y la temprana Edad Moderna, el comercio había sido una de las vías más habituales de relación entre diferentes pueblos, independientemente de las disputas religiosas o políticas⁹⁸. Sin embargo, el comercio entendido como una parte de la conversación no respondía a la lógica mercantil, sino a una que se justificaba por su utilidad como vía de relación y que se basaba en la creación de una relación de confianza entre sociedades de orígenes y estructuras diversa⁹⁹. La naturaleza que, según el planteamiento aristotélico «no hace nada en vano», a pesar de que no había concedido todo lo necesario a todos los pueblos, sí que habría procurado de un espacio de relación común que sería la ciudad –y todo lo que ésta representaba– con el fin de ofrecer un escenario para el intercambio de todo lo necesario, generando una amistad que conseguiría «lo que Pitágoras quería que en la amistad se haga, es a saber, que uno se haga de muchos»¹⁰⁰. Este tipo de comercio respondía a una justificación moral que no basaba su utilidad en el valor del objeto que se intercambiase sino en la intención y el «ánimo con que se da y se hace; porque el beneficio no consiste en lo que se haze o se da, sino en la voluntad del que lo da, o lo haze» con lo que el beneficio siempre es bueno, «y lo que se haze, o se da, no es en sí bueno, o malo»¹⁰¹. Cualquier otra consideración del comercio que se enfocase a una ganancia crematística podría conducir a la usura y perdería su justificación moral, que se basaba en los

⁹⁷ Julio CARO BAROJA (1985), pp. 378-379.

⁹⁸ Susana TRUCHUELO (2014), pp. 127-140; ya en la segunda mitad del siglo XVIII el historiador escocés William Robertson introdujo la importancia del comercio como la piedra angular de los progresos de la navegación y, eventualmente, de la colonización del Nuevo Mundo, si bien interpretaba –en clave *whig*– que el comercio era una derivación «natural» de la formación de la propiedad privada que, no obstante, «trade proved a great source of discovery, it opened unknown seas, it penetrated into new regions, and contributed more than any other cause to bring men acquainted with the situation, the nature, and commodities of the different parts of the globe», *The Works of William Robertson, vol. VII, The Discovery of America*. Londres, 1821, pp. 3-5.

⁹⁹ Francesa TRIVELLATO, Leor HALEVI y Catia ANTUNES (2014); José Miguel ESCRIBANO PÁEZ (2017), pp. 111-127.

¹⁰⁰ Cicerón en romance, BNE Mss 7815, f. 52v.

¹⁰¹ Los libros de beneficiis de Lucio Aeneo Seneca, Madrid, 1629, lib. I, cap. VI.

mismos principios de la *oeconomía*, y que partían de que toda comunidad política no era sino una derivación de la comunidad natural de familia¹⁰².

En el caso de los indígenas del Nuevo Mundo, este tipo de economía donativa encerraba un interés concreto como vía para lograr su conversión y haría de ella, así, uno de los principales sustentos de la justificación de la presencia castellana en Indias: una vida ordenada en ciudades, con el establecimiento de la conversación a través del comercio extendería entre los indios los principios de la policía¹⁰³. En el ámbito de Indias, Francisco de Vitoria y los miembros de la Escuela de Salamanca hicieron coincidir ambos planteamientos –comercio y conversión– como parte del debate en torno a esos derechos. Los cristianos tendrían el derecho natural a la predicación (*ius praedicandi*), que les daba a su vez derecho a la peregrinación (*ius peregrinandi*)¹⁰⁴. En base a estos principios, los indígenas no tendrían derecho a excluir a los castellanos de su comercio, pero tampoco los castellanos podrían excluir a los indígenas pues «la amistad entre los hombres es de derecho natural y es contra la naturaleza estorbar el comercio y la comunicación entre hombres que no causan ningún daño». Comercio y comunicación formaban parte del mismo proceso que, también, seguía amparado por la lógica del orden universal según el cual «hay muchas cosas en que los bárbaros abundan y que pueden por cambios adquirir los españoles»¹⁰⁵. El comercio, pues, formaba parte de los argumentos doctrinales de fondo que debían coadyuvar a acercar a indios y castellanos y que éstos, tras haberse asentado en ciudades, traspasasen su forma de vida a aquellos.

Ya en su primer viaje, tan pronto como arribó a las costas de Guanahaní, Cristóbal Colón había entregado «gracias mil cosas buenas que yo llevaba porque *tomen amor*» y no sólo amor sino que «allende d'esto se farán cristianos, que se inclinan al amor e servicio de Sus Altezas y de toda la nación castellana, e procuran de aiuntar de nos dar de las cosas que tienen en abundancia que nos son necessarias»¹⁰⁶. En la zona de la llamada Costa de las Perlas, explorada también por el Almirante hacia 1498, aquellos que traían oro o especias lo habían conseguido «parte venciéndolos en cruda guerra y parte a cambio de cosas nuestras con los isleños»¹⁰⁷. Gonzalo Fernández de Oviedo ya había destacado que una de las mejores cosas

¹⁰² Otto BRUNNER (2010), *passim*; Bartolomé CLAVERO (1984).

¹⁰³ Puesta de relieve en los años 20 en «sociedades arcaicas» por los antropólogos Marcel Mauss y Bronislaw Malinowski y utilizada para explicar el funcionamiento interno de las sociedades del antiguo régimen en Antonio M. HESPAÑA (1993), pp. 154 y ss.

¹⁰⁴ Annabel BRETT (2011), p. 199.

¹⁰⁵ Francisco DE VITORIA (1532), p. 131.

¹⁰⁶ Cristóbal COLÓN (1982), p. 142.

¹⁰⁷ Pedro MÁRTIR (1989), dec. I, cap. X.

que había hecho para beneficio de la ciudad de Santa María, de sus residentes y de todos los castellanos en general fue destinar una carabela de su propiedad con una tripulación, provisiones y armas de paz y de guerra para entrar en contacto con los Caribes de Cartagena, las islas Codego y otros lugares¹⁰⁸.

El mismo Oviedo refirió que otros antes que él –Cristóbal Guerra, Juan de la Cosa, Bastidas, Juan de Ledesma, Ojeda– habían intentado desarrollar un flujo comercial con los indios de las islas vecinas pero que, en realidad, se habían dedicado a «robar y molestar» con el pretexto de estar haciendo comercio. Vasco Núñez de Balboa, como es bien sabido, negoció con los indígenas, especialmente con los miembros del cacicazgo de Comogre, su paso a través del istmo para liderar a los primeros europeos que vislumbraron el Mar del Sur desde Tierra Firme. Durante su expedición también aplicó la misma táctica puesta en marcha por Colón y además comenzó a construir un relato idealizado de lo que esperaba a su expedición al otro extremo del istmo. Según Balboa, más allá del cacicazgo de Comogre, existía oro en abundancia que los habitantes de la zona transportaban hacia las tierras de Comogre para poder intercambiarlo. «El rescate que les dan por el oro», advertía, «es ropa de algodón y yndios e yndias hermosas». Estos indígenas comerciantes, según el relato construido por Balboa, «non los comen como la gente de hacia el rio grande», si no que, en cambio, «dicen que es muy buena gente, de buena conversación, la de la otra costa»¹⁰⁹. Las prácticas comerciales (en lugar de las antropofágicas) colocarían a los indígenas en una mejor disposición para la conversación –y conversión- frente a los de otras regiones. En la dicotomía tradicional entre aquellos que los castellanos calificaban de bárbaros –y estarían relacionados con prácticas de antropofagia- y los indígenas receptivos a la «civilización» –«de buena conversación»- el comercio resultaba la pieza clave con la que marcar la diferencia.

En el momento en el que la ciudad de Santa María del Antigua del Darién se estaba despoblando hacia 1524, Oviedo se representó como el primer y mayor impulsor del comercio con los indígenas, quien, a diferencia de otros habitantes del Darién, declaraba haberse dedicado a «rescatar, pacificando e amansando lo alterado»¹¹⁰. Más tarde, hacia el año 1557, según contaba en su propia probanza de méritos, Luis de Quesada, se adentró solo y descalzo en una región del sureste de Perú llamada Yaguarmita, donde «trató y fundó un pueblo de españoles y mulatos e negros horros [libres] llamado la villa de San Juan del Oro».

¹⁰⁸ De forma que «sin ayuda del rey y otros y a su propio coste, comenzó a hacer comercio con los indios y comenzó su pacificación», Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO (1959), lib. 2, cap. 15.

¹⁰⁹ Carta dirigida al Rey por Vasco Núñez de Balboa..., 20 de enero de 1513, CODOIN, t. 39, p. 251.

¹¹⁰ Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO (1959), lib. 3, cap. 15.

Allí, en su propia casa –sin pertenecer al clero– hizo una iglesia y comenzó a recorrer las regiones aledañas «y sacó de paz ciento y cuarenta indios» y los tuvo en la dicha villa «muchos días dándole todo el bastimento necesario y al tiempo de su partida les dio mucha cantidad de vestidos de seda y lana y sal y hachas y cuchillos y tijeras, peines, anzuelos e otras muchas cosas para atraerlos a la obediencia de Su Majestad, como los trajo, de paz». Tras esto informó al virrey marqués de Cañete, quien envió a dos frailes Agustinos para «doctrinar los dichos indios que había tenido de paz»¹¹¹. Quesada, quien era un viejo vecino de Panamá y que había participado activamente en su defensa ante la rebelión de los Contreras, fue un paso más en el proceso de refinamiento de las fórmulas para relacionarse y comerciar con los indígenas. En primer lugar, como Colón y Balboa buscó crear un vínculo con los indígenas, pero también, como Oviedo, era consciente de la necesidad de que los intercambios se llevaran a cabo en asentamientos permanentes.

Los casos analizados hasta aquí permiten comprender la evolución del concepto abstracto de conversación como un recurso teórico exclusivamente cívico para entenderlo en un contexto más complejo. Desde las cédulas que primaban el comercio como elemento nuclear de la conversación hasta las prácticas concretas se puede observar una evolución. Esta iría desde las aventuras individuales más o menos espontáneas o tentativas como las de Colón y Balboa, cuyo objetivo era calibrar las posibilidades de los intercambios, hasta la comprensión específica por parte de los individuos, como Luis Quesada, de que era necesario fundar una población para mantener los flujos de comercio y, con ellos, de conversación a fin de sostener los lazos creados en los primeros contactos. Sólo desde ciudades asentadas y comunidades políticas coherentes el comercio y el contacto podrían dar los frutos anhelados, tanto por los vecinos como por la Corona. Estos ejemplos puntuales indican la importancia que el comercio individual tenía en procesos concretos de acercamiento e intercambio entre castellanos e indígenas. Más allá de los ejemplos individuales y aislados, es preciso ahondar en las relaciones a medio y largo plazo entre comunidades políticas asentadas, que permitían redefinir los espacios de contacto e interpretar cómo los presupuestos teóricos se ponían en práctica en territorios diversos y con protagonistas que ponían en marcha recursos corporativos para cumplir con sus propios intereses.

4. Ciudades, lenguas y embajadores informales

¹¹¹ Informaciones de los méritos y servicios de Luis de Quesada, 1556, AGI, Patronato 150, N. 11, R. 1.

Más allá de todas las prescripciones teóricas arriba descritas, los espacios urbanos servían de manera concreta para poner en práctica estrategias de conversación intercultural, que implicaban a agentes y actores de una y otra parte, pero también especialmente a aquellos que intermediaban entre ambas entidades como transmisores y puentes culturales. Con base en las comunidades urbanas, las relaciones con los indígenas se nutrían de conceptos y prácticas de origen cívico castellano que, a su vez, incorporaban elementos culturales indígenas para facilitar los contactos. Desde las ciudades se asentaba el conocimiento de las sociedades indígenas, pues eran los castellanos que habitaban en aquellas los que entraban en contacto con estos y desde donde se ponían en marcha relaciones de confianza y reciprocidad. Las ciudades comenzaron a entrar en relación con los cacicazgos, en territorios asociados con éstos, y se comenzaron a operar relaciones horizontales entre ambas entidades. La fundación y desarrollo de las ciudades castellanas sentaba las bases, como se vio en capítulos anteriores, para la definición jurisdiccional que precisaba para su concreción del acuerdo y el inicio de una relación con los pueblos indígenas aledaños. A continuación, se analizarán dos ejemplos coetáneos que permiten vislumbrar de qué manera se llevaba a cabo esta relación, a través de qué agentes y movilizandó qué clase recursos de la ciudad.

Durante el mandato de Francisco Barrionuevo como gobernador de Castilla del Oro, entre 1533 y 1536, la región vivió uno de los momentos de mayor ebullición en la relación entre castellanos e indígenas. Dos frentes de contacto se habían abierto, uno de ellos en la zona del golfo del Urabá, con los habitantes del cacicazgo homónimo y el otro en la zona de Veragua, que implicaba al poderoso cacicazgo de Urraca¹¹². En ambos procesos, el protagonismo por la parte castellana recayó en los cabildos y vecinos de las dos ciudades más cercanas, Acla para el caso del Urabá y Natá para el caso del cacicazgo de Urraca. Los dos episodios, sin embargo, tuvieron distinto desarrollo dependiendo de la participación de las autoridades locales, que definía el grado de conocimiento de la realidad social y política de los cacicazgos circundantes.

4.1 *Conocimiento local e injerencias externas*

Durante el juicio de residencia del gobernador Barrionuevo, cuya investigación en la ciudad de Natá comenzó en enero de 1537, se incluyó la demanda presentada por Francisco de Gordón «con motivo de la pacificación de los caciques de Urraca». En los primeros meses de 1535, una expedición fue enviada desde la ciudad de Natá para tratar de pacificar a una

¹¹² Carta de Francisco Barrionuevo a Su Majestad, 30 de enero de 1536, AGI, Patronato 194, R. 34.

serie de caciques que estaban alzados «en las sierras de Urraca». El propio gobernador acudió en persona desde el otro extremo del istmo para supervisar la operación. Los caciques de la sierra de Urraca habían mantenido hasta entonces buenas relaciones con los castellanos habitantes de Natá, hasta que aquellos territorios habían sido ocupados por el cacique Estiberi, que era de guerra y, según el propio gobernador, «tan cruel que los caçiques comarcanos no vienen a la servidumbre» por miedo a aquel. Barrionuevo, además, consideraba que Estiberi tenía tomada la tierra al «señor natural de la dicha provincia», el cacique de Urraca¹¹³. El objetivo era vencerle, puesto que «destruydo aquel pienso con el ayuda de Dios que vendrán muchos de los comarcanos de pazes»¹¹⁴. Francisco Barrionuevo alegaba que él ya había intentado fundar un pueblo en la región como principal vía para pacificar la tierra, si bien no había podido llevarlo a cabo por estar el cacique Estiberi alzado. Por ese motivo, se había visto «obligado» a presentar batalla. La campaña de ataque de los castellanos en los territorios de Urraca no fue exitosa y se quebró la relativa armonía previa de la región, además de perderse mucha cantidad de dinero que se había invertido en la operación. Uno de los que más había perdido era precisamente Francisco Gordón, quien había sido elegido para comandar las operaciones junto al gobernador. Gordón reclamaba personalmente al gobernador que le reembolsase dos mil pesos que había invertido y que le había hecho perder de manera indirecta al quebrarse las relaciones con los indígenas. En el curso del pleito por ese dinero, se pusieron sobre la mesa los motivos que habían conducido a la derrota y que permiten contextualizar la importancia de las relaciones interculturales desde la perspectiva local.

Antes de emprender la expedición, el gobernador Barrionuevo había pedido al cabildo de Natá, «como mas experimentados en la tierra y antiguos» que «me hiziesen saber que persona avia en la çibdad de Nata que fuese ydoneo» para liderarla¹¹⁵. Los cuatro miembros del cabildo en ese momento recomendaron al regidor Francisco de Gordón, alegando en su favor que había participado en múltiples guerras y que, además, podía ofrecer dinero e indios intermediarios para lograr los objetivos sobre el terreno. El gobernador era muy consciente de que los cabildos locales y sus miembros eran los más indicados para ofrecer información fidedigna sobre la forma más correcta de operar en las relaciones con los indígenas. No en vano, los vecinos de la ciudad de Natá hacía tiempo que mantenían rescates y contratación con diversos caciques dependientes del cacique de Urraca, antes de

¹¹³ Demanda contra Francisco de Barrionuevo, gobernador, presentada por Francisco Gordón, vecino de Natá, con motivo de la pacificación de los caciques de Urraca, AGI, Justicia 365, f. 1420.

¹¹⁴ Carta... doc. cit., AGI, Patronato 194, R. 30.

¹¹⁵ Demanda..., AGI, Justicia 365, f. 1315.

que estos hubieran sido controlados por el cacique Estiberi. En consecuencia, la ciudad de Natá había mantenido buenas relaciones con los cacicazgos de Urraca gracias a estos intercambios comerciales. A su vez, ese flujo comercial había permitido a los vecinos y el cabildo de Natá conocer profundamente las estructuras de los cacicazgos y su forma de vida. Por lo tanto, la primera acusación que Gordón hizo a Barrionuevo era que, con su actuación, había hecho quebrar los acuerdos comerciales que la ciudad mantenía con los caciques, de manera que «vino mucho daño e perjuizio a los dichos vezinos e desirvió en ello mucho a Su Magestad».

Según Francisco Gordón, la estrategia de guerra que planteó el gobernador Barrionuevo no había sido efectiva, precisamente porque no «aprovechava los consejos e paresçeres que le davan el dicho capitan e otros vezinos de Nata», sino que intentaba aplicar tácticas que no correspondían a los conocimientos de la zona que ya tenían los vecinos de Natá. La táctica que había seguido Barrionuevo, según la acusación de Gordón, consistió en responder de manera impulsiva a los ataques de los indígenas, o bien tomándolos como rehenes o matándolos, sin diferenciar de manera precisa aquellos que eran de paz y los que eran de guerra y sin tomar en consideración el criterio de los vecinos de Natá. El gobernador seguía una táctica de guerra estandarizada, que no se nutría del conocimiento del terreno adquirido por los vecinos de Natá a lo largo del tiempo y que habría permitido, según sus críticos, que el resultado fuera diferente.

Los vecinos de Natá que respondieron a las preguntas del cuestionario del interrogatorio acusaban a Barrionuevo de no haber tampoco prestado atención a las recomendaciones del *lengua* que había participado en la negociación con el cacique Estiberi. Francisco Gordón y el *lengua* habían acudido previamente a una reunión con el cacique de guerra y habían comenzado una serie de conversaciones con las que habían sentado las bases para el acuerdo de paz. Sin embargo, el gobernador había mandado prender y matar a dos emisarios del cacique que habían acudido al real de los castellanos, provocando con ello la ira de Estiberi, que declaró a Gordón que no podía concertar las paces cuando estaban matando a sus hombres. Incluso Barrionuevo se negaba a aceptar los consejos del *lengua*, que advertía al gobernador que «no hablase tan bravo» a los indios, pues estos se atemorizaban y perdían la confianza que se iba creando, lo que podrían arruinar las relaciones de paz que se estaban negociando. La labor del *lengua* en este caso, como se verá con más detalle a continuación, trascendía la mera traducción y también aconsejaba sobre el tono y las formas que debían acompañar a las palabras, que podrían asentar la confianza que ambas partes buscaban. La expedición fue un fracaso y la guerra con los caciques de la zona continuó

durante, al menos, 10 años más, impidiendo tanto los rescates a través del comercio como la explotación de las minas de la región. Todos los implicados en la guerra con el cacique de Urraca, incluido el gobernador, eran conscientes de que el conocimiento de las realidades culturales, políticas y sociales circundantes sólo podía concretarse a través de las relaciones en un plano local, que pasaba por ser la clave para la puesta en marcha de estrategias y prácticas concretas que pudieran desembocar en una serie de relaciones fluidas de pacificación y conversación.

El gobernador, sin embargo, no prestó atención a las indicaciones de los vecinos de la región ni de los propios intermediarios culturales indígenas que trataban de coordinar los esfuerzos para llegar a un acuerdo. En cambio, lo que hizo Barrionuevo fue abandonar la zona de Veragua y regresar, cuando fue requerido por Julián Gutiérrez, a la costa del golfo de Urabá para atender a los problemas, analizados en el capítulo dos, que en ese lugar estaba provocando a mediados de 1535 la presencia de Pedro de Heredia, el recién llegado gobernador de Santa Marta y Cartagena. Ese otro escenario ofrece la oportunidad de analizar una fluida relación comercial y cultural, comenzada unos años antes, entre entidades indígenas y castellanas en la que entraron en concurso agentes y prácticas de ambos lados y que permite dibujar los contornos prácticos del concepto de conversación aplicado en Castilla del Oro.

4.2 *Isabel Corral: «llave de esta tierra»*

El 19 de agosto de 1532 el cabildo de Acla al completo –cuatro regidores y dos alcaldes ordinarios- se reunía con el gobernador Antonio de la Gama, quien había acudido para su visita anual a la ciudad¹¹⁶. En esa reunión se acordó apuntalar y reforzar los primeros contactos que Julián Gutiérrez e Isabel Corral habían iniciado en un viaje previo por la culata de Urabá, tras el cual había prometido volver tres meses más tarde. El objetivo era que «aquella amistad e pazes se asentase y conservase», para lo cual los castellanos decidieron en primer lugar devolver los indios que el factor Miguel Juan de Ribas había hecho prisioneros en una expedición anterior¹¹⁷. Además de devolver a los indios capturados, los vecinos de

¹¹⁶ Según algunos de los testimonios recogidos el juicio de residencia a De la Gama –como el de Andagoya-, esta habría sido su única visita a Acla durante su mandato; desatención de la cual los vecinos se quejaban amargamente. El mismo Andagoya y Gonzalo Martel de la Puente también acusaron al gobernador en ese mismo juicio de haber «tenido parte» con varias mujeres casadas durante su visita a Acla, aprovechando la ausencia de sus maridos en la expedición para convertir a los indígenas. Residencia tomada al licenciado Antonio de la Gama, juez de residencia y gobernador de Tierra Firme, AGI, Justicia 363.

¹¹⁷ Asiento de paz con los indios de la Culata y golfo de Urabá, AGI, Patronato 193, R. 17, ff. 179-212v; ha sido parcialmente publicado en Juan FRIEDE (1955), pp. 287-315 y Antonio MATILLA (1945); ver también

Acla, para atraer a los indios a las paces, «les envían preseas e cosas [...] porque desta manera les pareçia que ternán por cierta la paz e las atraerán a ello». Los regidores presionaron para que el asiento de paz se llevase a cabo cuanto antes, porque «es cosa muy importante al servicio de Su Majestad e bien e aumento e población así de esta ciudad como de todo el reino». Reunieron a todo el pueblo para la elección de los nuevos alcaldes y el gobernador les informó de los planes que tenían, a lo que respondieron que les parecía muy bien porque sería de mucho provecho para todos¹¹⁸. El elegido para comandar la empresa debería ser Julián Gutiérrez, que ya conocía la zona y había comenzado a entablar las conversaciones previamente. Éste debía asentar las paces y, para ello, además de devolver los indios raptados en anteriores expediciones, debería «enviarles algunas hachas e otras cosas» que consistían en camisas, paños de cabeza, cuchillos, sal y anzuelos que se deberían cambiar por lo que los indios considerasen «sin que se les diga lo que han de dar ni que conozcan que lleváis codicia, ni es por otra cosa que sino principalmente por ser sus amigos»¹¹⁹.

El principal objetivo de la expedición, por lo tanto, no debía ser crematístico, sino que el comercio —el rescate, en vocablo más apropiado— habría de ser un pretexto para realizar otro tipo de contacto. Todos los vecinos de Acla declararon cuántos indios tenían en su posesión, la condición de estos y las circunstancias de su detención, tras lo cual la lengua preguntaba a cada uno de ellos de dónde eran originarios y se preparaba su retorno. Entre los 13 indios cautivos había 10 mujeres jóvenes —algunas incluso niñas, con sus madres o solas—, una «india vieja» y dos hombres jóvenes. Algunas de esas mujeres indígenas actuaban ya como lenguas y casi todas habían sido convertidas al cristianismo y bautizadas con nombres castellanos, pero igualmente fueron devueltos a sus lugares de origen, en cumplimiento de la ley y como una vía para estimular la conversación intercultural y fomentar la conversión. Aquellas que habían sido ya bautizadas se llamadas Ysica, Madalena, Beatrizica, Catalina, Isabelica, Beatriz y los hombres Dieguito y Cristóbal, y la mayoría eran de la Culata del golfo de Urabá, si bien algunos se declaraban de las Balsillas o de Caribana. Aunque al menos uno de los indígenas había sido comprado en almoneda unos días antes, casi todos habían sido cautivados durante la expedición comandada por el factor Miguel Juan de Ribas, quien había sido acusado de asolar la zona del golfo de Urabá y, además, de haberles esclavizado ilegalmente, «vendiéndolos y sirviéndose y haciendo dellos lo que quisieron [...]

Carmen GÓMEZ PÉREZ (1984), pp. 112-116; a menos que se indique lo contrario, todas las citas de este apartado están tomadas del documento original.

¹¹⁸ En el juicio de residencia del gobernador también afloraron críticas sobre la posible connivencia entre el gobernador y Julián Gutiérrez sobre estos rescates y, que «se quejaban los vecinos de Acla que se lo llevaban ellos todo», aunque nada concreto se afirmaba sobre este asunto, Residencia... AGI, Justicia 363, f. 1144v.

¹¹⁹ Asiento... doc. cit. AGI, Patronato 193, R. 17, f. 181v.

llevándoles en cadenas y haciéndoles muy mal tratamiento» a gran número de indios, además de los trece en cuestión, apenas unos meses antes¹²⁰. Los viajes de Gutiérrez y Corral estaban, entre otras cosas, destinados a rectificar la injusticia y ofrecer reparaciones por el maltrato de la expedición de Ribas en la zona del golfo de Urabá y por ese motivo, como muestra de buena voluntad, se organizó la devolución. Esta tendría, a su vez, el efecto de tender puentes y la motivación de asentar las paces, para las cuales habría de contribuir que la mayoría de las indígenas liberadas ya actuarían como lenguas.

Julián Gutiérrez debería, a su vez, hacer entender a los caciques lo que ganarían estando al servicio del rey, «e ser nuestros amigos e por el contrario no lo siendo». Gobernador y cabildo decidieron que, si fuera posible, lo mejor sería que llevase «algún cacique o principal», siempre que fuera por su propia voluntad —«porque, de otra manera, por ninguna vía se haga»—, de vuelta a Acla para «holgarse acá para que viesen el pueblo y conocer los cristianos». El planteamiento del gobernador llevaba implícita la idea de que, al conocer la forma de vida de los cristianos, los indígenas se mostrarían mucho más proclives al contacto constante con ellos y, por extensión, a la conversión. Tras todos estos preparativos, el 29 de agosto de 1532, partió desde el puerto de Acla rumbo a la Culata del Golfo de Urabá Julián Gutiérrez junto a su esposa Isabel Corral, otro indígena llamado Gonzalo, algunos otros *lenguas*, y las 11 indias y los 2 indios que debía devolver, además de otros 9 ó 10 cristianos.

Su matrimonio con Isabel Corral influyó de manera decisiva en el nombramiento de Julián Gutiérrez para el encargo de realizar los viajes hacia Urabá. Corral, de hecho, se convirtió en el personaje clave para el devenir de las relaciones entre indígenas y castellanos, además de para la configuración del espacio político de la región. El propio gobernador Barrionuevo insistiría unos años más tarde en que «si yo ynbie a Julian Gutierrez por capitan fue porque asi convenia que hera la llabe para apaziguar toda la tierra y su muger porque syn el los yndios no venian [...] esta su muger ha sido parte para apaziguar toda la tierra»¹²¹. Su labor no se limitó a la de mera traductora, sino que ella misma personificaba la confianza y la capacidad para generar espacios y dinámicas de conexión intercultural. Corral era hermana de un miembro prominente del cacicazgo de Urabá —fue llamada «cacica» por Pascual de Andagoya en una carta al rey, destacando con ello su importancia¹²²—, y formaba parte de un

¹²⁰ Información sobre los indios de Miguel Juan de Ribas, 11 de marzo de 1531, AGI, Panamá 234, L. 4, f. 113r-114r.

¹²¹ Carta de Francisco de Barrionuevo a Su Majestad, 30 de enero de 1536, AGI, Patronato 194, R. 34.

¹²² Carta de Pascual de Andagoya al rey, 26 de julio de 1536, AGI, Patronato 194, R. 32.

grupo de naborías que habían pertenecido a Diego de Corral. Este grupo de servidores indígenas, compuesto por seis personas, le había sido concedido a Diego de Corral en 1520 merced a su participación en las primeras fundaciones y especialmente en la de Santa María del Antigua del Darién¹²³. Diego Corral se había casado, de hecho, con una indígena, de la que nació su hija Ana Corral. A la muerte de su padre, quien había pasado unos años como procurador de Santa María en la corte, Ana Corral fue «naturalizada» como castellana – siendo, paradójicamente, natural de la tierra- para poder heredar, entre otras cosas, el grupo de naborías que en ese momento eran seis, de la cuales la principal era Isabel Corral. El grupo de naborías, de hecho, pasó a «pertener» a Isabel de Corral al morir Ana, con quien podría guardar algún parentesco. Julián Gutiérrez tuvo que defender los derechos de su mujer ante el interés explícito del hijo de Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco Valdés, por hacerse con los servicios del grupo, consciente de su importancia para garantizar la paz y el comercio con la culata del golfo de Urabá. Cuando este conflicto tuvo lugar, Julián Gutiérrez ya estaba casado con Isabel Corral e inmerso de lleno en sus viajes entre una orilla y otra del golfo de Urabá y aventuraba que, «los caçiques e indios de la costa se alterarían de no ver en mi poder los dichos indios que alla suelo llevar por ynterpretes»¹²⁴.

Isabel Corral, por lo tanto, había adquirido una importancia extraordinaria como agente estratégico para la negociación de las paces entre los caciques y las ciudades del istmo, particularmente Acla. Esto explica también el interés tan fuerte de Pedro de Heredia, gobernador de Santa Marta, por hacerse con sus servicios, puesto que consideraba que «la conquista e paçificação desta tierra no se a de fazer syn la dicha Ysabel Corral a cabsa de ser lengua de Urabá»¹²⁵. Isabel Corral era considerada por todos los agentes implicados el personaje más importante del istmo, clave para garantizar la estabilidad de la región y, como indicaba Heredia, ella misma representaba, como lengua, a todo un territorio como era Urabá¹²⁶. El valor de Isabel extendía más allá que su capacidad para comunicarse al encarnar simbólicamente la confianza necesaria para poner en contacto ambas realidades culturales.

¹²³ Bethany ARAM y Rafael OVANDO (2017), pp. 129-148.

¹²⁴ Asiento... AGI, Patronato 193, R. 17, f. 184.

¹²⁵ Información del gobernador Pedro de Heredia sobre puntos del real servicio. 12 de diciembre de 1534, AGI, Patronato 193, N. 21. Otros testimonios de esa misma información daban aún más relevancia a la figura de Isabel. Un testigo declaraba que «no se puede fazer la paçificação ni conquista de la tierra de Hurava syn la dicha Ysabel Corral por ser muy buena lengua de la dicha tierra e ser hermana de un caçique prinçipal e no aver otra en toda la tierra entre cristianos e que sy no se oviese lengua como la dicha Ysabel Corral lo es su magestad reçibiria deserviçio e la tierra gran perjuizio e avra mucha muerte de cristianos e con la dicha Ysabel Corral se quitaran e evitara todo esto por ser tan buena lengua».

¹²⁶ La identificación cultural de grupos indígenas a través del uso de una lengua común fue puesta de relieve hace años por Kathleen Romoli al relacionar la presencia mayoritaria en el istmo de los indios llamados Cueva con el uso común de la lengua del mismo nombre en Kathleen ROMOLI (1987), *passim*.

En su caso, su doble filiación, en primer lugar, como «cacica» y, además, vinculada a las élites castellanas, hacía de ella la personificación de las relaciones que se querían llevar a cabo. Su labor como *lengua* no se limitaba a la traducción de palabras sino a que, como se verá a continuación, actuaba como enlace cultural y transmisora de confianza entre castellanos e indígenas. Los *lenguas* eran un elemento clave para garantizar el éxito de los contactos, tanto en los espacios abiertos como, particularmente, dentro de las ciudades para descodificar y transmitir las relaciones y para tender puentes también simbólicos entre distintas sociedades¹²⁷. La conversación intercultural precisaba de personajes que tuvieran la capacidad de comprender y expresarse, tanto oralmente como con el lenguaje no verbal, en todos los ámbitos.

Tras la reunión en el cabildo de Acla de agosto de 1532, se diseñó una estrategia que se puso inmediatamente en marcha. La devolución de los indios e indias ya convertidos a su lugar de origen resultó efectiva, puesto que apenas 15 días más tarde, el sábado 14 de septiembre al alba, mientras todo el pueblo, gobernador incluido, comenzaba a entrar en la iglesia para oír misa, se oyó la llegada de Isabel Corral junto a sus compañeros de expedición y 8 indios naturales de Urabá. Nada más llegar condujeron a los indígenas a la misma iglesia, donde el gobernador pidió a Corral que los sentase a todos en el mismo banco. Comenzó la misa y, la primera vez que el gobernador se arrodilló, Isabel les dijo que lo debían hacer también «e después hacían lo mismo sin que les dijese nada»¹²⁸. A partir de ahí, el programa de actos diseñado para la embajada pretendía promover entre los indígenas el deseo de vivir en poblados y de apuntalar el amor y la amistad que ya se habían iniciado y, además, que tras el retorno a sus poblaciones les contaran estas experiencias a los caciques y todos sus vecinos.

El gobernador los recibió en su posada y los abrazó, explicándoles que eso era muestra de amistad entre los cristianos, y hubo «muchas cosas de pláticas de que los dichos indios mostraban mucho contento y alegría». Los indígenas recién llegados confiaban todos sus movimientos a la lengua Isabel –definida como «india *ladina* e de buen entendimiento» – que se encargaba de explicar cómo actuar en la mesa o cómo tratar al gobernador¹²⁹. La vida

¹²⁷ Sobre el significado del término «ladino» y su importancia en la relación entre indios y cristianos, Rolena ADORNO (1994), pp. 378-402; sobre la figura –paralela a la de Isabel en varios aspectos– de la Malinche como traductora cultural, Roberto VALDEÓN (2013), pp. 157-179; sobre la figura del intermediario femenino o «go-between» entre castellanos e indígenas, Julianas BARR (2007).

¹²⁸ Asiento... AGI, Patronato 193, R. 17, f. 186v.

¹²⁹ A los castellanos les sorprendió mucho que los indígenas sólo comiesen pescado, pan de maíz y algún pan de Castilla y que «siempre que han de comer se lavan las manos e en acabando de comer hace lo mismo e se enjuagan la boca que hasta hoy no se ha visto hacer a indios», además destacaban su blanca dentadura y que «beben vino hecho de maíz e cuando no lo tienen beben agua», Asiento... doc. cit., AGI, Patronato 193, R. 17, f. 191r.

urbana que los castellanos *disfrutaban* debía exponerse de manera muy visible, de manera que rápidamente tras la comida, al transmitir los indígenas que era «muy amigos de ver bailar e cantar e tañer», se organizó todo un espectáculo de integración y celebración multicultural en el que algunos negros tocaron instrumentos y bailaron hasta bien entrada la tarde en la que las canciones fueron sustituidas por carreras de caballos con cascabeles. Desde ese momento, prácticamente cada paso que los indígenas dieron en el pueblo se acompañaba, además de con el escribano que levantó acta de los hechos, con música y así, con un grupo de negros tocando delante de ellos, llegaron al día siguiente a la iglesia para escuchar la misa¹³⁰.

Los indios se interesaban por cosas variadas y preguntaban tanto si en todos los lugares donde vivían cristianos se celebraban las misas de igual manera como si las mujeres a las que observaban tras salir de la iglesia también sabían bailar y cantar como los hombres. El gobernador, en consecuencia, organizó que todos los vecinos –hombres y mujeres- del pueblo acudiesen a su posada a cantar y bailar para deleite de sus visitantes, que se unieron a los bailes «e traían tan a compás los pies como el que mejor andaba allá e decían que se holgaban mucho e que eran muy buenos los cristianos e que bailaban mejor que en su tierra»¹³¹. La fiesta no terminaba ahí, sino que en la misma plaza del pueblo se organizó una capea con un torillo pequeño, un juego de cañas y otro llamado «correr la sortija» y, tras esto, un caballero salió a la caza de conejos hasta que un grupo disfrazado de «moros» lo tomaron cautivo hasta que «salió Santiago a caballo con una cruz y una bandera en la mano, vestido de grana e [en] remedio, ayudó al cristiano» y salió corriendo tras los «moros» para castigarlos¹³². Las lenguas se encargaban de ir explicando a los indígenas «que todo aquello era burlando e todo se hacía para darles placer», y que por eso se acompañaba todo de canciones y bailes, ante lo cual se mostraban entusiastas y declaraban que querían volver más veces a visitar a los cristianos.

El caso de la recreación de los moros y cristianos ofrecería una imagen de los castellanos como benefactores y vencedores de enemigos culturalmente extraños. El contenido de esa recreación aspiraba a incorporar a los indígenas al bando de los cristianos frente a enemigos comunes –que podrían estar encarnados en otros grupos indígenas e,

¹³⁰ Ibid., f. 187r.

¹³¹ Los bailes de los indios del Nuevo Mundo llamaron tanto la atención de los europeos que inspiraron varios grabados y pinturas, e incluso algunos mandatarios europeos como Johan Maurits en La Haya o María de Medicis en Rouen organizaron bailes en sus palacios que, a su vez, fueron objeto de diversos grabados, ver Ernst VAN DEN BOOGAART (2006), pp. 177-201, esp. n. 2; con un enfoque más centrado en la interpretación por parte de los europeos de la danza indígena y cómo ésta afectó a la propia danza en Europa, ver Alessandro ARCANGELI (2011), pp. 189-202.

¹³² Asiento... doc. cit., AGI, Patronato 193, R. 17, f. 188r.

incluso, en otros de españoles como podría ser el caso de Juan de Ribas o Pedro de Heredia con el fin de hacer más sólidas las relaciones. En este caso, Santiago Matamoros no se habría transmutado en Santiago Mataindios –como se ha analizado para otras áreas¹³³– sino que lo que se ofrecía era una recreación de un mito que se podía interpretar en clave de reinterpretación de las relaciones interculturales con un objetivo no necesariamente coercitivo¹³⁴. Este tipo de fiestas y juegos, con un gran arraigo en la cultura urbana y cortesana, que combinaban un carácter bélico, lúdico y religioso, fueron un vehículo de refuerzo de la cohesión comunitaria muy común en la Europa moderna¹³⁵. La comunidad de Acla al completo se implicó en las celebraciones en honor de los indígenas, con el objetivo de reforzar los lazos comunitarios, tanto entre los propios castellanos como a su vez con los indígenas.

En los nueve días que los indios estuvieron visitando Acla recibieron todo tipo de favores con los que «holgaban» e incluso se organizó una excursión con un nutrido grupo de cristianos para ir a pescar a un islote vecino. También aprovecharon para conocer el pueblo y ver todas las casas, entre ellas la fragua de un herrero y la cárcel. Dentro de esta había «tres negros presos en el cepo con grillos y cadenas e un cristiano» ante lo cual los indios se espantaron hasta tal punto que pidieron al gobernador que los liberasen «porque en verlos así tenían mucha tristeza.» Tan persuasivos fueron con el gobernador que éste «por les dar placer mandó sacar los dichos presos de fiado e que pareciese que se hacía por amor dellos», tras lo cual se comprometieron a contar a sus caciques todo lo que habían visto y, en general, que «los cristianos eran muy buenos e sabían muchas cosas»¹³⁶. En el momento de la despedida prometieron de nuevo contar cuánto habían holgado «y la honra que les habían hecho e que vendrían acá muchas veces e que también vendrían los caciques», así como sus mujeres e hijos «para que los viese el dicho señor gobernador e se holgasen acá con los cristianos» y pidieron que les dejaran unas canoas y maíz para llevarse de vuelta. Por supuesto, la noche anterior a la partida hubo bailes y canciones. El gobernador se dirigió a ellos en el momento de la despedida para recordarles de nuevo cuánto ganarían si se hiciesen amigos de los cristianos y que ellos les garantizarían que ningún otro cristiano les molestaría en sus asientos y no tendrían que huir por los montes como hasta entonces hacían. En la despedida, el martes 24 de septiembre ya en el puerto y acompañados de vuelta a su tierra por Julián

¹³³ Javier DOMÍNGUEZ (2006), pp. 33-56; Javier DOMÍNGUEZ (2008).

¹³⁴ Sobre los roles contradictorios de los castellanos en el Nuevo Mundo y la complejidad de las adaptaciones de mitos y prácticas culturales medievales al otro lado del Atlántico ver Barbara FUCHS (2001), pp. 1-12

¹³⁵ William Hardy MCNEILL (1995); Máximo DIAGO (2013), pp. 33-56.

¹³⁶ Asiento..., AGI, Patronato 193, R. 17, f. 189v.

Gutiérrez, los indígenas hicieron reverencias, dieron abrazos e incluso se santiguaron antes de embarcar.

El acercamiento de un grupo de indios a la ciudad de Acla no podía haber sido más positivo, según el testimonio levantado por el escribano, para los objetivos de afianzar las relaciones de paz y amistad que se proponían los cristianos con el gobernador y el cabildo a la cabeza. Se había «conversado» a través de bailes, comidas y juegos y, además, se habían entregado productos y canoas por las que, en futuras, expediciones, se recibirían otras cosas. Pronto se puso en marcha la siguiente fase del asiento, que consistía en el regreso de Julián Gutiérrez a Urabá para continuar el intercambio.

Inmediatamente después de la visita de los caciques a Acla, el matrimonio Corral-Gutiérrez comenzó su ciclo de siete viajes comerciales y culturales al otro lado del golfo de Urabá. En el primero de ellos se encargaron de colocar símbolos visibles en la costa que sellasen la confianza generada. En septiembre de 1532, Julián Gutiérrez ofrecía al cacique Guevera situar frente a la costa del golfo de Urabá una gran cruz de madera para informar a todos los cristianos que pasasen cerca de que cristianos e indios «estaban de paz y eran amigos». La cruz, les explicaba a través de la *lengua* Isabel, representaba el lugar en el que Dios había muerto, y que ahora se encontraba en el cielo, adonde ellos también irían si se comportaban como debían pero que, si no, irían al infierno «con el diablo que es muy malo»¹³⁷. Antes de marcharse, Isabel Corral también advirtió a los indios que no colgasen hamacas o cuerdas de la cruz, sino que debían arrodillarse ante ella y besarla cada vez que pasasen cerca.

A finales de agosto de ese mismo año, el gobernador de Castilla del Oro Antonio de la Gama había escrito una carta a «cualesquier personas de cualquier navío, carabela, bergantines o barcos» que llegasen a la culata e golfo de Urabá para avisarles de que ninguno sea osado «a les hacer mal ni daño ni les tomar cosa alguna contra su voluntad», porque estaban en proceso de asentar las paces e amistades con ellos y, por tanto, «yo los tengo so el amparo e protección real de Su Majestad, pues quieren ser sus vasallos» y amigos de los cristianos¹³⁸. Por las mismas fechas el propio Julián Gutiérrez, declarándose vecino de Santa María del Antigua de Acla, escribía también una carta en la que, en virtud de las «paces que yo hice e concerté e asenté», pedía a los cristianos que pasasen por esas costas que no maltratasen ni dañasen a los indios, ni a sus haciendas, «porque no sería causa si lo tal se

¹³⁷ Asiento... doc. cit., AGI, Patronato 193, R. 17.

¹³⁸ Ibid., f. 201v.

hiciese de se alzar e salir del dominio de Su Real Majestad»¹³⁹. El propio Julián Gutiérrez debería entregar él mismo esas cartas a los caciques para que las mostrasen a los castellanos en caso de necesidad y así evitar que otras expediciones pusiesen en riesgo la labor de pacificación que ya estaba en marcha por los vecinos de Acla.

Todas estas muestras de protección serían la respuesta a la petición de los propios indígenas, que vivían atemorizados por la posible violencia de los castellanos, tras las acciones del factor Miguel Juan de Ribas. Tanto De la Gama como Gutiérrez aseguraban a los caciques que el factor ya había sido condenado por sus fechorías y que algunos otros también habían muerto por tratarlos mal –Julián Gutiérrez certificó al cacique Evaraba que «al capitán que vino y les quitó sus indios ya él los había castigado e le había ahorcado y echado de la tierra a los cristianos que le hicieron mal»¹⁴⁰–, por lo que no tenían nada que temer y que, además, ellos les entregarían las cartas de protección y pondrían símbolos visibles como las cruces para disuadir a posibles agresores. La actitud del gobernador y del vecino de Acla formaba parte de un planteamiento general para asegurar la paz en esa zona que nacía de la propia ciudad de Acla y que buscaba asentar un canal de intercambio con los indígenas, que facilitase comercio y conversión a partes iguales. En las instrucciones que Julián Gutiérrez había recibido se insistía en que hiciera saber a los indígenas que «siendo nuestros amigos no tengan themor que ningunos cristianos les vaya a hazer ningún mal ni daño». No perdían, además, oportunidad los castellanos de insistir a los caciques que transmitiesen las bondades de su relación con los castellanos a otros indígenas, para que ellos también se sumasen a los acuerdos cuanto antes y, como una forma de propaganda, estimulasen la extensión de las formas de vida que los castellanos buscaban imponer en esos territorios.

Pronto se produjo el regreso de Julián Gutiérrez Isabel Corral a Urabá para continuar el intercambio. En esta expedición, durante el otoño de 1532, Gutiérrez se encargó de entrevistarse con varios caciques con los que intercambió regalos. Por ejemplo, al cacique Urabá le regaló una silla de mano igual a la que usaba el gobernador de Castilla del Oro, al tiempo que le explicaba que un gobernador era precisamente el equivalente a lo que ellos conocían como el «tíba». La misma dinámica se repetía de manera recurrente con todos los caciques que iba encontrando en su viaje. Primero les convencía de que los cristianos de Castilla del Oro le protegerían de otros cristianos, al tiempo que lo acompañaba de regalos – en una ocasión repartió entre varios caciques «seis camisas de Holanda con sus caperuzas de

¹³⁹ Ibid., f. 202v.

¹⁴⁰ No se refería al factor Ribas, que escapó de la justicia en principio, aunque no tardaría mucho en morir, sino al capitán de la expedición Estebán Milanés, que ya estaba muerto en el momento en que se plantea el asiento de las paces.

grana guarnecidas de terciopelo azul y cuchillos y peines y anzuelos y agujas»- por los que no aceptaba ningún pago monetario –aunque sí otros regalos como puercos o pavas-¹⁴¹. Una vez establecido este contacto, los propios indígenas le pedían que sacase hachas y puñales porque querían rescatar, «y las hizo sacar y rescató con los dichos caciques e indios treinta y seis hachas y puñales e dieron por ellas ciertas piezas de oro e ciento e sesenta e cinco pesos de oro». La voz de que Gutiérrez y Corral venían «en son de paz» se iba extendiendo entre los cacicazgos locales incluso antes de su llegada y este aprovechaba tanto para rescatar como para hacer «entender por la dicha Isabel lengua como el rey de Castilla que estaba en Castilla era muy grande señor y señor de todo el mundo de todas las tierras de indios» y que él le había enviado para hacer que los cristianos trataran muy bien a los indios y entablasen amistad. El 13 de octubre, apenas tres semanas después de su partida, estaba de vuelta en Acla tras haber visitado varios cacicazgos y haber asentado los principios de una fructuosa relación que continuaría hasta los eventos de 1534, ya descritos, con el ataque de Pedro de Heredia a la ciudad para secuestrar a Isabel Corral y a Julián Gutiérrez.

La conversión al cristianismo –argumento que legalizaba toda la presencia castellana en Indias- implicaba primeramente la atracción de los indígenas a la amistad –o el amor- con los castellanos y de la transmisión de su forma de vida¹⁴². El acercamiento a través del intercambio facilitaba el contacto en forma de conversación del que los castellanos se beneficiarían de manera evidente. La autonomía de las poblaciones, en el caso de Acla, acentuada por su excentricidad geográfica respecto a Panamá y su relativo aislamiento, provocaba que fuesen contactos entablados en y desde las ciudades los que iniciaban y asentaban las relaciones con los indios previas a su conversión. Los castellanos, una vez acomodados en sus poblaciones y viviendo bajo los principios de la policía estaban en disposición de recibir y enviar embajadas como la descrita y mostrarles las ventajas y placeres que ofrecería la vida comunitaria en ciudades frente a las desventajas que implicaría vivir derramados. Los castellanos se ganarían de esta forma también la confianza de los indios con los que más adelante entablarían relaciones de tipo comercial.

La iniciativa del contacto era local –tomada, como en este caso, durante una reunión del cabildo- y como una iniciativa local era también percibida por los indios, que preguntaban si la forma de vida que practicaban –tanto religiosas como sociales- era generalizable para el resto de los cristianos. A su vez, los vecinos de Acla, con Isabel Corral y Julián Gutiérrez a la cabeza, se mostraban como los defensores de los indios de la culata de Urabá frente a otros

¹⁴¹ Asiento..., AGI, Patronato 193, R. 17, f. 197v.

¹⁴² Tamar HERZOG (2014), p. 97 y ss.

cristianos, pasados o futuros, que los quisiesen perturbar, reforzando de nuevo el carácter más bien independiente de cada gobernación y, concretamente, de cada villa o ciudad, que tomaba sus propias iniciativas de relación con los indígenas, incluso frente a otras gobernaciones o ciudades castellanas.

En octubre de 1534 las tropas enviadas por Pedro de Heredia atacaron Acla con el objetivo principal de secuestrar a Julián Gutiérrez e Isabel Corral, tomando con ellos todo el oro que estos habían acumulado en otro viaje por Urabá. Tras este asalto, los vecinos de la ciudad comenzaron a elevar quejas ante el probable despoblamiento de Acla que se alimentaban sobre todo por el riesgo de que, desaparecida Acla, los indígenas perdieran la confianza que ya tenían con ellos y volvieran a su supuesta belicosidad anterior. El interés por asentar y afianzar las paces con los indígenas por parte de la ciudad de Acla se entiende, así, como un interés por afianzar la propia posición de la población dentro de la gobernación. Ante la posible pérdida de su población, los habitantes recordaban a las autoridades todo el camino que llevaban recorrido para convertir a los indígenas y que se perdería si la ciudad efectivamente se abandonase. Uno de los testigos consultados tras la entrada de Alonso de Cáceres se quejaba abiertamente de que, tras la detención de Gutiérrez y su mujer «habrá causa que este pueblo se despueble», por lo cual los indios se alteraron «y es notorio que se alzarán e se quebrantarán las paces e amistades que con esta dicha ciudad tiene, que ha tanto tiempo que esta dicha ciudad ha procurado de los poner en paz como ahora están»¹⁴³. Los indios, según este planteamiento, habían hecho paces con Acla en concreto y no con los castellanos o los cristianos en general, de manera que, desaparecida Acla, desaparecerían también las paces acordadas.

Pese a la fundación de San Sebastián de Buenavista en la orilla opuesta del golfo de Urabá, Isabel Corral y Julián Gutiérrez mantuvieron una cierta preeminencia social y cultural, puesto que siguieron siendo considerados personajes clave para el mantenimiento de la paz. No en vano, a su muerte se produjo un pleito, protagonizado por el regidor de Acla Alonso Gutiérrez, contra el gobernador Álvaro de Sosa, por la custodia de sus hijos quienes mantenían un cierto estatus como personificación de la capacidad de sus padres para mantener los contactos¹⁴⁴. Desde el asiento de paz comenzado por el cabildo de Acla y concretado por Isabel Corral y Julián Gutiérrez se había iniciado una relación *conversatoria*

¹⁴³ Informaciones de oficio y parte: Pedro de Heredia y Antonio de Cáceres, capitán, 1534, AGI, Panamá 61, N. 13.

¹⁴⁴ Alonso Gutiérrez, regidor de la ciudad de Acla en Tierra Firme, con Álvaro de Sosa, sobre una curaduría de dos menores, 1555, AGI, Justicia 1044, N. 4, R. 1.

entre la ciudad y los caciques, cuyos resultados habían contribuido a extender una idea común de policía destinada a un entendimiento mutuo.

Conclusiones

La fundación de ciudades y su sostenimiento fue la principal vía práctica para sustentar el argumento fundamental de la presencia castellana en Castilla del Oro. Las llamadas conquista y conversión fueron dos fenómenos fundamentalmente urbanos en el territorio del istmo de Panamá. Las ciudades, con cuya existencia se definió y articuló todo el espacio jurisdiccional de la región, también ocupaban su espacio simbólico, al desarrollar una sociabilidad que se basaba en la extensión de la policía urbana. Así, la conversión de los indígenas, principal legitimación de la conquista desde las Bulas de Concesión, se articuló a través de la adaptación de conceptos cívicos que encapsulaban un estilo de vida determinado, y que fomentaban la evangelización. La importancia de las ciudades de Castilla del Oro no radicaba en su extensión física o en la grandeza de sus edificios, sino en su capacidad para lograr la extensión de la policía. Para ello era necesario el asentamiento de los vecinos y la identificación de estos con la comunidad.

La unión y formación/asentamiento de familias, unido a los intentos de espesar las relaciones comunitarias a través del cumplimiento de las normas morales, contribuyeron a asentar la *civitas* que, eventualmente, debía incorporar a los indígenas vecinos. En la dicotomía clásica con la que se definía la ciudad desde Aristóteles, la comunidad urbana –*civitas*– resultaba mucho más importante que los edificios y los muros –*urbs*– de las ciudades de Castilla del Oro. Los flujos de relaciones comunitarias de naturaleza cívica que componían la definición de *civitas* debían extenderse para incluir a los indígenas. La extensión requería, a su vez, una adaptación para acomodar dichos principios cívicos al contexto intercultural en el que ahora debían desarrollarse.

En Castilla del Oro, durante la primera mitad del siglo XVI, no se planteó la separación de los indígenas de los castellanos, sino que se aconsejó y escenificó su incorporación al tejido comunitario castellano. En este sentido, desde el comienzo de la ocupación del espacio de Castilla del Oro por los castellanos, se produjo una adaptación de las normas y los principios teóricos tradicionales a las nuevas circunstancias y orientados a la «pacificación» y «conversión» de los indígenas –a su incorporación a la *policía*–. En primer lugar, las categorías de vecindad y naturaleza se vieron sujetos a cambios y variaciones que permitían a los individuos una notable movilidad geográfica y una re-identificación constante.

La vecindad pasó a ser múltiple y su definición a estar sujeta a criterios novedosos, que no tenían tanto que ver con el cumplimiento de los principios normativos reguladores – permanencia en la tierra o adquisición de propiedades-, sino que se regulaban a través de la identificación comunitaria –lo que aquí se ha llamado «el amor a la tierra»-. El concepto de «natural de la tierra» también se recodificó, alterándose su uso relativo a los indígenas para generar una paulatina identificación de los castellanos en el Nuevo Mundo. A su vez, la naturaleza no se ceñía a un ámbito geográfico estrictamente definido, sino que fluctuaba para identificar a aquello que se asociaban con un reino o una ciudad, ya fueran castellano o relativo al Nuevo Mundo.

Para lograr la construcción de este tejido social fue fundamental el proceso de agregación de familias o parentelas, que creaban unos lazos identitarios importantes en la base de la comunidad política. Esta se encargaba de generar las dinámicas sociales sobre las cuales se asentaron los cimientos de las relaciones interculturales entre indígenas y castellanos. Para ello se utilizaron una serie de principios teóricos que quedaron alterados al ser puestos en práctica en los territorios del Nuevo Mundo.

El concepto de conversación, central para la definición de la ciudad europea, quedó adaptado para incorporar a los indígenas en la ecuación y convertir la *civitas* castellana en una *civitas* que necesariamente debía abrirse para incorporar –no excluir- a «los otros». La solución que se arbitró para evitar que los indígenas vivieran «derramados», tanto a través las órdenes emitidas desde la corte como desde la propia autorregulación comunitaria, contó con su incorporación a la comunidad urbana, primero a través del comercio y más adelante mediante interacciones y relaciones más complejas como los matrimonios mixtos y la creación de parentelas igualmente mixtas. La conversación intercultural y política, que se planteaba como principio fundamental para lograr la conversión de los indígenas, llevaba asociada la protección contra la violencia potencial y se articulaba también en términos de amistad e incluso amor.

Los indígenas y los castellanos que participaron en los diálogos interculturales en Castilla del Oro contribuyeron también a equiparar políticamente distintos ámbitos sociales. No se trataba, en este caso, de un diálogo entre dos entidades políticas equivalentes o tradicionales –dos imperios o dos naciones-, sino que fueron las relaciones diplomáticas informales, construidas a través de interacciones en un plano local y con intereses regionales, las que terminaron por definir la naturaleza de las entidades políticas participantes. Para los miembros del cacicazgo de Urabá, por ejemplo, no existía más interlocutor en el momento de los intercambios que la ciudad de Acla y sus relaciones bilaterales funcionaban en esa

escala. Por ende, se puede constatar que las relaciones de la Monarquía en términos globales se fraguaron en multiplicidad de relaciones de confianza tejidas en un ámbito local muy concreto, casi personal, y en las que estaban implicados lazos familiares, vecinales y de naturaleza que se adaptaban para configurar instituciones más complejas. Los agentes implicados no tenían, además, necesariamente una vinculación institucional con la Monarquía sino que, como vecinos con sus propios intereses, contribuían al mantenimiento de relaciones que afectaban a la configuración del espacio político. La importancia de las ciudades, por lo tanto, en el entramado de la Monarquía Hispánica transcendía la mera organización política y social. La labor de conversación y establecimiento de relaciones personales resultaba capital para conseguir la interacción cultural que justificase su presencia en el Nuevo Mundo y contribuye a explicar la longevidad de la presencia castellana en Indias desde 1492 en adelante.

Capítulo 5

Individuo, ciudad y Monarquía.

Antigüedad reciente y nuevas identidades locales

Las comunidades urbanas de Castilla del Oro definieron sus propias identidades en torno a la idea de *civitas* y a través de la construcción y confluencia de diversas identidades individuales. La comunidad política, forjada a través de interacciones personales, daba sentido político a la ciudad y también afectó a las fórmulas con las que las poblaciones de Castilla del Oro accedieron al título de ciudad. Desde la fundación de las primeras poblaciones del istmo se produjo un proceso acelerado de proyección identitaria de las mismas, primeramente, a través del acceso a la categoría de ciudad y, más tarde, con el asentamiento del tejido social y de una memoria colectiva relativa a diversos eventos acaecidos en las poblaciones. Este proceso alteró la definición jurídico-institucional de la ciudad, así como las propias categorías con las que los vecinos aspiraban a lograr procesos particulares de ascenso social.

La esencia constitutiva de la sociedad de Antiguo Régimen se basaba en su carácter desigual y representada como estable e inmóvil, si bien, a pesar de estos principios, la movilidad social fue una aspiración relativamente común. La sociedad de Castilla del Oro supuso, para multitud de individuos, una oportunidad para poner en marcha dicha aspiración. Aunque la sociedad se sustentaba sobre valores tradicionales muy arraigados —en un sistema «osificado y de mudanzas lentas y prefijadas»—, se fue adaptando a cada situación

y los individuos utilizaron los recursos a su alcance para intentar medrar socialmente¹. En general, el mismo ideal de nobleza que operaba para los individuos lo hacía para las ciudades y villas en tanto que entidades colectivas². Alonso de Cartagena lo resumiría de manera muy clara a mediados del siglo XV, anticipando la gran difusión de este principio social: «así como decimos nobles a las personas singulares, así decimos nobles a las ciudades e a los regnos»³. La mentalidad del ascenso social formaba, además, parte muy prominente de la naturaleza de la cultura política urbana en la Europa moderna⁴. Los valores que sostenían el sistema social –desigualdad, honor, honra, limpieza⁵– debían, por la pura lógica interna de la cultura política, prevalecer, si bien los individuos actuaban para adecuarlos a las circunstancias de cada contexto sin que el sistema perdiese esa lógica interna⁶. En este sentido, la conformación de los imperios supuso una oportunidad para la creación o adaptación de nuevas élites a nivel europeo que construían nuevas identidades basadas en el conocimiento local⁷.

En el Nuevo Mundo, y en concreto en Castilla del Oro, desde el propio inicio de la conquista, el aliciente del ascenso social estuvo muy presente, y más con el asentamiento en poblaciones⁸. En un contexto de creación de un nuevo espacio político como el de Castilla del Oro, y con la movilidad geográfica como telón de fondo, el campo para la exploración de nuevas estrategias de ascenso social estaba abierto⁹. Esta voluntad de ascenso social en el Nuevo Mundo se sustentaba también, por supuesto, en los valores tradicionales vinculados

¹ Antonio M. HESPANHA (2006a), pp. 121-143, la cita en p. 138. El mismo argumento, que busca mostrar la complejidad de la movilidad social en el antiguo régimen reconstruyendo el lenguaje que se aplicaba en la época a los procesos de ascenso social, se encuentra en castellano en Antonio M. HESPANHA (2006b), pp. 21-41.

² Adeline RUCQUOI (1988), pp. 195-214; José Antonio GUILLÉN (2015), pp. 227-254.

³ Alonso DE CARTAGENA (1959), p. 209; Sobre la participación de Cartagena en el concilio de Basilea y la elaboración y fuentes del *Discurso* ver Luis PARRA (2002), pp. 463-478. Dentro de las propias poblaciones también había diferencias, como indicaba la Pragmática de las Cortesías de 1586 donde se indicaba que el título de *señoría* debería reservarse exclusivamente a los marqueses, condes, comendadores de órdenes mayores, presidentes de consejos y chancillerías «y no otra *persona* alguna, excepto a las ciudades cabeza de reino, y cabildos de Iglesias Metropolitanas», Pragmática en que se da la orden y forma que se ha de tener y guardar, en los tratamientos y cortesías de palabra, y por escrito y en traer coronelles y ponellos en cualesquier parte, y lugares. Amberes, 1586, f. 5.

⁴ James AMELANG (1986), p. 71.

⁵ Sobre las condiciones tradicionales de acceso a la hidalguía en Castilla, ver Irving A. A. THOMPSON (1985), pp. 379-406.

⁶ Enrique SORIA MESA (2000); Mauro HERNÁNDEZ BENÍTEZ (1995), p. 233 y ss.

⁷ Bartolomé YUN CASALILLA (2009), pp. 11-35.

⁸ Según Romero, «cuando el conquistador se transmutó en colonizador, el rasgo más vigoroso de la nueva mentalidad fue la ideología del ascenso social», José Luis ROMERO (1976), p. 112; Pilar SANCHIZ OCHOA (1988), pp. 81-94. Sobre los distintos móviles de los conquistadores y su «transformación social» ya advirtió en los años 50 del siglo XX José DURAND (1953) y también en José DURAND (1954), pp. 497-515; Guillermo Céspedes del Castillo, por su parte, asimila la voluntad de ascenso social de los conquistadores con la tradición de la reconquista y la cruzada por lo que «comprendieron que la ya extinguida frontera peninsular del medioevo y sus oportunidades de ascensión social se habían abierto de nuevo para los inteligentes, los fuertes, los audaces y los afortunados», Guillermo CÉSPEDES DEL CASTILLO (1997), pp. 23-41.

⁹ Jean-Paul ZÚÑIGA (2007), pp. 153-172.

a las nociones clásicas de honor u honra vinculadas a la nobleza, si bien las circunstancias de Indias hacían que los méritos que acreditaban ese honor fueran diferentes a los tradicionales castellanos.

Los motivos por los que una villa era convertida en ciudad o un individuo intentaba alcanzar una posición social privilegiada resultan un buen indicativo de cuáles eran los valores sobre los que se asentaba la sociedad¹⁰. La adaptación de los valores en Castilla del Oro, así como un uso estratégico de los conceptos tradicionales, abre la puerta a una interpretación de las categorías sociales como construidas desde abajo y a través de la práctica. La nobleza –o el ennoblecimiento– no vendría exclusivamente dirigido desde arriba y oficializado, sino que comenzaría a fraguarse de una manera horizontal, elevándose cuándo fuese necesario¹¹. El descubrimiento y ocupación de los territorios de Tierra Firme, especialmente en su primera fase a partir de 1513 abrió la puerta a una movilidad de radio mayor, tanto geográfica como social, de unos individuos cuyos objetivos vitales también se vieron adaptados a las nuevas circunstancias, al verse en cierto modo liberados de anclajes tradicionales. Esta movilidad estaba facilitada por la distancia respecto a Castilla y también por una menor implantación de las instituciones tradicionalmente reguladoras de esos procesos, favoreciendo con ello la adaptación tanto de los conceptos que se manejaron como de las estrategias individuales.

Sobre la adaptación de las estrategias individuales, se produjeron ajustes prácticos de principios teóricos de larga tradición. Fernando Pizarro y Orellana, miembro del Consejo de Órdenes, escribió en 1639 –como suplemento a su obra magna *Vidas de varones ilustres de Indias*– un *Discurso legal de la obligación que tienen los reyes a premiar los servicios de sus vasallos, o en ellos o en sus descendientes* en el que resumía los motivos que habían animado a esos ilustres varones a llevar a cabo sus hazañas y, al tiempo, buscaba justificar por qué motivos todos ellos y en especial su antepasado, Francisco Pizarro, debían ser gratificados. Según este autor, el rey debía ser justo por principio, de acuerdo con las propias «leyes del agradecimiento», a las que él propio sistema le obligaba y conceder mercedes para no acumular un «gravamen grande en su conciencia» por romper «el orden admirable de la providencia política» y quebrar la justicia distributiva que sostenía, junto a la conmutativa y la legal, el entramado

¹⁰ Sigo en este punto el planteamiento de I. A. A. Thompson según el cual «the criteria by which a society defines its elites are among the clearest expressions of the values of that society», Irving A. A. THOMPSON (1985), p. 381 y ss; Antonio Domínguez Ortiz, quien defendía que los valores de la nobleza eran la ideología dominante en toda la sociedad del antiguo régimen y no sólo entre las clases privilegiadas, en Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ (1985), *passim*. Adeline RUCQUOI (1997), pp. 273-298.

¹¹ Tomás MANTECÓN MOVELLÁN (2012), pp. 435-458, esp. p. 446 y ss.

que aseguraba la «conservación y aumento» de la república¹². La justicia distributiva era «la universal», pues atendía al reparto y distribución de los premios según su merecimiento y mantendría, con ello, el equilibrio de todo el sistema¹³.

A través de la concesión de mercedes, el monarca garantizaría el pago de servicios, pues «no sería justo que al que sirvió se le niegue lo que mereció» y promovería, al mismo tiempo, la realización de futuros servicios ya que «grandes premios animan a grandes hechos, y siempre los que los emprenden tienen la remuneración delante de los hechos»¹⁴. Las mercedes y los privilegios individuales eran una fórmula para mantener cohesionado el tejido social y promover, al mismo tiempo, la realización de servicios que se basaba en los principios de la reciprocidad de raíz más clásica de corte ciceroniano según los cuales «no tornar non es cosa lícita de buen varón»¹⁵. El sistema político de la Monarquía Hispánica se asentaba, pues, sobre un equilibrio entre los servicios ofrecidos personalmente al rey y las mercedes que éste concedía graciosamente a aquellos que los ofrecían, en un entramado que se ha considerado como «una principalísima agencia de estructuración de las relaciones políticas»¹⁶. Esta «economía de la gracia» alentaba unos mecanismos de lealtad cuya base no estaba en la recompensa material sino simbólica y cuyos beneficios se medían a largo plazo¹⁷.

A través de la concesión de mercedes el monarca se mostraría gracioso y generoso – como correspondía a un *buen varón*–, al tiempo que generaría una lealtad entre sus vasallos, que se prestarían voluntariamente a actuar a favor de la Corona. El vínculo así generado entre rey y súbditos, por lo tanto, sería inamovible y casi perpetuo pues los servicios se premiaban con mercedes que, a su vez, comprometían a futuros servicios que también heredarían los sucesores¹⁸. Se aunarían, pues, en un solo acto los intereses individuales con los intereses globales de la Monarquía en un juego de equilibrios que generaba lealtad del vasallo hacia el

¹² Bartolomé Clavero defiende el origen religioso de esa obligatoriedad: se trataba «de una mentalidad del beneficio gracioso religiosamente obligada, sin visos ni posibilidad de otra cosa, sin libertad para ello», Bartolomé CLAVERO (1991), p. 93.

¹³ Fernando PIZARRO Y ORELLANA (1639), *passim*; la justicia conmutativa, era la «originada del comercio por contratos de particular a particular» y la legal, la «que atiende al orden, y proporcionada rectitud, enderezado a la común utilidad de todos, concerniente a la conservación y al aumento». Una definición de justicia distributiva, de la que la merced era parte fundamental en Salustiano DE DIOS (1993), p. 103, n. 105.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Cicerón, *op. cit.*, y continuaba argumentando a favor de la generosidad que «si no dudamos hacer bien aquellos los cuales esperamos que nos aprovecharán, cuáles deberíamos ser en aquellos que ya nos aprovecharon». Ver también, sobre esto, Silvio ZAVALA (1964), p. 21.

¹⁶ Antonio M. HESPANHA (1993), p. 154.

¹⁷ Sobre los límites de la *gratuidad* de los servicios, ver Julian PITT-RIVERS (1993), pp. 280-321.

¹⁸ Stuart SCHWARTZ (1978), pp. 23-37.

rey y, al tiempo, promovía el esfuerzo individual en el que se basaba la tendencia y el deseo de ascenso social¹⁹.

Esta lógica de remuneración alcanzó gran desarrollo en Castilla del Oro durante las primeras décadas del siglo XVI, en parte a causa de la distancia y de la falta de instituciones estables y potentes que articularan las relaciones sociales y políticas. En este capítulo se analizará de manera práctica la puesta en marcha de este sistema, a través de los intentos de ascenso social colectivo e individual, para componer un acercamiento tanto a la adaptación de los valores tradicionales como a las circunstancias concretas que acompañaron esos procesos. Independientemente del «éxito» de cada uno de los casos de promoción social analizados, se tratará de mostrar cómo funcionaba y se adaptaba esta economía de la gracia y las particularidades regionales con las que se encontró en Castilla del Oro y que pusieron coto, por ejemplo, a la extensión de las revueltas del estilo de la de los Pizarro. Conjuntamente a este planteamiento se analizará la creación de una identidad urbana colectiva, determinada por la concurrencia de la gestación de las memorias individuales relativas a acontecimientos concretos relacionados con la vida de las ciudades.

A través de la lectura y reconstrucción de casos particulares —utilizando para ello los procesos de concesión del título de ciudad a las cinco poblaciones de Castilla del Oro y cerca de 40 casos de individuos— se observará cuáles eran los valores que sustentaban dichas estrategias y cómo se fueron adaptando; al mismo tiempo, se valorará la importancia de los casos locales para el contexto general de la Monarquía Hispánica. El objetivo será determinar de qué manera la Monarquía se nutría en su definición de la concatenación de historias personales y locales. Los procesos individuales y colectivos de ascenso social a lo largo del siglo XVI conocieron trayectorias paralelas y se retroalimentaban, puesto que el ascenso social colectivo repercutía en el de los individuos y viceversa. Los flujos de lealtad que esas historias generaban integraban una construcción local de los espacios políticos globales. La cronología y la particular situación geográfica de Castilla del Oro hacen fundamental comprender los diversos mecanismos que se pusieron en marcha en este contexto para comprender su extrapolación a otras geografías y otros periodos. Este capítulo comienza con el análisis del temprano acceso de todas las poblaciones de Castilla del Oro al título de ciudad. En segundo lugar, se valorará la adaptación a las circunstancias de Castilla del Oro de los valores relativos a la nobleza personal. Las tres últimas secciones se dedican a analizar, a través de las probanzas, las distintas vías que conectaban el servicio individual con la comunidad —

¹⁹ John H. ELLIOTT (2009), pp. 173-192; Juan Carlos RUIZ GUADALAJARA (2009), pp. 104-138; Jose Javier RUIZ IBÁÑEZ y Gaetano SABATINI (2009), pp. 501-536 y Jose Javier RUIZ IBÁÑEZ (2014).

mediante la ocupación de cargos políticos, la defensa de la ciudad frente a amenazas externas y, finalmente, la defensa de la ciudad ante amenazas internas a la propia Monarquía-. El objetivo será lograr una definición dinámica de la lealtad política a través de interacciones en el plano local con repercusiones a gran escala.

1. *Castilla del Oro, territorio sin villas.*

Existía en la Europa moderna un escalafón tradicional que impulsaba a las aldeas a lograr convertirse en villas y a éstas a aspirar a lograr el título de ciudad, máximo galardón aplicable a una comunidad urbana. El título de ciudad se obtenía en Castilla tradicionalmente de dos maneras. La primera –y más directa y honrosa- era la creación de una nueva sede episcopal en una población, que la elevaba automáticamente a la categoría de ciudad. La segunda era el nombramiento real a través de la concesión de un título, como recompensa por los méritos que las poblaciones hubieran acumulado a lo largo del tiempo²⁰.

Tanto para lograr el nombramiento de un obispo como para obtener el título de ciudad por parte del rey, las poblaciones debían acreditar una valía suficiente que las destacase sobre las demás. En la mayoría de las ocasiones los procesos de acceso a los títulos de ciudad eran considerablemente largos y las poblaciones debían acreditar gran cantidad de méritos. Para completar ese *cursus honorum*, las poblaciones debían cumplir con una serie de criterios tipificados por la tradición, con los que se iniciaba un trámite que debía ser refrendado por los correspondientes títulos concedidos por el rey. Los criterios que podían mover tradicionalmente a una villa a convertirse en ciudad se podían resumir en su antigüedad, que implicaba a su vez la nobleza de sus habitantes, y los servicios prestados al rey.

La antigüedad evidenciaba un largo linaje y un tipo de limpieza asimilable a la de las casas nobles, que se habría visto jalonada por una sucesiva concesión de privilegios recibidos del rey, así como estancias reales repetidas, que les habrían hecho ir acumulando honra hasta alcanzar el máximo honor que sería la concesión del título²¹. La estrategia más común para acreditar esta antigüedad fue la edición de historias de ciudades –desde sus remotos orígenes a manos de algún personaje legendario- que comenzaron a proliferar particularmente desde finales del siglo XV, se extendieron a lo largo de toda la Edad Moderna, y contribuían a cimentar las identidades urbanas y cívicas generando un discurso de exaltación urbana²². Los

²⁰ Juan GELABERT (2008a), pp. 765-782.

²¹ Adeline RUCQUOI (2006), pp. 285-325.

²² Santiago QUESADA (1992), p. 5 y ss.; Peter BURKE (2000), pp. 113-122; Francisco ARANDA (2001), pp. 141-168; Alberto MARCOS (1991), pp. 273-288 y, sobre todo, Alberto MARCOS (1997), pp. 15-50; Enrique SORIA

servicios, que eran el segundo punto de apoyo de la concesión de títulos de ciudad, solían ceñirse a hechos de armas en los que la ciudad había tenido un comportamiento heroico en defensa del rey. Los méritos que se incluían en las concesiones de títulos podían ser variados y fueron alterándose con el avance de la Edad Moderna en Castilla²³.

La mayor merced, por lo tanto, el honor más grande, que el rey podía conceder a una población era la concesión del título de ciudad. Este se otorgaba como pago por una serie de servicios y servía como refuerzo de los lazos de fidelidad entre el rey y la comunidad del reino. La nobleza de una población se podría reforzar, a su vez, a través de las concesiones de escudos de armas o el añadido de epítetos al título de ciudad, como los habituales «muy noble y muy leal». Estos últimos tenían un carácter protocolario u honorífico que, no obstante, era *importante* para los habitantes de esas poblaciones. Las ciudades, como *personae fictae*, participaban de manera colectiva de un «honor muy particular» que se filtraba a través del cuerpo social y afectaría a todos y cada uno de los habitantes de la población²⁴.

El proceso tradicional de acceso al título de ciudad se vio alterado de manera radical en Castilla del Oro y, en general, en el Nuevo Mundo. Tanto los plazos habituales para acceder a la categoría de ciudad como la tipología de los argumentos puestos en marcha para justificar ese ascenso fueron adaptados a las circunstancias de Indias. Estos ajustes estaban dirigidos a agilizar los trámites precisos para la elevación a ciudad con el fin de facilitar que las poblaciones fuesen efectivas en su labor. Así, el tiempo de espera de una población para convertirse en ciudad fue muy corto, pese a la distancia respecto al rey, cuya aprobación a menudo ni se esperaba para comenzar a utilizar el título y, además, los criterios que se debían justificar para conseguir se vieron considerablemente relajados sobre los tradicionales. De esta manera, las cinco poblaciones principales de Castilla del Oro –Santa María del Antigua, Acla, Nombre de Dios, Panamá y Natá– fueron elevadas a la categoría de ciudad entre 1513 y 1537 siguiendo diferentes estrategias y movidas por intereses diversos.

Santa María del Antigua del Darién siguió un patrón relativamente tradicional a la hora de conseguir su título de ciudad. La negociación para la creación de un nuevo obispado

MESA (2004), pp. 21-55, esp. pp. 41-42. Un caso de estudio de la adaptación de la ciudad de Granada a su nueva condición como ciudad cristiana tras 1492 en Katie HARRIS (2007).

²³ Los servicios que ciudades e individuos podían acreditar para su ascenso social se vieron alterados a medida que avanzaba la Edad Moderna, especialmente durante el siglo XVIII, y se fueron incluyendo méritos asociados al avance económico o a la labor de carácter más «administrativo» y menos «heroico»; Juan GELABERT (2008c), pp. 329-349.

²⁴ José Ignacio FORTEA (2009), pp. 111-142; de acuerdo con Helen Nader, la mayoría de los habitantes de la Castilla del siglo XVI consideraban que sus derechos, su status legal y su poder político derivaban de su pertenencia a una corporación urbana, Helen NADER (1991), p. 28.

en Tierra Firme había corrido a cuenta de Jerónimo Vich, embajador de Fernando el Católico ante la Santa Sede, quien recibió el 26 de julio de 1513 la orden de presentar una serie de propuestas al papa León X. Jerónimo de Vich debía, entre otras cosas, «criar y erigir un obispado» en la provincia que se conocía como Bética Áurea en la iglesia de Nuestra Señora del Antigua. Con la creación del obispado y la presencia de Juan de Quevedo como su obispo contribuiría de manera directa a que se extendiera la fe católica y a que se «procure de conservar en ella a los moradores de la dicha tierra»²⁵.

La confirmación del nuevo obispado en Castilla del Oro llegó el 9 de septiembre de ese mismo año 1513. Ese día, el papa León X, expidió una bula en la que se exponían los motivos por los que creaba el nuevo obispado en la región llamada Bética Áurea en los documentos relacionados con la Santa Sede. La solicitud –más bien «súplica»- para crear un nuevo obispado, como se lee en la propia bula, había venido de Fernando el Católico, «como gobernador y administrador de los reinos de Castilla y León a los cuales está anexa la dicha provincia».

El objetivo era lograr la conversión de los indígenas. Los moradores de esa región eran «bien capaces de razón» pero debían dejar atrás las tinieblas y venir «a la luz de la verdad y conocimiento de Cristo su creador». La conversión religiosa debería venir precedida por un acercamiento *civil*, de manera que «es necesario primeramente sembrar plantas y hacer cercas donde recojan las ovejas que fueren erradas y recogidas hallen amparo». Es decir, los indígenas no podían seguir viviendo *derramados*, sino que deberían estar *sujetos* a un orden, igual que las ovejas descarriadas necesitarían un pastor que las cuidase. Por ese motivo, la mejor manera de asegurar que esa labor se produjera de una forma sistemática y con garantías, el Papa consideró que debía «ilustrar con título de ciudad a la dicha villa o pago de Nuestra Señora del Antigua» y, por añadidura, erigió «la capilla en iglesia catedral con invocación de nuestra señora del Antigua»²⁶.

Algo menos de dos años más tarde, el 20 de julio de 1515, se despachaba en Burgos, a petición del cabildo, el título de ciudad para Santa María del Antigua firmado por el rey. En el título civil –en oposición al religioso expedido por el Papa- sí que se incluían los criterios que objetivamente deberían justificar su elevación a ciudad. Uno de esos requisitos, el principal, consistía precisamente en que la villa había sido elegida sede episcopal por

²⁵ Real Cédula a Mosén Jerónimo de Vich, embajador en Roma, 26 de julio de 1513, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 26r-28v.

²⁶ Testimonio suscrito por el notario apostólico Francisco de Valenzuela de la erección de la iglesia y obispado de Panamá hecha por su primer obispo don fray Vicente de Peraza, en cumplimiento de la bula de León X, dada en Roma el 9 de septiembre de 1513, AGI, Patronato 1, N. 15, R. 2.

mediación del monarca pero que, a pesar de ello, «nunca la avíamos nombrado ciudad». Los argumentos que justificaban este ascenso se correspondían con los tradicionales en Castilla, aunque adaptados. El título de ciudad destacaba la antigüedad y la nobleza de Santa María, pues era «la primera población que en ella se hizo y el más principal que al presente ay en la dicha provincia de Castilla del Oro». Su antigüedad no se perdía, en este caso, en la noche de los tiempos ni precisaba de la creación de un relato justificativo, sino que se remontaba a apenas cinco años antes. Su «principalidad» dentro del reino de Castilla del Oro también era indiscutible ya que era la única población que en ese momento podía considerarse digna de ser considerada villa, puesto que aún quedaban unos meses para que la villa de Acla comenzase su andadura.

Los servicios de los pobladores de la nueva ciudad se ceñían, precisamente a «ganar el dicho lugar e lo poblar e le sostener», por lo cual habían pasado «muchos trabajos e fatigas e peligros». Por el hecho de haber poblado y sostenido el pueblo la fe católica había sido muy ensalzada y ese era, principalmente, el mérito que se aducía para la elevación. No se mencionaban hechos concretos de armas frente a los indígenas o los corsarios, sino que simplemente se mencionaba el propio hecho de poblar como el mayor servicio colectivo. A partir de entonces, ya que «los que bien sirven deben ser honrados, favorecidos y remunerados» la villa podría ser intitulada ciudad y ser, con ello, «más nobleada y honrada»²⁷. Como un refuerzo del ennoblecimiento, se concedió a Santa María también un escudo de armas descriptivo del lugar de la fundación y sus elementos más característicos ya que incluía un castillo dorado bajo el sol simbolizando el nombre de la región y dos de sus animales característicos, un tigre y un lagarto, rampantes a cada lado, con la imagen de la virgen de la Antigua coronando el conjunto²⁸. La incorporación de animales simbólicos autóctonos en los escudos conmemorativos también podría introducir la posibilidad de ciertas pervivencias o adaptaciones culturales desde las sociedades prehispánicas.

El título de ciudad de Santa María de la Antigua del Darién acompañó a la población hasta su despoblamiento en septiembre de 1524. Sin embargo, esa desaparición física de la población no significó la extinción de esta, ni tampoco de su título de ciudad. La ciudad de Santa María del Antigua del Darién encontró la manera de dividirse en dos, poniendo en

²⁷ Real Provisión concediendo título de ciudad y escudo de armas a Santa María del Antigua del Darién, 20 de julio de 1515, AGI, Panamá 233, L.1, 190v-192r; El título de ciudad se concedió casi al mismo tiempo en que se estaban llevando a cabo medidas para la configuración de una estructura propiamente *urbana* en el sentido práctico, con la creación del hospital, la cofradía, la fundición o los monasterios, Real Cédula concediendo limosnas para el hospital de Santa María del Antigua, 1513, AGI, Panamá 233, L.1, f. 328v y ss.

²⁸ Real Provisión... AGI, Panamá 233, L.1, 190v-192r.

práctica los principios dualistas –*urbs* y *civitas*– que regían la definición teórica de ciudad en la Edad Moderna. En 1524, Diego de Corral, ante la posibilidad de despoblación que amenazaba tanto a Santa María de la Antigua como a Acla, arrojó la idea de fusionar ambas poblaciones «en la parte y asiento do más conveniere para poderse sostener», con la condición de que «siga doquiera que sea llamándose Santa María el Antigua, cabeza de reino y con obispo». Esta solución sería «en gran provecho de VM y sus rentas, que seguramente se aumentarán con las mismas franquezas»²⁹.

El teórico Pedro Mexía de Ovando tenía estas operaciones, que consistían en hacer «unas veces de uno dos y otras juntar dos en uno», como una estrategia política de «suma sabiduría y prudencia» en un contexto de riesgo de despoblación³⁰. Santa María de la Antigua debería, pues, dividirse en dos –cuerpo y alma– para seguir existiendo³¹. Por un lado, mantendría su nombre y su condición de ciudad principal –su alma– mientras que su cuerpo sería cambiado por otro más propicio. Acla, por su parte, debería aportar a este trato el espacio geográfico más conveniente –el cuerpo– y la mayoría de los vecinos. La resolución que al final se aplicó no distó mucho de la propuesta de Corral, si bien con alguna variación que implicó el desdoblamiento de Santa María del Antigua del Darién.

Por un lado, Santa María del Antigua se fusionó con la vecina villa de Acla. A partir de finales de los años 20 del siglo XVI, aproximadamente, Acla comienza a aparecer mencionada en la documentación con su nuevo nombre completo: *Santa María del Antigua de Acla*. No sólo eso, sino que, aproximadamente por las mismas fechas, Acla comienza a ser nombrada ciudad en los documentos oficiales, mientras que hasta entonces era descrita como villa o pueblo. Este cambio en la nomenclatura coincidió con una serie de privilegios y mercedes negociadas por Acla de manera directa como el establecimiento de una fundición o la capacidad para ejercer justicia a través de alcaldes ordinarios³². La recurrencia del uso del término ciudad por parte de los poderes locales en su relación con la Corte se hacía, además, particularmente numeroso y relevante en el contexto de negociación de privilegios como

²⁹ Relación de lo que conviene proveer para el Darién, dado por el bachiller Corral, RAH, Col. Muñoz, t. 60, f. 27r y ss.

³⁰ Pedro MEXÍA DE OVANDO (1639), tit. 27, f. 167.

³¹ Sobre la dualidad de los conceptos políticos, entre ellos el de ciudad, desde la Edad Media, Ernst KANTOROWICZ (1957), p. 286 y ss, recogiendo sobre todo las ideas de Baldo sobre que la ciudad es «algo universal que no puede perecer por la muerte»; ver también Pierre MICHAUD-QUANTIN (1970), p. 111 y ss. ; Emile LOUSSE (1952).

³² Real Cédula al gobernador o juez de residencia que es o fuere de Tierra Firme, 8 de octubre de 1529, AGI, Panamá 234, L. 4, f. 24r-25v.

sucedió durante la estancia del procurador Alonso de Rubielo en Castilla en el año 1534³³. Acla heredó, asimismo, la condición de población más antigua del reino de Castilla del Oro, como los propios habitantes se encargaron de recordar en sus quejas tras el ataque de Alonso de Cáceres en 1534. De esta manera las dos poblaciones habían quedado fundidas en una sola, alargando su existencia jurídica durante bastantes años tras su supuesta desaparición, como había propuesto el bachiller Corral, aunque no se sabe si el emplazamiento elegido había sido el propuesto por el propio Corral. El nombre –y con él su antigüedad y su importancia jurídica– de Santa María del Antigua se habían trasladado a otras poblaciones, con lo que seguían existiendo, aunque el lugar preciso en el que se había levantado estuviera ya despoblado desde que su último habitante abandonase el lugar el 24 de septiembre de 1524.

Por otro lado, tras su fundación en agosto de 1519, Panamá recibió su título de ciudad apenas dos años más tarde, en septiembre de 1521. Los motivos que se adujeron en el título fueron muy similares a los incluidos en el de Santa María del Antigua, si bien obviando en este caso el nombramiento episcopal. En el texto se mencionaba que ese pueblo era «el primero y más principal que al presente hay en aquellas partes y costa de la Mar del Sur», y sus habitantes, obviamente, «los primeros pobladores» por lo que habían pasado muchos trabajos que merecían ser remunerados. La remuneración era el título que haría que la ciudad fuera más «nobleada y honrada»³⁴. El título fue acompañado por el escudo de armas que comprometía con su iconografía a los habitantes de Panamá a continuar con la labor de exploración de la Mar del Sur en los años sucesivos³⁵. Los argumentos esgrimidos por la Corona eran los habituales para condecorar a una población: su antigüedad –la primera fundación de una zona concreta, ni siquiera de toda la región de Castilla del Oro– y los servicios de sus habitantes –exclusivamente en la propia fundación–.

El ascenso de Panamá a la categoría de ciudad estuvo también condicionado por los movimientos en la silla episcopal. Tras la muerte de Juan de Quevedo a finales de 1519 en Barcelona, fray Vicente Peraza fue nombrado obispo de Santa María del Antigua. Su llegada a tomar posesión se demoró hasta agosto de 1521 y coincidió con el inicio de la negociación de la serie de medidas encaminadas a dotar a Panamá de los privilegios y mercedes que harían

³³ Durante ese tiempo, Rubielo defendió con vehemencia medidas para mejorar la situación de la «ciudad de Acla», Real Cédula al gobernador y oficiales de la provincia de Tierra Firme a pedimento de Alonso Rubielo, AGI, Panamá 234, L. 5, f. 162 y ss.

³⁴ Real Provisión concediendo título de ciudad y escudo de armas a Panamá, 15 de septiembre de 1521, AGI, Panamá, 233, L. 1, f. 301r-302v.

³⁵ El escudo contaría con «dos carabelas por señal que esperamos en nuestro señor que por allí se ha de hazer el descubrimiento de la Espeçiería», Ibid.

de ella merecedora del título de ciudad en septiembre de ese mismo año. La relación entre la llegada del nuevo obispo y la elevación de Panamá a ciudad fue destacada por el cronista mayor Gil González Dávila en su *Teatro eclesiástico*. En esa obra se analizaba el origen del obispado de Panamá, cuya «iglesia catedral era la más antigua de Tierra Firme y se erigió en 1513», es decir, seis años antes de la propia fundación de Panamá, y «estuvo primero en Santa María del Antigua del Darién»³⁶.

Con estas palabras, Dávila enfatizaba el carácter no geográfico de la sede episcopal pues se podía mencionar la existencia de una iglesia catedral de un lugar concreto que aún no existía. Fue la llegada de fray Vicente de Peraza la que marcó el cambio de una sede a otra y, además, completó con el título eclesiástico el título civil de ciudad³⁷. Llevó a cabo su labor cuando ya Panamá había recibido su título real de ciudad, en diciembre de 1521, y sus medidas fueron exitosas, como atestigua que, en noviembre de 1623, en respuesta a las quejas que el deán y el cabildo de que «se ofrecían de ordinario muchas dudas e dificultades» sobre la correcta organización de la iglesia catedral, el Consejo de Indias envió una copia de la erección de aquella que Vicente Peraza había hecho más de un siglo antes³⁸. En diciembre de 1521, por lo tanto, la categoría de ciudad de Panamá estaría formalmente completa con el traslado definitivo de la sede episcopal unido al título civil concedido meses antes.

Santa María del Antigua se desdobló, por tanto, en el momento de su extinción y se mantuvo con vida, garantizando con ello una línea de continuidad institucional que preservaba la antigüedad de su fundación y dibujaba una pátina de nobleza entre los habitantes que hubieran participado activamente tanto en la fundación como en el desarrollo temprano de la misma. Las otras dos poblaciones del istmo, Nombre de Dios y Natá, tuvieron un acceso particular a la categoría de ciudad, que ejemplifica el tipo de cambios respecto al modelo castellano que estaban teniendo lugar.

Nombre de Dios había sido fundada en 1518 y recibió su título oficial en 1537. Sin embargo, hubo un primer intento en 1523 por elevar Nombre de Dios a ciudad creando un nuevo obispado, «desde el Nombre de Dios hasta el cabo o punta de las Higueras», con sede precisamente en la villa. Incluso se despachó una carta presentando al obispo que se haría cargo de la nueva sede, aunque su nombre quedaba en blanco en el documento³⁹. Si este

³⁶ Gil GONZÁLEZ DÁVILA (1655), f. 56-56v.

³⁷ Testimonio suscrito por el notario apostólico... AGI, Patronato 1, N. 15, R. 2, f. 1v.

³⁸ Real Cédula al obispo de Panamá, a instancias del deán y cabildo de aquella catedral, 7 de noviembre de 1623, AGI, Panamá 237, L. 14, f. 237v-248r.

³⁹ Real Cédula al embajador en Roma para que, en virtud de la carta de creencia que se envía, suplique al Papa instituya un obispado para cierta parte de Castilla del Oro, 1523, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 335v-336v.

proyecto hubiese llegado a buen puerto, Nombre de Dios se habría convertido en ciudad automáticamente por la vía tradicional a través de ese nombramiento. Sin embargo, nunca se llegó a erigir la nueva sede episcopal pero no se frenó la pretensión de los vecinos de la villa de convertirse en una ciudad de pleno derecho. La concesión del título de ciudad por nombramiento real se firmó finalmente en Valladolid el 13 de noviembre de 1537 y el argumento justificativo central fue que «cada día el dicho pueblo se multiplica en vecindad»⁴⁰.

El sólo aumento de la población había movido al cabildo de Nombre de Dios a solicitar que la Corona ennobleciese a la población y, con ella, a los propios vecinos. El aumento de la población se había producido gracias al comercio, principal ocupación de los habitantes de Nombre de Dios desde su fundación. De hecho, las obras para abrir y mantener el camino entre Nombre de Dios y Panamá, eje del comercio transistmico habían seguido la misma lógica de fomentar la contratación para promover el «nobleamiento y población» de esa tierra⁴¹. El argumento justificativo esencial para promocionar a Nombre de Dios a la categoría de ciudad fue, por lo tanto, el comercio que ennoblecería la villa a través del aumento de población.

Resultaba, sin duda, excepcional en el ámbito hispánico que la razón esgrimida para la conversión en ciudad fuese el aumento de la población⁴². Aún quedaban bastantes años hasta que en 1589 Giovanni Botero incluyese la población entre los elementos que definían la *grandeza* de una ciudad. Para el italiano, la grandeza era «no el espacio de sitio, o lo que rodean los muros, sino la muchedumbre de los vecinos, y su poder»⁴³. La cantidad de habitantes se asociaba, en la teoría de Botero, no tanto a su número, sino al poder que estos pudieran ejercer para contribuir al ennoblecimiento de esta. Por lo tanto, el ascenso a ciudad por criterios demográficos se puede considerar una gran novedad en el contexto global de la Monarquía, pues alteraba la consideración de lo que se consideraba un servicio a la Corona y la propia noción de nobleza que se manejaba.

⁴⁰ Real Provisión, a petición del puerto del Nombre de Dios, por la que se le concede el título de ciudad, 13 de noviembre de 1537, AGI, Panamá 235, L. 6, f. 134r-134v.

⁴¹ Real Cédula a Pedrarias Dávila, 20 de febrero de 1524, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 346v.

⁴² Este criterio se había aducido, eso sí, para conceder privilegios de villazgo en Castilla, pero no para conceder títulos de ciudad, como por ejemplo cuando Agullente se desgajó de Onteñente durante el reinado de Felipe II, Juan GELABERT (2008a), pp. 81-106, esp. p. 87.

⁴³ Giovanni BOTERO (1603), f. 144; Giovanni Botero es considerado por Maurizio Viroli el autor que supuso el cambio fundamental en el lenguaje político, pasando de la consideración «della politica come arte del buon governo» a la de «la politica intesa como ragion di stato», Maurizio VIROLI, M (1994), p. VIII. Más años faltaban aún, hasta el último tercio del siglo XIX, para que efectivamente el número de vecinos fuese esgrimido en Castilla como argumento para la concesión oficial del título de ciudad Juan GELABERT (2008b), pp. 781-782; Según Maurizio Bazzoli, sólo a partir del siglo XVIII se generalizó entre la teoría política comenzó a valorar la extensión territorial y la densidad demográfica como características definidoras de un estado, en Maurizio BAZZOLI (1990), p. 33.

Sólo el hecho de acudir a habitar una población y persistir en ella era suficiente motivo para solicitar a la Corona de manera corporativa la máxima merced. No eran necesarios hechos de armas heroicos o de gran resistencia contra diversos enemigos para obtener privilegios, sino que bastaba con poblar las nuevas poblaciones y llevar a cabo la labor que justificase la presencia en el Nuevo Mundo. Ni siquiera era necesario que los habitantes que poblaban Nombre de Dios fueran ellos mismos nobles para propiciar el ennoblecimiento de toda la población. De hecho, a juzgar por el debate en torno a la *calidad* de los vecinos –tachados por el obispo en 1535 como ladrones y a toda la población como una «cueva de ladrones», por su condición de mercaderes- estos no eran tenidos precisamente por un ejemplo de virtudes.

En la propia lógica que indicaba la elevación de Nombre de Dios a ciudad estaba implícito que este nombramiento sería lo que «limpiaría» a sus habitantes y los ennoblecería. Para reforzar su importancia como población en Castilla del Oro y reivindicar su autoproclamada nobleza, en muchos documentos anteriores a la concesión oficial de su título de ciudad, la villa de Nombre de Dios aparece ya con el calificativo de ciudad⁴⁴. Este recurso no fue exclusivo de este caso, sino que se generalizó en el Nuevo Mundo como una forma de dotar de mayor dignidad y capacidad de maniobra a las poblaciones. Una construcción identitaria temprana que permitiera a las poblaciones llevar a cabo sus deberes de una manera más sencilla.

La última de las ciudades fundadas en el istmo, Natá, fue paradójicamente la que menos tardó en convertirse en ciudad. De hecho, no tuvo que hacer demasiados esfuerzos para lograrlo puesto que fue fundada directamente como ciudad en mayo de 1522. El acta de fundación mencionaba que lo que se estaba llevando a cabo era la constitución de «esta ciudad y pueblo de Natá». Con esta condición, la comunidad que forjó Natá hacía evidentes sus pretensiones de ocupar un espacio estratégico –el principal centro de producción de cereales de la región- en el territorio y comenzar a reivindicar la extensión de sus privilegios, exenciones y libertades. De hecho, apenas cinco meses después de su fundación, en octubre de 1522, y para apuntalar esas pretensiones, la ciudad de Natá envió un procurador a la corte para, en nombre del «gobernador, justicia e regimiento» de la ciudad suplicar «a vuestra majestad que pues esta ciudad está en [...] e tenemos mucha confianza en que [...] será una de las más populosas que ha de haber en estos reinos, nos hagáis merced de intitularla y hacerla ciudad e darle e concederle las armas e insignias que vuestra magestad fuere

⁴⁴ El primero de ellos en una cédula del 8 de octubre de 1525, AGI, Indiferente 420, L. 10, f. 102v.

servido»⁴⁵. Esta petición se acompañaba de otra serie de solicitudes destinadas a hacer más sólido el entramado cívico recién creado; es decir, el ennoblecimiento simbólico era el que abriría paso a la propia extensión práctica de ese ennoblecimiento.

La velocidad⁴⁶ con la que las ciudades de Castilla del Oro y en otros espacios de las Indias, obtuvieron su titulación, o incluso el hecho de que las ciudades nacieran con ese título,⁴⁷ responde a la necesidad mutua, de Corona y poblaciones, de asentarse sobre el territorio y promover la vida urbana como motor de la creación del espacio político. En los casos de Santa María y Panamá, como sedes episcopales, las razones espirituales y políticas se mezclaron puesto que la argumentación relativa a la importancia de la vida urbana para la conversión religiosa ofreció una doble vía de legitimación para los títulos de ciudad. Este proceso generó una retroalimentación puesto que las propias poblaciones comenzaron a auto-denominarse ciudad, a pesar de no haber recibido el título, con el fin de reforzar su condición de pieza indispensable en la lógica política del reino.

Las explicaciones para estas adaptaciones en el acceso al título de ciudad en el Nuevo Mundo son variadas. La concesión de títulos de ciudad se utilizó, en primer lugar, como una estrategia más entre las puestas en marcha para poblar el territorio. La fundación de poblaciones tenía el objetivo determinado de promover la conversión de los indígenas a través de la conversación urbana. Para que ese proceso fuera posible, las poblaciones deberían tener suficientes vecinos que se relacionasen entre ellos y con los indígenas. Entre las múltiples medidas propuestas por el bachiller Corral para intentar frenar la despoblación

⁴⁵ Solicitud del cabildo de la ciudad de Natá en Catilla del Oro, a Su Majestad, pidiendo ciertas gracias, 1522, AGI, Patronato 185, R. 1.

⁴⁶ La media entre las fundaciones de la primera mitad del siglo XVI es de 5,5 años entre la fecha de la fundación y la fecha de recepción del título de ciudad de los ejemplos tomados de espacios diversos del Nuevo Mundo. Los casos que se pueden rastrear son los de Antequera, en Nueva España, fundada en 1526 y elevada a ciudad en 1532; San Cristóbal de los Llanos de Chiapa, en 1528 y 1536; Popayán, en la provincia de Quito, fundada en 1537 fue hecha ciudad apenas un año más tarde; Trujillo obtuvo su título de ciudad en 1537, dos años después de haber sido fundada en 1535; Arequipa fue fundada en 1540 y elevada a ciudad en 1541; Tocaima fue fundada en 1544 y hecha ciudad en 1549; Santa Fe en los años 1538 y 1540; Quito se fundó en 1534 y en 1541 ya era ciudad; el pueblo de la Concepción se convirtió en ciudad dos años más tarde de haber sido fundado, en 1552; ese mismo año 1552 se convirtió en ciudad el pueblo de Serena, que había sido fundado en 1544 y también Santiago del Nuevo Estremo, que lo había sido en 1541.

⁴⁷ Sin haber realizado una búsqueda exhaustiva y tomando como muestra las actas de fundación recogidas por Francisco Domínguez Compañy para el siglo XVI se pueden contar entre las ciudades nacidas directamente con ese apelativo a Santiago de los Caballeros en 1527; Cuzco en 1534; la Ciudad de los Reyes (Lima) en 1535; la Ciudad de la Frontera en 1538; Tunja en 1539; la ciudad de Cartago en 1541; Santiago del Nuevo Estremo en 1541; la ciudad de Mérida en 1542; la ciudad de Nuestra señora de la Paz en 1548; la ciudad de la Serena en 1549; la ciudad de Cuenca (Perú) en 1557; Mendoza en 1561; San Juan de la Frontera en 1562; San Miguel de Tucumán en 1565; Nombre de Jesús en 1571; Portiyo en 1572; Santa Fe en 1573; Artieda en 1577; Buenos Aires en 1580; San Sebastián de los Reyes en 1585; Medina de las Torres en 1585, p. 229; Vera en 1588; Espíritu Santo del Valle de San Juan (Guanare) en 1591 y Jujuy en 1593, ver Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY (1984), *passim*.

de Santa María del Antigua del Darién se contaba la de hacer de la población «cabeza de reino y señalada de armas», para que así la ciudad «fuese más honrada»⁴⁸. El ennoblecimiento, pues, la concesión de títulos de ciudad se relacionó de manera directa con el aumento o, al menos, mantenimiento de la población, ya que garantizaría la supervivencia de la población y, por ende, su capacidad para afrontar los objetivos de la presencia castellana en Indias. No existía, sin embargo, mención al número concreto de habitantes que debía mantener una población para ser «más noble»; el concepto de ennoblecimiento seguía siendo subjetivo a pesar de hacer referencia a criterios supuestamente objetivos como podían ser los demográficos.

Tanto la velocidad en la concesión de los títulos de ciudad como su capacidad para facilitar la adquisición de otro tipo de mercedes o privilegios se puede interpretar como una estrategia para fomentar el poblamiento en esas ciudades. De esta manera se daba la vuelta al argumento tradicional según el cual el título de ciudad sería una recompensa por el ennoblecimiento paulatino de las poblaciones y sus habitantes. En Castilla del Oro –y, en líneas generales en el Nuevo Mundo– se anteponía el ennoblecimiento corporativo a la espera de que, arrastrados por éste, los vecinos se decidiesen a asentarse perpetuamente en las nuevas ciudades⁴⁹. Las ciudades con título actuarían, por sí mismas, como un imán de población que, además, querría permanecer para siempre y disfrutar de ciertas preeminencias y prerrogativas. Este mismo argumento también explica que las propias poblaciones se refiriesen a sí mismas como ciudad, conscientes de la importancia de esa apelación a la hora de recibir y mantener la población.

El ennoblecimiento prematuro y asociado a motivos no tradicionales de las poblaciones en Indias, con la concesión de títulos de ciudad a poblaciones recién fundadas y en base a criterios diferentes de los tradicionales, tenía el objetivo añadido de crear un flujo de lealtad hacia la Corona como ciudades del rey. Partiendo de que, como se ha mencionado, no era lo mismo para un individuo habitar en una villa que en una ciudad, cuantas más ciudades se creasen mayor sería el orgullo y la lealtad comunitaria que desarrollarían sus

⁴⁸ Parecer..., AGI, Patronato 193, R. 13, f. 166r.

⁴⁹ La misma lógica se siguió en la concesión del título de ciudad en 1532 a Puebla de los Ángeles, en Nueva España, pues se concedió para que «el dicho pueblo se *ennoblezca* y otros se animen a ir a vivir en él», Merced del título de ciudad a Puebla de los Ángeles, 20 de marzo de 1532, AGI, México 1088, L. 2, f. 50v. En 1549, la villa de Tocaima, en el Nuevo Reino de Granada, recibía su título de ciudad con el objetivo de que «el pueblo vaya en más crecimiento y las personas que en él se han poblado y adelante fueren a poblar en él estén y residan con más voluntad», Real provisión concediendo al pueblo de Tocayma el título de ciudad, 7 de febrero de 1549, AGI, Santa Fe, 533, L. 1, f. 10-10v. El aumento de la población que se generase a través de la concesión del título de ciudad sería, además, muy proclive a «quedarse perpetua» gracias a los beneficios de la *vida urbana noble*, Petición del título de ciudad para las minas de Zacatecas, 13 de mayo de 1579, AGI, Guadalajara, 230, L. 1, f. 345v-346v.

habitantes y mayor la voluntad de permanecer⁵⁰. La concesión del título de ciudad casi sin motivo o alterando los motivos tradicionales sería la manera de abrir la puerta a servicios corporativos futuros, una concesión de un honor a crédito de las acciones futuras.

El acceso al título de ciudad no era, por lo tanto, el final de un proceso, sino que debía actuar como un acicate para que las ciudades de manera corporativa, y sus vecinos de forma individual, acometiesen el cumplimiento de servicios y desarrollasen un estilo de vida acorde con la nobleza asociada al hecho de habitar una ciudad. Para acreditar sus méritos y dar lustre a las propias ciudades en las que vivían, los individuos elevaron sus propias probanzas que encierran en sus descripciones las aspiraciones nobiliarias individuales que componían el ennoblecimiento corporativo y que vertebraron el entramado de relaciones entre los individuos, las ciudades y la Corona.

2. Nueva antigüedad y nuevos valores: las relaciones de méritos en Castilla del Oro.

La estrategia para justificar los servicios e iniciar un proceso de ascenso social por parte de los individuos –y también de las corporaciones– fueron las relaciones de méritos y servicios. Estas actuaron en el Nuevo Mundo como sustitutas de las genealogías familiares y de las historias de ciudades tradicionales de la nobleza y alteraron de igual modo los principios sobre los que se sustentaba la promoción social. La imagen que los propios individuos proyectaron de sí mismos a través de estos documentos construyó el ideal de un estilo de vida y redefinió los principios de nobleza y distinción social en el Nuevo Mundo. Tanto la tipología de las solicitudes como la argumentación varió, además, sustancialmente en el tránsito de la primera a la segunda y tercera generación, lo que contribuyó a generar al mismo tiempo una memoria de la «conquista» y de la «nobleza» de las diversas familias que participaron en la misma.

Las probanzas, o relaciones, de méritos y servicios fueron una de las vías habituales de contacto entre los pobladores del Nuevo Mundo y la Corona desde prácticamente el comienzo de la conquista. Con estos documentos, los individuos en el Nuevo Mundo presentaban sus servicios y solicitaban mercedes del rey en contrapartida⁵¹. Los propios

⁵⁰ Durante diversas fases de la Reconquista peninsular los habitantes de las nuevas fundaciones recibieron privilegios económicos para asentarse en ellas, generando con ello una lealtad comunitaria basada en la defensa de estos; sin embargo, los elementos simbólicos que se observan en las ciudades del Nuevo Mundo no formaron parte de la ecuación hasta mucho tiempo más tarde; Jean GAUTIER-DALCHÉ (1979), pp. 38-41.

⁵¹ Para las diversas tipologías de probanzas, algunas de las cuales se comenzaron a imprimir y hacer circular desde el siglo XVII, ver Murdo MACLEOD (1998), pp. 25-42.

conceptos de mérito y de merced no estaban sistematizados, eran poliédricos y estaban sujetos a lo que los implicados –solicitante y Corona- pudieran considerar como tales.

El principio que regía el sistema de las probanzas de méritos se basaba en el deber de reciprocidad y justicia del monarca hacia aquellos que hacían un servicio en su nombre y que no se podía monetizar ni estandarizar. Como se basaba en un servicio personal, la remuneración también era personal conforme al mérito y a una serie de variantes intangibles. Por este motivo no existía ninguna promesa previa por parte de la Corona o de los capitanes más prominentes ni los individuos hacían una solicitud demasiado concreta. El flujo de intereses entre servidor y monarca funcionaba en ambas direcciones por lo que tanta importancia tendría para uno servir y para el otro conceder graciosamente. Lo que se concediera, de acuerdo con estos parámetros, sería considerado justo si ambas partes respetaban su papel dentro del sistema.

Estos documentos, cuyo origen estaba en las *probanzas de gracia y merced* que los nobles castellanos remitían a la Cámara de Castilla desde el siglo XV para acreditar sus méritos a lo largo de la Reconquista, responden a la propia lógica del equilibrio del sistema según el cual los servidores buscaban una reparación a sus esfuerzos personales a favor de la Corona en Indias⁵². El documento tenía el formato de un interrogatorio en el que el escribano anotaba una serie de preguntas relativas al solicitante y una serie de testigos –normalmente personas relevantes en la población- exponían lo que sabían sobre el particular. Las probanzas eran iniciadas, o bien por el interesado en persona o bien por sus descendientes, que reclamaban como parte de su herencia las mercedes que el monarca tuviera a bien concederles. Además, podían iniciarse de oficio si los oficiales reales tenían dudas respecto a la conveniencia de la concesión de ciertas mercedes. Las probanzas actuaron como un mecanismo integrador de las comunidades urbanas cuyos vecinos buscaban destacarse como miembros prominentes a través de los servicios, no sólo a la Corona si no, en general, a la comunidad política⁵³.

Los primeros pobladores tendrían, de acuerdo con las instrucciones de la Corona de 1513, derecho a una serie de privilegios y debían ser mejor remunerados que el resto por el simple hecho de su primacía. Derivada de esa legislación a su favor, se comenzó muy pronto a establecer la idea de que los primeros no sólo tenían más derechos adquiridos, sino que también eran, por la misma razón, más virtuosos. No había más razones objetivas que su

⁵² Luis Miguel CÓRDOBA OCHOA (2008), pp. 359-378; Luis Miguel CÓRDOBA OCHOA (2013), pp. 72-77.

⁵³ Esa estrategia de integración también sirvió a los indígenas que emitieron probanzas para acreditarse como vasallos de pleno derecho, adaptando a su vez los conceptos de honor o linaje, limpieza de sangre o nobleza, ver Waldemar ESPINOZA SORIANO (1973), pp. 258-262; Carolina JURADO (2014), pp. 387-422, en esp. pp. 398-407; Caroline CUNILL (2014), pp. 14-47; Ana DÍAZ SERRANO (2010), pp. 29-43.

antigüedad y sus servicios tempranos que avalasen que esos primeros pobladores fueran esencialmente *mejores* que los que habían llegado más tarde. La única justificación que les amparaba era que habían estado presentes en Castilla del Oro desde casi el principio de la población y habían acumulado méritos, por lo que ese sólo hecho ya les distinguiría del resto para reclamar mercedes.

A la larga, esta distinción, amparada en origen en los servicios, acabaría generando la noción de que, efectivamente, los primeros pobladores y sus descendientes, constituían la élite del Nuevo Mundo y comenzarían a asumir los hábitos y la idiosincrasia de las clases privilegiadas tradicionales de Castilla⁵⁴. La propia idea de que los hijos de los primeros pobladores, sólo por el hecho de serlo, además de heredar su derecho a los privilegios y las mercedes, estarían igual de capacitados que sus antecesores para el servicio a la Corona, provocaría la creación de un sistema de corte clientelar basado en la noción de que la aptitud para el servicio se transmitiría por vía hereditaria⁵⁵.

Todos aquellos individuos que iniciaron sus probanzas de mérito en los primeros lustros tras la llegada de Nicuesa y Ojeda buscaban anticipar lo máximo posible la referencia de su llegada y participación en los hechos de Castilla del Oro. Cuanto antes hubieran llegado a la tierra, más posibilidades habrían tenido de participar en hechos decisivos que habrían contribuido a «ganar» la tierra o agrandar de manera muy significativa el poder real. En fecha tan temprana como 1514, Pedro Sánchez alegaba que había pasado con Nicuesa y luego había colaborado estrechamente con Vasco Núñez de Balboa, sin que ninguno de los dos le hubiese remunerado⁵⁶. Hernando de Luque, de manera similar, argüía que había llegado junto a Pedrarias Dávila y que había sido maestreescuela de la ciudad de Santa María del Antigua sin haber obtenido la compensación que consideraba merecer⁵⁷.

Acreditar haber sido la primera persona que hubiera hecho alguna cosa, por poco significativo que pudiera parecer, por primera vez en los nuevos territorios, era un mérito que no dejaba de aparecer en las relaciones. Alonso Martín de don Benito, quien presentaba su probanza tras más de 25 años de estancia en Indias en 1536, «fue uno de los que primero

⁵⁴ Aunque fuera de manera poco natural, los conquistadores «adoptaron con una cierta elegancia, aunque un tanto chillona e indiscreta, los estilos de vida aristocráticos adecuados a su nuevo papel de arquetipos sociales», según Guillermo CÉSPEDES DEL CASTILLO (1997), p. 33.

⁵⁵ Antonio M. HESPANHA (1993), p. 175.

⁵⁶ Información de los méritos y servicios de Pedro Sánchez, 29 de agosto de 1514, AGI, Patronato 150, N. 1, R. 1; en 1520 Jerónimo de Aguilar repetía similar patrón Información de los méritos y servicios de Jerónimo de Aguilar, 7 de enero de 1520, AGI, Patronato 150, N. 2, R. 1.

⁵⁷ Informaciones de oficio y parte de Hernando de Luque, 1524, AGI, Panamá 61, N. 1.

descubrieron la Mar del Sur e el primero que pasó las anclas para la dicha Mar del Sur»⁵⁸. Tan importante fue el traslado de las anclas a la Mar del Sur en la trayectoria de Alonso Martín que en el escudo de armas que se le concedió un año más tarde se incluyeron «tres anclas de oro en campo azul» y, además, «una orla con ocho anclas orladas con un cordel de color de hierro las anclas»⁵⁹.

En 1531, Toribio Montañés de Lara era recompensado por ser «uno de los primeros conquistadores y pobladores de aquella tierra y el primero que se casó en ella donde diz que ha 17 años que fue con muchos trabajos y necesidades a su costa»⁶⁰. Así, a la voluntad de asentamiento asociada al hecho de casarse en Indias se añadía el mérito de haber sido el primero en hacerlo, por lo que podría servir de ejemplo a otros con lo que se agrandaría y ennoblecería la población. Jerónimo de Quesada, para optar a la herencia de la escribanía de la ciudad de Cuzco en los años 80 del siglo XVI, acreditó que su padre había acudido a Indias 40 años antes, que había participado en la defensa de Panamá y que era «persona de mucha honra y calidad», pero, sobre todo, destacaba que «fue el primero que dio la traza y medio para la labor de los azogues en Potosí de donde se enriqueció la tierra del Perú»⁶¹. Damián de Meneses, por su parte, aportaba como un mérito que su abuelo había sido uno de los primeros letrados de la Audiencia de Panamá en sus años fundacionales⁶². Hernando de Montenegro presumía de haber sido «la primera persona que plantó viñas en esta tierra e otros muchos árboles de Castilla»⁶³.

Las probanzas emitidas por los descendientes de los primeros pobladores hacían referencia a las capacidades y lealtad de sus ancestros que ellos, por vía de herencia, perpetuaban en sus propias actitudes. Por ejemplo, Diego Gutiérrez, hijo del veterano poblador Francisco Gutiérrez, era calificado de «persona muy honrada, de mucha confianza y hábil y suficiente para regir e administrar cualquier oficio que le fuere encomendado» sin acreditar otros méritos personales⁶⁴. De igual manera, un testigo en la probanza iniciada por

⁵⁸ Información de los méritos y servicios de Alonso Martín de don Benito, 25 de noviembre de 1536, AGI, Patronato, 93, N.5, R.1.

⁵⁹ Nota de haberse despachado un privilegio de armas para Alonso Martín de Don Benito, 7 de diciembre de 1537, AGI, Lima 565, L. 2, f. 323.

⁶⁰ Real Cédula al gobernador de Tierra Firme recomendándole a Toribio Montañés, 4 de noviembre de 1531, AGI, Panamá 234, L. 5, f. 1v.

⁶¹ Informaciones de los méritos y servicios de Luis de Quesada, 1581, AGI, Patronato 150, N. 11, R. 1.

⁶² Información de los servicios de Damián de Meneses, 11 de noviembre de 1574, AGI, Patronato 151, N. 3, R. 1.

⁶³ Información de los méritos y servicios del capitán Hernando de Montenegro, 1586, AGI, Patronato 129, R. 1.

⁶⁴ Información de los méritos y servicios de Francisco Gutiérrez y de su hijo Diego, 1 de abril de 1564, AGI, Patronato 151, N. 2, R. 1.

el hijo de Andrea de la Roca afirmada que éste «era hombre honrado y de autoridad y como tal fue alcalde ordinario algunos años e se sustentó honrosamente, teniendo armas, caballo y criados como vecino honrado e que al dicho su hijo le tiene en la misma opinión de hombre de bien»⁶⁵. Los valores de lealtad y honradez, recién adquiridos por vía de servicio a la Corona con la llegada a Castilla del Oro, eran incorporados inmediatamente al patrimonio familiar y transmitidos a los herederos.

Las solicitudes de las segundas y terceras generaciones contribuyeron a crear una antigüedad reciente o relativa que se ceñía casi en exclusiva a los hechos acontecidos desde la llegada de sus antepasados a Indias⁶⁶. En ocasiones, incluso aquellos que podrían alegar méritos en Castilla, como fue el caso de Pedrarias Dávila, que pertenecía a la nobleza segoviana, en la probanza iniciada por su mujer justo tras la muerte de éste hacia 1533, se limitaban a presentar exclusivamente los méritos acumulados tras su llegada a Indias⁶⁷. Esta tendencia reforzaba la idea de que las mercedes que se concedían allí debían responder a los méritos acumulados en Indias, pero no antes. De hecho, en la Recopilación de Leyes de Indias se recogía una cédula de 1546 en la que se indicaba «que los servicios sean remunerados donde cada uno los hubiere hecho, y no en otra parte, ni provincia de las Indias»⁶⁸. En cumplimiento de esta norma, Martín Ruiz de Marchena fue nombrado en 1551 mariscal de Tierra Firme, al tiempo que se le concedía un regimiento en Panamá y un repartimiento en Perú, y también se decidía «armarle caballero hijodalgo» si bien se le advertía de que «el privilegio de no pechar se entienda solamente en las Indias», enfatizando este carácter autónomo de los privilegios de Indias respecto a los de Castilla⁶⁹. El Nuevo Mundo se presentaba, por lo tanto, para muchos individuos como el escenario de un nuevo comienzo y, en particular, Castilla del Oro se posicionaba como un lugar determinante en la construcción de nuevas genealogías plenamente indianas.

En esta misma línea, Castilla del Oro comenzó a actuar como una referencia clave entre los descendientes de los primeros hasta el punto de convertirse en el equivalente al otro

⁶⁵ Información de los méritos y servicios de Andrea de la Roca, 14 de enero de 1568, AGI, Patronato 151, N. 4, R. 1.

⁶⁶ Pilar SANCHIZ OCHOA (1988), pp. 81-94; Stuart SCHWARTZ (1978), pp. 23-37; Luis LIRA MONTT (1998), pp. 497-516.

⁶⁷ Muy significativamente, la probanza comienza con la inversión en/empeño para la expedición de todo su patrimonio anterior: «es notorio como el año que pasó de 1513 por mandado del católico rey don Fernando fue el dicho su marido por capitán e lugarteniente general a conquistar e poblar e pacificar en la Tierra Firme la provincia que llaman Castilla del Oro e por mejor servir a vuestra Corona real vendió todos sus bienes muebles e empeñó todos los raíces e por cédula e mandado de su alteza pasó», Información de los méritos y servicios de Pedrarias Dávila, 1533, AGI, Patronato 150, N. 3, R. 1.

⁶⁸ Recopilación..., lib. III, tit. II, ley XVI de 1546.

⁶⁹ Consulta del Consejo de Indias, 20 de abril de 1551, AGI, Indiferente 737, N. 68.

lado del Atlántico de las referencias a «la Montaña» entre la nobleza castellana tradicional⁷⁰. Relacionar una familia o un linaje con la llegada a Castilla del Oro significaba acreditar una antigüedad merecedora de todo tipo de mercedes y privilegios. Todas las familias que se iban asentando allí y querían establecer una genealogía retrotraían sus orígenes a la entrada de su antepasado a las Indias en alguna de las grandes expediciones de conquista hacia Castilla del Oro y su posterior paso al Perú. Entre ellos, multitud de aquellos individuos que continuaron su trayectoria en Perú destacaban en sus relaciones de méritos la importancia de su participación en la fundación y defensa de ciudades en Castilla del Oro.

Pedro Cieza de León comenzaba su Crónica del Perú describiendo la ciudad de Panamá, «aunque hay otras en este reino de más calidad» porque «el tiempo que él se comenzó a conquistar salieron della los capitanes que fueron a descubrir al Perú, y los primeros caballos y yeguas, y otras cosas pertenecientes para las conquistas»⁷¹. En una relación sin fecha y de autor anónimo –aunque atribuida a Martín de Estete– de la expedición de Francisco Pizarro y Diego de Almagro se destacaba que, antes de comenzar con el relato de sus hechos en el descubrimiento del Perú, que «fueron casy de los primeros que se hallaron en la conquista y descubrimiento de las Yndias» y, más concretamente, de Castilla del Oro, pues «el año de treze quando Pedrarias De Ávila pasó a la tierra firme con una gruesa armada los dichos fueron donde él estaba y ansy se hallaron en toda la conquista de la tierra firme que es llamada Castilla del Oro»⁷².

Una vez completada la población de Castilla del Oro, ambos capitanes pasaron, por la Mar del Sur, al descubrimiento del Perú. Junto a ellos, los famosos *Trece de la fama*, a los que Pizarro convenció para continuar con la expedición, cuando ya todos deseaban retornar a Panamá y Pizarro iba en su busca, trazando una raya en el suelo en una playa de la Isla del Gallo e instando a cruzarla a aquellos que quisieran continuar con la expedición⁷³. García de Jarén, uno de los Trece, quien comenzó su probanza en 1528, relataba que había llegado a Panamá junto a Lope de Sosa –el gobernador que debía sustituir a Pedrarias Dávila pero que

⁷⁰ Ignacio ATIENZA (1987), p. 10 y ss. El espacio mítico sobre el que se asentaban las familias nobles castellanas solía hacer referencia a la Montaña de León o Asturias, como ejemplo, la propia familia de Pedrarias, original del «reyno de León en las faldas de las montañas que descenden del Principado de Asturias de Oviedo (...) cepa de «muy valientes caballeros y señalados varones, así en el dicho reino de León como en otras partes de este reino de Castilla la vieja» en Armas e mejoramiento de armas de Pedrarias Dávila, lugarteniente y gobernador general de muchas provincias de Tierra Firme en las Indias por el católico rey don Fernando V de tal nombre, y por la serenísima reina doña Juana, e después por la sacra católica majestad del emperador d. Carlos V de tal nombre rey de las Españas nuestro señor, BNE, MSS 22998.

⁷¹ Pedro DE CIEZA DE LEÓN (1553).

⁷² Relación sobre el descubrimiento y población de las provincias del Perú, AGI, Patronato 28, R. 10.

⁷³ Pedro DE CIEZA DE LEÓN (1985), p. 78. Para un resumen del inicio de la conquista del Perú ver Ana María LORANDI (2002), pp. 19-46.

falleció nada más poner un pie en Castilla del Oro- en 1519 y había participado en varios hechos importantes desde su llegada, incluida la expedición de Gil González Dávila y, por supuesto, la de Pizarro y Almagro⁷⁴. La Corona se dio muy bien por enterada de la petición, ya que al año siguiente todos los que habían solicitado la probanza recibieron «en remuneración de los susodicho», esto es «descubrir, conquistar y poblar la ciudad de Túmbez e las tierras e provincias a ella comarcanas que son a la parte del levante llamada del sur de la Tierra Firme llamada Castilla del Oro» la concesión de la hidalguía a quienes fuesen «ciudadanos plebeyos» y la caballería a aquellos que ya fuera hidalgos antes de los hechos⁷⁵. En esta ocasión, el ascenso social se oficializó casi de manera inmediata, por la fama de sus protagonistas y por la velocidad con la que se transmitieron las noticias, por lo que hubo una adaptación directa de los criterios tradicionales de ascenso social, con el reconocimiento de la nomenclatura acorde a los méritos.

El origen de la conquista de Perú, por lo tanto, se gestó y lanzó desde Castilla del Oro, otorgando a los primeros pobladores una consideración específica, si bien tendente a lo simbólico, en la escala del honor en el Nuevo Mundo, que buscaron capitalizar en sus relaciones con la Corona. Aquellos descendientes de los conquistadores del Perú que comenzaron a emitir sus probanzas de mérito desde ese nuevo reino a partir de la década de los 50 del siglo XVI, siempre comenzaban las referencias a sus antepasados apelando a su llegada a Castilla del Oro. Tal fue el caso de Garci Ortiz de Espinosa, hijo del conquistador Gaspar de Espinosa, que comenzó su probanza en la Ciudad de los Reyes en febrero de 1552 para solicitar el alguacilazgo mayor del Cuzco alegando principalmente los méritos de su padre en Castilla del Oro. La influencia de Castilla del Oro en el Perú fue tal que el propio Garci Ortiz calificaba a la región de Tierra Firme como «llave de todo el Perú e principio de ganarse e descubrirse, porque de los dichos pueblos salió el marqués don Francisco Pizarro en descubrimiento de estos reinos e de ellos fue siempre socorrido»⁷⁶.

Castilla del Oro se podía considerar la llave del Perú no sólo por el trasiego de productos o riquezas —o de «otras cosas pertenecientes para las conquistas», en palabras de Cieza de León-, sino principalmente por el movimiento de personas que, con sus experiencias contribuían a construir una sociedad compleja y estructurada en el servicio al

⁷⁴ Información de los méritos y servicios de García de Jarén, Pedro de Candía, Francisco de Cuéllar, Antón de Carrión, Alonso Briceño, Domingo de Solaluz, Nicolás de Ribera, Martín de Paz y Alonso de Molina, 3 de agosto de 1528, AGI, Patronato 150, N. 3, R. 2.

⁷⁵ Real Provisión por la que se concede la gracia de nobles si fuesen plebeyos, y la de caballeros a los hidalgos, 26 de julio de 1529, AGI, Patronato 28, R. 22.

⁷⁶ Información... doc. cit., AGI, Patronato 98A, N. 2, R. 1.

monarca⁷⁷. En otra probanza, Hernando de Montenegro alegaba que su labor en Castilla del Oro, manteniendo pobladas las ciudades de Santa María del Antigua y Acla, había sido «la causa notoria porque todas las conquistas que después acá se han fecho se hiciesen e descubriesen estos reinos del Perú»⁷⁸. La sola mención a los orígenes del servicio personal en Castilla del Oro dotaría a la petición de los valores de antigüedad y méritos adquiridos que tanto contaban en estos procesos de ascenso social.

La antigüedad de los primeros pobladores se veía reforzada por el interés en mostrar un estilo de vida acorde con la supuesta nobleza que aquella garantizaba. En Castilla del Oro se generó, desde muy pronto tras las primeras poblaciones, una cierta forma de «vida noble» que consistiría en conseguir acreditar «vivir honestamente», de manera honrada, haciendo vida maridable y comportándose como hijodalgo. Esta vida noble se acreditaba con los hechos y no necesariamente con los orígenes o la sangre. Son muy poco habituales, de hecho, las referencias en las probanzas, sobre todo en los comienzos, a la condición de cristiano viejo o limpio de sangre. Hubo casos, sin embargo, en los que los servicios y la demostración de una vida virtuosa permitieron a reconocidos conversos alcanzar la categoría de hidalgos. El Consejo de Indias suplicaba al rey el 20 de abril de 1551 que hiciese a Martín Ruiz de Marchena la merced de darle el título de mariscal de Tierra Firme y armarle caballero hijodalgo, a pesar de que el Consejo «tiene relación que es confeso»⁷⁹.

De acuerdo con las leyes, Marchena ni siquiera podría estar presente en el Nuevo Mundo⁸⁰. Sin embargo, los méritos que Marchena había acreditado en la defensa de la ciudad de Panamá del ataque de los Contreras en 1550 –como más adelante se verá– eran demasiado importantes como para que la conciencia real no se viera perjudicada si no los recompensaba. No hay noticia sobre si el Consejo de Indias realizó alguna pesquisa en el caso de Martín Ruiz de Marchena o si consiguió de alguna manera la licencia real para pasar, pero existía constancia de su origen confeso y aún así fue convertido en hidalgo y concedida una generosa pensión de 300 mil maravedíes. Si bien nunca se aplicó un estatuto específico de limpieza de sangre, existían ciertas restricciones que, sin embargo, podían sortearse a través de los

⁷⁷ Jean-Paul ZÚÑIGA (2012), pp. 125-146.

⁷⁸ Información de los méritos y servicios del capitán Hernando de Montenegro, 1586, AGI, Patronato 129, R. 1.

⁷⁹ Consulta del Consejo de Indias, 20 de abril de 1551, AGI, Indiferente 737, N. 68.

⁸⁰ En 1522 se había decretado que «ninguno nuevo convertido a nuestra santa fe católica de moro, o judío, ni sus hijos, puedan pasar a las Indias sin expresa licencia nuestra». Antes, en Zaragoza en 1518, que «ningún reconciliado, ni hijo, ni nieto del que públicamente hubiere traído sambenito, ni hijo, ni nieto de quemado, ó condenado por la herética pravedad, y apostasía por línea masculina, ni femenina, pueda pasar, ni pase a nuestras Indias», recomendando expresamente al consejo que hiciera las pesquisas necesarias para evitarlo; *Recopilación...*, lib. XI, tít. XXVI, 16.

servicios y su justificación ante las autoridades⁸¹. Martín Ruiz de Marchena no necesitó falsificar su ascendencia ni ocultar sus orígenes pues los méritos que había acumulado en defensa de la Corona hablaron por él, a pesar de que era notorio y las autoridades estaban al corriente de su origen. La integración de los individuos no se producía en Castilla del Oro a través de su limpieza o sus orígenes si no que esta se justificaba por sus servicios, de una u otra manera, a la comunidad política, desde el rey a la ciudad⁸².

Ya se mencionó en el capítulo anterior la importancia que tenía, a efectos políticos y de organización de la sociedad, el hecho de tener casa poblada. Esa misma sustentación de una casa con multitud de sirvientes o caballos constituía una buena vía de demostración de lo que significaba y en qué consistía el género de vida noble en un contexto urbano. La percepción pública de esa condición resultaba, a falta de otro tipo de pruebas, fundamental para solidificar la propia consideración de nobleza en Castilla del Oro, a diferencia de lo que, según Thompson, sucedía en Castilla⁸³. En Indias –y más particularmente en Castilla del Oro, que era una gobernación muy urbana, pequeña y joven– las noticias corrían a gran velocidad. Un testigo en la probanza de Gonzalo de la Palma lo dejaba claro al advertir que «si el dicho capitán Gonzalo de Palma hubiera deservido a Su Majestad, este testigo lo supiera o hubiera oído decir por el conocimiento que de él tiene porque estas cosas en las Indias no son encubiertas por ser cosa de tan gran infamia y ser tierra que no se encubre nada»⁸⁴. La fama pública era, por lo tanto, fundamental en Castilla del Oro para acreditar la calidad.

La acreditación de ser hidalgo provendría en Castilla del Oro más de la fama y estilo de vida que los individuos hubieran adquirido que de la concesión de una ejecutoria o un título nobiliario. Entre los testigos de las probanzas abundaban las expresiones como la de un testigo en la probanza de Francisco de Pradanos, de quien decía que «se ha tratado e trata como persona de honra, así en el traje de su persona como en tener casa e mozos y esclavos e muy buen aderezo de su casa», de manera que se trataba «como hombre de honra e hijodalgo e por tal es tenido en esta tierra»⁸⁵. Alonso Martín de don Benito decía de sí mismo que era «persona honrada y de buena vida y fama, trato y conversación y por tal soy habido

⁸¹ Aunque nunca se aplicó un estatuto de limpieza de sangre específico para pasar a Indias, se puede considerar que había uno *de facto*, según María Elena MARTÍNEZ (2008), pp. 128-129; Luis LIRA MONTT (2000), pp. 177-201.

⁸² Jean-Paul ZUÑIGA (2002), p. 133; Oscar MAZÍN (2011), pp. 63-76.

⁸³ Para quien «vivir noblemente» se trataba simplemente de una «somewhat ritualized conception», en Irving A. THOMPSON (1985), p. 387.

⁸⁴ Información..., AGI, Patronato 151, N. 10, R. 1.

⁸⁵ Información de los méritos y servicios de Francisco de Pradanos, 26 de enero de 1543, AGI, Patronato 150, N. 7, R. 1.

y tenido y comúnmente reputado»⁸⁶. Era «pública voz y fama» que Andrea de la Roca vivía «bien e costosamente como hombre de los principales de la ciudad» y que, su hijo Pedro de la Roca, como no podía ser de otra manera, «ha sido siempre mancebo muy honrado y vive honestamente»⁸⁷.

Entre los requisitos que precisaba ese estilo de vida honesto se encontraba la exhibición pública de elementos simbólicos como los escudos de armas que ofrecían, además, la posibilidad de apuntalar por vía de herencia la creación de los linajes. Los escudos de armas y, en general, las mercedes simbólicas tenían, a través de la exhibición pública de un *honor* particular, la capacidad de arrastrar a otros con el ejemplo para emprender servicios a la Corona⁸⁸. En un momento temprano de la conquista, mientras todavía estaban en marcha múltiples expediciones y no había terminado siquiera el «descubrimiento» de toda la tierra, ese ejemplo era mucho más necesario de lo que fue una o dos generaciones más tarde, cuando ya el sistema se encontraba más estabilizado y lo que buscaban los individuos era una vía estable de rentas y recursos con los que subsistir. La solicitud de escudos de armas, además, implicaba la idea de patrimonializar la imagen pública ligada a un apellido, de manera que los herederos pudieran exhibir los méritos de sus antepasados como parte de su herencia.

En el Nuevo Mundo la limitación de la extensión de los mayorazgos desde el comienzo de la colonización, forzó a que la tipología de las recompensas que los vasallos del monarca podían esperar a cambio de sus servicios durante la primera mitad del siglo XVI estuviesen centradas o bien en las mercedes simbólicas, o en los cargos, pequeñas rentas o encomiendas⁸⁹. No todos los conquistadores, pues, buscaban un pago en metálico por sus acciones, sino que, especialmente en los inicios de la población, una merced simbólica podía ser la única petición. Los primeros pobladores acudían a Indias, «a su costa y misión», de manera que no contarían con recibir nada a cambio. De hecho, en varias probanzas de mérito, como en la de Andrea de la Roca, se menciona que «en aquellos tiempos Su Majestad no hacía pagas, antes servían a su costa todos y así entiende [ese testigo] lo haría el dicho Andrea de la Roca». La ausencia de un estipendio concreto –y el desinterés por él– pues «no se acostumbraba tomar [pagas o socorros] en aquel tiempo por ningún hombre que tuviese la calidad del dicho Andrea de la Roca» explicaría que los primeros pobladores de Indias

⁸⁶ Información..., AGI, Patronato 93, N.5, R.1.

⁸⁷ Información..., AGI, Patronato 151, N. 4, R. 1.

⁸⁸ Al solicitar su escudo de armas, Alonso Martín de don Benito estaba convencido de que, al verlo, «otros servirán tan bien como él lo ha hecho», AGI, Patronato 93, N. 5, R. 1.

⁸⁹ Richard KONETZKE (1951), pp. 329-357.

solicitasen escudos de armas como vía de compensación por sus servicios⁹⁰. En 1536 Alonso Martín de don Benito había pedido como única remuneración por sus servicios, que se le concediera un escudo de armas con el que honrar su apellido, al igual que Hernán Sánchez de Badajoz en 1540⁹¹. De igual manera, muchos otros participantes en las primeras fundaciones o que habían mostrado un estilo de vida acorde con la condición honrada, cuya labor se desarrolló en las primeras décadas tras 1513, como Francisco de Pradanos o Toribio Montañés de Lara, solicitaron escudos de armas que acreditaran públicamente su preeminencia social⁹².

Los herederos trataron, en cambio, de convertir esa *herencia inmaterial*, en algo más tangible⁹³. En muchas ocasiones, hijos y nietos de los primeros fundadores solicitaban pensiones o cargos con el objetivo declarado de pagar las deudas que sus antepasados habían contraído durante la población. En 1588 Gómez Julio de Tordoya pedía mayores rentas para paliar una deuda de 100 pesos que acarreaba «a causa de los muchos y leales servicios que los dichos Pedro de Ojeda y capitán Juan Julio de Ojeda, padre y abuelo del dicho don Gómez Julio de Tordoya hicieran a Su Majestad y gastos que hicieron excesivos de su hacienda», por haber «hecho los dichos servicios a su costa y misión»⁹⁴. Los herederos de los protagonistas de la conquista abandonaron esa mentalidad «épica» para tratar de sobrevivir a los méritos de sus antepasados gracias precisamente a los méritos de sus antepasados.

El contraste generacional resulta evidente si se analiza como ejemplo el caso Rodrigo Lozano y su hijo. El primero, veterano poblador que, antes de pasar a Perú y ser incluso la fuente para la *Historia del Perú* de Agustín de Zárate, había sido uno de los primeros que pasó a Castilla del Oro, al hacer su probanza en 1537 solicitó únicamente un escudo de armas «para que las tengan conocidas él y sus hijos y descendientes»⁹⁵. Su hijo Bernabé Lozano, en cambio, retomó la probanza en 1574 y solicitó una renta de 3000 pesos para sustentarse «como se suele hacer con los hijos de los primeros pobladores», alegando que a su padre le habían concedido un escudo de armas, pero ningún beneficio económico adherido por lo

⁹⁰ Información... AGI, Patronato 151, N. 4, R. 1.

⁹¹ Real Provisión a Hernán Sánchez de Badajoz, concediéndole un escudo de armas, 1540, AGI, Patronato 169, N. 2, A. 1540, R. 2.

⁹² Información... AGI, Patronato 150, N. 7, R. 1; Real Cédula al gobernador de Tierra Firme recomendándole a Toribio Montañés, 4 de noviembre de 1531, AGI, Panamá 234, L. 5, f. 1v.

⁹³ Sobre los escudos como parte del concepto de «herencia inmaterial» de Giovanni Levi y del «capital simbólico» de Bourdieu, ver Ignacio ATIENZA (1997), pp. 41-59, p. 42.

⁹⁴ Información de los méritos y servicios de Pedro de Ojeda, uno de los primeros descubridores del reino de Tierra firme, 1588, AGI, Patronato 152, N. 8, R. 1.

⁹⁵ Informaciones de los méritos y servicios de Rodrigo Lozano, 1537, AGI, Patronato, 93, N.8, R. 1; Agustín DE ZÁRATE (1555).

que se veía obligado a solicitar el dinero⁹⁶. Por tanto, si bien los descendientes no solicitaban escudos de armas, apelaban a los recibidos por sus antepasados para reclamar otras mercedes⁹⁷.

Las relaciones de méritos ofrecen un panorama de las circunstancias en las que los individuos se movían en el Nuevo Mundo y la adaptación de los principios de antigüedad y nobleza al nuevo escenario. Castilla del Oro significó la posibilidad de un nuevo comienzo, fraguando nuevas circunstancias, para multitud de individuos cuyos orígenes o condiciones sociales no hubieran permitido comenzar un proceso de ascenso social en el viejo mundo. La ciudad y la vida urbana actuaron, como se verá a continuación, como el telón de fondo tanto de la tipología de las solicitudes como de los méritos alegados por los individuos.

3. *Servir en la ciudad, servir al rey.*

Los méritos argüidos por los individuos en las relaciones ofrecen una imagen de la importancia del servicio a la ciudad en el imaginario de los vasallos de la Corona. Muchos de los méritos que aportaban los vecinos de las poblaciones de Castilla del Oro estaban relacionados con la fundación de poblaciones, el desempeño de cargos en el gobierno municipal y la defensa de las ciudades frente a amenazas de distinto origen. Las acciones concretas se añadían así a las calidades, la antigüedad y los discursos justificativos, de forma que cada faceta alimentaba y fortalecía a las demás de cara a una perpetuación del linaje y la construcción de una memoria.

El primero de los servicios que los primeros pobladores acreditaban en sus relaciones de méritos era el de haber participado en la fundación de las ciudades. Además de convertir las fundaciones en un fenómeno de participación política colectiva, como se vio en el primer capítulo, su inclusión por parte de los individuos entre los méritos para lograr el ascenso social construía una fuerte identificación entre los pobladores y la comunidad que arrancaba en la fundación. La memoria de esa participación acompañaba a los participantes allá donde fuesen y pervivía en su linaje independientemente de dónde habitasen los herederos de los primeros. La fundación sustituiría, en muchos casos, a los hechos de armas *strictu sensu* en el imaginario colectivo de la comunidad y así se recordaría en varios de los escudos de armas

⁹⁶ Información de los méritos y servicios de Rodrigo Lozano a instancias de su hijo Bernabé Lozano, AGI, Patronato 95A, R1.

⁹⁷ Los herederos de Sebastián Xuarez y de Gaspar de Espinosa incluyeron de forma explícita en sus propias probanzas para solicitar rentas referencias al capital simbólico adquirido por sus antepasados.

concedidos a primeros pobladores. Muchos de estos hacían referencia, en su decoración heráldica, a la participación en acciones de fundación de las ciudades.

El escudo de armas de Juan Roldán destacó su participación como miembro prominente de la expedición de Núñez de Balboa en la fundación de Acla y más tarde, como parte del grupo que acompañaba a Pedrarias, fundó Panamá y facilitó la navegación del río Darién y el descubrimiento del río Chagres. En su escudo se representaba un castillo dorado, similar al que se encontraba en el escudo de Santa María del Antigua, como símbolo de la región de Castilla del Oro, un río que atravesaba el conjunto y dos grifos sosteniendo sobre sus espadas dos bolas del mundo⁹⁸. Alonso Martín de don Benito, al solicitar su escudo de armas en 1536 había sugerido que en él apareciese «un cacique atravesado un arpón por los pechos», pues eso era «conforme a sus servicios»; sin embargo, al serle concedido el escudo, en diciembre del año siguiente, se prefirió enfatizar otro de sus servicios, alejado de un hecho de armas y más cercano a la labor pobladora, como fue haber trasladado unas anclas desde Acla a la Mar del Sur, potenciando con esto la imagen del poblador o fundador frente a la del violento conquistador⁹⁹. En el título de concesión de su escudo a Gaspar de Espinosa mencionaba su participación en la fundación de Natá. El propio Espinosa, cuyo interés principal era el descubrimiento de la Especiería, se esforzó por incluir en su escudo una referencia a las posibilidades de exploración que, según él, abría esa segunda ciudad en la Mar del Sur. En alusión a esto, se incluyeron en el escudo de «dos caravelas por señal que esperamos en nuestro señor que por allá se ha de hazer el descubrimiento de la Especiería»¹⁰⁰.

Rodrigo de Lozano participó en varias expediciones que partieron desde Castilla del Oro y estuvo presente en la fundación de Panamá en defensa de la cual tomó parte en una expedición contra un grupo de indígenas cuyo origen no especifica «llevando los dichos indios de venida a los españoles vos entonces animaste a los dichos españoles diciendo ‘caballeros, a ellos, a ellos’ y os apeaste del caballo en que íbades y con una espada y una adarga os metiste entre los indios hiriendo y matando en ellos»¹⁰¹. En recuerdo de este episodio, la orla del escudo se compuso con varias manos sujetando una espada. Hernán Sánchez de Badajoz, tras su fecundo paso por Castilla del Oro, viajó a Perú donde ayudó a ganar y luego a defender la fortaleza de Cuzco, hecho durante el cual «subisteis por una escala

⁹⁸ Escudo de armas a Juan Roldán, 20 de marzo de 1565, ADA, c. 238, n°1 (111).

⁹⁹ Información de los méritos y servicios de Alonso Martín de don Benito, uno de los primeros descubridores del Mar del Sur..., 1536, AGI, Patronato, 93, N.5, R.1; Escudo de armas a Alonso Martín de Don Benito, 7 de diciembre de 1537, ADA c. 238, n°1 (72).

¹⁰⁰ Real Provisión haciendo merced al licenciado Gaspar de Espinosa de escudo de armas, 5 de marzo de 1524, AGI, Panamá 233, L. 1, f. 353r-354v.

¹⁰¹ Armas de Rodrigo Lozano, vecino de la ciudad de Truxillo, 8 de julio de 1540, ADA, caja 238, n° (64).

a un cubo de la dicha fortaleza, la cual fue causa que se tomase», de manera que en su escudo se representó una torre plateada sobre la que se apoyaba una escalera¹⁰². La toma/fundación y mantenimiento de las primeras poblaciones, pues, significaba un acontecimiento heroico en sí mismo, sin importar necesariamente que hubiese estado acompañado de hechos de armas. De hecho, en ocasiones en las relaciones de méritos, los protagonistas incluían hechos de armas de manera exagerada vinculados a la fundación sin especificar de manera concreta su naturaleza y su importancia para la propia fundación. De igual manera, la ocupación de cargos a partir de la fundación se valoraba como una fórmula para lograr el ascenso social.

Desde el comienzo de la población de Castilla del Oro, los cargos de alcaldes y regidores se repartieron entre los primeros pobladores. En consecuencia, para acreditar la nobleza inherente a pertenecer a ese primer grupo de conquistadores convertidos en vecinos, los individuos que elevaban sus relaciones de méritos comenzaron a acreditar como un servicio muy importante haber ocupado diversos cargos en el gobierno. De esta manera los servicios al rey pasaron a consistir en la ocupación de cargos en la administración¹⁰³. La labor política en defensa del *bien común* y a favor de la prosperidad de las ciudades era tan importante o más que haber participado en su conquista y fundación a la hora de defender la causa propia ante la Corona¹⁰⁴.

El desempeño de cargos, además, estaba en los dos extremos del sistema de méritos y servicios. En ocasiones se presentaban las probanzas con el objetivo de conseguir la merced de un cargo que, a su vez, contribuiría a ampliar la nómina de servicios con los que los individuos aspirarían a más mercedes. Haber sido elegido para el puesto de regidor de una población, por ejemplo, significaba ostentar una serie de virtudes¹⁰⁵. Una cédula de 1576 aclaraba que se prefiriera para «las provisiones de los corregimientos y otros aprovechamientos cualesquiera a los primeros conquistadores y después de ellos a los pobladores casados (...) pues no se puede proveer a otra persona alguna»¹⁰⁶. Haber ocupado,

¹⁰² Real Provisión a Hernán Sánchez de Badajoz, concediéndole un escudo de armas, 1540, AGI, Patronato 169, N. 2, A. 1540, R. 2.

¹⁰³ En Castilla, durante los siglos XVI y XVII, los servicios eran personales al rey mientras que, a partir del siglo XVIII, el propio concepto de servicio comenzó a cambiar y a vincularse a la participación en la defensa de la utilidad y el bien público, dentro de una institución más abstracta, asimilable al concepto de estado, Irving A. THOMPSON (1985), p. 394.

¹⁰⁴ En contra de lo que opinaba Richard KONETZKE (1951), según el cual el servicio militar fue «el factor más decisivo para la formación de la nobleza en las Indias», p. 336.

¹⁰⁵ No en vano, en su tratado teórico sobre la nobleza en Indias, Mexía de Ovando recordaba que «los antiguos no quisieron elegir por regidores de sus repúblicas, principados y reinos, sino tan solamente a aquellos hombres que fuesen nobles, virtuosos y sabios, de quien se podía presumir y creer que usarían sus oficios con piedad, justicia, clemencia y buena policía», Pedro MEXÍA DE OVANDO (1621), p. 237.

¹⁰⁶ Informaciones de oficio y parte: Juan de la Roca, 1572-1599, AGI, Lima, 206, N. 12.

en fin, un cargo público en una ciudad acreditaba de manera explícita y sin necesidad de muchas más demostraciones tanto la calidad personal como la de los antepasados¹⁰⁷.

Con este planteamiento no sorprende, por lo tanto, que se incluyese de forma masiva la ocupación de cargos entre las probanzas. Juan de Castañeda comenzaba su probanza advirtiendo de que «siempre he tenido en estos reinos desde que la ciudad de Darién se pobló, cargos de la administración de la justicia muy honrados así de teniente de gobernador como de visitador, alcalde, regidor, e siempre he dado buena cuenta dellos e como de hacer justicia» por lo que todo el mundo «sabe que soy y he sido muy servidor de Sus Majestades». Su labor ocupando esos cargos habían sido su servicio más importante a la Corona, pues lo había hecho «a cargo e servicio de Su Majestad e bien del común». Incluso el gobernador envió una carta apoyando su solicitud de una renta alegando la gran labor que Castañeda había hecho en «pro de la ciudad, que tomó el oficio de regidor que tiene e que es muy buen vecino e poblador e tiene su mujer e casa muy poblada e ciertos hijos»¹⁰⁸.

Andrea de la Roca fue nombrado alcalde mayor de Panamá y su hijo recordaba que «es oficio que no se suele encargar sino a los más principales que hay en la república»¹⁰⁹. Los descendientes de Hernando de Montenegro no se cansaron de repetir en sus probanzas que a su antepasado se le habían dado «siempre cargos e oficios muy honrosos como a persona principal»¹¹⁰. De esta manera, a través del ejercicio de cargos honrosos y su inclusión en las probanzas se acreditaba al mismo tiempo un servicio muy importante al rey y la comunidad local, así como la propia calidad personal y familiar, cuyo cultivo había comenzado a su llegada al Nuevo Mundo y cuyos frutos esperaban recoger los descendientes de los primeros pobladores.

4. Defender la ciudad, defender la Corona.

La defensa de las ciudades de Castilla del Oro fue, junto a su fundación, el principal reclamo que aparecía en las probanzas de méritos y servicios. Los vecinos eran conscientes de que, defendiendo a una ciudad del rey, se evitaba «grande deservicio a Dios, Nuestro Señor, y a Vuestra Majestad y el grande daño y pérdida que pudiera venir a vuestro

¹⁰⁷ Según Soria Mesa «muchas veces la probanza [de limpieza de sangre] convierte en ser hijo, nieto o deudo de un regidor en prueba misma de nobleza. Se está asimilando, de forma descarada, la pertenencia al regimiento con la posesión de la hidalguía» Enrique SORIA MESA (2013), pp. 9-36, esp. p. 33.

¹⁰⁸ Información... doc. cit., AGI, Patronato 150, N. 6, R. 3.

¹⁰⁹ Información... doc. cit., AGI, Patronato 151, N. 4, R. 1.

¹¹⁰ Información... doc. cit AGI, Patronato 129, R. 1.

patrimonio real y a vuestros súbditos y naturales»¹¹¹. Si una ciudad desaparecía el agravio era equivalente a que no hubiera existido, por lo que luchar «porque no se despoblase el dicho pueblo» era lo mismo que luchar «por ampliar la Corona de Su Majestad»¹¹². La defensa de las ciudades, además, llevaba aparejado un reforzamiento de los lazos comunitarios, pues al defender la propia población se defendía el patrimonio de cada uno de sus miembros y se afianzaba la, incipiente en Castilla del Oro, identidad colectiva o el llamado «amor a la tierra».

Las poblaciones se defendían de manera autónoma, con lo que robustecían su relativa independencia, pero, al mismo tiempo, garantizaban su lealtad al monarca por defender el patrimonio real. Cada uno de los miembros de la comunidad aspiraba a acreditarse como defensor del conjunto y buscaba hacer pública y patente su pertenencia y lealtad a su comunidad¹¹³. Los actos contenidos en las probanzas –los propios hechos llevados a cabo por cada individuo– eran la constatación de la lealtad comunitaria mientras que el hecho de ponerlo por escrito, acumular testimonios, y enviarlo a la Corte, al tiempo que creaba el relato, buscaba acreditar la lealtad personal al rey. Las amenazas de la despoblación de una ciudad podían venir por diversos flancos, según atestiguan los propios textos de las relaciones, de los que deberían defender a la comunidad. Los riesgos provenían de la propia naturaleza salvaje, de los ataques de indígenas o cimarrones, de potencias extranjeras o, especialmente, de otros castellanos «rebeldes».

En 1523, Lorenzo Martín, quien había resistido en Santa María cuando casi todos abandonaban, recordaba que dos años antes un gran felino llamado ochi tenía atemorizada a toda la ciudad¹¹⁴. Por la presencia del felino «no osaban pasar ni sembrar esta ribera del dicho del Darién ni los cristianos ni los indios» y era tan fiero que cada semana mataba a uno o dos indios y también había matado junto a la ciudad a un castellano llamado Juan Vicente. La situación era tan extrema que, según Martín, «estaba esta ciudad para se destruir y despoblar por los grandes daños que del recibía». La amenaza de los ochis en Santa María del Antigua

¹¹¹ Información de los méritos y servicios de Juan Bautista de Noli, 1562, AGI, Patronato 150, N. 14, R. 7.

¹¹² Información de los méritos y servicios del adelantado don Pascual de Andagoya, 1585, AGI, Patronato 128, R. 4.

¹¹³ José Javier RUIZ IBÁÑEZ (2009), pp. 95-125.

¹¹⁴ Según la descripción de Fernández de Oviedo el ochi «tiene la hechura de la cabeza como león o onza, pero gruesa, y ella y todo el cuerpo y brazos pintados de manchas negras y juntas unas con otras, perfiladas de color bermeja, que hacen una hermosa labor o concierto de pintura; en el lomo y a par de él mayores estas manchas, y disminuyéndose hacia vientre y brazos y cabeza (...) muy armados de dientes y colmillos y uñas, y en tanta manera fiero, que a mi parecer ningún león de los muy grandes no es tan fiero y tan fuerte». Incluso se había llevado un espécimen a Toledo para amaestrarlo que finalmente acabó sacrificado por haber atacado a su domador, pues «estos animales no son para entre gentes, según son feroces y de su propia natura indomables», Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO (1996), p. 143 y ss. Este animal, si bien no se hace explícito en la descripción podría ser el que aparecía representado en el propio escudo de la ciudad de Santa María.

era muy frecuente, tanto que en 1522 el cabildo lanzó una ordenanza «por la cual prometimos cuatro o cinco pesos de oro al que matase cualquiera tigre de éstos»¹¹⁵. La mejor manera de matar a ese animal, según Oviedo, era de un tiro de ballesta, pero Lorenzo Martín no especifica de qué manera llevó a cabo la cacería. Lo que sí dejó claro era que después de matarlo «acá nunca a faltado indio ni india a cuya causa ya osan los labradores andar en el campo», de lo cual «ha surgido mucho servicio a Dios, al Rey e a esta ciudad». Lorenzo Martín, según su relato, al acabar con la amenaza del ochi había salvado a la ciudad de una segura desaparición por la que consideraba que «es mucha razón que yo fuera gratificado»¹¹⁶.

Además de las amenazas que provenían de la naturaleza –y que también incluirían, por ejemplo, los destrozos provocados por las inclemencias climatológicas-, las ciudades de Castilla del Oro tenían otras preocupaciones¹¹⁷. Luis Torres Guerrero destacaba en su probanza que había servido en todas las ocasiones en que se le había necesitado e incluso había sido nombrado capitán «por salir contra los ingleses y negros cimarrones». Estos últimos, a menudo en alianzas bélicas con franceses e ingleses, fueron una de las grandes amenazas para los castellanos especialmente entre 1549 y 1582, y Guerrero salió contra ellos en 1573 cuando ya estaban «cerca de la dicha ciudad» de Panamá¹¹⁸. Según esta probanza, los negros cimarrones estaban en connivencia con los corsarios ingleses y franceses y por ese motivo Torres Guerrero «halló en poder de los dichos negros dos lámparas de plata», que al confiscar donó para la caridad¹¹⁹.

A partir de los años 30 del siglo XVI fue constante la presencia de corsarios franceses e ingleses en las costas de Castilla del Oro. Cuando se tuvo noticias de que se acercaba una flota de franceses sobre el puerto de Nombre de Dios, Jerónimo de Mercado fue uno «de los primeros en servir a Su Majestad con mis armas y caballos a punto de guerra» para evitar que las tropas extranjeras invadiesen la ciudad mostrando de esa manera su lealtad al rey y a la

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Información de los méritos y servicios de Lorenzo Martín, 1523, AGI, Patronato 92, N. 1, R. 2.

¹¹⁷ «al tiempo que con tormenta y recio tiempo se perdieron en el puerto de la ciudad de Nombre de Dios los galeones de armada de Su Majestad de que era capitán Francisco Carreño el dicho capitán Gonzalo de Palma trabajó mucho e puso mucha diligencia con su persona e gente de su casa e muchos negros suyos salvando y escapando la gente que salían medio ahogada de los navíos e llevó a su casa muchos de los que salían desnudos en carnes, hizo reparar, curar y alimentar a todos los que salían heridos de los dichos navíos e todos fueron remediados y proveídos en lo cual se sirvió a dios nuestro señor y a su majestad», Información... doc. cit. AGI, Patronato 151, N. 10, R. 1.

¹¹⁸ Ruth PIKE (2007), pp. 243-266; Según Carmen Mena esa época fue la «edad dorada» del cimarronaje, en Carmen MENA (1984), p. 91.

¹¹⁹ Información de los méritos y servicios de Juan Díaz Guerrero, de su hijo Francisco de Torres, y nieto Luis de Torres, 4 de mayo de 1580, AGI, Patronato 152, N. 4, R. 2.

comunidad, pues siempre estaba presente «en todos los alardes que se hicieron en el dicho puerto y en esta ciudad y era de los primeros que iban de esta ciudad al dicho socorro»¹²⁰.

Cuando en 1559 llegó a Nombre de Dios la noticia de que los corsarios franceses acechaban el puerto de Cartagena, se hizo un «apercibimiento y guarda» ciudadana durante más de seis meses hasta que el peligro se disipó, en la que estuvo muy involucrado Gonzalo de Palma «sirviendo a Su Majestad con su persona e teniendo como tenía en su casa cantidad de soldados a quien daba de comer, posada y servicio y armas e socorriéndoles las necesidades que tenían» para que «con mayor voluntad sirviesen a su majestad en la defensa de la dicha ciudad». El mismo Gonzalo de Palma, poco tiempo después «tuvo un encuentro con el corsario inglés Joan Nombre en el que participó mucho y fruto del cual el corsario fue hecho justicia»¹²¹. Unos años más tarde, en 1572, cuando «Francisco Draque» pasó a la Mar del Sur, Diego González de Figueroa acudió presto «a la defensa y guarda de la ciudad de Panamá con mi persona y armas a mi costa»¹²². Los ataques perpetrados a ciudades de Castilla del Oro por agentes de potencias extranjeras se relacionaban con las variaciones en los conflictos globales a gran escala, de manera que las dinámicas de amistad y enemistas fluctuaban en función de los movimientos políticos, y con ellos la imagen de los extranjeros para los vecinos.

Sin embargo, los acontecimientos que más peso tuvieron en las relaciones de méritos y que más contribuyeron a la solidificación de los lazos comunitarios, así como a la definición de los principios de lealtad y ennoblecimiento tanto individuales como colectivos, fueron la defensa de las ciudades frente a asaltos realizados por los propios castellanos. En concreto, el ya mencionado asalto a Panamá por parte de los hermanos Contreras en 1550 generó un volumen de respuestas por parte de los participantes en la defensa de la ciudad que permite analizar en profundidad la reproducción del engranaje de lealtades e identidades que contribuyó a la construcción desde abajo de los espacios políticos de la Monarquía Hispánica.

5. Nobleza y lealtad construidas desde abajo.

Dos acontecimientos resultaron fundamentales para la construcción temprana de una identidad local en Panamá, a través de la defensa de la ciudad por parte de los miembros de

¹²⁰ Información de los méritos y servicios de Jerónimo de Mercado en Tierra Firme y Perú, 25 de octubre de 1567, AGI, Patronato 151, N. 3, R. 1.

¹²¹ Información..., AGI, Patronato 151, N. 10, R. 1.

¹²² Información de los méritos y servicios de García Hernández de Ribera, de su hijo Diego González de Ribera y de su nieto Diego González de Figueroa, a petición de este último, 24 de abril de 1587, AGI, Patronato 152, N. 7, R. 2.

la comunidad frente a amenazas externas a la ciudad. En abril de 1550 se produjo el ataque de los hermanos Contreras a Panamá y doce años más tarde, en diciembre de 1562, el alzamiento de Rodrigo Méndez, un antiguo escribano de Panamá y veterano de las guerras de Perú. Ambos eventos, de intensidad y rango distinto, se mitificaron como eventos fundacionales de la identidad de la ciudad y contribuyeron ulteriormente a acreditar, años más tarde, la intitulación de Panamá como «muy noble y muy leal».

En la medianoche del domingo 20 de abril de 1550 los hermanos Pedro y Hernando Contreras, nietos de Pedrarias Dávila, desembarcaron en Panamá desde Nicaragua. Allí se habían alzado frente las autoridades contra los intentos de aplicación de las Leyes Nuevas. Sin embargo, más allá de constituir una «réplica después del terremoto político provocado por la insurrección de Pizarro»¹²³, la actuación de los Contreras en Panamá tuvo una entidad propia y, sobre todo, generó su propio «terremoto político» local con repercusiones de radio más amplio. Según el trabajo canónico de Lohmann Villena, los principios que regían la rebelión de los Pizarro eran ya un anacronismo, puesto que las fórmulas del derecho a la resistencia o el *Quod omnes tangit* habrían sido «arrolladas por el absolutismo»¹²⁴. Sin embargo, la propia práctica política inmediatamente posterior a las rebeliones, invita a reconsiderar este planteamiento y sus implicaciones. Como se verá, la defensa de las poblaciones y la propia definición de tiranía y rebelión estuvieron sujetas a redefiniciones mediante la práctica, y la propia construcción de la lealtad no se basó en planteamientos impuestos a través del poderío real absoluto sino a la consecución de las mercedes debidas a los servicios prestados.

Los hermanos Contreras se resistían ante las imposiciones del gobierno regional y peleaban contra las condiciones del reparto en los botines de las expediciones. Ya en Nicaragua habían ajusticiado al obispo Antonio de Valdivieso y se habían embarcado hacia el puerto de Panamá¹²⁵. Su objetivo primordial en Panamá era interceptar la expedición del presidente de la Audiencia de Lima Pedro de La Gasca y hacerse con el tesoro que este transportaba tras haber pacificado el Perú¹²⁶. La Gasca simbolizaría para los Contreras el

¹²³ Gregorio SALINERO (2017), p. 14.

¹²⁴ Guillermo LOHMANN VILLENA (1977), pp. 39-52; Castellero ha interpretado, en línea con la historiografía tradicional, la de los Contreras como otra de las rebeliones cuyo fin fue que «el Estado reivindicó su derecho a un control más enérgico de la realidad colonial», Alfredo CASTILLERO CALVO (2006), p. 190. Frente a estos planteamientos dicotómicos se puede contraponer la interpretación sobre los conflictos políticos en el Antiguo Régimen de Francesco Benigno para quien un planteamiento basado en el «marco de un esquema orden/desorden parece insuficiente tanto en el plano teórico como en el histórico, si se desea sacar a la luz la complejidad de los fenómenos que se analizan», Francesco BENIGNO (2000), p. 11; Jorge DÍAZ CEBALLOS (2018c)

¹²⁵ Carmen MENA (1992), pp. 421- 447.

¹²⁶ La Gasca había sido enviado por orden real al virreinato del Perú tras la decapitación del primer virrey, Blasco Núñez de Vela, por Gonzalo Pizarro cuando éste trató de imponer las Leyes Nuevas de 1542; un análisis

intento, por parte de la Corona, de apropiarse de lo que consideraban que les correspondía como los verdaderos conquistadores del Nuevo Mundo. A su llegada a Panamá, el presidente La Gasca transportaba muchos pesos de plata –«millón y medio para el rey, y otro tanto y más de particulares»-. Como no disponía de capacidad para transportarlos hasta Nombre de Dios a fin de embarcarse hacia Castilla, dejó unos 600 mil castellanos en Panamá y con el resto se dirigió hacia la costa atlántica. Fue en ese momento cuando «llegaron a Panamá, con 200 soldados españoles, dos hijos de Rodrigo de Contreras, Gobernador de Nicaragua (...) entrando por fuerza en la ciudad y en las casas»¹²⁷.

El testimonio más inmediato de los hechos es el que el propio gobernador Sancho de Clavijo comenzó a recabar apenas un mes y medio después. Según sus pesquisas, a su llegada a la ciudad de Panamá, los Contreras «fueron derechamente a la casa del dicho gobernador e la cercaron e quebrantaron y entrando en ella con apellido diciendo ‘muera, muera’ y entrando en el aposento del dicho gobernador no le hallaron». Efectivamente, no le hallaron porque el gobernador, Sancho de Clavijo, se había marchado esa misma mañana al puerto de las Cruces «que es cinco leguas desta ciudad de Panamá donde dos días antes era ido el señor licenciado Gasca, presidente del Perú, con la mayor cantidad de la plata de Su Majestad»¹²⁸. Los hermanos Contreras, al no encontrar ni a La Gasca ni al gobernador Clavijo, optaron por asolar la ciudad antes de salir en busca del presidente de la Audiencia de Lima hacia Nombre de Dios. Durante la noche del 20 de abril se sucedieron los robos, tanto en los aposentos del gobernador como en diversas casas particulares de la ciudad; los asaltantes incluso pusieron en la picota al obispo Torres, quien convenció al propio Hernando Contreras para que no acabase con su vida¹²⁹. A la mañana siguiente un grupo de los alzados se dirigió hacia la Casa de las Cruces para intentar localizar al gobernador y otro, con Hernando de Contreras a la cabeza y 150 hombres, se dirigió al Nombre de Dios, en donde esperaban encontrar a La Gasca y, además, «robar e alçarse con ella como hizieron con esta de Panama»¹³⁰. Aquellos que habían ido a la Casa de las Cruces se hicieron con ella y robaron y tomaron todo lo que allí se encontraba; sin embargo, desde Panamá se enviaron

de la labor de La Gasca como pacificador en Manfredi MERLUZZI (2008), *passim*; ver también Ana María LORANDI (2002), pp. 90-96.

¹²⁷ Francisco LÓPEZ DE GÓMARA (1959), f. 248r.

¹²⁸ Informaciones de oficio y parte: Hernando de Contreras, 6 de junio de 1550, AGI, Panamá 61, N. 24.

¹²⁹ Los testimonios recopilados en la información y condena los participantes en la rebelión resultan muy gráficos de las dimensiones de los hechos: «preguntavan a las personas que topavan y en las casas donde entravan quyen bibe y sy no le acudian Hernando de Contreras e sy le respondian El Rey les davan de cuchilladas e los querian matar e hazian otros malos tratamientos y en las dichas casas robavan el oro e plata, seda e otras cosas que hallaban e mulas e cavallos e armas» Ynformacion recibida en tierra firme contra las personas que fueron en la rrevelion de Hernando Pizarro y Pedro de Contreras, AGI, Justicia 1051, N. 7, R. 2, f. 7v-8.

¹³⁰ Ibid.

noticias a Nombre de Dios sobre la inminente llegada de los alzados. Enterado de esto, Juan Bermejo, que acompañaba a Hernando Contreras como su maestre de campo, decidió replegarse y centrarse en intentar asegurar su presencia en la ciudad de Panamá.

En el ínterin entre la salida hacia Nombre de Dios de Hernando de Contreras y Juan Bermejo la mañana del lunes y su retorno la tarde del martes, en la ciudad de Panamá se organizó la defensa, que consiguió en una primera batalla expulsar a los atacantes encabezados por Bermejo. Los rebeldes se replegaron y, en las afueras de Panamá, planearon quemar la ciudad. El plan para quemar el pueblo consistía en hacerlo «por seis partes, entendiendo que siendo el pueblo como es de tabla e cañas fácilmente le quemarían e pondrían en confusión la gente que estaba por Su Majestad para se aprovechar de ellos»¹³¹. Sin embargo, antes de que pudieran ejecutar sus planes, los vecinos que se habían organizado para defender la ciudad decidieron salir a su encuentro, librando una batalla en un cerro que significó, el día 23 de abril, el fin del alzamiento de los Contreras en la ciudad de Panamá y, en general, de su amenaza sobre Castilla del Oro.

Ambos hermanos Contreras huyeron de la ciudad; Hernando fue apresado mientras escapaba por tierra y ajusticiado, mientras que Pedro huyó en varias naos tras las que salieron embarcaciones, aunque nada más se supo de él y se le presumió muerto¹³². El botín que los asaltantes habían acumulado fue recuperado, tanto lo que pertenecía a la hacienda real como lo que correspondía a los particulares, alrededor de unos 800 mil pesos¹³³. El resto de los compañeros de los Contreras que no habían muerto en la batalla fueron prendidos y acusados de un crimen de lesa majestad y de ser «tiranos y rebeldes contra la Corona real» así como de «desacato y deservicio».

Fruto de la sentencia, el 26 de abril los rebeldes fueron condenados o bien al destierro o bien a galeras o bien a ser ajusticiados públicamente de manera inmediata por orden de la máxima autoridad que permanecía en la ciudad, el alguacil Rodrigo de Villalba¹³⁴. La ejecución fue rápida y cargada de simbolismo ejemplarizante pues, de acuerdo con la categoría de cada cual, los condenados recibieron su castigo que habría de servir, por un lado,

¹³¹ Colección Somoza, p. 17.

¹³² Giromalo BENZONI (1989), p. 306.

¹³³ Diego Fernández Polaino, años más tarde, mencionaba dos millones de ducados, en Real Cédula al presidente y oidores de la Audiencia de Panamá, recomendando al capitán Diego Fernández Polaino, 16 de julio de 1568, AGI, Panamá 236, L. 10, f. 154v y ss.

¹³⁴ El texto de la sentencia en Ynformación... doc. cit. AGI, Justicia 1051, N. 7, R. 2, f.139 y ss. y también en Colección Somoza, p. 130 y ss. El crimen de lesa majestad no era estrictamente un delito político si no que se consideraba una traición del vínculo personal que unía a los individuos con la Corona, en este caso a través de su patrimonio y del ataque a los oficiales, y que quebraba el orden mismo del sistema; Bartolomé CLAVERO (1990), pp. 57-89.

para reforzar el imperio de la justicia por parte de la comunidad como, por otro lado, actuar como escarmiento y ejemplo¹³⁵. Los hechos apenas duraron seis días, desde la llegada de los rebeldes hasta su ajusticiamiento. Sin embargo, el eco y la importancia de este episodio en la ciudad de Panamá fueron largos e intensos.

La reconstrucción posterior de los hechos permite dotar de contenido específico lo que sucedió en esas horas transcurridas desde el ataque hasta la condena de los atacantes. Una de las narraciones canónicas sobre el asalto de los Contreras a Panamá, efectuada por López de Gómara, puso el foco sobre la figura de La Gasca quien, según el cronista, retornó a toda prisa desde Nombre de Dios para derrotar a los rebeldes, defendiendo el tesoro real¹³⁶. Esta interpretación, repetida por otros cronistas a lo largo de las décadas —entre ellos Antonio de Herrera—, se contradice de manera radical con la narración emanada de las relaciones de méritos iniciadas por los propios protagonistas. Las relaciones de méritos construyeron un relato en el que todo el mérito en la defensa de Panamá, así como la propia construcción del discurso de los rebeldes, recae en los vecinos que, en ausencia de autoridades políticas, tomaron en sus manos la defensa de su ciudad.

La ausencia tanto del gobernador como de su teniente generó un vacío de poder que forzó a tomar el control a los vecinos. Tras la llegada de los Contreras y sus seguidores y los primeros momentos de pánico, determinados individuos comenzaron a organizar la resistencia y a gestionar la nueva autoridad que debía de surgir en ese contexto. De esta manera «los moradores de la dicha ciudad», junto a algunos forasteros «alzaron, en un primer momento, la bandera por Su Majestad e hicieron su general a Martín Ruiz de Marchena, capitán a Juan de Lares y por sargento desta capitanía, que fue la primera que alzó la bandera, a Juan Caballero»¹³⁷.

¹³⁵ De hecho, tras su ejecución la cabeza de Hernando de Contreras permaneció dentro de una jaula en el rollo de la ciudad durante varios días, Alonso de Tavira, vecino de Panamá, contra Rodrigo de Villalba, alguacil mayor de dicha ciudad, sobre ciertas muertes que mandó dar de resultas de la alteración de Hernando Contreras, 6 de marzo de 1551, AGI, Justicia 346, N. 1; sobre la importancia del ejemplo en los castigos públicos, Tomás MANTECÓN MOVELLÁN (2014), pp. 169-193.

¹³⁶ Francisco LÓPEZ DE GÓMARA (1959), f. 248v; según el cronista fue La Gasca quien puso en cobro el tesoro y volvió con gente, peleó con los de Contreras y venciólos» y desde ese momento el relato se explica exclusivamente en primera persona y así, Gasca «prendió y justició cuantos quiso (...) despachó naos tras el otro Contreras bien armadas de tiros y arcabuceros, las cuales se dieron tan buena diligencia y cobro, que lo alcanzaron (...) y así cobró Gasca su hurto y castigó los ladrones: cosas tan señaladas como dichas, para su honra y memoria». Tras esto, La Gasca se embarcó en Nombre de Dios y regresó a Castilla en julio de ese mismo 1550 para ser pronto nombrado obispo de Sigüenza e incluso «llamolo [el emperador] a Augusta de Alemaña, para que le informase de boca y entera y ciertamente, de aquella tierra y gente del Perú».

¹³⁷ Información de los méritos y servicios del sargento Juan Caballero, 1 de octubre de 1550, AGI, Patronato 150, N. 9, R. 1. f. 276r.

A partir de ese momento, según los relatos que componían las relaciones de méritos, todas las decisiones que se tomaron en torno a la manera de defender la ciudad de sus amenazas se hicieron de forma colegiada, componiendo una defensa comunitaria. Según su propia relación, Martín Ruiz de Marchena, vecino y regidor de la ciudad, guardaba la munición y las armas de la ciudad en su propia casa y fue amenazado y a punto de ser ajusticiado en el rollo de la Plaza Mayor por negarse a entregarlos a los asaltantes. Tras salvarse de las amenazas, Marchena se arrogó el mérito de haber convencido a una serie de vecinos de que no huyesen de la ciudad y, entregándoles las armas, les instó a «levantarse con boz de su magestad contra los dichos tiranos» y a avisar a cuantos más vecinos pudieran persuadir de unirse¹³⁸. Él mismo declaraba haber hecho el estandarte bajo el cual se organizaron para defender la ciudad. De igual manera, la decisión de salir al ataque de los alzados, en lugar de esperarlos en la plaza, y que provocó la batalla final vencida por los defensores de la ciudad, también fue fruto de la decisión colectiva en la casa del obispo; tras un debate, Ruiz de Marchena convenció a los indecisos y, así, «se juntaron todos y con mucha horden puesta la gente en hordenança e sus vanderas tendidas y tocando sus atanbores salieron de la çudad»¹³⁹. De esta manera, al conseguir movilizar la lealtad de sus conciudadanos, Marchena generó una dinámica de identificación comunitaria que permitió que se defendiera tanto el patrimonio del rey como el de la mayoría de los miembros de la comunidad.

La defensa de la ciudad se produjo a través de la organización por parte de miembros destacados de la comunidad civil que movilizaron, por un lado, sus propios recursos económicos y, por otro, sus recursos sociales. De esta manera, se creó una nomenclatura de líderes cuyos títulos fueron concedidos de manera informal y, en cierto modo, improvisada. Así, Martín Ruiz de Marchena fue convertido en capitán de las tropas leales sin tener autorización oficial para exhibir tal título. Sólo un año después de los hechos, en abril de 1551 recibió formalmente, junto a su consideración como hidalgo, el título de mariscal de Tierra Firme¹⁴⁰. De hecho, en la arriba mencionada relación de méritos de Juan Caballero, se declaraba a Marchena como general. El mismo Juan Caballero asumió el cargo de sargento de las fragatas que salieron en persecución de Pedro de Contreras. Juan de Lares, quien era regidor de la ciudad, asumió el cargo de capitán de manera también informal.

¹³⁸ Los que estuvieron en la reunión en casa de Marchena fueron el licenciado Jeronimo Lopez el doctor Meneses, Pedro de Salinas, Joan de Salinas, Alonso Castellanos y Pedro Moreno, Información de los méritos y servicios del capitán Martín Ruiz de Marchena, 1579, AGI, Patronato 123, R. 3, s. f.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Consulta... doc. cit. AGI, Indiferente 737, N. 68.

Al mismo tiempo, dentro de su propio bando, los hermanos Contreras también habían creado una escala de autoridades paralela y no oficial, con ellos como capitanes y Juan Bermejo como maestre de campo. La defensa de Panamá se articuló a través de vínculos informales entre los vecinos e incluso la propia confección de la bandera bajo la cual se reunieron los «leales» se convirtió en un hecho de armas por el cual se podían reclamar determinadas mercedes. Luis de Quesada incluso presumía de que «hizo hacer a su costa la bandera que se alzó en nombre de su majestad y sirvió como fue obligado al servicio de su majestad»¹⁴¹. Quienes defendieron en sus probanzas su participación en la defensa de Panamá enfatizaron precisamente el momento en el que se alzó la bandera¹⁴². En contra de lo que se narraba en las crónicas oficiales, los verdaderos artífices de la defensa de Panamá —y así lo narraron en sus probanzas, constatadas por testigos— tanto en el momento de tomar la iniciativa de la organización como a la hora asumir la cabeza de mando, fueron los vecinos de la propia ciudad de forma horizontal sin una imposición vertical de la nomenclatura política.

La misma tendencia que informaba el nombramiento de los líderes de la resistencia a través de decisiones espontáneas y alternativas también estuvo presente en la resolución judicial de los conflictos. Tras la rebelión de los Contreras se produjo, como se ha mencionado, el juicio y castigo inmediato de los participantes, muchos de los cuales fueron condenados a la pena capital. El encargado de poner en ejecución las sentencias fue el alguacil mayor Rodrigo de Villalba, quien ajustició al menos a 35 hombres en las horas inmediatamente posteriores a la rebelión. Un año más tarde, un mercader de Panamá llamado Alonso de Tavira, presentándose como «uno del pueblo», denunció a Villalba como «hombre que usurpó jurisdicción que no tenía»¹⁴³. Le acusaba de haber tomado una decisión arbitraria sobre los condenados y basada en el hecho de no había espacio en la cárcel para guardarlos. Tavira añadía que Villalba había negado a los condenados la posibilidad de confesarse antes de su ejecución que, además, carecía de sentencia de juez que lo autorizase¹⁴⁴.

¹⁴¹ Informaciones de los méritos y servicios de Luis de Quesada a petición de su hijo Jerónimo de Quesada, 1581, AGI, Patronato 150, N. 11, R. 1.

¹⁴² Por ejemplo, el hijo de Damián Meneses buscaba acreditar que su padre «sirvió a su majestad así en el reino de Tierra Firme en la rebelión y tiranía de Hernando Contreras siendo uno de los principales que alzaron bandera por su majestad, Información de los servicios de Damián de Meneses, 11 de noviembre de 1574, AGI, Patronato 151, N. 3, R. 1; Años más tarde, Sebastián Xuárez recibió por su participación un escudo de armas en el que aparecían cuatro estrellas plateadas en recuerdo de «los cuatro vecinos que os juntasteis en Panamá y alzasteis bandera en nuestro nombre contra los dichos Contreras», Informaciones de oficio y parte: Juan de la Roca, 1599, AGI, Lima 206, N. 12.

¹⁴³ Alonso de Tavira... doc. cit, AGI, Justicia 346, N. 1, s. f.

¹⁴⁴ Ibid.

El detalle final consistía en que, puesto en el rollo, el propio alguacil había ordenado que apuñalasen a aquellos que no aún no habían muerto. En su defensa, lejos de retractarse de su actuación, la asumió y defendió en consideración de las circunstancias que la envolvían pues «es derecho llano que en las cosas notorias y que se hazen paladinamente contra el servicio de Dios y de Su Majestad luego se pueden executar, porque la evidencia del hecho trae consigo la ejecución». En ausencia del gobernador y su teniente, se vio obligado a asumir el mando y liderar la batalla contra los hermanos Contreras. Argumentaba que tuvo que actuar con presteza para evitar «mayor condenacion para esta çibdad y gente della». En consecuencia, defendía que la actuación en la plaza mayor de Panamá al ejecutar a los condenados no era sino una continuación de lo ocurrido en la batalla del cerro y, por lo tanto, un acto más de guerra y se preguntaba que «si los dichos alterados que dizen que yo mate meresçían la muerte en el campo porqué la desmerecieron y estando en la çibdad»¹⁴⁵.

La respuesta de Tavira a esta argumentación permite analizar de qué manera construyeron las relaciones de méritos los hechos y los motivos de los rebelados frente a la Corona, al tiempo que apuntalaban el concepto de lealtad al rey que la defensa de la ciudad produjo. Alonso de Tavira restaba importancia, en primer lugar, a la rebelión de los Contreras como una «chirinola» y acusaba a Villalba de haber sobreactuado en su reacción «por se vengar y satisfacer de sus particulares enojos y pasiones», sin cumplir con lo que sería de justicia¹⁴⁶. Villalba, en cambio, presentó su actuación como fundamental para proteger tanto la ciudad como la región frente a una amenaza extrema para el Rey, bajo la que ya habían sucumbido en otros lugares. Su actitud se sumaba a la habitual en las relaciones de méritos de los implicados en la defensa, que presentaban el asalto de los Contreras como algo muy importante para el devenir político del Nuevo Mundo. De esta manera, los individuos dotaban a su actuación de mayor importancia de cara a la consecución de méritos y, al tiempo, construyeron una memoria de los hechos que afectó a la construcción de la identidad urbana.

El nombramiento informal de líderes militares urbanos tendría continuidad en el otro gran episodio en el que Panamá se vio asolada por asaltantes castellanos. Tras la llegada de Rodrigo Méndez en abril de 1562 a la ciudad de Panamá con intención de alzarse con la ciudad y provocar una rebelión en nombre de la «señoría de Chile», se produjo una reacción similar a la habida con los Contreras, en la cual los vecinos organizaron su propia defensa para expulsar a sus asaltantes. El alzamiento de Rodrigo Méndez, que se produjo el 3 de

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Alonso de Tavira... doc. cit, AGI, Justicia 346, N. 1, s. f. El Diccionario de Autoridades define chirinola como un juego de bolos para niños o suceso que causa cierto revuelo, pero no gran cosa.

diciembre de 1562, no parece tener un motivo explícito –como sí lo tenía el de los Contreras en el robo del botín- más allá de venir a «intitularse capitán general por la señoría de Chile». Algunos de los testigos relacionaban a Méndez y un cierto Santisteban, su maese de campo, como «secuaces de Gonzalo Pizarro» y que habían juntado un escuadrón de 400 hombres. Esta «señoría de Chile» tenía, según los testigos, tomada toda la tierra de Perú y Chile y Rodrigo Méndez en su nombre amenazaba a todos los hombres de la ciudad de que, si no se unían a él les castigaría, lo cual «causó mucho temor en la gente de aquella ciudad»¹⁴⁷.

Rodrigo Méndez era «un hombre de poco posible y de poca calidad» cuya intención había sido, según un informe elaborado al poco tiempo, matar a los principales de «aquella ciudad para se poder alzar con ella»¹⁴⁸. Dos de los que se presentaron a sí mismos como líderes de aquella resistencia tuvieron a su vez que ofrecer explicaciones por sus méritos. Juan Bautista de Noli presumía de haber resistido a Méndez a través de una estratagema para infiltrarse entre las tropas enemigas junto a otros tres vecinos. Su método no convenció a los oficiales, sin embargo, que cuestionaron el hecho de que, aunque luego declarase que había sido con intención de tender una trampa, se hubiera colocado bajo la bandera de los alzados. Además, el pasado de Noli no le permitía acreditar su lealtad, puesto que había llegado a la ciudad de Panamá junto con las tropas de los Contreras años atrás, aunque luego se hubiera desvinculado del movimiento¹⁴⁹. Noli se defendió apelando a que en ese momento no había ninguna bandera del rey alzada, por lo que tuvo que tomar la iniciativa, pero los oficiales volvían a desconfiar de que era difícil que apenas cuatro hombres tuvieran tal capacidad de movilización¹⁵⁰.

En el año 1567, Hernando de Luque declararía en un juicio haber sido casi el único responsable de la defensa de Panamá frente a Rodrigo Méndez. Luque, que era capitán y regidor de Panamá, había recibido una denuncia en la que le acusaban de haber matado a un esclavo negro. Para intentar salvarse de una más que probable condena, recurrió a una

¹⁴⁷ Información de los méritos y servicios de Juan Bautista de Noli en Perú, 13 de diciembre de 1562, AGI, Patronato 150, N. 14, R. 7.

¹⁴⁸ Carta de los oficiales reales de Tierra Firme, Baltasar de Sotomayor y Juan de Peñalosa, relatando los alborotos ocasionados en Panamá por un tal Rodrigo Méndez, 16 de diciembre de 1562, AGI, Panamá 33, N. 62.

¹⁴⁹ En su defensa advertía de que los Contreras le habían llevado a la fuerza en esa movilización. La misma estrategia seguida por otros que fueron encausados por su participación en los eventos de abril de 1550 como Francisco García, calafate, cuya versión era que los Contreras secuestraron el barco en el que él trabajaba y solicitaba la anulación de su pena a galeras, El fiscal contra Francisco García, calafate, preso en la cárcel de Sevilla, AGI, Justicia 353, N. 2, R. 3; Pedro de Vera se vio obligado a acompañar al amo a quien servía durante la rebelión, a pesar, en su caso, de las súplicas para que le liberase, Pedro de Vera, preso en Sevilla y el fiscal sobre si ha de ser llevado a galeras. AGI, Justicia 353, N. 2, R. 4.

¹⁵⁰ Información... AGI, Patronato 150, N. 14, R. 7.

probanza de méritos que había presentado años antes sobre su papel como defensor leal de la ciudad. Luque apelaba a su condición de capitán del escuadrón real «nombrado y elegido por la gente en tiempo que no parecio justicia en la tierra». Su labor, por lo tanto, habría contado con el respaldo de la comunidad que le habría elegido, según su narración, en un momento de indefinición. Su intención con esa probanza era protestar contra una declaración de la Audiencia en la que se declaraba que había sido Juan de Vargas quien había sacado la bandera y liderado la resistencia¹⁵¹.

Luque acusaba a Vargas de haber huido cuando comenzaba la acción y no haber regresado a la ciudad hasta que todo se había resuelto. Juan de Vargas, en su defensa, respondió que él había sido nombrado oficialmente capitán y que «tenya provisyones reales de su magestad» mientras que Luque simplemente se había implicado en «ocupaciones de çibdadano», pero no a la práctica militar. Hernando de Luque intentaba salvar su reputación insistiendo en que él había sido nombrado capitán «por los servidores de vuestra alteza que como leales vasallos andubieron buscando como recogerse en esquadron» porque «no tenyan caudillo ny capital que los rigiese», y que ese era motivo suficiente para contar con la autoridad como líder en la defensa de la ciudad¹⁵². La responsabilidad, en fin, habría recaído en la comunidad al completo al ponerse bajo su mando, independientemente de que este estuviera justificado por las cédulas reales de un nombramiento oficial.

La cultura política que se estaba fraguando en esos momentos, determinada por la distancia respecto a la Corte, la indefinición de los nombramientos y el cierto caos generado por los ataques permitía interpretaciones divergentes de la lealtad y la obediencia entre los implicados en la defensa de Panamá. De esta manera, se percibe un juego de escalas de lealtad entre una concepción oficialista de la autoridad y otra emanada de las interacciones a escala local según los intereses y las circunstancias de cada implicado. Así, se encuentran protagonistas que podían apelar a la legitimidad emanada de la comunidad local mientras que otros se ceñían a los nombramientos leales.

La lealtad propuesta por los protagonistas de la defensa de Panamá se basaba en presentar a los atacantes, tanto de los Contreras como de Rodrigo Méndez u otros, como una amenaza al sistema, que se basaba precisamente en una relación de apoyo mutuo entre el rey y las ciudades. Para abrillantar sus propios méritos, el relato que cada individuo hacía de los hechos incorporaba matices en las actuaciones de los asaltantes para presentarlos como

¹⁵¹ El fiscal de SM con el capitán Hernando de Luque sobre que sea preso por razon de la muerte de un esclavo, 12-02-1567, AGI, Justicia 357, N. 3, s. f.

¹⁵² El fiscal de SM..., AGI, Justicia 357, N. 3, s. f.

tiranos, rebeldes y empeñados en usurpar el poder real. Haber defendido a la Corona frente a un asalto a la ciudad para robar el botín habría sido importante, pero hacerlo en uno en el que estuviera en juego la desmembración del patrimonio real lo era aún mucho más. Los relatos resaltan que los asaltantes invocaban a Hernando Contreras como «nuestro príncipe, gobernador de la libertad» frente al mal gobierno del presidente La Gasca y de los gobernadores, quienes querrían gozar «del sudor de los que en el Perú se hallaron», mientras que los defensores cumplirían con sus deberes en nombre del rey¹⁵³. Juan Bautista de Noli, en su probanza sobre su actuación frente a Méndez, alardeaba de haber matado a un principal del alzamiento al grito de «viva el rey, mueran los traidores»¹⁵⁴.

Las relaciones de méritos no profundizaban, en general, en el discurso político de los asaltantes, más allá de establecer una dicotomía clara entre rebeldes y leales. Desde ambos bandos en conflicto, sin embargo, se apelaba a la resistencia frente a la tiranía. La definición de esta adquiría distintos matices en función de quien argumentase. Desde el punto de vista de los asaltantes de la ciudad, la tiranía consistía en la negación sistemática de los beneficios de la conquista, de los que se sentían deudores. Aquellos que defendían la ciudad, consideraban que la actuación de los asaltantes era tiránica por estar atentando, al invadir una ciudad, contra el patrimonio y la jurisdicción del monarca. La diferencia entre una reclamación y otra era básicamente que los defensores de Panamá contaban con la fuerza comunitaria y la propia ciudad, con sus medios, sobre la que sostener la defensa mientras que los asaltantes actuaban sin contar con el consenso generalizado de la comunidad a su favor. Ni los secuaces de los Contreras ni aquellos que actuaron junto a Rodrigo Méndez explicitaron su ataque contra el rey, sino sólo contra el gobernador y el presidente. Las acusaciones sobre el intento de trastocar todo el sistema provinieron de los relatos magnificados de los hechos por los que, según ellos, se mantuvieron en todo momento «leales» al monarca.

En los relatos de la defensa de Panamá y las apelaciones a la lealtad al rey, los propios vecinos de Panamá estaban construyendo un discurso de los rebeldes que los situaría como amenazas reales hacia la Monarquía. Con este recurso, además, se creaba la analogía de que haber protegido la ciudad significaba haber protegido, por la vía de la identificación de las comunidades urbanas con el rey, la propia figura real y, por extensión, el sistema de la Monarquía. La respuesta a la amenaza que significaban los Contreras, por lo tanto, no se

¹⁵³ Información..., AGI, Patronato 150, N. 9, R. 1.

¹⁵⁴ Información..., AGI, Patronato 150, N. 14, R. 7.

habría producido por la extensión de un deber formalizado e impuesto desde el centro sino a través de la reacción por parte de las comunidades.

La lealtad de Panamá no fue, en todo caso, espontánea o fruto de una identificación particular o natural de los vecinos con la Corona sino de una confluencia de intereses que no hacían, en ese momento, necesaria una presión violenta para garantizar los privilegios corporativos. La defensa de Panamá se articuló a través de las decisiones de individuos cuyos intereses fueron hechos corporativos y que, *a posteriori*, elevaron a la categoría de lealtad al monarca a través de sus relaciones de méritos. En ese sentido, la labor corporativa se veía reforzada por la comparación con otras ciudades y territorios, enfatizando las diferencias. Martín Ruiz de Marchena no podía sino recordar que otras regiones como Nueva España y Nicaragua habían seguido a los hermanos Contreras, «los cuales dezian munchas desverguenças en deservio de Su Magestad» con el fin de enfatizar su propia labor y la de la ciudad en abril de 1550¹⁵⁵.

Incluso Rodrigo Villalba lanzaba un alegato *quasi* generacional en defensa de los vecinos de Panamá, puesto que recordaba que, años atrás, tropas comandadas por compañeros de Pizarro habían asaltado y controlado la ciudad durante unos meses sin que ninguno de los 600 vecinos hubiera organizado de manera adecuada la defensa. En su relación de méritos colectiva, comenzada en noviembre de 1551 la ciudad de Natá se vanagloriaba, a fin de conseguir cancelar el final de la encomienda, de haber aportado a la batalla personas, armas y caballería para «hazer lo que eran obligados como leales servidores de Su Magestad». Los habitantes de Natá se presentaban como los perfectos servidores del rey, puesto que «en todas las alteraçones que en tyerra firme a avido sienpre [...] an estado firmes en el servicio de su magestad e ny amenazas ny fuerças que les ayan fecho tyranos no se an apartado de la sujeçon de su rey y señor natural»¹⁵⁶.

De modo similar, el hecho de que la defensa de la ciudad hubiera sido frente a «enemigos internos» a la propia Monarquía, vasallos de la misma Corona, pero con unos intereses distintos, permitía a las comunidades urbanas destacarse, por comparación, como aún más leales que el resto. La comunidad urbana habría creado unos lazos de lealtad «horizontal» entre sus propios miembros para defender el bien común local que, posteriormente, se podrían proyectar hacia la consideración de una defensa de la Monarquía en conjunto. La defensa de una ciudad significaba la defensa de la Monarquía, puesto que la

¹⁵⁵ Información..., AGI, Patronato 123, R. 3, s. f.

¹⁵⁶ Con el concejo..., AGI, Justicia 1049, N. 4, R. 3.

disminución de una pieza del patrimonio y de su jurisdicción minaría el poder del conjunto. La relación de lealtad bilateral entre las ciudades y el rey generaba un dinamismo que obligaba a este a la recompensa de los servicios prestados y estimulaba a su vez a las comunidades a mantenerse leales. La represión de los rebeldes no fue fruto de una extensión directa y unilateral de un absolutismo de corte estatalista, sino más bien la puesta en marcha y actualización de las dinámicas políticas sobre las que se asentaba el sistema y que se basaban en el equilibrio entre los servicios y las mercedes, lo que haría «rentable» a los individuos construir una lealtad corporativa.

En consecuencia, la memoria de la defensa de la ciudad frente a los asaltos también dejó huella en los escudos de armas de los participantes. El que le fue concedido a Martín Ruiz de Marchena representaba «una ciudad blanca en campo de oro y al pie della la mar con sus navíos y sus colores en memoria de la guarda y defensa que hizo de la ciudad de Panamá». En el otro cuarto del escudo aparecía una mano alzada empuñando una bandera blanca «la cual tenga una cruz colorada en medio y que esté en campo colorado en memoria de la que se alzó en servicio de Su Majestad». Por último, un monte «de peñas en campo verde, en memoria del monte en que los enemigos hicieron fuerza y adonde se dio una batalla a Hernando Contreras»¹⁵⁷. En el mismo alzamiento de la bandera se había encontrado Sebastián Suárez, en cuyo escudo aparecían cinco leones en campo rojo «los cuatro de plata y el otro de en medio de oro que denotan al dicho Sebastián Xuárez con los otros vecinos que en la dicha ciudad de Panamá alzaron bandera en nombre de Su Majestad y vencieron, desbarataron y mataron a los tiranos Contreras»¹⁵⁸. Hernando de Luque, principal defensor de Panamá frente a Rodrigo Méndez recibió en julio de 1566 un escudo de armas en el que se destacaba, precisamente, con una mano sosteniendo la enseña real, su implicación en el inicio de dicha defensa. En su escudo, además, se encuentra un monasterio en el cual, según su relato, había ido a entrevistarse con el obispo para solicitar su permiso para tomar el mando de las operaciones¹⁵⁹. Con la concesión de estas armas, la Corona suscribía y avalaba la memoria de los hechos construida por los autores de las probanzas de méritos, incorporando al discurso oficial los relatos personales de los protagonistas, que destacaban su propia importancia en la resolución de los conflictos.

¹⁵⁷ Privilegio de armas para Martín Ruiz de Marchena, 18 de enero de 1552, AGI, Panamá 236, L. 9, f. 53v-54v; Ese monte fue bautizado desde entonces, según Carmen MENA (1992), «cerro de la victoria» o bien «cerro de la matanza», p. 443. La fecha del 23 de abril aparecería en la Descripción de 1607 como día de fiesta mayor en la ciudad de Panamá en conmemoración de esa batalla y como celebración de la resistencia urbana, Alfredo CASTILLERO CALVO (2006), p. 94.

¹⁵⁸ Informaciones... doc. cit, AGI, Lima 206, N. 12.

¹⁵⁹ Escudo de armas a Hernando de Luque, 19 de julio de 1566, ADA 238, nº1 (67).

El ennoblecimiento particular que representaban los escudos de armas tendría repercusión a su vez en el ennoblecimiento colectivo al que aspiraban las ciudades¹⁶⁰. La concesión y exhibición de escudos de armas aludiendo a motivos relacionados con la defensa y población de las ciudades del istmo tenían el efecto de ennoblecer a sus poseedores y, al tiempo, ennoblecer a la propia comunidad al completo. Cualquiera que pasease frente a la casa de alguno de los fundadores o defensores de la ciudad entendería la magnitud de sus hazañas y su labor a favor de la perpetuación de la comunidad urbana. La unión de experiencias individuales para conformar una memoria colectiva fue la que provocó que la ciudad de Panamá al completo recibiera, en 1581 el título de «muy noble y muy leal».

En diciembre de ese año, se recordaba que Panamá era la ciudad «más principal de aquel reino y de las mejores y más antiguas de las nuestras Indias». En esa larga trayectoria, Panamá había servido en «todas las ocasiones que se han ofrecido», ya fuera en la guerra contra los corsarios y los negros cimarrones, como, especialmente, contra los «tiranos que se han levantado contra nuestro servicio». La ciudad de Panamá al completo jamás había sido culpada ni implicada en ninguna alteración ni rebelión y, además, «su intento y deseo es continuar siempre en nuestro servicio» por lo que este nombramiento tendría el efecto de impulsar una responsabilidad que todos los vecinos, presentes y futuros, deberían asumir¹⁶¹. Su nombramiento como noble y leal estaría más que justificado en función de los méritos de la propia ciudad y por el efecto que tendría en asentar y multiplicar la lealtad a la Corona de la población urbana en conjunto y, al tiempo, también entre los propios habitantes.

Con este galardón honorífico –muy noble y muy leal- se cerraba el ciclo abierto con el título de ciudad, que solidificaba, a su vez, los lazos comunitarios. Los méritos acumulados desde la elevación a ciudad habrían justificado *a posteriori* la premura en su concesión. Ya como ciudad, Panamá habría desarrollado una personalidad cívica que le había llevado a enfrentarse a los cimarrones que amenazaban su estabilidad y también a revueltas como la de los Contreras, con lo que a su vez habían mostrado su lealtad al monarca, al igual que en su resistencia posterior ante los ataques de Francis Drake. Con la defensa de una población se estaría defendiendo todo el reino e incluso el grueso de la Monarquía.

¹⁶⁰ Pocos años después de su título de ciudad, Nombre de Dios sería destacada en una información sobre su actuación durante las rebeliones en el Perú en términos elogiosos por parte de la Corona. «Los de esta ciudad», advertía el documento, «han ganado mucha honra porque en la verdad a ellos se les debe el honor de lo que en esto [en su defensa] se ha hecho». Los vecinos de la ciudad habrían mostrado «conformidad y unidad» y habían hecho «lo que deben», granjeándose con ello el favor del monarca y al tiempo reforzando su propia identidad, Noticias de la rebelión que hubo en nombre de Dios, 9 de octubre de 1545, AGI, Patronato 193, R. 32.

¹⁶¹ Real Provisión por la que se concede a la ciudad de Panamá título de muy noble y muy leal, 3 de diciembre de 1581, AGI, Panamá 237, L. 11, f. 132v-133r.

La creación de identidades locales, como la desarrollada en Panamá, a través tanto de la conversación cotidiana entre sus habitantes como de la expedición de títulos honoríficos como los de ciudad, los escudos de armas o los apelativos, que no se sustentaban en una gran cantidad de méritos, sino que constituían en cierto modo un ennoblecimiento ficticio, contribuían a reforzar los lazos de lealtad con la Corona. Todo este entramado de lealtades superpuestas –locales y globales– y de convivencia de méritos e identidades individuales y colectivas contribuyó en grados diversos a la pervivencia de la Monarquía. La participación de los individuos en defensa de sus propios intereses alimentó la construcción de una identidad local que, a su vez, se insertó en un entramado de radio mayor y se justificó como una forma de lealtad a la Monarquía.

Conclusiones

Los primeros pobladores de las ciudades de Castilla del Oro, sin contar con antecedentes familiares o acreditar limpieza de sangre, se habían convertido formalmente en la élite social al ser asimilados a la categoría de hidalgos. Las poblaciones, por su parte, ya no tendrían que optar, como en Castilla, a ascender por sus méritos a la categoría de ciudad, sino que podrían nacer directamente como tal. Sólo tras asentarse firmemente a través de la práctica, estos modelos, que implicaban una adaptación conceptual con la cual se articularon los procesos de ascenso social tanto individuales como corporativos en Castilla del Oro y, en general, en el Nuevo Mundo, fueron oficializados a través de leyes y decretos. En las Nuevas Instrucciones de Poblamiento, emitidas en 1573, la instrucción número 100 decretaba que para que quedase «memoria loable» de los primeros pobladores de las ciudades, se les nombraba «hijosdalgo a ellos y a sus descendientes legítimos» y que así debían ser considerados como «personas nobles y de solar conocido».

A su vez, la norma número 43 indicaba que la autoridad que fundase una nueva población podía declarar de qué tipo sería la nueva fundación, «si ha de ser ciudad, villa o lugar»¹⁶². Unos pocos años antes, en 1571, en el acta de fundación de Nombre de Jesús, en Costa Rica, se especificaba que esta quedaba fundada directamente como ciudad «para que como tal goce de los privilegios, exenciones, franquezas, libertades que gozan las demás ciudades destas partes de Indias, porque desde ahora, en nombre de Su Majestad, se lo concedía y concedió»¹⁶³.

¹⁶² Francisco SOLANO (1996), p. 208.

¹⁶³ Ibid., p. 194. *Mi cursiva*.

En Castilla del Oro se forjaron las prácticas que se exportaron a otras regiones y que llegaron a consolidarse en las leyes. Las solicitudes particulares a través de las relaciones de méritos abrieron el debate sobre qué se podía considerar noble en el Nuevo Mundo y cuáles eran los méritos que podrían asegurar esa condición. En todo caso, como se ha observado, los ascensos sociales individuales estaban asociados estrechamente a la actuación de los individuos dentro de la ciudad y los procesos de ennoblecimiento corporativos se nutrían de los procesos individuales. Los valores, basados en la gracia y la merced, sobre los que se sustentaron ambos mantuvieron los principios forjados en Castilla si bien las estrategias y los argumentos se vieron alterados.

Se generó la existencia de una antigüedad relativa con referencia al comienzo de la colonización; se asentó un estilo de vida noble que se basaba en una forma de vivir urbana y que consistía en mantener con vida la población y cumplir con unas normas de bien vivir comunitarias y la ocupación de cargos públicos; a su vez, se podría matizar la importancia otorgada a las hazañas violentas respecto a la participación en la fundación de una ciudad, en la intervención en su gobierno o, especialmente, en su defensa frente a amenazas diversas. La idea de nobleza, en fin, modeló sus aristas para hacerse más flexible y más dinámica, de manera que el acceso a esa categoría, tanto de individuos como de comunidades, se volvió más directo. La situación geoestratégica de Castilla del Oro también previno a la Corona de la necesidad de no entorpecer esos procesos de ascenso social, facilitando su tramitación y aceptando sus resultados, a fin de mantener y consolidar la población de esa arteria del imperio.

La regulación de la distinción social se basó en el acuerdo o aceptación de la comunidad sobre la consideración de esa distinción. Un individuo se podía presentar como noble si la comunidad le percibía de esa forma y de igual manera sucedía con las poblaciones en conjunto. La construcción social del título de ciudad permitió que pueblos de apenas 20 vecinos desarrollasen un orgullo cívico –que, aunque imposible de calibrar cuantitativamente, se hace tangible a través del lenguaje y los argumentos utilizados- equivalente al de grandes ciudades europeas. Para acreditar esa percepción social del ascenso social cobraron especial relevancia la ejecución de relaciones de méritos y servicios. Independientemente de cuál fuera el resultado oficial de las pesquisas, la exhibición de testigos y la recopilación de los méritos de un individuo permitía que se destacase dentro de la comunidad, incluso aunque el proceso de ascenso social perseguido no tuviese el éxito esperado.

La defensa de las poblaciones, a su vez, generó el entorno propicio para que múltiples individuos se acreditaran como servidores del rey y leales a la Corona. Esto a su vez

repercutió en el ennoblecimiento colectivo, que garantizaría privilegios a las ciudades. La lealtad de las ciudades se construyó a través de la lealtad de los individuos y configuró, desde abajo, un tejido social y una conceptualización política que fortaleció la noción de que eran las ciudades las que componían el cuerpo de la Monarquía. La lealtad de la que hicieron gala los individuos que defendieron las ciudades no se basaba en una identificación «natural» con la Monarquía sino en una confluencia de intereses –encapsulados en la idea de bien común– y la noción de que era en el contexto urbano en el que mejor se podrían defender esos intereses. La existencia y mantenimiento de un flujo de confianza entre las ciudades de Castilla del Oro y el rey se basó, por lo tanto, en el propio tejido urbano de las mismas –sin apenas encomenderos y con muchos mercaderes– y en la puesta en funcionamiento y defensa de un equilibrio entre los servicios y las mercedes.

Los primeros pobladores desarrollaron una autoridad cuya legitimidad estaba basada en su antigüedad relativa sustentada en valores coyunturales y servicios concretos y que se proyectó discursivamente a través de elementos simbólicos hacia la segunda generación. Las élites urbanas así constituidas eran conscientes de su propia importancia para el mantenimiento de la Monarquía en un territorio estratégico y esto determinó sus relaciones con la Corona que, principalmente, negociaba y respaldaba las decisiones tomadas sobre el terreno. De esta manera, la cultura política generada dentro de ese marco de relaciones Corona-ciudades de Castilla del Oro primaba los servicios locales y la implantación de una autoridad sobre el terreno cuya legitimidad se basaba en acuerdos comunitarios proyectados desde los individuos para componer el cuerpo de la Monarquía.

Las definiciones de obediencia, lealtad, resistencia y rebelión que emergieron de los conflictos analizados en las páginas anteriores dependieron para su formulación de los intereses y estrategias de los agentes implicados. Los pobladores veteranos y miembros destacados de las sociedades urbanas que elaboraron sus relaciones de méritos para alcanzar un ascenso social generaron un discurso que vinculaba sus acciones individuales con el bien común. A su vez, la consciencia de que era la Corona la que, en última instancia, debía avalar y conceder los privilegios anhelados vinculaba sus solicitudes con el engranaje global de la Monarquía. A pesar de, en ocasiones, estar sirviendo o defendiendo lo que se podría considerar un lugar periférico del sistema, la concepción de este alimentaba la voluntad de construir una lealtad de amplio radio.

Al mismo tiempo, los redactores de las probanzas contribuyeron, por oposición, a la construcción de un enemigo cuyas acciones, descritas en los textos, generaban una imagen de deslealtad y tiranía que se podría exportar y tomar como ejemplo en otros espacios y

ámbitos de acción de la Monarquía. El vocabulario empleado, a menudo compartido por «leales» y «desleales» a la Corona, aparece, en estos casos, sujeto a los intereses de quien lo utilizase, reforzando la imagen de una cultura política construida a través de las prácticas.

CONCLUSIONES GENERALES

Las ciudades de Castilla del Oro no fueron meros instrumentos en manos de la Corona para ejercer el poder de la Monarquía Hispánica en sus territorios. En cambio, las propias ciudades estaban capacitadas, por su propia naturaleza política, para crear y ejercer dicho poder. El poder político se asentaba sobre interacciones humanas más que en abstracciones conceptuales y fue a través de las prácticas cotidianas en contextos urbanos cómo se engendraron las culturas políticas en Castilla del Oro, al tiempo que se erigieron los espacios políticos de la Monarquía Hispánica. Estas reflexiones invitan a exponer algunas conclusiones generales.

En primer lugar, a través de los casos estudiados se deduce que la, así llamada tradicionalmente, fundación de ciudades no era un acto jurídico cerrado en sí mismo y limitado. En lugar de eso, el asentamiento de una población se llevó a cabo a través de un proceso largo que implicó la adaptación de múltiples categorías y prácticas políticas. La fundación de poblaciones requería de la constitución de una comunidad política con capacidad de decisión y margen de maniobra, que precisaba de una legitimidad que sólo podía provenir del consenso entre distintos individuos, tanto entre los castellanos como de estos con los indígenas. Sólo en el momento en que se había creado la comunidad política sobre el terreno, dotándose de entidad jurídica y asentando por ello jurisdicción, se reclamaba y apelaba a la autoridad real como legitimación oficial, un primer paso que evidenciaba una incipiente identidad corporativa.

En este sentido, se puede afirmar que el recurso jurídico, interpretado tradicionalmente como una excepción a la norma, enunciado como «acátese, pero no se cumpla», actuó como eje vertebrador del modo de actuar políticamente en el Nuevo Mundo y que muestra el grado de flexibilidad de los principios políticos de la Monarquía Hispánica

en los inicios de la edad moderna. De esta manera, el primer conflicto descrito entre Balboa y Nicuesa por la autoridad en Santa María de la Antigua del Darién marcó la pauta interpretativa para analizar los casos sucesivos. Este caso ejemplifica, como elemento clave, las divergencias entre las normas o instrucciones, cuando las había, y las prácticas, que luego se repitieron en multitud de situaciones a lo largo del periodo estudiado y en diversos lugares del continente. Nicuesa consideraba su legitimidad basada exclusivamente en las capitulaciones firmadas con la Corona, mientras que Balboa la reclamaba en base a sus acciones, amparadas y sostenidas por la comunidad. El reconocimiento de las acciones de Balboa y su nombramiento como adelantado de la Mar del Sur, tras la expedición de todo el pueblo, representan la culminación de las posibilidades del ensanchamiento de la legalidad en el Nuevo Mundo y son la clave que explica la articulación práctica del «acátese, pero no se cumpla». Los hechos, por lo tanto, basados generalmente en las necesidades propias de la situación en Castilla del Oro, se anteponían sistemáticamente a su aprobación oficial, que simplemente en la mayoría de los casos se limitaba a acatar lo que ya había tenido lugar *de facto*.

En consecuencia, el propio concepto de fundación requiere una reflexión cuidadosa para despojarlo de su carácter o bien excesivamente abstracto o excesivamente unidireccional o interpretado desde una óptica individual y no colectiva. La fundación como acto de creación de un espacio político *ex novo* apenas tuvo lugar en los territorios de Castilla del Oro. En su lugar, cabría hablar de una adaptación de los espacios políticos preexistentes, a través de la puesta en marcha de consensos, de los cuales se tomaron las referencias espaciales, determinadas estructuras sociales e incluso elementos simbólicos encapsulados en los nombres de los establecimientos indígenas. Las estructuras caciquiles sirvieron como referente tanto territorial como simbólico para la creación de nuevas jurisdicciones superpuestas. Así, tanto los nombres de los asentamientos que permanecieron –Santa María de la Antigua del Darién, Acla, Panamá y Natá– como sus límites jurisdiccionales –que tomaban como referencias los cacicazgos de Careta, Urraca o Parita– respondieron a la recalificación de territorios y estructuras sociales indígenas. La adaptación de las estructuras prehispánicas también facilitó el reparto y gestión de las encomiendas, que a su vez participó de la negociación y asentamiento de la jurisdicción. En multitud de ocasiones en la documentación se encuentran referencias que aluden a la «conquista» de una ciudad o a su «toma»; expresiones que remiten al reconocimiento por parte de los castellanos de las formas de organización socio-políticas indígenas y no a una fundación nueva. La adaptación de estructuras pre-hispánicas y la interacción con las comunidades indígenas explica a su vez,

por acción u omisión, la supervivencia o el abandono temprano de algunas de las poblaciones, como fueron los casos de Santa Cruz o Fonseca Dávila.

Como se ha observado a través de los diversos conflictos jurisdiccionales explorados, la fundación jurídica –el levantamiento de acta fundadora y la definición formal de los oficios concejiles y límites geográficos- no generaba poder por sí misma. El poder, para ser no sólo proclamado sino realmente efectivo, debía ser ejercido de manera consensuada. En gran medida, la capacidad de las ciudades de Castilla del Oro para ejercer poder se basaba en su capacidad para entablar relaciones pacíficas con los pueblos indígenas vecinos. De esta manera, los límites jurisdiccionales –los límites de ejercicio del poder- fueron en muchas ocasiones definidos a través de conflictos entre los castellanos para poder relacionarse de manera fluida con los indígenas. Los casos de la fundación y desaparición de Cáceres de la Frontera o el asentamiento San Sebastián de Buenavista ejemplifican cómo el establecimiento en ciudades sostenía, a través de la relación con los cacicazgos vecinos, la creación y mantenimiento de jurisdicciones. Las ciudades, entendidas como espacios de interacción mixta y de integración híbrida, con procesos de formación, composición y desarrollo muy complejos, ejercían cierta capacidad limitativa sobre los gobernadores o delegados de la Corona para la toma de decisiones y control del territorio. En consecuencia, las propias comunidades políticas urbanas eran las que ostentaban mayoritariamente el poder efectivo en Castilla del Oro.

Las ciudades de Castilla del Oro, por lo tanto, no eran un contrapeso o un poder opuesto al poder real. Al contrario, en tanto que establecimientos jurisdiccionales, las ciudades del Nuevo Mundo compartían el poder de la de la Monarquía, a cuya construcción además contribuyeron decisivamente, con la Corona. Dicho poder político consistía en mantener una agregación de diversas jurisdicciones que, por pequeñas que estas fuesen, como atestigua el caso de la ciudad de Acla hacia 1534 –que, según los testimonios, apenas contaba con una decena de vecinos castellanos-, aumentaban la autoridad de la Corona y mantenían una importancia capital para el balance de poder. En este caso, la agregación jurisdiccional se tuvo que hacer al tiempo que se construía la propia jurisdicción *ex novo*. Por este motivo, los procesos estudiados en este libro analizan la creación de espacios políticos en un entorno privilegiado por sus circunstancias geográficas y su cronología, en el que los actores estaban obligados a llevar al límite su imaginación política y crear fórmulas de entendimiento y acuerdo que hicieran posible la configuración de nuevas realidades jurídicas y políticas. Sólo una vez creados los espacios políticos estos podían agregarse entre sí para pasar a formar parte del conjunto de la Monarquía.

Estas prácticas y resultados ponen en cuestión los planteamientos que explican el funcionamiento de la Monarquía Hispánica a través de una retórica que contraponen de forma categórica el centro a las periferias. En el caso de Castilla del Oro, las dinámicas políticas estuvieron dominadas por una atomización de los referentes y una plasticidad de las estrategias. La relación con la corte se estableció desde las ciudades, a base del envío, desde fechas muy tempranas, de procuradores para negociar privilegios, mercedes o, simplemente, reclamar medidas concretas relativas al gobierno urbano. A pesar de que nunca existieron unas cortes representativas en Indias al estilo castellano y que las ciudades del Nuevo Mundo tampoco fueron sistemáticamente convocadas a las de Castilla, el envío asiduo y persistente de procuradores y la aceptación de sus propuestas por parte de la Corona sugiere que las ciudades de Castilla del Oro encontraron canales y fórmulas para, de forma individual o colectiva, estar representados ante la corte y hacer atender sus necesidades.

Las ciudades también enviaban procuradores a otras ciudades o ante el gobernador, en función de cuáles fueran las circunstancias concretas y las necesidades coyunturales. De esta misma manera, la relación con la corte no se basaba en la sujeción o sometimiento absoluto de las ciudades frente al centro; más bien, los planos de la negociación se establecían considerando que ambas partes –ciudades y Corona- se necesitaban mutuamente y formaban parte del mismo sistema político. Las ciudades, como integrantes de la Monarquía, muy conscientes de su propio poder y, a su vez, conscientes de que la Monarquía reconocía su importancia, desarrollaron una gran capacidad de maniobra –ejemplificada en la gran cantidad de privilegios que las ciudades negociaron y consiguieron en muy poco tiempo- después de su fundación. Los conflictos abiertos a raíz del intento de imposición de las Leyes Nuevas a partir de 1542 evidencian la capacidad de maniobra de las ciudades y su potencia como miembros de la Monarquía. El resultado fue que, enfrentados a la necesidad de reclamar sus privilegios corporativos, los cabildos consiguieron mantener sus preeminencias –relativas a la exención impositiva, a la gestión de la encomienda y al autogobierno- sin recurrir a la violencia y haciendo explícita la conciencia de su importancia para la Corona. El acceso temprano y relativamente sencillo a los títulos de ciudad, o incluso su nacimiento como tal, de las poblaciones del istmo, es la representación simbólica de esta interdependencia entre la Corona y las ciudades.

La adaptación de las estrategias de legitimación de las fundaciones también implicó la de los conceptos y prácticas movilizados para fomentar interacciones culturales. Así, los ejemplos de policía y conversación ilustran hasta qué punto las categorías de raigambre republicana aristotélica fueron acomodadas a las nuevas circunstancias y contribuyeron a

definir el estilo de vida al que se debía aspirar en un contexto urbano. Ambos conceptos sirvieron para identificar y definir las relaciones que se debían establecer en primer lugar entre los castellanos, para reconsiderar las vías de acceso a la naturaleza y la vecindad y, de forma simultánea, fueron readaptados para incluir la manera en la que habían de relacionarse con los indígenas.

Las ciudades y su capacidad, tradicionalmente considerada, para transformar –tanto a sus habitantes europeos como indígenas– a un determinado estilo de vida, también podía actuar como una justificación de la «conquista» a través de la conversión de los indígenas al cristianismo. Esta, la conversión, no fue un fenómeno general y abstracto en todo el territorio de las Indias y no se puede considerar tampoco un fenómeno exclusivamente religioso. En cambio, se percibe tanto la conversión de los indígenas como el proceso de «hacerse naturales» de los castellanos, como un fenómeno a escala local, basado en las circunstancias concretas de cada espacio y con conocimientos desiguales de la realidad indígena; a su vez, tampoco cabe ceñirlo a un intento de imposición religiosa exclusivamente, sino a la extensión de una forma de vida –la policía– que precisaba de las ciudades, más allá de su espacio urbanístico, como su escenario de aplicación.

La ciudad como *civitas* se basa en la interacción comunitaria en cuyas bases teóricas fundamentales se pueden encontrar conceptos integradores como la conversación o el amor, cuyo contenido encontró un campo de pruebas en las ciudades de Castilla del Oro. El caso de la ciudad de Acla, con la presencia fundamental de Isabel Corral como agente conversatorio intercultural, indica la plasticidad de los conceptos políticos que, puestos en práctica, ofrecen multitud de aristas para el análisis de las relaciones sociales a las que dio lugar el encuentro en el Nuevo Mundo. A su vez, casos como el de Corral permiten observar la gran cantidad de elementos culturales –bailes, juegos, música, recreaciones de batallas– que se ofrecían para cimentar y profundizar las relaciones entre diversos grupos. Sobre el terreno, la conversación, como vehículo de diplomacia informal, se vinculó en primer lugar al comercio para, a partir de la creación de vínculos de confianza entre comunidades, insertarse en todos los aspectos de la sociedad y facilitar los movimientos de personas y los matrimonios mixtos.

El tejido social que componía las ciudades de Castilla del Oro desarrolló unas dinámicas internas que determinaron sus valores básicos e identidades. De esta manera, se generaron unos flujos de lealtad horizontal entre los vecinos que, a su vez, ampliaban su radio para integrarse dentro de una lealtad global a la Corona. En los procesos de defensa de las poblaciones o reclamación de mercedes por medio de las relaciones de méritos, se percibe

la construcción desde abajo de una lealtad al monarca, compuesta por diversos procesos que iban fraguándose en pequeña escala. Los relatos de la defensa de Panamá frente a diversas amenazas internas –singularmente la de los Contreras y Rodrigo Méndez- realizados por los protagonistas a través de las relaciones de méritos ofrecen una narrativa alternativa a la emanada de las crónicas oficiales. Así, siguiendo las relaciones de méritos, la defensa de las ciudades no se organizó y puso en marcha por los oficiales civiles o militares, sino por los propios vecinos. En muchas ocasiones, la iniciativa estuvo, *a posteriori*, legitimada por la Corona que concedía escudos de armas u otras mercedes a los protagonistas que habían puesto su lealtad al servicio de la comunidad. A través de estos relatos –y otros similares- se construyó y premió una identidad local, tanto individual como colectiva, que diseñó una nueva idea de nobleza en Castilla del Oro, cuyos referentes principales se vinculaban al servicio de y para la ciudad. No se podría, por tanto, hablar de una lealtad u obediencia natural o impuesta verticalmente por parte de los vasallos del rey, sino que esta se construía a través de la implementación y mantenimiento equilibrado de un sistema de gracia y merced.

La manera en la que las ciudades fueron creadas, a través de una concatenación de acuerdos comunitarios y de interacciones diversas entre sus poblaciones primigenias, determinó en gran medida el desarrollo posterior de sus relaciones, tanto entre las propias ciudades, como entre estas y los diversos poderes implicados, desde los cacicazgos a los gobernadores o corregidores hasta la propia Corona. Con esta premisa se explica la implementación y adaptación de la diversidad de prácticas analizadas en estas páginas. El concurso de la comunidad, a través de los pactos en busca del consenso necesario para garantizar la supervivencia y legitimidad de las fundaciones, determinó el desarrollo de la creación del espacio político de la región. El propio nacimiento «consensual» de cada una de las poblaciones explica la conflictividad que acompañó a la definición de las fronteras jurisdiccionales. La tensión entre las comunidades políticas locales y la Corona, explicitada en los pleitos relativos a la implantación de las Leyes Nuevas, redefinieron el contenido de estas al tiempo que pusieron en marcha mecanismos que cimentaron las relaciones internas de las ciudades –singularmente sus identidades colectivas- pero también las de éstas con la Corona, a través de la negociación de la lealtad, el cuestionamiento de la obediencia y las posibilidades del bien común como elemento de construcción política. Estas tensiones, inherentes al funcionamiento interno de la sociedad de Castilla del Oro, se pusieron en práctica en momentos puntuales como el asalto de los Contreras o de Méndez a Panamá. La defensa de la ciudad permitió construir un discurso sobre la lealtad desde la base, con la que los individuos aspiraban a garantizarse el ascenso social.

La multitud de procesos políticos acaecidos entre 1508 y 1573 permiten reconsiderar el papel de Castilla del Oro como un núcleo fundamental en el entramado de la Monarquía. Dichos procesos –el estudio de las fundaciones urbanas, los agentes implicados en las mismas, los conflictos generados por las tensiones entre el centro y la periferia, las relaciones interculturales y la construcción de la lealtad– permiten definir una cultura política propia, con posibilidades explicativas para el conjunto de la Monarquía Hispánica, cuyas peculiaridades residen principalmente en su carácter mestizo y polivalente, con multitud de referentes pero adaptada de forma precisa a las circunstancias del contexto.

Dicha cultura política se nutrió de la participación de una multiplicidad de agentes que movilizaron una gran cantidad de prácticas políticas. Entre los primeros se encuentran tanto agentes formales como informales, tanto indígenas como castellanos: mercaderes, *lenguas*, caciques, oficiales reales, regidores, alcaldes mayores, procuradores, conquistadores, vecinos o encomenderos. Entre las prácticas que conectaron a todos estos individuos entre sí, las que se han mostrado más susceptibles de análisis de acuerdo con las fuentes conservadas, son las relaciones comerciales y de trabajo, el contacto cultural a través de los intercambios comerciales y los enlaces mixtos o los conflictos dirimidos en los tribunales. Los intereses particulares de cada uno de estos agentes y las estrategias elegidas para ponerlos en marcha, conjuntamente, construyeron una identificación de los individuos con el territorio y su comunidad que generó una peculiar identidad colectiva que, con el tiempo, acabaría siendo refrendada por la oficialidad.

Todos estos elementos, analizados en conjunto, permiten concluir que en Castilla del Oro se puso en marcha una cultura política que se podría definir como mestiza y que generó, a su vez, una serie de fuertes identidades locales, igualmente mestizas. La identidad corporativa generada por la multiplicidad de prácticas descritas fue determinante en la proyección global de Castilla del Oro, puesto que la conciencia del poder que aquella implicaba forzaba a las ciudades –considerándose «miembros» constitutivos de la Monarquía– a defender con fuerza sus privilegios de manera que los vecinos de las ciudades consolidaron y mantuvieron un determinado estilo de vida, que lograron que la Corona reconociera y premiara de manera sistemática.

La cultura política generada en los espacios urbanos de Castilla del Oro se nutrió de múltiples adaptaciones de intereses particulares. El bien común general se construía a través de la confluencia de bienes comunes individuales, de la misma manera en la que redefinieron los matices de los valores de lealtad, obediencia, fidelidad y sus opuestos. A través de las prácticas se ha podido observar cómo los conceptos políticos no eran construcciones

abstractas, sino que estaban sujetos a cambios circunstanciales y que los individuos tenían gran capacidad de acción para lograr alcanzar sus objetivos manejando el entorno cultural y los lenguajes apropiados. La identidad personal y las identidades colectivas se nutrían de todas estas influencias, en las que participó a su vez el hecho de que Castilla del Oro fuese un eje central para el desarrollo y la defensa del imperio.

Castilla del Oro resultó, en ese sentido, un escenario particularmente interesante. El istmo de Panamá evolucionó como un nexo crucial del entramado globalizador de la Monarquía hasta constituirse como una «arteria del imperio». Su situación geográfica, descrita como «llave de las Indias», significó que los actores implicados en su gestión fueron más conscientes de su poder respecto a otros espacios, algo interpretado de forma similar por la Corona y que afectó a la naturaleza y los resultados de las negociaciones bilaterales entre esta y aquellos. La misma posición geográfica definió tanto la dinámica demográfica –con muchos movimientos- como la tipología de los oficios desempeñados. Las ciudades de Castilla del Oro estaban pobladas fundamentalmente por mercaderes, que coparon rápidamente los puestos de gobierno, definiendo con ello unos intereses corporativos vinculados a la obtención de beneficios y a la protección de sus intereses, configurando en consecuencia una definición particular de bien común, que no coincidía con el de otros espacios de las Indias cuyos habitantes tenían otras ocupaciones y, por ende, otro tipo de intereses. Esta realidad demográfica también contribuye a cuestionar ciertos principios sobre los que se ha asentado la interpretación tradicional del imperio español. Los mercaderes de Nombre de Dios impusieron sistemáticamente su agenda de intereses al copar los puestos de gobierno municipal, no obstante la tradición que desaconsejaba su presencia. El dinamismo y la pujanza que logró dicho puerto a lo largo del siglo XVI como receptor y exportador de la riqueza de Indias, permiten concluir que el interés por el enriquecimiento individual utilizando las instituciones de gobierno fue uno de los motores de la pujanza económica de la Monarquía Hispánica.

Las ciudades de Castilla del Oro encontraron, por estos motivos, canales de comunicación y muchos argumentos para defender sus intereses. La temprana exploración de la región, por otra parte, también contribuyó a convertir Castilla del Oro en un territorio privilegiado. En términos de implantación jurisdiccional, las ciudades de Castilla del Oro eran referencias primigenias de poder en la zona y puntos de anclaje simbólico frente a otros espacios, especialmente Perú, como muestra su preeminencia en las relaciones de méritos. Castilla del Oro, por lo tanto, no fue sólo un «laboratorio» de experiencias y prácticas políticas que más tarde fueron exportadas –junto con sus habitantes- a otros espacios como Nueva

España o Perú, sino que significó por sí misma un espacio fundamental para comprender las dinámicas de poder y los movimientos de la Monarquía en una vía de ampliación hacia el Pacífico.

Todos los elementos descritos hicieron de Castilla del Oro una sociedad muy dinámica entre 1508 y 1573. Su papel como nodo comercial proyectó a la región también como un núcleo exportador de una cultura política de raíz urbana con una gran capacidad para atraer y adaptar tanto prácticas como conceptos, generando con ello una fuerte autoconsciencia de la capacidad de las ciudades como eje neurálgico del poder de la Monarquía y de la capacidad de los individuos para influir, de una u otra forma, en la política global. Castilla del Oro ha ofrecido, en ese sentido, un escenario que permite, a través de la exploración de sus peculiaridades, la definición de la cultura política que estuvo forjada mediante los pasos dados por los actores, individuales y colectivos, sobre el terreno.

La comprensión en general del fenómeno histórico de la conquista y colonización del Nuevo Mundo requiere profundizar en las complejidades de los procesos políticos locales para entender los múltiples matices que informaron el proceso de la articulación del poder de la Monarquía Hispánica. Este poder no emanaba en exclusiva del centro de la Monarquía, sino que se creaba y articulaba a través de multitud de focos. El «centro» administraba, en cierto modo, ese poder que recibía desde las «periferias». Este equilibrio en el que se mantenía el sistema implicó la adaptación constante de fórmulas y prácticas políticas tradicionales para adecuarlas a circunstancias concretas. No se podría, por tanto, afirmar la existencia de una estrategia global o plan definido de antemano para la implantación de un poder global por parte del Imperio Español. Ese discurso, en todo caso, se generó *post facto*; en la práctica lo que se puede percibir son multitud de procesos a pequeña escala que tenían en común una serie de intereses compartidos pero que cada uno se produjo adaptándose a las circunstancias concretas en las que se desarrollaron.

La construcción de la Monarquía Hispánica, por lo tanto, no se puede entender como un proceso lineal conducente a una forma de gobierno centralizada y *moderna*, con un final cronológico preciso en el que se estabilizaron e implementaron unos mecanismos de funcionamiento automáticos. No se podría, en consecuencia, poner un punto final a la construcción de la Monarquía —o al final del «pacto colonial»— porque en su propio funcionamiento estaba inherente la admisión del cambio y la adaptación constantes, a niveles diversos. El conocimiento del territorio y la confluencia de intereses comunes permitían a los actores sobre el terreno adquirir y gestionar ese poder de una forma mucho más eficiente que si sólo hubieran seguido los dictados o las normas emitidas desde la corte o los consejos.

Las repúblicas urbanas de Castilla del Oro, como actores principales de este proceso, compartieron el poder de la Monarquía Hispánica y permitieron que esta se formase y mantuviese en un delicado equilibrio.

FUENTES MANUSCRITAS

Archivo General de Indias (AGI)

- Audiencia de Panamá, legajos 30, 32, 33, 39, 61, 233, 234, 235, 236, 237, 245.
- Patronato Real, legajos 1, 12, 20, 26, 28, 92, 93, 95A, 98A, 123, 128, 129, 138, 150, 151, 152, 169, 172, 173, 180, 185, 193, 194, 196, 197, 231, 275, 276.
- Justicia, legajos 341, 345, 346, 351, 353, 354, 357, 359, 363, 365, 368, 369, 393, 521, 1003, 1042, 1044, 1048, 1049, 1051, 1164.
- Indiferente General, legajos 415, 418, 419, 420, 737.
- Audiencia de Santo Domingo, legajo 49.
- Audiencia de México, legajo 1088.
- Audiencia de Guatemala, legajos 49, 110.
- Audiencia de Guadalajara, legajo 46, 230.
- Audiencia de Santa Fe, legajos 62, 187, 533, 987.
- Audiencia de Lima, legajos 206, 565.

Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN)

- Diversos-colecciones, legajo 22.

Archivo General de la Nación, Bogotá (AGN)

- Caciques e Indios, legajos 1 y 16.

Archivo Ducal de Alba, Madrid (ADA)

- Caja 170, caja 238

Archivo General de Simancas (AGS)

- Mercedes y Privilegios, legajo 251
- Patronato Real, legajo 32

Biblioteca Nacional de España, Madrid (BNE)

- PEDRO MEXÍA DE OVANDO, *Libro o memorial práctico de las cosas memorables que los Reyes de España y el supremo consejo y real de Indias han proveído para el gobierno político del Nuevo Mundo*, 1639, BNE, MSS 3183
- PEDRO MEXÍA DE OVANDO, *La Ovandina. Donde se trata la naturaleza y origen de la nobleza política, y el de muchas y nobilísimas casas; con los que han pasado de ellas a estos reinos, y al de la Nueva España*. Madrid, 1915 (or. 1621)
- PEDRO DE VALENCIA, *Descripción de Indias*, BNE, MSS 3064
- STEFANO GUAZZO, *La conversación civil*, 1701, BNE, MSS 5843
- *Tabla cronológica de los descubrimientos, conquistas, fundaciones, poblaciones y otras cosas ilustres, así eclesiásticas como seglares de las Indias occidentales, islas y Tierra Firme del Mar Océano, desde el año 1492 hasta el de 1642*. BNE MSS. 11205
- *Armas e mejoramiento de armas de Pedrarias Dávila, lugarteniente y gobernador general de muchas provincias de Tierra Firme en las Indias por el católico rey don Fernando V de tal nombre, y por la serenísima reina doña Juana, e después por la sacra católica majestad del emperador d. Carlos V de tal nombre rey de las Españas nuestro señor*, BNE, MSS 22998.
- ALONSO DE SANTA CRUZ, *Islario general de todas las islas del mundo*, siglo XVI, BNE MSS.MICRO/12638
- *Cicerón en Romance*. Traducción de Alonso de Cartagena, 1422, MSS 7815
- FERNANDO MEXIA, *Nobiliario*, 1479, MSS 3311

Biblioteca Apostólica Vaticana, Roma (APV)

- *Barberini Latini* 3605 y 3560

FUENTES IMPRESAS

AGUSTÍN DE ZÁRATE, *Historia del descubrimiento y conquista del Perú*, 1555

ALONSO DE CARTAGENA, *Discurso sobre la precedencia del rey católico sobre el de Inglaterra en el concilio de Basilea*, BAE, t. 116, 1959

ALONSO DEL CASTRILLO, *Tractado de República*. Madrid. Instituto de estudios políticos, 1958 (or. 1521)

ANDRÉS BERNÁLDEZ, *Memoria del reinado de los Reyes Católicos*. Madrid, RAH, 1962

ANTONIO DE HERRERA, *Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano*. Madrid, 1601-1615

ARISTÓTELES, *La filosofía moral de Aristoteles: a saber ethicas, politicas y economicas, en romance*. Zaragoza, 1509

ARISTÓTELES, *Trattato dei governi di Aristotile*. Venecia, 1551

ARISTÓTELES, *Los ocho libros de República del filósofo Aristoteles*. Zaragoza, 1584

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, *Historia de las Indias*. 3 vol. Madrid, Alianza, 1994

BERNABÉ COBO, *Historia de la fundación de Lima*. Lima, 1882

BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*. Madrid, RAE, 2011

BERNARDO VARGAS MACHUCA, *Milicia y descripción de las Indias*. Madrid, 1599

Colección Somoza. Documentos para la historia de Nicaragua. 17 vol. Madrid, 1956

Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, 42 vol. Madrid, 1864

CRISTÓBAL COLÓN, *Textos y documentos completos: relaciones de viajes, cartas y memoriales*. Ed. Consuelo Varela. Madrid, Alianza, 1982

DIEGO PÉREZ DE MESA, *Política o razón de estado*. Madrid, CSIC, 1980

FERNANDO PIZARRO Y ORELLANA, *Varones ilustres del Nuevo Mundo con un discurso legal de la obligación que tienen los reyes a premiar los servicios de sus vasallos: o en ellos, o en sus descendientes*. Madrid, 1639

FRANCISCO LÓPEZ DE GÓMARA, *Historia general de las Indias*. Madrid, BAE, t. 22, 1852

FRANCESC EIXIMENIS, *Crestià dotzé llibre o Tractat de regiment de princeps e de comunitats*. Valencia, 1484

FRANCISCO DE VITORIA, *Sobre el poder civil*. Madrid, Tecnos, 2007

FRANCISCO DE VITORIA, *Relectio de Indis*, 1532

GIL GONZÁLEZ DÁVILA, *Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias Occidentales, vidas de sus arzobispos y obispos y cosas memorables de sus sedes*, t. II. Madrid, 1655

GIOVANNI BOTERO, *Razón de estado con tres libros de la grandeza de las ciudades. Traducido de italiano en castellano por Juan de Antonio de Herrera*. Burgos, 1603

GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO, *Historia General y Natural de las Indias*. Madrid, BAE, t. 117-121, 1959

GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO, *Sumario de la natural historia de las Indias*. México, FCE, 1996

GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO, *Writing from the edge of the world: the memoirs of Darién (1514-1527)*. Ed. G. F. Dille. Tuscaloosa, University of Alabama Press, 2006

GREGORIO LÓPEZ, *Glosa que escribió en Latín Gregorio López vertida al castellano*, Madrid, 1978

HERNÁN CORTÉS, *Cartas de relación*. Madrid, Historia 16, 1985

HERNANDO COLÓN, *Historia del Almirante*, Madrid, Historia 16, 1984

JERÓNIMO CASTILLO DE BOVADILLA, *Política para corregidores y señores de vasallos en tiempos de paz y de guerra*. Ed. Benjamín González Alonso. Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1978 (or. 1597)

JOSÉ DE ACOSTA, *De procuranda Indorum salute*. Madrid, CSIC, 1984 (or. 1587)

JUAN FERNÁNDEZ MEDRANO, *República mista*, Madrid, 1602

JUAN GARCÍA DE CASTROGERIZ, *Regimiento de príncipes*. Sevilla, 1494

- JUAN LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, *De las islas del Mar Océano*. Ed. Silvio Zavala, México, FCE, 1954
- JUAN SOLÓRZANO PEREIRA, *Política Indiana*. Madrid, 1647
- LEON BATTISTA ALBERTI, *Los diez libros de arquitectura* (Madrid, Alonso Gómez, 1582). Valencia, Albatros Ediciones, 1977
- Los libros de beneficiis de Lucio Aeneo Seneca*, Madrid, 1629
- Las siete partidas del rey don Alfonso el Sabio*. Valladolid, Maxtor, 2010
- Los diez libros de arquitectura de Marco Vitruvio Polion. Según la traducción castellana de Lázaro de Velasco (ca. 1571)*. Cáceres, Cicon, 1999
- MARTÍN FERNÁNDEZ NAVARRETE, *Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV*, 3 tomos, Madrid, 1825
- PASCUAL DE ANDAGOYA, *Relación y documentos*, ed. Adrián Blázquez, Madrid, 1986
- PEDRO DE ALCOCER, *Historia y descripción de la Imperial ciudad de Toledo. Con todas las cosas acontecidas en ella, desde su principio y fundación adonde se tocan y refieren muchas antigüedades y cosas notables de la historia general de España*. Toledo, 1554
- PEDRO CIEZA DE LEÓN, *Descubrimiento y conquista del Perú*. Madrid, Historia 16, 1985
- PEDRO CIEZA DE LEÓN, *La Crónica del Perú*. Madrid, Calpe, 1922 (or. 1553)
- PEDRO MÁRTIR DE ANGLERÍA, *Décadas del Nuevo Mundo*. Ed. Ramón Alba. Madrid, Polifemo, 1989
- Pragmática en que se da la orden y forma que se ha de tener y guardar, en los tratamientos y cortesías de palabra, y por escrito y en traer coronelles y ponellos en qualesquier parte, y lugares*. Amberes, 1586
- Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias*, Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, 1998
- RODRIGO SÁNCHEZ DE ARÉVALO, *Suma de la política*, ed. Juan Beneyto Pérez, Madrid, CSIC, 1944
- TOMASSO DE CAMPANELLA, *Monarquía Hispánica*. Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1982
- Tratado de la comunidad* (Biblioteca de El Escorial MS. C-II-8) ed. Frank Anthony Ramírez. Londres, Tamesis Books, 1988
- VASCO DE CONTRERAS Y VALVERDE, *Relación de la ciudad de Cusco*. Cuzco, 1982 (or. 1649)
- VASCO DE QUIROGA, *La Utopía en América*. Ed. Paz Serrano Gassent, Madrid, Dastin, 2002

WILLIAM ROBERTSON, *The Works of William Robertson, vol. VII, The Discovery of America.*
Londres, 1821

BIBLIOGRAFÍA

ABERCROMBIE, Thomas (1998), *Pathways of Memory and Power. Ethnography and History among and Andean People*, Madison, The University of Wisconsin Press.

ABULAFIA, David (2008), *The discovery of Mankind. Atlantic Encounters in the Age of Columbus*, New Haven, Yale University Press.

AMELANG, James (1986), *La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714*, Barcelona, Ariel.

ADORNO, Rolena (1994), «The indigenous ethnographer: the ‘indio ladino’ as historian and cultural mediation», en Stuart SCHWARTZ (ed.), *Implicit Understandings. Observing, Reporting, and Reflecting on the Encounters Between Europeans and Other Peoples in the Early Modern Era*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 378-402.

ALBANI, Benedetta, BARBOSA, Samuel y DUVE, Thomas (2015), «Introducción dossier La formación de espacios jurídicos iberoamericanos (s. XVI-XIX): actores, artefactos e ideas», *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, 52, pp. 9-14.

ALTMAN, Ida (2000), *Transatlantic ties in the Spanish Empire. Brihuega, Spain and Puebla, Mexico, 1560-1620*, Stanford, Stanford University Press.

ALTOLAGUIRRE, Angel (1914), *Vasco Núñez de Balboa*, Madrid, Imprenta del patronato de huérfanos de intendencia e intervención militares.

ÁLVAREZ RUBIANO, Pablo (1944), *Pedrarías Dávila, contribución a la figura del Gran Justador, gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua*. Madrid, Instituto Fernández de Oviedo.

ANNINO, Antonio (1995), «Some reflection on Spanish American constitutional and political history», *Itinerario*, 19, 2, pp. 26-47

ANTELO IGLESIAS, Antonio (1985), «La ciudad ideal según fray Francisc Eiximenis y Rodrigo Sánchez de Arévalo» en Emilio SÁEZ SÁNCHEZ (ed.), *La ciudad hispánica entre los siglos XIII al XVI*, t. I, Madrid, Universidad Complutense, 1985, pp. 19-50

ARAM, Bethany (2008), *Leyenda negra y leyendas doradas en la conquista de América. Pedrarias y Balboa*, Madrid, Marcial Pons.

ARAM, Bethany (2012a) «From the Courts to the Court: History, Literature, and Litigation in the Spanish Atlantic World», *Colonial Latin American Review*, 21, 3, 20, pp. 343-364.

ARAM, Bethany (2012b), «Distance and Misinformation in the Conquest of America», en Tonio ANDRADE y William REGER (eds.), *The Limits of Empire: European Imperial Formations in Early Modern World History. Essays in Honor of Geoffrey Parker*, Surrey, Ashgate, pp. 223-236.

ARAM, Bethany y OVANDO, Rafael (2017), «Violencia, esclavitud y encomienda en la conquista de América, 1513-1542», *Historia social*, 87, pp. 129-148.

ARANDA, Francisco (1997), «Familia y sociedad o la interrelación *casa-república* en la tratadística española del siglo XVI» en James CASEY y Juan HERNÁNDEZ FRANCO(eds.), *Familia, parentesco y linaje*, Murcia, Universidad de Murcia, pp. 177-186.

ARANDA, Francisco (1999), *Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, sociedad y oligarquías urbanas en la edad moderna*, Cuenca, Universidad de Castilla la Mancha, 1999.

ARANDA, Francisco (2001), «*Autobiografías ciudadanas*. Historias, mitomanía y falsificación en el mundo urbano hispánico de la Edad Moderna», en Ernesto GARCÍA FERNÁNDEZ (ed.), *El poder en Europa y América: mitos, tópicos y realidades*. Bilbao, Universidad del País Vasco, pp. 141-168.

ARANDA, Francisco (2006), «*Repúblicas ciudadanas*. Un entramado político oligárquico para las ciudades castellanas en los siglo XVI y XVII», *Estudis*, 32, pp. 7-47.

ARANDA, Francisco y Jose DAMIAO (eds.), *De re publica Hispaniae: una vindicación de la cultura política en los reinos hispánicos en la primera modernidad*, Madrid, Sílex, 2008.

ARCANGELI, Alessandro (2011), «L'indigeno che balla: la circolazione transatlantica di una rappresentazione culturale», en José Ramón DÍAZ DE DURANA y Jose Antonio MUNTA, *La apertura de Europa al Mundo Atlántico: espacios de poder, economía marítima y circulación cultural*, Bilbao, UPV, pp. 189-202.

ARTEAGA, José Joaquín (1961), «Santa María la Antigua del Darién», *Lotería*, 62, s. f.

ASLANIAN, Sebouth, CHAPLIN, Joyce, MCGRATH, Ann, y MANN, Kristin (2013), «How Size Matters: the Question of Scale in History», *American Historical Review*, 118, 5, pp. 1431-1472.

ATIENZA, Ignacio (1987), *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de Osuna siglo XV-XIX*, Madrid, Siglo XXI.

- ATIENZA, Ignacio (1990), «Pater familias, señor y patrón: oeconomica, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen», en Reyna PASTOR (comp.), *Relaciones de poder, de producción y parentesco en la edad media y moderna*, Madrid, CSIC, pp. 411-458.
- ATIENZA, Ignacio (1997), «La construcción de lo real. Genealogía, Casa, linaje y ciudad», en James CASEY y Juan HERNÁNDEZ FRANCO (eds.), *Familia, parentesco y linaje*, Murcia, Universidad de Murcia, pp. 41-59.
- BABER, Jovita (2005), «The construction of empire: politics, law and community in Tlaxcala, New Spain, 1521-1640», Tesis doctoral inedita, Chicago, Universidad de Chicago.
- BAKER, Keith (1987), *The political culture of the Old Regime*, Oxford, Pergamon Press, 1987.
- BARR, Juliana (2007), *Peace Came in the Form of a Woman. Indians and Spaniards in the Texas Borderlands*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- BARRIERA, Darío (2003), «La historia del poder político sobre el periodo temprano colonial rioplatense. Razones de una ausencia: propuestas para una agenda», *Penelope*, 29, pp. 133-159.
- BARRIERA, Darío (2013), *Abrir puertas a la tierra. Microanálisis de la construcción de un espacio político, Santa Fe, 1573-1640*, Santa Fe, Museo Histórico Provincial.
- BASSI, Ernesto (2014), «Beyond Compartmentalized Atlantics: a Case for Embracing the Atlantic from the Spanish American Shores», *History Compass*, 12, 9, pp. 704-716.
- BAZZOLI, Maurizio (1990), *Il piccolo stato nell'età moderna. Studi su un concetto della politica internazionale tra XVI e XVIII secolo*, Milán, Jaca.
- BEETHAM, David (1991), *The Legitimation of Power*. Londres, Palgrave.
- BELMESSOUS, Salima (ed.) (2011), *Native Claims. Indigenous Law Against Empire, 1500-1920*, Nueva York, Oxford University Press.
- BENIGNO, Francesco (2000), *Espejos de la revolución. Conflicto e identidad política en la Europa Moderna*, Barcelona, Crítica.
- BENIGNO, Francesco (2013), *Las palabras del tiempo. Un ideario para pensar históricamente*. Madrid, Cátedra.
- BENTON, Brandley (2017), *The Lords of Tetzcoco. The Transformation of Indigenous Rule in Postconquest Central Mexico*, Cambridge, Cambridge University Press.
- BENTON, Lauren (2001), «Making Order out of Trouble. Jurisdictional Politics in the Spanish Colonial Borderlands», *Law and Social Inquiry*, 26, 2, pp. 373-401.
- BENTON, Lauren (2002), *Law and Colonial Cultures. Legal Regimes in World History, 1400-1900*, Cambridge, Cambridge University Press.

BENTON, Lauren y STRAUTMANN, Benjamin (2010), «Acquiring Empire by Law: From Roman Doctrine to Early Modern European Practice», *Law and History Review*, 28, 1, pp. 1-30

BENTON, Lauren & ROSS, Richard (eds.) (2013), *Legal Pluralism and Empires, 1500-1850*, Nueva York, NYU Press.

BERNABÉU, Salvador (ed.) (2010), *La ciudad americana: mitos, espacios y control social*, Madrid, Doce Calles.

BERNARD, Pauline (2018), «Construire giurisdizione. La maréchaussée nel lionese all'inizio del XVIII secolo», *Quaderni Storici*, 158, 2, pp. 389-414.

BERTRAND, Michel (2009), «Poder peleado, poder compartido: familias y estado en la América española colonial», en Sebastián MOLINA PUCHE y Antonio IRIGOYEN LÓPEZ (eds.), *Territorios distantes, comportamientos similares. Familia, redes y reproducción social en la Monarquía Hispánica (siglos XIV-XIX)*, Murcia, Ediciones Universidad de Murcia, pp. 217-236.

BERTRAND, Romain (2015), *Le long remords de la conquête. Manille-Mexico-Madrid, l'Affaire Diego de Ávila, 1577-1580*, Paris, Du Seuil.

BEUCHOT, Mauricio (1976), «El primer planteamiento teológico-jurídico sobre la conquista de América: John Mair», *Ciencia Tomista*, 103, pp. 213-230.

BLACK, Antony (1996), «The Commune in Political Theory in the Late Middle Ages» en Peter BLICKLE (ed.), *Theorien kommunaler Ordnung in Europa*, Munich, Oldenbourg, pp. 99-112.

BLICKLE, Peter (ed.) (1997), *Resistance, Representation, and Community*, Oxford, Oxford University Press.

BLICKLE, Peter (1998), «El principio del 'bien común' como norma para la actividad política. La aportación de campesinos y burgueses al desarrollo del Estado moderno temprano en Europa central», *Edad media: revista de historia*, 1, pp. 29-46.

BLOCKMANS, Wim, HOLENSTEIN, André y MATHIEU, Jon (eds.) (2009), *Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe, 1300-1900*, Londres, Ashgate.

Blockmans, Wim (2018), «Enterprising Politics or Routine Dealings? Political Participation in Europe before 1800», en Joaquim Albareda y Manuel Herrero Sánchez (eds.), *Political Representation in the Ancien Régime*, Nueva York, Routledge, pp. 17-31.

BORRERO, Manuel y GARCÍA, Mercedes (eds.) (2001), *Las ordenanzas de la villa de Marchena (1528)*, Sevilla, Diputación de Sevilla.

BOTELLA, Eva (2012), «Exempt from time and from its fatal change': Spanish imperial ideology, 1450-1700», *Renaissance Studies*, 26, 4, pp. 580-604.

BOUZA, Fernando (2010), «La configuración de la Monarquía Hispánica», en David GARCÍA HERNÁN (coord.), *La historia sin complejos. La nueva visión del Imperio Español: estudios en honor de John H. Elliott*, Madrid, Actas, pp. 70-78.

BRADDICK, Michael (2000), *State Formation in Early Modern England, c. 1550-1700*, Cambridge, Cambridge University Press.

BRENDECKE, Arndt (2009), «Informing the Council. Central Institutions and Local Knowledge in the Spanish Empire», en Wil BLOCKMANS, André HOLENSTEIN y Jon MATHIEU (eds.), *Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe, 1300-1900*, Londres, Ashgate, pp. 235-252.

BRENDECKE, Arndt (2016), *The Empirical Empire. Spanish Colonial Rule and the Politics of Knowledge*. Berlin, De Gruyter.

BRETT, Annabel (2003), «The development of the idea of citizens' rights», en Quentin SKINNER y Bo STRATH, *State and citizens: History, Theory, Prospects*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 97-114.

BRETT, Annabel (2011), *Changes of State. Nature and the Limits of the City in Early Modern Natural Law*, Princeton, Princeton University Press.

BRUNNER, Otto (1983), *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milán, Giuffrè.

BRUNNER, Otto (1991), *Estructura interna de Occidente*, Madrid, Alianza.

BRUNNER, Otto (2010), «La 'casa grande' y la *Oeconomía* de la vieja Europa», *Prismas*, 14, pp. 117-136.

BUONO, Alessandro (2014), «Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione. Persone e cose nelle cause per eredità vacanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII)» en Livio ANTONIELLI et al. (eds.), *Procedure, metodi e strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*. Soveria Manelli, Rubettino, 2014, pp. 35-65.

BURKE, Peter (2000), «Foundation Myths and Collective Identities in Early Modern Europe», en Bo STRATH (ed.), *Europe and the Other and Europe as the Other*, Bruselas, Peter Lang, 2000, pp. 113-122.

BURKE, Peter (2010), *Hibridismo cultural*, Madrid, Akal.

CANNY, Nicholas y PAGDEN, Anthony (eds.) (1989), *Colonial Identity in the Atlantic World, 1500-1800*, Princeton, Princeton University Press.

CANTÚ, Francesca (2007), *La conquista spirituale. Studi sull'evangelizzazione del Nuovo Mondo*, Roma, Viella.

CAÑEQUE, Alejandro (2013), «The political and institutional history of Colonial Latin America», *History Compass*, 11, 4, pp. 280-291.

CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge y BREEN, Benjamin (2013), «Hybrid Atlantics: Future Directions for the History of the Atlantic World», *History Compass*, 13, 8, pp. 597-609.

CARDIM, Pedro (2000), *O poder dos afectos. Ordem amorosa e dinâmica política no Portugal do Antigo Regime*, Lisboa, Universidade Nova.

CARDIM, Pedro, RUIZ IBÁÑEZ, Jose Javier, SABATINI, Gaetano y HERZOG, Tamar (eds.) (2012), *Polycentric Monarchies. How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?* Brighton, Sussex Academic Press.

CARDIM, Pedro (2012), «The representatives of Asian and American Cities at the Cortes of Portugal», en Pedro CARDIM, José Javier RUIZ IBÁÑEZ, Gaetano SABATINI y Tamar HERZOG (eds.), *Polycentric Monarchies. How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?* Brighton, Sussex Academic Press, pp. 43-53.

CARDIM, Pedro (2017), *Portugal y la Monarquía Hispánica (ca. 1550-ca. 1750)*, Madrid, Marcial Pons.

CARMAGNANI, Marcelo (2012), «La organización de los espacios americanos en la Monarquía Española (siglos XVI-XVIII)», en José Javier RUIZ IBÁÑEZ y Óscar MAZÍN (eds.), *Las indias occidentales. Procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas*. México, Colegio de México, pp. 331-355,

CARO BAROJA, Julio (1985), *Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII)*. Madrid, Sarpe.

CARRASCO MANCHADO, Ana Isabel (2011), «Entre el rey y el reino calladamente está fecho un contrato. Fundamentos contractuales de la monarquía trastámara en Castilla en el siglo XV», en François FORONDA (dir.), *Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval XIII^e-XV^e siècle*, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 613-652.

CARROLL, Stuart (ed.) (2007), *Cultures of Violence. Interpersonal Violence in Historical Perspective*, Londres, Palgrave.

CARZOLIO, María Inés (2002), «En los orígenes de la ciudadanía en Castilla. La identidad política del vecino durante los siglos XVI y XVII» *Hispania*, LXII/2, n. 211, pp. 637-692.

CASTILLERO, Alfredo (1972), *Políticas de poblamiento en Castilla del Oro y Veragua en los orígenes de la colonización*, Panamá, Editorial Universitaria.

CASTILLERO, Alfredo (1972), *Fundación y orígenes de Natá*, Panamá, Impresora Panamá.

CASTILLERO, Alfredo (1994), *La vivienda colonial en Panamá. Arquitectura, urbanismo y sociedad. Historia de un sueño*, Panamá, Biblioteca cultural Shell.

CASTILLERO, Alfredo (1999), «La ciudad imaginada» Contexto histórico-emblemático y funcionalidad. Ensayo de interpretación de la ciudad colonial», *Revista de Indias*, LIX, 215, pp. 143-169.

CASTILLERO, Alfredo (1999), *La ciudad imaginada. El casco viejo de Panamá*, Panamá, Ministerio de presidencia.

CASTILLERO, Alfredo (2006), *Sociedad, economía y cultura material. Historia urbana de Panamá la Vieja*, Panamá, Patronato de Panamá Viejo

CASTILLERO, Alfredo (2010), *Cultura alimentaria y globalización. Panamá siglos XVI-XXI*, Panamá, Novo arte.

CASTILLERO, Alfredo (2011), «La fundación de Santiago de Natá, en 1522, y la temprana organización del espacio panameño», *Iacobus, revista de estudios jacobeos y medievales*, 29-30, pp. 251-276.

CENTENERO DE ARCE, Domingo (2012), «¿Una monarquía de lazos débiles? Circulación y experiencia como formas de construcción de la Monarquía católica», en Juan Francisco PARDO MOLERO y Manuel LOMAS CORTÉS (coords.), *Oficiales reales. Los ministros de la Monarquía Católica (siglos XVI-XVII)*, Valencia, Universidad de Valencia, 2012, pp. 137-162.

CENTENERO DE ARCE, Domingo (2012), *De repúblicas urbanas a ciudades nobles. Un análisis de la evolución y desarrollo del republicanismo castellano (1550-1621)*, Murcia, Universidad de Murcia

CERUTTI, Simona, DESCIMON, Robert y PRAK, Maarten (1995), «Premesa», *Quaderni Storici*, 89, 2, pp. 281-286.

CERUTTI, Simona (2007), «La cittadinanza in età moderna: istituzioni e costruzione della fiducia» en Paolo PRODI (ed.), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Roma, Il Mulino, pp. 255-273.

CERUTTI, Simona (2012), *Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime*, Paris, Bayard.

CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo (1997), «Los orígenes de la nobleza en Indias» en María del Carmen IGLESIAS *Nobleza y sociedad en la España moderna II*, Oviedo, Nobel, pp. 23-41.

CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo (2009), *América Hispánica (1492-1898)*, Madrid, Marcial Pons.

CHALLET, Vincent (2009), «Political *topos* or Community Principle? *Res Publica* as a Source of Legitimacy in the French Peasants' Revolts of the Late Middle Ages», en Wim BLOCKMANS, André HOLENSTEIN y Jon MATHIEU (eds.): *Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe, 1300-1900*. Londres, Ashgate, pp. 205-218.

CLAVERO, Bartolomé (1981), «Institución política y derecho: acerca del concepto historiográfico de «estado moderno»», *Revista de estudios políticos*, 19, pp. 43-57.

CLAVERO, Bartolomé (1984), *Usura. Del uso económico de la religión en la historia*, Madrid, Tecnos.

CLAVERO, Bartolomé (1986), *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia moderna*, Madrid, Tecnos.

CLAVERO, Bartolomé (1989), «Del estado presente a la familia pasada (a propósito de estudios acerca de la *Famiglia aristocratica* así como también de la Familia Mediterránea)», *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero moderno*, 18, pp. 583-605.

CLAVERO, Bartolomé (1990), «Delito y pecado. Noción y escala de transgresiones» en Francisco TOMÁS Y VALIENTE *et. al.*: *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid, Alianza, pp. 57-89.

CLAVERO, Bartolomé (1991), *Antidora. Antropología católica de la economía moderna*, Milán, Giuffrè, 1991.

COOKE, Richard, SÁNCHEZ, Luis Alberto, CARVAJAL, Diana, GRIGGS, John y AIZPURÚA, Ilean (2003), «Los pueblos indígenas de Panamá durante el siglo XVI: transformaciones sociales y culturales desde una perspectiva arqueológica y paleoecológica», *Mesoamérica*, 45, pp. 1-34.

COOKE, Richard (2005), «Prehistory of Native Americans on the Central American Land Bridge: Colonization, Dispersal, and Divergence», *Journal of Archaeological Research*, 13, 2, pp. 129-187.

CONRAD, Sebastian (2016), *What's Global History?* Princeton, Princeton University Press.

CÓRDOBA OCHOA, Luis Miguel (2009), «Movilidad geográfica, capital cosmopolita y relaciones de méritos. Las élites del imperio entre Castilla, América y el Pacífico», en Bartolomé YUN CASALILLA (ed.), *Las redes del imperio. Élite sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica (1492-1714)*, Madrid, Marcial Pons, pp. 359-378.

CÓRDOBA OCHOA, Luis Miguel (2013), *Guerra, imperio y violencia en la Audiencia de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada. 1580-1620*, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide.

COSTA, Pietro (1969), *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milán, Giuffrè.

COSTA, Pietro (1999), *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Della civiltà comunale al Settecento*, Roma, Laterza.

CUNILL, Carolina (2012), «La negociación indígena en el imperio ibérico: aportes a su discusión metodológica», *Colonial Latin American Review*, 21, 3, pp. 391-412.

CUNILL, Caroline (2014), «El uso indígena de las probanzas de méritos y servicios: su dimensión política (Yucatán, s. XVI)», *Signos históricos*, 32, pp. 14-47.

DANIELS, Christine y KENNEDY, Michael (eds.), *Negotiated Empires. Centers and Peripheries in the Americas, 1500-1820*, New York, Routledge, 2002.

DE BENEDICTIS, Angela (2001), *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bolonia, Il Mulino.

DE BENEDICTIS, Angela (2013), *Tumulti: moltitudini ribelli in età moderna*, Bolonia, Il Mulino.

DE CARVALHO, Benjamin (2016), «The making of the political subject: subjects and territory in the formation of the state», *Theor Soc*, 45, pp. 57-88.

DE DIOS, Salustiano (1993), *Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474-1530*, Madrid, Centro de estudios constitucionales.

DELGADO BARRADO, José Miguel, FERNÁNDEZ, Jesús y LÓPEZ ARANDIA, María Amparo (2011), *Fundación, repoblación y buen gobierno en Castilla. Campillo de Arenas, 1508-1543*, Jaén, Diputación de Jaén.

DELGADO BARRADO, José Miguel, Ludolf PELIZAEUS y María Cristina TORALES PACHECO (2014), *Las ciudades en las fases transitorias del mundo hispánico a los Estados nación: América y Europa (siglos XVI-XX)*, Madrid, Iberoamericana Veuvert.

DELGADO BARRADO, José Miguel, LÓPEZ ARANDIA, María Amparo y RAMÍREZ DE JUAN, María Eloísa (2014), «Fundación de ciudades en Andalucía y su proyección hacia América (siglos XVI-XVIII)», en José Miguel DELGADO BARRADO, Ludolf PELIZAEUS y María Cristina TORALES PACHECO(eds), *Las ciudades en las fases transitorias del mundo hispánico a los Estados nación: América y Europa (siglos XVI-XX)*, Madrid, Iberoamericana Veuvert, pp. 17-43.

DE VITO, Christian (2015), «Verso una microstoria translocale (Micro-spatial history)», *Quaderni Storici*, 3, pp. 815-833

DIAGO, Máximo (2013), «El reforzamiento de los vínculos comunitarios a través de la fiesta en las ciudades castellanas en el marco de cuadrillas o cofradías. Siglos XV-XVII», *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, LXVIII, 1, pp. 33-56.

DÍAZ CEBALLOS, Jorge (2012), «La *urbs* y la *civitas* de Veracruz en el inicio de la conquista de México», en Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA y Julián LOZANO NAVARRO, *Actas de la XI reunión científica de la FEHM*, Granada, Universidad de Granada, pp. 984-995.

DÍAZ CEBALLOS, Jorge (2013), «Una relectura de *De insulis oceanis* de Palacios Rubios», en María José PÉREZ y Alfredo MARTÍN (eds.), *Campo y campesinos en la España moderna; culturas políticas en el mundo hispano*, vol. II, León, Universidad de León, pp. 1507-1517.

DÍAZ CEBALLOS, Jorge (2018a), «Negociación, consenso y comunidad política en la fundación de ciudades en Castilla del Oro en el temprano siglo XVI», *Investigaciones históricas, época moderna y contemporánea*, 38, pp. 131-160.

DÍAZ CEBALLOS, Jorge (2018b), «New World civitas, contested jurisdictions and intercultural conversation in the construction of the Spanish Monarchy», *Colonial Latin American Review*, 27, 1, pp. 30-51.

DÍAZ CEBALLOS, Jorge (2018c), «Entre príncipes de la libertad y vecinos leales. La rebelión de los Contreras y la defensa de Panamá en 1550», *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En línea]

DÍAZ SERRANO, Ana (2010), «Alteridad y alianza: consolidación y representación del grupo de poder de la república de Tlaxcala durante el siglo XVI», en Giovanni LEVI (ed.): *Familias, jerarquización y movilidad social*, Murcia, Universidad de Murcia, pp. 29-43.

DÍAZ SERRANO, Ana (2010), *El modelo político de la monarquía hispánica desde una perspectiva comparada. Las repúblicas de Murcia y Tlaxcala durante el siglo XVI*, Murcia, Universidad de Murcia.

DOMÍNGUEZ GARCÍA, Javier (2006), «Santiago Mataindios: la continuación de un discurso medieval en la Nueva España», *NRFH*, LIV, 1, pp. 33-56.

DOMÍNGUEZ GARCÍA, Javier (2008), *De apostol matamoros a Yllapa Mataindios: dogmas e ideologías medievales en el (des)cubrimiento de América*, Salamanca, Universidad de Salamanca.

DOMÍNGUEZ COMPAÑY, Francisco (1981), *Estudios sobre las instituciones locales hispanoamericanas*, Caracas, Academia Nacional de la Historia.

DOMÍNGUEZ COMPAÑY, Francisco (1984), *Política de poblamiento de España en América. La fundación de ciudades*, Madrid, Instituto de estudios de la administración local.

DOMÍNGUEZ GUERRERO, María Luisa y LÓPEZ VILLALBA, José Luis (2018), «Una institución española en el Nuevo Mundo: el cabildo de Cuzco en el siglo XVI», *Colonial Latin American Review*, 27, 2, pp. 153-177.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio (1985), *Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen*, Madrid, Istmo.

DUMOLYN, Jan (2011), «Urban Ideologies in Later Medieval Flanders. Towards and Analytical Framework», en Andrea GAMBERINI, Jean-Phillipe GENET y Andrea ZORZI (eds.), *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, Roma, Viella, pp. 69-96.

DURAND, José (1953), *La transformación social del conquistador*, 2 vol, México, Porrúa.

DURAND, José (1954), «El ambiente social de la conquista y sus proyecciones en la colonia», *Historia Mexicana*, 4, pp. 497-515.

ELLIOTT, John. H. (1969), *The Old World and the New, 1492-1650*, Cambridge, Cambridge University Press.

ELLIOTT, John H. (1976), «Renaissance Europe and America, A Blunted Impact?» en Fredi CHIAPELLI (ed.), *First Images of America: the Impact of the New World on the Old*, vol. 1, Berkeley, University of California Press, pp. 11-23.

ELLIOTT, John H. (1992), «A Europe of Composite Monarchies», *Past and Present*, 137, pp. 48-71.

ELLIOTT, John H. (2001), «Cortés, Velázquez and Charles V», en Anthony PAGDEN (ed.): *Hernán Cortés. Letters from Mexico*, New Haven y Londres, pp. xi-xxxvii.

ELLIOTT, John H. (2006), *Imperios del mundo Atlántico: España y Gran Bretaña en América (1492-1830)*, Madrid, Taurus.

ELLIOTT, John H. (2009), «King and patria in the Hispanic World», en John H. ELLIOTT, *Spain, Europe, and the Wilder World, 1500-1800*, New Haven, Yale University Press, pp. 173-192.

EPPLÉ, Angelika (2018), «Calling for a practice turn in global history: practices as drivers of globalization/s», *History and Theory*, 57, 3, pp. 390-407.

ESCRIBANO PÁEZ, José Miguel (2016a), *Juan Rena and the Construction of the Hispanic Monarchy (1500-1540)*, tesis doctoral inédita, Florencia, European University Institute, 2016.

ESCRIBANO PÁEZ, José Miguel (2016b), «Negotiating with the ‘Infidel’: Imperial Expansion and Cross-Confessional Diplomacy in the Early Modern Maghreb (1492-1516)», *Itinerario*, 40, 2, pp. 189-214.

ESCRIBANO PÁEZ, José Miguel (2017), «Conectando continentes en un contexto violento: comercio intercultural y violencia en el Mediterráneo occidental de la primera edad global», *Historia social*, 87, pp. 111-127.

ESCRIBANO PÁEZ, José Miguel (2020), *Juan Rena and the Frontiers of the Spanish Empire 1500-1540*, Nueva York, Routledge.

ESPINO, Antonio (2013), *La conquista de América. Una revisión crítica*, Barcelona, RBA.

ESPINOSA, Aurelio (2009), *The Empire of the Cities: Emperor Charles V, the Comunero Revolt and the Transformation of the Spanish System*, Brill, Leiden.

ESPINOZA SORIANO, Waldemar, *La destrucción del imperio de los incas. La rivalidad política y señorial de los curacazgos andinos*, Lima, Retablo de papel, 1973.

FAVARÓ, Valeria, MERLUZZI, Manfredi y SABATINI, Gaetano (eds.) (2017), *Fronteras. Procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América (siglos XVI-XX)*, México, FCE.

FAYA, María Ángeles, *Las ciudades españolas en la edad moderna: oligarquías urbanas y gobierno municipal*, Oviedo, Krk editores, 2014.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (1987), «Imperio y administración bajo Carlos V: una reevaluación», en AA.VV, *Hernán Cortés y su tiempo*, vol. II, Editora regional de Extremadura, pp. 520-527.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo y PARDOS, Julio (1988), «Castilla, territorio sin cortes (ss. XV-XVII)», *Revista de las Cortes generales*, 15, pp. 113-208.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (1989), «Cities and the state in Spain», *Theory and Society*, 18, 5, pp. 721-731.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (1993), *Fragmentos de monarquía*, Madrid, Alianza.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (1997), «Católicos antes que ciudadanos: gestación de una ‘Política Española’ en los comienzos de la edad moderna» en José Ignacio FORTEA, *Imágenes de la diversidad: el mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII)*, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 103-127.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (2008), «Unión de almas, autonomía de cuerpos: sobre los lenguajes de unión en la Monarquía Católica, 1590-1630», en Manuel GARCÍA

HURTADO, *Modernitas. Estudios en homenaje al profesor Baudilio Barreiro Mallón*, La Coruña, Universidad de La Coruña, pp. 111-119.

FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe (1991), *Columbus*, Londres, Duckworth.

FERNÁNDEZ SANTAMARÍA, José Antonio (1988), *El estado, la guerra y la paz. El pensamiento político español en el renacimiento 1516-1559*, Madrid, Akal.

FITZMAURICE, Andrew (2007), «Moral Uncertainty in the Dispossession of Native Americans», en Peter MANCALL (ed.), *The Atlantic World and Virginia, 1550-1624*. Chapell Hill, The University of North Carolina Press, pp. 383-409.

FLORISTÁN, Alfredo (1985), «Vecinos residentes' y 'vecinos foranos' en Navarra a mediados del s. XVII», en *Cuadernos de etnografía y etnología de Navarra*, año 17, n. 45, pp. 5-16.

FLÜCHTER, Antje y RICHTER, Susan (eds.) (2012), *Structures on the Move. Technologies of Governance in Transcultural Encounter*, Heidelberg, Springer.

FORTEA PÉREZ, José Ignacio (1990), *Monarquía y cortes en la corona de Castilla: las ciudades ante la política fiscal de Felipe II*, Valladolid, Cortes de Castilla y León.

FORTEA PÉREZ, José Ignacio (1995), «Las ciudades de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen: una revisión historiográfica», *Boletín de la Asociación de Demografía Histórica*, XIII, 3, pp. 19-59.

FORTEA PÉREZ, José Ignacio (2000), «Principios de gobierno urbano en la Castilla del siglo XVI», en Enrique MARTÍNEZ RUIZ (dir.), *Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía*, Tomo I, Actas, Madrid, pp. 261-308.

FORTEA PÉREZ, José Ignacio y GELABERT GONZÁLEZ, Juan (eds.) (2008), *Ciudades en conflicto (siglos XVI- XVIII)*. Madrid, Marcial Pons.

FORTEA PÉREZ, José Ignacio (2009), «La ciudad y el fenómeno urbano en el Antiguo Régimen», *Anuario IEHS*, 24, pp. 111-142.

Fragoso, João y Monteiro, Nuno G. (coords.) (2017), *Um reino e suas repúblicas no atlântico: comunicações políticas em Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVII e XVIII*, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.

FREIST, Dagmar (2017), «A global microhistory of the early modern period. Social sites and the interconnectedness of humans lives», *Quaderni Storici*, 155, n. 2, pp. 537-555.

FRIEDE, Juan (1955), *Documentos inéditos para la historia de Colombia (1509-1550)*, t. II, Bogota, 1955.

FRIGO, Daniela (1985), *Il padre di famiglia, Governo della casa e governo civile nella tradizione dell' «economica» tra cinque e seicento*, Roma, Bulzoni.

FUCHS, Barbara (2001), *Mimesis and Empire. The New World, Islam, and European Identities*, Cambridge, Cambridge University Press.

GALLUP-DÍAZ, Ignacio (2002), *The Door of the Seas and the Key to the Universe. Indian Politics and Imperial Rivalry in Darien, 1640-1750*, Nueva York, Columbia University Press.

GAMBERINI, Andrea, GENET, Jean-Phillipe y ZORZI, Andrea (eds.) (2011), *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, Roma, Viella.

GARCIA-GALLO, Alfonso (1972), *Estudios de historia del derecho indiano*, Madrid, Instituto nacional de estudios jurídicos.

GARCÍA-GALLO, Alfonso (1973), *Manual de historia del derecho español. Volumen 2: metodología histórico jurídica. Antología de fuentes del antiguo derecho*, Madrid, Artes gráficas y ediciones.

GARCÍA-GALLO, Alfonso (1987), *Los orígenes españoles de las instituciones americanas: estudios de Derecho indiano*, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

GARCÍA VALDEAVELLANO, Luis, (1986), *Curso de historia de las instituciones españolas*, Madrid, Alianza.

GAREIS, Iris (1993), «República de indios'-'República de españoles'. Reinterpretación actual de conceptos andinos coloniales», *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, 30, pp. 259-277.

GARRIGA, Carlos (2004), «Las audiencias: justicia y gobierno de las Indias» en Feliciano BARRIOS (Coord.): *El gobierno de un mundo. Virreinos y Audiencias en la América Hispánica*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 711-794.

GARRIGA, Carlos (2006), «Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos XVI- XVII)», *Revista de historia del derecho*, 34, pp. 67-160.

GARRIGA, Carlos (2012) «¿La cuestión es saber quien manda? Historia política, historia del derecho y 'punto de vista'», *PolHis*, 10, pp. 89-100.

GASTEAZORO, Carlos (1958), «La fundación de Natá», *Lotería*, 32, pp. 56-61.

GAUTIER-DALCHÉ, Jean (1979), *Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII)*, Madrid, Siglo XXI.

GELABERT GONZÁLEZ, Juan E. (1994), «La ciudad y sus habitantes», *Obradoiro de historia moderna*, 3, pp. 31-49.

GELABERT GONZÁLEZ, Juan E. (2008a), «Ciudades, villas y aldeas (1538-1602)» en José Ignacio FORTEA y Juan GELABERT (eds.), *Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII)*, Madrid, Marcial Pons, pp. 81-106.

GELABERT GONZÁLEZ, Juan E. (2008b), «Ciudades, villas y lugares en el mundo atlántico: de Jamestown a Elna», *Pedralbes*, 28, pp. 765-782.

GELABERT GONZÁLEZ, Juan E. (2008c), «*Caesaris Caesari et Dei Deo*. La concesión del título de ciudad a Santander por Benedicto XIV (12, diciembre, 1754)», en Manuel GARCÍA HURTADO (ed.), *Modernitas. Estudios en homenaje al profesor Baudilio Barreiro Mallón*, La Coruña, Universidad de La Coruña, pp. 329-349.

GELABERT GONZÁLEZ, Juan E. (2009), «El artículo IV de la Tregua de los Doce Años (1607-1609), en Manuel-Reyes GARCÍA HURTADO, Domingo GONZÁLEZ LOPO, Enrique MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (eds.): *El mar en los siglos modernos II*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, pp. 187-208.

GIACOMO, Mario (2013), «El consensus populi y la teoría de la representación en *De potestate regia et papali* de Juan de París», *Apuntes filosóficos*, 22, 43, pp. 99-131.

GIL PUJOL, Xavier (2004), «Republican Politics in Early Modern Spain», en Quentin SKINNER y Martin Van GELDEREN (eds.), *Republicanism. A Shared European Heritage*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 263-288.

GIL PUJOL, Xavier (2006), *Tiempo de política. Perspectivas historiográficas sobre la Europa moderna*, Barcelona, Universidad de Barcelona.

GIL PUJOL, Xavier (2008), «Concepto y práctica de república en la España moderna. Las tradiciones castellana y catalano-aragonesa», *Estudis*, 34, pp. 111-148.

GIL PUJOL, Xavier (2009a), «The Good Law of a Vassal: Fidelity, Obedience, and Obligation in Habsburg Spain», *Revista internacional de estudios vascos*, 5, pp. 83-106.

GIL PUJOL, Xavier (2009b), «Sobre la noción actual de hecho histórico: entre contingencia y construcción», en *Revista de Occidente*, 332, p. 64-86.

GIL PUJOL, Xavier (2012a), «Pensamiento político español y europeo en la Edad Moderna. Reflexiones sobre su estudio en una época post-whig», en María José PÉREZ, y Laureano RUBIO (eds.), *Campo y campesinos en la España moderna: culturas políticas en el mundo hispano*, vol. 1, León, Universidad de León, pp. 297-320.

GIL PUJOL, Xavier (2012b), «Integrar un mundo. Dinámicas de agregación y de cohesión en la monarquía de España», en José Javier RUIZ IBÁÑEZ y Óscar MAZÍN (eds.), *Las indias occidentales. Procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas*, México, Colegio de México, pp. 69-108.

GIL PUJOL, Xavier (2014), «City, communication and concord in Renaissance Spain and Spanish America», en Paschalis M. KITROMILIDES, *Athenian Legacies. European debates on citizenship*, Florencia, Olschki, pp. 195-221.

GIL PUJOL, Xavier (2016), *La fábrica de la Monarquía. Trazo y conservación de la Monarquía de España de los Reyes Católicos y los Austrias*, Madrid, RAH.

GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Manuel (1948), «Hernán Cortés y su revolución comunera en la Nueva España», *Anuario de Estudios Americanos*, 5, pp. 1-144.

GÓNGORA, Mario (1962), *Los grupos de conquistadores en Tierra Firme (1509-1530). Fisonomía histórico-social de un tipo de conquista*, Santiago de Chile, Universidad de Chile.

GONZÁLEZ ARCE, José Damián (ed.) (2000), *Ordenanzas de la Ciudad de Murcia (1536)*. Murcia, Universidad de Murcia.

GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín (1980), «La fórmula ‘obedézcase, pero no se cumpla’ en el derecho castellano de la baja edad media», *Anuario de historia del derecho español*, 50, pp. 469-487.

GONZÁLEZ DIOS, Estíbaliz (2004), «Las comunidades de vecinos en la jurisdicción de San Sebastián. De su organización en la época moderna a su persistencia en la contemporánea. El caso de la comunidad de Zubietta», *Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián*, 38, pp. 673-691.

GÓMEZ PÉREZ, Carmen (1984), *Pedro de Heredia y Cartagena de Indias*, Sevilla, CSIC.

GREENBLATT, Stephen (1991), *Marvelous Possessions. The Wonders of the New World*, Chicago, The University of Chicago Press.

GUARDA, Gabriel (1972), «Tres reflexiones en torno a la fundación de la ciudad indiana», *Revista de Indias*, vol. XXXII, 127-130, pp. 89-106.

GUILLÉN BERRENDERO, José Antonio (2015), «Las historias de ciudades y los agentes del honor y la distinción en la Castilla del seiscientos. Una realidad sistémica», en Juan HERNÁNDEZ FRANCO, José Antonio GUILLÉN BERRENDERO, J. A. y Santiago MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (eds.), *Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna*, Madrid, Doce Calles, pp. 227-254.

GÜRKAN, Emrah Safah (2015), «Mediating Boundaries: Mediterranean Go-Betweens and Cross-Confessional Diplomacy in Constantinople, 1560-1600», *Journal of Early Modern History*, 19, pp. 107-28.

GUTIÉRREZ NIETO, Juan Ignacio (1977), «Semántica del término ‘comunidad’ antes de 1520: las asociaciones juramentadas de defensa», *Hispania*, 37, pp. 319-367.

GRANT, Daragh (2015), «The Treaty of Hartford (1638): Reconsidering Jurisdiction in Southern New England», *The William and Mary Quarterly*, 3rd series, 72, 3, pp. 461-498.

GRAUBART, Karen (2015), «Learning from the Qadi: The Jurisdiction of Local Rule in the Early Colonial Andes», *Hispanic American Historical Review*, 95, 2, pp. 195-228.

GRAUBART, Karen (2018a), «Ynuvaciones malas e rreprobadas. Seeking Justice in Early Colonial Pueblos de Indios», en Brian P. OWENSBY y Richard J. ROSS (eds.), *Justice in a New World. Negotiating Legal Intelligibility in British, Iberian, and Indigenous America*. New York, NYU Press, pp. 151-180.

GRAUBART, Karen (2018b), «Containing Law within the Walls. The Protection of Customary Law in Santiago del Cercado, Peru», en Lauren BENTON, Adan CLULOW y Bain ATTWOOD, *Protection and Empire. A Global History*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 29-46.

HAN, Byung Chul (2016), *Sobre el poder*, Barcelona, Herder.

HANKE, Lewis (1988), *La lucha por la justicia en la conquista de América*, Madrid, Istmo.

HARDOY, Jorge (1983), «Urban cartography in Latin America during the colonial period», *Latin American research review*, 18, 3, pp. 127-134.

HARRIS, A. Katie (2007), *From Muslim to Christian Granada: Inventing a City's past in Early Modern Spain*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

HÄRTER, Karl (1994), «Disciplinamento sociale e ordinanze di polizie nella prima età moderna» en Paolo PRODI (ed.): *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*. Bolonia, Il Mulino, pp. 635-658.

HEADLEY, John M. (1995), «Campanella, America, and World Evangelization», en Karen KUPPERMAN (ed.): *America in European Consciousness, 1493-1750*, Chapell Hill, University of North Carolina Press, pp. 243-271.

HELMS, Mary (1979), *Ancient Panama: chiefs in search of power*. Austin, University of Texas Press.

HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro *A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808)*, Madrid, Siglo XXI, 1995.

HERRERO DE JÁUREGUI, Miguel (2008), «La recepción de la *Política* de Aristóteles en la España del Renacimiento», en Francisco ARANDA y Jose DAMIAO (eds.), *De re publica Hispaniae: una vindicación de la cultura política en los reinos hispánicos en la primera modernidad*, Madrid, Silex, pp. 211-226.

HERRERA ÁNGEL, Marta (2014), *Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos, siglo XVIII*. Bogotá, Universidad de los Andes.

HERRERO SÁNCHEZ, Manuel (ed.) (2017), *Repúblicas y republicanismo en la Europa Moderna (siglos XVI-XVIII)*, Madrid, FCE.

HERRERO SÁNCHEZ, Manuel (2018), *Urban republicanism and political representation in the Spanish Monarchy*, en Joaquim ALBAREDA y Manuel HERRERO (eds.), *Political representation in the ancien régime*, Nueva York, Routledge.

HERRERO SÁNCHEZ, Manuel (en prensa), «Spanish theories of Empire: a Catholic and Polycentric Monarchy» en Jörg Alejandro TELLKAMP (ed.), *A Companion to Early Modern Spanish Imperial Political and Social Thought*. Leiden, Brill.

HERREROS CLERET DE LANGAVANT, Benita y DÍAZ CEBALLOS, Jorge (2013), «Interculturalidad y dinámicas comerciales: interacciones entre indígenas y españoles en la América colonial hispana», *Mundo Agrario*, 14, 27.

HERZOG, Tamar (1995), «Sobre la cultura jurídica en la América colonial (siglos XVI-XVIII)», *Anuario de historia del derecho español*, 65, pp. 903-911

HERZOG, Tamar (2001), «La política espacial y las tácticas de conquista: las «Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias» y su legado (siglos XVI-XVII)», en José Francisco ROMÁN GUTIÉRREZ, Enrique RUIZ MARTÍN y Jaime GONZÁLEZ

RODRÍGUEZ (eds.): *Felipe II y el oficio de rey: la fragua de un imperio*, Madrid, Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, pp. 293-303.

HERZOG, Tamar (2002), «The Meaning of Territory: Colonial Standards and Modern Questions in Ecuador» en, Luis RONIGER y Carlos Horacio WAISMAN (eds.): *Globality and Multiple Modernities: Comparative North American and Latin American Perspectives*, Brighton: Sussex Academic Press, pp. 162-182

HERZOG, Tamar (2006) *Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna*, Madrid, Alianza.

HERZOG, Tamar (2007), «Terres et déserts, société et sauvagerie. De la communauté en Amérique et en Castille à l'époque moderne», *Annales HSS*, 3, pp. 507-538.

HERZOG, Tamar (2010), «Ciudad y ciudadanía en el mundo hispánico y atlántico», *Anuario IEHS*, 25, pp. 167-177.

HERZOG, Tamar (2012), «Can You Tell a Spaniard When You See One? 'Us' and 'Them' in the Early Modern Iberian Atlantic» en Pedro CARDIM, José Javier RUIZ IBÁÑEZ, Gaetano SABATINI y Tamar HERZOG, *Polycentric Monarchies. How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?* Brighton, Sussex Academic Press, pp. 147-161.

HERZOG, Tamar (2015), *Frontiers of Possession. Spain and Portugal in Europe and the Americas*, Cambridge, Harvard University Press.

HESPANHA, Antonio Manuel (1989), *Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid, Taurus.

HESPANHA, Antonio Manuel (1993), *La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad moderna*, Madrid, Centro de estudios constitucionales.

HESPANHA, Antonio Manuel (1996), «Una nueva historia política e institucional», *Revista mexicana de ciencias política y sociales*, 41, 166, pp. 9-45.

HESPANHA, Antonio Manuel (2006), «A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime», *Tempo*, 21, pp. 121-143.

HESPANHA, Antonio Manuel (2006), «Las estructuras del imaginario de la movilidad social en la sociedad del Antiguo Régimen», en Francisco CHACÓN, F. y Nuno G. MONTEIRO (eds.), *Poder y movilidad social. Cortesanos, religiosos y oligarquías en la Península Ibérica (siglos XV-XIX)*, Madrid, CSIC, pp. 21-41.

HOLESTEIN, Andre (2009), «Introduction: Empowering Interactions : Looking at Statebuilding from Below», en Wil BLOCKMANS, André HOLENSTEIN y Jan MATHIEU (eds.), *Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300-1900*, Surrey, Ashgate, 2009, pp. 1-31.

IBÁÑEZ, Alberto (2016), *La conjura silenciada contra España. La manipulación franco-anglosajona de nuestra historia y sus quintacolumnistas ingenuos*, Madrid, My2, 2016.

INURRITIGUI, José María (1995), «Antonio de Herrera y Tordesilla: historia y discurso político en Monarquía Hispánica», en Chiara CONTINISIO y Cesare MOZZARELLI, *Reppublica e virtù. Pensiero politico e Monarchia Cattolica fra XVI e XVII secolo*, Roma, Bulzoni, pp. 121-150.

ISENMANN, Eberhard (1997), «Norms and values in the European city, 1300-1800», en Peter BLICKLE (ed.), *Resistance, Representation, and Community*. Oxford, Oxford University Press, pp. 185-215.

ISENMANN, Eberhard (2010), «The notion of the Common Good, the concept of politics, and practical policies in late medieval and early modern German cities», en Elodie LECUPPRE-DESJARDIN y Anne-Laure VAN BRUAENE (eds.), *De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.)*, Turnhout, Brepols, pp. 107-148.

IZQUIERDO MARTÍN, Jesús (2001), *El rostro de la comunidad. La identidad del campesinado en la Castilla del Antiguo Régimen*, Madrid, Comunidad de Madrid.

JURADO, Carolina (2014), ««Descendientes de los primeros». Las probanzas de méritos y servicios y la genealogía cacical. Audiencia de Charcas, 1574-1719», *Revista de Indias*, vol. LXXIV, 261, pp. 387-422.

JURKEVICS, Anna (2015), «Hannah Arendt reads Carl Schmitt's *The Nomos of the Earth*. A dialogue on law and geopolitics from the margins», *European Journal of Political Theory*, 0, 0, pp. 1-22.

KAGAN, Richard (1997), «Un mundo sin murallas: la ciudad en la América hispana colonial» en José Ignacio FORTEA PÉREZ (ed.), *Imágenes de la diversidad: el mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII)*, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 51-86.

KAGAN, Richard (1998) «*Urbs and Civitas* in Sixteenth- and Seventeenth-Century Spain» en David BUISSERET, *Envisioning the City: Six Studies in Urban Cartography*, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 75-108.

KAGAN, Richard (2000), *Urban images of the Hispanic World, 1493-1793*, Yale, Yale University Press.

KAGAN, Richard (2018), «¿Por qué la Leyenda Negra? ¿Por qué ahora?», *Cuadernos de Historia Moderna*, 43, 1, pp. 279-283.

KANTOROWICZ, Ernst H (1985), *Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval*. Madrid, Alianza.

KINNSBRUNNER, Jan (2005), *The Colonial Spanish-American City: Urban Life in the Age of Atlantic Capitalism*. Austin, University of Texas Press.

KIRSHNER, Julius (1973), «*Civitas Sibi Faciat Civem*. Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen», *Speculum*, 48, 4, pp. 694-713.

- KLEIN, Sabine (2011), «They have invaded the whole river». Boundary negotiations in Anglo-Dutch Colonial Discourse», *Early american studies: an interdisciplinary journal*. Vol. 9, 2, pp. 324-347.
- KONETZKE, Richard (1951), «La formación de la nobleza en Indias», *Estudios americanos*, III, pp. 329-357.
- KONETZKE, Richard (1971), *América Latina II. La época colonial*, Madrid, Siglo XXI.
- KRAUT, Richard (2002), *Aristotle. Political Philosophy*, Oxford, Oxford University Press.
- KRÜGER, Hildegard (1981), «Función y estructura social del cabildo colonial de Asunción», *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, 18, pp. 31-44.
- KUPPERMAN, Karen (ed.) (1995), *America in European Consciousness, 1493-1750*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- KUPPERMAN, Karen (2000), *Indians and English. Facing off in Early America*, Ithaca, Cornell University Press.
- LADERO-QUESADA, Manuel (1992), «Estructuras y valores sociales en la España del descubrimiento», en *Congreso de historia del descubrimiento. Actas*, t. III, Madrid, pp. 213-261.
- LECHNER, Juan (1981), «El concepto de ‘policía’ y su presencia en la obra de los primeros historiadores de Indias», *Revista de Indias*, XLI, 165-166, pp. 395-409.
- LEÓN-PORTILLA, Miguel (2010), «El indio vivo visto por los frailes en el siglo XVI», *Estudios de cultura Nahuatl*, 41, pp. 281-295.
- LIRA MONTT, Luis (1998), «Los beneméritos de Indias y la gestación de la nobleza en América», *Hidalguía*, 268-269, pp. 497-516.
- LIRA MONTT, Luis (2000), «El estatuto de limpieza de sangre en Indias», *Hidalguía*, 278, pp. 177-201.
- LOHMANN VILLENA, Guillermo (1972), «Los regidores del cabildo de Lima desde 1535 hasta 1635 (estudio de un grupo de dominio)», *Revista de Indias*, 127-130, pp. 161-215.
- LOHMANN VILLENA, Guillermo (1977), *Las ideas jurídico-políticas en la rebelión de Gonzalo Pizarro. La tramoya doctrinal del levantamiento contra las Leyes Nuevas en el Perú*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1977.
- LÓPEZ ARANDIA, María Amparo (2011), «Pacificación y fundación de ciudades en la frontera: proyectos repobladores en Castilla (ss. XV-XVI)», *Espacio, tiempo y forma. Serie IV, historia moderna*, 24, pp. 33-50.
- LORANDI, Ana María (2002), *Ni ley, ni rey, ni hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el virreinato del Perú. Siglos XVI y XVII*, Barcelona, Gedisa.
- LOUSSE, Emile (1952), *La société d'Ancien Regime. Organisation et représentation corporatives*, Lovaina, Universitas.

LUCENA GIRALDO, Manuel (2006), *A los cuatro vientos. Las ciudades de la América hispánica*. Madrid, Marcial Pons, 2006.

LUCENA GIRALDO, MANUEL (2014), «The Creole Metropolis», en Harald BRAUN y Jesús PÉREZ-MARGALLÓN, *The Transatlantic Hispanic Baroque. Complex Identities in the Atlantic World*, Londres, Ashgate, pp. 171-186.

MACCORMACK, Susan (2009), *On the Wings of Time: Rome, the Incas, Spain and Perú*, Princeton, Princeton University Press.

MACKAY, Ruth (2007), *Los límites de la autoridad real. Resistencia y obediencia en la Castilla del siglo XVII*, Salamanca, Junta de Castilla y León.

MACLEOD, Murdo (1998), «Self-Promotion: The *Relaciones de Méritos y Servicios* and Their Historical and Political Interpretation», *Colonial Latin American Historical Review*, 7, 1, pp. 25-42.

MACMILLAN, Ken (2009), *Sovereignty and Possession in the English New World. The Legal Foundations of Empire, 1576-1640*, Cambridge, Cambridge University Press.

MAIER, Charles (2016), *Once within Borders: Territories of Power, Wealth, and Belonging since 1500*. Cambridge, Harvard University Press, 2016.

MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás, FORTEA PÉREZ, José Ignacio y GELABERT GONZÁLEZ, Juan E. (eds.) (2002), *Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la edad moderna*, Santander, Universidad de Cantabria.

MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás (2005), «La economía del castigo y el perdón en tiempos de Cervantes», *Revista de historia económica*, n° extra 1, pp. 69-100.

MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás (2010), «Formas de disciplinamiento social, perspectivas históricas», *Revista de historia social y de las mentalidades*, 14, 2, pp. 263-295.

MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás (2012), «El honor mediterráneo desde la España Moderna: ¿un traje nuevo del emperador?» en *Cuadernos de historia de España*, LXXXV-LXXXVI, pp. 435-458.

MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás (2014), «Disciplinamiento social, escenografías punitivas y cultura plebeya en el Antiguo Régimen», en Verónica UNDURRAGA y Rafael GAUNE (eds.), *Formas de control y disciplinamiento. Chile, América y Europa, siglos XVI-XIX*, Santiago de Chile, Uqbar, pp. 169-193.

MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás (2014), «Frontera(s) e historia(s) en los mundos ibéricos», *Manuscripts* 32, pp. 19-32.

MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás (2015), «Ciudad, policía y desobediencia cívica en la España del antiguo régimen: experiencias históricas contrastadas», en Tomás MANTECÓN MOVELLÁN, y Ofelia REY CASTELAO, *Identidades urbanas en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII)*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 237-267.

MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás y TORRES ARCE, Marina (2018), «Dossier. Fragar policia: gobernanza y culturas urbanas en los imperios ibéricos», *Investigaciones históricas*, 38, pp. 1-10.

MARAVALL, José Antonio (1983), *Estudios de historia del pensamiento español. Serie I, Edad Media*. Madrid, Cultura Hispánica.

MARCOCCI, Giuseppe (2011), *L'invenzione di un impero. Politica e cultura nel mondo portoghese (1450-1600)*, Roma, Carocci.

MARCOCCI, Giuseppe (2016) «Too Much to Rule: States and Empires across the Early Modern World», *Journal of Early Modern History*, 20, 6, pp. 511- 525.

MARCOS MARTÍN, Alberto (1991) «¿Qué es ciudad en la edad moderna? Reflexión histórica sobre el fenómeno de lo urbano», en AA.VV., *Tolède et L'expansion urbaine en Espagne (1450-1650)*, Madrid, Rencontres de la Casa de Velázquez, pp. 273-288.

MARCOS MARTÍN, Alberto (1997), «Percepciones materiales e imaginario urbano en la España moderna», en José Ignacio FORTEA PÉREZ (ed.), *Imágenes de la diversidad: el mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII)*, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 15-50.

MARTÍN, Juan y ROVIRA, Beatriz (2008), «Arqueología histórica de Panamá. La experiencia en las ruinas de Panamá Viejo», *Vestigios, revista Latino-americana de arqueología histórica*, 2, 1, pp. 9-33.

MARTÍNEZ, Maria Elena (2008), *Genealogical Fictions. Limpieza de Sangre, Religion, and Gender in Colonial Mexico*, Stanford, Stanford University Press.

MASON, Peter (1990), *Deconstructing America. Representations of the Other*, Londres, Routledge.

MATILLA TASCÓN, Antonio (1945), *Los viajes de Julián Gutiérrez al Golfo de Urabá*, Sevilla, EEHA.

MAZÍN, Óscar (2011), «La nobleza ibérica y su impacto en la América española: tendencias historiográficas recientes», en Nikolaus BÖTCHER, Bernd HAUSBERGER y Max-Sebastián HERING TORRES (eds.), *El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico*, México, el Colegio de México, pp. 63-76.

MAZÍN, Óscar (2013), «Leer la ausencia: las ciudades de Indias y las Cortes de Castilla, elementos para su estudio (siglos XVI y XVII)», *Historias*, 84, pp. 99-110.

MCNEILL, William H. (1995), *Keeping together in time. Dance and drill in the human history*. Harvard, Harvard University Press.

KELLOGG, Susan y RUIZ MEDRANO, Enrique (eds.) (2010), *Negotiation within domination: New Spain's Indian pueblos confront the Spanish State*, Boulder, University of Colorado.

MENA GARCÍA, Carmen (1983), «Una fuente para la historia de la encomienda en Panamá: la 'copia e relación del repartimiento viejo'», *Historiografía y bibliografía americanista*, XXVII, pp. 3-17.

MENA GARCÍA, Carmen (1984), *La sociedad de Panamá en el siglo XVI*, Sevilla, Diputación de Sevilla.

MENA GARCÍA, Carmen (1989), «La autonomía legislativa en Indias: las Leyes de Burgos y su aplicación en Castilla del Oro por Pedrarias Dávila», *Revista de Indias*, XLIX, 186, pp. 283-355.

MENA GARCÍA, Carmen (1992), «Individualismo y radicalización en la conquista: la revuelta de los contreras a mediados del siglo XVI» en AA.VV., *Congreso de historia del descubrimiento*, t. III, pp. 421- 447.

MENA GARCÍA, Carmen (1992), *Pedrarias Dávila o «la ira de Dios»: una historia olvidada*, Sevilla, Universidad de Sevilla.

MENA GARCÍA, Carmen (1992), *La ciudad en un cruce de caminos (Panamá y sus orígenes urbanos)*, Sevilla, EEAH.

MENA GARCÍA, Carmen (1997), *La ciudad de Panamá en el siglo XVIII. Trazado urbano y técnica constructiva*, Panamá, Editorial Portobelo.

MENA GARCÍA, Carmen (1998), *Sevilla y las flotas de Indias: la Gran Armada de Castilla del Oro (1513-1514)*, Sevilla, Universidad de Sevilla.

MENA GARCÍA, Carmen (2011), *El oro del Darién. Entradas y cabalgadas en la conquista de Tierra Firme (1509-1525)*, Madrid, CSIC.

MENA GARCÍA, Carmen (2012), «Preparativos del viaje de Diego de Nicuesa para poblar la Tierra Firme. Sevilla y los mercaderes del comercio atlántico (1509)», *Revista de Indias*, LXXII, 256, pp. 617-650.

MERLUZZI, Manfredi (2003), «L'impero visto dagli insorti: la rivolta contro le Nuevo Leggi in Perù», en Francesca CANTÙ y Maria Antonietta VISCEGLIA (ed.), *L'Italia di Carlo V, guerra religione e politica nel primo Cinquecento*, Viella, Roma, pp. 233-254.

MERLUZZI, Manfredi (2008), *La pacificazione del regno. Negoziazione e creazione del consenso in Perù (1533-1581)*, Roma, Viella.

MERLUZZI, Manfredi (2012), «Los Andes: la constitución del Perú virreinal», en José Javier RUIZ IBÁÑEZ y Óscar MAZÍN (eds.), *Las indias occidentales. Procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas*, México, Colegio de México, pp. 255-279.

MERRIM, Stephanie (2010), *The Spectacular city, Mexico, and Colonial Hispanic Literary Culture*, Austin, University of Texas Press.

METCALF, Alida (2005), *Go-Betweens and the Colonization of Brazil, 1500-1600*, Austin, University of Texas Press.

MICHAUD-QUANTIN, Pierre (1970), *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le moyen-âge latin*, París, Librairie Philosophique J. Vrin.

- MIRA CABALLOS, Esteban (2000), *Nicolás de Ovando y los orígenes del sistema colonial español, 1502-1509*, Santo Domingo, Patronato de la ciudad colonial de Santo Domingo.
- MIRES, Fernando (1989), *En nombre de la cruz. Discusiones teológicas y políticas frente al holocausto de los indios*, San José, Editorial Dei.
- MONNET, Pierre (2010), «Bien Commun et bon gouvernement: le traité politique de Johann von Soest sur la manière de bien gouverner une ville (*nye men wol eyn statt regyrn sol*, 1495)» en Elodie LECUPPRE-DESJARDIN y Anne-Laure VAN BRUAENE (eds.), *De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.)*, Turnhout, Brepols, pp. 89-106.
- MORALES PADRÓN, Francisco (1955), «Descubrimiento y toma de posesión», en *Anuario de estudios americanos*, 12, pp. 321-380.
- MORSE, Richard (1981), *El proceso de urbanización en las Américas desde sus orígenes hasta nuestros días*, México, Siap-Planteos.
- MORSE, R.: «The urban development of colonial Spanish America» en BETHELL, L. (ed.): *The Cambridge History of Latin America*, II. Cambridge, Cambridge University Press, 1984, pp. 67-104
- MULDOON, James y FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe (ed.) (2008), *Internal colonization in Medieval Europe*, Surrey, Ashgate, 2008
- MUSSET, Alain (2011), *Las ciudades nómadas del Nuevo Mundo*, México, FCE.
- NADER, Helen (1990), *Liberty in Absolutist Spain. The Habsburg Sale of Towns, 1516-1700*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- NADER, Helen (1996), «The more the communes, the greater the king? Hidden Communes in Absolutist Theory» en Peter BLICKLE (ed.): *Theorien kommunaler Ordnung in Europa*, Munich, Oldenbourg, pp. 215-223
- NAVARRO SEGURA, María Isabel (2006), «Las fundaciones de ciudades y el pensamiento urbanístico hispano en la era del descubrimiento», *Scripta Nova*, X, 218, 43.
- NEEP, Daniel (2016), «State-space beyond territory. Wormholes, Gravitational Fields, and Entanglement», *Journal of Historical Sociology*.
- NESVIG, Martin (2018), *Promiscuous Power. An Unorthodox History of New Spain*, Austin, University of Texas Press.
- NIETO SORIA, José Manuel y VILLARROEL GONZÁLEZ, Óscar (coords.) (2013), *Pacto y consenso en la cultura política peninsular. Siglos XI al XV*, Madrid, Sílex.
- OESTREICH, Gerhard (1982), *Neostoicism and the early modern state*, Cambridge, Cambridge University Press.
- OSORIO, Alejandra B. (2018), «Of national boundaries and Imperial Geographies. A New Radical History of the Spanish Habsburg Empire», *Radical History Review*, 1, 30, pp. 100-130.

OTS CAPDEQUÍ, José María (1975), *El estado español en las Indias*, México, FCE.

OWENS, Jack B. (2005), *By my absolute Royal Authority. Justice and the Castilian Commonwealth at the Beginning of the First Global Age*, Rochester, University of Rochester Press.

PAGDEN, Anthony (1987), «Identity Formation in Spanish America», en Anthony PAGDEN, y Nicholas CANNY (eds.): *Colonial Identity in the Spanish World, 1500-1800*, Princeton, Princeton University Press, pp. 51-94.

PAGDEN, Anthony (1988), *La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes de la etnología comparativa*, Madrid, Alianza.

PAGDEN, Anthony (1990), *Spanish Imperialism and the Political Imagination*. New Haven, Yale University Press.

PAGDEN, Anthony (1990), «Dispossessing the barbarian: the language of Spanish Thomism and the debate over the property rights of the American Indians», en Anthony PAGDEN. (ed.), *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 79-98

PAGDEN, Anthony (ed.) (1990), *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press.

PAGDEN, Anthony (1993), *European Encounters with the New World. From Renaissance to Romanticism*, New Haven, Yale University Press.

PAGDEN, Anthony (1998), *Lords of All the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain, and France c. 1500-1800*, New Haven, Yale University Press.

PARDOS, Julio (1985), «Constitución patricia' y 'comunidad' en Burgos a finales del siglo XV (Reflexiones en torno a un documento de 1475)» en Emilio SÁEZ SÁNCHEZ (ed.), *La ciudad hispánica entre los siglos XIII al XVI*, t. I, Madrid, Universidad Complutense, pp. 545-580.

PARRA, Luis (2002), «*Propositio super altercatione praeminentiae sedium inter oratores regum castellae et angliae in Concilio Basilensi* o los argumentos de Alfonso de Cartagena por la preeminencia de España», *Cuadernos de filología clásica. Estudios latinos*, 22, 2, pp. 463-478.

PÉREZ, Guillermo (2011), «The idea of 'naturalty' in the Hispanic monarchy and the formation of Spanish identity between the sixteenth and the eighteenth centuries: an approach», en Guido ABBATISTA (ed.), *Encountering Otherness. Diversities and Transcultural Experiences in Early Modern European Culture*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, pp. 67-95.

PERALTA, Manuel (1883), *Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI su historia y sus límites según los documentos del AGI, Simancas, etc....* Madrid.

PÉREZ-PRENDES, José Manuel (1989), *La Monarquía Indiana y el Estado de Derecho*, Valencia, Asociación Francisco López de Gómara.

- PÉREZ-PRENDES, José Manuel (1998), «La ‘Recopilación’ de las leyes de los reinos castellano-leoneses. Esbozos para un comentario a su libro primero» en AA.VV. *Felipe II y su época. Actas del Simposium (II)*. Madrid, Estudios superiores del Escorial, pp. 127-215.
- PHELAN, John Leddy (1960), «Authority and flexibility in the Spanish Imperial Bureucracy», *Administrative Science Quarterly*, 5, 1, pp. 47-65.
- PHILLIPS, William y PHILLIPS, Carla (1992), *The Worlds of Christopher Columbus*, Cambridge, Cambridge University Press.
- PIETSCHMANN, Horst (1989), *El Estado y su evolución al principio de la colonización española de América*, México, FCE.
- PIETSCHMANN, Horst (1992), «La evangelización y la política de poblamiento y urbanización en Hispanoamérica», en José ESCUDERO IMBERT (coord.): *Historia de la evangelización de América. Trayectoria, identidad y esperanza de un continente*. Ciudad del Vaticano, Librería Editrice Vaticana, pp. 489-510.
- PIETSCHMANN, Horst (1994), «Los principios rectores de Organización Estatal en las Indias», en Antonio ANNINO, Luis CASTRO LEIVA y François-Xavier GUERRA (eds.), *De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica*, Zaragoza, Ibercaja, pp. 75-103.
- PIKE, Ruth (2007), «The Cimarrons of Sixteenth Century Panamá», *The Americas*, 64, 2, pp. 243-266.
- PITT-RIVERS, Julian (1993), «El lugar de la gracia en la antropología», en Julian PITT-RIVERS y John G. PERISTIANY (eds.), *Honor y gracia*, Madrid, Alianza, pp. 280-321.
- POCOCK, John (2008), *El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica*, Madrid, Tecnos.
- POLSEN, Alexander (2017), «From Monarchy to Empire. Ideologies, Institutions, and the Limits of Spanish Imperial Sovereignty, 1492-1700», en Ignacio GALLUP-DÍAZ (ed.), *The World of Colonial America: an Atlantic Handbook*, NY, Routledge, pp. 17-38.
- PRODI, Paolo (1992), *Il sacramento del potere. Il giuramento político nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bolonia, Il Mulino.
- PUNTE LUNA, Jose (2014), «The Many Tongues of the King: Indigenous Language Interpreters and the Making of the Spanish Empire», *Colonial Latin American Review*, 23, 2, pp. 143-70.
- QUESADA, Santiago (1992), *La idea de ciudad en la cultura hispana de la Edad Moderna*, Barcelona, Universidad de Barcelona.
- QUIJANO VELASCO, Francisco (2017), *Las repúblicas de la Monarquía. Pensamiento constitucionalista y republicano en Nueva España, 1550-1610*, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

RADEFF, Anne (2007), «Centres et périphéries ou centralités et décentralités?», en Angelo TORRE (ed.), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nella società di Antico Regime*, Milán, FrancoAngeli, pp. 21-32.

RAMOS, Demetrio (1961), «Alonso de Ojeda en el gran proyecto de 1501 y en el tránsito del sistema del descubrimiento y rescate al poblamiento», *Boletín Americanista*, 7-9, pp. 33-87.

RAMOS, Demetrio (1972), «La doble fundación de ciudades y las huestes», *Revista de Indias*, 127-130, pp. 107-138.

RAMOS, Demetrio (1980), «Castilla del Oro: el primer nombre dado oficialmente al continente americano», *Anuario de estudios americanos*, 37, pp. 45-67.

RENAULT, Rachel (2017), «Refuser l'impôt, définir le bien commun. Antifiscalisme et pratiques politiques ordinaires en Allemagne au XVIIIe siècle», *Politix*, 3, 119, pp. 79-100.

REID, Joshua L. (2019) «AHR Forum. Indigenous Agency and Colonial Law», *American Historical Review*, 124, 1.

REINHARD, Wolfgang (2008), «Qu'est-ce que la culture politique européenne? Fondement d'une anthropologie historique politique», *Trivium* [En ligne], 2.

RESTALL, Matthew (2004), *Seven Myths of the Spanish Conquest*, Oxford, Oxford University Press.

RESTALL, Matthew (2018), *When Montezuma met Cortés. The True Story of the Meeting that Changed the World*, Nueva York, Harper Collins.

REYNOLDS, Susan (1997), *Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300*, Oxford, Oxford University Press.

RIESENBERGER, Peter (1992), *Citizenship in the Western Tradition. Plato to Rousseau*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.

ROCA BAREA, Elvira (2016), *Imperiofobia y Leyenda Negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español*, Madrid, Siruela.

RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente (1993), «Villablanca, una puebla de planta regular», *Atrio*, 6, pp. 27-42.

RODRÍGUEZ GIL, Magdalena (2002), *La incorporación de reinos: notas y textos doctrinales de derecho común*, Universidad de Extremadura, Badajoz.

ROMERO, José Luis (2010), *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*, Buenos Aires, Siglo XXI.

ROMOLI, Kathleen (1987), *Los de la lengua de Cueva: los grupos indígenas del istmo oriental en la época de la conquista española*, Bogotá, Tercer Mundo.

ROTHMAN, Natalie (2010), «Genealogies of Mediation: 'Culture broker' and Imperial Governmentality», en Edward MURPHY y David William COHEN (eds.), *Anthrobistory*:

Unsettling Knowledge, Questioning Discipline, Ann Arbor: University of Michigan Press, pp. 67-79.

ROTHMAN, Natalie (2012), *Brokering Empire. Trans-Imperial Subjects between Venice and Istanbul*, Ithaca, Cornell University Press.

RUBIES, Joan-Pau (1996), «La idea de gobierno mixto y su significado en la crisis de la Monarquía Hispánica», *Historia Social*, 24, pp. 57-81.

RUCQUOI, Adeline (1985), «Valladolid, del Concejo a la Comunidad» en Emilio SÁEZ SÁNCHEZ (ed.), *La ciudad hispánica entre los siglos XIII al XVI*, t. I, Madrid, Universidad Complutense, pp. 745-772.

RUCQUOI, Adeline (1988), «Des villes nobles pour le Roi» en Adeline RUCQUOI (coord.), *Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media*, Madrid, Ámbito, pp. 195-214.

RUCQUOI, Adeline (1997), «Etre noble en Espagne aux XIV^e-XVI^e siècles», en Otto OEXLE y Werner PARAVICINI (eds.), *Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa*. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 273-298.

RUCQUOI, Adeline (2006), *Rex, Sapientia, nobilitas. Estudios sobre la península ibérica medieval*, Granada, Universidad de Granada.

RUIZ GUADALAJARA, Juan Carlos (2009), «...a su costa e minsión...» El papel de los particulares en la conquista, pacificación y conservación de la Nueva España» en José Javier RUIZ IBÁÑEZ (ed.), *Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las Monarquías Ibéricas*, Madrid, FCE, pp. 104-138.

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (1995), *Las dos caras de Jano: monarquía, ciudad e individuo, Murcia 1588-1648*, Murcia, Universidad de Murcia.

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (1999), *Felipe II y Cambrai: el consenso del pueblo. La soberanía entre la práctica y la teoría política (1595-1677)*, Madrid, Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V.

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier y PENZI, Marco (2004), «*Ius populi supra legem*. Concepciones y usos políticos sobre del *pueblo* en la liga radical católica francesa (1580-1610)», *Historia contemporánea*, 28, pp. 111-145.

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier y SABATINI, Gaetano (2009), «Monarchy as Conquest: Violence, Social Opportunity, and Political Stability in the Establishment of the Hispanic Monarchy», *The Journal of Modern History*, 81, 3, pp. 501-536.

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (2009), «Repúblicas en armas: huestes urbanas y ritual político en los siglos XVI y XVII», *Studia historica. Historia moderna*, 31, pp. 95-125.

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (ed.) (2009), *Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las Monarquías Ibéricas*, Madrid, FCE.

- RUIZ IBÁÑEZ, José Javier y MAZÍN, Óscar (2012), «Estudio introductorio», en José Javier RUIZ IBÁÑEZ y Óscar MAZÍN (eds.), *Las indias occidentales. Procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas*, México, Colegio de México, 2012, pp. 7-40
- RUIZ IBÁÑEZ, José Javier y MAZÍN, Óscar (eds.) (2012), *Las indias occidentales. Procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas*, México, Colegio de México.
- RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (2014), «Les acteurs de l'hégémonie hispanique, du monde à la péninsule Iberique», *Annales, histoire, sciences sociales*, 4, pp. 927-954.
- RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (2014), «De lo global a lo local», en María Magdalena CAMPILLO MÉNDEZ y José Javier RUIZ IBÁÑEZ (eds.), *Felipe II y Almazarrón: la construcción local de un Imperio Global. Sostener, gobernar y pensar la frontera*, Murcia, Universidad de Murcia, pp. 11-17.
- RYAN, Michael T (1981), «Assimilating New Worlds in the Sixteenth and Seventeenth Centuries», *Comparative Studies in Society and History*, 23, 4, 519-538.
- SALDARRIAGA, Gregorio (2011), «Alimentación, comunidad y poder en las fundaciones tempranas de Tierra Firme: claves para entender la mortandad de modorra en Santa María de la Antigua del Darién», en Paolo VIGNOLO y Virgilio BECERRA (eds.), *Tierra Firme. El Darién en el imaginario de los conquistadores*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, pp. 257-283.
- SALINERO, Gregorio (2017), *Hombres de mala corte. Desobediencias, procesos políticos y gobierno de Indias en la segunda mitad del siglo XVI*, Madrid, Crítica.
- Julio SÁNCHEZ GÓMEZ y José Manuel SANTOS Pérez (2010), *De urbe indiana. Ensayos sobre ciudades y urbanismo en Brasil y en la América hispana*, Salamanca, Universidad de Salamanca.
- SANCHIZ OCHOA, Pilar (1988), «La conquista como plataforma de ascenso social», en Francisco SOLANO (coord.), *Proceso histórico al conquistador*, Madrid, Alianza, pp. 81-94.
- SÁNZ CAMAÑES, Porfirio (2004), *Las ciudades en la América Hispana, siglo XV al XVIII*, Madrid, Sílex.
- SAUER, Carl (1992), *The Early Spanish Main*, Berkeley, University of California Press, 1992.
- SCHÄFER, Ernst (1935), *El Consejo Real y Supremo de Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria*, 2 tomos, Sevilla.
- SCHAFFSTEIN, Friedrich (1957), *La ciencia europea del derecho penal en la época del humanismo*, Madrid, Instituto de estudios políticos.
- SCHAUB, Jean Frédéric (2004), «Hacia una historiografía eurocolonial. América portuguesa y Monarquía Hispánica», en Feliciano BARRIOS (ed.), *El gobierno de un mundo: virreinos y audiencias en la América Hispánica*, Cuenca, Universidad de Castilla la Mancha, pp. 1053-1078.
- SCHAUB, Jean Frédéric (2005), «La notion d'état modern est-elle utile? Remarques sur les blocages de la démarche comparatiste en histoire», *Cahiers du Monde Russe*, 46/1-2, pp. 51-64.

SCHAUB, Jean Frédéric (2012), «La politisation en Europe comme expérience coloniale», en *Penser l'histoire de l'Amérique latine. Hommage à François-Xavier Guerra*, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 261-275.

SCHAUB, Jean-Frédéric (2018), «How to write the history of Europe?», *European Review*, 00, 0, pp. 1-31.

SCHIERA, Pierangelo (1987), «La concezione amministrativa dello Stato in Germania (1550-1750)», en FIRPO, Luigi (ed.): *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, vol. IV, *L'età moderna*, Turín, Editrice Torinese, pp. 363-442.

SCHMITT, Carl (2002), *El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del ius publicum europaeum*, Granada, Comares.

SCHWARTZ, Stuart (1969), «Cities of Empire: Mexico and Bahia in the Sixteenth Century», *Journal of Inter-American Studies*, XI, 4, pp. 616-637.

SCHWARTZ, Stuart (1978), «New World Nobility: Social Aspirations and Mobility in the Conquest and Colonization of Spanish America» en CHRISMAN, Miriam y GRÜNDLER, Otto (eds.), *Social groups and religious ideas in the Sixteenth Century*, Kalamazoo, Western Michigan University, pp. 23-37.

SCHWARTZ, Stuart (ed.) (1994), *Implicit Understandings. Observing, Reporting, and Reflecting on the Encounters Between Europeans and Other Peoples in the Early Modern Era*, Cambridge, Cambridge University Press.

SCRIBNER, Robert W. (1987), «Police and the State in Sixteenth-century Württemberg», en KOURI, Erkki y SCOTT, Tom (eds.), *Politics and Society in Reformation Europe. Essays for Sir George Elton on his Sixty-Fifth Birthday*, Londres, Macmillan Press.

SEED, Patricia (1992), «Taking Possession and Reading Texts, Establishing the Authority of Overseas Empires», *The William and Mary Quarterly*, 49, 2, pp. 183-209.

SEED, Patricia (1995), *Ceremonies of Possession in Europe's Conquest of the New World, 1492-1640*, Cambridge, Cambridge University Press.

SEED, Patricia (2001) *American Pentimento. The Invention of the Indians and the Pursuit of Riches*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

SKINNER, Quentin (1990), «Sir Thomas More's *Utopia* and the language of Renaissance Humanism», en Anthony PAGDEN (ed.), *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press.

SOLANO, Francisco (ed.) (1975), *Estudios sobre la ciudad iberoamericana*. Madrid, CSIC.

SOLANO, Francisco (1990), *Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios*. Madrid, CSIC.

SORIA MESA, Enrique (2000), *El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX)*, Córdoba, La Posada.

- SORIA MESA, Enrique (2004), «Genealogía y poder. Invención de la memoria y ascenso social en la España moderna», *Estudis*, 30, pp. 21-55.
- SORIA MESA, Enrique (2013), «Los estatutos municipales de limpieza de sangre en la Castilla moderna. Una revisión crítica», *Mediterránea. Ricerche Storiche*, 27, pp. 9-36.
- SPONHOLZ, Jesse y WAITE, Gary (eds.) (2014), *Exile and Religious Identity, 1500-1800*, Londres, Pickering & Chatto, 2014.
- STANNARD, David (1992), *The conquest of the New World. American Holocaust*, Oxford, Oxford University Press.
- STOLLBERG-RILINGER, Barbara (2008), «La communication symbolique à l'époque pré-moderne. Concepts, thèses, perspectives de recherche», *Trivium* [En ligne], 2.
- STOLLBERG-RILLINGER, Barbara (2012), «State and Political History in a Culturalist Perspective», en Antje FLÜCHTER y Susan RICHTER (eds.), *Structures on the Move. Technologies of Governance in Transcultural Encounter*, Heidelberg, Springer, pp. 43-58.
- STRANG, Cameron (2018), «Planters and Powerbrokers. George J. F. Clarke, Interracial Love, and Allegiance in the Revolutionary Circum-Caribbean», en Jorge CAÑIZARES-ESGUERRA (ed.), *Entangled Empires. The Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830*. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 142-158.
- TARDIEU, Jean Pierre (2009), *Cimarrones de Panamá: la forja de una identidad afroamericana en el siglo XVI*, Madrid, Iberoamericana Veuvert.
- TE BRAKE, Wayne (1998), *Shaping History. Ordinary People in European Politics, 1500-1700*, Berkeley, University of California Press.
- TEDOLDI, Leonida (2010), «República y ciudadanía en la edad moderna: Brescia en el estado veneciano», *IEHS* 25, pp. 151-165.
- TEJEIRA-DAVIS, Eduardo (1996), «Pedrarias Dávila and his cities in Panama: 1513-1522: New Facts on early Spanish settlements in America», *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, 33, pp. 27-61.
- TERRACINI, Lore (1992), «Lingua e potere nella conquista Spagnola», *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, pp. 221-229.
- THOMPSON, Irving A. A (1985), «Neo-noble Nobility: Concepts of hidalguía in Early Modern Castile», *European History Quarterly*, 15, pp. 379-406.
- THOMPSON, Irving A. A (1989), «Cortes y ciudades: tipología de los procuradores (extracción social, representatividad)», en AA.VV., *Las cortes de Castilla y León en la Edad Moderna*, Valladolid, Cortes de Castilla y León, pp. 193-248.
- THOMPSON, Irving A. A (1993), *Crown and Cortes: Government, Institution, and Representation in Early Modern Castile*, Londres, Ashgate.

THOMPSON, Irving A. A (2006), «¿Fiel a qué? El lenguaje político en los ayuntamientos en la Castilla del siglo XVII», *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée*, 2006, tome 118, 2, Fidelitas, p. 281-288.

THOMPSON, Irving A. A (2016), «From reinos to Monarquía: political association in late 16th century», *Tempus. Revista en historia general*, 4, pp. 91-110.

TIERNEY, Brian (1997), *The idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law, 1150-1625*, Cambridge, Cambridge University Press.

TODESCHINI, Giacomo (2010), «Participer au Bien Commun: la notion franciscaine d'appartenance à la *civitas*», en Elodie LECUPPRE-DESJARDIN y Anne-Laure VAN BRUAENE (eds.): *De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.)*, Turnhout, Brepols, pp. 225-235.

TODOROV, Zvetan (2010), *La conquista de América. El problema del otro*, Madrid, Siglo XXI.

TOMÁS Y VALIENTE, Francisco (1974), «Prólogo», en *La España de Felipe IV. Historia de España de Menéndez Pidal*, t. XXV, Madrid, Espasa, pp. 3-19.

TOMÁS Y VALIENTE, Francisco (1988), «Las ideas políticas del conquistador Hernán Cortés» en Francisco SOLANO (coord.), *Proceso histórico al conquistador*, Madrid, Alianza, pp. 165-181.

TOMÁS Y VALIENTE, Francisco (1990), «Delincuentes y pecadores», en Francisco TOMÁS Y VALIENTE *et. al.*, *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*. Madrid, Alianza, pp. 11-31.

TORRE, Angelo (2007), «Faire communauté. Confréries et localité dans une vallée du Piémont (XVII^e-XVIII^e siècle)», *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 1, pp. 101-135

TORRE, Angelo (2009), «Empowering Interactions and Intertwining Jurisdictions», en Wim BLOCKMANS, André HOLENSTEIN y Jan MATHIEU (eds.), *Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300-1900*, Surrey, Ashgate, pp. 319-326.

TORRE, Angelo (2011), *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli.

TORRE, Angelo (2018), «Micro/macro: ¿local/global? El problema de la localidad en una historia espacializada», *Historia Crítica*, 69, pp. 37-67.

TRIVELLATO, Francesa, HALEVI, Leor y ANTUNES, Catia (eds.) (2014), *Religion and trade. Cross-Cultural Exchanges in World History, 1000-1900*, Oxford, Oxford University Press.

TRUCHUELO GARCÍA, Susana (1997), *La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado político provincial (siglos XVI-XVII)*, San Sebastián, Diputación foral de Guipuzcoa.

TRUCHUELO GARCÍA, Susana (2013), «Villas y aldeas en el Antiguo Régimen: conflicto y consenso en el marco local castellano», *Mundo Agrario*, 14, 27.

TRUCHUELO GARCÍA, Susana (2014), «Heresy and commercial exchanges in Early Modern Northern Spain», en Gary WAITE y Jesse SPOHNHOLZ, *Exile and Religious Identity, 1500-1800*, Londres, Pickering and Chatto, pp. 127-140.

TRUCHUELO GARCÍA, Susana y TORRES ARCE, MARINA (eds.) (2015), *Civitas: expresiones de la ciudad en la Edad Moderna*, Santander, Universidad de Cantabria.

TRÜPER, Henning, CHAKRABARTY, Dipesh y SUBRAHMANYAM, Sanjay (eds.) (2015), *Historical Teleologies in the Modern World*. Londres, Bloomsbury.

ULLMANN, Walter (1985), *Principios de gobierno y política en la Edad Media*, Madrid, Alianza.

VALDEÓN, Roberto (2013), «Doña Marina/La Malinche: a Historiographical Approach to the Interpreter/Traitor», *Target*, 25, 2, pp. 157-179.

VALLADARES, Rafael (2012), «No somos tan grandes como imaginábamos. Historia global y Monarquía Hispánica», *Espacio, tiempo y forma, serie IV, historia moderna*, 25, pp. 57-115.

VALLADARES, Rafael (2012), «El problema de la obediencia en la Monarquía Hispánica, 1540-1700», en Alicia ESTEBAN (coord.): *Servir al rey en la Monarquía de los Austrias: medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII*, Madrid, Sílex, pp. 121-145.

VALLADARES, Rafael (2015), «Fidelidad, lealtad y obediencia. Tres conceptos en la monarquía de los Austrias», en Roberto QUIRÓS ROSADO y Cristina BRAVO LOZANO (coords.), *Los hilos de Penélope: lealtad y fidelidades en la Monarquía de España, 1648-1714*. Madrid, Albatros, pp. 21-38.

VAN DEN BOOGAART, Ernst (2006), «La danza de los Tapuya», en José Manuel SANTOS PÉREZ y George F. CABRAL DE SOUZA (eds.): *El desafío holandés al dominio ibérico en Brasil en el siglo XVII*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 177-201.

VELASCO MURILLO, Dana (2017), «Modern Local History in Spanish American Historiography», *History Compass*, 15, 7.

VERMEIR, René (ed.) (2011), *Agentes e identidades en movimiento: España y los Países Bajos, siglos XVI-XVIII*, Madrid, Sílex.

VIGNOLO, Paolo (2008), «Santa María de la Antigua: prácticas y representaciones de un culto mariano entre Sevilla y el Darién», *e-misférica. Travelling Virgins*, 5.1.

VIGNOLO, Paolo (2008), «Santa María de la Antigua del Darién, ¿de lugar del olvido a lugar de la memoria?», en Yobenj Aucardo CHICANGANA-BAYONA (ed.), *Historia, cultura y sociedad colonial. Siglos XVI-XVIII. Temas, problemas y perspectivas*, Medellín, La Carreta histórica, pp. 321-331.

VILA, Soledad (1984), *La ciudad de Eiximenis: un proyecto teórico de urbanismo en el siglo XIV*, Valencia, Diputación provincial de Valencia.

VILLACAÑAS, José Luis y LOMBA, Pedro (ed.) (2016), *Ciudad Iberoamericana y representación*, Madrid, Escolar y Mayo.

- VILLACANA, José Luis (2019), *Imperiofilia y el populismo nacional-católico*, Madrid, Lengua de Trapo.
- VIROLI, Maurizio (1994), *Dalla politica alla ragion di stato: la scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma, Donzeli.
- VIROLI, Maurizio (2001), «El patriotismo multicultural», en Ramón MÁIZ SUÁREZ, *Europa Mundi. Construcción de Europa, Democracia y Globalización*, v. II, Santiago, Universidad de Santiago de Compostela, pp. 673-680.
- WAGNER, Henry (1938), «Creation of Rights of Sovereignty through Symbolic Acts», *Pacific Historical Review*, 7, 4, pp. 297-326.
- WATTS, John (2011), ««Common weal» and «commonwealth»: England's Monarchical Republic in the Making, c. 1450-c.1530», en Andrea GAMBERINI, Jean-Phillipe GENET y Andrea ZORZI (eds.), *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, Roma, Viella, pp. 147-163.
- WENGROW, David (2015), *Cities before the state in Early Eurasia*. Halle, Max Planck Institute for Anthropology.
- WHITE, RICHARD (1990), *The Middle Ground. Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650-1815*, Cambridge, Cambridge University Press.
- WHITE, Richard (2006), «Creative Misunderstandings, New Understandings», *The William and Mary Quarterly*, 3rd Series, LXIII, 1, pp. 9-14.
- WILLIAMS, Robert (1990), *The American Indian in Western Legal Thought. The Discourses of Conquest*, Oxford, Oxford University Press, 1990.
- WILLIAMSON, Andrew (1996), «Scots, Indians, and Empire: the Scottish Politics of Civilization, 1519-1609», *Past and Present*, 150 (1), pp. 46-83.
- WILLIS, Justin (2005), «Hukm, the creolization of authority in condominium Sudan», *Journal of African History*, 46, 1, pp. 29-50.
- YANNAKAKIS, Yanna y SCHRADER-KNIFFKI, Martina (2016), «Between the 'Old Law' and the New: Christian Translation, Indian Jurisdiction, and Criminal Justice in Colonial Oaxaca», *Hispanic American Historical Review*, 96, 3, pp. 517-548.
- YUN CASALILLA, Bartolomé (2003), «Mal avenidos, pero juntos: Corona y oligarquías urbanas en Castilla en el siglo XVI», en AA. VV.: *Vivir el Siglo de Oro: poder, cultura e historia en la época moderna*, Salamanca, Universidad de Salamanca, pp. 62-76.
- YUN CASALILLA, Bartolomé (2007), «Localism, global history and transnational history», en *Historisk Tidskrift*, 127, 4, pp. 659-678.
- YUN CASALILLA, Bartolomé (dir.) (2009), *Las redes del imperio. Élite sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica (1492-1714)*, Madrid, Marcial Pons.

YUN CASALILLA, Bartolomé (2019), *Iberian World Empires and the Globalization of Europe, 1415-1668*, Singapore, Palgrave.

ZAMORA, Romina (2007), «El vecindario y los oficios de gobierno en San Miguel de Tucumán en la segunda mitad del s. XVIII», *Revista historia del derecho*, 35, pp. 457-477.

ZAMORA, Romina (2012), «La *Oeconomía* y su proyección para el justo gobierno de la república. San Miguel de Tucumán en el s. XVIII», *Revista de historia del derecho*, 44, pp. 201-214.

ZAVALA, Silvio (1964), *Los intereses particulares en la conquista de la Nueva España*, México, UNAM.

ZAVALA, Silvio (1992), *La encomienda indiana*, México, Porrúa.

ZAVALA, Silvio (1988), *Las instituciones jurídicas en la conquista de América*, México, Porrúa.

ZEMON DAVIES, Natalie (2011), «Decentering History: Local Stories and Cultural Crossings in a Global World», *History and Theory*, 50, pp. 188-202.

ZUÑIGA, Jean-Paul (2002), *Espagnols d'Otre-Mer. Émigration, métissage et reproduction sociale à Santiago du Chili, au 17^e siècle*, París, EHESS.

ZUÑIGA, Jean-Paul (2007), «Ir a 'valer mas' a Indias: las peregrinaciones de un granadino en el siglo XVII. Reflexiones en torno al uso de la genealogía en historia», en Inés GÓMEZ GONZÁLEZ y Miguel Luis LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ (eds.), *La movilidad social en la España del Antiguo Régimen*. Granada, Comares, pp. 153-172.

ZUÑIGA, Jean-Paul (2007), «L'histoire impériale à l'heure de l' 'histoire globale'. Une perspective Atlantique», *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 5, 54-4bis, pp. 54-68.

ZUÑIGA, Jean-Paul (2012), «Visible signs of Belonging. The Spanish Empire and the Rise of Racial Logics in the Early Modern Period», en Pedro CARDIM, José Javier RUIZ IBÁÑEZ, Gaetano SABATINI y Tamar HERZOG (eds.), *Polycentric Monarchies. How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?*. Brighton, Sussex Academic Press, pp. 125-146.

ZUÑIGA, Jean-Paul (ed.) (2013), *Negociar la obediencia. Autoridad y consentimiento en el mundo ibérico en la edad moderna*, Granada, Comares.

